

REPUBLICA DE COLOMBIA  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



# GACETA JUDICIAL

"Saber las leyes aun es tan solamente aprender al decirlas las letras de ellas, mas en saber el su verdadero entendimiento". (Cantu. Párrafos. Párrafo P. Título I, Ley XIII).

LICENCIA NUMERADA 1301 DEL 7 DE MARZO DE 1936  
REGISTRADO PARA CUBO LIBRE DE PORTE EN EL SERVICIO POR AL

SALA DE CASACION CIVIL

TOMO CCXXXI

NUMERO 2470

SEGUNDO SEMESTRE 1994

VOLUMEN II

SANTAFE DE BOGOTA, D. C. — COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

# GACETA JUDICIAL

"Saber las letras más es tan veloz como en aprender a decorar las letras dadas, más en saber  
el su verdadero entendimiento" (Núcleo Párrafos: Párrafo 1a. Título I, Ley XLI)

LICENCIA NÚMERO 451 DE 7 DE MARZO DE 1936  
REGISTRADO PARA CURSO LIBRE DE PORTE EN EL SERVICIO POSTAL

## SALA DE CASACIÓN CIVIL

TOMO CCXXXI

NÚMERO 2470

SEGUNDO SEMESTRE - 1994

VOLUMEN II

Sacafé de Bogotá, D.C. Colombia 1994





**MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y DIGNATARIOS DE LA MISMA**

**SEGUNDO SEMESTRE 1994**

**SALA PLENA**

*Doctor Ricardo Calvele Rangel, Presidente*  
*Doctor Carlos Esteban Jaramillo Scholes, Vicepresidente*  
*Doctora Blanca Trujillo de Sanjuán, Secretaria General*

**SALA CIVIL**

*Doctor Pedro Lafont Pizanetta, Presidente*  
*Doctor Luis Antonio Montañez Soto, Secretario*  
*Doctor Héctor Moreno Alziana, Secretario*

**MAGISTRADOS Doctores:**

*Eduardo García Sarmiento*  
*Jorge Antonio Castillo Rugeles*  
*Francisco Javier Tameyo Jaramillo*  
*Carlos Esteban Jaramillo Scholes*  
*Pedro Lafont Pizanetta*  
*Héctor Marín Naranjo*  
*Alberto Ospina Bustero*  
*Nicolás Bechara Simancas*  
*Rafael Romero Sierra*

**SALA LABORAL**

*Luz Emilia Jendres de Molina, Secretaria*

**MAGISTRADOS Doctores:**

*Rafael Méndez Arango*  
*Manuel Enrique Daza Alvarez*  
*Francisco Escobar Henríquez*  
*Ernesto Jiménez Díaz*  
*José Roberto Herrera Vergara*  
*Jorge Iván Palacio Palacios*  
*Hugo Sautón Pajón*  
*Ramón Zárraga Valverde*

**SALA PENAL**

*Doctores Edgar Saavedra Rojas, Presidente*  
*Carlos Alberto Gordillo Lombana, Secretario*

**MAGISTRADOS Doctores:**

*Ricardo Calvo Rangel*  
*Jorge Carreño Luengas*  
*Nelson Pinilla Pinilla*  
*Guillermo Duque Ruiz*  
*Gustavo Gómez Velásquez*  
*Carlos Eduardo Mejía Escobar*  
*Didiño Páez Velandía*  
*Edgar Saavedra Rojas*  
*Juan Manuel Torres Fresnoeda*  
*Jorge Enrique Valencia Martínez*

**RELATORES**

*Liliana Polonia Aburez*  
**Sala Civil**

*Esperanza Inés Márquez Ortiz*  
**Sala Laboral**

*Ayda Lucy López de Giraldo*  
**Sala Penal**

*Piedad Areña Espinosa*  
*Beatriz Eugenia Cortés Beatrix*  
**Tutelas**

**DICTAMEN PERICIAL / CASACION-  
Justiprecio/ CASACION-Interés para Recurrir**

En caso de ser acogido por el Tribunal el dictamen pericial que justiprecia el interés para recurrir en casación, la Corte no puede inadmitir el recurso bajo el pretexto de que el perito se equivocó al evaluar la cuantía del interés, y así mismo cuando se deniega el recurso porque el justiprecio muestra un resultado cuantitativo inferior al límite legal, la Corte tampoco puede separarse del experticio.

Igual sentido: providencias de 19 de junio de 1992 y 30 de mayo de 1994.

E. F. C. de P.C. Art.: 366, 370, *ibidem*.

*Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de Bogotá, Distrito Capital, veinte (20) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).*

Referencia: Expediente No. 5213

Auto N°318

Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bechara Simancas Provee la Corte respecto del recurso de queja interpuesto por OMAR CARDENAS SERNA contra el auto de 5 de agosto de 1994, en virtud del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali denegó concederle el de casación, formulado dentro del proceso ordinario por él promovido junto con JOSE, OLIVER, OBED, OMAIRA Y MARIA OLERY CARDENAS SERNA, LEONEL, ORLANDO, MARIA DORIS, ANCISAR, HECTOR, LUIS ALFONSO Y EMMA LOPEZ SERNA, JOSE LUBIER Y JOSE OSCAR MOLINA SERNA contra SOLEDAD GOMEZ VDA. DE SERNA y los herederos indeterminados de OBDULIO SERNA.

*ANTECEDENTES*

1. Conforme se deduce de las copias aportadas con el recurso que se decide, los citados demandantes, instauraron demanda ordinaria para que se declarara que tienen derecho a heredar por representación, como hijos legítimos de las hermanas extramatrimoniales de PEDRO EMILIO SERNA en concurrencia con los demandados, y como consecuencia se les reintegrara la parte de los bienes que les corresponden, y se condenara a pagarles los frutos civiles y naturales de sus cuotas desde que fueron ocupados por los demandados.

2. La primera instancia terminó con sentencia de 3 de junio de 1993, proferida por el Juzgado Quinto de Familia de Cali, en la que resolvió:

"PRIMERO. DECLARAR probada la excepción de "CARENCIA DE DERECHO SUSTANCIAL EN LOS DEMANDANTES PARA ACCIONAR CONTRA LA CONYUGE SUPERSTITE". En consecuencia, ARSUELVASE a la demandada Soledad Gómez de Serna de todos los cargos a ella imputados.

"SEGUNDO. DECLARASE improcedente la pretensión de rescisión de la partición por lesión enorme alegada por los actores por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

"TERCERO. RECONOCESE a los señores Omar, José Oliver, Obed, Omaira y María, Olmery Cárdenas Serna como HEREDEROS del Sr. PEDRO EMILIO SERNA, por representación de su madre ISABEL SERNA y en consecuencia, con derecho a recoger la herencia en la proporción que indica el art. 21 de la ley 46 de 1936. ADJUDICÁNDOSELES una cuarta parte (1/4) sobre el total del inmueble ubicado en la calle 12 No. 11-84, alindado así: NORTE, propiedad de Angélica Córdoba, hoy de Gilberto Trujillo; SUR, propiedad de Carlos Atilio Parodi; ORIENTE, con la calle 12 y OCCIDENTE, con propiedad de Carlos Atilio Parodi.

"CUARTO: RECONOCESE a los señores Leonel, Orlando, María Doris, Ancizar, Héctor, Luis Alfonso y Emma López Serna como herederos del causante PEDRO EMILIO SERNA, por derecho de representación de su madre MARIA SERNA y, en consecuencia, con derecho a recoger la

herencia. ADJUDICÁNDOSELES una cuarta parte (1/4) sobre el total del inmueble ubicado en la calle 12 No. 11-84 anteriormente descrito.

"QUINTO: RECONOCESE a los señores JOSE LUBIER y JOSE OSCAR MOLINA SERNA como herederos del señor PEDRO EMILIO SERNA por derecho de representación de su madre Julia Serna, y, en consecuencia con derecho a recoger la herencia. Adjudicándoseles una cuarta parte (1/4) sobre el total del inmueble ubicado en la calle 12 Nº 11-84 mencionado atrás.

"SEXTO: ORDENASE la restitución de la parte de la herencia ocupada por los herederos Obdulio Serna Srs. Alicia, Argemiro, Amparo, Alirio, Alberto, Alvaro, Luis Fernando, Carlos Julio, Alcida, Francisco Javier, Andrés Avelino, Luz Marina Serna Arias y Ana Arias Vda. de Serna, procediéndose a la reelaboración de la partición mediante acuerdo entre los herederos (Art. 1382, 1391 y 1392 del C.C.) a favor de los demandantes.

"SEPTIMO: DECLARASE en lo pertinente ineficaces los actos de partición y adjudicación en favor del Sr. Obdulio Serna se hiciera en el proceso de sucesión, ordenándose la cancelación del mismo y sustituirlo por lo ordenado en esta providencia donde se le adjudica una cuarta parte (1/4) sobre el inmueble ubicado en la calle 12 No. 11-84, ya referido.

"OCTAVO: ORDENASE la inscripción de esta providencia en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

"NOVENO: CONDENASE a los herederos del Sr. Obdulio Serna antes mencionados a RESTITUIR a los actores los frutos civiles percibidos en el inmueble ubicado en la calle 12 No. 11-84 en cuantía de \$1'099.814,25.

"DECIMO: No prosperando las pretensiones respecto de la demanda da Soledad Gómez de Serna, ordénase cancelación de la inscripción de la demanda sobre tales bienes. Librese los oficios de rigor, al igual que la cancelación de la inscripción de la demanda sobre el inmueble de la calle 12 No. 11-84.

"DECIMO PRIMERO: CONDENASE en el 50% de las costas a los

herederos del señor OBDULIO SERNA en favor de los actores.

"DECIMO SEGUNDO: CONDENASE a los actores en el 50% de las costas a favor de la cónyuge superviviente.

"DECIMO TERCERO: De no ser apelada, ORDENASE LA CONSULTA de esta providencia en virtud a que los herederos indeterminados del Sr. OBDULIO SERNA están representados por curador ad litem".

3. Por virtud del grado de consulta y la apelación interpuesta por el demandante OMAR CARDENAS SERNA, se pronunció el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el cual en providencia del 13 de mayo de 1994, confirmó la sentencia de primera instancia.

4. Contra la sentencia del *ad-quem* interpuso recurso de casación el actor y único apelante OMAR CARDENAS SERNA, y para resolver sobre su procedencia el *ad-quem* ordenó justipreciar el interés para recurrir en casación.

5. Rendido el dictamen, el Tribunal denegó conceder el mentado recurso extraordinario apoyado en que el interés para recurrir determinado por el perito en "la suma de \$14'912.516.00, o el monto indicado por dicha parte al descorrer el traslado del dictamen en la suma de \$24'917.770.00", es inferior al que actualmente rige, es decir, a la cantidad de "\$27'410.000.00".

6. Recurrida en reposición la providencia denegatoria de tal medio de impugnación, el Tribunal mantuvo su decisión con el argumento que "el dictamen rendido constituye la base fundamental para establecer el monto del interés para recurrir en casación, y ha sido justipreciado en suma inferior a la que actualmente señala la ley...", y subsidiariamente ordenó la expedición de copias solicitada por el recurrente para efecto de interponer el recurso de queja.

7. Sustenta el quejoso el recurso aduciendo que, el perito designado no tuvo en cuenta el valor actual de los bienes sucesorales, y fundamentó su dictamen en el expendio rendido en primera instancia tomando como referencia la mitad del monto de dicho avalúo, siendo "que el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente lo constituye el resultado de

restarle a \$49'835.580,97 (valor total de los bienes sucesorales en fecha remota) la cantidad de \$3'775.812,00 (valor de los bienes adjudicados a Obdolio Serna y respecto de los cuales, según la sentencia, los demandantes percibirán su cuota herencial), esto es, \$4'059.768,97..."

### CONSIDERACIONES

1. *El interés para recurrir en casación, según el artículo 365 del Código de Procedimiento Civil, se determina por "el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente", vale decir, que el interés cuantitativo deviene como consecuencia del agravio que al recurrente le produce la sentencia al momento de su pronunciamiento.*

2. *Cuando resulte pertinente establecer el interés para recurrir en casación y este no apareciera determinado en el proceso, previamente a resolver sobre la procedencia del recurso, debe disponerse el justiprecio por un perito para que dicte su cuantía según lo previene el artículo 370 del C. de P.C., norma que reviste al justiprecio pericial de un grado excepcional de eficacia, toda vez que presentado no es objetable, sin perjuicio eso sí, de que se puedan pedir, complementación y aclaración en casos de fundamentación incompleta, deficiente u oscura.*

3. *Sobre el particular esta Corporación en providencias de 10 de junio de 1992 y 30 de mayo de 1994 expresó "tiene el ameritado dictamen una especial fuerza vinculante para las autoridades judiciales involucradas en el trámite, habida consideración que en caso de ser acogido por el Tribunal, la Corte no puede inadmitir el recurso bajo el pretexto de que el perito se equivocó al avaluar la cuantía del interés (inciso 2o. del artículo 372 del Código de Procedimiento Civil), y asimismo cuando se deniega el recurso porque el justiprecio muestra un resultado cuantitativo inferior al límite legal, la Corte tampoco puede separarse del experticio, todo esto por cuanto así como es vinculante para ella la determinación del juzgador de instancia cuando éste, con la ayuda de un peritazgo acabado, serio y razonado, constata la cuantía en cifra que supere dicha limitación, del mismo modo esa decisión tiene que llegar a la Corte cuando el avalúo es por suma inferior y en consecuencia el derecho a recurrir por vía de casación no existe".*

4. En este orden de ideas, si el ad-quem ordenó justipreciar el interés



para recurrir en casación, y el perito explicando las razones de sus conclusiones lo fijó en la cantidad de \$14'912.516.00 colígese que el proveído del Tribunal, por el que denegó conceder el citado recurso extraordinario por ausencia de uno de los requisitos de procedibilidad, tiene respaldo legal, no pudiendo la Corte separarse de la estimación cuantitativa expresada en el dictamen rendido para el efecto, de lo cual se sigue que el recurso de queja no puede recibir despacho favorable, conclusión que toma más fuerza si se observa que el recurrente no solicitó ni aclaración ni complementación del experticio, ya que sólo se limitó a solicitar su estimación, argumentando que "tal perjuicio, en el caso concreto" tiene un valor "de \$21'141.958.00, obviamente por encima de \$19'600.000.00 moneda legal a que asciende actualmente la cuantía del recurso de casación", es decir, por una razón bien distinta a lo que ahora esgrime como fundamento del recurso que se desata.

4. En síntesis, como el avalúo fue por suma inferior al monto actual para recurrir, obviamente no puede abrirse paso el recurso de queja.

### DECISIÓN

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, estima ajustado a la ley el auto recurrido en queja y, por ende, bien denegado el recurso de casación.

Devuélvase la actuación al Tribunal para que forme parte del expediente.

Cópcese, notifíquese y cúmplase.

*Pedro Lafont Pianetta, Nicolás Bechara Simancas, Eduardo García Sarmiento, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, - en permiso- Rafael Romero Sierra*

No suscribe la anterior providencia el Magistrado Héctor Marín Naranjo, quien no participó en la deliberación, por encontrarse en uso de permiso.

*Héctor Moreno Aldana, secretario*

**PRUEBA CONDUCTENTE /  
PRUEBA PERTINENTE / PRUEBA SUPERFLUA**

Alcance de las expresiones "conducencia de la prueba", "pertinencia de la prueba" y "prueba superflua".

**CONFLICTO ESPECIAL DE COMPETENCIA / SUCESIÓN**

Aplicación de la regla No. 14 del art. 23 del C. de P.C., para determinar la competencia en caso de adelantamiento de dos juicios de sucesión del mismo causante.

F. F.: C. de P.C. Art.: 23 Numral.: 14; 624, ibídem.

*Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de Bogotá, D.C. Octubre veinte (20) de mil novecientos noventa y cuatro (1994).*

Referencia: Expediente No. 5024

Auto N°320

Decídese el recurso de súplica oportunamente interpuesto contra una decisión contenida en el auto del 3 de octubre de 1994 proferido por el magistrado ponente en este conflicto especial de competencia, suscitado entre los Juzgados Doce de Familia de Santafé de Bogotá y el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Tunja (Boyacá) con ocasión del conocimiento del juicio sucesorio de Rafael Moreno Sandoval.

**I. ANTECEDENTES**

1. Apoyado en lo dispuesto en el artículo 624 del Código de Procedimiento Civil, el apoderado de Jorge y Hernando Moreno Niño y de los sucesores de Rafael Antonio Niño, solicitó a esta Corporación dirimir el conflicto especial de competencia, surgido entre los citados Juzgados Doce de Familia de Santafé de Bogotá y el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Tunja (Boyacá), originado en que ante ambos despachos judiciales se está tramitando la causa mortuoria del causante Rafael Antonio Moreno Sandoval.

Abierto el respectivo incidente e iniciado el trámite de ley, los interesados solicitaron el decreto y práctica de las pruebas que consideraron necesarias en apoyo de sus argumentos.

El Magistrado sustanciador del asunto una vez vencido el término de traslado, con providencia del 3 de octubre de 1994, decretó la práctica de las pruebas pedidas por los interesados, excepto las solicitadas por el apoderado de Rafael Alfonso Moreno Huertas, y Miguel Angel y Camilo Alberto Moreno Ortiz, relacionadas con el envío de oficios a "Davivienda", a la empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y a la DIAN, por considerarlas como superflúas frente a las pruebas que se decretaron en la misma providencia, pues nada agregan a las pruebas ya existentes y a las declaraciones de renta del causante que ya obran en el expediente.

Se alzó en súplica el peticionario de dichas pruebas, específicamente en contra de la decisión de negar el envío del oficio a "Davivienda", a fin de que remitiera copia auténtica del poder que dio el causante a María del Rosario Orive de González para retirar los dineros allí depositados, arguyendo el recurrente que tal prueba no es superflúa, sino de vital importancia para decidir el conflicto dado que en dicho poder dijo ser vecino de esta ciudad.

### CONSIDERACIONES

*1. La conducencia de la prueba es un requisito de naturaleza objetiva cuando quiera que la prueba debe por sí misma o por su contenido servir para establecer los hechos cuya existencia y verdad se quieren demostrar.*

*Comprende entonces, que se refiera a los hechos materia de la decisión y a la utilidad de la prueba. Lo primero porque la naturaleza misma del asunto que se discute marca el límite o la pauta de los hechos que deben demostrarse, resultando así inoducenas toda prueba que no se encamine a la demostración de los fines propuestos, y lo segundo, porque la prueba debe ser útil o eficaz, vale decir, que tenga el poder de convicción, aunque el hecho que con esa prueba se trate de demostrar, si sea pertinente.*

*De allí que las pruebas que no reúnan estas condiciones son pruebas impertinentes, que según lo dicho fluyen cuando el hecho que con ellas se*

*pretende probar, aún demostrado no influye en la decisión del asunto, y superflúas porque no conducen a establecer el hecho que se proponen.*

2. *Tratándose de un conflicto de competencia el objeto es determinar a qué juez le atribuye la ley el conocimiento de determinado proceso, el que para el caso de adelantamiento de dos juicios de sucesión del mismo causante territorialmente lo será aquel del último domicilio de difunto, y si hubiere tenido varios lo será el que corresponda al de aquel en que haya tenido el asiento principal de sus negocios (numeral 14 Art. 23 del C. de P.C.). Por lo tanto, es indispensable establecer por quien haya de dirimir el conflicto la verdad sobre el último lugar que tuvo por domicilio el causante, o a falta de éste, aquel donde adelantó en vida la mayoría de sus negocios, lo que se demuestra con las pruebas que resulten conducentes a tal propósito, según las reglas antes señaladas.*

2.1. Como quiera que en el presente caso como bien se afirma en la providencia objeto del recurso de súplica que aquí se desata, el oficio a la Corporación de Ahorro y Vivienda "Davivienda", a efectos de que remita dicha entidad con destino al proceso copia del poder que otorgó el causante para retirar unos dineros allí depositados, tal poder nada agrega ni le resta a las pruebas ya existentes y a la declaración de renta del causante que ya obra en autos, como quiera que si en el documento que reclama como prueba el recurrente, se señala el mismo domicilio que las demás pruebas citadas mencionan, no por lo dicho en el mencionado poder quedó demostrado que el domicilio era en la ciudad que indica y, si por el contrario señala un lugar diferente, éste no desvirtúa el señalado en las demás pruebas. Luego, es clara la inconducencia de la prueba en cuestión.

### III DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, resuelve mantener el auto recurrido en súplica.

Notifíquese.

*Pedro Lafont Pianetta, Nicolás Bechara Simancas, Eduardo García Sarmiento, Héctor Marín Naranjo, en permiso, Rafael Romero Sierra.*

Santafé de Bogotá, D.C., octubre veinte (20) de mil novecientos noventa y cuatro (1994)

La presente providencia no la suscribe el Magistrado doctor Héctor Marín Naranjo por cuanto no participó en la discusión y aprobación de la misma, por encontrarse en uso de permiso.

*Héctor Moreno Aldana*, secretario

## **TESTIMONIO SOSPECHOSO / VALORACION PROBATORIA**

1) Dada la condición humana, el error es cuestión constante y normal en el testimonio.

2) Distinción del tratamiento dado por el legislador a la valoración del testimonio sospechoso en el régimen tarifario de pruebas y el de apreciación científica de las mismas.

Igual sentido: CLXVI, pág. 21

3) El testimonio sospechoso debe analizarse de cara a los demás medios de convicción.

F. F.; C. Judicial Art.: 672; C. de P.C. Art.: 217.

## **ERROR DE HECHO**

El error de hecho en la apreciación de las pruebas que conduce a la violación de la ley sustantiva y que permite la casación de un fallo, tiene que ser manifiesto.

Igual sentido: I.XXXVIII, p. 972

F. F.; C. de P.C. Art.: 368 Numral.: 1.

## **PRUEBA ANTROPOHEREDO BIOLOGICA / PRESUNCION DE PATERNIDAD**

El examen antropoheredobiológico, no constituye motivo autónomo o causal independiente que de lugar a presumir la paternidad extra-matrimonial y, por ende, a declararla judicialmente con apoyo en este único medio de prueba.

Igual sentido: Cas. Civ. de 24 de noviembre de 1987, sentencia No. 448.

*Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de Bogotá, veintiuno (21) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).*

*Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra*

Expediente No. 4323

Decídese el recurso de casación interpuesto por el Defensor de Familia de la Regional de Nariño -Zona Pasto- del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar contra la sentencia de 12 de enero de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto en el proceso ordinario que, en representación de Dora Zuleima Trejo Quistanchala, promovió Clementina Quistanchala de Trejo contra Vicente Gilberto Mejía Mejía.

### *1. ANTECEDENTES*

1. El proceso referido se inició para que al demandado se le declarase padre extramatrimonial de la menor demandante, y se haga la correspondiente anotación en el registro del estado civil.

2. El aspecto fáctico que se invoca, resumido, es como sigue:

En el mes de septiembre de 1988 llegó el demandado como profesor a la vereda "El Cultún", corregimiento de La Victoria del municipio de Ipiales, y allí conoció a Magali Elizabeth Trejo Quistanchala, menor de edad a la sazón, debido a que él tomaba los alimentos en la casa de la abuela de ésta, en donde también "en veces se quedaba a dormir"; entrando ya en confianza con Magali, "hacían el amor en la casa" aprovechando la ausencia de la abuela. Así que resultó embarazada, a cuyo enteramiento él "le regaló la suma de diez mil pesos colombianos y diez mil sucres ecuatorianos para que pague y busque a una enfermera y la haga abortar".

Después le regaló \$15.000.00 para que "pague los derechos en el Hospital de esta ciudad y le ofreció la suma de quinientos mil pesos para que diga Magaly Elizabeth (sic) que Mejía Mejía no era el padre de la niña, ofreciéndole ayuda económica para su prosperidad".

De todo ello nació el 10. de noviembre de 1990 la niña demandante.

3. El demandado se opuso a las pretensiones; y, aun cuando admitió haber conocido a Magali en casa de su abuela, donde precisamente él tomaba los alimentos, negó rotundamente que hubiese tenido las relaciones amorosas y sexuales que se le imputan. Alegó como excepciones la falta de legitimación en causa pasiva, porque él ha sido demandado sin ser el padre; carencia o inexistencia de los hechos en que se funda la pretensión, y la de plurim constupratorum, que fundamentó en que "las relaciones sexuales deben estar inequívocamente demostradas, como también la época en que éstas se consumaron, que no haya interferido por parte de la mujer con la incidencia de relaciones carnales con otro u otros hombres en el ciclo de la concepción, pues de lo contrario estaríamos en presencia de pluralidad de relaciones sexuales y se daría vigencia y solidez a la excepción en referencia".

4. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia dictó sentencia de primer grado el 29 de julio de 1992, en la que, aparte de acoger las súplicas de la demanda, condenó al demandado a pagar, por concepto de alimentos, y en favor de la demandante, una suma equivalente al 15% del salario mínimo y declaró que la patria potestad, así como el cuidado personal de la hija, continuase en cabeza de la madre. Por último, declaró no probadas las excepciones.

Fallo del que apeló el demandado y obtuvo que fuese revocado por el Tribunal Superior de Pasto mediante sentencia de 12 de enero de 1993, y a cambio se denegaron las pretensiones.

5. La sentencia del Tribunal fue recurrida en casación por el Defensor de Familia.

## *II. La sentencia del Tribunal*

La primera parte está destinada a historiar el litigio y a la verificación, que resultó positiva, de las condiciones necesarias para el proferimiento del fallo de mérito.

Ya en la segunda, estudia la naturaleza de la pretensión de filiación y la causal aducida, indicando que las relaciones sexuales pueden ser



inferidas del trato personal y social de la pareja, caracterizado por hechos revestidos de conexidad y reiteración, porque actitudes de la vida corriente, como las que se originan en la amistad, no tienen la fuerza suficiente para demostrarlas.

Entregado a la tarea de examinar si ello tuvo cabal comprobación, luego de referirse sucintamente a lo que narraron los declarantes Clementina Quistanchala de Trejo, Luis Olmedo Cuaran Mejía y Antonio Tulcán Narváez, sentó las siguientes conclusiones que los dos últimos precitados "son de oídas", y que no existe "ninguna circunstancia que les haga inferir concretamente la existencia de relaciones amorosas y sexuales "entre el demandado y Magaly ( ) razón por la cual su dicho solo tiene validez en cuanto se refiere al relato por ellos escuchado, pero no respecto de los hechos sobre los cuales dicho relato versa".

Relativamente al testimonio de la prenombrada Clementina acotó: "es bueno destacar desde este momento que dada la condición de madre y abuela de CLEMENTINA QUISTANCHALA DE TREJO en lo que respecta a MAGALI ELIZABETH Y DORA ZULEIMA, su versión influenciada esté por razones de "parentesco" para sostener los episodios que ha relatado, los cuales como es natural se han quedado huérfanos de respaldo probatorio, pues se plasmaron allí en el campo de la simple y llana afirmación, circunstancias estas que toman su dicho inverosímil y le resta valor probatorio para dar por establecido la existencia de relaciones sexuales habidas entre VICENTE GILBERTO MEJIA MEJIA y MAGALY ELIZABETH TREJO QUISTANCHALA, y el desmedido afán por establecer la época de la concepción, febrero 28 de 1990, la que ni siquiera MAGALY ELIZABETH puede aproximadamente precisar".

Plasmó enseguida que los testimonios de Carlos Enrique Tulcán Narváez, María Gladys Pinchao Tonguino y Cruz Magola Paspur Yandun, citados por el demandado, dijeron en trasunto que no les consta sobre el trato sexual que se investiga; que ignoran quién sea el padre de la menor y que Magaly es "una persona predispuesta y amante de tener varios novios", entre los que citar algunos, particularmente a Everardo Guerrero.

Y a vuelta de extractar lo que Magaly manifestó en interrogatorio de

parte, explicó que "Finalmente, como corolario de lo anterior, contamos con la prueba pericial de genética, la misma que a pesar de tener la jerarquía de indicio y no de medio probatorio "per se" con el resultado de "compatibilidad" al estar reseñada la prueba en la forma como la Sala ha venido analizando y al hacer su estudio comparativo no permite inferior en una forma clara, inequívoca y certera sobre la existencia de relaciones sexuales entre VICENTE GILBERTO MEJIA MEJIA Y MAGALY ELIZABETH TREJO QUISTANCHALA, por la época en que acaeció la concepción de la menor DORA ZULEIMA".

Paso entonces a enfatizar el cuidado que debe observar el juzgador al auscultar el mérito de las declaraciones, inquiriendo, a más de las eventuales inhabilidades, los motivos de sospecha, como "ocurre con las declaraciones de los parientes cercanos, o de amigos íntimos", frente a quienes se puede pensar que la versión sea parcializada. A renglón seguido citó la doctrina de la Corte que enseña que en los asuntos de familia no se debe mirar la sospecha con el mismo criterio que se hace en otros juicios.

Y tras indicar que la prueba testimonial recaudada en este proceso se recibió conforme a las prescripciones de los artículos 227 y 228 del Código de Procedimiento Civil, expresó que el análisis global de la misma arroja el siguiente resultado:

"De que no se ha demostrado la tipificación de la causal consagrada en el numeral 4o. del art. 6o. de la ley 75 de 1968 para declarar la paternidad solicitada, pues no contamos con un elemento idóneo siquiera de convicción libre de imparcialidad (sic) y sospecha que nos conduzca a sostener por vía de inferencia que existieron relaciones sexuales entre VICENTE GILBERTO MEJIA MEJIA Y MAGALY ELIZABETH TREJO QUISTANCHALA, y que esas relaciones se hayan verificado por la época en que según el Art. 92 del Código Civil se presume que haya ocurrido la concepción de la menor DORA ZULEIMA, situación esta que en sentir de la Sala permite reflexionar diciendo que no fue atinado el análisis y la conclusión a la que llegó el a quo para dar por cumplidos los presupuestos axiológicos de la causal que ha merecido renglones atrás nuestro estudio, lo que de suyo impone la revocatoria del fallo apelado, denegando las súplicas invocadas, absolviendo al demandado de los cargos formulados, y condenando en costas a la parte demandante".

### *III. La demanda de casación*

En un cargo se condena la acusación que se formula al fallo del Tribunal, en el que se denuncia la violación de los artículos 6 (numeral 4) de la ley 75 de 1968, 1 y 4 (numeral 4) de la ley 45 de 1936, 92 del Código Civil, y 175, 176, 187, 228, 248, 249 y 250 del Código de Procedimiento Civil, cuya causa se atribuye a errores de hecho en la apreciación de las pruebas testimonial y pericial.

En su desarrollo, apunta el censor que el Tribunal desatina al afirmar que por razones de parentesco carece de fuerza convincente la declaración de Clementina Quistanchala de Trejo, cuando en verdad ella cumple cabalmente con las exigencias procesales para otorgarle validez probatoria, porque "dadas sus cualidades de mujer, de tener un inocultable parentesco con su hija MAGALI ELIZABETH, informa detalladamente las circunstancias personales que precedieron al embarazo de su hija y al nacimiento de su nieta, por ser además quien debía velar por el comportamiento amoroso, sentimental y también sexual de su hija".

Considera así el recurrente que el sentenciador, al "cercenar" todas las afirmaciones de la testigo, resultó desconociéndole el valor de convicción y certeza que conporta, pese a que se trata de un testimonio responsivo, exacto y completo; y sopesó su dicho "como si se tratase de un juicio estrictamente civil y no de familia", contrariando en el punto la jurisprudencia que paradójicamente cita: de suerte que termina en una decisión sorpresiva e inesperada.

A lo que añade: pues dada la especie de esta litis, nada más apropiado y necesario resulta ser la versión que de los hechos dio la abuela de la prenombrada menor, quien no se inventó el encontrón con el demandado en la casa de su hija MAGALY ELIZABETH en el instante mismo de uno de sus acoplamientos sexuales". Sin embargo, el Tribunal no acepta que personas como ella "que enaltece el honor de la verdad, como aún lo hacen los campesinos de la región, diga con claridad todo lo que presenció y le atribuya sin duda alguna la paternidad de su nieta al demandado"; por lo que "En ella no es posible concebir una mentira tan grande".

Asimismo, con error de hecho, le restó valor demostrativo a la ver-

sión de Magaly Elizabeth Trejo Quistarchala, madre de la menor cuya filiación paterna se controvierte; desacertó porque ésta fue sincera al relatar los hechos constitutivos del trato carnal que sostuvo con el demandado. "Obsérvese, cómo es de leal todo su testimonio, cuando afirma que el demandado una vez nació la menor DORA ZULEIMA, le sugirió qu presente como padre extramatrimonial de ésta a su enamorado, este sí, EVERARDO, con quien posiblemente cultivó relaciones estrictamente amorosas y no sexuales", de donde se deduce que mientras Everardo la trataba como novia, el demandado "le interesaba únicamente la cama para MAGALY ELIZABETH.

Opina el impugnante que es de tener presente "un hecho social conocido en nuestro medio", consistente en que la adolescente está impulsada en sus primeros amores, no por un interés sexual, sino talvez por una ilusión matrimonial "pero sí a su lado llega un hombre experimentado (...) tal cual el profesor MEJIA MEJIA, sin afanes matrimoniales sino por "pasarla bien", es claro que apresura el trato carnal y luego la abandona. Razonamiento lógico que es de recibir en el medio y que el Tribunal dejó de lado.

Además, el testimonio de la mujer tiene características de precisión y especificación.

Pasando a otro punto, califica de errónea la apreciación del examen antropoloheredobiológico por parte del *ad-quem*, tanto por insuficiente como por falta de estudio y profundidad. Fue temeroso (...) para penetrar en su crítica y valoración probatoria", y por ello desdeñó.

Considera al respecto el casacionista que si el demandado no hubiera resultado compatible, por lógica y por carácter ante todo científico de la prueba, su resultado sería INCOMPATIBLE". Es un examen que aun que no es plena prueba de paternidad, "se complementa con otro elemento de prueba eficaz", como en este evento ocurre con la testifical solicitada por la parte actora, pero bien analizada.

Está demostrado, continúa diciendo, que Magaly no viajó a otros lugares sino con el demandado y que "la concepción de la menor hija se realizó por esa precisa época, precisamente por la misma en que Vicente Gilberto gestionó su traslado "avergonzado de haber sido sorprendido

en la cama con la hija de la persona que le preparaba los alimentos y le brindó hospedaje y su confianza, habiendo defraudado dicha estimación", y con el propósito de preservar su imagen de docente. Las versiones dadas por la abuela y la madre de la menor, "son coincidentes en el límite temporal prescrito por el art. 92 del C.C. están debidamente acreditadas en el plenario y no fueron desvirtuadas en forma alguna por el demandado". Por demás, debe darse por establecido, con la prueba testimonial, la estancia del demandado, a la sazón, en aquel lugar, justamente desempeñándose como profesor en la vereda.

Pone de presente, de otro lado, que el legislador arranca reconociendo que es muy difícil probar el acto sexual mismo; de ahí que permita inferirlo del trato personal y social comentado. Pero ocurre que en el sub-lite se demostró el propio hecho de la cópula, como que Clementina Quistanchela de Trejo "afirma en sus propios términos que el embarazo ocurrió el día 28 de febrero de 1990 por haber sido la fecha en que encontró al demandado en el lecho de su hija MAGALY ELIZABETH, porque fue la única fecha en que percibió directamente dichas relaciones...".

Remata el impugnante diciendo que el tribunal no dijo por qué le desconocía valor a los testimonios, y simplemente concluyó que el demandado no es el padre de la menor; además, "desconociendo toda la filosofía de la ley 75 de 1968" condenó en costas a la actora por el único hecho de "pretender saber quién es su padre (...) por ejercer una acción pública consagrada en el art. 42 de la nueva Constitución Nacional, que enlista como un derecho fundamental de toda persona humana el de un nombre y una nacionalidad", en razón de esto y de que la acción aquí ejercitada fue coadyuvada por el Defensor de Familia de Ipiales, pide que se revoque tal condena en costas.

Finalmente se aplicó a poner de manifiesto el estudio y análisis probatorio que descarta el éxito de las excepciones formuladas.

### CONSIDERACIONES

1. Como gran recapitulación del cargo se puede afirmar que el casacionista ve en la prueba testimonial, básicamente, la demostración cabal de la causal de paternidad aducida atinente, como se sabe, a las

relaciones sexuales que por la época de la concepción sostuvieron la madre y el presunto padre.

Estima, en efecto, que es bastante con el dicho de Clementina Quistanchala de Trejo y Magaly Elizabeth Trejo Quistanchala, en ese orden la abuela y progenitora de la demandante; lo que traduce, bueno es adelantarlo, que tácitamente admite que, como lo dijo el Tribunal, los declarantes Luis Olmedo Cuaran Mejía y Antonio Arnulfo Tulcán Narváez son apenas de oídas y no les consta el hecho por probar. No admite, en cambio, que el sentenciador aduzca el parentesco de aquéllas para restarles credibilidad. Por ello, porque ahí centra la controversia, son indispensables algunas reflexiones sobre el tema.

2. Sin pretender un recuento minucioso de las vicisitudes que a lo largo del tiempo han rodeado a la prueba por testigos, *hácese sí obligatorio puntualizar que casi todo se reduce al problema de la confiabilidad del testimonio. Porque, es verdad, son muchos los riesgos que acechan la fidelidad de la narración; tantos, que no es absolutamente necesario pensar en la actitud aviesa del testigo, si es que la causa de la desconfianza puede incluso estar dada por motivos revestidos de la mayor buena fe; bien se conoce que, dada la condición humana, el error es cuestión constante y normal en el testimonio, pues es verdad aceptada que el testigo exento de error, sencillamente no existe.*

*Esta afirmación, a la verdad bastante desalentadora para una certera administración de justicia, cuyo objetivo indeclinable es el de que los litigios hagan ecuación con la realidad, ha demandado ingentes esfuerzos que mitiguen sus efectos. Y reconociéndose que los testigos -a decir de Benthamson- son los ojos y los oídos de la justicia, en vez de satisfacer a la posición radical de quienes han abogado por la eliminación como medio de prueba, se ha optado más bien por dotarla de mecanismo que la hagan lo menos insegura posible.*

*Todo el empeño se ha orientado, pues, en aras de ganar confiabilidad en el testimonio. En cuyo desarrollo cumple destacar para los fines que derechamente atañen a la definición de este pleito, la especial desconfianza que se ha mostrado respecto de ciertas y determinadas personas, precisamente porque en ellas, y miradas de cara al particular caso que se controvierte, concurren poderosas razones que fundadamente*



mueven a creer que no es doble confiar de manera ciega en la veracidad de sus versiones; así quienes tienen alguna relación, más o menos fuerte, con alguna de las partes, cual ocurre con el parentesco, amistad, animadversión, dependencia, etc. etc.

Ciertamente, en todos esos eventos, y en otros más que guarden semejanza, se concluye sin esfuerzo de mayor consideración que el testigo está colocado en una situación de cointerés en el resultado litigioso, pues las condiciones subjetivas en que se encuentra pueden obrar decididamente para que falte a la verdad. De todo lo cual ha tomado nota la ley, adoptando las medidas que en su momento ha juzgado adecuadas.

Así, en un tiempo se creyó que lo mejor era excluir el testimonio de tales personas, por la inmensa desconfianza que despertaban; pero acaso no fue menos influyente la consideración de que siendo difícil que el testigo se mostrase siempre en el fiel de la balanza, especialmente cuando de por medio se cueñan lazos de sangre, cariño y afecto, sería tanto como empujarlos a la mendacidad, y de paso a la conducta ilícita del perjurio. Afloró entonces el criterio que descalifica de antemano al testigo sospechoso; no hay para qué recibirle su declaración.

Sin embargo, pese a las críticas de que fue objeto tal manera de pensar, hay que convenir que era lo más ajustado y ceñido al sistema legal de pruebas al que pertenecía, habida cuenta que si como secuela de ello se predicaba la apreciación numérica de los testigos, en donde prevalecía la cantidad sobre la calidad, era apenas obvio que la ley tomara la severa precaución de no permitir que la cifra de testimonios se completara de cualquier modo; en realidad, dentro de un contexto en el que reinaba la desconfianza acerca de la tarea que el juez pudiera adelantar en punto de sopesar el mérito de los dichos testificales, labor que el legislador reservaba para sí, tenía que verse como algo natural que éste juzgara a priori que tal clase de testigos no fuesen oídos; desde luego que a la ya fácil tarea de reunir un determinado número de testigos, no podía sumarse que en tal guarismo pudieran incluirse los parientes y los amigos íntimos, por ejemplo. De ahí que si el legislador era el encargado de auscultar las condiciones subjetivas del testigo, que no el juez, se hubiere tomado el trabajo de escardar los sujetos que

bien podían testimoniar; era por su temiz que tenía que pasar el examen subjetivo del declarante.

Max cuando el sistema tarifario cedió el paso al de la libertad para el juez de ponderar la credibilidad del testimonio, la situación advertida se tornó insostenible; quedaba fuera de lugar mantener semejante exclusión; pensóse, evidentemente, que si ahora el juzgador es el facultado para valorar las pruebas a través del método de la sana crítica, convertíase en una prodigalidad irreparable desdeñar in limine el testimonio de quienquiera que fuese, por más sospechoso que se le pueda hallar; la justicia no podía continuar privada de un elemento de convicción, so pretexto de rendirle culto a fórmulas abstractas y en extremo formalistas, pues que, como ya se expresaba en el pensamiento de entonces, el parentesco o cualquier otra causa de sospecha, de suyo no impide que se haya visto u oído perfectamente. Además de lo difícil que resulta para el legislador establecer un lindero exacto que separara los buenos testigos de los malos.

Por manera que la nueva concepción en materia de pruebas proclamaba porque el testigo sea de todos modos escuchado, muy a pesar de la sospecha que en él recaiga. La solución, ya diversa, no es la de excluirlo del deber de testimoniar; y, la sospecha, que antes se miraba a priori, cambió de escenario para considerarla únicamente al pesar el crédito que merezca el testigo. Hay que recibir el testimonio; si bien, con protesta de reserva; mas como el riesgo de parcialidad es tan igual hoy como antes, estimóse conveniente prevenir al juez sobre el rigor que en el punto debe observar, exhortándolo a ser mucho más perspicaz, por supuesto que la agudeza y el ojo avizor deben subir de punto allí donde el testimonio comporta menor grado de confiabilidad.

3. Esa ha sido también la evolución en nuestro medio. Como se recordará, el Código Judicial estableció en el artículo 672 que Los testigos inhábiles por incapacidad física, mental o moral, o por parcialidad proveniente de alguno de los parentescos indicados en el numeral 1.º del artículo 659, no pueden ser presentados en juicio por ninguna de las partes". Algo que, como se dejó elucidado, acompasa con el sistema legal de pruebas entonces imperante.

El Código de Procedimiento Civil de 1970, en cambio, habiendo



*suplantad aquel sistema por el de la persuasión racional, no estimó que los testigos sospechosos fuesen inhábiles; apenas si consagró en el artículo 217 la especial prevención que debe tener en mira el juez que se vea abocado a evaluarlos, pues allí simplemente estatuyó: "Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.*

*Hoy, entonces, el deber de testimoniar no decae en el sospechoso, como que no ha sido catalogado como inhábil; simplemente que la fe que merece este tipo de testigo ha de ser diligentemente examinada con un criterio austero y riguroso. "La ley —ha dicho la Corte— no impide que se reciba la declaración de un testigo sospechoso, pero la razón y la crítica del testimonio aconsejan que se la aprecie con mayor severidad, que al valorarla se someta a un tamiz más denso que aquél por el que deben pasar las declaraciones de personas libres de sospecha" (CLXVI, pág. 21).*

4. *De suerte que si de entrada se tiene la idea de que el motivo de sospecha pesa de tal manera en el ánimo de declarante que lo arrastra fácilmente a desfigurar la verdad, es dialéctico pensar que la credibilidad del mismo depende de la verosimilitud que surja no tanto del propio marco de su versión cuanto por el que resulta al compararla con otros medios persuasivos: porque en la medida en que aparezca corroborada dentro de los autos, asimismo la presión decrece. Lo evidente es que si bien hoy en día no cabe descartar de pleno derecho al testigo sospechoso, no menos lo es que difícilmente puede fundar por sí solo la entera convicción del sentenciador, porque, quierase o no, siempre seguirá gravitando el espectro de la desconfianza.*

*Por eso, en aquella sentencia ya citada, la Corte sostuvo que "El valor probatorio de toda declaración de un testigo sospechoso de antemano se halla contrarrestado por la suposición de que sus afirmaciones no son verídicas y por consiguiente, por sí solos, jamás pueden producir certeza en el juez".*

*Lo cual autoriza a decir que lo más aconsejable es que el testimonio sospechoso deba analizarse de cara a los demás medios de convic-*

ción, para así ver de establecer si éstos, ofreciéndole respaldo, hacen evanescente la incredulidad.

5. Descendiendo al caso litigado se tiene que sí, como es punto pacífico los declarantes en los que finca el casacionista la prueba de la causal de paternidad, tienen un parentesco próximo con la actora, como quiera que se trata de su abuela y madre, jamás podrá endilgársele al sentenciador error de la magnitud que es menester para quebrar un fallo en casación, solo porque no atendió con fe ciega lo que tales parientes manifestaron en sus respectivas declaraciones. Bien es verdad que la situación del testimonio varió significativamente cuando se pasó del régimen tarifario de pruebas al de la apreciación científica de las mismas; pero lejos de creer que el viraje consistió en que la desconfianza respecto del mismo ha desaparecido; la transformación no consistió en prescribir la sospecha; lo que se eliminó fue la prohibición de recibirle su testimonio.

En doctrina sostenida con notoria persistencia, enfatiza la Corte que el "error de hecho en la apreciación de las pruebas que conduce a la violación de la ley sustantiva y que permite la casación de un fallo, tiene que ser manifiesto, es decir, tan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o, en otros términos, de tal magnitud, que resulte absolutamente contrario a la evidencia del proceso" (LXXXVIII, p. 972).

6. Conviene aclarar que no es cierto que el Tribunal no hubiese dado explicación alguna para desatender el testimonio de tales personas, pues que, como se deriva del extracto de su sentencia, allí expresó abiertamente la razón que le asistió para proceder así. Dijo, efectivamente, que la versión de ellas estaba influenciada por razones de parentesco "que se plasmaron en el campo de la simple y llana afirmación, circunstancias estas que tornan su dicho inverosímil", y también por "el desmedido afán para establecer la época de la concepción (\*) la que ni siquiera MAGALY ELIZABETH puede aproximadamente precisar".

7. Ahora bien. Analizando ya la argumentación con que el impugnante ensaya desdibujar la sospecha, preciso es señalar que no es bastante a ello sostener que la veracidad y objetividad de la declarante Clementina está en su condición de campesina de la región y en quien

*no es posible concebir una mentira tan grande": o que la sinceridad de Magaly se revela incuestionable al relatar que el demandado le sugirió que dijese que el padre de la menor era Everardo, dado que sobre tratarse de hechos, ante todo el segundo, muy llanos, sin ninguna expresividad como para sostener que son sinónimos de lealtad a la verdad, habría que añadir que la incredulidad del testimonio sospechoso no siempre halla venero en la mala fe de la persona, pues es posible que incluso la inclinación a favorecer a la parte con quien se tiene un ligamen, sea inconsciente, y que la infidelidad se deba simplemente a lo humano de tal conducta, en la que, en razón de lo mismo, puede caer la más acrisolada de las personas; de donde dimana que a efectos de disipar la sospecha no es suficiente con sólo exhibir el título de idoneidad y solvencia moral.*

Empero, en donde más se nota la carencia de éxito de tal gestión impugnatoria, es en el hecho de que el recurrente no reclama la prueba de las relaciones sexuales a través de la inferencia que arranca del trato personal y social de la pareja, sino que, yendo todavía más lejos, considera que está plenamente acreditado el hecho mismo de la cópula, cuestión que no puede darse por establecida con la certidumbre deseada, del simple hecho de que ella, afectada como está por la pluricitada sospecha, dijera que alguna vez ella salió de su casa, él, o sea el demandado, quien a la sazón tomaba los alimentos allí, se quedó acostado en el lugar, "y cuando yo regresé había estado levantado y acostado con mi hija MAGALY ELIZABETH TREJO QUISTANCHALA".

8. *En tales condiciones, resulta oportuno concluir que si la paternidad no puede fundarse en tal prueba, tampoco lo puede ser en el mero dictamen que menciona el impugnador, toda vez que esta Corporación ha explunado que el examen antropoheredobiológico, no constituye "motivo autónomo o causal independiente que dé lugar a presumir la paternidad natural y, por ende, a declararla judicialmente con apoyo en este único medio de prueba" (Cas. Civ. de 24 de noviembre de 1987, sentencia No. 448). Aspecto corroborante sin el cual, como lo señala el mismo censor, el dictamen no puede fundar por sí solo la paternidad.*

9. En fin, así puestas las cosas, cualquiera que se la actitud crítica sobre tales medios de convicción se asuma, de todos modos, y principalmente por el defecto hallado en la prueba testimonial, se caería en el

campo de disputarle al Tribunal la autonomía para fundar su propia convicción, pues ni por lumbré podría reprochársele el error mayúsculo de que trata la primera causal de casación, según las explicaciones dadas atrás.

10. Cuanto se ha dicho no puede arrojar otra conclusión diferente a la de que el cargo adviene impropio.

#### IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida en este proceso el 12 de enero de 1993 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pasto.

Se condena en costas a la parte recurrente. Tásense.

Cópiese, notifíquese y oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.

*Pedro Lafont Pianetta, Nicolás Bechara Simancas, Eduino García Sarmiento, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor Marín Naranjo (en permiso) Rafael Romero Sierra.*

## **VIOLACIÓN NORMA SUSTANCIAL- Vía directa e indirecta**

La violación directa se da independientemente de todo error en la estimación de los hechos, o sea, sin consideración a los medios de convicción que haya tenido en cuenta el sentenciador en su juicio; por el contrario, la indirecta tiene lugar cuando el fallador deja de aplicar una norma que regula el caso o hace actuar una que le es extraña, ello por efecto de haber incurrido en errores en la estimación de las pruebas.

Igual sentido: Casación Civil de 7 de diciembre de 1990, sin publicar; G.J. Tomo CXLVI, pág. 60, Casación Civil de 22 de noviembre de 1993, sin publicar.

F. E. C. de P.C. Art.: 368 Numral.: 1.

## **HIPOTECA / REGISTRO PÚBLICO**

1) Aunque se haya pagado la obligación principal, la hipoteca no desaparece del todo hasta tanto no se agoten las formalidades impuestas por la ley para que ese resultado se produzca, siendo entendido que el cumplimiento de dichas formalidades requeridas para la cancelación de la hipoteca, es de cargo del acreedor; y el cedor que ha cubierto la obligación principal y no ha obtenido por parte de aquél la inscripción en el registro de la cancelación consiguiente de la hipoteca, cuenta con los medios adecuados para exigirla por una judicial.

F. E. C.C. Art. 2435, 2457; DECRETO Num. 960 Año: 1970 Art.: 49.

*Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Santafé de Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).-*

Magistrado Ponente: *Carlos Esteban Jaramillo Schloss,*

Referencia: Expediente No. 4352

Sentencia Nº 128

Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia de fecha nueve (9) de junio de 1992, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá para ponerle fin, en segunda instancia, el proceso ordinario de mayor cuantía seguido por ALEGINIO VACA AVILA contra MARTHA ESPERANZA RUEDA MERCHAN.

### *I. ANTECEDENTES*

1. En la demanda con que se abrió el proceso en mención se solicitó:

—.Declarar resuelto el contrato de promesa de compraventa celebrado el 22 de noviembre de 1986 en la ciudad de Bogotá, entre ALEGINIO VACA AVILA, representado por su hermano Edgard Humberto Vaca Ávila, en virtud de mandato conferido, como prometiende vendedor, y MARTA ESPERANZA RUEDA MERCHAN, como prometiende compradora, respecto del inmueble situado en la ciudad de Bogotá, distinguido con la nomenclatura urbana No. 140-51 de la carrera 22, Interior 11 del conjunto residencial Amberes, situado en la urbanización Los Cedritos, cuyos linderos específicos describió en la demanda.

—.Declarar que la prometiende compradora incumplió el contrato, y por consiguiente debe perder el dinero que ha pagado al prometiende vendedor como arras del negocio.

—.Ordenar la restitución del inmueble citado al demandante, para lo cual “debe comisionarse al Inspector de policía de la región haciéndole saber que si se han plantado mejoras en esa propiedad, son del vendedor y éste no está obligado a pagarlas en virtud de que su carácter de suntuarias exige consentimiento previo del dueño”.

—.Condenar en costas a la demandada.

El fundamento d las pretensiones que anteceder, bien pueden resumirse del siguiente modo.

—En virtud del mandato conferido al señor Edgar Humberto Vaca

Ávila por parte de ALFONSO VACA AVILA, se celebró el contrato de promesa de compraventa del inmueble atrás identificado, el cual se llevó a cabo el 11 de noviembre de 1986.

— Tal como se estipuló en el contrato de promesa de compraventa, la promitente compradora entregó la suma de tres millones de pesos (\$3.000.000.00) a título de arras y, a su vez, el actor entregó el inmueble prometido. Posteriormente, el día 7 de diciembre de 1986, aquella pagó un nuevo contado de la suma de dinero acordada como precio, consistente en un millón de pesos (\$1.000.000.00).

— El saldo, o sea la cantidad de dos millones quinientos mil pesos (\$2.500.000.00), se entregarían contra la firma de la escritura pública que perfeccionaría la venta prometida; y por este saldo se convino en pagar un interés del 2% mensual anticipado dentro de los cinco días de cada mes.

— El día y a la hora señalados para la firma de la escritura pública de compraventa, se presentó en la notaría correspondiente el promitente vendedor, sin embargo, no pudo firmar el acto notarial por cuanto la promitente compradora se presentó a la Notaría sin cédula de ciudadanía.

— La demandada solo pagó una cuota de los intereses pactados.

— “En vista de que la promitente compradora se ocultó a partir de ese momento, fue preciso requerirla por correo certificado para que se diera cumplimiento a los términos del contrato de promesa de compraventa...y fue así como mi poderdante lo reconvino para que se hiciera presente en la Notaría Cuarta del Círculo de Bogotá, a determinadas fecha y hora”, sin que ella se hiciera presente en esta nueva oportunidad.

2. La demandada dio respuesta a la demanda incoada, oponiéndose a las pretensiones, por considerarlas sin soportes fácticos y jurídicos.

En relación con los hechos antes resumidos, niega que la promitente compradora hubiese faltado a la Notaría, argumentando que “no se corrió la escritura de presentación de documentos”; niega también que hubiese fallado en la realización de los pagos de los intereses; y que se hubiese ocultado, ya que la segunda cita fue concertada unilateralmente.



Presenta como excepción la ausencia de cumplimiento de la promesa por parte del accionante, por los siguientes motivos:

-- A la demandada se le prometió el bien inmueble totalmente saneado, desprovisto de todo gravamen. Bajo este supuesto procedió MARTHA ESPERANZA RUEDA a abonar la suma de un millón de pesos (\$1.000.000.00), a pagar los intereses acordados, y a realizar reformas útiles y costosas en el inmueble.

— Posteriormente se enteró la demandada que en el folio de matrícula inmobiliaria # 0500338622 aparecían dos gravámenes hipotecarios en favor de la Corporación Popular de Ahorro y Vivienda Corpavi, de los años de 1975 y 1976, aún vigentes. Solo hasta el mes de octubre el apoderado del demandante accedió a ratificar esta información en la Corporación, cuando ya se había vencido el plazo pactado.

Sobre este tema, el apoderado advierte también la incongruencia que se presenta entre la carta en que unilateralmente cita a la demandada, y la escritura pública corrida el 22 de Enero de 1988 por cuanto en aquella se pretende llevar el contrato a "feliz término, mientras en esta se refiere a prorrogar el contrato de venta".

- Al hacer un resumen de las mejoras realizadas al inmueble, considera el apoderado de la parte demandada que estas se realizaron de buena fe, y que son apenas mejoras útiles y necesarias.

También presentó demanda de reconvenición, en la que solicitó: (F. 1 y 58 del C.2.)

Que se declare incumplido por el demandante reconvenido el contrato de promesa de compraventa del inmueble ya citado.

— Que se condene a ALEGINIO VACA AVILA a darle estricto cumplimiento a la promesa de contrato de compraventa.

— Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a ALEGINIO VACA AVILA a imputar dobladas al valor del inmueble, las arras confirmatorias penales previstas en el contrato de promesa de compraventa, en favor de MARTHA ESPERANZA RUEDA, o en todo caso,



que se le aplique la consecuencia pertinente de las arras ante el palmario incumplimiento en que aquél incurrió.

Subsidiariamente solicitó que se condene a ALEGINIO VACA AVILA a indemnizarle a MARTHA ESPERANZA RUEDA MERCHAN todos los perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento de la promesa de contrato.

— Que se le impondan las costas del proceso al demandante inicial.

Se expresa en la contrademanda la imposibilidad que surgió para la reconviniente de obtener una hipoteca sobre el inmueble, con cuyo producto pagaría el resto de la deuda, por existir las hipotecas pendientes de las que ya se hizo mención. Confirma que ella pagó tres cuotas de intereses y que en diciembre de 1987, se encargó de gestionar las minutas de cancelación de los gravámenes en la Corporación Popular de Ahorro y Vivienda Corpavi.

3. Conoció del asunto inicialmente el Juez Once Civil del Circuito de Bogotá quien, mediante providencia de Noviembre 30 de 1990, resolvió:

— Negar la excepción y la contrademanda presentada por la demandada;

— Declarar resuelto el contrato de promesa adacido como sustentación de la mentada acción resolutoria.

— Declarar que por cuestión de lo convenido en cuanto a la cláusula penal la demandada MARTHA ESPERANZA RUEDA pierde a favor del demandante ALEGINIO VACA AVILA la suma de tres millones de pesos (\$3.000.000), que a ésta entregara a título de arras.

— Reconocer a favor de la demandada y a cargo del demandante un crédito por valor de cinco millones quinientos setenta y ocho mil cuatrocientos pesos (\$5.578.400.00) por concepto de las mejoras que la primera le introdujo al inmueble materia de la fallida promesa de compra venta.

— Declarar que el demandante está obligado a restituírle a la deman-

dada la suma de un millón de pesos (\$1.000.000.00) que de ella recibiera, por cuenta del precio convenido por la compraventa prometida.

- Imponerle a la demandada la obligación de restituirle al demandante el inmueble materia de la promesa, una vez este le pague el valor del crédito que por mejoras se le reconoce.

— Conceder a la demandada el derecho de retención que le confiere la ley hasta tanto no se le paguen las sumas que le fueron reconocidas.

— Declarar que las prestaciones relativas a frutos quedan compensadas entre las partes.

- Condenar en costas a la demandada.

4. Por virtud de apelación interpuesta por la parte demandada y actora en reconvención, a la cual adhirió con posterioridad el demandante inicial, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, en fallo del nueve de junio de 1992, revocó en todas sus partes la sentencia del a quo y dispuso:

- Negar las pretensiones de la demanda principal y declarar que el señor ALEGINIO VACA AVILA incumplió el contrato de promesa de compraventa celebrada con la demandada, condenándolo en consecuencia a darle estricto cumplimiento, cancelando los gravámenes hipotecarios que pesan sobre el inmueble, y otorgando el respectivo instrumento público de compraventa en un lapso no superior a dos meses a partir de la ejecutoria de la providencia.

— Ordenar a la contrademandante cancelar a ALEGINIO VACA AVILA en el momento del otorgamiento de la escritura pública que agote la promesa de contrato objeto del proceso la suma de dos millones quinientos mil pesos (\$2.500.000.00) más intereses al 2% mensual desde el 7 de febrero de 1987 hasta la fecha de escritura de compraventa.

En fin, se abstuvo de imponer condena al pago de costas causadas en la segunda instancia.

## *II. Fundamentos del fallo recurrido:*

fundamentó la decisión el ad quem en los siguientes argumentos:

- No aparece constancia de que alguna de las partes hubiese cumplido o se hubiese allanado a cumplir a otorgar la escritura pública en la fecha y hora señaladas. El primeramente demandante afirma haber asistido pero no ofrece pruebas suficientes, como sería una escritura de presentación o, por lo menos, la pertinente anotación de prórroga en el cuerpo del contrato. El testimonio rendido por quien acompañaba al señor ALEGINIO VACA en la Notaría no conduce al Tribunal a considerar probada la asistencia, por desconocer el declarante totalmente las circunstancias de tiempo y modo en que se dieron los hechos. La declaración realizada por el actor ante notario mediante escritura pública en la que afirma haber comparecido en la Notaría el 22 de enero de 1988 "con el ánimo de entrevistarse con la promitente compradora a fin de acordar una prórroga del contrato de venta," tiene calidad de declaración mas no de presentación, ya que por fuerza mayor no pudo el promitente vendedor obtener el paz y salvo de impuesto predial, documento indispensable para dar cumplimiento a la obligación contraída."

Para determinar si hubo incumplimiento del actor, el Tribunal realiza un análisis jurídico y fáctico de la situación, en el que considera que es de la naturaleza de la compraventa la transferencia de dominio de los bienes sin gravámenes, si ellos no han constituido parte del negocio. Los gravámenes, por interferir con el libre disfrute del bien, debe ser parte del precio o estar contemplada en la negociación la forma de cancelación del gravamen. "Aun en el evento de que un gravamen no esté garantizando obligación alguna, ya porque esta se hubiese pagado o la misma no hubiese llega a constituirse, la causa de su cancelación debe estar a cargo del vendedor o constituir rebaja del precio, pues la cancelación del gravamen es dispendiosa y onerosa..." Afirma entonces el Tribunal que es de la naturaleza de la compraventa a que el bien objeto del mismo esté libre de gravámenes, y en estas condiciones está obligado a entregarlo el vendedor. Lo contrario requeriría pacto expreso. Las dos escrituras de hipoteca vigentes que figuran en el folio de matrícula inmobiliaria, dejan sin fundamento las afirmaciones del actor, en el sentido de que el inmueble carecía de gravámenes en el momento de la negociación. Por lo anterior, confirma el Tribunal que le asistió razón a

la demandada para negarse a realizar los pagos faltantes, hasta tanto se le solucionara el problema presentado.

Respecto de las arras que pactaron las partes, considera el Tribunal que se tratan de arras confirmatorias, porque si bien se insinúa un carácter penal de la suma de tres millones de pesos (\$3.000.000.00) entregada al firmar la promesa, "no se reúnen los requisitos para que tal carácter se cumpla; en cambio sí lo están para que dichas arras se imputen al pago; pues ninguna de las partes en sus respectivos libelos (sic) manifestó optar por ellas en lugar de las obligaciones principales."

### *III. La demanda de casación y consideraciones de la Corte:*

Para obtener la infirmación la sentencia del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, formuló el primeramente demandante un cargo con fundamento en la causal primera de casación prevista en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, consistente en haber violado la ley sustancial por aplicar indebidamente los artículos 1.609, 1.608, 1501, 1603, 1621 todos del Código Civil; y el artículo 89 de la Ley 153 de 1987; y por no dar aplicación a los artículos 2440, 1602, 1608 del Código Civil; 187 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 49 y 50 del Decreto 960 de 1978, incurriendo el sentenciador en evidente errores de hecho en la apreciación de las pruebas y en la falta de apreciación de otras que procede a singularizar

Considera el recurrente en casación que el Tribunal erró al afirmar que "es de la naturaleza de la compraventa la transferencia de dominio de bienes sin gravámenes, si ellos han constituido parte del negocio", por cuanto, en opinión del recurrente "el artículo 2440 del Código Civil preceprúa que el dominio de los bienes gravados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquier estipulación en contrario". En la promesa de compraventa no se estipuló nada al respecto, y por tanto es falso concluir que el vendedor estaba obligado a la entrega de un bien libre de gravámenes. Por el contrario, según el artículo 89 de la Ley 153 de 1987 y el artículo 2440 del Código Civil, las cláusulas del contrato de compraventa deben constar por escrito, lo cual no ocurrió en este caso en relación con el gravamen.

Considera también que el actor cumplió estrictamente las obligaciones a su cargo "contraídas en el contrato de compraventa", como son entregar

el bien y recibir el dinero de las arras. Por el contrario, la prometedora compradora se encontraba en mora en el cumplimiento de sus obligaciones, al haber pagado solo tres de las mesadas de intereses que debía pagar, como ella misma lo confesó. Es decir, la primeramente demandada incumplió al incurrir en mora desde el 11 de febrero de 1987, y al no concurrir a la Notaría acordada a la firma de la escritura. Por lo tanto, en la fecha de la firma de la escritura de compraventa, el actor no se encontraba obligado a cumplir con ninguna de las restantes obligaciones, de conformidad con el artículo 1.609 del Código Civil.

En otros términos, aun aceptando la obligación de entregar el bien libre de gravámenes, el promitente vendedor tenía como fecha límite para cancelar las hipotecas la de la escritura de compraventa, es decir, el 15 de julio de 1987; pero el incumplimiento de la promitente compradora había ocurrido el 11 de febrero o del mismo año.

Por último, no comparte la decisión del Tribunal en el sentido de ordenar cancelar los gravámenes, pues a la fecha de la sentencia de segunda instancia, no existía gravamen por cancelar. Era obligación de la entidad financiera correspondiente proceder a la cancelación en el registro, según lo dispone el artículo 49 del Decreto 960 de 1970. Por demás, las minutas para cancelar las hipotecas fueron retiradas por la contramandante, por lo que se encuentra hoy en sus manos efectuar el respectivo registro. De aquí, pues, que al decir de la censura, el sentenciador de segunda instancia incurrió en error de hecho "... al no apreciar las escrituras de cancelación que en fotocopia auténtica presentó la demandada como pruebas, y al haber apreciado indebidamente el documento promesa de compraventa que dio origen al proceso, imponiendo una obligación adicional al vendedor no acordado (sic) ni estipulado (sic) en el contrato, y acusándolo de incumplimiento, como quien incumplió primero fue la compradora, es evidente, manifiesto, ostensible, protuberante y además claro (sic) ..."

### CONSIDERACIONES

1. Ha dicho esta Corporación que el numeral primero del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, tiene como supuesto básico para la prosperidad de dicha causal de casación la violación de la ley sustancial, a la cual puede llegarse por dos vías diferentes, cuya distinción no debe olvidarse aten-

diendo a los importantes efectos que implica: la directa, que presupone "exclusión de todo reparo sobre la apreciación de las pruebas; la impugnación se concreta directamente en la imputación al fallo de quebrantamiento de la ley sustancial que se considera indebidamente actuada por el juzgador frente a un cuadro fáctico bien visto a través de la evidencia disponible en el proceso; y en la indirecta, donde la carencia de base legal se propone como consecuencia de errores de hecho o de derecho atribuibles a la sentencia en la apreciación de determinadas pruebas" (Casación Civil de 7 de diciembre de 1990, sin publicar). Es decir, *la violación directa se da independientemente de todo error en la estimación de los hechos, o sea, sin consideración a los medios de convicción que haya tenido en cuenta el sentenciador en su juicio, o, como lo ha dicho la Corte, cuando "...tampoco existe reparo que oponer contra los resultados que en el campo de la cuestión fáctica haya encontrado el fallador, como consecuencia del examen de la prueba..."* (G. J. tomo CXLVI, pág. 60); por el contrario, *la indirecta tiene lugar cuando el fallador deja de aplicar una norma que regula el caso o hace actuar una que le es extraña, ello por efecto de haber incurrido en errores en la estimación de las pruebas. Así las cosas, cuando se formula un cargo por la vía directa es palmario que el casacionista no puede separarse en lo más mínimo de las conclusiones a que llegó el fallador en la determinación de los hechos, el único análisis que puede formularse como sustento del cargo ha de limitarse a las normas sustanciales que considere inaplicadas, aplicadas indebidamente o interpretadas en forma equivocada, con absoluta prescindencia de consideraciones que, en tanto discrepantes de la apreciación del juzgador en el campo fáctico, persigan un nuevo examen crítico en este aspecto.*" (Casación Civil de 22 de noviembre de 1993, sin publicar).

En el presente caso, la tesis impugnativa formulada se apoya básicamente en que el casacionista no está de acuerdo con las apreciaciones del Tribunal relacionada con la viabilidad jurídica de vender un bien hipotecado, sin advertir antes al comprador sobre la existencia de un gravamen de tal naturaleza, cuestión que desde luego ha debido ser planteada por la vía directa, de conformidad con lo antes expuesto, y esta razón es suficiente para concluir que el cargo no puede alcanzar prosperidad, toda vez que aún cuando llegare a quedar establecido que el juzgador colegiado en realidad ignoró, por falta de observación, las escrituras de cancelación que el recurso señala, esa omisión carecería por completo de influencia decisoria mientras no se demuestre que aquél juicio, referido de seyo a una cuestión de puro derecho, no constituye un error jurídico.



2. Afirma el recurrente, además, que existió error de hecho en la apreciación de la promesa de compraventa, en donde el vendedor no se compromete entregar el bien sin hipotecas.

Sin embargo, observa la Sala que frente al texto de la sentencia impugnada, esta afirmación resulta a todas luces inconsistente. En efecto, sentando una afirmación de puro derecho cuya ilegalidad el recurrente no intentó demostrar por el único rumbo en que era factible hacerlo en sede de casación, expresa aquella providencia que por obra del postulado de la buena fe consagrado por el artículo 1693 del Código Civil, de la naturaleza de todo contrato de compraventa es que la transferencia del dominio de los bienes que van a ser objeto de enajenación, la haga el vendedor sin gravámenes, siempre que estos últimos no haya formado parte de la negociación, lo que en otras palabras quiere significar, al tenor del artículo 1501 del mismo cuerpo legal recién citado, que salvedad hecha de esta última situación particular, es necesaria una cláusula especial para que se entiendan de otro modo las cosas, y en realidad basta la simple lectura de la estipulación séptima del contrato de promesa que obra a folio 15 del cuaderno principal del expediente para concluir que en la especie en estudio, de manera expresa e inequívoca, los prometiotes comprador y vendedor no acordaron liberar a este último de la obligación aludida. Por este aspecto, pues, la sentencia tampoco se funda en hechos cuya verdad esté incontrastablemente excluida por pruebas que el juzgador haya pretermitido.

*Finalmente, es del caso precisar que, en cuanto al argumento planteado por la censura en el sentido de entender cumplida la obligación de entregar el inmueble libre de toda limitación por el hecho de haber pagado la obligación principal que dio origen a las hipotecas sin haberse cancelado estas y por lo tanto conservando vigencia la inscripción inmobiliaria correspondiente, de acuerdo con el artículo 2457 del Código Civil, para que se produzca la extinción integral de un gravamen hipotecario es necesario, no solamente la extinción de la obligación principal, que al tenor de dicho precepto produce por vía indirecta la extinción del derecho real de garantía del que es titular el acreedor, sino también la cancelación del registro de la escritura constitutiva del gravamen. Es decir, aunque se haya pagado la obligación principal, la hipoteca no desaparece del todo hasta tanto no se agoten las formalidades impuestas por ley para que ese resultado se produzca, siendo entendido que el cumplimiento de dichas formalidades requeridas para la cancelación de la hipoteca, es de cargo del acreedor. (art. 49 Dec. 960 de 1970) y el deudor*

*que ha cubierto la obligación principal y no ha obtenido por parte de aquél la inscripción en el registro de la cancelación consiguiente de la hipoteca, cuenta con los medios adecuados para exigirla por vía judicial.*

*El registro de la creación y cancelación de la hipoteca en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al bien sobre el cual recae, en favor del acreedor, la atribución patrimonial de garantía, tiene dos finalidades: el cumplir con el requisito que exige la ley para su solemnización (art. 2435), y el dar publicidad a terceros de esa atribución, de donde se sigue que la inscripción de hipoteca no cancelada puede dar lugar a que sea cedido el crédito a favor de un cesionario que juzgue de la existencia del mismo por lo que resulte del registro.*

El cargo, entonces, no está llamado a prosperar.

#### DECISIÓN:

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha nueve (9) de junio de 1992, que le puso fin al proceso ordinario de la referencia, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá.

Las costas en casación son de cargo de la parte recurrente. Tásense en su oportunidad.

Cópiese, notifíquese y devuélvase la actuación al tribunal de origen.

*Pedro Lafont Planetta, Nicolás Bechara Simancas, Eduardo García Sarmiento, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra.*



**CONTRATO BANCARIO / CUENTA CORRIENTE  
BANCARIA / CHEQUE / PRINCIPIO DE LA  
RESPONSABILIDAD DE EMPRESA**

1) Responsabilidad del Banco con el cuentacorrentista por el pago de un cheque falso. Excepción.

2) Ejercicio de la banca de depósito equiparado al de una empresa comercial. Principio de la responsabilidad de la empresa.

Igual sentido: G.J. Tomo CIII, pág. 526; G.J. Num. 1943, pág. 73

F. P. C. de Co. Art. 1391, 732; L.EY: 46 de: 1923.

*Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Santafé de Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).*

*Magistrado Ponente: Carlos Esteban Jaramillo Schloss,*

Referencia: Expediente No. 4311

Sentencia N°129

Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de fecha (29 de septiembre de 1992, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario de mayor cuantía seguido por la Sociedad COMERCIALIZADORA EL ESFUERZO S. A. contra el BANCO DEL ESTADO.

***1. EL LITIGIO,***

1. En la demanda con que se abrió el proceso en mención el demandante solicitó principalmente que se condene al BANCO DEL ESTADO a pagar a la sociedad COMERCIALIZADORA EL ESFUERZO S. A. el valor de los cheques que a continuación se detallan, y que el demandado u

su vez pagó cuando una de las firmas exigidas, la de la señora Mercedes Otero, era falsificada:

Número	Fecha de pago	Valor	Cuenta Corriente
No. 6398514	Enero 08 de 1988	\$60.000.00	103-140-16-6
6398524	Enero 14 de 1988	\$400.000.00	103-140-16-6
6398515	Enero 15 de 1988	\$30.000.00	103-140-16-6
6398523	Enero 18 de 1988	\$7.000.000.00	103-140-16-6
		\$7.490.000.00	

Solicitó además que se condene al BANCO DEL ESTADO, a pagar a la sociedad actora el valor de los intereses correspondientes a cada una de las cantidades que se anotaron, a partir de la fecha en que fueron debitadas de la cuenta corriente mencionada, hasta el momento en que se satisfaga la obligación, a la tasa del 4% mensual, y que se condene al Banco del Estado a pagar a la sociedad Comercializadora el Estado S.A., los perjuicios que le haya causado con la conducta negligente, asumida al pagar los títulos valores antes señalados. Por último solicitó que se condene al demandado a pagar el valor de las costas y gastos que demande el proceso, incluidas la agencias en derecho.

Fundamenta la actora sus pretensiones en los siguientes hechos:

a.- La Sociedad Comercializadora El Esfuerzo S.A. fue titular de la cuenta No. 103-14016-6 abierta por el Banco del Estado. Al abrirse esta cuenta, las instrucciones fueron las de exigir las firmas de las señoras Patricia Coral González y Mercedes Otero simultáneamente para pagos hechos con cheques de esa cuenta, exigencia que figura en la respectiva tarjeta de firmas.

b.- El Banco del Estado, sucursal Cali, de la Oficina del Centro Comercial del Norte de la Avenida Cuarta Norte números 23DN - 54 y 56, pagó los cheques que se especificaron anteriormente, ello no obstante e que la firma de la señora Mercedes Otero era falsificada.

c.- La sucursal del Banco del Estado de Cali canceló negligentemente los títulos valores citados, sin percatarse de la falsificación señalada, y la señora Mercedes Otero en ningún momento giró tales cheques.

d.- La misma sucursal no suministró extractos de la cuenta corriente a la sociedad demandante por el mes de enero, ni le devolvió los títulos valores objeto de la falsificación.

2. El demandado respondió a la demanda imputada, aceptando la existencia del contrato de cuenta corriente, cuyas firmas autorizadas eran las de Gloria Patricia Coral y Mercedes Otero, y que los cheques fueron pagados. No le consta la falsedad de la firma de Mercedes Otero y afirma que el Banco remitió por correo el extracto de la cuenta corriente correspondiente a enero, en la forma acostumbrada con todos sus clientes. No devolvió los cheques al titular, porque este no los reclamó.

Considera la imputación de negligencia al BANCO, contenida en la demanda, como meras apreciaciones subjetivas del demandante y niega que se pueda inferir de los hechos narrados por el demandante, responsabilidad al Banco.

Asimismo propone como excepciones a las pretensiones del demandante las siguientes:

— Eximente de responsabilidad por el dolo del representante legal de la entidad actora. El Banco cumplió el contrato de depósito de cuenta corriente en forma profesional, diligente y prudente, realizando el proceso de visado que normalmente efectúa para el pago de instrumentos que le son presentados por ventanilla. No encuentra el demandado probado, como corresponde según los principios del instituto procesal de la carga de la prueba, el daño causado al demandante. Considera que el vínculo causal de responsabilidad se quebró por el dolo de la representante legal de la sociedad actora lo cual le exime de responsabilidad, amén de la culpa que le pueda caber a la Junta Directiva de la misma sociedad, cuerpo este que ya había sido enterado de los faltantes de caja imputables a Coral González. Considera también el demandado que existe prejudicialidad penal, por existir proceso penal contra quien fuera la representante de la sociedad demandante.

— Eximente de responsabilidad por falta de notificación en término oportuno. El contrato de depósito de cuenta corriente firmado por las partes da un plazo de 15 días siguientes a la fecha de corte para objetar los extractos. El Banco, según lo demuestra la planilla certificada del correo,

envió el extracto a la dirección registrada. Plantea el apoderado la hipótesis de que Coral González hubiese destruido los extractos que podrían inculparle.

3. Conoció del asunto inicialmente el Juzgado 11 Civil del Circuito de Cali, el cual, mediante sentencia de 24 de marzo de 1992, declaró no probadas las excepciones de fondo propuestas por el BANCO DEL ESTADO, condenó a este último a pagar a favor de la COMERCIALIZADORA EL ESFUERZO S.A. la suma de \$7.490.000.00, más intereses del 48% anual, liquidados desde el 18 de enero de 1988 y hasta que se cancele totalmente la obligación; negó los perjuicios solicitados por el demandante y condenó en costas a la parte demandada.

Para llegar a esta decisión, consideró el juez de primera instancia, que la cláusula décimoquinta del contrato de depósito en cuenta corriente, que suscribieron las partes, quebranta el artículo 728 del Código de Comercio, "pues a falta de entrega de los cheques, el término es de seis meses, según la regla primera del artículo 1391 *Ibidem*". Por consiguiente, a pesar de lo dicho en el contrato, la reclamación hecha al banco fue en término.

Encontró el juez a quo probada la falsedad en la firma impuesta en los instrumentos, a través del dictamen pericial practicado, mas no que la falsedad en dichos instrumentos hubiese sido poco notoria.

En cuanto al pago de uno de los cheques por fuera del horario normal, afirma el juez que nada impide a un banco atender a sus clientes a la hora del cierre.

### *II. Fundamentos del fallo impugnado*

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali confirmó en todas sus partes la sentencia del a quo señalando que las firmas en un título valor se presumen auténticas, y quien alega la falsedad debe probarla; aduce que "al cuentahabiente le basta con la demostración de haber efectuado el pago, de un cheque falso o adulterado, para que se comprometa la responsabilidad del último, independiente de cualquier consideración, tal como ser la falsedad o adulteración más o menos notoria, o el haber efectuado el banco con mayor diligencia el control previo al pago del título valor, etc. Al librado le es dable entonces, eximirse de la responsabilidad con la com

probación de la conducta negligente del depositante, o con la omisión del aviso dentro del término legal."

En cuanto a las excepciones presentadas por el demandado, consideró el Tribunal que quedó plenamente comprobada la falsedad de la firma de Mercedes Otero en los títulos valores y que el pago por ventanilla no exime al banco de responsabilidad. "Ante el riesgo que supone el pago en esta forma, es mayor la diligencia y cuidado que debe desplegar la entidad crediticia en orden a evitar las cancelaciones de títulos falsificados."

Para establecer la identidad de quien realizó el cobro de los cheques por ventanilla, se recibió la declaración de Germán Ramírez, quien no pudo aportar mayor dato al proceso, y de Gloria Mery Paz Montoya, gerente del Banco del Estado, Oficina Centro Comercial Norte, quien, por el contrario, recordaba con demasiada exactitud el pago de los cheques que originaron el litigio.

En relación con las imputaciones que se consignaran en el Acta 36 del 4 de febrero de 1988, para el Tribunal no deja de ser "irrazonables sindicaciones sin respaldo probatorio en este proceso, puesto que no existe providencia judicial que haya declarado que incurrió en los delitos de abuso de confianza o hurto agravado, o falsificaciones, que permitan afirmar que el pago de los cheques falsos se debió a culpa de la representante de la Sociedad Comercializadora El Esfuerzo S.A. ...".

La excepción de aviso extemporáneo al Banco fue desvirtuada por el Tribunal, al no aceptar como prueba del envío de los extractos por correo, la planilla presentada por el demandado en la que consta únicamente que se realizó un envío por correo ordinario. Por el contrario, fue el demandante el que aportó la prueba de haber informado a término al Banco de los hechos, con la constancia que obra a folio 34 del C. 1.

### *III. Demanda de casación*

Para combatir la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, formuló el demandado cinco cargos, "cuatro primeros por la vía indirecta, y el último por la vía directa. En los dos primeros se pretende demostrar la exoneración total del Banco demandado por la culpa exclusiva de la sociedad cuentacorrentista en la falsificación de los cheques, el

primero, por yerros fácticos, el segundo, por errores de hecho y de derecho". Los cargos tercero y cuarto, presentados *ad cautelam*, "buscan la exoneración parcial del demandado ante una concurrencia o compensación de culpas con la sociedad demandante, el tercero fundado en errores de hecho, y el cuarto por yerros fácticos y de derecho. El último cargo, encausado por la vía indirecta, ataca la condena impuesta en la parte correspondiente al pago de los intereses."

Por considerar al Corte que el cargo llamado a prosperar es el primero, reducirá su análisis únicamente a los argumentos presentados por el casacionista para sustentarlo:

*Cargo primero:*

Dentro de la órbita de la causal primera de casación, el apoderado de la parte demandada considera la sentencia recurrida indirectamente violatoria, en forma principal, de los artículos 1613, 1614, 1615, 1616, 1617 del Código Civil; y de los artículos 732, 822, 883 y 1391 del Código de Comercio, por los graves y trascendentes errores de hecho en que incurrió el *ad quem*, en la apreciación del acta No. 36 de febrero 4 de 1988 de la Junta Directiva de la sociedad demandante, de la declaración rendida por el Doctor Harold Zúñiga Dishington, de los cheques Nos. 6398514, 6398515, 6398523 y 6398524, de los testimonios de Germán Rodríguez Quiroga y Gloria Mery Paz Montoya, de la inspección judicial con exhibición de documentos de octubre 3 de 1989 y del indicio derivado de la conducta de la sociedad actora que impidió la práctica del dictamen pericial decretado en el proceso, yerros que llevaron al juzgador a no ver acreditada en el proceso, estándolo, la exoneración de responsabilidad del Banco por la culpa o dolo de la representante legal de la sociedad cuentacorrentista en las falsificaciones de los cheques pagados por el ente crediticio.

En efecto, afirma el recurrente, el Tribunal le negó prosperidad a la excepción propuesta de "dolo de la representante legal de la actora", por no encontrar establecidos los hechos que la sustentan. Sin embargo:

1. En el Acta No. 36 de febrero 4 de 1988 de la Junta Directiva de la Sociedad COMERCIALIZADORA EL ESFUERZO S.A., se reconoce expresamente que fue la propia gerente y representante legal quien realizó las falsificaciones de los distintos títulos valores; esta Acta fue tan trascen-



dental para la empresa que con base en ella procedió al despido de la gerente y a formular contra ella denuncia penal.

2. La declaración de parte de Harold Zúñiga Dishington, miembro de la Junta Directiva de COMERCIALIZADORA EL ESFUERZO, en donde admite la autoría de la gerente en las falsificaciones de los cheques materia de controversia.

3. La gerente de la sociedad actora figura no solo como giradora de los cheques sino como beneficiaria, y cobradora de tres de ellos por ventanilla. Y aun cuando para el Tribunal el testimonio de Gloria Mery Paz Montoya no era suficiente para considerar que los cheques sí habían sido cobrados personalmente por la citada gerente, —afirmación del Tribunal a su vez desvirtuable si se tienen cuenta que en otra parte del testimonio Gloria Mery Paz Montoya expresó claramente quienes habían cobrado los cheques— existían en el expediente otras pruebas que no fueron desvirtuadas y que demostraban que la gerente sí había realizado el cobro, como es el hecho de que el cheque por valor de \$7.000.000 tuviera en su respaldo solo dos firmas, la de la gerente y la de Mercedes Otero, ésta última tachada de falsa en el proceso; por tanto este cheque solo pudo ser pagado a la beneficiaria, cuya firma es la única que aparece auténtica en el dorso del título, vale decir, solo pudo ser pagada a la gerente de la sociedad actora.

4. Tampoco tuvo en cuenta el Tribunal que antes de que se pagaran los cheques falsos, el cortador de la empresa denunció irregularidades en el manejo de los dineros por parte de la representante legal de la sociedad actora, lo cual no originó ninguna medida correctiva y cautelar por parte de la empresa.

5. Pretirió también el Tribunal apreciar la diligencia de inspección judicial con exhibición de documentos, en la que la demandante no exhibió los documentos solicitados por la entidad crediticia demandada para demostrar la causal de exoneración de responsabilidad propuesta con base en la culpa o dolo de la representante legal de la parte actora, ni le fueron permitidos luego dichos documentos a los peritos designados en el proceso. Al no existir oposición ni justificación a su actuación, procedía entonces el tercer por ciertos los hechos que se proponía probar quien pidió la exhibición; y la falta de colaboración con los peritos constituye indicio en contra, consecuencias ambas ignoradas por el Tribunal.

Los errores del Tribunal no solo fueron evidentes y ostensibles sino también trascendentes, pues si no hubiese incurrido en ellos, habría prosperado la causal que exime de cualquier responsabilidad al BANCO.

#### IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. El problema de quien debe soportar el daño derivado del cheque falso lo resuelve el inciso primero del artículo 1391 del Código de Comercio, el cual establece que "todo banco es responsable con el cuentacorrentista por el pago que haga de un cheque falso o cuya cantidad se haya alterado, salvo que el cuentacorrentista haya dado lugar a ello por su culpa o la de sus dependientes, factores o representantes", precepto que a su vez guarda armonía con el texto el artículo 732 del mismo cuerpo legal.

Si no hubo culpa del cuentahabiente, el Banco responde, así tampoco hubiese existido culpa de su parte, en aplicación del citado inciso, que refleja los principios generales del derecho de obligaciones, y en especial los que regulan la asignación. "Según esos principios, el librado debe sufrir el daño cuando paga un cheque cuya firma es falsa, por que el librado solo está autorizado para pagar los cheques emitidos por el librador. Es inherente al tráfico bancario de cheques el peligro de que se presenten cheques falsificados, y el perjuicio de tener que pagarlos se compensa con el lucro que obtiene el banco del conjunto de operaciones que realiza... Mas la hipótesis de falta de culpa es puramente teórica. Lo corriente es que hay culpa por alguno de los dos lados. En algunos casos es claro que no deben imputarse al banco las consecuencias del pago, sino al librador como culpable indirecto de ese pago, como cuando la falsificación se comete por una persona de la cual deba responder conforme a las reglas del derecho Civil". (Joaquín Garrigues, *Contratos Bancarios*, 2a. Edición, Ed. Aguirre, Madrid, 1975, Pág. 521 y ss).

En otros términos, conviene insistir un vez más en que el citado artículo 1391 del Código de Comercio establece quien debe correr con los riesgos de los cheque falsificados, riesgo impuesto por la ley a las entidades financieras quienes, dado el volumen de transacciones que realizan, compensan las pérdidas que los cheques falsificados pueden causar, regla esta que, de acuerdo con las disposiciones recién aludidas, tiene como obvia excepción que la culpa de los hechos recaiga en el cuenta-



rentista o en sus dependientes, factores o representantes. El sistema legal, pues, no ofrece dificultad ninguna para su cabal entendimiento, siempre y cuando se tenga presentes precisos derroteros de doctrina trazados por la jurisprudencia, aun bajo la vigencia de la ley 46 de 1923 (cfr. G.J. Tomo CLII, pág. 526 y siguientes). En efecto, según esta línea de pensamiento que hoy en día encuentra visible reflejo en el artículo 1391 del Código de Comercio, se estima que el ejercicio de la banca de depósito se equipara fundamentalmente al de una empresa comercial que, masivamente, asume a sí y asume los riesgos inherentes a la organización y ejecución del servicio de caja, luego es precisamente en virtud de este principio de la responsabilidad de empresa, cuyos rasgos objetivos no pueden pasar desapercibidos, que el establecimiento bancario asumiendo una prestación tácita de garantía, responde por el pago de cheques objeto de falsificación, ello en el entendido, se repite, que es inherente a la circulación y uso de títulos bancarios de esta índole el peligro de falsificación y el costo económico de tener que pagarlos se compensa sin duda con el lucro que para los bancos reporta el cúmulo de operaciones que en este ámbito llevan a cabo. Pero, asimismo, no deben perderse de vista otros postulados acogidos sin reparo para atemperar el rigor de esta doctrina, habida cuenta que en cuanto ella hace pesar sobre el banco, en su calidad de librado, el riesgo de "falsificación" a base de imputarle responsabilidad objetiva, lo cierto es que esta responsabilidad puede moderarse, e incluso quedar eliminada, si concurre culpa imputable al titular de la cuenta corriente, lo cual significa, como lo dejara sentado la Corte, que "... como la medida de la responsabilidad de un banco por el pago d un cheque falso no se detiene en la culpa sino que alcanza el riesgo creado, no le basta el lleno de las precauciones habituales, sino que es preciso probar algún género de culpa en el titular de la cuenta par que el banco quede libre .." (G.J. Nm. 1943, pág. 73).

En síntesis, cuando la culpa se le atribuye al librador, se le cargará en su cuenta el importe del cheque pagado, mientras que si la responsabilidad ha de recaer sobre el librado de conformidad con los principios recién recapitulados, ese cargo resultará injustificado, y en consecuencia, en cada evento concreto la solución deberá adaptarse a los elementos de hecho concurrentes, de acuerdo con las pruebas producidas para acreditarlos.

2. Partiendo de la anterior consideración, en el caso que ocupa la atención de la Sala, el punto que merece análisis desde la perspectiva que el cargo reseñado ofrece, consiste en determinar si, de acuerdo con la evidencia obrante en los autos, el cuentacorrentista dio ocasión por la falsedad de la cual se hizo objeto a los títulos, al incurrir en culpa él mismo o su representante. Y es de advertir que, en el análisis de los argumentos presentados en la demanda de casación, debe tenerse en cuenta que se pretendió eximir de responsabilidad al BANCO DEL ESTADO, no solo invocando la culpa de la representante legal de la sociedad demandante, sino también la culpa de imputable a esta última.

3. Así, del material probatorio allegado al proceso, resulta indiscutible que la sociedad COMERCIALIZADORA EL ESFUERZO S.A., no desconoce que la falsificación se produjo por la actuación, por lo menos culposa, de su representante.

Eso lo pone de manifiesto el Acta # 36 de febrero 4 de 1988 de la Junta Directiva de la Sociedad donde se dice que la empresa tuvo un desfalcó por el valor correspondiente a los cheques que fueron girados por la señora Coral, quien se ausentó de su trabajo después de girar dichos títulos a su nombre y en el de terceros, cheques que no contaban con respaldo en su causa por parte de la empresa. Apartes de dicha Acta confirman lo anterior: "En vista del hurto y abuso de confianza cometido por la gerente Gloria Patricia Coral González, quien auxiliándose con la falsificación de la firma de la contadora Mercedes Otero Reyes sustrajo de los fondos de la sociedad a través del Banco del Estado, una suma que hasta la fecha se ha concretado en \$7.490.000, decidió por unanimidad la Junta destituirle de todas sus funciones..." Aunque en dicha acta se utilizan términos que habrían exigido demostración judicial para determinar el dolo, del sentido general se colige que la empresa nunca autorizó el giro de tales cheques, los cuales como bien puede observarse en los títulos, tuvieron como primera beneficiaria a la señalada representante.

El desacuerdo de la empresa con la actitud de su representante se verifica también en la declaración rendida por el Dr. Harold Zúñiga Dishington durante la inspección judicial con intervención de peritos, quien afirmó: "Si mal no recuerdo el día siguiente al cobro de un cheque por siete millones de pesos por Gloria Patricia Coral que era la Gerente yo le formulé un denuncia penal por falsedad y hurto o por

abuso de confianza porque verificamos con la contadora de la compañía sustracción de fondos."

Queda claro, pues, que al girar estos cheques la gerente antepuso los intereses propios y de terceros sobre los intereses de la sociedad y sus socios, quebrando sus deberes fiduciarios de lealtad para con la empresa. No actuó entonces con el cuidado y la diligencia necesarias para preservar el patrimonio social. Con su culpa, por lo menos, permitió que se falsificara la firma de Mercedes Otero, ello aparte de que la misma Gloria Patricia Coral no solo realizó actos extraños al objeto social de la compañía, excediendo los límites previstos en sus estatutos, sino que descuidó, como le correspondía, la protección que ha debido dar a los activos sociales, ello con el resultado de colocar a la sociedad en situación de indefensión para poder hacerle frente con éxito a las excepciones propuestas en la contestación de la demanda por el banco librado.

4. En el caso del que este expediente da razón, tal y como lo señala el casacionista, no solo existe la actitud culposa de la representante, sino de la misma empresa, en la vigilancia de sus empleados. El haber actuado la representante por fuera de los negocios que constituye el objeto social de la sociedad, se debió al incumplimiento de la sociedad en su obligación de cuidado o diligencia en la vigilancia de su administradora. Factores determinantes lo demuestran: por un lado, la advertencia que hizo el contador sobre los problemas que se estaban presentando en relación con la caja menor que manejaba la representante, advertencia presentada en forma tan seria que, al no ser oída, el contador prefirió renunciar. Y por otro lado, el hecho de permitir a los representantes legales descuidar el cumplimiento de las órdenes dadas por la justicia por que le exhibieran el libro de actas de Junta Directiva y el libro de correspondencia.

Estos dos elementos encuentran soporte probatorio en el memorial enviado por los peritos que obra a folio 87 del cuaderno principal donde textualmente se expresó: "nos hemos trasladado dos veces a las instalaciones de Comercializadora El Esfuerzo S.A., con el fin de inspeccionar los libros de contabilidad, libro de actas de Junta Directiva y la correspondencia general del año 1987, documentos que quedó el representante judicial, doctor Harold Zúñiga, de poner a nuestra disposición, sin que hasta el momento lo haya hecho." Y a folio 4 del cuaderno de pruebas N.º 2, donde se encuentra la declaración del señor contador Germán Ramírez, quien

asevera: "...personalmente efectuaba arqueos de caja menor cuando trabajaba en la compañía a las personas que manejaban la gerencia que a su vez eran las encargadas de la caja menor. En dos arqueos consecutivos encontré faltantes uno de ellos por la suma de \$12.000.00 pesos m.c. Est situación se la informé por escrito al señor Pontón con copia al revisor fiscal señor Rafael González, para que tomar las medidas conducentes y corrigieran esta anomalía, situación que nunca fue corregida. Personalmente le expliqué al señor Pontón en su oficio la forma como utilizaba los dineros de caja menor sin autorización de la Junta Directiva ni de la revisoría fiscal, de esta anomalía tampoco le pusieron remedio. En vista de lo anterior y de que se le estaba dando respaldo a la gerencia renuncié al cargo." Cabe resaltar que la carta a la que alude el deponente Ramírez fue solicitada como prueba en la contestación de la demanda (F. 53 del cuaderno principal) y decretada por el juez en dos oportunidades (F. 56 y 83), sin que se hubiera logrado obtener, razón por la cual catalogarse esta situación como indicio en contra del reuente, en este caso de la empresa, al tenor de lo dispuesto en los artículos 249 y 285 del Código de Procedimiento Civil.

*Frente a estas circunstancias, no puede decirse en el presente caso, entonces, que por el hecho de no haberse probado la "sindicación" de dolo en la conducta de quien giró los cheques falsificando uno de las firmas, no se haya incurrido en falta imputable a la entidad titular de la cuenta corriente, quien según queda visto, no procedió con la debida diligencia para impedir los abusos o culpas de su representantes, empleados o dependientes encargados de la custodia o servicio de los cheques en cuestión, lo que da lugar a que por dicha entidad queden incumplidos los compromisos por ella asumidos frente al banco por virtud de la celebración del contrato de cuenta corriente. Y por lo tanto, al no ver esto que constituye una realidad cuya existencia el informativo demuestra por fuera de toda duda, el fallo impugnado, en cuanto refleja una desfiguración de los elementos de prueba señalados que llevó por añadidura a una evidente desviación del juzgador colegiado en la percepción de los hechos relevantes en punto de demostrar la culpa en que incurrió la actora y por ende la exoneración de responsabilidad aducida por el BANCO DEL ESTADO en su escrito de contestación de la demanda, quebrantó indirectamente el artículo 1391 del Código de Comercio.*

5. En conclusión, por considerar la Corte que el Tribunal incurrió en error en la contemplación objetiva de las pruebas aportadas al proceso,

*pruebas que, se repite, acreditan culpa exclusiva de la Sociedad COMERCIALIZADORA EL ESFUERZO S.A. y la de su representante en la ocurrencia del hecho de la falsificación de los cheques citados, encuentra fundado el cargo primero formulado contra la sentencia objeto de recurso, sentencia esta que debe por lo tanto ser infirmada para, en sede de apelación y con apoyo en iguales motivos a la que le abrieron paso a la impugnación deducida, revocar asimismo la providencia estimatoria que al proceso le puso fin en primer instancia.*

### DECISIÓN

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de fecha (29) de septiembre de 1992, para poner fin al proceso ordinario de la referencia, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Y actuando en sede de instancia, atendiendo las razones dadas en la parte expositiva de esta providencia, REVOCA asimismo la sentencia proferida con fecha veinticuatro (24) de marzo de 1992 por el Juzgado 11 Civil del Circuito de Cali, resolviendo en su lugar desestimar la totalidad de las pretensiones contenidas en la demanda.

Las costas en ambas instancias son de cargo de la parte demandante. Sin costas en casación ante la prosperidad del recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase la actuación al tribunal de origen.

*Pedro Lafont Pianetta, Nicolas Bechara Simancas, Eduardo García Sarmiento, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra.*

**RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL -**  
**Presupuestos / CULPA / RESPONSABILIDAD**  
**EXTRA CONTRACTUAL - Actividad Peligrosa / DAÑO**

1. Presupuestos que dan lugar a configurar la responsabilidad civil por culpa aquiliana.
2. Concepto de culpa. Culpa causada en actividades peligrosas: Distinción entre la culpa concurrente y la culpa exclusiva de la víctima.
3. Concepto de daño. El daño se extiende no solo a las personas que dependían de la víctima sino también a los bienes.
4. Respecto del daño causado con una actividad peligrosa por la ley se presume la culpabilidad no sólo del conductor sino del dueño y empresario de la cosa con la cual se ocasionó el perjuicio.  
E. F.: C.C. Art.: 2341, 2356 *Ibidem*.

Igual sentido: G.J., t. CXLII, pág. 188. Sent. del 18 de mayo de 1972

**PERJUICIO - Legitimación / RESPONSABILIDAD**  
**EXTRA CONTRACTUAL - Legitimación /**  
**MATRIMONIO / TERCERO**  
**RESPONSABLE / UNION MARITAL**  
**DE HECHO / FAMILIA.**

- 1) El reclamante del resarcimiento debe tener legitimación activa para deprecicar la condena al responsable, entendiéndose que tiene legitimación en cuanto se le vulneró o lesionó un derecho por existir norma jurídica que le garantiza una facultad de exigencia de satisfacción de un comportamiento o de una prestación de la que se ve pri



vida por causa de hecho dañoso.

Igual sentido: Sentencia de Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia del 8 de abril de 1960 (G.J.T. XCII, pág. 771).

2) Legitimación del cónyuge sobreviviente para reclamar del tercero responsable el resarcimiento del daño padecido por la muerte de su consorte.

3) Tratamiento dado en el derecho comparado, en la legislación nacional y en la jurisprudencia nacional respecto de la posibilidad de reconocimiento del derecho del concubino a reclamar del otro ciertos comportamientos o prestaciones. Trascendencia Jurídica de la unión marital de hecho.

Igual sentido: Sentencia del 23 de marzo de 1985 del Tribunal Supremo Español; Sentencia del 13 de septiembre de 1948, Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, G.J. LXIV, pág. 632; sentencias del 11 de noviembre de 1992 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal; Sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera del 29 de abril de 1980 - Exp.: No. 2506, del 29 de noviembre de 1991 - Exp.: No. 2506, del 29 de noviembre de 1991 - Exp. 6487 y 21 de enero de 1994 - Exp. 7955; Sala de Revisión de Tutela de la Corte Constitucional, sentencias del 12 de agosto de 1993 (T. 326, no publicada) y del 10 de noviembre del mismo año (T. 517 N.P.) y sentencia del 8 de junio de 1993 (T. 212 N.P.) de la misma corporación; Sentencia de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia del 8 de abril de 1960 (G.J.T. XCII, pág. 771).

4) La Carta protege la familia extramatrimonial en cuanto lleve las características de la familia matrimonial, pudiendo afirmarse que para serlo solamente faltaría el vínculo conyugal.

5) No es realmente el vínculo de parentesco o conyugal el factor determinante de la legitimación activa para reclamar la indemnización. Supuestos necesarios para configurar dicho derecho.

F.P.: C.C. Art.: 2341; C.FLIA.BOLIVIA Art.: 3159; C.C. PERUANO Art.: 369; C.C. ESPAÑOL Art.: 1902; Ley Num.: 90 Año: 1946 Art.: 54; Ley Num.: 90 AÑO: 1946 ART.: 55; Ley Num.: 100 Año: 1993 Art.: 47; Art.: 163; C.C. Art.: 329; Ley Num.: 54 Año: 1990; C.N. Art.: 42.

## **DICTAMEN PERICIAL**

Cuándo se considera que existe un dictamen pericial fundamentado?

### **DINERO / DAÑO EMERGENTE / EQUIDAD / INTERÉS LEGAL / ANALOGÍA**

Tratándose de sumas de dinero, como daño emergente que no esté demostrada la inversión que podría dársele, la equidad impone calcular como rendimiento que el dinero habría podido producir, el mínimo señalado por la ley, esto es el interés del 6% anual, conforme con el artículo 1617 del Código Civil, aplicable para el efecto por analogía.

Igual sentido: Sentencias del 1o. de junio de 1957 (G.J.T. LXXV, pág. 588), del 8 de julio de 1964 (G.J.T. CVIII, pág. 296) y del 5 de noviembre de 1964 (G.J., T. CIX, pág. 542) dictadas por la Sala de Negocios Generales.

R.F.: C.C. Art.: 1617.

### **MENOR / CAPACIDAD LABORAL / PERJUICIO / DAÑO**

1) Cuando hay menores con capacidad laboral futura, la jurisprudencia nacional, ha optado por indemnizarlos hasta el día en que estén en condiciones de obtener empleo y si no hay pruebas al respecto se presume que el auxilio se habría prestado hasta cuando éstos cumplieran 18 años.

Igual sentido: 2 de julio de 1968, Anales, T. LXXV, pág. 324; 27 de marzo de 1981, Anales, T.C., pág. 403.

2) Es muy difícil hallar un equivalente exacto entre el monto de la indemnización y el daño.

Igual sentido: G.J. T. XCVI, pág. 690.

### **PERJUICIO MORAL - Prueba**

En lo que atañe a los perjuicios morales, no es suficiente demostrar un vínculo determinado con la persona de quien se dependía económicamente, por ejemplo cónyuge, compañero permanente,



padres e hijos, sino que es necesario probar por lo menos con hechos indiciarios que realmente existía una situación afectiva, sentimental, moral,, de tal intensidad, que al producirse la muerte esa situación resultaba gravemente afectada y debía presumirse que causa una aflicción.

Igual sentido: S. 28 de febrero de 1990.

### DEBER DEL JUZGADOR / PRUEBAS - Valoración en Conjunto

El juzgador tiene que valorar en conjunto las pruebas.

### AFILIACION / VEHICULO AUTOMOTOR / RESPONSABILIDAD

El solo hecho de estar afiliado un vehículo a determinada sociedad, implica que ésta en principio soporte alguna responsabilidad y tenga algún control sobre el vehículo.

Igual sentido: CLII, 73; sentencia del 1º. de febrero de 1991.

### TRANSPORTE

Las empresas de transporte en principio gozan de autonomía para seleccionar el personal de conductores.

F. F.: LEY Num.: 15 Año: 1959.

*Corte Suprema de Justicia — Sala de Casación Civil - Santafé de Bogotá*  
D. C., veinticinco (25) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Magistrado Ponente: *Dr. Eduardo García Sarmiento*

Referencia: Expediente No. 3000.

Sentencia 130

Casado el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín proferido el 1º. de marzo de 1994) en el proceso ordinario iniciado por RITO ANTONIO AVILA LOPEZ, NÚMAR OBEIMAR NÚÑEZ, ARCE, ALBERTO IVAN BETANCUR MESA, MARLENY SERRANO en nombre propio en representación de sus hijos menores BARBARA, MAR-

THA CECILIA y OBER YESID NUÑEZ SERRANO, ESTHER JULIA CASTILLO OREJUELA en nombre propio en representación de sus hijos menores DIEGO FERNANDO, CARLOS ENRIQUE y JAVIER NUÑEZ CASTILLO, frente a JOSE LIBORIO MEJIA GIL, LUIS EDUARDO TORO BETANCUR y la SOCIEDAD COLOMBIANA DE DISTRIBUCION LIMITADA, procede la Corte Suprema de Justicia, actuando en sede de instancia, a dictar la correspondiente sentencia sustantiva.

### *1 ANTECEDENTES*

1. Asistidos por procurador judicial los demandantes nombrados, citaron a los demandados a proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual de mayor cuantía, ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín, para que se les declarase "civilmente responsables en forma solidaria, por el accidente de tránsito ocurrido en la noche del 26 de agosto de 1984..." y consecuentemente se les condenase al pago de las indemnizaciones por perjuicios morales, materiales, frutos e intereses.

2. La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen a continuación:

2.1. El vehículo tracto camión marca Volvo, modelo 1979 de placas SN-3427, salió de Palmira (Valle) cargado con 20 toneladas de azúcar para ser transportada a Cartagena entre las 10.30 y 11.30 p.m. del día 26 de agosto de 1984, conducido por Alirio Núñez. A la altura del kilómetro 37 de la carretera que de Medellín conduce a la Costa, fue golpeado en forma intempestiva por el vehículo marca Ford modelo 1971 de placas TK-0065, que descendía a gran velocidad en dirección opuesta, por el mismo carril que le correspondía al automotor que ascendía; como consecuencia de la colisión murieron Alirio Núñez, conductor y José Obeimar Núñez, ayudante del vehículo de placas SN-3427, se destruyó totalmente este automotor y su carga, y se lesionó de gravedad Alberto Iván Betancur Mesa quien viajaba en el vehículo de placas TK-0065.

2.2. El vehículo camión Volvo era de propiedad de Rito Antonio Avila López, afiliado a la empresa Rápido Humadea Ltda.; la tractomula Ford era de propiedad de José Liborio Mejía Gil, afiliada a la Sociedad Colombiana de distribución limitada y era conducida por Luis Eduardo Toro Betancur, "quien con la agravante de estar manejando en avanzaño

estado de embriaguez, lo hacía con exceso de velocidad y en el lugar del accidente en vez de descender haciéndolo en curva, lo hizo en línea recta, esto es quitándole la vía al carro que ascendía...”.

2.3. Los fallecidos Alirio y José Obeimar Núñez a la época del fallecimiento, contaban 39 y 41 años de edad y “gozaban de excelente estado de salud”; Alirio Núñez tenía para la época del fallecimiento ingreso mensual de \$45.000,00 aproximadamente, según el contrato verbal de trabajo celebrado con Rito Antonio Avila López, discriminado de la siguiente manera, \$30.000,00 mensuales como base, más un 10% del producido bruto que mensualmente dejara el carro, y de este porcentaje debía sacar el sueldo del ayudante; el vehículo SN-3427 para la época del accidente dejaba un producido bruto por mes entre \$550.000,00 y 600.000,00, del 10%, el 7% era para pagar al ayudante y el 3% destinado a reajustar el salario del conductor; el ayudante del vehículo SN-3427, José Obeimar Núñez devengaba para la época del fallecimiento \$40.000,00 mensuales.

2.4. El conductor Alirio Núñez vivía en unión libre con Esther Julia Castillo Orejuela desde hacía 18 años y en tal unión procrearon a Diego Fernando, Carlos Enrique y Alex Javier Núñez Castillo de 16, 14 y 9 años de edad respectivamente; por su parte el ayudante José Obeimar Núñez vivía en unión libre con Marleny Serrano desde hacía 22 años y en tal unión procrearon a Bárbara, Martha Cecilia y Ober Yesid Núñez Serrano de 17, 16 y 14 años de edad respectivamente. Dicha persona también tuvo relaciones sexuales extramatrimoniales con Romelia Arce O. de las cuales se procreó Numar Obeimar Núñez Arce, “quien mantenía una estrecha relación de afecto con su padre”.

2.5. “Con el producto de los ingresos de los fallecidos Alirio y José Obeimar Núñez sostenían a sus familias sin que éstas tuvieran otros ingresos...”, ya que proporcionaban todo para los gastos de alimentación, vestuario y educación.

2.6. Alberto Iván Botancur Mesa para la época que sufrió el accidente tenía ingreso mensual de \$20.000,00, se dedicaba a la agricultura como jornalero.

2.7. El vehículo de placas SN-3427 para la época del siniestro, tenía

un valor comercial aproximado de \$11.000.000,00 y su destrucción fue total; ocasionándole a Rito Antonio Avila López no solo perjuicios materiales sino morales ya "que era en sí el único patrimonio que tenía para su sostenimiento y el de su familia, a esto se agrega que había vendido una casa de habitación de Bogotá para completar la adquisición del vehículo...".

3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín por auto del 11 de agosto de 1986 inadmitió la demanda porque no se estimó la cuantía de los perjuicios cuyo reconocimiento se solicita (fl. 52). Subsanado lo anterior por auto del 28 del mismo mes y año se admitió y se ordenó las notificaciones y traslados a los demandados, así como la inscripción de la demanda en las oficinas de Transportes y Tránsito de Itagüí (fl. 56).

4. El demandado Lais Eduardo Toro Betancur fue notificado el 19 de septiembre de 1986 (fl. 63), la sociedad "Colombiana de Distribución Ltda.", representada por José Bernardo Agudelo Restrepo, se notificó el 6 de octubre de 1986 (fl. 69) y José Liborio Mejía Gil lo hizo por conducta concluyente conforme con el auto del 3 de diciembre de ese mismo año (fl. 89).

5. La sociedad «Colombiana de Distribución Ltda.», por intermedio de apoderado judicial, manifestó no constarle algunos hechos y a otros que se probaran; propuso las excepciones que denominó "Inexistencia de Solidaridad" e "Inexistencia de la obligación", que apoyó "en el hecho de que la afiliación de vehículos es un requisito de índole puramente administrativo exigido por el INTRA para otorgar la licencia de funcionamiento... del hecho de la afiliación no puede deducirse la existencia de la responsabilidad extracontractual que se deriva de los hechos o daños causados por personas que se hallan al cuidado de otra, responsabilidad indirecta, ya que no le era dable a COLOMBIANA DE DISTRIBUCION ejercer tutela alguna así fuera de índole meramente jurídica, ni sobre el conductor, ni sobre el vehículo con el cual se produjo el siniestro..." (Fls. 75 a 78).

5.1. El demandado José Liborio Mejía Gil, por intermedio de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones y en cuanto a los hechos dijo que debían probarse, exponiendo sus puntos de vista relacionados con las manifestaciones de los actores, además de proponer excepciones de

fondo que denominó "REDUCCION DE LA INDEMNIZACION A QUE HUBIERE LUGAR EN EL HIPOTETICO CASO DE UNA CONDENA ADVERSA A MI REPRESENTADO". "CAUSA EXTRAÑA", "CONVERGENCIA DE CULPA", "NO INTENCIONALIDAD DE CAUSAR DAÑO", "INEXISTENCIA DE CULPA", "FALTA DE ACREDITAR EN EL DEMANDADO RESPONSABILIDAD POR LA ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD POR EL COMPORTAMIENTO", "FALTA DE ESTABLECER QUIEN TIENE O TENIA LA CUSTODIA DEL CARRUAJE AL MOMENTO DE LA COLISION", "FALTA DE DEMOSTRACION DE LA CAUSA". "LA VICTIMA DEBE PROBAR LA PELIGROSIDAD DE LA ACTIVIDAD", "COMPENSACION DE CULPA", "FALTA DE CAUSA PARA PEDIR", y "LA FALTA DE CAPACIDAD PARA ELLO". (FLS. 90 A 102. Mayúsculas del texto).

5.2. El demandado Luis Eduardo Toro Betancur, no dio contestación a la demanda.

6. La parte demandante en escrito del 24 de enero de 1987 (fls. 104 a 108 v), presentó adición de demanda, a fin de que se tuvieran, decretaran y practicaran algunas pruebas tendientes a demostrar el valor de las pretensiones y los hechos que le sirven de sustento jurídico. Dicha adición fue admitida, ordenando el juzgado correr traslado a los demandados (fl. 109); al llamado sólo el demandado José Liborio Mejía Gil respondió (fls. 113 a 116).

7. Rituado el proceso con las formalidades de rigor, el Juzgado 2o. Civil del Circuito de Medellín, en sentencia del 7 de junio de 1989 (fls. 175 a 187, c. 1 Juzgado) declaró: "1o.) Civil y solidariamente responsables a los demandados Luis Eduardo Toro Betancur, José Liborio Mejía Gil a la Sociedad Colombiana de Distribución Limitada, en su condición de conductor, propietario y afiliadora del vehículo de placas TK-10065, respectivamente, por los daños ocasionados en accidente de tránsito al vehículo de placa SN-3427, de propiedad de Rito Antonio Avila López, por su destrucción total, y el fallecimiento del conductor y ayudante, en su orden Alirio y José Obeimar Núñez conforme con los hechos ocurridos el día 26 de agosto de 1984..."

2o.) Condenó a los demandados solidariamente a pagar daños, así:

a) Rito Antonio Avila López, por daño emergente	\$ 9'000.00
lucro cesante	\$ 7'788.960
Total:	\$ 16'788.960
b) Diego Fernando Núñez Castillo	\$ 330.386,66
Carlos Enrique Núñez Castillo	\$ 337.948,33
Alex Javier Núñez Castillo	337.948,33
Por concepto de indemnización consolidada	1'006.283,82
c) "por indemnización futuro en favor de:	
Carlos Enrique Núñez Castillo	\$328.082,88
Alex Javier Núñez Castillo	\$ 332.589,37
Subtotal:	\$ 660.672,25
d) "Indemnización consolidada" en favor de:	
Bárbara Núñez Serrano	\$118.964,99
Martha Cecilia Núñez Serrano	\$167.763,74
Ober Yesid Núñez Serrano	\$ 167.763,74
Subtotal:	\$454.492,47
3) "Indemnización futura" en favor de:	
Martha Cecilia Núñez Serrano	\$ 155.506,61
Ober Yesid Núñez Serrano	\$ 163.655,39
Total:	\$ 319.162,00

"F) Estímase en la suma de \$300.000 el valor por concepto de daño moral subjetivado para cada una de las siguientes personas": Diego Fernando, Carlos Enrique, Alex Javier Núñez Castillo, Bárbara, Martha Cecilia, Ober Yesid Núñez Serrano y Namar Obeimar Núñez Arco.

"3o.) Ajústese los anteriores valores en su corrección monetaria del 21% anual e interés legal del 6% anual, desde el día 31 de mayo de 1988, fecha hasta la cual fue debidamente tasado el interés técnico por los auxiliares de la justicia, hasta cuando se efectúe su pago, previa regulación del artículo 308 del Código de Procedimiento Civil".

"4o.) No se accede a las otras declaraciones solicitadas por la parte rectora".

"5o.) Declárase no probadas las excepciones propuestas".

"6o.) Condénase en costas del proceso a la parte demandada, reducidas a un 80%..."

8. Apelaron de la sentencia el demandado José Liborio Mejía Gil (fls. 189 a 209) y los demandantes "a fin de que la misma sea reformada por el a-quen (sic), en los puntos 2o., 3o., 6o. de la parte resolutive y revocada en su numeral 4o. de la misma" (fls. 210 a 215). En forma adhesiva apeló la sociedad demandada "Colombiana de Distribución Ltda." (fls. 4 a 17, c. 5 Tribunal).

9. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín desató la alzada mediante fallo del 1o. de marzo de 1990 en el que se revocó la sentencia del a quo y, en su lugar, absolvió a la parte demandada, levantó la inscripción de la demanda y condenó en costas de ambas instancias a la parte demandante (fls. 102 a 112, c. 5 Tribunal). Salvo el voto uno de los competentes de la Sala (fls. 113 a 131).

10. Recurrida en casación por la parte actora la sentencia del Tribunal, la Corte Suprema de Justicia mediante pronunciamiento proferido el 29 de octubre de 1991 (fls. 72 a 105, c. Corte), CASO la sentencia impugnada y decretó pruebas de oficio. Practicadas éstas, se procede entonces a dictar la sentencia sustitutiva correspondiente, resolviendo la apelación de los demandantes quienes solicitan se reformen los ordinales 2o, 3o y 6o del pronunciamiento de primer grado y se revoque el 4o. Por su parte los demandado José Liborio Mejía Gil y "Colombiana de Distribución Ltda." solicitan se revoque en su integridad.

## II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

11. Se encuentran cumplidos los presupuestos procesales y no se observa causal de invalidez de lo actuado, por lo que procede dictar sentencia de mérito.

*12. Los antecedentes relatados demuestran inequívocamente que el sub iudice gira alrededor de la responsabilidad civil por culpa aquiliana de que trata el Título XXXIV, Libro 4o., artículos 2341 y siguientes del*



Código Civil. Se consagran en el artículo citado los hechos ilícitos como fuente de la obligación de reparar los daños que producen. Han entendido la doctrina y la jurisprudencia, que generalmente tres son los presupuestos que dan lugar a configurar dicha responsabilidad, esto es la culpa, el daño y la relación de causalidad necesaria entre aquélla y éste.

13. La culpa, como elemento configurante de responsabilidad, se ha dicho que es la conducta contraria a la que debiera haberse observado normalmente en el caso, ya por torpeza, ignorancia o imprevisión. Son sujetos de esta tanto las personas naturales como las jurídicas, y, por ende, imputables de la correspondiente responsabilidad que su conducta pueda causar.

13.1. Ahora bien, si corrientemente corresponde a quien la imputa demostrar la culpa, en virtud de ciertas actividades que por su propia naturaleza se consideran peligrosas se exige una peculiar diligencia en quien las ejecuta, la ley presume que si con una actividad de esta índole se causa un daño, lo ha sido por culpa del autor. En esas circunstancias, la persona perjudicada no tiene la carga de probar la culpa. Esa es, para este caso, la materia a que el artículo 2356 del C. C. se contrae. En tales hipótesis el autor del daño es quien, para liberarse de su responsabilidad, tiene la carga de probar el hecho extraño a la culpa exclusiva de la víctima. Cuando el daño se dice que ha sido causado por actividades peligrosas de las dos partes, es necesario determinar la de cuál parte es prevalente o si la de una parte absorbe por decirlo así, la culpa menor, pues si fue la del autor del daño la prevalente o mayor, asume plenamente la responsabilidad menor, mientras que si lo fue exclusivamente la de la víctima, lógicamente se libera el autor, y si fue por la culpa de las dos partes habrá que regular, según la intensidad de sus culpas, la responsabilidad del autor ya para compensar los efectos de las culpas, o ya para disminuir su responsabilidad. Desde luego son las pruebas las que deben servir para la justa solución.

14. El daño es el perjuicio que ha resultado de la culpa; es el elemento determinante de la responsabilidad en favor de la víctima, que opera cuando ésta fallece, sufre incapacidad física o mental, o inactividad productiva, que redunde y afecte aquellas personas que dependían económicamente del damnificado principal del daño. El daño se extiende no solo a las personas que dependían de la víctima sino también a los bienes. Es decir,



*quien sufre los perjuicios tiene que ser indemnizado totalmente.*

*De otro lado, no solo los daños materiales, avaluables en dinero, deben ser resarcidos, será también del daño moral o de afección, que civilmente queda al arbitrium iudicis su valoración, conforme con las bases que racional y lógicamente determinen su existencia, como el parentesco y su grado.*

*15. El nexo de causalidad también debe configurarse como factor de la responsabilidad, es decir, debe existir necesariamente relación entre la culpa y el daño, lo cual debe ser probado, como que puede ocurrir que aun habiendo culpa no se cause daño, amén de que éste no puede ser eventual sino real.*

16. En orden a establecer los anteriores presupuestos, obran en el plenario las siguientes pruebas:

16.1. Interrogatorio de parte del conductor del vehículo autor del daño, demandado LUIS EDUARDO TORO BETANCUR (fls. 71 a 72 v., c. 2), quien manifestó que el día 26 de agosto de 1984 conducía una tracción color rojo, de propiedad de José Liborio Mejía, Nata, capacidad 30 toneladas carrocería furgón, y que cuando transitaba tipo 10 de la noche Barranquilla Medellín, se estrelló con otro vehículo. Negó haber ingerido bebidas alcohólicas y haber dialogado con persona alguna en el estadero ni en el trayecto anterior al accidente.

16.2 Testimonio de JOAQUIN NORBERTO VALENCIA AGUDELO (fls. 79 a 82, c. 2), quien para la época del accidente se desempeñaba como Inspector Municipal de Policía y al respecto narró que la noche del 26 o 27 de agosto de 1981, a eso de la una de la madrugada, aproximadamente, tuvo conocimiento que en el sitio conocido como 'Cestillal'... habían colisionado dos vehículos automotores de los cuales, al parecer, había fallecido dos personas. En tal virtud y en asesoría de agentes de policía me trasladé a dicho lugar y me encontré con que los dos vehículos se encontraban incendiados... y en la búsqueda minuciosa se detectaron los cuerpos calcinados de dos personas, como era de mi competencia procedí a realizar el respectivo levantamiento de los cadáveres... escuché rumores de que los vehículos... era un camión y un tractomula... Con respecto al accidente se vislumbra que el vehículo tractomula bajaba a

gran velocidad y que al tratar de cortar una curva no lo pudo hacer quizá por la misma velocidad y se precipitó contra el camión. Este vehículo, camión, en el sitio donde colisionaron le quedaba imposible desquitar (sic) el golpe por cuanto al lado derecho subiendo se encontraba un árbol de eucalipto el cual quedó quemado... y sobre dicho sector se encuentra un abismo y si el camión hubiera tratado de maniobrar para esquivar el golpe se hubiera precipitado allí. El informe que yo tuve allí sobre las causas del accidente fue que las causas fueron el exceso de velocidad del conductor del vehículo tractoromula que bajaba. Cabe resaltar que por rumores... manifestaban que el conductor de la tractoromula había estado ingiriendo licor en un estadero cercano al municipio de Don Matías. También que antes de producirse la colisión, unos cincuenta metros más arriba el mismo tractoromula casi choca con otro vehículo... conducido por ALFONSO BARRIENTOS, al parecer chocó con él pero la colisión no fue fuerte, fue un roce...". Los cadáveres —respondió— quedaron "totalmente irreconocibles... fueron hallados en el interior de la cabina del vehículo tipo camión". Sobre este automotor dijo que "se encontraba (la cabina) totalmente calcinada, quemada, no se veía, eso quedó totalmente quemado y quedó arrugada por el impacto. Tanto es así que uno de los cadáveres, al parecer el del conductor, quedó presionado con la cabilla del vehículo...". Al preguntársele sobre el estado del camión, respondió: "Eso no quedó sirviendo para nada, totalmente destruido". Este testimonio proviene de un funcionario público a la fecha del suceso, de modo que por su oficio y competencia policial puede emitir opiniones de utilidad para la solución del litigio.

16.3. Testimonio de RAUL HERNANDO OSORNO BERRIO (fs. 96 a 97v.), quien al ser interrogado si el día 26 de agosto de 1981 permaneció en el estadero el "conductor de la tractoromula que más adelante se accidentó", contestó: "El conductor estuvo un rato, haciendo una parranda y se tomó unos aguardientes, pero son cosas que uno no cuenta cuánto se toma una persona... El prácticamente llegó al estadero borracho y del estadero salió borracho y un muchacho que llamamos hijo de Tito, no le sé el nombre le dijo que si lo llevaba y él le dijo que sí que se mortara y se fueron juntos... me di cuenta del accidente"; narró que al otro día viajó a Medellín, siendo el mismo carro accidentado el que había estado en el estadero. Informó, así mismo, que a Alberto Iván Betancur, o conocido de vista y a toda la familia "era una persona que actuaba normalmente y era un tipo muy trabajador" ... por él trabajó con Reinaldo Osorno y Angel

Builes: después del accidente quedó que no sabía que era lo que hacía... era un tipo inestable y en la forma de actuar era como un tipo anormal...". Preguntado si el conductor Luis Eduardo Toro recogió en el estadero a ALBERTO IVAN BETANCUR MESA, añadió: "Sí me consta, yo personalmente lo vi montar al carro"; preguntado sobre la personalidad de Alberto Iván Betancur Mesa antes y después del accidente, dijo: "Generalmente era un tipo de buena conducta, en cuanto trabajo y en cuanto todo, después del accidente le quedó la cara deforme, inclusive creo que hasta la cabeza, la nariz torcida...".

16.4 Testimonio de BERNARDO JARAMILLO URIBE (fls. 63 a 65, c. 2), quien se desempeñaba como Juez 13 de Instrucción Criminal al momento del interrogatorio (4 de mayo de 1987). Narró que viajó en las horas de la mañana, sin recordar la fecha, en comisión en carro de la Procuraduría al municipio de Caucaasia, en compañía del Juez 10 de Instrucción, Alberto Gómez (fallecido) y agentes de policía; al llegar al sitio Matasanos encontraron secuelas del accidente del día anterior: "nos dimos cuenta que el choque había sido entre una tractomula que venía del norte a sur, es decir hacia Medellín, y un carro que si no estoy mal era un doble troque que subía, este último carro estaba carbonizado aun salía humo... sí oí un comentario... de que el conductor de la tractomula lo habían visto tomando licor en el alto ce Matasano y que descendía más bien rápido para ese tipo de carro...".

16.5. Testimonio de GERARDO ALFONSO BARRIENTOS MARTINEZ ( fls. 66 a 69). Sobre el accidente narró: "Eso fue entre las diez y media y once de la noche, yo iba adelante con el camión mío... luego iba un carro doble troque detrás de mí y yo me le entré en la curva y me encontré una tractomula, a mí me dio un golpe la mula pues venía por todo el centro de la carretera, entonces yo me le alcancé a salir fuera de la calzada, entonces como el doble troque iba aquí en toda la curva le dio el impacto, luego lo atrapó con la cebada, la tractomula traía cebada, porque claro que yo me imagino que el conductor del doble troque no tenía para donde más salirse. Yo me cuadré afelarrico y entonces a ver si la tractomula paraba y me pagaba los daños a mí y en eso le pegó al doble troque. En ese instante la mula se fue contra el barranco y atrapó con la cebada al doble troque y ahí no volvimos a saber nada del chofer y el ayudante del doble troque. Los carros se incendiaron y se perdieron totalmente, nosotros sacamos el chofer y el ayudante de la tractomula que estaban heridos y los despachos

para acá para Medellín. Claro que en esa confusión yo no les quedé conociendo siquiera...". Contrainterrogado el testigo dio cuenta de otros pormenores del accidente que su memoria alcanzó a desarrollar, teniendo en cuenta que su versión se rindió el 5 de mayo de 1987, casi a los tres años de ocurrencia de los hechos.

16.6. Existe como prueba documental, la constancia del 9 de octubre de 1984 de la Inez 2o. Penal Municipal de Barbosa, instructora del delito de "Homicidio en accidente de tránsito", según la cual "el vehículo de placas SN-3427, tipo tracto camión, marca Volvo, modelo 1979 quedó totalmente destruido (incinerado)" (fl. 19, c. 1 Juzgado), y los certificados de propiedad de los vehículos de placas TK 0065 a nombre de José Liborio Mejía Gil (fl. 17v.) y SN-3427 a nombre de Rito Antonio Avila (fl. 14, c. 1 Juzgado), la afiliación del camión de placa TK 0065 a la sociedad demandada Colombiana de Distribución Ltda. (fl. 74, c. 2), así como los certificados de defunción de Alirio Núñez y José Obeimar Núñez (fls. 8 y 9 c. 1).

16.7. Obran también en el expediente las declaraciones de los testigos Fernando Muñoz Quijano (fl. 149, c. 2 Juzgado), Alirio Rincón Montoya (fl. 165), Gabriel Bastos Naranjo (fl. 169), Arlid Vásquez Quintero (fl. 171), Javier Gómez Cano (fls. 172 a 173), Edgar López (fls. 173v. a 174), Alba Inés Suárez Suárez (fls. 190 a 193v.) y Rayles Cortés Bravo (fls. 200 a 200 v.), quienes depone acerca del conocimiento de los occisos Alirio y José Obeimar Núñez, de sus compañeras permanentes Esther Julia Castillo y Marleny Serrano, de los hijos de cada una de éstas, procreados con los fallecidos en el accidente, de la asistencia moral y económica prodigada por éstos a sus respectivas familias.

16.8. Da testimonio OMAR GONZALEZ SANCHEZ (fls. 175 a 175v.), respecto de Numar Obeimar Núñez Arce, de quien aseveró es hijo extramatrimonial del occiso José Obeimar Núñez y que éste como padre veía por aquél, existiendo por lo tanto dependencia.

17. Según se refiere de las pruebas relacionados, Luis Eduardo Toro Betancur, por acto suyo y en ejercicio de la actividad de conducción del automotor de placas TK-0065, etropello al vehículo de placas SN-3427 y a consecuencia de ellos murieron Alirio y José Obeimar Núñez, sufrió lesiones personales Alberto Iván Betancur Mesa y quedó totalmente destruido el vehículo de propiedad de Rito Antonio Avila López.

18. a prueba testimonial transcrita, en especial la rendida por Bernardo Jaramillo Uribe y Joaquín Norberto Valcagia, el levantamiento del croquis del accidente, el informe policivo y la ratificación de éste por la persona que lo confeccionó, son indicadores de la culpabilidad y responsabilidad del conductor como lo analizó la Corte en la sentencia de casación (fls. 97 a 99, c. Corte) y que conducen a demostrar la ocurrencia del accidente, la afiliación del vehículo tractomula que colisionó al doble troque (fl. 101, c. Corte) y, en consecuencia, a tomar la decisión de recaudar pruebas de oficio para establecer "el valor de los perjuicios materiales, daño emergente y lucro cesante, causados como consecuencia del accidente... a los demandantes..." (fls. 103 y 104, c. Corte).

*Ahora bien, toda vez que el daño se causó con una actividad considerada peligrosa por la ley se presume la culpabilidad no sólo del conductor sino del dueño y empresario de la cosa con la cual se ocasionó el perjuicio. Al punto ha dicho la Corte: "El responsable por el hecho de cosas inanimadas es su guardián, o sea quien tiene sobre ellos el poder de mando, dirección y control independientes. Y no es cierto que el carácter de propietario implique necesaria e ineluctablemente el de guardián, pero sí lo hace presumir como simple atributo del dominio, mientras no se pruebe lo contrario.*

*"De manera que si a determinada persona le prueba ser dueña o empresaria del objetivo con el cual se ocasionó el perjuicio en desarrollo de una actividad peligrosa, tal persona queda cobijada por la presunción de ser guardián de dicho objeto —que desde luego admite prueba en contrario—, pues aun cuando la guarda no es inherente al dominio, si hace presumirlo en quien tiene el carácter de propietario. O sea, la responsabilidad del dueño, por el hecho de las cosas inanimadas, proviene de la calidad que de guardián de ellos presúmese tener.*

*"Y la presunción de ser guardián puede desvanecer la de propietario, si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico, como el de arrendamiento, el de comodato, etc., o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada".*

18.1. De las mencionadas pruebas individual y conjuntamente apreciadas, no se advierte que el daño fuera también por culpa de las víctimas, ni que provenga de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier otra causa o condición eximente o atenuante de la responsabilidad de los demandados. Luego no hay lugar a disminuir la responsabilidad de éstos, puesto que no desvirtuaron la presunción que por ley existe en su contra.

19. Una vez determinados los presupuestos de la responsabilidad civil por culpa aquiliana, procede precisar en primer lugar si las demandantes Esther Julia Castillo Orejuela y Marleny Serrano tienen derecho a reclamar indemnización como compañeras permanentes de Alirio Núñez y José Obeimar Núñez en su orden, así como el derecho de los demás demandantes que alegan depender económicamente de los mencionados fallecidos; y en segundo lugar el criterio para efectos de la regulación del pago de los perjuicios reclamados por los demás demandantes que alegan depender económicamente de los mencionados fallecidos; y en segundo lugar el criterio para efectos de la regulación del pago de los perjuicios reclamados por los demandantes, tanto materiales como morales.

19.1. Respecto del derecho que puedan tener las mencionadas demandantes para ser indemnizadas, es de ver, primeramente, que por intermedio de su apoderado judicial solicitaron en las peticiones Segunda A) y B (fls. 39 y 40, c. 1) el pago de perjuicios morales y materiales tanto presentes como futuros por la muerte de "su compañero permanente", peticiones que apoyaron en que para la época del fallecimiento de los nombrados compañeros vivían en unión libre. "Esther Julia con Alirio, desde hacía más de 18 años, habiendo procreado a Diego Fernando de 16 años, Carlos Enrique de 14 y Alex Javier de 9" (hecho 90, fl. 43), y "Marleny con José Obeimar, desde hacía más de 22 años; habiendo procreado a Bárbara de 17 años, Martha Cecilia de 16 y Ober Yezid de 14" (hecho 10 folio 43).

19.2. con la demanda se acompañaron las copias de las actas de registro de nacimiento de Diego Fernando (fl. 4 c. 1), Carlos Enrique (fl. 5 ib) y Alex Javier Núñez Castillo (fl. 7). En dichas actas aparece que los hijos mencionados lo son de Alirio Núñez y Esther Julia Castillo Orejuela. Con todo únicamente Alex Javier fue reconocido por su progenitor.

Del mismo modo, obra en autos las copias de las actas de registro de



nacimiento de Bárbara (fl. 2 c. 1), Martha Cecilia (fl. 3 ib.), y Ober Yezid Núñez Serrano (fl. 6 eje.). Según estas actas consta que los mencionados hijos lo son de José Obeimar Núñez y Marleny Serrano. No obstante, únicamente aparece reconocida Martha Cecilia (fl. 111, c. corte).

19.3. Los testigos Fernando Muñoz Quijano (fl. 149, c. 2), Alirio Rincón Montoya (fl. 165 ib.) y Gabriel Bustos Naranjo (fl. 169, c. 2), relatan que conocían a Esther Julia Castillo y Alirio Núñez, y que les consta que convivían desde hacía más de once años y que este último proveía al sostenimiento del hogar correspondiente.

Por su parte, Alba Inés Suárez Suárez (fl. 193 ib) y Reyes Cortés Bravo (fl. 200) dan cuenta que conocieron a Marleny Serrano y José Obeimar Núñez, y que les consta que convivieron por espacio superior a 10 años; y que el fallecido proveía al sostenimiento del hogar por ellos constituido.

De ese conjunto probatorio se deduce que efectivamente las mencionadas demandantes a la fecha del insuceso formaban con los fallecidos y sus hijos una unión marital de hecho y que esta situación se había iniciado desde hace más de 11 a 10 años, respectivamente.

*20. En cuanto al derecho que las compañeras permanentes puedan tener para reclamar la indemnización de los responsables del hecho en virtud del cual se vieron privadas del sustento económico que recibían, es entonces de precisar*

*20.1. El artículo 2341 del Código Civil, como norma básica de la llamada responsabilidad civil extracontractual o aquiliana, ha sido interpretada por doctrina y jurisprudencia como el soporte jurídico que tutela el derecho de la víctima del hecho ilícito causante del daño para exigir la indemnización del responsable. Con otras palabras, el reclamante del resarcimiento debe tener legitimación activa para deprecar la condena al responsable, entendiendo que tiene legitimación en cuanto se le vulneró o lesionó un derecho por existir norma jurídica que le garantiza una facultad de exigencia de satisfacción de un comportamiento de una prestación de la que se ve privada por causa del hecho dañoso. Así el cónyuge tiene derecho a exigirle determinados comportamientos y prestaciones al otro, porque el vínculo conyugal produce esas obligaciones establecidas por la norma positiva.*



*Por tanto, si un cónyuge se encuentra privado de poder exigir las obligaciones al otro por causa de que éste fue muerto por la actitud culposa de un tercero, el sobreviviente está legitimado para reclamar de dicho tercero el resarcimiento del daño padecido por la muerte de su consorte. Aunque no sea exacto el símil, el tercero responsable asume las obligaciones desde luego asumibles, que tenía a su cargo el cónyuge fallecido. Lo mismo puede predicarse de los herederos del causante cuyo óbito es causado por el hecho culposos de un tercero.*

*La unión marital de hecho no constituye, empero, para el derecho civil una situación o estado sancionado expresamente por la norma positiva, en cuanto un compañero permanente, por esa unión, pueda exigirle al otro precisos comportamientos y determinadas prestaciones, y gr. no tiene tutela jurídica para reclamarle alimentos o el cumplimiento del deber de fidelidad. Por consiguiente se pone en duda por lo menos si éstos tienen legitimación para exigir resarcimiento de los daños y perjuicios que el hecho negligente, descuidado o imprudente de un tercero le cause por herir o matar a su compañero permanente.*

21. Ahora bien, en las legislaciones de algunos países se reconoce el derecho del concubino a reclamar del otro ciertos comportamientos o prestaciones. Es así como el artículo 159 del Código de Familia de Bolivia de 1973 reconoció a las uniones conyugales de hecho efectos similares al matrimonio, tanto en las relaciones personales como patrimoniales de los convivientes.

21.1. El artículo 369 del Código Civil Peruano otorgó a la "madre natural" derecho a pedir alimentos a su compañero por los sesenta días anteriores y los sesenta siguientes al parto, y el pago de todos los gastos por el alumbramiento y por el embarazo (Tomado de Valencia Zea, ob. cit. pág. 416).

21.2. En el Derecho Español aunque no hay un texto expreso, alguna doctrina ha encontrado fundamento para reconocer derechos a los concubinos en el artículo 1902 del Código Civil, según el cual la indemnización corresponde al perjudicado con el daño, sea pariente o no, iure proprio y no iure hereditario. (vid. este Compendio, T. II, vol. I, Madrid, Edersa, 1987, pág. 321 y 322, y notas a pie de página)" (O'Callaghan, Xavier,

*Compendio de Derecho Civil, tomo IV. Derecho de Familia, tercera edición, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1991, pág. 53).*

*Cabe resaltar la posición del Tribunal Supremo español, que por ejemplo en la sentencia del 23 de marzo de 1985 manifestó:*

*"La tesis de que, en los casos de muerte por un hecho delictivo, el destinatario directo de la indemnización, era la propia víctima y por sucesión sus herederos (SS de 30 de diciembre de 1932, 4 de mayo 1944, 27 noviembre 1954, 23 de junio 1956 y 24 febrero 1968), está hoy superada por el propio T.S, que ha rectificado su anterior postura, afirmando categóricamente que, en el supuesto analizado, los destinatarios inmediatos y directos son los perjudicados que reciben la indemnización por su propio y no por vía hereditaria, calidad que puede o no coincidir con la de heredero, pero que en cualquier caso es distinta y con efectos jurídicos muy diferentes, debiendo entenderse por perjudicado aquella persona ligada a la víctima, por vínculos próximos de familia, afecto, relaciones de convivencia real (destacado de esta Sala) dependencia económica u otras situaciones de recíproca asistencia y amparo que determinen real y efectivamente perjuicios derivados directamente por la muerte producida por el hecho delictivo (SS. de 24 de noviembre de 1970, 16 marzo 1971, 10 febrero 1972 y 25 junio 1983)". (Leyes de España, Código Civil, jurisprudencia y legislación. Serie Azul. Leyes Civiles. Madrid 1993, pág. 2702).*

*En cuanto a la naturaleza de la obligación de resarcir los daños y perjuicios, había dicho:*

*"Es doctrina de esta Sala, manifestada últimamente en la sentencia de 20 de mayo de 1977, y reiterada en otras posteriores, que la obligación de reparar los daños y perjuicios no constituye una deuda dineraria simple, sino una deuda de valor, cuya cuantía ha de determinarse en los casos de alteración de ésta, atendiendo no a la fecha de causación de aquellos ni a la del ejercicio de acción, sino al día en que recaiga la condena definitiva a la reparación, o, en su caso, a la posterior en que se liquide su importe en el período de ejecución de sentencia (sentencia del 29 de junio de 1978)" (ib. cit. pág. 2698).*

21.3. En Argentina, según notan los autores, la doctrina no ha sido uniforme por cuanto algunos Tribunales le niegan todo derecho al concubino

o a la concubina para reclamar respecto del otro. Por ejemplo Eduardo A. Zannoni, advierte que para que haya lugar a la indemnización debe existir certeza del daño y seguridad de la dependencia económica y que un concubino tiene derecho para reclamar indemnización de perjuicios por la muerte del otro, puesto que debe tomarse como fundamento la situación de hecho que haya generado un comportamiento que según las probabilidades se mantendría, similar a la unión conyugal y siempre que la reclamación no se impetre de una situación inmoral o contraria a la ley.

21.4. Según el mismo autor la jurisprudencia francesa ha reconocido el derecho a resarcimiento de la concubina en caso de accidentes morales sufridos por su compañero, con sustento en los artículos 1382 y 1383 del Code, cuando éste convivía establemente con aquélla y se prueba que sostenía el hogar.

Respecto al concubinato en América Latina, afirma el citado autor que las legislaciones civiles de Paraguay de 1987, de México y de Cuba de 1975 reconocen derechos a la concubina y específicamente el de reclamar alimentos; en los dos países inicialmente mencionados, y en el caso de Cuba se reconoce al matrimonio no formalizado los efectos propios del matrimonio formalizado legalmente, siempre y cuando reúna los requisitos de singularidad y estabilidad.

22 En el Derecho Nacional Colombiano es quizá el derecho del trabajo el que primeramente ha tenido a la unión marital de hecho como un hecho sociológico evidente, para otorgar ciertos derechos de prestación social atendiendo así situaciones de justicia y equidad.

En efecto, la Ley 90 de 1946 en los artículos 54 y 55 reconoció derechos a la pensión a la mujer con quien el asegurado hubiese hecho vida marital durante los tres años inmediatamente anteriores a su muerte, o con la que hubiese tenido hijos, siempre que ambos hubieran permanecido solteros durante el concubinato.

En la actualidad la Ley 100 de 1993 en los artículos 47 y 74 reconoce como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes al compañero o compañera permanente superviviente, que hubiese hecho vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez y hasta

su muerte, y hayo convivido con el fallecido no menos de dos años continuos con anterioridad a aquella, salvo que hubiese procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido. De otra parte el artículo 163 de la misma ley consagra que el plan de salud obligatorio de salud cubre al compañero o la compañera permanente del afiliado cuya unión sea superior a dos años.

22.1 En el derecho civil es importante cómo para determinar la filiación paterna extramatrimonial, el artículo 329 del Código Civil establecía la presunción de que el hijo concebido por la concubina había sido engendrado por el hombre con quien ella convivía en concubinato, desde luego siendo la unión lícita, esto es entre hombre y mujer que podrían contraer matrimonio válido. Se reconocía así el derecho a la filiación del hijo extramatrimonial.

Es también de trascendencia la Ley 54 de 1990 en cuanto define la unión marital de hecho y reconoce la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, otorgándoles a éstos derechos económicos similares a los conferidos a los cónyuges como socios en aquella sociedad.

22.2 La jurisprudencia y la doctrina nacionales no han sido ciertamente uniformes, lo que se explica dada la forma como la Constitución de 1885 se ocupaba de la familia. Así por ejemplo la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 13 de septiembre de 1948 al tratar sobre la naturaleza de las relaciones que eventualmente le abrían paso a la acción indemnizatoria promovida por la compañera del difunto, precisó:

"Aunque en el expediente la prueba (declaraciones de José Ignacio Cely y Carlos Jiménez Gómez, folios 10 a 13 v. cuaderno número 2) de que Miguel Salamanca sostenía económicamente a Raquel Monje, sin embargo, la naturaleza de las relaciones que llevaban no da base para deducir un perjuicio cierto, pues el carácter esencialmente inestable y precario del concubinato, que puede suspenderse en cualquier momento y con ello suspender el apoyo pecuniario que se recibía, hace que el perjuicio sea completamente incierto. Esta apreciación de la Sala no se opone a la doctrina admitida por la Corte sobre reconocimiento de prestaciones en casos como este, basadas en la existencia de una sociedad de hecho entre las personas unidas por concubinato, y de cuya liquidación pueden origi-

*narse derechos patrimoniales"* (G.J. Tomo LXIV, pág. 632).

22.3 La jurisprudencia penal y la contenciosa administrativa, tienen en cuenta únicamente que la persona que reclama la indemnización de perjuicios demuestre que ha sido efectivamente damnificada, sin entrar a determinar la naturaleza del vínculo, puesto que consideran que esto corresponde exclusivamente a la legislación civil, y es así como han reconocido derechos a las concubinas que dependían de sus compañeros que desaparecieron con ocasión de un ilícito o de una falla en el servicio, respectivamente (por ejemplo sentencias del 11 de noviembre de 1992 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera del 29 de abril de 1980 — Exp. No. 2506, del 29 de noviembre de 1991 — Exp. 6487 y 27 de enero de 1994 Exp. 7955).

22.4. Actualmente las Salas de Revisión de Tutela de la Corte Constitucional han entendido que la compañera del hombre con quien vive en unión marital de hecho tiene por esa situación ciertos derechos, es así como en sentencias del 12 de agosto de 1993 (T. 326, no publicada) y del 10 de noviembre del mismo año (T. 517 n.p.) se ordenó la desmovilización de soldados por ser las personas que venían atendiendo las necesidades económicas de la familia así formada. Y en sentencia del 8 de junio de 1993 (T. 212 n.p.), la misma Corporación al referirse a los sujetos entre quienes se establece la obligación de dar alimentos dijo: "...pesa sobre los parientes que tengan recursos económicos, y se establece en favor de los parientes pobres que se hallen en imposibilidad de procurarse sustento mediante el trabajo. Igualmente pesa entre cónyuges y en determinadas circunstancias entre concubinos".

23. En la Carta Política de 1991, en primer lugar es de advertir cómo no sólo el matrimonio es fuente de la familia que promete proteger el Estado, sino también la constituida por un hombre y una mujer con voluntad responsable de conformarla, según pregona el artículo 42, inciso primero, de dicha Carta.

23.1 Así que hoy, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, ante el criterio de la vigente Constitución, puede la Corte tomar una posición con suficiente certeza, puesto que del artículo mencionado aparece claro entonces que el Estado colombiano reconocer y promete proteger

tanto la familia matrimonial como la extramatrimonial, siempre que ésta según el constituyente sea formada por un hombre y una mujer que lo hagan de manera responsable, seria y asumiendo las obligaciones que implican formar parte de un grupo familiar. Es decir la Carta protege la familia extramatrimonial en cuanto llene las características de la familia matrimonial, pudiendo afirmarse que para serlo solamente faltaría el vínculo conyugal.

23.2. Enonces, la situación reconocida por la legislación, por el derecho comparado y por la jurisprudencia contenciosa administrativa y penal, encuentra un fundamento sólido en la Constitución Política de 1991, en cuanto reconoce la familia extramatrimonial y ordena dar un tratamiento igual al que se le da a la familia matrimonial. Ese tratamiento de igualdad es una norma preceptiva o de aplicación directa y no programática, por cuanto el constituyente no exige un desarrollo por parte del legislador, como si lo hace respecto de otros mandatos contenidos en la misma norma del artículo 42, v.gr. cuando dispone que los matrimonios religiosos producen efectos civiles como lo disponga la ley.

Tratándose, pues, de la unión marital de hecho, como parece ser la tendencia de llamar al concubinato, esto es la comunidad formada por un hombre y una mujer respecto de los cuales ningún impedimento hay para que puedan casarse, y constituida esa comunidad para formar una familia, es decir de manera permanente y estable, es incuestionable que faltando tan sólo la constitución del vínculo conyugal, tiene que recibir un tratamiento jurídico semejante por muchos aspectos al que merece la unión conyugal. Así que bajo los supuestos de licitud de la unión de un hombre y una mujer, o diciéndolo de otra manera no contrariando prohibiciones de ley ni las buenas costumbres, y siendo permanente y estable, o sea en cuanto constituye una familia, una sociedad así formada tiene la protección jurídica a la que semejantemente se le brinda a la alianza matrimonial. De manera que no se protege de modo alguno una relación repudiada por la ley ni una vinculación transitoria que no tenga el propósito de conformar una familia. Del contexto se desprende que dos son los presupuestos fundamentales para reconocer como situación jurídica que debe tratarse sin distinciones: la licitud y la permanencia y estabilidad de la familia, presupuestos que sin ninguna hesitación se advierten en la familia matrimonial, y que en cuanto aparezcan en la unión marital de hecho, dan pie para encontrar la familia extramatrimonial que reconoce la Carta Política de 1991.



25. La jurisprudencia tradicional ha sostenido que cuando se demanda el pago de perjuicios por la muerte de una persona es necesario acreditarlo, pero que además debe establecerse la existencia de determinado vínculo jurídico que diera derecho a recibir un beneficio o provecho económico cierto; así por ejemplo sostuvo en sentencia de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia del 8 de abril de 1969 (G.J. T. XCII, pág. 771).

Esta posición de la doctrina jurisprudencial no es por supuesto en modo alguno carente de fundamento jurídico. Empero si bien se examina el propósito del legislador al imponerle a quien cause daño la obligación de indemnizarlo en su integridad, reconociéndole correlativamente el derecho al damnificado o la indemnización integral, tiene que decirse que no es realmente el vínculo de parentesco o conyugal el factor determinante de la legislación activa para reclamar la indemnización. Lo que viene en verdad a conferir el derecho es la existencia de los supuestos necesarios que configuran dicho derecho, que se concretan en éstos: 1. La dependencia económica que tenía el reclamante de quien murió o quedó en situación física o mental que imposibiliten prestar la ayuda o socorro que venía otorgando. 2. El daño cierto que la muerte o la situación de quien daba la ayuda causó al dependiente, esto es que haya certeza de que dadas las circunstancias, la ayuda o socorro habrá continuado. Con otras palabras que esa dependencia no se derive de una relación ilícita y, por tanto, la pretensión venga a conformar una aspiración que repugne al derecho. 3. Que la pretensión indemnizatoria no signifique obtener una ventaja o un provecho contrario a la moral o al derecho.

Los anteriores supuestos debidamente demostrados estructuran el fundamento para aceptar que el damnificado tiene derecho a reclamar del responsable la respectiva indemnización.

25.1. En el caso *sub-lite* tal y como se desprende de las declaraciones de Fernando Muñoz Quijano (fl. 149, c. 2), Alirio Rincón Montoya (fl. 165 ib), Gabriel Bustos Naranjo (fl. 169, c. 2), está establecido que Esther Julia Castillo y Alirio Núñez convivieron desde hacía más de 11 años y que este último proveía al sostenimiento del hogar correspondiente. De igual manera Alba Inés Suárez Suárez (fl. 193 ib) y Reyles Cortés Bravo (fl. 200), dan cuenta que conocieron a Marleny Serrano y José Obeimar Núñez, y que les consta que convivieron por espacio superior a diez (10) años y que el fallecido proveía al sostenimiento del hogar por ellos constituido.



De dichas declaraciones se deduce que estas demandantes dependían económicamente de los occisos y que su desaparecimiento les causó un daño cierto, toda vez que se les privó abruptamente del sustento. La privación de esa ayuda surge al deducirse que no recibían socorro de otras personas, luego se colige que la muerte de los que dicha ayuda prestaban les privó del sustento.

La certeza del daño aparece en que de las pruebas mencionadas se establece que los fallecidos mantenían una relación estable con sus compañeras e integraron una unidad familiar con los demás demandantes durante un lapso superior a los 10 años, en el cual aquéllos proveyeron el mantenimiento del grupo, lo que además permite presumir que probablemente tal situación subsistiría a no ser por el intempestivo óbito.

Siendo así las cosas se tiene que están demostrados los anteriores supuestos —dependencia, daño cierto y probabilidad—, respecto de las demandantes Esther Julia Castillo y Marleny Serrano. En consecuencia debe revocarse el numeral 4o. de la sentencia del *a-quo* que negó el reconocimiento de perjuicios en favor de éstas.

25.2. En lo que toca con Alex Javier Núñez Castillo y Martha Cecilia Núñez Serrano, no existe duda alguna respecto de la legitimidad que les asiste para reclamar la indemnización en cuestión, puesto que con los documentos que obran a folio 7 del cuaderno No. 1 y 111 del cuaderno de la Corte, se acredita su vínculo con Alirio y José Obeimar Núñez de quienes eran hijos extramatrimoniales, respectivamente.

Además del vínculo se acreditaron los supuestos de la legitimación activa para reclamar la indemnización, con las mismas declaraciones que sirvieron de soporte para establecerlos respecto de las compañeras de los occisos, ya que en dichos testimonios los deponentes coinciden en afirmar que éstas y los demandantes en mención conformaban una familia con Alirio y José Obeimar Núñez, quienes constituían el soporte económico de las mismas.

25.3. Con relación a Diego Fernando y Carlos Enrique Núñez Castillo, que se dice son hijos de Esther Julia Castillo Orejuela y Alirio Núñez; y Bárbara y Ober Yesid Núñez Serrano, de quienes se dice son hijos de José Obeimar Núñez y Marleny Serrano, debe dejarse en claro que no aparece

en autos que fueran reconocidos por los fallecidos y que no obstante lo pedido en la demanda y lo afirmado en los hechos, en cuanto a que reclaman la indemnización como hijos, es lo cierto que en este asunto no se discute la relación paterno filial sino que el fundamento verdadero (hecho 12, folio 43, c.1), es la dependencia económica real que dentro del grupo familiar tenían estos demandantes en relación con los muertos. Luego demostrada así, tienen legitimación e interés para reclamar la indemnización de quien causó el daño. En otras palabras, *interpretaron reclamando el artículo 2341 del Código Civil, el fundamento indispensable para reclamar eficazmente la indemnización, es que efectivamente el hecho causó un daño cierto a determinada persona quien por eso tendrá derecho a reclamarla.*

De esta manera tiene que destacarse que en este asunto se probó plenamente que los referidos Diego Fernando y Carlos Enrique Núñez Castillo, dependían económicamente de Alirio Núñez, en razón de que hacían parte del grupo familiar del cual éste era cabeza principal, tal como lo declaran Fernando Muñoz Quijano (fl. 149, c. 2), Alirio Rincón Montoya (fl. 165, id.), Gabriel Bastos Naranjo (fl. 169, ib.), Arlid Vásquez Quintero (fl. 171, c. 2), Javier Gómez Cano (fls. 172 a 173, id.), Edgar López (fls. 173 y a 174, ib.), y es de presumir que esa relación de dependencia hubiera subsistido en época posterior al fallecimiento de Alirio Núñez, de no haber ocurrido el hecho funesto en cuestión, lo cual se desprende de la convivencia demostrada.

Respecto de Bárbara y Ober Yezid Núñez Serrano, es de precisar que en la demanda también se afirmó que dependían de José Obermar Núñez y en la causa se demostró esa situación fáctica, tal como se puede ver de lo declarado por Arlid Vásquez Quintero (fl. 171, c. 2), Javier Gómez Cano (fl. 172, id.), Edgar López (fl. 173, ib.), Alba Inés Suárez Suárez (fl. 193, c.2) y Reyles Cortés (fl. 200, id.), situación fáctica que se presume también se prolongaría en el tiempo dada la estabilidad de la misma, deducción derivada ciertamente de la prolongada convivencia del grupo familiar, según lo dicho por los testigos arriba citados.

De modo que como la falta definitiva de la persona de quien dependían económicamente, implica que quienes eran beneficiarios de la ayuda material que les prestaba el occiso no puedan recibirla en el futuro, se deduce sin lugar a dudas que con la desaparición repentina de quienes proporcionaban la ayuda se les ocasionó un daño, que debe ser reparado por el cau-

sante de éste, en los términos del citado artículo 2341 del Código Civil.

Por lo dicho ha de concluirse que los referidos demandantes tienen legitimación activa en la causa, para reclamar la indemnización del perjuicio que se les ocasionó con motivo de la muerte de los hermanos Núñez, ya que están demostrados los supuestos de aquella antes anotados, puesto que, se reitera, se acreditó la dependencia de éstos respecto de los occisos, el daño cierto que se les causó en razón de la privación de la ayuda económica y la probabilidad de que la situación de hecho se prolongaría en el tiempo de estar vivos Alirio y José Obeimar, lo que se presume de la estabilidad que existía en el grupo familiar de que éstos eran cabeza de familia, como que la convivencia llevaba, según los testimonios, más de 10 años.

25.4. Lo propio debe decirse de Numar Obeimar Núñez Arce, de quien se afirma es hijo de José Obeimar Núñez y de Romelia Arce, aunque no aparece reconocido por éste (fl. 1, c.1), persona que dependía moral y económicamente de aquél según lo declaró Omar González Sánchez (fl. 175, c.2).

26. El segundo aspecto fundamental para la decisión, es el criterio que debe aplicarse para liquidar el resarcimiento de los perjuicios causados a los damnificados con el hecho dañoso.

Para tal resultado se tomará como base, con sostén en las pruebas, parcialmente el dictamen pericial incorporado en esta instancia, toda vez que el mismo está decidamente sustentado, además de no haber sido atacado por las partes: el informe del DANE sobre la devaluación del peso colombiano a partir del acaecimiento dañoso (fs. 475 al 498, c. Corte), y la información rendida por la Superintendencia Bancaria (fs. 508 a 531, c. Corte), de la cual se desprende que los expertos respetaron la tabla de mortalidad de los asegurados 1984-1988 acogida por dicha entidad en resolución No. 0996 del 29 de marzo de 1990 y teniendo en cuenta lo pedido en la demanda y lo expresado en su respuesta, el probable salario mínimo mensual que durante su vida habrían devengado los desaparecidos y hasta cuándo habrían debido contribuir para el sostenimiento de sus compañeras y de las demás personas que de ellos dependían. Al salario mínimo legal mensual, empero, no habrá de calcularse devaluación, como quiera que en su fijación va implícita la pérdida del poder adquisitivo del peso.

27. En cuanto al camión marca Volvo que quedó destruido por efectos del mismo accidente, se tendrá en cuenta, como se dijo, el dictamen pericial que hace los cálculos del daño emergente o valor del camión y el lucro cesante o utilidades que su dueño hubiese podido obtener (este último rubro en el evento de estar probada la utilización del vehículo para la fecha del accidente).

Los expertos efectuaron la liquidación de perjuicios (fls. 120 y ss. C.C.) así:

"I. perjuicios materiales a favor de Rito Antonio Avila López"

Por el valor del vehículo tracto camión, marca Volvo, modelo 1979 de placas SN-3427, destruido totalmente el 26 de agosto de 1984. "promediando los diferentes valores obtenidos de las diferentes compañías comercializadoras de vehículos", tenía un valor de..... \$13'500.000 menos el pago que por indemnización efectuó "Colseguros" ..... \$ 3'066.403 queda el daño emergente ..... \$10'433.597".

Los demandados apelantes objetaron el dictamen en este aspecto, objeción apoyada en que los peritos se apartaron de lo dispuesto en la sentencia que ordenó esta prueba, pues se basaron en elementos que no obraban en el conjunto demostrativo (fl. 144 y ss. c. Corte). Además en que en el proceso existe prueba documental de cotizaciones que no superan en promedio los \$9'000.000.00 (fl. 274 y 275, c. Corte). Y también porque no indicaron en ninguna forma cómo era el mismo, su modelo, mantenimiento, kilometraje, recorrido, etc.

Ciertamente en dicha providencia (fl. 103, c. Corte) se dispuso que los expertos tuvieran en cuenta las probanzas recaudadas. Sin embargo, como es de exigencia legal que el dictamen sea fundamentado, esto es que los expertos tienen que informar al juez acerca de los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas en desarrollo de la labor que se les ha encomendado, resulta obvio que deban acudir a otros elementos de juicio diferentes de los que suministra el proceso, para que puedan dictaminar en relación con la materia que se les somete a su consideración, como acontece con el justiprecio de las cosas que no estando vinculadas materialmente a la causa, se requiere evaluarlas para fines indemnizatorios, o cuando estando afectas a ese proceso, la información requerida no la

*suministran las pruebas obrantes en él.* Por consiguiente, si echaron mano de informaciones suministradas por personas dedicadas al comercio de automotores como el que debían avaluar, desechando otras informaciones, obrantes sí en el expediente, (como ocurre con los datos que suministran los documentos de folios 11 y 12 del cuad. 1), cumplieron a cabalidad con la gestión que se les encomendó, como que las informaciones que les sirvieron de fundamento son, precisamente, las que se requieren para hacer la regulación del daño que se les pidió. Adicionalmente debe agregarse que los peritos emitieron su juicio con sujeción a las pautas trazadas en la sentencia del 29 de octubre de 1991 (fol. 103, c. Corte) y la verdad procesal existente en autos (vehículo destruido). Por lo tanto, este aspecto de la objeción carece de razón.

Prueba de que el vehículo se destruyó totalmente lo son la certificación expedida por la Juez 2a. Penal Municipal de Barbosa (Antioquia), (fl. 19, c. 1). El propio informe de la Secretaría de Transporte y Tránsito Municipal, rendido con ocasión del accidente de tránsito de que se trata (fl. 12, c. 2); la fotografía del folio 18 del C. No. 1; la declaración que por certificación rindió Bernardo Jaramillo Uribe (fl. 27, c. 2); el testimonio de Joaquín Norberto Valencia, Inspector de Policía (fl. 34, c. 2 y 80 ib.) y la declaración de Gerardo A. Barrientos (fl. 66 a 69, c.2).

Luego contra toda evidencia procesal, no podía concluir los expertos que el vehículo siniestrado sí era susceptible de reparación y que ésta podía tener un costo de \$8'700.000.00 y \$9'000.000.00 M/cie. Además habiendo grupos de pruebas lo dicho por los peritos es creíble dada su fundamentación.

De ahí que los expertos tuvieran que acomodarse a lo que muestran las pruebas que atrás se mencionaron y no al concepto u opinión de terceros.

Los peritos en su ampliación al dictamen (fl. 322, c. Corte), manifestaron que el vehículo en el supuesto que se pregunta, o sea en el estado de chatarra, tiene un peso aproximad de 7.000 kilos y el valor del kilo se determina en la suma de \$45.00, lo cual arroja un guarismo de \$315.000.00

En el escrito del folio 324 *ibídem*, el apoderado judicial de la Sociedad Colombiana de Distribución Ltda, objeta por error grave esa aclaración así:

"1. El valor del salvamento o rescate tiene por objeto rebajar en igual cuantía la indemnización debida por el vehículo accidentado.

"La chatarra de que hablan los peritos quedó de propiedad del demandante Rito Antonio Avila y por consiguiente, sea que él la haya conservado o vendido no tiene derecho a indemnización; y el avalúo tiene que seguir las mismas normas y reglas del avalúo principal del automotor, esto es, indexarlo o actualizarlo en la misma forma".

Pues bien, como de una parte los expertos en su dictamen no precisaron que el avalúo de la chatarra se hizo sobre los restos del vehículo accidentado, ya que apenas hablan de que para llegar a la cifra que dan "hemos tenido en cuenta un vehículo de las mismas características y la cotización actual en el mercado de la chatarra"; y de otro lado, en el caso de ser fundada la objeción, ésta no podría declararse, por falta de materia (no es real el justiprecio que dan los peritos), la conclusión que deviene es que ésta resulta intrascendente para los fines de la regulación de que se trata.

Por lo demás, los objetantes no probaron las condiciones en que se encontraba el vehículo siniestrado a la época del accidente, ni menos que la marca Volvo dejó de operar en el país.

Aún más, si esta pretensión tiende a repararle al damnificado la integridad del daño que sufrió con ocasión del accidente de que dan cuenta los autos, es indiferente la estimación que haga el actor en su demanda, cuando la prueba adecuada señala una suma que no dista en mucho a la fijada en ella \$11'000.000 oo respecto de \$13'000.000.oo la estimada por los expertos. Tanto más, cuando el actor se está a lo que resulte probado en el proceso (fl. 55 vto., c.1).

De esta manera como daño emergente respecto del camión Volvo, se acoge el valor de \$10'433.597.00,0 que concuerda con los elementos de juicio que al respecto se vea en el plenario.

Ahora bien. Ese es el valor del daño emergente al momento del accidente. Como quien sufrió el perjuicio tiene que ser indemnizado en su integridad, recibiendo el equivalente a la época de su reparación, es de lógica inferir que dicho valor es necesario actualizarlo para el momento del pago.



Aunque los peritos cumplieron también con traer esa suma a su equivalencia a la fecha que señalan —26 de diciembre de 1991—, lo hicieron con un método que no corresponde al que viene empleando la Corte (Sentencias de 10 de diciembre de 1992 y 8 de marzo de 1993, sin publicar), método que utiliza entre sus factores las estadísticas del Departamento Nacional de Estadística —DANE—, en el cual, como se dispuso traerlo a estos autos, señábase como índice final (fl. 416, c. Corte) el de 273.52. Así que éste será el factor que multiplique el daño emergente inicial. Hecha la operación pertinente arroja como resultado la cantidad de \$28'537.974.81 para el mes de enero de 1993, cantidad a la que debe sumársele el valor inicial que representa el vehículo al momento de su destrucción, llegando el total del daño emergente actualizado a la cantidad de \$38'971.571.81.

Además de lo anterior los peritos dictaminaron sobre lo que denominan el daño emergente futuro, cuya cuantía calcularon multiplicando el daño emergente inicial o consolidado por 3.03% mensual. Sin embargo, su concepto corresponde a lo que prevé el inciso final del artículo 308 del Código de Procedimiento Civil, según el cual la actualización de las condenas a pagar sumas de dinero, se hará en el proceso de ejecución, desde luego si el acreedor tuviere que utilizar esa tutela jurídica. Consecuentemente, esa partida no se tendrá en cuenta para la cuantía que por el concepto de daño emergente se le reconocerá al demandante propietario del camión destruido en el accidente.

Los expertos también avaluaron el llamado lucro cesante futuro. *Como la doctrina entiende que cuando el daño emergente queda en suspenso, el lucro cesante equivale a lo que habría de producir ese daño emergente*, éstos hicieron los cálculos que estimaron pertinentes al respecto, aspecto que los demandados (fls. 157 y ss., c. Corte) objetaron argumentando que los fundamentos que justifican este rubro no corresponden a la verdad y certeza que ameritan lo expresado por los auxiliares, ya que son parte de hechos no demostrados, puesto que carecen de los necesarios soportes y probanzas. Para el efecto señalar, que no aparece demostrado fehacientemente lo atinente a la capacidad de tonelaje del automotor ya que lo consignado en el dictamen está alejado de la realidad y verdad, conforme a las probanzas que se citan.

De otro lado, anotan, no existe certificación alguna sobre el número de



viajes realizados entre la Costa y la ciudad de Palmira. Tampoco constancia que determine que todos y cada uno de los viajes que hizo el automotor desde el inicio de su actividad hasta el día de la colisión, fueron siempre entre dichas localidades. Además, no es admisible considerar que siempre el automotor colisionado debía y tenía que hacer un mismo tránsito con carga. Adicionalmente, refieren que no se tuvieron en cuenta las condiciones mecánicas del vehículo a la época del accidente, ni en la partida de gastos de rodamiento mensual se incluyó el 10% de comisión que cobran las empresas intermediarias que suministran la carga.

Examinada esta parte del dictamen, en verdad no se encuentra que los fundamentos tengan sólido respaldo de persuasión, por lo que tiene razón la objeción.

*Ahora bien, toda vez que así lo ha dicho la jurisprudencia, por ejemplo en sentencias de 1o de junio de 1957 (G.J. T. LXXV, pág. 588), del 8 de julio de 1964 (G.J. T. CVIII, pág. 296) y del 5 de noviembre de 1964 (G.J., T. CIX, pág. 542), dictadas por la Sala de Negocios Generales, tratándose de sumas de dinero como daño emergente que no esté demostrada la inversión que podría dársele, la equidad impone calcular como rendimiento que el dinero habría podido producir, el mínimo señalado por la ley, esto es el interés del 6% anual, conforme con el artículo 1617 del Código Civil, aplicable para el efecto por analogía*

Por tanto se procede a liquidar el daño emergente básico, esto es a la suma \$10'433.597.00, el 6% anual desde el 26 de agosto de 1984 hasta el 31 de enero de 1994, fecha del peritaje, lo que arroja la cantidad de \$5'903.678.00, que equivalen al lucro cesante.

No sobra advertir que del dictamen rendido por los expertos Alvaro Anduckia y Sara Judith Perilla Jácome (fls. 349 y ss., c. Corte) — objeciones al dictamen de los peritos Cadena Jiménez y Angel Castañeda — se pidió aclaración y complementación en lo referente con el vehículo destruido, la que fue decretada por auto de 2 de septiembre de 1992 (fl. 382) y rendida por los expertos a folio 387 a 393. Mas como este dictamen no consulta la realidad procesal y probatoria que tuvieron en cuenta los expertos Cadena Jiménez y Angel Castañeda, para rendir el concepto técnico que se les encomendó (justipreciar el valor que tendría un vehículo igual al destruido y no cuanto podría valer su reparación), necesariamente ha de colegirse que este

dictamen no prueba las objeciones que formula la parte demandada.

Así las cosas, el lucro cesante es igual a \$5'903.677,00. De modo que este lucro cesante tiene que agregarse a la suma básica indexada, esto es a los \$38'971.571,81, y se obtiene un total de \$44'875.248,81, correspondientes a la indemnización por perjuicios materiales a Rito Antonio Avila López.

No puede reconocérsele daño moral, como que no hay base para afirmar con certeza que sufrió un perjuicio que deba valorarse como *pretium doloris* con el criterio del *arbitrium iudicis*.

28. Antes de entrar a analizar las pruebas para establecer las cuantías de los daños materiales que alegan los demandantes diferentes a los de Rito Antonio Avila López, es de precisar que si bien en la sentencia de casación se habló de compañeras permanentes e "hijos" de las personas que murieron en el accidente, lo evidente es que el propósito de las pruebas y así se desprende del cuerpo de la providencia, fue establecer la cuantía de los perjuicios sufridos por las personas que dependían económicamente de los muertos; por lo tanto, el calificativo de hijos no se tomó en el sentido de que existiera necesariamente el lazo filial, sino, refiérase de las personas que dependían patrimonialmente de los fallecidos.

De otra parte no sobra advertir que si lo pretendido con las pruebas decretadas en la mencionada sentencia fue establecer la cuantía de los perjuicios, la parte demandada tuvo también la oportunidad de controvertirlas.

29. Es de advertir así mismo que cuando los peritos hablan de alimentos, la voz no se puede tomar en el sentido jurídico que cabalmente tiene, sino el de damnificado o persona que dependía económicamente de otra, como efectivamente debe entenderse en este caso dicha expresión, puesto que, como acíba de decirse, las pruebas especialmente la de peritos se decretaron para establecer la cuantía de los daños que sufrieron los damnificados por el óbito en cuestión.

30. En relación con las indemnizaciones a los restantes demandantes damnificados con el accidente, que dependían económicamente de los fallecidos, es cierto que hay suficientes pruebas que demuestran la dependencia económica, como los testimonios citados de Ariel Vázquez Quintero, Javier Gómez Cano, Edgar López y Omar González Sánchez (fls. 171 a 175 vto, c. 2). Ahora bien, como la regulación del daño emergente y lucro cesante nece-

sita de la prueba que demuestre la cuantía cierta de lo que obtenían los difuntos y al respecto no hay demostración que efectivamente convenza, fue por lo que teniendo en cuenta la regla de experiencia de que quien trabaja para otro debe recibir una remuneración económica y que los demandados no han discutido esa relación de trabajo afirmada en la demanda, se ordenó que los peritos practicasen las evaluaciones pertinentes con base en presumir que los fallecidos devengaban al momento de su muerte el salario mínimo legal mensual (fl. 421, c. Corte), prescindiendo de los cálculos que los expertos hicieron en este aspecto, pues realmente el fundamento que tuvieron (fls. 127 y ss. c. Corte) no encuentra pruebas para admitirlo. De otra parte también se dispuso que se calculara el monto de la indemnización de los demás damnificados diferentes a las compañeras permanentes, hasta que éstos cumplieran la mayoría de edad, en atención a que *la jurisprudencia nacional ha optado cuando hay menores con capacidad laboral futura, por indemnizarlos hasta el día en que estén en condiciones de obtener empleo y si no hay pruebas al respecto se presume que el auxilio se habría prestado hasta cuando éstos cumplieran 18 años (2 de julio de 1968, Anales, T. LXXV, pág. 324; 27 de marzo de 1981, Anales, T. C, pág. 403).*

*Al respecto cabe anotar que, como lo reiteró recientemente esta Corporación en sentencia del 10 de marzo de 1994, es muy difícil "... hallar un equivalente exacto entre el monto de la indemnización y el daño, por manera que dicho monto no viene a desempeñar, en la generalidad de los casos, sino la función de satisfacer, en frente de los beneficiarios, cierto bienestar que reemplaza al que fue arrebatado por la muerte de una persona. Y no porque este equivalente escolge en dificultades, la indemnización pierde su razón de ser. Si ello fuere así, los perjuicios morales de tan inasible evaluación no podrían jamás representarse en cantidades pecuniarias. La ley no dice cuál es el criterio adoptable para tales justiprecios de donde se infiere que en esta labor es indispensable acudir a las reglas del derecho, y admitir que el juez está dotado de alguna relativa libertad para llegar a conclusiones que consulten la equidad, viendo, como es, irrealizable a todas luces una justicia de exactitud matemática..." (G.J. T. XCVI, pág. 690).*

Teniendo en cuenta los parámetros señalados por la Corte, los peritos adicionaron el dictamen respecto a los perjuicios materiales ocasionados a los damnificados por la muerte de Alirio y José Obeimar Núñez (fls. 475 a 498, cdno. Corte), de la siguiente manera:

"En primer lugar, se determina el salario mínimo mensual para el período comprendido entre agosto de 1984 y enero de 1994, se porcentúa el promedio de devaluación mensual según certificación del DANE, de acuerdo a la tabla de supervivencia o vida probable se determina la supervivencia de Alirio Núñez, José Obeimar Núñez y las señoras Esther Julia Castillo y Marleny Serrano y tenemos:

"1o. salario mínimo mensual legal para:

"a. Agosto a diciembre de 1984	\$11.298.00
"b. Enero a diciembre de 1985	\$13.557.00
"c. Enero a diciembre de 1986	\$16.811.40
"d. Enero a diciembre de 1987	\$20.509.80
"e. Enero a diciembre de 1988	\$25.637.40
"f. Enero a diciembre de 1989	\$32.559.60
"g. Enero a diciembre de 1990	\$41.025.00
"h. Enero a diciembre de 1991	\$51.720.00
"i. Enero a diciembre de 1992	\$65.190.00
"j. Enero a diciembre de 1993	\$81.510.00
"k. Enero de 1994	\$98.700.00

"2o. Promedio de devaluación mensual entre agosto de 1984 y enero de 1994.

"Según certificaciones expedidas por el Dane, tenemos que para el período indicado se ha presentado una devaluación promedio del 2.11% mensual.

"3o. Vida probable de los occisos ALIRIO Y JOSE OBEIMAR NUÑEZ frente a sus compañeras ESTHER JULIA CASTILLO y MARLENY SERRANO:

"De ALIRIO NUÑEZ. Según su registro civil de nacimiento, éste nació el 25 de agosto de 1946, luego para el 26 agosto/84 tenía 38 años. de acuerdo a la tabla de mortalidad tendría una vida probable de 37.10 años.

"Su compañera Esther Julia Castillo Orejuela, según registro de nacimiento, nació el 30 de enero de 1948, de donde para agosto 26/84 fecha de la muerte de su compañero, contaba 36 años, 6 meses y 26 días que aproximado nos da 37 años. para una vida probable de 37.96 años.

"De JOSE OBEIMAR NUÑEZ. Según registro civil de nacimiento obrante al proceso, nació el 5 de marzo de 1939, para 26 de agosto/84, tenía 45 años, 5 meses y 21 días, para una vida probable según la tabla de supervivencia de 31.80 años.

"Su compañera Marleny Serrano según su registro civil de nacimiento, éste tuvo lugar el 28 de febrero de 1943, para la época del fallecimiento de su compañero, contaba 41 años, 5 meses y 26 días, para una vida probable de 34.53 años, de acuerdo a las tablas de supervivencia.

"Para efectos de la liquidación, por razones obvias y en aplicación de criterios jurisprudenciales y doctrinales, se toma la vida probable más corta, que para el presente caso corresponde a los fallecidos ALIRIO Y JOSE OBEIMAR NUÑEZ.

"Con fundamento en los anteriores elementos y criterios desarrollamos los puntos así:

A. Ingreso salarial que habría devengado ALIRIO NUÑEZ y JOSE OBEIMAR NUÑEZ entre 26 de agosto/84 y la fecha del dictamen (31 de enero de 1994) teniendo en cuenta los incrementos al salario mínimo, reajustando tales sumas con la devaluación certificada por el DANE.

Año	Salario mensual	No. meses transcurridos	sub total	Devaluación del 2.11% mensual en "x" meses*	Total
1984	\$11.232.00	445 días	\$46.321.30	\$110.445.06 (113)	\$156.766.86
1985	\$13.552.00	12	\$162.624.00	\$374.156.93 (109)	\$536.840.93
1986	\$16.811.40	12	\$201.736.80	\$412.894.70 (97)	\$614.631.50
1987	\$20.509.80	12	\$246.117.60	\$441.411.91 (85)	\$687.529.51
1988	\$25.637.40	12	\$307.648.80	\$473.371.44 (73)	\$781.520.24
1989	\$32.559.60	12	\$390.715.20	\$502.889.53 (61)	\$893.604.73
1990	\$41.025.00	12	\$492.300.00	\$508.988.97 (49)	\$1'001.288.90
1991	\$51.720.00	12	\$620.640.00	\$484.533.64 (37)	\$1'105.173.60
1992	\$65.190.00	12	\$782.280.00	\$412.652.70 (25)	\$1'194.932.70
1993	\$81.510.00	12	\$978.120.00	\$268.206.51 (13)	\$1'246.418.30
1994	\$98.700.00	1	\$98.700.00	\$2.032.57 (1)	\$100.782.57

En los 113 meses y 5 días transcurridos entre 26 agosto/84 y 31

enero/94 los occisos habrían devengado por concepto de salarios, sin tener en cuenta sus prestaciones sociales que equivalen a un 37% del ingreso anual, la suma de ..... \$8'319.489.60, incluyendo su devaluación.

Ahora bien, como la base que se toma para los cálculos es el salario mínimo, en razón de lo ya expuesto (No. 26), la liquidación que se presenta queda así, advirtiendo que para el año de 1985 el salario mínimo mensual equivalía a la suma de \$13.557.60 y no de \$13.557.00, como aparece en el experticio, error que se puede corregir por ser puramente aritmético.

Año	Salario mensual	No. meses causados	Total
1984	\$11.298.00	4 y 5 días	\$46.321.80
1985	\$13.557.80	12	\$162.691.20
1986	\$16.811.40	12	\$201.736.80
1987	\$20.509.80	12	\$246.117.60
1988	\$25.637.40	12	\$307.648.80
1989	\$32.559.60	12	\$390.715.20
1990	\$41.025.00	12	\$492.300.00
1991	\$51.720.00	12	\$620.640.00
1992	\$65.190.00	12	\$782.280.00
1993	\$81.510.00	12	\$978.120.00
1994	\$98.700.00	1	\$98.700.00
Total			\$4'327.271.40

Continúan los peritos:

"B. Segundo punto. Los fallecidos ALIRIO NUÑEZ Y JOSE OBELMAR NUÑEZ, habrían gastado para atender sus necesidades personales el equivalente al 37% de sus ingresos anuales incluyendo salarios y prestaciones sociales, para lo cual se compensan las prestaciones no liquidadas en el punto anterior con los gastos personales".

Tal estimación es aceptable, ya que todo trabajador tiene derecho a recibir una suma adecuada por concepto de prestaciones sociales y está bien que esa cantidad se hubiese destinado a atender los gastos personales de los occisos.

En relación con las sumas que habrían gastado las víctimas en el sostenimiento de las personas que dependían económicamente de éstas, los expertos sientan como premisa de su estudio este planteamiento:

"C. Para responder a los puntos 3, 4, 5 y 6 del cuestionario, se tiene en cuenta que con las prestaciones sociales se está compensando el valor de los gastos personales de los fallecidos, de donde se toma únicamente el salario mínimo básico mensual para ser distribuido entre los alimentarios, acreciendo las cuotas de los menores y de las compañeras de los occisos a medida que los mayores vayan adquiriendo la edad de 18 años, siguiendo en tal sentido los criterios legales vigentes para el régimen pensional y sucesoral; habida cuenta de que para los fallecidos se ha destinado para su sostenimiento el monto de las prestaciones sociales que legalmente les corresponden".

En este punto la Sala se apartará del concepto de acrecimiento estimado por los peritos, toda vez que como se dijo con antelación, para efectos de la liquidación se parte de la presunción de que los fallecidos habrían auxiliado a los menores hasta que éstos cumplieran la mayoría de edad, no resultado equitativo que en vez de liberar a los demandados de la carga a medida que vayan llegando a ésta los damnificados, se les condene a acrecer las cuotas de los demás por el resto de tiempo que probablemente hubiesen vivido las víctimas.

Para la liquidación los expertos siguieron este procedimiento:

El valor del salario mínimo legal mensual se divide por el número de damnificados de la época, y el resultado que se da se multiplica por el número de meses que corresponde al año que se liquida.

A manera de ejemplo y para evitar transcribir cada operación, se reproduce la liquidación que corresponde al año de 1984. Dicen los expertos: Para 1984 el salario mínimo legal mensual era de \$11.298,00 distribuido entre 4 damnificados, le correspondería a cada uno \$2.824,50 m/cte mensual por el término de 4 meses y 5 días (26 agosto y 31 de diciembre de 1984) = \$11.768,75. Se reitera que se excluye el factor devaluación, por las razones expuestas en el numeral 26.

1o. Para DIEGO FERNANDO NÚÑEZ CASTILLO (fl. 480, c. Corre).



"De acuerdo a su registro civil de nacimiento, éste nació el 1o. de abril de 1970, los 18 años los cumplió el 1o. de abril de 1988". La liquidación comprenderá el período entre el 26 de agosto de 1984 y el 1o. de abril de 1988.

Conforme a la regla atrás indicada se tiene entonces que las sumas dejadas de percibir son éstas:

1984 (agosto 26 a Dic. 31) .....	\$11.580,45
1985 .....	\$40.672,80
1986 .....	\$50.434,20
1987 .....	\$61.529,40
1988 (Enero 1o. a 31 de marzo) ....	\$19.228,05
TOTAL: .....	\$183.444,90

2o. Para CARLOS ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO (fl. 481, c. Corte).

Según el registro civil de nacimiento nació el 2 de noviembre de 1971, cumpliendo en consecuencia el 2 de noviembre de 1989 los 18 años. Por lo tanto la liquidación abarca el período comprendido entre el 26 de agosto de 1984 y el 2 de noviembre de 1989.

1984 (agosto 26 a Dic. 31) .....	\$11.580,45
1985 .....	\$40.672,80
1986 .....	\$50.434,20
1987 .....	\$61.529,40
1988 (Enero 1o. a Nov. 2) ....	\$76.912,20
TOTAL: .....	\$323.748,05

3o. Para ALEX JAVIER NUÑEZ CASTILLO (fl. 483, c. Corte).

Según su registro civil nació el 15 de agosto de 1977, luego los 18 años los cumplirá el 15 de agosto de 1995, en consecuencia la liquidación abarcará el período comprendido entre la fecha del nacimiento y la fecha en que cumplirá la mayoría de edad.

1984 (agosto 26 a Dic. 31) .....	\$11.580,45
1985 .....	\$40.672,80
1986 .....	\$50.434,20
1987 .....	\$61.529,40

1988 .....	\$76.912.20
1989 .....	\$97.678.80
1990 .....	\$123.075.00
1991 .....	\$155.160.00
1992 .....	\$195.570.00
1993 .....	\$244.530.00
1994 .....	\$296.100.00
1995 .... (Enero 1o. a agosto 15)	\$185.062.00

TOTAL: ..... \$1'538.304.85

4o. de acuerdo con la peritación para ESTHER JULIA CASTILLO OREJUELA (fls. 486 a 490, c. Corte).

"Como quedó dicho, la vida probable que tenía Alirio Núñez al momento de su deceso, lo era de 37.10 años, mientras que para esa misma época (26 agosto/84) la vida probable de Esther Julia Castillo O, era de 37.96 años. De donde para efecto de la liquidación, se toma como base la vida probable más corta, en este caso la de ALIRIO NUÑEZ, que lo era de 37.10 años que reducida a meses no da 445 2 meses tiempo que comprende la liquidación".

Aplicando el método ya citado, se tiene:

1984 (agosto 26 a Dic. 31) .....	\$11.580.45
1985 .....	\$40.672.80
1986 .....	\$50.434.20
1987 .....	\$61.529.40
1988 .....	\$76.912.20
1989 .....	\$97.678.80
1990 .....	\$123.075.00
1991 .....	\$155.160.00
1992 .....	\$195.570.00
1993 .....	\$244.530.00
1994 ..... (Enero 31)	\$49.350.00
TOTAL: .....	\$1'106.492.85

Entre 26 de agosto/84 y 31 de enero de 1994 hasta donde se ha liquidado, hay 113 meses y 5 días y el número de meses a liquidar es de 445.2, restarían por liquidar 331.7 meses.

Para determinar tal período, se toma el salario mínimo actual de \$98.700.00 x 331.7 meses = ..... \$32'738.790.00

El fallecido Alirio Núñez habría gastado para el sostenimiento de su compañera Esther Julia Castillo Orejuela, la suma de ..... \$33'845.282.85, los que resultan de sumar el valor de los meses causados y los futuros.

31.1. Respecto de JOSÉ OBEIMAR NUÑEZ y atendiendo las pautas trazadas por los expertos con las salvedades anotadas, éste habría gastado para el sostenimiento de BARBARA, MARTHA CECILIA Y OBER YESID NUÑEZ SERRANO y de su compañera MARLENY SERRANO lo siguiente:

1. Para BARBARA NUÑEZ SERRANO (fl. 490, c. Corte).

"De acuerdo a su partida de nacimiento, ésta nació el día 15 de abril de 1969", cumpliendo los 18 años el 15 de abril de 1987. Por lo tanto el período a liquidar abarca desde la fecha de nacimiento hasta la fecha en que ésta cumplió la mayoría de edad.

1984 (agosto 26 a Dic. 31) .....	\$11.580.45
1985 .....	\$40.672.80
1986 .....	\$50.434.20
1987 (enero 1 a abril 15)	\$17.946.07
<b>TOTAL</b>	<b>\$120.633.52</b>

2. Para MARTHA CECILIA NUÑEZ SERRANO (fls. 491 a 492, c. Corte)

"Su registro civil de nacimiento indica que nació el 20 de octubre de 1970, de donde cumplió los 18 años el 20 de octubre de 1988, período a liquidar entre 26 agosto/84 y 20 octubre/88".

Utilizando el mismo método expuesto y el número de beneficiarios  
4— se tiene que su liquidación es como sigue:

1984 (agosto 26 a Dic. 31) .....	\$11.580.45
1985 .....	\$40.672.80

1986 .....	\$50.434.20
1987 .....	\$61.529.40
1988 ..(enero 1 a 20 octub.)	\$61.108.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$225.324.85</b>

3. Para OBER YESID NÚÑEZ SERRANO (fls. 493 a 495, c. Corte).

"De acuerdo a su registro civil de nacimiento éste nació el día 11 de julio de 1972, de donde el día 11 de julio de 1990 cumplió los 18 años de edad. Periodo a liquidar de agosto 26 de 1984 hasta julio 11 de 1990".

1984 (agosto 26 a Dic. 31) ... ..	\$11.580.45
1985 .....	\$40.672.80
1986 .....	\$50.434.20
1987 .....	\$61.529.40
1988 ....	\$76.912.20
1989 .....	\$97.678.80
1990 ..(enero 1 a julio 11)	\$65.078.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$403.885.85</b>

4. Para MARLENY SERRANO (fls. 495 a 498, c. Corte).

"Como quedó establecido, la vida probable del fallecido José Obeimar Núñez, era de 31.80 años para la época de su deceso, mientras que la vida probable de su compañera Marleny Serrano para esa misma época era de 34.53 años, para efectos de la liquidación se toma la vida probable más corta que para el efecto lo es la del occiso Núñez, de 31.80 años que para liquidar se reducen a meses y nos da 381.6 meses...". Al respecto se observa que los peritos incurrieron en un error, puesto que según la Tabla Colombiana de Mortalidad de los Asegurados 1984-1988 elaborada por la Superintendencia Bancaria, la vida probable de José Obeimar Núñez es de 31.08 años (fl. 529, c. C), los que reducidos a meses ascienden a 372.96, el cual por ser aritmético se procede a enmendar.

Aplicando el procedimiento indicado por los expertos y siendo cuatro los beneficiarios, la liquidación que resulta es la siguiente:

1984 (agosto 26 a Dic. 31) .....	\$11.580.45
1985 .....	\$40.672.80

1986 .....	\$50.434.20
1987 .....	\$61.529.40
1988 ....	\$76.912.20
1989 .....	\$97.678.80
1990 .....	\$123.075.00
1991 .....	\$155.160.00
1992 .....	\$195.570.00
1993 .....	\$244.530.00
1994 .....	\$49.350.00
TOTAL: .....	\$1'106.492.85

Entre 26 de agosto de 1984 y 31 de enero de 1994 hasta donde se ha liquidado hay 113 meses y 5 días, como el número de meses a liquidar lo es de 372.96 meses, nos restaría por liquidar 259.46 meses, para determinar el valor de la indemnización de tal período se tomará el salario mínimo legal mensual actual (\$98.700) y se multiplica por los 259.46 meses, lo que arroja un total de \$25'608.702.

JOSE OBEIMAR NUÑEZ habría gastado para el sostenimiento de su compañera permanente señora MARLENY SIERRANO, la suma de \$26'715.194.85, los que restan de sumar el valor de los meses causados y los futuros.

33.2 En lo que se refiere al demandante Alberto Iván Betancur Mesa, que según algunos testigos por causa del accidente quedó en situación notablemente disminuida económicamente, podría pensarse en la ocurrencia del llamado *daño fisiológico*. Sin embargo, para reconocerlo es necesario que se demuestre el rendimiento económico anterior al hecho dañoso, pero no aparece en el informativo prueba de los gastos de hospitalización, droga y demás cancelados por éste para su recuperación. Como en este caso no hay prueba de tal situación, no puede reconocérsele indemnización por daño emergente, ni tampoco por daño moral porque no hay ninguna prueba que demuestre que la situación en que quedó le causara algún quebranto en sus sentimientos.

Con respecto al lucro cesante, no obstante haberse afirmado en la demanda "...Alberto Iván Betancur Mesa, para la época en que sufrió el accidente tenía un ingreso mensual de \$20.000.00 y se dedicaba a la agricultura como jornalero o laborando en la finca de su familia..." (hecho

130., fl. 43, c. 1) el acervo probatorio no demuestra la realidad de esa aseveración.

Si bien Raúl Hernando Osorio Berrio (fl. 96, c.2) declara que Alberto Iván "era una persona que actuaba normalmente y era un tipo muy trabajador y me consta que era un tipo trabajador porque él trabajó con Reinaldo Osorno y Angel Builes... y después del accidente el señor Reinaldo Osorno lo volvió a contratar y no pudo trabajar con él, porque era una persona que se mantenía en un parte y en otra...", su dicho no permite inferir que a la época del accidente estuviese laborando para Reinaldo Osorno o para Angel Builes, pues que además de que el declarante no precisa a órdenes de quién se desempeñaba para tal fecha (26 de agosto de 1984), tampoco señala cuánto devengaba, cuál era su horario de trabajo, ni menos el lugar donde cumplía sus actividades. Por lo demás, no hay otros elementos de juicio que evidencian la existencia de esa relación laboral a la época del accidente.

A lo anterior se agrega que si "después del accidente el señor Reinaldo Osorno lo volvió a contratar", es de inferir que para el 26 de agosto de 1984 trabajaba para Angel Builes, porque de lo contrario la relación laboral existente hubiese continuado en el tiempo. Con todo, como ni el propio Alberto Iván Betancur en la declaración que rindió ante el señor Juez 2o. Penal Municipal de Barbosa (fls. 28 a 30, c. 2) hizo tal manifestación, ni menos llamó a declarar a Angel Builes sobre tal suceso, ha de concluirse que lo afirmado en la demanda quedó sin el respaldo probatorio pleno que exige la ley.

Por lo dicho, no hay bases para liquidar el lucro cesante respecto de este demandante, quien por lo demás falleció (fls. 125 al 130, c. 2), aproximadamente dos años después del siniestro en cuestión, sin que exista prueba alguna que apunte a demostrar algún nexo de causalidad entre el accidente en comento y la muerte de dicho demandante.

34. En lo que toca con los perjuicios morales pedidos por todos los demandantes, es imprescindible tener en cuenta el criterio jurisprudencial, según el cual, *no es suficiente demostrar un vínculo determinado con la persona de quien se dependía económicamente, por ejemplo cónyuge, compañero permanente, padres e hijos, sino que es necesario probar por lo menos con hechos indiciarios que realmente existía una situación afectiva, sentimental, moral, de tal intensidad, que al producirse la muerte esa*

situación resulta gravemente afectada y debía presumirse que causa, pues, una aflicción, v.gr. el trato especial que se daban los compañeros, el afecto recíproco, o la manera como existían las relaciones personales entre quien daba la ayuda y quien la recibía.

Al punto dijo la Corte en sentencia del 28 de febrero de 1990:

*"De todo lo anterior se sigue, en conclusión que no obstante que sean tales los perjuicios morales subjetivos están sujetos a prueba, prueba que, cuando la indemnización es reclamada por los parientes cercanos del muerto, las mas de las veces, puede residir en una presunción judicial. Y que nada obsta para que ésta se desvirtúe por el llamado a indemnizar poniéndole de presente al fallador aquellos datos que, en su sentir evidencian una falta o una menor inclinación entre los parientes".*

*"...Claramente, el distinguir entre quienes son legitimarios y quienes no lo son a efectos de decir que solo los primeros están exentos de probar los perjuicios morales subjetivos, es algo que representa, en primer lugar, una inexactitud ya que conduce a darte el vocablo 'presunción', un sentido que, en este caso, no le corresponde; en segundo lugar, una visión distorsionada del problema porque sin ningún fundamento plausible se vendrían a desconocer los vínculos afectivos que existen entre hermanos, precisamente, por razón del parentesco y en tercer lugar una inadecuada interpretación jurídica, ya que no deja de ser un tanto arbitrario al preconizar un paralelismo con el criterio que adopta la ley para la distribución de la herencia, en verdad, con la misma lógica — pero también con idéntica insuficiencia — podría acogerse la norma que reglamenta el derecho a solicitar alimentos, lo que, incluso, por consultar mejor la realidad, sería más completo — de hecho, la jurisprudencia se ha referido a ella —".*

Siendo así que en este asunto no aparece ni siquiera un indicio que permita deducir que en verdad los demandantes sufrieron una lesión sentimental por la muerte de los nombrados, las pretensiones al respecto tienen que ser negadas.

35. Puestas así las cosas y para proveer acerca de las objeciones al dictamen, es conveniente recordar que la Sala para establecer la cuantía de los perjuicios demandados, en las dos especies a que atrás se hizo referencia, ordenó la práctica de concepto pericial (fl. 103, c. Corte), el que rendido



(fls. 119 a 141 ib.) fue materia de objeción por parte de los demandados José Liborio Mejía Gil y Colombiana de Distribución Ltda. quienes fundaron así sus reparos:

35.1 José Liborio Mejía Gil expresó que la objeción tiene que ver con los perjuicios sufridos por Alirio Núñez y José Obeimar Núñez, "en lo que a la vida probable respecta, pues en el experticio se afirma que la vida probable de los dos sería respectivamente de 36.22 y 29.9 años y conforme a la tabla de vida probable establecida por la Superintendencia Bancaria, sería de 35 y 31 años respectivamente..." Además señala que hay equivocación en la liquidación del salario base del occiso ALIRIO NÚÑEZ en la suma de \$45.435.00 "cuando en la demanda el reclamante... estima y cuantifica el salario en la cantidad de \$41.880.00" (fl. 159, c. Corte).

Añade el objetante que "de autos no se probó fehacientemente la dependencia económica de Esther Julia Castillo Orejuela y de Marleny Serrano de los occisos... Esta situación se debe demostrar ampliamente en forma categórica y no presumirla como en el caso de la cónyuge".

Objeta así mismo las condenas por lucro cesante futuro en favor de esas personas, en cuanto tiene que ver con la productividad y el porcentaje de repartición, y concluye que objeta por "error grave las liquidaciones que se hacen por concepto de lucro cesante pasado y futuro a favor de Esther Julia Castillo Orejuela y Marleny Serrano determinados en valor de \$16'783.940.00 y \$12'015.058 respectivamente" (fl. 161, c. Corte).

En lo que respecta a esta objeción, debe precisarse que, como de un lado, esta Corporación para la regulación de los perjuicios sufridos por los damnificados con la muerte de Alirio Núñez y José Obeimar Núñez, no acogió el dictamen que inicialmente rindieron los peritos Fernando Cadena Jiménez y Jesús Angel Castañeda (fls. 119 a 141, c. Corte), ni menos el cálculo de perjuicios que presenta ese trabajo, lo que significa que la objeción carece de actualidad; y de otra parte, como la Sala acoge (con las salvedades que se anotaron en otro sector de esta providencia) como prueba de dicha regulación la cuantificación que hacen los nombrados expertos en la ampliación al dictamen pericial que obra en los folios 475 a 498 del cuerno de la Corte, con fundamento en estas consideraciones, al haberse demostrado dentro del proceso que los occisos a la época del accidente recibían sumas de dinero provenientes de una relación de trabajo en canti-

dad que se juzgó no podía ser inferior al salario mínimo legal y con ellas contribuían al sostenimiento de sus compañeras y demás personas, b) no haber sido censurada por las partes la citada ampliación al dictamen pericial, c) consultar la evaluación de los perjuicios lo dispuesto en el auto del 14 de septiembre de 1993 (fl. 425, c. Corte), d) porque para determinar la vida probable los expertos consultaron las tablas de índice de mortalidad acogidas por la Superintendencia Bancaria mediante resolución No. 0996 del 29 de marzo de 1990 (fls. 436 al 445, c. C.), y las aplicaron conforme con se leal saber y entender, e) porque en la ampliación del dictamen los peritos conceptuaron que los occisos habrían gastado para atender sus necesidades personales un 37% de sus ingresos anuales, los cuales fueron efectivamente descontados, ha de concluirse que por las dichas razones la objeción formulada no se abre paso.

35.2. Por auto del 27 de abril de 1992 (fl. 331 a 335) se decretó la prueba pericial pedida por los demandados, la que fue objeto de adición (fl. 362, c. Corte) con este resultado "B) Si la documentación del expediente demuestra fehacientemente, con toda propiedad y claridad, la dependencia económica de las señoras Esther Julia Castillo y Marleny Serrano? RESPUESTA: La documentación del expediente no demuestra fehacientemente, con toda propiedad y claridad la dependencia económica. No hemos encontrado evidencia de sí, por ejemplo, ellas vivían bajo techo con los occisos, si no tenían rentas o fuentes especiales de ingreso, etc". (fl. 389).

No obstante que la deducción que se les pidió a los expertos no corresponde a un concepto técnico, científico o artístico, debe advertirse que en autos sí obra la prueba que da cuenta de esa relación de dependencia económica de las señoras Esther Julia Castillo y Marleny Serrano (No. 17.7 de esta providencia). Luego la aseveración que hacen los expertos riñe con la realidad procesal.

De otra parte, constatar hechos como los que se pidió conceptuaron, es totalmente extraño a la prueba pericial, luego la objeción es infundada.

35.3. Colombiana de Distribución objetó por error grave en cuanto a la asignación o salario mensual de los fallecidos en el accidente: "las cuotas alimentarias" las que están "aumentadas", a la vida probable de los occisos, concluyendo que "el trabajo realizado por los señores auxiliares de la justi

cia para liquidar los perjuicios de los alimentarios de los señores ALIRIO Y OBEIMAR NUÑEZ, carecen completamente de asidero probatorio y de valoración técnica y científica, llegando a conclusiones y valores totalmente errados, al aplicar fórmulas no utilizables para el caso..." (fl. 283).

Fundada la objeción en las consideraciones anteriores, debe repetirse que como la Corte en la regulación de perjuicios no acoge la tasación que inicialmente hicieron los peritos Fernando Cadena Jiménez y Jesús Angel Castañeda en el dictamen que obra a folios 119 a 142 (cuad. Corte), sino la cuantía señalada en la ampliación del trabajo pericial (fls. 475 a 498), la cual resulta fundada por las razones que a espacio expuso la Corporación en otro lugar de este fallo, es de lógica concluir que la objeción montada sobre un dictamen que no se estima para la regulación que aquí se cita, carece de trascendencia de orden legal.

36. La parte demandante solicitó se complementara y aclarara el dictamen en lo que concierne a los porcentajes que corresponden a los gastos personales del trabajador, como a prestaciones sociales de éste, (fl. 285, c. Corte), la cual fue atendida por los expertos en el escrito que corre en el folio 322 ibídem cuaderno de la Corte, ampliación que no incide para efectos del resultado final, como que por auto del 14 de septiembre de 1993 (fls. 421 y ss.), se ordenó a los peritos Jesús Angel Castañeda y Fernando Cadena Jiménez adicionar su dictamen, encargo que cumplieron en acto completo y bien fundamentado, además de tener respaldo en la situación de hecho que encontró probada la Corte. Por eso la Sala acoge dicha parte del experticio para determinar los perjuicios demandados, en los conceptos a que atrás se hizo referencia, porque, con las exclusiones que se anotaron, se repite, el concepto pericial reúne los estimativos completos y coherentes en relación con los perjuicios indicados.

37. Conforme con lo anterior, se tiene que los perjuicios materiales quedan cuantificados de este modo:

37.1. RITO ANTONIO AVILA LOPEZ, la suma de cuarenta y cuatro millones ochocientos setenta y cinco mil doscientos cuarenta y ocho pesos con 81/100 (\$44'875.248.81), (fl. 54 de este fallo).

37.2. ALEX JAVIER NUÑEZ CASTILLO la suma de un millón quinientos treinta y ocho mil trescientos cuatro pesos con 85/100

(\$1'538.304.85). (fls. 66 y 67).

37.3. CARLOS ENRIQUE NUÑEZ CASTILLO la suma de trescientos veintitrés mil seiscientos cuarenta y ocho pesos con 05/100 (\$323.748.05). (fls. 65 y 66).

37.1. DIEGO FERNANDO NUÑEZ la suma de ciento ochenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con 90/100 (\$183.444.90). (fl. 65).

37.5. ESTHER JULIA CASTILLO ORFUELA la suma de treinta y tres millones ochocientos cuarenta y cinco mil doscientos ochenta y dos pesos con 85/100 (\$33'845.282.85). (fls. 67 y 68).

37.6. MARTHA CECILIA NUÑEZ SERRANO la suma de doscientos veinticinco mil trescientos veinticuatro pesos con 85/100 (\$225.324.85). (fls. 69 y 70).

37.7. BARBARA NUÑEZ SERRANO la suma de ciento veinte mil seiscientos treinta y tres pesos con 52/100 (\$120.633.52). (fl. 69).

37.8. OBER YESID NUÑEZ SERRANO la suma de cuatrocientos tres mil ochocientos ochenta y cinco pesos con 85/100 (\$403.885.85). (fl. 70).

37.9. MARLENY SERRANO, la suma de veintiséis millones setecientos quince mil ciento noventa y cuatro pesos con 85/100 (\$26'715.194.85). (fls. 70 al 72).

37.10. ALBERTO IVAN BETANCUR MESA no demostró los perjuicios materiales que reclamó. Por eso como se dijo no puede reconocérsele su pretensión.

38. Respecto de los planteamientos que hacen los demandados José Liborio Mejía y Sociedad Colombiana de Distribución Ltda. (fls. 189 y ss., c. 1 y 4 y ss., c. 5) en la sustentación del recurso de apelación que hoy es objeto de examen, se hacen estas precisiones:

38.1. Es evidente que en la pretensión primera no se señala el nombre de la persona natural que representa a la Sociedad Colombiana de

Distribución Ltda., pero como se advierte que la parte demandada no recurrió en reposición el auto que admitió la demanda, ni alegó en oportunidad la excepción previa correspondiente, tiene que admitirse que el defecto anotado se saneó por obra de la parte que hoy lo invoca como medio de defensa. Fundamentalmente cuando los defectos del libelo incoatorio no son trascendentes, sino meramente adjetivos, como aquí el nombre de la persona natural, defecto que no impide proveer en el fondo.

38.2. Es cierto, igualmente, que en el otorgamiento de los poderes que se dejan relacionados, no se determina la persona natural que representa a la Compañía Colombiana de Distribución Ltda. Empero, una omisión de esa naturaleza no es un defecto que haga fallida la demanda.

38.3. Respecto a la falta de autenticidad del documento del folio 10 del cuaderno No. 3, hay que anotar que la eficacia o ineficacia de un anexo en la campo probatorio, en nada incide en los requisitos para admitir y proveer sobre la demanda.

38.4. Obra en autos, legalmente expedida, copia de la partida de nacimiento de Martha Cecilia Núñez Serrano (fl. 111, c. Corte). Luego la eventual falla denunciada desapareció.

38.5. El ataque basado en las copias de las actas de nacimiento de Bárbara, Yesis, Diego Fernando Núñez Serrano y Numar Obermar Núñez Arce, carece de sustento como que su derecho se funda en su condición de damnificados, en razón del daño que se le ocasionó dada la dependencia económica que tenían con los fallecidos, según se dejó dicho en el aparte pertinente de esta sentencia (No. 253, fls. 40 y 41).

38.6. La falta de autenticación de la certificación expedida por la Oficina de Tránsito y Transporte de Condoramarca (fl. 14, c. 1) no es motivo de inadmisión. Luego es intrascendente la alegación que en tal sentido se formula en la apelación, como que es cuestión probatoria que nada infiere para proveer sobre la demanda.

38.7. En el folio 26 del cuaderno #4 obra el registro civil de nacimiento de José Obermar Núñez, prueba que fue incorporada legalmente al informativo, por auto del 8 de septiembre del corriente año (fl. 507, c. C.), por lo tanto no se abre paso la objeción planteada al respecto.

38.8. Con fundamento en la certificación que obra en el folio 17 del cuaderno No. 1 considera el apelante demandado Mejía Gil que el fallo debió ser inhibitorio, pues si en ésta se determina que el automotor del reo José Liborio Mejía Gil, de placas TK 0065..., vinculado a la Empresa Colombiana de Distribución Ltda., tenía reserva de dominio a favor de Urreas y Cía Fananto S.C., debió llamarse a esta última para integrar el contradictorio.

Sobre el particular es de precisar que como la relación procesal y material, en casos como el presente, tiene que trabarse entre la persona que resultó perjudicada con el delito o culpa y la directamente responsable del daño o perjuicio o sus herederos, es forzoso admitir que por el extremo pasivo es necesaria la intervención del titular de la reserva de dominio sobre el vehículo, ora porque la comparecencia de éste no va a exonerar al demandado de la responsabilidad personal que se le exige, ya porque no podría comprometer la responsabilidad del vendedor o de la casa vendedora que hizo constituir la reserva de dominio para efectos de la garantía del crédito únicamente.

38.9. Los anteriores argumentos son aplicables también al ataque sustentado por el apoderado del demandado José L. Mejía en el hecho de no estar integrado por activa el contradictorio, por no haberse vinculado al acreedor prendario Corporación Financiera de Transporte.

38.10. Con relación a los documentos que se cuestionan en el escrito del folio 192 del cuaderno No. 1, es conveniente dejar sentado:

a) Las fotocopias que van del folio 2 al 62 del cuaderno No. 2 fueron expedidas en obediencia al auto del 10 de abril de 1987 (fl. 123, c. 1). Luego deben ser estimadas en lo que de ellas resulte, frente a los hechos que son materia de controversia judicial.

b) Respecto de los folios 88 a 93, se remitieron para la ratificación de los testimonios de que trata el despacho comisorio No. 086. Y en autos obran las declaraciones de Dora Cecilia Mazo Arroyave y Raúl Hernando Osorio Berrío, rendidas ante juez comisionado. Por modo que como fue la versión última la que se estimó para los fines de esta providencia, y no la rendida ante el Juzgado Penal Municipal de Barbosa, carece de trascendencia la objeción que a las mismas se les hace.



c) La objeción a los documentos que van del folio 118 al 130 del cuaderno No. 2, es infundada, porque, de un lado, en el avalúo del vehículo doble troque no incidió el contenido del memorando interno visible a folios 118 a 119 y de otra parte, por no haberse probado quién era Alberto Iván Berancur Mesa a la época del accidente, no fue posible regular el monto del lucro cesante, ninguna consideración se hizo en relación con los documentos que obran de folios 120 a 130, c. 2.

d) Frente a las fotocopias de folios 134 a 138 del cuaderno No. 2, en autos obran las declaraciones de Fernando Muñoz Quijano, Alirio Pinzón Montoya y Gabriel Bustos Naranjo, que fueron objeto de ratificación ante juez comisionado, conforme con lo ordenado en el despacho comisorio No. 093. Y son éstas a las cuales se refieren las fotocopias que se anexaron al despacho comisorio. Debe anotarse que Cruz Paz Urrutia no ratificó su declaración (fl. 136 vto., c. 2).

e) La objeción que se hace al documento del folio 162, c. No. 1 resulta irrelevante, en razón de que el contenido de él no jugó ningún papel en la regulación de perjuicios que se reclaman de la parte demandada.

38.11. La perjudicialidad penal alegada en la sustentación de la apelación carece de asidero toda vez que por sentencia del 2 de septiembre de 1987, el Juzgado 3o. Superior de Medellín absolvió de los cargos a Luis Eduardo Toro Betancur (fls. 56 a 62, c. 5).

Por consiguiente, como en el asunto de que se trata no concurre ninguna de las situaciones atrás consideradas, amén de que el ejercicio de actividades peligrosas la presunción de culpa que consagra el artículo 2356 del C. C. sólo puede destruirse acreditando una causa extraña, esto es, una fuerza mayor o caso fortuito, la culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero, lo que acá no se demostró, tiene que seguirse que ésta continúa en pie para los efectos de la indemnización de perjuicios que aquí se reclama.

38.12. La disconformidad que se manifiesta en relación con la forma como se atendió todo lo atinente con el fundamento y piedra angular de la sentencia condenatoria, es decir con el dictamen pericial, es aspecto que resulta intrascendente en la decisión que aquí se profiere, porque si bien *el juzgador tiene que valorar en conjunto las pruebas*, precisamente esa valoración conduce a que se le otorgue mayor grado de convicción al peri-



raje decretado de oficio y se desechó el de instancia.

38.13. Como en ocasión del recurso extraordinario de casación que interpuso la parte demandante contra el fallo del *ad quem*, que REVOCO la sentencia de primer grado, y en su lugar ABSOLVIO a la parte demandada de los cargos endilgados en su contra, esta Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el mérito de convicción de la prueba testimonial recaudada dentro del proceso, y además en este fallo sustitutivo se han indicado las razones por las cuales la declaración de las personas que en él se citan evidencian la responsabilidad civil en que incurrieron los demandados, se considera innecesario volver sobre ese tema.

38.14. Habiéndose prescindido para la regulación de los perjuicios del dictamen pericial practicado en primera instancia, resulta superfluo hacer cualquier consideración sobre el particular.

38.15. La falla que se endilga al libelo incoatorio del proceso además de no haber sido advertida mediante la excepción previa consagrada en la ley procesal, no tiene la trascendencia que el recurrente le señala en la sustentación del recurso de apelación. Al efecto: Claramente se pidió condenar a los demandados por los perjuicios de índole material, tanto presentes como futuros ocasionados a Esther Julia Castillo Orejuela y a los menores Diego Fernando, Carlos Enrique, Alex Javier Núñez Castillo. Y se precisó que la cuantía de este perjuicio era superior a \$6'500.000,00. Y si bien no se especificó el monto que correspondía a cada persona, esa deficiencia no le resta efectos a la pretensión intentada, la cual tiende a la reparación total y completa del perjuicio ocasionado a los aquí demandantes con ocasión del tráfico suceso de que dan cuenta los hechos de la demanda.

Lo propio debe decidirse de la otra súplica de la demanda que cuestiona la parte demandada. Por la demás, en el escrito que corre en el folio 54 del cuaderno No. 1, se precisó que la cuantía de los perjuicios materiales reclamados era superior a \$6'000.000,00.

38.16. En relación con la objeción que se hace respecto de la aplicación del artículo 991 del Código de Comercio, hay que observar que en el presente caso no se está demandando a la Sociedad Colombiana de Distribución Ltda. por el cumplimiento de obligaciones que surjan de un contrato de transporte, sino por la responsabilidad que a ella le cabe en vir-

tud del contrato de afiliación que entre ésta y el aquí demandado José Liborio Mejía Gil existe (fl. 74, c.2), para la explotación comercial del vehículo de Placas TK 0065, todo en los términos del art. 2344 del C.C.

*Recuérdase que el solo hecho de estar afiliado un vehículo a determinada sociedad, implica que ésta en principio soporte alguna responsabilidad y tenga algún control sobre el vehículo. Entonces como en el presente caso no se demostró ni con el contrato, ni con el contrato, ni con los reglamentos de la entidad demandada, que no existía ese control efectivo de la compañía sobre el mencionado vehículo, la afirmación que se hace en los alegatos de sustentación de la apelación de no tenerlo, no pasa de ser una suposición y en nada modifica la responsabilidad que a ella le cabe por razón de la referida afiliación. Vale la pena desuacar que el dicho del conductor no podría acreditar que la compañía no intervino en el contrato de transporte en cualquier forma, porque su declaración no es la de un tercero ajeno a la relación procesal (es uno de los demandados), y porque era de cargo de Colombiana de Distribución Limitada demostrar que no tuvo tal injerencia.*

*En el punto tiene dicho la jurisprudencia:*

*"...Y esta afiliación o vinculación de un automotor a una empresa de servicio público de transporte, legitima suficientemente a la empresa afiliadora para responder por los perjuicios que se causan a terceros en el ejercicio de la actividad peligrosa que entraña la movilización de vehículos automotores para la satisfacción del aludido servicio, pues si ella es la que crea el riesgo "...es advertido, ha dicho esta Corporación, que se le repare culpable de todo detrimento ocasionado por su obrar y que del mismo modo es equitativo que solo pueda enervar esa presunción de culpa demostrando fuerza mayor, caso fortuito, intervención de un elemento extraño o culpa exclusiva de la víctima..." (C111, 73. Y sentencia del 10. de febrero de 1991).*

Así las cosas y como la certificación que obra en los folios 27 a 28 del cuaderno principal muestra que Colombiana de Distribución Limitada es una sociedad legalmente constituida y que el objeto social de esta compañía "es actuar como empresa de transporte, especialmente en el servicio particular y público automotor terrestre, transportadora de cosas o mercancías" y en desarrollo de ese objeto social celebró contrato de filiación con José Liborio Mejía Gil (fl. 74, c. 2). "Se presume cierto el contrato de afiliación celebrado entre Colombiana de Distribución Ltda y José Liboria

Mejía, respecto del camión de placa TK 0065", ha de concluirse que la relación sustancial en comento, la vincula para todos los efectos legales, en la reparación del daño que aquí se reclama.

*Entre las obligaciones de las empresas de transporte está la de "Contratar por sí mismas el personal autorizado de conductores, sin perjuicio de la solidaridad establecida en la Ley 15 de 1959" (art. 21 Decreto 1393 de 1970).*

*Pues bien. Si conforme con la norma transcrita, las empresas de transporte en principio gozan de autonomía para seleccionar el personal de conductores, habría que decir que en este caso concreto, tendrá que haber demostrado alguna de las causas eximentes de responsabilidad y como se dijo la declaración del conductor no es aceptable por razón de la misma condición de demandado, por lo tanto, la responsabilidad civil consagrada en los artículos 2341, 2344 y 2356 del C. C. conserva su vigencia.*

En relación con el pago que realizó Aseguradora Colseguros con ocasión de la expedición de la póliza No. 320604 R1901, en favor de la Corporación Financiera del Transporte por la cantidad de \$3'006.403,00 moneda corriente (l. 145, c.1), debe precisarse que como tal cantidad no cubre el valor total de la indemnización, conforme a la estimación pericial practicada ante esta Corporación, es de lógica concluir que los autores del daño están obligados a reparar el perjuicio causado en el saldo pendiente, teniendo en cuenta el fin de estas acciones indemnizatorias y lo que en realidad procesal y probatoria muestra en autos, además esta cantidad fue deducida del valor del daño emergente (No. 27, fls. 44 y 45).

Por dicha razón ese pago parcial no reparó en su integridad el daño ocasionado al demandante Rito Antonio Avila López.

39. Por las razones expuestas, la sentencia del 7 de junio de 1989 pronunciada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín (fls. 175, al 187 c. 1) se confirmará en los numerales 1o. y 5o., se reformarán los literales a), b), c), d) y el e) y se revocará el f) del numeral 2o., para señalar las sumas aceptadas por la Corte conforme al dictamen pericial que se acoge (hechas las salvedades anotadas) en favor de los sujetos que se legitimaron para reclamar la indemnización de perjudicados; se revocará el numeral 3o. para en su lugar negar el ajuste que por corrección monetaria se decreta en ese numeral; y se revocará el numeral 4o., para en su lugar

condenar a los demandados a pagar en favor de los demandantes por perjuicios materiales causados las siguientes sumas:

Esther Julia Castillo Orejuela	\$33.845.282.85
Marleny Serrano	\$26.715.194.85
Diego Fernando Núñez Castillo	\$183.444.90
Carlos Enrique Núñez Castillo	\$323.748.05
Alex Javier Núñez Castillo	\$1.538.304.85
Bárbara Núñez Serrano	\$120.633.52
Martha Cecilia Núñez Serrano	\$225.324.85
Ober Yesid Núñez Serrano	\$403.885.85

Se reformará el numeral 6o. en el sentido de condenar a los demandados al 100% de las costas del proceso en la primera instancia y al 80% en la segunda; se declarará probada la objeción por error grave al peritaje practicado en esta instancia, por los expertos Jesús Angel Castañeda y Fernando Cadena Jiménez, en cuanto al valor del lucro cesante futuro del camión Volvo de placas SN 3427 y no probadas las objeciones en lo demás, sin lugar a que los peritos nombrados restituyan o se les retenga su asignación como honorarios. Destácase que para la regulación de los perjuicios en favor de las compañeras de los occisos y demás damnificados, la Corte acogió (con las exclusiones varias veces indicadas) la adición al dictamen decretada por auto del 14 de septiembre de 1993 (fls. 421 a 423) y rendida por los expertos en el trabajo de los folios 475 y 498 (c. Corte).

### DECISION

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sede de instancia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### RESUELVE

Primero. CONFIRMAR los numerales 1o. y 5o. de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín el 7 de junio de 1989.

Segundo. REFORMAR el numeral 2o. de la referida providencia, literales a, b, c, d, y e que quedarán así:

CONDENAR solidariamente a LUIS EDUARDO TORO BETANCUR, JOSE LIBORIO MEJIA GIL y la sociedad "COLOMBIANA DE DISTRIBUCION LTDA." a pagar por los conceptos indicados en esta providencia, y en favor de:

Rito Antonio Avila López	\$44'875.248.81
Diego Fernando Núñez Castillo	\$183.444.90
Carlos Enrique Núñez Castillo	\$323.748.05
Alex Javier Núñez Castillo	\$1'538.304.85
Barbara Núñez Serrano	\$120.633.52
Martha Cecilia Núñez Serrano	\$225.324.85
Ober Yesid Núñez Serrano	\$403.885.85

Tercero. Revocar el literal f) del numeral 2o. del fallo de *a quo* y, en su lugar, NEGAR la pretensión a pagar perjuicios morales.

Cuarto. REVOCAR el numeral 3o., para en su lugar NEGAR el ajuste que por corrección monetaria se decretó en ese numeral.

Quinto. REVOCAR el numeral 4o. para en su lugar CONDENAR a los demandados a pagar en favor de ESTHER JULIA CASTILLO OREJUELA y MARLENY SERRANO, las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicios materiales:

a) ESTHER JULIA CASTILLO OREJUELA	\$33'845.282.85
b) MARLENY SERRANO	\$26'715.191.85

Sexto. DECLARAR probada la objeción por error grave al concepto pericial rendido por Jesús Angel Castañeda y Fernando Cadena Jiménez, sólo en cuanto al valor del lucro cesante futuro del camión Volvo de placas SN 3427, y por ende no probadas las objeciones en lo demás.

No hay lugar a ordenar la restitución o retención de los honorarios de los auxiliares de la justicia.

Séptimo. CONDENAR a la totalidad de las costas de primera instancia y al ochenta por ciento (80%) de las de segunda instancia a la parte demandada en favor de los demandantes. Liquidense.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVA OPORTUNAMENTE  
AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

Referencia: Expediente No. 3000

*Pedro Lafont Pianetta, Nicolas Bechara Simancas, Eduardo García  
Sarmiento, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Hector Murín Naranjo, (en  
uso de permiso.) Rafael Romero Sierra'*

**CASACION — Interés para Recurrir /**  
**CASACION — Justiprecio**

1. Si el interés para recurrir no se encuentra definido, ya porque el contenido del fallo no puede precisarse, o porque éste contiene condenas que no corresponden a la época de la sentencia, es indispensable decretar la prueba pericial para establecerlo, y una vez determinado, el Tribunal resolver sobre la concesión del recurso extraordinario, de acuerdo con la cuantía vigente.

2. En el presente caso, el tribunal dedujo equivocadamente el monto de dicho interés, al no tomar en cuenta otros conceptos complementarios de la pretensión.

F. F.; C. de P.C. Art.: 370.

*Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Santafé de Bogotá, Distrito Capital, veintisiete (27) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).*

*Magistrado Ponente: Nicolás Bechara Simancas*

*Referencia: Expediente No. 5181*

*Auto 324*

Provee la corte respecto del recurso de queja interpuesto por la parte demandante, contra el auto de 28 de julio de 1994, en virtud del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, denegó conceder el de casación formulado por la misma parte, dentro del proceso ordinario de LA FEDERAL. COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. contra FERROMOLQUES S.A.



*Antecedentes*

1. Contra la sentencia del Tribunal de 30 de junio de 1994, interpuso recurso de casación la parte demandante.

2. El *ad quem* argumentando que "el valor actual de la resolución desfavorable a la sociedad LA FEDERAL CIA. DE SEGUROS S. A. es de veinticuatro millones setecientos cincuenta y tres mil novecientos dieciocho (\$24'753.918) M. L. equivalente a la suma que ella pagó por concepto de indemnización a la sociedad FERROMOLQUES S.A., suma que no puede verse afectada por corrección monetaria y pago de intereses...", denegó la concesión del recurso de casación, con base en que "el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente debe ser de \$27'440.000.00 o exceder de esa suma...".

3. Recurrida en reposición la providencia denegatoria de tal medio de impugnación, el Tribunal mantuvo su decisión, argumentando que el artículo 1096 del Código de Comercio "nace viable la subrogación 'hasta concurrencia de su importe' o lo que es lo mismo de la suma pagada por la aseguradora, única y exclusivamente", y ordenó la expedición de copias solicitada por el recurrente para interponer el recurso de queja.

4. Sostenta el quejoso el recurso aduciendo que las sentencias de primera y segunda instancia, no consideraron "el aspecto de la indexación o intereses que como pretensiones habían sido solicitadas en la demanda", y que el Tribunal desconoció "el dictamen pericial que obra en el proceso, con el cual se demuestra que el valor del justiprecio para recurrir supera el mínimo señalado en el Decreto Extraordinario No. 2282 de 1989, concordante con el Decreto 522 de 1988".

*Consideraciones:*

1. De conformidad con el artículo 366 del C. de P.C., entre los requisitos de procedibilidad del recurso de casación, está el de que el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente, sea o exceda el monto señalado en la ley, esto es, que el interés para recurrir, deviene del monto del agravio que la sentencia del *ad quem* le cause al recurrente, interés que es necesario establecerlo a la fecha en que aquella se profiere.

2. "Cuando sea necesario tener en cuenta el interés para recurrir y éste

*no aparezca determinado, antes de resolver sobre la procedencia del recurso el Tribunal dispondrá que aquél se justifique por un perito...*" (art. 370 *ibídem*). lo cual significa, que si no se encuentra definido, ya porque del contenido del fallo no puede precisarse, o porque éste contiene condenas que no corresponden a la época de la sentencia, es indispensable decretar la prueba pericial para establecerlo, y una vez determinado, el Tribunal resolver sobre la concesión del recurso extraordinario, de acuerdo con la cuantía vigente.

3. Si en el presente caso, la pretensión de condena implorada en el libelo incoatorio por la parte actora, se concretó a la suma de \$24'753.918.00, más "la correspondiente Indexación o reajuste monetario desde el día 22 de junio de 1989... más los intereses moratorios comerciales correspondientes a dicha suma...", infiérese, que el Tribunal dedujo equivocadamente el monto de dicho interés, al no tomar en cuenta esos otros conceptos complementarios de la referida pretensión.

4. Así las cosas, como la cuantía del interés para recurrir en casación, para el caso concreto, —que surge del valor de la totalidad de las pretensiones no concedidas al impugnante—, no está determinado ni precisado en su integridad, impónese ordenar, que la actuación vuelva al *ad quem*, para que proceda de conformidad con lo aquí expuesto, puesto que la cantidad del agravio deducida por el Tribunal \$24'753.918.00, no alcanza la suma que para la fecha de la sentencia estaba rigiendo, vale decir, la de \$27'440.000.00. En esos términos la decisión del Tribunal a más de incompleta se torna prematura.

#### *Decisión:*

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, dispone DEVOLVER la actuación al Tribunal, para que tomando en cuenta la indexación y los intereses contenidos en la pretensión de condena solicitada en la demanda, decida sobre la procedencia del recurso de casación.

**COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVA SE LA ACTUACION AL TRIBUNAL DE ORIGEN.**

*Pedro Lafont Pianetta, (con salvamento de voto), Nicolas Bechra Simancas, Eduardo García Sarmiento, Carlos Esteban Jaramillo Schloss,*

**"CASACION — Concesión (SALVAMENTO DE VOTO) /  
CASACION — Cuantía (SALVAMENTO DE VOTO) /  
CASACION — Interés para Recurrir  
(SALVAMENTO DE VOTO)**

Está mal denegada la concesión del recurso de casación, en la medida en que desde el punto de la cuantía del interés para recurrir, la resolución desfavorable para la parte actora, contenida en la sentencia recurrida, supera el monto de la cifra requerida para tal efecto que en sentir de los magistrados que salvan voto, equivale a \$22.000.000,00

**SALVAMENTO DE VOTO**

Con e. respeto y consideración de siempre, nos apartamos en esta oportunidad del criterio mayoritario de la Sala, plasmado en esta providencia, como quiera que consideramos *que está mal denegada la concesión del recurso de casación, en la medida en que desde el punto de la cuantía del interés para recurrir, la resolución desfavorable para la parte actora, contenida en la sentencia recurrida, supera cómodamente el monto de la cifra requerida para tal efecto que, en nuestro sentir, equivale a \$22.000.000,00, por las razones que a continuación se transcriben:*

*"Partiendo de la base establecida en el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, tal como quedó con la reforma introducida por el Decreto 2282 de 1989, la cuantía del interés para recurrir era, por tal época, de \$10.000.000,00, monto que al tenor del párrafo 1o. del mismo artículo "...Se ajustará del modo que disponga la ley".*

*"La normatividad vigente sobre el particular es la recogida en el Decreto 522 de 1988 que, de un lado, estableció el reajuste automático de las cuantías señaladas en sus artículos 1 y 2, en un 40% cada dos años a partir del 1o. de enero de 1990 (artículo 3o.), y, de otro, previó que "los*

*montos porcentuales a que se refiere el artículo anterior, se aplicarán sobre las cuantías establecidas en los artículo 1 y 2 del presente Decreto..." (artículo 4o.).*

*"De suerte que el reajuste automático de que trata el artículo 3o. del decreto 522 de 1988 cuenta, según lo dispuesto por el artículo 4o. ibídem, con una base fija invariable que es la de \$10.000.000.00, e igualmente con un aumento porcentual también fijo e invariable, que es de \$4.000.000.00 cada dos años, razón por la cual estimamos que el monto de la cuantía del interés para recurrir en la actualidad es igual o superior a \$18.000.000.00". (Auto de 14 de septiembre de 1993).*

De manera que, muy respetuosamente, estimamos que de plano ha debido declararse mal denegada aquella impugnación extraordinaria y, en su lugar, concederse, desde luego teniendo en cuenta únicamente el aspecto relacionado con la cuantía.

RAFAEL ROMERO SIERRA, PEDRO LAFONT PIANETTA

Fecha ut supra.

#### \* RETIRO DE LA DEMANDA / REVISION — Improcedencia

Concepto de “retiro de la demanda”. Improcedencia de éste, respecto del recurso de revisión.

Igual sentido: CXXXIV, 10

F. F.: C. de P. C. Art: 75, 88, 340, 344, 347, 383 ibídem..

*Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Santafé de Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).*

*Expediente No. 4756*

*Auto N°325*

Decídese la petición contenida en el memorial que precede, por medio de la cual el mandatario judicial de la recurrente en revisión manifiesta que, con apoyo en el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil, retira la demanda con la que su poderdante Ninf Ortiz de Rosero interpuso recurso de revisión contra la sentencia de 21 de noviembre de 1991, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué en el proceso ordinario promovido por Yesid Guzmán Durán contra la recurrente.

#### *1. Antecedentes*

1. Ninf Ortiz de Rosero, por intermedio de mandatario judicial, interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de fecha y procedencia anotadas, proferida en el referido proceso ordinario, mediante demanda presentada el 26 de noviembre del año próximo pasado.

2. La aludida demanda, contentiva del mencionado recurso extraordinario fue, en principio, admitida mediante auto de 28 de febrero del

año en curso, en virtud del cual, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 381 y 382 del Código de Procedimiento Civil, se dispuso la prestación de la correspondiente caución, en los términos y para los efectos previstos en el inciso primero del artículo 383 *ibídem*.

3. Cumplida aquella exigencia, la Corte, por auto del 22 de marzo siguiente, aceptó la caución prestada y, en consecuencia, solicitó al juzgado de la causa la remisión del expediente contentivo del proceso, cuya sentencia se impugna en revisión, el que fue recibido el 17 de mayo, según informe secretarial obrante al folio 72 vto. de este cuaderno.

4. Finalmente, como del cotejo realizado entre el libelo contentivo del precitado recurso extraordinario y la actuación surtida en el remitido proceso, se estableciera la concurrencia de los requisitos exigidos para la admisión definitiva del recurso, la Corte así procedió por auto de 30 de mayo, ordenando la notificación de dicha providencia al demandado Yesid Guzmán Durán y el respectivo traslado de la demanda, diligencia que hasta el momento no se ha cumplido.

## *II Consideraciones*

1. Una visión integral y armónica del Capítulo Primero del Título VII con el Capítulo VI, del Título 18, ambos del Libro 2o. del Código de Procedimiento Civil, permite afirmar, sin hesitación alguna, que *el retiro de la demanda contemplado en el artículo 33 de la mencionada codificación procesal civil, es una facultad que el demandante solamente puede ejercer en frente de la demanda "...con la que se promueve todo proceso..."*, (artículo 75 del Código de Procedimiento Civil), es decir, *de aquella mediante la cual "...ejercita el demandante el derecho de acción frente al Estado y su pretensión contra el demandado..."* (CXXXIV, 19), *mas no en relación con otras, como sucede con aquellas con las cuales se ejercía el derecho de impugnación, es decir, el control de legalidad de las providencias judiciales, respecto de ciertos recursos que, como los extraordinarios, especialmente el de revisión, le imponen al impugnante el deber de sustentarlo por intermedio de un escrito que la ley también denomina demanda, cuyos requisitos y trámite señala particularizada y detalladamente la misma ley procesal civil, sin que en*

*la regulación legal pertinente se advierta la posibilidad de que una vez formulado el recurso, el recurrente disponga de la facultad de retirar la demanda con que lo formula.*

2. Así, en relación con el trámite de la revisión resulta tempestivo advertir cómo la mera interposición del recurso implica que la certeza del derecho declarado o reconocido en la sentencia que se impugna queda en entredicho; y que, si la revisión no prospera, el recurso puede ser el determinante de perjuicios que sufra la parte recurrida, por haberse propuesto infundadamente. De ahí que la legislación procesal colombiana, haya subordinado la admisión de la demanda de revisión al otorgamiento por el recurrente de una caución, mediante la cual éste garantice el pago a la contraparte de la prestación que resulte de los factores enunciados en el inciso primero del artículo 383 *ibidem*, y que de ahí en adelante, se prevean hipótesis de inadmisión, rechazo y admisión definitiva de la demanda, así como prohibición expresa de reforma alguna.

3. *De manera que, interpuesto el recurso de revisión con la presentación de la respectiva demanda, e impulsada la actuación hasta conseguir la admisión definitiva, no queda el arbitrio del recurrente truncar el trámite respectivo acudiendo al expediente del retiro de la demanda contemplado en el precitado artículo 88 del Código de Procedimiento Civil, sino a una cualquiera de las formas anormales de terminación del proceso, algunas de ellas previstas igualmente para la conclusión anticipada de ciertos actos procesales, entre ellos, los recursos interpuestos, como se desprende de los artículos 340, 344 y 347 del Código de Procedimiento Civil.*

4. Pero ni aún el amparo de la preceptiva contenida en el artículo 88 *iusdem* puede otorgársele despacho favorable a la petición del mandatario judicial de la recurrente, por cuanto el retiro de la demanda está subordinado, entre otros requisitos, a que no se hubieren "...practicado medidas cautelares", entre las cuales el Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil contempla en el Título XXXIV, las *cauciones*, que en el presente caso se prestó por la recurrente para garantizarle a la contraparte el pago de las prestaciones determinadas en el inciso 1o. del artículo 383 *ibidem*, circunstancia que hace igualmente improcedente el retiro de la demanda contentiva del recurso extraordinario interpuesto y admitido.



*III. Decisión*

Por lo brevemente expuesto, se niega la solicitud elevada en memorial anterior por el mandatario judicial de la recurrente en revisión.

Notifíquese.

RAFAEL ROMERO SIERRA

**\*INCONGRUENCIA / ERROR IN PROCEDENDO / ERROR  
DE HECHO / INTERPRETACION DE LA DEMANDA**

1) ¿Cuándo incurre el juzgador en incongruencia?

2) Diferencia entre el error in procedendo, tipificador de la incongruencia, y el error de hecho en que se puede caer al apreciar la demanda, propio de la causal primera de casación.

F.F.: C. de P.C. Art.: 305; Art.: 368 Numeral: 2.

**RESTITUCIONES MUTUAS / NULIDAD  
SUSTANCIAL / ACTO JURIDICO / CONTRATO /  
CORRECCION MONETARIA**

En tratándose de restituciones mutuas, aún de oficio, deben ser ordenadas como consecuencia de la declaratoria de nulidad de un acto o contrato. El juzgador también de oficio, debe disponer la revalorización de las sumas de dinero a reintegrarse por razón de las mismas.

**VIOLACION NORMA SUSTANCIAL /  
PAGO DE LO NO DEBIDO**

Desacuerdo del juzgador en su juicio, arcaible a la luz de la causal primera de casación, respecto de la aplicabilidad o alcance del art. 2318 de C.C.

F.F.: C.C. Art.: 2318.

**CASACION-Cargos / TECNICA DE CASACIÓN-  
Yuxtaposición de Argumentos**

Contradicción de argumentos en los cargos -o el asunto queda gober-

nado por el art. 518 del C. de Co. y fue este transgredido por el tribunal, o se encuentra sujeto al artículo 2014 del C.C.

FUENTE FORMAL: C. de Co. Art.: 518; C.C. art. 2014.

### ARRENDAMIENTO-Renovación / ESTABLECIMIENTO COMERCIAL / INMUEBLE

El ejercicio del derecho a la renovación del contrato de arrendamiento en favor del arrendatario de inmueble ocupado con establecimiento comercial por no menos de dos años consecutivos, al igual que el de cualquiera otro, no es absoluto en el sentido de que su titular se lo puede imponer, sin más, al sujeto pasivo, o sea, al propietario del establecimiento.

F.F.: C. de Co. Art. 519.

### ERROR DE HECHO / INTERPRETACION DE LA DEMANDA

En el caso sub-judice, no se le atribuye al tribunal un trascendente error fáctico en el entendimiento de la demanda.

### VIOLACION NORMA SUSTANCIAL-Vía Directa

La vía directa presupone que el impugnador no ha de discurrir de los hechos según los vio el juzgador.

*Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil* — Santafé de Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) 31 de octubre de 1994.

Magistrado Ponente: *Dr. Héctor Marín Naranjo*

Rad. Expediente No. 3868.

Sentencia Nº 132

Provee la Corte en relación con el recurso de casación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que data del dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y uno (1991), proferida dentro del proceso ordinario

instaurado por los señores FABIO HURTADO SALDARRIAGA y JAIME SALAZAR ZULUAGA, en frente del señor PEDRO LUIS GONZALEZ y de la sociedad "DISTRIBUIDORA DE CONFITES LTDA.", y al que, en la condición de demandados, fueran vinculados luego los señores JAIME ESCOBAR Y ROSA ELENA SANTAMARIA DE ESCOBAR.

*Antecedentes:*

1. En demanda cuyo conocimiento se le atribuyó en el reparto al Juzgado 2 Civil del Circuito de Medellín, los actores ya nombrados pidieron que con citación y audiencia de los demandados también citados y previos los trámites de un proceso ordinario de mayor cuantía, fuese dictada sentencia en la que se declarase que en relación con el contrato de arrendamiento existente entre estos como arrendadores y aquellos como arrendatarios, contrato que atañe al inmueble determinado en el hecho primero de la demanda, "... para la determinación del precio o canon de arrendamiento no se tendrá en cuenta, en manera alguna, ni las construcciones levantadas sobre el lote de terreno por el demandante-arrendatario Jaime Salazar Zuluaga, ni el good will, buen nombre, la notoriedad y buena fama adquiridos por el establecimiento de comercio denominado 'Los Recuerdos' que allí funciona". Que igualmente se declarase que el mismo contrato "se encuentra renovado y prorrogado, en las mismas condiciones actualmente existentes, por el tiempo equivalente a los cánones de arrendamiento pagados en forma anticipada por los arrendatarios a los arrendadores, condiciones y circunstancias determinadas en los hechos de la presente demanda".

2. Los hechos que sirvieron de fundamento a las anteriores pretensiones son los que a continuación se compendian.

En agosto de 1972, los demandantes suscribieron contrato de arrendamiento con los señores Rosa Elena Santamaría de Escobar y Jaime Escobar Restrepo, sobre un lote situado en la cra. 64B, entre calles 50 y 51 de Medellín, con una duración inicial de un año y un canon suma de \$1 000.00 mensuales; el lote, que se encontraba desprovisto de construcciones y mejoras, se destinaría al aparcamiento de vehículos.

Poco tiempo después, en conversaciones con los arrendadores, los demandantes determinaron poner a funcionar allí un restaurante y estadero, al que llamaron "Los Recuerdos" y que prontamente adquirió fama.

Las partes del contrato acordaron distintos reajustes del canon, llegando hasta los \$23.000,00 mensuales, suma esta que rige desde 1978 o principios de 1979, porque las partes no se han puesto de acuerdo acerca del monto del reajuste.

Las mejoras hechas por Jaime Salazar Zuluaga, a ciencia y paciencia de los en ese entonces propietarios del inmueble, consistieron en una edificación apta para el establecimiento que allí funciona, con baños cómodos e higiénicos para damas y hombres, piso en cemento esmaltado divisiones y corredores enchambrados, cocina en baldosa, techos en madera con tablilla y tejas de barro, instalaciones para el estar de los artistas, patio para el estacionamiento de vehículos, decorado con hermosos jardines, etc.

Las mejoras fueron incluidas en el catastro municipal, y Salazar Zuluaga ha venido sufragando los impuestos correspondientes al fisco municipal.

Según declaración rendida bajo juramento el 9 de febrero de 1979 ante el Juez 13 Civil del Circuito de Medellín por Jaime Escobar Restrepo, éste, al momento de vender el inmueble puso en conocimiento de los nuevos propietarios la existencia de las edificaciones y mejoras establecidas por Jaime Salazar, que no entraban en la negociación, y que el día que terminara el contrato deberían ser objeto de arreglo con el inquilino que las construyó.

Un inicial proceso de lanzamiento instaurado por los nuevos propietarios del inmueble culminó con sentencia que declaró próspera la excepción de petición antes de tiempo; en él los inquilinos alegaron y demostraron ampliamente la existencia de las mejoras antes citadas, mas por razón de la excepción dicha no hubo pronunciamiento al respecto.

Vencido el plazo del contrato, los propietarios entablaron otro proceso orientad a fijar las nuevas condiciones del contrato, especialmente atañedora al valor del canon mensual que debía ser pagado, proceso tramitado con la sola presencia del demandado Jaime Salazar Zuluaga, quien alegó derecho de retención por causa de las susodichas mejoras, las cuales no podrían ser tenidas en cuenta para la tasación de la renta.

La juez de primera instancia, en providencia que en el punto quedó

ejecutoriada, fijó el valor de la renta mensual en la suma de \$130.000,00 considerando que de ese valor debía haber excluido lo concerniente a las mejoras.

La sentencia con la que culminó definitivamente el proceso anterior dispuso que el canon de \$130.000 debería regir, no desde la ejecutoria de la sentencia, sino a partir de la notificación de la demanda a los demandados, lo que implicaba que estos resultaban adeudando, por concepto de cánones causados durante la tramitación del proceso, una suma cercana a los tres millones de pesos, lo que los colocaba en una difícil situación, lo que fue aprovechado por los arrendadores para iniciar un nuevo proceso de terminación del contrato de arrendamiento, proceso este en el que se invocó la mora en el pago de aquellos, en cuantía de \$107.000,00 mensuales, diferencia existente entre el canon anterior y el fijado en la sentencia.

Los demandados, para poder oponerse a las pretensiones de los demandantes, tuvieron que consignar a órdenes del Juzgado la suma de \$2.889.000,00, suma reclamada por los arrendadores como diferencia entre los cánones de arrendamiento pagados durante los meses de tramitación del proceso verbal y la suma fijada como renta mensual en la sentencia dictada en el mismo.

El correndatario Fabio Hurtado Saldarriaga introdujo, ante el Tribunal de Medellín recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva del proceso verbal, recurso despachado favorablemente al declarar fundada la causal 7 del artículo 380 del C. de P.C., por lo que anuló todo lo actuado en tal proceso. En estas condiciones el proceso de lanzamiento, apoyado en la mora en el pago de los arrendamientos, mora que se fundaba en la sentencia del proceso declarado nulo, ese proceso de lanzamiento, se repite, se dio por terminado en sentencia ejecutoriada.

Los arrendatarios, durante 17 meses, junto con los \$23.000,00 del canon de arrendamiento anterior a la sentencia, consignaron \$107.000,00, y, al terminar el proceso de lanzamiento, por este último concepto, habían consignado \$1.819.000,00.

La consignación de esas dos sumas, la de \$2.889.000,00 -consignada para ser oídos en el proceso de lanzamiento, y la de \$1.819.000,00 -total de lo consignado durante 17 meses a razón de \$107.000,00 mensuales-, no

son una aceptación ni expresa ni tácita de un nuevo canon mensual de arrendamiento, y el total de ambas cantidades (\$4.708.000,00) pertenecía a los arrendatarios, quienes eran los únicos que podían darle la destinación correspondiente.

Aun cuando inicialmente los arrendatarios le expresaron al juzgado que el dinero depositado por concepto de reajuste de los cánones de arrendamiento no debía ser entregado a los alrededores, más adelante, ya andando el proceso, el apoderado de Jaime Salazar Zuluaga, ante petición de entrega elevada por los demandantes, manifestó su asentimiento a la entrega de esas sumas "... las que les serán entregadas a cuenta de arrendamiento". Con todo, la juez del conocimiento no accedió a la entrega de esos dineros.

Poco tiempo después, ante nueva petición de los demandantes en el proceso de lanzamiento, el juzgado accedió a entregar "... los cánones depositados durante el proceso ...", por lo que entregó las consignaciones efectuadas por concepto de arrendamientos, a razón de \$23.000,00 mensuales, y, además, ocho consignaciones, cada una por \$107.000,00.

Decidido el recurso de revisión y terminado el proceso de lanzamiento por auto del 16 de diciembre de 1986, se entregó a los demandantes arrendadores la suma de \$2.889.000,00, depositada para ser oídos en el proceso, y otras nueve consignaciones por valor cada una de \$107.000,00, depositados como reajuste durante cada uno de los nueve últimos meses de tramitación del proceso.

Así, Pedro Luis González y "Distribuidora de Confites Ltda." "... recibieron del Juzgado Undécimo Civil del Circuito de Medellín, con la imputación específica de con ella pagarles arrendamientos del inmueble..., la suma de \$4.708.000,00... que (los arrendatarios) depositaron en tal despacho judicial... Desde luego, esa suma la recibieron en forma adicional a la causada mensualmente por concepto de canon mensual de arrendamiento por el mismo inmueble, en cuantía de \$23.000,00 cada mes, mutuamente pactado por los contratantes, arrendadores y arrendatarios".

Esos \$4.708.000,00 no podían, entonces, ser destinados al pago de arrendamientos ya causados, porque todos se encontraban pagados a razón de \$23.000,00 mensuales. Tampoco se quiso pagar el canon de



\$130.000,00 porque "el recurso extraordinario de revisión, las respuestas que ambos demandados dieron a la demanda en el proceso de lanzamiento y los memoriales posteriores a tales respuestas son la mejor demostración de que los arrendadores (sic) jamás aceptaron dicho nuevo canon mensual de arrendamiento".

Subsiguientemente, con tal suma de dinero se "le pagaron a los arrendadores cánones mensuales de arrendamiento que habrán de causarse en el futuro...", pago anticipado que "... tiene la virtud de renovar el contrato de arrendamiento, en las mismas condiciones actualmente en vigencia, por todo el tiempo en que los cánones de arrendamiento ya fueron pagados en forma anticipada a los arrendadores".

2.1. La demanda anterior fue adicionada en cuanto a los hechos para exponer que anulado el proceso verbal de renovación del contrato de arrendamiento, el Juzgado que a la postre terminó conociendo del mismo, a fin de renovar la actuación invalidada, dispuso que por los demandantes se les diera cumplimiento a ciertas exigencias, a fin de decidir sobre la admisibilidad de la demanda, lo que no fue atendido, dando lugar al rechazo de esta y al consecuencial archivo del expediente.

3. Admitida la demanda y corrida en traslado a los demandados, estos la respondieron para oponerse a las pretensiones en ella deducidas. Aun cuando aceptaron algunos hechos, negaron los que primordialmente les sirven de fundamento. Específicamente, señalan que a Salazar Zuluaga le fue negado el reconocimiento de las mejoras. En cuanto al destino de las consignaciones dijeron:

"...La juez Once Civil del Circuito dijo inicialmente que los dineros consignados por arrendamiento correspondían a los inquilinos a quienes se le devolverían, pero éstos por conducto de sus apoderados, dijeron que esos dineros le correspondían a la parte demandante, y no lo dijeron una vez, sino en más de tres oportunidades y aun en forma conjunta ambos abogados, razón por la cual el Juzgado a la súplica de los inquilinos ordenó la entrega del dinero depositado por arrendamientos causados (no futuros) a los arrendadores y digo causados porque eran los que se habían pagado mes a mes. Es más, el Juez, no podía ordenar la entrega del dinero por cuenta de arrendamientos futuros, porque no tenía competencia para ello, máxime que ya para ese entonces se había terminado el proceso de lanzamiento".

Más adelante expusieron los hechos, según su punto de vista. En síntesis, adujeron que el contrato de arrendamiento tuvo por objeto el lote y las mejoras, que su destinación sería el "parquadero de vehículos", y que, en cuanto a las mejoras, los arrendatarios no podían introducirlas sin autorización escrita de los arrendadores. Que el inmueble arrendado lo compraron con todas sus mejoras y anexidades. Que las mejoras les han sido judicialmente desconocidas a los demandados. Y, en cuanto a las consignaciones, reproducen los memoriales dirigidos al despacho judicial con el propósito de señalar cuál era la destinación de esas consignaciones.

Propusieron, además, como excepciones de mérito, las que denominaron "carencia de derecho a las mejoras", "incumplimiento del contrato", "venta de cosa ajena", "petición de modo indebido", "pago" y la "genérica".

4. La demanda se adicionó de nuevo, básicamente, para incluir como demandados a los iniciales arrendadores Jaime Escobar Restrepo y Rosa Helena Santamaría de E., quienes también fueron notificados y dieron respuesta al escrito incoativo exponiendo que vendieron el inmueble "con clara advertencia a los compradores de que allí se había permitido hacer las mejoras a la casa sin que ello significara excluir o modificar el contrato suscrito con los arrendatarios".

5. Diligenciado lo concerniente a la primera instancia, el Juzgado le puso término con la siguiente decisión.

"1. Se absuelve de todos los cargos formulados por los demandados Jaime Escobar y Rosa Elena Santamaría de Escobar...

"2. Se rechazan por improcedentes las excepciones de petición de modo indebido, incumplimiento del contrato, venta de cosa ajena y de prescripción...

"3. Se declara improbacha la excepción de carencia de derecho a las mejoras...

"4. En consecuencia, se declara prorrogado el contrato de arrendamiento en relación al inmueble a que se hizo referencia en la parte motiva, entre los señores Jaime Salazar y Fabio Hurtado como arrendatarios, y la sociedad Disconites Ltda. y Pedro Luis González como arrendadores, en

las mismas condiciones existentes hasta antes de promoverse el proceso de renovación de contrato de arrendamiento, declarado nulo, y por todo el tiempo equivalente a los cánones de arrendamiento que aquéllos pagaron a éstos anticipadamente.

"5. Se declara que para la fijación de un canon de arrendamiento futuro, deben excluirse las mejoras consistentes en construcciones que el arrendatario Jaime Salazar efectuó en dicho inmueble, el good will, buen nombre, notoriedad y buena fama adquiridos por el establecimiento Los Recuerdos que en él funciona.

"...".

6. Apelada por la parte demandada la anterior determinación, el Tribunal al desatar el recurso, dispuso lo siguiente:

"1. Réformase el numeral 1 del fallo objeto de apelación en el sentido de que la absolución allí dispuesta en favor de los demandados Jaime Escobar y Rosa Elena Santamaría de Escobar es únicamente respecto de la pretensión segunda de la demanda.

"2. Confírmase el numeral 2 del fallo impugnado.

"3. Revócanse los numerales 3, 4, 5 y 6 del fallo que es objeto de estudio. En su lugar se dispone: a) Respecto de la pretensión primera..., declárase probado oficiosamente el medio exceptivo de petición antes de tiempo con relación a todos los demandados.

"b) Respecto de la pretensión segunda..., declárase que el contrato de arrendamiento vigente entre Jaime Salazar y Fabio Hurtado como arrendatarios y la sociedad 'Distribuidora de Confites (Disconfites) Ltda.' y Pedro Luis González como arrendadores es el mismo que existía cuando se inició el proceso verbal de renovación ante el Juzgado Quince Civil Municipal de Medellín, a un canon mensual de \$23.000,00.

"c) No hay lugar a hacer la asignación de los excedentes de cánones pero sí se dispone que los arrendadores 'Disconfites Ltda.' y Pedro Luis González devuelvan a los arrendatarios 'a suma de tres millones quinientos cincuenta y ocho mil pesos (\$3.558.000,00) M.L. con intereses comerciales según se explicó en la parte motiva.

"4. ...".

## LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO DEL TRIBUNAL.

1. Tras advertir, con cierto detalle, que concurren los presupuestos procesales, el ad-quem se ocupa de lo concerniente a las mejoras para decir que lo pedido por los actores a su respecto estriba, no en un avalúo y reconocimiento de su precio, sino en que las mismas "no se tengan como factor determinante del canon mensual de arrendamiento" para el caso de que los arrendadores promuevan un proceso de renovación del contrato.

Objeta entonces que tal apreciación no es exacta "porque, de todos modos, para acceder a lo pedido por los arrendatarios, el fallador necesariamente tendría que analizar si en efecto existen mejoras en el inmueble y quién las implantó, consideraciones que o bien, son propias de un derecho de retención que se ejerce a propósito de un proceso que tienda a declarar terminado el contrato de arrendamiento entre las partes (arts. 1993 y 1994 C.C.), o bien, son propias de un proceso ordinario en el cual los actores adujeran el derecho personal crediticio derivado del fenómeno jurídico de la accesión (art. 739 C.C.) evento este último que les exigiría haber hecho entrega del inmueble. O finalmente, tendrían que hacerse en el proceso verbal (art. 519 C. de Co.) que se instaurara para incrementar el canon, en cuanto influyan en él", situaciones que no se dan aquí puesto que los arrendatarios aún tienen vigente el contrato de arrendamiento, no han sido lanzados ni han hecho entrega del inmueble.

De allí infiere la prosperidad de la excepción de petición antes de tiempo en relación con la pretensión concerniente a las mejoras.

2. En cuanto a la prórroga del contrato en las condiciones que tenían al momento de la iniciación del proceso verbal, proceso que fue objeto del recurso de revisión, dice que es preciso volver sobre las consecuencias de la causal 7 del artículo 380 del C. de P.C., la cual fue hallada próspera, así como sobre la secuencia temporal de los procesos previos al presente, a saber: "el verbal de aumento de canon definido en su primera instancia por el Juzgado 15 Civil Municipal y del cual conoció en segunda instancia el Juzgado 5 Civil del Circuito, el de lanzamiento por mora definido por el Juzgado Undécimo Civil del Circuito y el recurso extraordinario de revi-

sión promovido por uno de los arrendatarios respecto del primero de los mencionados procesos'.

Entonces observa que:

a) La causal 7 del artículo 384 del C. de P.C. genera la nulidad de todo lo actuado en el proceso que dio lugar a la revisión.

b) En el año de 1984, el Juzgado Quince Civil Municipal de Medellín dictó sentencia estimatoria de las pretensiones de aumento del canon de arrendamiento, fijado en \$130.000,00 mensuales "a partir de la notificación de la demanda", sentencia que fue confirmada en fallo del 15 de abril de 1985.

c) Antes de introducirse el recurso de revisión, en el Juzgado II del Circuito de Medellín se inició el proceso de lanzamiento por mora de los arrendatarios, "quienes hasta entonces sólo venían cubriendo canones mensuales de \$23.000,00 desatendiendo el nuevo canon fijado en el proceso verbal".

d) Allí Fabio Hurtado S. propuso incidente de nulidad, el cual quedó subsumido cuando se tuvo certeza de los resultados del recurso de revisión.

e) En el proceso de lanzamiento se habían ya efectuado las consignaciones exigidas a los inquilinos para ser oídos, "correspondientes al lapso reclamado por mora en el pago del reajuste (\$107.000,00) por mes y que totalizaban \$2.180.000,00".

3. El recuento anterior lleva al Tribunal a sostener que las consignaciones "tuvieron su razón de ser mientras tuvo vigencia el fallo proferido en el proceso verbal en el cual se dispuso el aumento del canon", pero que decretada la nulidad no se puede afirmar que los arrendatarios "hubieran aceptado que pagaban canones causados a razón de \$130.000,00 cuando en realidad recobraba todo su vigor el canon que regía cuando se propuso el proceso verbal, esto es \$23.000,00 por mes". Que el hecho de que los arrendadores, ante los resultados del recurso de revisión, no procediesen a devolver los excedentes a los inquilinos (art. 2318 C.C.), "implica su aquiescencia, por lo menos tácita, en cuanto a

que con esos dineros se cubrieran canones de arrendamiento". lo que incluso han enfatizado a través del proceso, mas insistiendo en mensualidades de \$130.000,00.

Estima que esta última interpretación carece de causa frente a la declaratoria de nulidad del proceso verbal en que fue señalada tal suma.

4 En cuanto al alcance de esa nulidad, anota que "se concreta a determinar que el contrato de arrendamiento que continúa vigente entre las partes, lo es en las condiciones que existían cuando se inició el proceso verbal que, a la postre, fue declarado nulo al prosperar el recurso de revisión. Por tanto, respecto de la pretensión segunda de la demanda, la prórroga del contrato se circunscribe a decir que el canon vigente hoy, es de \$23.000,00 por mes siendo idénticas las demás condiciones pactadas".

Agrega que, en cambio, lo que no puede aceptar es que esos dineros sean asignados por un tiempo equivalente al total de las consignaciones hechas en el proceso de lanzamiento, según pretenden los arrendatarios, puesto que, afirma, "dicha pretensión atenta contra un derecho legalmente consagrado en el art. 518 del C. de Comercio que, por lo demás, es norma de orden público según el art. 523 (sic) ibídem", por lo que la tienen como improcedente.

5. Encuentra, sí, que los arrendatarios tienen derecho a que se les reconozca la suma de dinero que como excedente del canon de \$23.000,00 consiguieron en el proceso de lanzamiento, lo que apoya en el artículo 357 del C. de P.C. porque sería más gravosa para los arrendadores-apelantes confirmar la decisión de primera instancia. Además que, señala, "la mala fe de los arrendadores se hace tangible desde la firmeza del fallo que resolvió sobre el recurso de revisión del proceso verbal, lo que ocurrió en septiembre de 1986...", momento este que determina "la causación de los intereses corrientes comerciales por aplicación del artículo 2318 del C. civil en concordancia con el art. 822 del C. de comercio, dada la índole del contrato existente entre las partes.

Hechas las cuentas de rigor, o sea, advirtiendo que entre septiembre de 1985, cuando se efectuó la primera consignación, y febrero de 1991, han transcurrido 66 meses que, a razón de \$23.000,00 mensuales, dan un total de \$1.518.000,00, dice que a favor de los arrendatarios queda

un saldo de \$3.558.000,00 a ser devuelto por los arrendadores, suma esta sobre la que se deben aplicar los intereses corrientes comerciales.

6. Finalmente, en relación con los demandados Jaime Escobar y Rosa Helena Santamaría de Escobar, expresa que la excepción de petición antes de tiempo, tocante con las mejoras, también alude a ellos, porque siendo temporal, "no hay por qué apreciar si existió legitimación en la causa, entre otras razones porque si el reconocimiento de mejoras se llegara a plantear en el futuro con base en el artículo 739 del C. Civil, los legitimados por pasiva sí podrían ser los propietarios del inmueble que autorizaron la construcción de las mejoras. Y que, en cuanto a la prórroga del contrato, por razón de que este lo cedieron ellos a los otros demandados, sí se justifica su absolución por falta de legitimación en la causa.

### *EL RECURSO DE CASACION*

Ambos demandantes, por separado, sustentaron oportunamente el recurso de casación que los dos habían interpuesto. La demanda de Fabio Horado Saldarriaga contiene cuatro cargos y la de Jaime Salazar Zuluaga cinco. Las dos, en los cuatro cargos que coinciden, son iguales. Por lo tanto, la Sala, siguiendo el orden que lógicamente corresponde, los despachará al tiempo, y al final se ocupará del cargo quinto de la demanda de Jaime Salazar Zuluaga.

#### *Cargo Primero de las dos demandas:*

1. Con base en la causal segunda del artículo 368 del C. de P.C., en este cargo se acusa la sentencia por "no estar en consonancia con los hechos ni con las pretensiones de la demanda...".

2. Los recurrentes emprenden su demostración con la invocación de los artículos 304 y 305 del C. de P.C., transcribiendo este último.

Añaden a lo que se dice en los hechos 38, 39, 41, 42 y 43 de la demanda, y anotan que por el convencimiento que tenían los demandados en el proceso de lanzamiento, en el hecho 44 se resalta que en aquel proceso le reiteraron al juez que ese dinero no lo debían a los arrendadores y que por tal causa no podía ser entregado a estos.



Que en los hechos 45, 46, 47, 48 y 49 se relaciona cómo los demandantes finalmente accedieron a que el dinero se les entregara a los arrendadores "pero puntualizando que debían ser entregados (sic) "... a cuenta de arrendamientos..." , en lo que se insiste en el hecho 49.

Que de conformidad con los hechos 50, 51 y 52, al no estarse efectuando pago alguno de arrendamiento ya causado, puesto que los anteriores habían sido oportunamente pagados, esos dineros tenían que estar encaminados a pagar canones futuros de arrendamiento, por lo que tenía que producirse la renovación o prórroga del contrato por el tiempo en que los canones fueron pagados en forma anticipada.

3. Lo anterior, dicen luego, condujo a que en la petición segunda se solicitara la declaratoria de que el contrato de arrendamiento se encontraba renovado y prorrogado en las mismas condiciones hoy existentes por el tiempo equivalente a los canones de arrendamiento pagados en forma anticipada.

Que los demandantes jamás se refirieron a que tuvieran interés en que el dinero pagado a los arrendadores, llegara a serles devuelto algún día.

4. Transcriben apartes de las motivaciones expuestas por el Tribunal en torno al punto, así como las resoluciones por él tomadas e insisten en lo que se expone y en lo que se pide en la demanda, para señalar que de esa comparación se concluye la falta de concordancia que se le imputa a la sentencia, la cual explican con estos términos:

"Si en los correspondientes hechos de la demanda siempre se hace referencia a un pago que se ha realizado por los demandantes, ese pago tiene como consecuencias lógicas tanto la extinción de la obligación que se ha pagado como el que la persona a quien se le ha efectuado el pago hace suyo el dinero con el cual se ha efectuado el pago. Entonces, cómo podría compaginarse tal situación de pago con la ordenada devolución del dinero con el cual se llevó a efecto el pago? Sencillamente, ambas situaciones no pueden coexistir pues constituiría una violación del principio de contradicción ya que si hubo un pago, con su natural consecuencia liberadora, el dinero es de los demandados y éstos no pueden, simultáneamente, ser condenados a su restitución como lo ha ordenado el Tribunal...

“Si en la petición de la demanda -continúan los impugnadores- se solicita que se declare que por virtud del pago anticipado de unos canones de arrendamiento el contrato se encuentra renovado y prorrogado hasta concurrencia con los canones pagados en forma anticipada, mal podían los demandantes solicitar simultáneamente que el dinero con el cual efectuaron el pago les sea restituido. Ello implicaría una evidente violación del principio de contradicción a todas luces inadmisibles”.

*Se considera:*

*De acuerdo con el actual artículo 305 del C. de P.C., la sentencia debe hallarse en consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda.*

*Se erigió allí, pues, una regla de conducta para el juez, a quien, en consecuencia, se le veda basar su decisión en hechos distintos de los consignados por el actor en su demanda; tampoco puede proferirla para darle cabida a una pretensión que no sea la deprecada. Si el juez rebasa esta regla, o sea si, prescindiendo del esquema fucual trazado en el escrito incoativo del proceso, hace descansar su resolución en una causa petendi diferente, aún a pretexto de ser esta la que aparece probada, o si provee sobre una pretensión que no sea la consignada en la demanda, incurre en incongruencia, incongruencia que, como se sabe, constituye un vicio de actividad, pues aquel habrá desatendido una de las pautas que la ley le señala para el proferimiento de la sentencia.*

*Ese vicio de actividad, en el específico campo de la falta de consonancia de la sentencia con los hechos y con las pretensiones de la demanda, está, naturalmente, comprendido en la causal de casación establecida en el actual ordinal 2 del artículo 368 del C. de P.C.*

*Pero de otro lado, sucede que de conformidad con el inciso 2 del numeral 1 del artículo 368 ib., el juez puede incurrir en un error de hecho en la apreciación de la demanda, error que, por ser tal, puede dar lugar a la transgresión de una norma de derecho sustancial, materia propia de la causal 1 de casación.*

*En el anterior orden de ideas, se tiene, en el plano abstracto, que la diferencia entre el error in procedendo, tipificador de la incongruencia, y el error de hecho en que se puede caer al apreciar la demanda, propio de*

la causal primera de casación, no se ha desdibujado a raíz de la innovación introducida al citado numeral 2 del artículo 368, ya que en el primer evento, cuando juzgador considera la pretensión o los hechos sustentantes de la misma, se desentiende de lo expuesto en la demanda para tomar únicamente en cuenta la pretensión o los hechos que, de acuerdo con su personal criterio, son los que deben ser materia de su decisión. En la segunda hipótesis, por el contrario, el juez parte de obedecer la regla que le habla de la sujeción a los hechos y a la pretensión descritos en la demanda, mas cuando pretende fijar el sentido de la misma resulta alterando su contenido fáctico, siendo éste el motivo que permite comprender por qué aquí ya no resulta atinado hablar de desatención o prescindencia de la demanda.

2. Pues bien, proyectadas las anteriores ideas sobre la sentencia til dada de incongruente en los cargos que se estudian, la Sala observa lo siguiente:

Como los propios recurrentes lo ponen de presente en el aparte que transcriben, el Tribunal, en la referida sentencia, de manera clara dijo que en la pretensión segunda, atañedora al reconocimiento de cánones fidei-jus, y que no tiene como pertinente tal como está concebida, en esa pretensión, se reple: "está implícita la intención de los arrendatarios de que se les reconozca la suma de dinero que como excedente del canon de '23.000,00 consignaron en el proceso de lanzamiento...".

La anterior apreciación, por consiguiente, comporta cómo para el juzgador la cuestión se infiere de la propia demanda, proposición que, a su vez, representa que no cometió el error in procedendo que en el cargo se le enrostra: el Tribunal, por su propia iniciativa, no tomó la determinación sobre la cual se ha levantado el ataque, sino que, en desarrollo de la facultad de interpretar la demanda le dio a la misma el alcance o sentido atrás mencionado.

Ahora, que ese entendimiento brindado al escrito incoativo del proceso sea acertado o desacertado es asunto cuyo examen no resulta procedente dentro del presente cargo, pues, por lo antes visto, se trata de algo que únicamente podría ser mirado a través de la causal primera de casación porque se estaría ante un error en el juicio del juzgador originado, naturalmente, en una defectuosa apreciación de la demanda, y no ante uno propio de la actividad desplegada para el proferimiento de la sentencia.

*Los cargos, por consiguiente, no prosperan.*

*Cargo Segundo de las dos demandas:*

1. Propuesto también con fundamento en la causal segunda del artículo 368 del C. de P.C., en sí se acusa la sentencia "por no estar en consonancia con los hechos y peticiones de la demanda y por no contener las condenas que el juez ha debido proferir en forma oficiosa (sic), esto es, por ser un fallo en el cual se ha incurrido en una 'incongruencia negativa'..."

2. Con miras a desarrollarlo, los impugnadores se refieren a una serie de hechos expuestos en la demanda, de los cuales es del caso resaltar que los arrendatarios tuvieron que consignar, dentro del proceso de lanzamiento seguido después de que los arrendadores obtuvieron que por la vía judicial la renta fuera reajustada a la suma de \$130.000,00 la suma de \$5.099.000,00, "de la cual \$4.708.000,00 correspondía a reajustes en el valor del arrendamiento y el remanente era una suma correspondiente a cánones realmente adeudados", suma que, ante la insistencia de los arrendadores, le fue entregada a estos por la juez que conocía del proceso de lanzamiento, o sea, que se les dieron "\$4.708.000,00 de propiedad de los arrendatarios..."

3. Aoran después que el Tribunal "... dijo entender la demanda en el sentido de que ella tenía implícita la intención de los arrendatarios de que se les reconozca la suma que como excedentes del canon de arrendamiento por \$23.000,00 habían consignado en el proceso de lanzamiento y que en ello les asistía la razón en virtud del mandato del art. 2318 del C. civil...", por lo que procedió a ordenar la entrega de la suma que consideró adecuada, entrega que debía efectuarse junto con los intereses correspondientes.

4. Señalan entonces que el juzgador "se abstuvo de ordenar que esa suma de dinero que los arrendadores-demandados han de restituir a los arrendatarios demandantes no comprende (sic) la condena a éstos al pago del valor actualizado de la suma de dinero en referencia..."

5. Señala esa base, recuerdan algunas jurisprudencias de la Corte que, según estiman, sirve para ilustrar la cuestión aquí debatida.

a) En fallo del 30 de marzo de 1984, esta Corporación, citando el inciso 2 del artículo 1626 del C.C., conforme al cual “el pago efectivo es la prestación de i que se debe”, dijo que para que este “sea cabal, íntegro o completo, debe hacerse, además, con sus intereses e indemnizaciones debidas, tal como reza el inc. 2 del art. 1646...”.

b) En fallo del 12 de agosto de 1968, expuso que “... por ser el dinero la medida común de todas las cosas patrimoniales o económicamente consideradas, su función también se aprecia en otros ámbitos del derecho, y, por consiguiente, en ellos sí puede ser, o es, de recibo la facultad del juez para disponer, de oficio, la revalorización de una suma de dinero, tal como sucede, v.gr., cuando como consecuencia de la declaratoria de una nulidad de un acto o contrato..., se deben ordenar restituciones mutuas, las que, como se sabe, son del resorte o la incumbencia del juez...”.

c) Y en sentencia del 24 de octubre de 1990, la Corte, luego de algunos conceptos destacados por los recurrentes, según éstos expresó que “... siendo obligatorio y no facultativo para el juez el ejercicio de la función jurisdiccional como consecuencia de la nulidad de una promesa, se concluye, independientemente de todo pedimento, que para que la sentencia sea completamente consonante resulta necesario ejercitarla, y que, por el contrario, la deficiencia en aquella acarrea un fallo incongruente por la vía diminuta...”.

6. De todo ello se concluye, según los impugnadores, que “... la sentencia objeto del recurso de casación es inconsonante con las declaraciones que el Tribunal ha de hacer en forma oficiosa y que al no hacerlo, como era su obligación, ha inferido a la parte que represento en el proceso, un agravio que es necesario que se enmiende pues la suma que los demandantes entregaron ha de serles devuelta, en el entendimiento que el Tribunal le diera a la demanda, no sólo con sus intereses sino, de la misma manera, con la correspondiente corrección monetaria”.

*Se considera:*

*1. Claramente, tal y como los recurrentes lo destacan, la Corte, en diversas oportunidades, ha sostenido que en tratándose de restituciones mutuas que, aún de oficio, deban ser ordenadas como consecuencia de la declaratoria de nulidad de un acto o contrato, el juzgador, también de ofi-*

*cia, debe disponer la revalorización de las sumas de dinero a reintegrarse por razón de las mismas. El punto se encuentra suficientemente tratado en las jurisprudencias citadas por aquellos y, en tal virtud, no hay necesidad de volver sobre él.*

*2. En lo que al presente caso incumbe, lo que corresponde examinar es si se adecua al susodicho criterio, o no, pues es de allí de donde se desprende si la sentencia es incongruente por el aspecto materia de los cargos que ahora se despachan.*

*Dentro de esa línea de análisis, se tiene que los actores, en su demanda, por fuera de haber solicitado que para la determinación del precio del arrendamiento no se tuvieran en cuenta ni las mejoras ni los otros conceptos que mencionan, pidieron que se dijera que el contrato de arrendamiento se encuentra "renovado y prorrogado, en las condiciones actualmente existentes, por el tiempo equivalente a los canones de arrendamiento pagados en forma anticipada por los arrendatarios a los arrendadores..."*

*Y el Tribunal, cuando interpretó esta segunda pretensión sostuvo, como lo reconocen los propios recurrentes en este segundo cargo, que allí estaba implícita la intención de aquellos de que les fuera devuelto el excedente de lo que pagaron por encima de la renta mensual de \$23.000,00 siendo ese el motivo por el que condenara a los demandados a devolver a los arrendatarios la cantidad de \$3.558.000,00, junto con los intereses comerciales.*

*3. No obstante que hubo una declaratoria de nulidad del proceso de renovación del contrato de arrendamiento que arrojó consigo la renta mensual de \$130.000,00 allí fijada, es a todas luces evidente que la decisión del ad-quem, tachada de diminuto por los impugnadores, aparece sinuada dentro de un marco legal completamente diferente, como que el Tribunal no sólo no decretó ninguna nulidad, sino que su determinación la apoyó en el artículo 2318 del C.C., lo que a las claras pone de presente que en su sentir, se estaba ante un pago de lo no debido.*

*Lo anterior, que es palpable en la sentencia, significaba, para los impugnadores, que si estimaban y, por supuesto, establecían que la resolución dispuesta era una emanación de la declaratoria de nulidad adoptada en el recurso de revisión, han debido empezar a enjecir el fallo del*



*Tribunal en tanto que la tuvo como una aplicación del artículo 2318 del C.C. Pero si, por el contrario, creían que el punto sí encajaba dentro de este precepto, debían entonces demostrar que el Tribunal restringió su alcance cuando se abstuvo de mandar que la suma a restituirse a los demandantes fuera revalorizada, es decir, dejar en claro que la regla legal en la que aquí basó su decisión sí permite incluir la revalorización monetaria como uno de los conceptos propios de lo que es materia de reintegro de lo recibido como pago de algo no debido. Y cualquiera que hubiese sido la solución que adoptasen, ésta no la podían encausar por la causal segunda de casación porque la sentencia, en el punto, no fue omisa. Es decir, el Tribunal decidió lo que, para su criterio, tenía que decidir, de modo que si incurrió en algún desacierto lo fue en su juicio, al concretar, o la aplicabilidad al caso del artículo 2318 del C.C., o el alcance del mismo, cuestiones que, por concernir a la violación de una norma de derecho sustancial, no podían ser examinadas más que a la luz de la causal primera de casación.*

*Esa improcedencia de los cargos conduce,  
por lo tanto a su improsperidad.*

*Cargo Tercero de ambas demandas:*

1. Con fundamento en la causal primera del artículo 368 del C. de P.C., por la vía directa, aquí se acusa la sentencia por la violación de las siguientes normas: arts. 25, 528, 523, 524 y 322 del C. de Co.; 1494, 1495, 1501, 1502, 1602, 1603, 1618, 1625, 1626, 2628, 1634, 1645, 1648, 1653, 1654, 1655, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1996, 2000 y 2318 del C.C.

2. La demostración del cargo la inician los recurrentes con transcripción de parte de la motivación y de las resoluciones de la sentencia del Tribunal. De igual modo, reproducen el texto de la pretensión segunda. Después se refieren a los hechos que, según ellos, dieron origen al litigio, poniendo especial empeño en lo atinente a que los arrendatarios "accedieron a que el valor total por ellos depositados (\$5.099.000,00, así: \$391.000,00 por concepto de canones realmente causados y que sí pertenecían a los arrendadores en forma incondicional; y \$4.708.000,00 que tales arrendatarios consideraban no adeudar a los arrendadores por la causa antes dicha) le fuera entregado a los arrendadores pero con la advertencia de que tal suma estaría destinada al pago de arrendamientos".



Que, continúan los impugnadores, "los arrendadores aceptaron recibir esa suma con la destinación que precisaron los arrendatarios: para el pago de arrendamientos. Y realmente, la recibieron del juzgado que conoció del proceso de lanzamiento. Jamás, en ningún momento ha existido diferencia entre arrendadores y arrendatarios en cuanto a que dicha suma de dinero tuvo una finalidad diferente a la ya precisada anteriormente: pago de arrendamientos. Jamás".

Que la discordancia toca con la determinación de cual sea la cuantía del canon mensual de los arrendamientos que con dicha suma se han pagado, aunque es verdad que dentro de las peticiones de la demanda no se le pidió al juez que determinara la cuantía del canon, y que también es verdad que tampoco se le pidió "que determinara que con el dinero pagado a los arrendadores... hubo un pago de arrendamientos...".

3. Dicen entonces los impugnadores que no es menos cierto que por la forma como fuera redactada la petición segunda de la demanda, para poder el juez proferir una decisión en orden a aceptarla o rechazarla tenía que decidir, en forma implícita, las dos cuestiones antes dichas: la relativa a la cuantía del canon de arrendamiento, en primer lugar, y la relativa a que con tal dinero se efectuó el pago de unos arrendamientos, en segundo lugar. En otras palabras, el juez, para dirimir la contienda, tenía que efectuar un 'juzgamiento implícito' de los dos aspectos de la contienda antes dichos". De manera que para poder acceder a la petición sobre renovación y prórroga del contrato, el juzgador, previamente, tenía que precisar si hubo pago de canones de arrendamiento, así como la cuantía de los canones de arrendamiento pagados anticipadamente.

En ese orden de ideas, destacan cómo la sentencia se ocupó de la cuantía de la renta, estimada en \$23.000.00, y de la resolución tomada al respecto.

Y aludiendo a los dineros entregados a los arrendadores por el Juzgado II Civil del Circuito de Medellín, citan las apreciaciones del ad-quem, de acuerdo con las cuales no se puede aceptar, de un lado, que están destinados a cubrir una renta de \$130.000.00, según lo pretendido por los demandados, ni, de otro, que con ellos se están pagando canones por el tiempo equivalente al total de las consignaciones hechas en el proceso de lanza-

miento, según lo impetrado por los arrendatarios, porque esta pretensión pugna con el derecho legalmente consagrado en el artículo 518 del C. de Co., el cual es norma de orden público, "según el artículo 523 (sic) ibídem".

Entonces, tras aseverar que este último precepto resultó aplicado indebidamente, objetan que el Tribunal erró al concluir lo anotado respecto del artículo 518 "... si se considera cuál es el derecho que consagra el art. 518 del Código de Comercio y las implicaciones que con relación a tal derecho tiene el hecho de que el arrendador reciba al arrendatario el pago anticipado de canones de arrendamiento por el inmueble dado en arrendamiento...".

Insertan el inciso 1 de la regla mencionada y señalan cuál es, en su sentir, el derecho allí instituido. Traen a cuento lo expuesto por la Comisión Redactora, y seguidamente argumentan que "... no se ve claro en qué forma pueden contrariar... los hechos que son objeto de litigio del derecho que le asiste al arrendatario para que el contrato de arrendamiento sea renovado a su terminación. Por el contrario, ... la aceptación por el arrendador del pago anticipado de canones de arrendamiento constituye un mejor afianzamiento del derecho a la permanencia en el local dado en arrendamiento al arrendatario, que así resulta más fuertemente favorecido al alejarse toda posibilidad de que el arrendador vaya a tratar, por algún medio o subterfugio, de ponerle fin al contrato existente".

4. Expresan luego que "en tales condiciones, lejos de rechazar ese pago como contrario al derecho que le asiste al arrendador a la renovación del contrato de arrendamiento ha debido aceptarse el hecho como una mejor forma de garantizar a los arrendatarios ese derecho a la permanencia en el local".

A vuelta de algunas reflexiones relacionadas con el rendimiento que se podía extraer de la suma entregada a los arrendadores, argumentan que el pago anticipado de los canones "ha de aceptarse plenamente, con las consecuencias propias cual es, entre otras, el que el contrato de arrendamiento se encuentre prorrogado y renovado por todo el tiempo que así ha resultado pagado con tal suma", conforme consta en la petición segunda de la demanda, lo que el Tribunal no entendió así, con lo que violó el artículo 518 del C. de Co., en armonía con los artículos 25 y 524 de la misma obra.

5. Afirman que “a semejante conclusión ha de llegarse si se tiene en cuenta el mandato del artículo 2014 del Código Civil y se aprecia el derecho que él consagra en beneficio del arrendatario que ha pagado el valor de cánones de arrendamiento en forma anticipada, como lo han hecho los arrendatarios...”.

Copian el susodicho precepto, destacan cómo en él se erige la figura de la “tácita reconducción”, interpretan lo que debe entenderse por “hecho inequívoco”, sostienen que esa norma “ha de adecuarse a los nuevos tiempos”, con mayor razón cuando se trata de local ocupado con establecimiento comercial, y le achacan al ad-quem un “manifiesto error de juicio” porque “... habiendo apreciado, por demás correctamente, que el dinero entregado por los arrendatarios a los arrendadores, ... tenía por finalidad el pago de cánones de arrendamiento y teniendo conciencia de que en el art. 518 del C. de Comercio se establece el derecho que asiste a los arrendatarios a permanecer en el inmueble cuando lo han ocupado por no menos de dos años consecutivos, con un mismo establecimiento de comercio, se abstiene de darle aplicación, al caso que dirimía en la sentencia, el art. 2014 del Código Civil, norma legal esta que así resultaba violada por falta de aplicación”.

Insisten en la pauta argumentativa seguida en el cargo, al igual que en que el Tribunal vio en el pago anticipado de arrendamientos “una violación del derecho que asiste a los arrendatarios a permanecer en el inmueble, fundando en ello... su decisión de no darle validez a dicho pago anticipado de arrendamientos...”, para anotar un poco después que el artículo 2316 resultó indebidamente aplicado pues es totalmente ajeno a la controversia.

*Se considera:*

1. Como viene de verse, el ad quem negó la pretensión consistente en que el contrato se tuviera como prorrogado por todo el tiempo que cubriera la suma de dinero entregada por los arrendatarios a los arrendadores, a razón de \$23.000,00 mensuales, y lo hizo sobre la base de estimar que una determinación semejante sería atentatoria del derecho establecido en el artículo 518 del C. de Co.

Por su lado, la esencia de ambos cargos reside en argumentar que fueron vulnerados los artículos 518 del C. de Co. y 2014 del C.C., cuando el Tribunal decidió que no había lugar a hacer la asignación de los excedentes de canones.

Sin que haya necesidad de profundizar en el examen de las diferencias existentes entre las figuras reguladas por los preceptos acabados de mencionar, diferencias que harían ver cómo los cargos resultan contradictorios en su planteamiento básico -pues o el asunto queda gobernado por el artículo 518 del C. de Co. y fue este el transgredido por el Tribunal, o se encuentra sujeto al artículo 2014 del C.C., el cual, en consecuencia, habría sido el violado-, sin destacar esas diferencias, dícese de nuevo, y, consiguientemente, mirando la cuestión, de manera separada, a la luz de cada una de esas dos reglas, en lo que al artículo 518 del C. de Co. respecta, se tiene que, en efecto, conforme los recurrentes lo advierten, esta norma erige un derecho a la renovación del contrato de arrendamiento en favor del arrendatario de inmueble ocupado con establecimiento comercial por no menos de dos años consecutivos. Mas *el ejercicio de ese derecho, al igual que el de cualquiera otro, no es absoluto en el sentido de que su titular se lo puede imponer, sin más, al sujeto pasivo, o sea, al propietario del establecimiento. Este, como no puede ser de otra manera, tiene, como contrapartida, fincado, del mismo modo, en el artículo 518, el derecho a discutir las condiciones en que debe producirse la renovación, y si no llega al respecto a un acuerdo con el arrendatario, le queda expedita la vía judicial con tal fin, vía a la que también debe acudir el arrendatario, en su caso, según se desprende del artículo 519 ib.*

Ello, pues, cabalmente, fue lo que con acierto tuvo presente el Tribunal cuando, para descartar la pretensión segunda de los actores, dijo que atentaba contra el derecho legalmente consagrado en el artículo 518 del C. de Co. Por mejor decirlo, un acogimiento de esa pretensión simplemente porque mediaba la circunstancia consistente en que los arrendadores recibieron una considerable suma de dinero consignada por los arrendatarios con ocasión del proceso de lanzamiento instaurado en su contra y dentro de la tramitación propia del mismo, suma que, entre otras cosas, recibieron cuando la renta era de \$130.000,00, hubiera entrañado la supresión o cercenamiento, para los arrendadores, de la posibilidad de discutir las nuevas condiciones del contrato.

No se diga, por lo demás, que esa discusión bien pudo haber tenido lugar dentro de este proceso porque lo cierto es que aquí el *thema decidendum* era otro. De hecho, los arrendadores fueron convocados por los arrendatarios, no para definir los términos dentro de los cuales debería darse la renovación -que bien podían ser los que propusieran los demandantes u otros diferentes, pues sobre la base de respetar el derecho a la renovación que tiene el inquilino, eso es lo que se debate en tal clase de procesos-, sino para que, de modo escueto, se dijera que el contrato "se encuentra renovado y prorrogado, en las mismas condiciones actualmente existentes, por el tiempo equivalente a los cánones de arrendamiento pagados en forma anticipada por los arrendatarios a los arrendadores...". Es decir, los demandantes no le pidieron a la justicia que fijara los términos en los cuales habría de desarrollarse en el futuro la relación contractual, sino que declarara que, por causa o con apoyo en un hecho acaecido en el pasado, el contrato era y seguiría siendo el mismo. Una pretensión que se ha planteado en términos semejantes no puede estar legalmente sustentada en el artículo 518 del C. de Co., y, por el contrario, su admisión no hubiera representado más que una evidente transgresión a esta regla legal, como así lo indicó el ad-quem.

*Naturalmente, pudiera pensarse que nada era óbice para que las partes, dentro de la libertad contractual que les asiste, hubieran acordado la prórroga con sujeción a las aspiraciones de los arrendatarios. Pero si tal cosa fue la que se dio en el presente caso, entonces los recurrentes no han debido formular los cargos que ahora se despachan por la vía directa sino por la indirecta y, consecuentemente, demostrar los yerros fácticos del Tribunal por la no apreciación de las pruebas que podrían de presente cómo las partes llegaron a convenir lo indicado.*

3. En lo que toca con el artículo 2014 del C.C., los recurrentes pierden de vista que el supuesto básico del mismo es que se esté ante un contrato de arrendamiento "terminado... por desahucio o de cualquier otro modo", conforme reza, con claridad meridiana, su inciso 1.º, punto que los demandantes no alegaron ni, desde luego, establecieron, y que el Tribunal tampoco tuvo en consideraciones pues, por el contrario, juzgó que el contrato que regía entre las partes es el mismo que existía cuando se inició el proceso de renovación, o sea, que no lo tuvo por terminado. Si así fue -y de tal determinación no divergen los impugnantes-, es de toda obviedad que la cuestión debatida queda situada al margen del susodicho artículo 2014.

Por otro lado, si los demandantes y recurrentes en casación han pretendido que el contrato se tenga como prorrogado por todo el tiempo que alcance a ser cubierto con la suma entregada a los arrendadores dentro del proceso de lanzamiento, sobre la base de que la renta asciende a \$23.000,00 mensuales, tampoco, para ese propósito, podrían apoyarse en el artículo 2014 puesto que la renovación allí autorizada no puede exceder de tres meses en los predios urbanos.

Finalmente, no puede tenerse como “hecho inequívoco” de la voluntad de los arrendadores de prorrogar el contrato, el consistente en la recepción de la suma consignada en el tantas veces citado proceso de lanzamiento porque, junto con ello, los arrendatarios han debido demostrar, de manera paladina, que los arrendadores admitieron que la renta a ser pagada por aquellos fueran los \$23.000,00 inicialmente acordados y no los \$130.000,00 judicialmente fijados, y que, además, el Tribunal incurrió en ostensible desacierto por ignorar la prueba de ese avenimiento. A este respecto, conviene precisar que el pensamiento del Tribunal lo exponen los recurrentes de una manera cercenada, pues si bien es cierto que señala que si los arrendadores expresaron una especie de aquiescencia tácita a que se les pagara cánones de arrendamiento con la suma consignada, aquiescencia que ve en la no devolución de esta suma a los arrendatarios una vez conocidos los resultados del recurso de revisión, también lo es que advierte que aquellos han insistido en que la renta tiene un monto de \$130.000,00, posición que rechaza por encontrarla contraria a las consecuencias propias del recurso de revisión. Ello, por ende, conduce a concluir que para el juzgador el acuerdo tácito entre las partes sobre el monto de la renta mensual no existió, y, consiguientemente, que, tal como lo dio a comprender, carecía por completo de causa que los arrendadores mantuvieran esa suma de dinero en su poder, por lo que dispuso su reintegro a los arrendatarios.

4. Al no existir, pues, la transgresión de los artículos 518 del C. de Co. y 2014 del C.C., tampoco hay lugar a que se configure la de los restantes preceptos denunciados en los cargos, por lo que estos no se abren paso.

#### *Cargo Cuarto de ambas demandas:*

1. Con fundamento en la causal primera del artículo 368 del C. de P.C., por la vía indirecta, se acusa la sentencia por ser violatoria de los artí-



culos 25, 518, 524 y 822 del C. de Co.; 1494, 1495, 1501, 1502, 1602, 1603, 1618, 1625, 1626, 1634, 1645, 1648, 1654, 1655, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1996, 2014 y 2318 del C.C., como consecuencia de error de hecho cometido en la apreciación de la demanda

2. La demostración de los cargos la inician los recurrentes rememorando lo dicho por el Tribunal en relación con el entendimiento o alcance que le dio a la pretensión segunda de la demanda, el cual tiene como manifiestamente erróneo.

Dicen que “si se observa en detalle los hechos 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52, analizados en su conjunto, podrá observarse con meridiana claridad que los demandantes siempre, en todo momento, precisaron que el dinero entregado por ellos tuvo una finalidad clara y específica: pagar arrendamientos por el inmueble que les fuera dado en arrendamiento por los arrendadores”, agregando a continuación que “no hay en toda la demanda ni una sola expresión, ni siquiera equívoca, de la cual pueda colegirse que los demandantes pretenden, con su demanda, obtener la restitución del dinero entregado en pago de arrendamientos”.

3. Expresan que como en los hechos de la demanda manifestaron que los dineros se entregaron para pago de arrendamientos, en la petición segunda no podían haber consignado sino una que fuera consecuencia obvia de sus afirmaciones, por lo que, insisten, la petición segunda de la demanda no puede entenderse en la forma como lo hizo el Tribunal.

Que, argumentan luego, “... la idea de ‘pago’ es clara y ostensiblemente contraria a la idea de ‘entrega’ de los dineros entregados. Una y otra no pueden concurrir: o fue entregada para efectuar un pago, y en tal evento quien recibe el pago se hace dueño de la suma de dinero pagada, razón por la cual no puede solicitarse su devolución o entrega, o fue entregada a un título no traslativo de dominio y en tal evento no puede pregonarse el pago sin que quien la ha recibido no la ha hecho suya y por ello sí procedería la devolución pretendida, pero en este evento, lo que no procede es hablar de pago que fue precisamente de lo que se habló a lo largo de toda la demanda”.

Ese error del Tribunal, concluyen, lo condujo al quebrantamiento de las normas citadas en el encabezamiento de los cargos.



*Se considera:*

1. *Conforme acaba de verse, estos cargos vienen orientados a combatir la sentencia por haber dispuesto el reintegro de la suma consignada por los demandantes en vez de determinar que la misma fuera aplicada al pago de la renta futura por el goce del inmueble. Tal cosa porque, se afirma, el tribunal interpretó erróneamente la demanda.*

2. *La pretensión segunda deducida en la demanda reside, como se sabe, en que el contrato de arrendamiento "... se encuentra renovado y prorrogado, en las mismas condiciones actualmente existentes, por el tiempo equivalente a los cánones de arrendamiento pagados en forma anticipada por los arrendatarios a los arrendadores, en la forma, condiciones y circunstancias determinadas en los hechos de la presente demanda".*

El Tribunal, por su lado, descompuso esa pretensión en dos partes para declarar, primeramente, que el contrato de arrendamiento "es el mismo que existía cuando se inició el proceso verbal de renovación ante el Juzgado Quince Civil Municipal de Medellín, a un canon mensual de \$23.000,00. Y, además, decir que "no hay lugar a hacer la asignación de los excedentes de cánones...", pero sí a disponer que los arrendadores devuelvan a los arrendatarios la suma de \$3.558.000,00 con sus intereses comerciales.

3. *Apreciadas las cosas de ese modo, aun cuando se dijera que, realmente, el Tribunal desacertó por considerar que en la pretensión segunda de la demanda era advertible una solicitud implícita de restitución de la suma de dinero premencionado, el yerro, de todas maneras, no sería trascendente. En efecto, no porque el Tribunal hubiese incurrido en desacierto palmario al señalar el alcance de la demanda, los recurrentes podrían ver triunfante su pretensión porque lo cierto es que el Tribunal la negó tal y como fue planteada en la demanda cuando, como se acaba de indicar, dijo que no había lugar a hacer la asignación de los excedentes de cánones. Esta específica determinación, es bien claro, no aparece combatida en el cargo, lo que era tanto más necesario cuanto que el ad-quem juzgó que la aplicación o asignación reclamada por los demandantes pugnada con el artículo 518 del C. de Co.*

*Más si se objetara que ese punto concreto sí fue materia de censura en el cargo tercero y que entonces este debe ser enlazado con el actual, en obediencia a lo prescrito en el numeral 3 del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, si eso se objetara, habría entonces que observar que aun cuando la acumulación se tuviera como operable no obstante que el cargo tercero viene dirigido por la vía directa, mientras que el cuarto lo es por la indirecta, lo cierto es que, como en su momento se vio, el ad-quem no se equivocó cuando dijo tal cosa.*

*Amén de que, como a simple vista es palpable, ni en este cargo ni en ningún otro los recurrentes han evidenciado que los arrendadores hubiesen admitido o consentido que lo consignado por los arrendatarios dentro del proceso de restitución del bien y a ellos entregado tuviese como finalidad el pago de rentas anticipadas a razón de \$23.000,00 mensuales. Es más, en la demanda incoativa del proceso, particularmente en los hechos 43 a 52, sobre cuyo contenido los recurrentes llaman la atención de manera particular, no se encuentra una afirmación concreta en tal sentido, como que lo allí expuesto lo constituye una serie de consideraciones, desde luego, algunas de ellas de índole fáctica, que aluden básicamente a que la entrega de esas sumas por parte de los aquí demandantes se llevó a cabo para el pago de arrendamientos, consideraciones que, a base de interpretaciones subjetivas y no de la objetividad de los hechos, los conducen a concluir que "así las cosas, sólo tiene sentido la finalidad que tuvieron en mente mis mandantes: Que mediante la entrega de tal suma de dinero le pagaron a los arrendadores cánones mensuales de arrendamiento que habrán de causarse en el futuro..." (hecho 51), y que "ese pago anticipado de cánones de arrendamiento por los arrendatarios tiene la virtud de renovar el contrato de arrendamiento, en las mismas condiciones actualmente en vigencia, por todo el tiempo en que los cánones de arrendamiento ya fueron pagados en forma anticipada..." (hecho 52).*

*3. Lo anterior también conduce a decir que sin embargo, de que se pensara que en la censura propuesta en el cargo cuarto se encuentra así mismo involucrada la cuestión relativa a la aplicación de la suma entregada al pago anticipado de la renta a razón de 23.000,00 mensuales, no por ello se le podría atribuir al Tribunal un trascendente yerro fáctico en el entendimiento de la demanda puesto que las suposiciones o inferencias de los actores no tienen la virtualidad de tornar en algo real y jurídicamente*

*de recibo, la aquiescencia o unuencia por la que se averigua. Finalmente, si esto es aprehensible en otra prueba, los impugnadores no denunciaron la sentencia por su preterición.*

*Por consiguiente, los cargos no prosperan.*

*Cargo quinto de la demanda de Jaime Salazar Zuluaga:*

1. Planteado con apoyo en la causal primera del artículo 368 del C. de P.C., por la vía directa se acusa en él la sentencia por la violación de los artículos 302, 303, 304, 305 y 306 del C. de P. C.; 739, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 y 969 del C.C.; 516, 517, 518, 519, 520 y 522 del C. de Co.

2. Al sustentarlo, el recurrente transcribe el texto de la pretensión primera, así como las razones expuestas por el Tribunal para declarar de oficio, a su respecto, la excepción de petición antes de tiempo.

Argumenta que es erróneo el razonamiento correspondiente "porque es manifiesto que la decisión sobre si algún factor específico puede incidir o no en la determinación del canon de arrendamiento que se paga por un inmueble determinado no está subordinada a que se haga en un proceso específico o determinado sino que bien puede proponerse como base de litigio en un proceso ordinario..."

3. Encuentra luego que son viables las oportunidades indicadas por el ad-quem, pero que esas situaciones "no excluyen el que haya otros campos jurídicos en los cuales pueda adelantarse la misma discusión entre las partes en litigio, máxime cuando se trata de un proceso ordinario, el más amplio de todos los procesos, el que le permite a las partes afrontar la defensa de sus derechos con el máximo de garantías para hacerlo y sacar adelante sus puntos de vista".

*Se considera:*

1. El Tribunal, tras observar que los demandantes pedían que se declarara que las mejoras "no se tengan como factor determinante del canon mensual de arrendamiento" en el evento futuro de que los arrendadores promuevan un proceso de renovación según el art. 519 C. de

Comercio", dice que el juzgador, de todos modos, tendría que analizar si existen mejoras y quién las plantó, cuestiones que, o son propias de un derecho de retención ejercido a raíz de un proceso que tienda a declarar terminado el contrato de arrendamiento, o de uno ordinario en donde se adujera el derecho crediticio derivado del fenómeno de la accesión, o en el instaurado para incrementar el canon, conforme al artículo 519 del C. de Co. concluye que aquí no se da ninguna de tales situaciones.

2. De acuerdo con lo anterior, al recurrente no le era técnicamente dable afirmar que la presente también era una oportunidad adecuada para debatir tal tipo de cuestiones, ni siquiera bajo la consideración consistente en que aquí, por tratarse de un proceso ordinario, las partes cuentan con el máximo de garantías para la defensa de sus derechos, porque si la vía directa presuponía que el impugnador no ha de disentir de los hechos según los vio el juzgador, en este caso el recurrente debía tomar en consideración que el Tribunal le dio una determinada interpretación a la demanda, interpretación de acuerdo con la cual la petición primera allí consignada se circunscribía a lo ya anotado, pero que por delante de ella estaba lo atinente a la definición de la existencia y autoría de las mejoras, siendo estos los dos puntos a ser despejados en los procesos que menciona.

Por lo tanto, al recurrente no le era dable argüir que unas cuestiones podían ser también discutidas dentro de un proceso ordinario como el presente, sin demostrar previamente, desde luego por la vía indirecta, que el Tribunal se equivocó cuando estimó que las mismas estaban excluidas de la demanda.

3. Pero, además, no se puede perder de vista que para el sentenciador no se daban ninguna de las situaciones propicias para la discusión concerniente a las mejoras "puesto que -afirmó textualmente- los arrendatarios aún tienen vigente el contrato de arrendamiento, no han sido lanzados del inmueble ni, mucho menos, han hecho entrega del inmueble", lo que, al conducirlo a declarar probada la excepción de "petición antes de tiempo", representa que, en su sentir, no es actual el interés de los demandantes. Siendo así, el recurrente ha debido impugnar ese fundamento de la sentencia demostrando, desde luego, que su interés sí es actual, o que, no obstante no serlo, sí resulta digno de la tutela jurisdiccional dentro de los términos en que en la demanda aparece delineado. Y a semejante propósi-

*to no se acomoda lo discurrido en el cargo, pues que el presente sea un proceso ordinario donde las partes disponen de las más amplias garantías es razonamiento que ninguna relación guarda con lo aducido por el Tribunal.*

*En síntesis, si el ataque resulta desviado por los dos aspectos que se acaban de señalar, el cargo no está llamado a tener éxito.*

*Decisión:*

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín del dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y uno (1991), proferida dentro del proceso ordinario instaurado por FABIÓ HURTADO SALDARRIAGA y JAIME SALAZAR ZULUAGA, en frente de PEDRO LUIS GONZALEZ y de la Sociedad "DISTRIBUIDORA DE CONFITES LTDA." y al que, en la condición de demandados, fueran vinculados luego los señores JAIME ESCOBAR y ROSA ELENA SANTAMARIA DE ESCOBAR.

Costas en el recurso de casación a cargo de los recurrentes. Tásense en su oportunidad.

*Notifíquese.*

*Pedro Lafont Pianetta, Nicolás Bechara Simancas, Eduardo García Sarmiento, Carlos Esteban Juramilio Schloss, Héctor María Naranjo, Rafael Romero Sierra.*

**PRESCRIPCION / PERTENENCIA / POSESION / BIEN  
RURAL / PRESUNCION LEGAL / BIEN BALDIO /  
CERTIFICADO DEL REGISTRADOR / NACION /  
OCUPACION**

- 1) El fenómeno jurídico de la prescripción como acción y como excepción.
- 2) Fundamento de la acción de pertenencia. Condición de prescriptible que debe tener el bien objeto de la declaración de pertenencia.
- 3) Si el actor ejerce posesión económica sobre el predio rural pretendido en usucapión, en ningún caso podrá exigirsele acreditar que ese bien "no es baldío" por haber salido del dominio del Estado y haber pasado a ser de propiedad privada.
- 4) Presunciones legales respecto de bienes baldíos que se establecen conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. a 4o. de la Ley 200 de 1936. Igual sentido: Sentencia de 9 de marzo de 1939, G.J. XLVII, pág. 798; sentencias de 11 de agosto de 1943, G.J. LVI, pág. 46; y 15 de julio de 1952, G.J. LXXII, pág. 735; G.J. LXXXIII, pág. 74; reiterada en sentencia de 31 de julio de 1962, G.J. XCIX, pág. 172.
- 5) Con el certificado de registro inmobiliario se persigue únicamente la integración del litisconsorcio necesario, pero jamás que sirva de prueba de la calidad de propiedad privada que tiene el inmueble.
- 6) Quien por consiguiente, incorpora su trabajo a los baldíos de la Nación y los mejora con edificaciones o sementeras que acrecientan la riqueza pública, adquiere de inmediato el dominio del suelo, no por transferencia alguna sino por el título originario de la ocupación con que el ordenamiento protege y respalda al poseedor económico de tierras sin otro dueño que el Estado.

Igual sentido: sentencia de 2 de septiembre de 1964; G.J. CVIII, pág. 239.

E.F.: LEY Num.: 120 Año: 1928; C. de P.C. Art.: 407; C.C. Art.: 2512; LEY Num.: 200 Año: 1936 Art.: 1, 2, 3 y 4; C.C. Art.: 762, 675.

### TECNICA DE CASACION—Yuxtaposición de Argumentos / CASACION—Cargos

Incompatibilidad de argumentos presentados en los cargos.

E.F.: DECRETO Num.: 2651 Año: 1991 Art.: 51; C.N. Art.: trans. 5.

*Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil — Santafé de Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).*

Magistrado Ponente: *Nicolás Bechara Simancas*

Referencia: Expediente No.4305

Sentencia N°133

Decídase el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 10 de diciembre de 1992, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca en este proceso ordinario promovido por Alcira Zamudio de Molina frente a personas indeterminadas.

#### *Antecedentes*

I. Por demanda presentada ante el Juzgado Civil del Circuito de Chocontá, Cundinamarca, la citada actora promovió, con audiencia de las personas con derecho a contradecir, proceso de declaración de pertenencia, sobre el inmueble rural denominado Saturno, de 360 hectáreas, aproximadamente, situado en jurisdicción del Municipio de Guatavita, Cundinamarca, y segregado del predio El Palmar, cuyos linderos se describen en la demanda.

II. Como fundamentos de la anterior pretensión, citáronse los hechos que, compendiados, son los siguientes:

a) Mediante escritura No. 1471 del 20 de junio de 1983, otorgada en la Notaría 13 de Bogotá, Alcira Zamudio de Molina compró a Gerardo



Báez Garzón los derechos de éste sobre el predio Saturno, descrito en la demanda, fecha a partir de la cual ella "Viene administrando y disponiendo de la finca" sin reconocer derecho ajeno, cultivándola, cercándola, manteniendo ganados, construyendo vivienda y corrales, pagando impuestos y tributos, sin que nadie le haya reclamado.

b) El inmueble objeto de esta acción fue adquirido en mayor extensión por el vendedor Gerardo Báez Garzón, por compra hecha a Angel María Báez Rodríguez y Pablo Emilio Peña, contenida en la escritura No. 260 de 27 de octubre de 1968, corrida en la Notaría de Guatavita, en virtud de la cual entró el comprador en posesión quieta y pacífica de él.

c) Angel María Báez Rodríguez hubo la posesión de lo que vendió, de Israel Garzón Peña, mediante escritura No. 44 "de septiembre de 1967" (sic), de la Notaría de Guatavita, quien a su turno traía en posesión quieta y pacífica el bien desde hacía más de 20 años, por compra que hizo de los derechos de Lisandro Báez Peña y otros, según escritura No. 150 de 18 de agosto de 1956 de la Notaría de Guatavita.

d) Todos los vendedores mencionados han ejercido la posesión del predio Saturno, "en forma pública e ininterrumpida y lo han trasladado los unos a los otros con todos sus vicios y virtudes...", posesiones que sumadas se remontan a un lapso superior a los 20 años.

III. Notificada la demanda al curador ad—litem de los demandados indeterminados emplazados, éste no se opuso a las pretensiones de la actora, siempre y cuando se probasen los hechos alegados por la actora.

IV. El a—quo le puso término a la primera instancia mediante sentencia estimatoria, de 7 de octubre de 1991.

V. En cumplimiento del grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca pronunció la sentencia de lo. de diciembre de 1992, en la cual revocó la del a—quo y negó las pretensiones de la actora.

### *FUNDAMENTOS DEL FALLO DEL TRIBUNAL*

Al ocuparse de los presupuestos de la acción de pertenencia y en

particular de si ella es susceptible de recaer o no sobre el bien de que se trata, el Tribunal, apoyándose en los artículos 63 de la Constitución Nacional, 2519 del C. Civil y 407 nu. 4o. del C. de Procedimiento Civil, manifiesta que sólo pueden ser objeto de la misma los predios de propiedad de los particulares, calidad que, dice, es dudosa atribuir al bien pretendido en este proceso, "pues del folio de matrícula inmobiliaria No. 0500104228, expedido por el señor Registrador de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, el 24 de junio de 1992, no se puede concluir que estamos frente a un predio de propiedad privada", calidad que se acredita, señala, en la forma indicada por los articulados 3o. y 4o. de la Ley 200 de 1936, lo que aquí no sucede en vista de que no se dan ninguno de los supuestos consagrados en estas normas, por lo cual concluye el Tribunal que en apariencia el predio "Saturno", no ha salido en debida forma del patrimonio del Estado". Añade que el folio de matrícula aportado a estas diligencias corresponde al inmueble "La Esperanza", cuando la pretensión del actor apunta al predio "Saturno", desmembrado de otro de mayor extensión denominado "El Palmar", con lo que "en estricto derecho el folio presentado con la demanda no corresponde al predio que se pretende obtener por prescripción", no obstante lo cual asevera en el párrafo siguiente que "El folio de Matrícula Inmobiliaria No. 0500104228, predio 'LA ESPERANZA', con extensión de 1.176 hectáreas, inscrito con el nombre de 'ARTESA', en el Registro matriculado con el nombre de el 'PALMAR', ubicado en la Vereda de Jiquin y Artesas, se inició como corresponde con la anotación 01 del nueve (9) de septiembre de 1967, COMPRA—VENTA DE DERECHOS Y ACCIONES de ISRAEL GARZON PEÑA a ANGEL MARIA BAEZ RODRIGUEZ, según Escritura No. 44 del catorce (14) de Marzo de 1967, de la Notaría de Guatavita", a lo que agrega que en la cláusula primera de la misma escritura se vendieron terrenos y acciones, concluyendo que el citado folio de matrícula se abrió con falsa tradición.

Tras analizar a continuación los diferentes trasposos de "derechos y acciones" existentes a partir de entonces en el folio de matrícula No. 0500104228, reitera el sentenciador que "no hay prueba de que este predio haya salido del patrimonio del Estado, por lo que puede ser baldío", añadiendo a continuación que "Por esta razón y amparados en el folio de matrícula inmobiliaria No. 0500104228, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, se deduce

que el predio 'SATURNO' puede ser baldío, desde luego sin desconocer la presunción señalada en el artículo 1o. de la ley 200 de 1936, sustituido por el artículo 2o. de la Ley 4a. de 1973, y desde ya afirmando que la carga de la prueba la tiene el actor, por lo tanto es él quien debe probar, sin dejar ninguna duda la legalidad de su pretensión".

Una vez nota que del folio de matrícula en comento lo único que se puede deducir es que no hay personas con derechos reales inscritos, y que los traspasos allí registrados obedecen a falsas tradiciones (compraventa de derechos y acciones), vuelve a hacer énfasis el sentenciador en que no hay certeza sobre la naturaleza prescriptible del bien, añadiendo expresamente:

"En consecuencia sobre este predio, cuyo dominio no se ha probado que esté en cabeza de un particular y por ende pueda ser baldío, la parte actora debe solicitar el título de adjudicación en la forma señalada en el Capítulo VIII artículos del 29 al 42 bis de la Ley 135 de 1961, reformado por la Ley 30 de 1988 y el Decreto 2276 de noviembre 3 de 1988, ante el INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 'INCORA'. Lo anterior en razón a que el Estado ha puesto las tierras baldías del país, que no sean objeto de reserva, a disposición de los particulares, quienes pueden ocuparlas y explotarlas en la forma prevista en el artículo 1o. de la Ley 200 de 1936, con la modificación de la Ley 4a. de 1973, artículo 2o., y si se demuestra que existe explotación económica, mediante el procedimiento señalado en el Decreto 2275 de 1988, puede pedirse el título de adjudicación al INCORA, y este título debidamente inscrito en el Registro de Instrumentos Públicos, constituye por sí solo prueba plena de la nueva propiedad inmueble".

### *LA DEMANDA DE CASACIÓN*

Tres cargos, todos con estribo en la causal primera de casación, formula el recurrente contra la sentencia del Tribunal. La Corte estudiará en primer lugar y en forma conjunta los dos primeros, para hacerlo luego respecto del inicial.

### *CARGO SEGUNDO*

Mediante él se acusa la sentencia de infringir indirectamente los

artículos 1o. de la Ley 200 de 1936, sustituido por el 2o. de la ley 4a. de 1973, 407—1 del C. de P.C., 2518, 2531, 2532 del C.C., 1o. de la ley 50 de 1936, por falta de aplicación; 2o., 3o., 4o. de la Ley 200 de 1936 y 407—4 del C. de P.C., por aplicación indebida, a consecuencia de errores de hecho cometidos por el Tribunal al apreciar las pruebas.

Lo explica la recurrente diciendo que en el proceso está demostrado que el inmueble pretendido en usucapión lo viene explotando económicamente la actora, no obstante lo cual el Tribunal dejó de aplicar el artículo 1o. de la ley 200 de 1936, norma bajo cuyo tenor debió considerarlo como de propiedad privada. En efecto, así se deduce, dice, de los testimonios de Eduardo Pedraza Peña, Arturo Rodríguez Báez y Tobías Rodríguez; de las diligencias de inspección judicial practicadas al inmueble (fls. 47, 48, 49, 73 y 74 C. 1), de los certificados del Registrador actuantes a folios 2 y 23 de los cuadernos 1 y 3, “donde aparecen inscritas las diferentes compraventas de posesiones hechas entre los antecesores de la demandante hasta llegar a ella”; del dictamen pericial obrante a folios 56 a 59 y 75 a 80 del C. 1; y las escrituras públicas traídas a la actuación.

Agrega que el artículo 1o. de la Ley 200 de 1936 consagra una presunción legal de propiedad privada en relación con un predio objeto de explotación económica, y que el Tribunal por no haber apreciado en el caso de este proceso dicha explotación, no calificó el bien como tal, dejando de lado las pruebas que así lo demuestran, preterición que lo llevó a aplicar los artículos 2o., 3o. y 4o. de la citada ley y a dejar de hacer actuar los artículos 2513, 2531, y 2532 del C.C., con arreglo a los cuales la prescripción extraordinaria no exige título alguno. Señala adicionalmente que cuando entró a regir la ley 200 de 1936 el predio “Saturno” ya se hallaba en posesión de un particular “con justo título inscrito en la Oficina de Registro de Guatavita (escritura pública No. 169 del 13 de mayo de 1926 de la Notaría Unica de Guatavita)” y que al folio 2 vuelto del cuaderno principal se encuentra la complementación de la matrícula inmobiliaria, prueba que el Tribunal no vio y por la que con mayor razón debió aplicar el artículo 1o. de la Ley 200 de 1936, presumiendo como de propiedad privada el inmueble “Saturno”, pero en ningún caso como imprescriptible, cual ocurrió. En respaldo de sus apreciaciones transcribe lo pertinente de sentencias de la Corte.

Hace ver en otro aparte de su censura cómo ni la ley ni la jurisprudencia exigen que para probar la propiedad privada de un inmueble explotado económicamente, se deba acudir a las pruebas indicadas en los artículos 3o. y 4o. de la Ley 200 de 1936, pues éstos sólo tienen cabida cuando no esté de por medio la explotación económica del predio y deba desvirtuarse la presunción de baldío que recae sobre él, reiterando que para presumir a un predio de propiedad privada basta demostrar su explotación económica, del mismo modo que, cuando no lo está, se presume baldío (art. 2o. ley 200 de 1936) al tenor del artículo 1o. de la misma ley, presunción que se desvirtúa en la forma señalada por los artículos 3o. y 4o. *ibídem*.

En consonancia con lo anterior, la impugnante solicita en el capítulo VI de su demanda que, al prosperar este cargo, la Corte case la sentencia acusada para que en su lugar confirme la del a quo.

### *Cargo Tercero*

Mediante él se acusa la sentencia de infringir indirectamente los arts. 407--5 del C. de P.C., 2518, 2531, 2532 del C.C., 1o. de la Ley 50 de 1936, por falta de aplicación: 2o., 3o. y 4o. de la ley 200 de 1936, a consecuencia de exigir una prueba no requerida en la ley.

Lo explica la recurrente diciendo que el Tribunal considera que por no existir titular de derecho real inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria traído al proceso, el predio pretendido en usucapción nunca tuvo propietario particular, y por ende es un bien imprescriptible, por lo cual aplica indebidamente las presunciones y el sistema probatorio consagrado en los arts. 2o., 3o. y 4o., de la ley 200 de 1936, dejando de aplicar en cambio el numeral 5 del art. 407 del Código de Procedimiento Civil que no hace esa exigencia. El Tribunal, explica, cede de menos una prueba para un caso diferente, pues aplicó indebidamente los art. 3o. y 4o. de la ley 200 de 1936 llamados a desvirtuar la presunción de baldío que tiene un predio cuando no está siendo explotada económicamente, distinto de lo que sucede en el presente proceso donde esa explotación del prescribiente se demostró plenamente con los testimonios de Eduardo Pedraza Peña, Arturo Rodríguez Báez y Tobías Rodríguez, del mismo modo que con las inspecciones judiciales realizadas a dicho bien, los certificados del registrador visibles a folios 2 del cuaderno 1 y

23 del cuaderno 3 "donde aparecen inscritas las diferentes compraventas de posesiones hechas entre los antecesores de la demandante hasta llegar a ella", los dictámenes periciales obrantes de folios 56 a 59 y 75 a 80 del cuaderno 1, y las escrituras públicas traídas a la actuación (cuadernos 1 y 3).

Tras mencionar que para el Tribunal los arts. 3o. y 4o. de la ley 200 de 1936 indican la forma como se acredita la propiedad privada, que en el caso de este proceso no se da ninguno de esos eventos y que por lo tanto el Fundo "Saturno" no ha salido en apariencia del patrimonio del Estado, la censura manifiesta que el numeral 5o. del art. 407 del C. de P.C. Faculta iniciar el proceso de pertenencia aun cuando en el certificado del Registrador no figuren titulares de derechos reales, norma de la que además se deduce que si en dicho certificado no aparece titular de derecho real, ello no significa que sea baldío, por cuanto la exigencia de acompañar ese documento es para la integración del litis consorcio necesario, pero no para acreditar el carácter de propiedad privada de un inmueble.

El Tribunal, continúa, exige que en el certificado el registrador aparezca un titular de derecho de dominio como prueba de que el bien salió del patrimonio del Estado y es prescriptible, cuando lo cierto es que si hubiese aplicado el numeral 5o. del art. 407 en mención habría concluido que no en todos los inmuebles el titular de derecho real aparece inscrito en la matrícula inmobiliaria, que la ley solo exige posesión de 20 años para la prescripción extraordinaria, y que la citada norma "en forma inteligente provee (sic) que no haya podido desaparecer esa prueba inicial o prueba diabólica que hoy está solicitando el Tribunal".

Dentro de esa misma línea de argumentación exterioriza párrafos adelante la casacionista que los arts. 2518, 2531, 2532 y 1o. de la ley 50 de 1936 no reclaman para la prescripción extraordinaria título alguno; que el art. 407 del C. de P.C. prevé incluso la posibilidad de que no aparezcan titulares de derechos reales en el folio de matrícula del inmueble; que el art. 69 del Decreto 1250 provee (sic) que un inmueble ni siquiera tenga su propia matrícula y ordene abrir una nueva con la sentencia; y que el art. 52 del mismo Decreto prevé como es factible la inscripción de un título aun cuando no existan otros antecedentes, caso en el que se abrirá nueva matrícula, circunstancia todas esas por las cuales, concluye, el proceso de



pertenencia puede iniciarse después de los 20 años, aún sin la exhibición de título, sin que sea necesario la aparición de titulares de derechos reales, sin la exigencia de títulos anteriores, e inclusive sin que el inmueble tenga su propia matrícula.

Nota igualmente cómo la ley autoriza adquirir por prescripción extraordinaria una porción de un terreno de mayor extensión, finalidad para la que basta adjuntar, continúa, el certificado de registro correspondiente al último y en donde quede comprendido aquél si éste no tiene su propio folio, ya que las oficinas de registro no abren matrículas independientes sino mediante títulos traslativos de dominio o de sentencias adjudicatarias de pertenencia. En ese orden de ideas la impugnante observa que el Tribunal no tuvo en cuenta el certificado anexo a la demanda, exigiendo que "Saturno" tuviera folio independiente, cuando en el libelo se indicaron los linderos generales del predio mayor, tomados de aquél documento, y los especiales del predio menor. Por lo mismo, una vez ascertada que el Tribunal no analizó la mencionada prueba anexa a la demanda, la recurrente señala que no es válido afirmar que dicho certificado de registro corresponde a otro inmueble, pues si se observa éste con cuidado se comprenderá que el predio "El Palmar" no es diferente al predio "La Esperanza", del cual hace parte el que es materia de pretensión.

Solicita, por ende, se case la sentencia y, en su lugar, se confirme la de primera instancia.

### *SE CONSIDERA*

1. Los cargos que para su despacho conjunto acaban de resumirse no están llamados a abrirse paso por cuanto, aún en el evento de ser prósperos, las acusaciones en ellas contenidas resultan intrascendentes, por las razones que a continuación se indican:

a) Invocada por la actora la posesión de sus antecesores para agregarla a la suya y completar así el lapso requerido en la ley para que opere la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio (arts. 778 y 2521 del C.C.), sería pertinente analizar el material probatorio del proceso, en orden a determinar si los distintos lapsos posesorios de que se sirve, y en particular de la cadena formada para llegar a ella a partir de Israel Garzón Peña, se hallan vinculados, como es preciso que suceda



respecto de todos los respectivos traspasos; lo mismo que la posesión ejercida por cada uno de ellos, el tiempo durante el cual se prolongó ella y si ésta fue o no interrumpida.

b) En relación con lo anterior, la prueba testimonial obrante en los autos no es propiamente suficiente para establecer los actos posesorios del primero de esos antecesores de la actora, esto es, de Israel Garzón Peña, pues si bien es verdad que en principio los declarantes Arturo Rodríguez Báez (fl. 38 C. 1), Eduardo Pedraza Peña (fl. 40 C. 1) y Tobías Rodríguez (fl. 42 C. 1) describen actos posesorios de aquél en relación con la explotación económica del predio, esos mismos expositores se encargan de precisar, en audiencia celebrada el 26 de enero de 1990 (91 a 96 C. 1), que el conocimiento que tienen del citado bien data de cuando mandaba en él Angel María Báez Rodríguez, sucesor de Israel Garzón Peña, con lo cual desvirtúan ellos mismos sus aseveraciones anteriores referente a la posesión de éste. De esta manera las manifestaciones probatorias que les consta a los testigos parten tan sólo de Angel María Báez Rodríguez, involucrando adicionalmente a Gerardo Báez Garzón y a la actora Alcira Zamudio de Molina, de quien ésta fue continuadora.

c) Entonces, si, como la propia demanda lo señala, Angel María Báez Rodríguez inició su posesión sobre el inmueble sólo una vez que, por acto entre vivos, se la cedió Israel Garzón el 7 de septiembre de 1967, no ofrece dificultad concluir que la posesión observada por los mencionados testigos no puede remontarse en el tiempo más allá de esa precisa fecha, y que de conformidad con dicha prueba la demanda de pertenencia se presentó (17 de enero de 1987, fl. 19 vto.) cuando la actora aún no había consolidado su derecho.

d) Sin necesidad de ocuparse pues la Corte de la aptitud del título que sirvió de traspaso a la posesión y que constituye igualmente elemento prioritario en la agregación de posesiones, ni de abordar tampoco el estudio detenido de la posesión de cada uno de los eslabones de la cadena posesoria para determinar si en suma ella fue o no ininterrumpida, es preciso señalar que los cargos aquí formulados contra la sentencia del Tribunal no tienen la virtud de hacer variar la denegatoria de las pretensiones allí deducida lo cual denota que el ataque es intrascendente.

2. Lo anterior no obsta sin embargo para que la Sala haga las siguientes precisiones en el campo doctrinario:

a) Al ser expedida la ley 120 de 1928, el fenómeno jurídico de la prescripción, que hasta entonces sólo podía hacerse valer como excepción, pudo ser ejercido como acción, tornándose así en herramienta de incalculable valor para el saneamiento de la propiedad raíz, al permitir que quien fuera propietario, por haber poseído materialmente y por determinado lapso un bien (ordinario o extraordinario), pudiera acudir a los jueces en demanda de la correspondiente declaración de dueño, bajo el bien entendido supuesto de que la acción de pertenencia, culminante con una sentencia declarativa, está fundada en el abandono voluntario del dueño verdadero en beneficio del poseedor, antes que en la usurpación del derecho ajeno por parte de éste.

b) Manteniendo en líneas de alcance general la misma orientación, el artículo 407 del C. de P.C. en armonía con el 2512 y siguiente del Código Civil permiten hoy que la prescripción siga teniendo cabida como acción, fenómeno frente al cual la jurisprudencia de la Corte ha señalado los precisos requisitos para que proceda judicialmente la declaración de pertenencia, entre los cuales cabe destacar la condición de *prescriptible* que debe tener el bien objeto de la misma.

c) Con todo, el citado requisito de ser *prescriptible* el objeto materia de pertenencia, esto es, el de no tratarse de bienes de uso público ni pertenecer ellos a entidades de derecho público (artículo 407, nú. 4o., C. de P.C.), no significa sin embargo que, frente a la prescripción extraordinaria y respecto de fundos rurales, el actor esté en la obligación de demostrar que el bien "no es baldío" por haber salido del patrimonio del Estado y haber ingresado al de los particulares, pues esa exigencia no se la impone el legislador, que por el contrario consagra un principio de prueba de dominio en su favor al disponer en el artículo 1o. de la Ley 265 de 1936 que "Se presume que no son baldíos, sino de propiedad privada los fundos poseídos por particulares, entendiéndose que dicha posesión consiste en la explotación económica del suelo por medio de hechos positivos propios de dueño, como las plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados y otros de igual significación económica...". Bien distinta ha sido, pues, la tendencia del legislador, porque es nítido que, en supuestos como éste, se ha inclina-

do por facilitarle al actor la obtención de la sentencia declarativa en mención, con la única exigencia de demostrar posesión en la forma y términos de ley.

Y es que tal exigencia no tiene ni siquiera cabida en el evento en que el Estado concurriera personalmente al proceso a disputarle el predio al actor, porque en virtud de la presunción de dominio consagrada en favor de este último en el artículo 1º. de la Ley 200 de 1936, en la forma en que fue modificado por el artículo 2º. de la ley 4ª. de 1973, sería a aquél a quien le correspondería acreditar, para enervar los efectos de la acción petitoria en comento, que el bien no ha salido nunca de su patrimonio, por cuanto sobre él recaería la carga de la prueba en contrario. De manera que si el actor ejerce posesión económica sobre el predio rural pretendido en usucapión, en ningún caso podrá exigírsele acreditar que ese bien "no es baldío" por haber salido del dominio del Estado y haber pasado a ser de propiedad privada; y, por ende, constituye notorio error desconocer que, acrediándose por parte del usucapiente posesión económica sobre el bien, en principio él tiene la calidad de propietario, no sólo cuando el proceso se adelanta sin la comparecencia personal del Estado, sino cuando éste interviene en esa forma discutiéndole dominio al actor. Mayor desacierto se presenta si, en la primera hipótesis, el juzgador niega la declaración de pertenencia apoyándose en la presunción de baldío establecida en el artículo 2º. de la ley 200 de 1936, pues la aplicación de esa norma es únicamente viable cuando el actor no ejerce posesión económica sobre el predio. Es precisamente por ello que, ante tal situación, el demandante, para desvirtuar la susodicha presunción de baldío, que invierte la carga de la prueba, tenga que demostrar que el fundo salió del dominio del Estado por alguno de los medios indicados en el artículo 3º. de la mencionada Ley. De suerte que es muy distinto, repítase una vez más, el fenómeno que se presenta cuando se trata del ejercicio de la acción petitoria de dominio puesta en marcha por el poseedor económico de un predio rural, porque en este caso, distinto de como ocurre en el anterior, al actor le basta acreditar la posesión en los términos ya indicados del artículo 1º. de la Ley 200 de 1936 para que se presuma dueño, y es al Estado a quien, en caso de oposición, le corresponde demostrar, en virtud de la presunción de dominio ya aludida y consagrada allí en favor del poseedor demandante, que el correspondiente bien no ha salido nunca de su patrimonio.

De allí justamente que la Corte haya expuesto que "Conforme a los artículos 1o., 2o. y 3o. de la Ley 200 de 1936, se establecen dos presunciones legales: que no son baldíos sino de propiedad privada los fundos poseídos de conformidad con las experiencias de la misma ley, y que son baldíos los predios rústicos no poseídos en la forma indicada. La última presunción se desvirtúa con la presentación - fuera del título originario expedido por el Estado, que no haya perdido su eficacia legal- de títulos inscritos otorgados con anterioridad a la mencionada ley 200, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria" (Sentencia de 9 de marzo de 1939, G.J. XLVII, Pág. 798); y que hubiese precisado además que "La ley 200 de 1936 no tiene aplicación sino para definir lo relativo al dominio territorial cuando se lo disputen el Estado y los particulares, y cuando en consecuencia, se enfrente el Estado a cualquier pretendido propietario para disputar su dominio. Precisamente para definir en esos casos la situación jurídica de la tierra y saber a quien corresponde en definitiva su dominio en las presunciones señaladas en sus casos dudosos, establece la ley 200 las presunciones señaladas en sus artículos 1o. a 4o., presunciones que deben actuar en el campo de nuestro derecho probatorio y que interesan sobre todo, a la prueba del dominio territorial. Antes de expedir la ley 200 era difícil en la mayoría de los casos acreditar el dominio privado de las tierras, y de allí que en casi todos los litigios entre la Nación y los particulares, éstos salían perdidos en las controversias en que se disputaba acerca de la propiedad territorial, para decidir si ésta le pertenecía al Estado en calidad de baldío o a los asociados, por haber entrado validamente en el patrimonio privado. A resolver estos conflictos obedeció la expedición del estatuto de la tierra" (sentencias de 11 de agosto de 1943, G.J. LVI, pág. 46, y 15 de julio de 1952, G.J. LXXII, pág. 785).

Posteriormente, en sentencia de 22 de junio de 1956, la Corte dijo que "La posesión económica que consagra el artículo 1o. de esta ley (se refiere a la 200 de 1936, se agrega), está referida a la presunción de propiedad que establece, en desarrollo de la presunción general de dominio que estatuye el artículo 762 del C.C., pero únicamente en relación con la Nación, puesto que es para calificar las tierras así poseídas, de propiedad privada y no baldíos. Se trata de una presunción a favor de los particulares y en contra de la Nación, con que el artículo 1o. reformó la presunción tradicional de dominio establecida por los

artículos 675 del C.C. y 44 del C.F." (G.J. LXXXIII, pág. 74; reiterada en sentencia de 31 de julio de 1962, G.J. XCIX, pág. 172).

d) El criterio anterior no sufre mengua alguna ni siquiera bajo el entendimiento de que la sentencia de pertenencia tiene efectos erga omnes, pues aún así la única presunción que emerge del hecho de la posesión económica de un predio rural es, según el artículo 1º. de la ley 200 de 1936, la de que quien así posee es el propietario del mismo, como que esa presunción es también validera frente al Estado, persona vinculada (igualmente a las results del proceso petitorio de dominio merced a la gestión del Curador ad litem. En manera alguna, pues, ha de deducirse, estando de por medio la explotación económica de un fundo rural, la presunción consagrada en el artículo 2º. de la ley 200 de 1936, pues esta última descansa por el contrario, en que el predio carezca de esa posesión. Luego, frente a este considerando sería mucho menos explicable exigirle al prescribiente que pruebe que el bien "no es baldío" por haber salido del patrimonio del Estado. Esta última norma, al igual que los artículos 3º. y 4º. del citado estatuto, sólo son aplicables, se repite aún a riesgo de fastidiar, en la medida en que el inmueble no esté explotado económicamente y tenga que desvirtuarse la presunción de baldío que sobre él recae.

e) Adicionalmente, al tenor del numeral 5º. del artículo 497 del C. de P.C. no es válido sostener que, ante la ausencia de titular de derechos reales en el certificado de registro inmobiliario correspondiente, éste tenga que considerarse como baldío, ni tampoco que si la ley autoriza en esas condiciones el inicio del proceso de pertenencia es para que en él se acredite por el actor que se dan las condiciones de los artículos 3º. y 4º. de la Ley 200 de 1936. Como se sabe, con ese certificado se persigue únicamente la integración del litis consorcio necesario, pero jamás que sirva de prueba de la calidad de propiedad privada que tiene el inmueble, entonces, si en él no aparece titular alguno de derecho real, la demanda sencillamente no tiene porqué estar dirigida contra una persona en particular pero de allí no puede colegirse que como el bien no es de propiedad privada la pretensión tenga que ser, por fuerza, desestimatoria, pues si así fuera al legislador le hubiera bastado consagrar desde un principio el rechazo o la ineficacia de la demanda en aquellos casos en que no apareciese titular de derecho real en el certificado del registrador. Con todo, no remite a dudas que el proceso de pertenencia puede iniciarse a pesar de que el



actor esté desprovisto de título, si ha poseído por 20 años (prescripción extraordinaria); que no es indispensable para ello la existencia de titulares de derechos reales sobre el predio objeto de la pretensión, ni que éste se halle inscrito en el respectivo registro inmobiliario; y mucho menos que el prescribiente esté amparado de un título, según se desprende claramente del artículo 2531 del C.C.

f) Algo más, si el artículo 1.º de la ley 200 de 1936 consagra la presunción de que no es baldío sino de propiedad privada el predio explotado económicamente, es del caso entender que dicho bien pertenece a quien lo ha poseído, pues esa inferencia es la que acompaña con la presunción general del inciso 2.º del artículo 762 del C.C., con arreglo a la cual "El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo". De manera que como lo dejó dicho la Corte en su sentencia de 31 de enero de 1963, "La figura que instituye el artículo 1.º de la ley 200 de 1936, bajo la forma de una presunción, es el modo constitutivo de la ocupación, la reiteración de lo que consagra la ley y la jurisprudencia nacionales (55 C.F. y 10 y 12 Ley 47 de 1926, 1.º y 5.º, ley 34 de 1936). Porque si a la Nación le basta la posesión económica de la tierra baldía para considerarla o presumarla de dominio particular, quiere decir que es suficiente esa sola posesión para adquirir la propiedad, a menos que el colono se haya establecido en tierras no susceptibles de ocupación por hallarse reservadas o destinadas por la Nación a un uso o servicio público, sobre las cuales no puede darse una posesión creadora de derecho" (G.J. CI, pág. 44). Por eso la adjudicación de carácter administrativo que en favor de un explotador económico de baldío hace el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), sólo es igualmente declarativa, pues se limita a reconocer el dominio que en tales circunstancias se consolida en aquél, toda vez que, cual lo expuso con precisión esta Sala en sentencia de 2 de septiembre de 1964, "Quien, por consiguiente, incorpora su trabajo a los baldíos de la Nación y los mejora con edificaciones, plantaciones o sementeras que acrecientan la riqueza pública, adquiere de inmediato el dominio del suelo, no por transferencia alguna, sino por el modo originario de la ocupación con que el ordenamiento protege y respalda al poseedor económico de tierras sin otro dueño que el Estado. La adjudicación posterior encaminada a solemnizar la titularidad, ha de basarse en la prueba que demuestre plenamente haberse cumplido en las condiciones legales el modo adquisitivo por ocupación" (G.J. CVIII, pág. 233). Y si ello es así, esto es, que la ley autoriza inclusive a tal ocupante que explota

*económicamente un baldío a reclamar, de cara a la Nación, la expedición del título de adjudicación respectivo por haberse convertido en propietario, justo es reconocer que no tiene ningún respaldo jurídico la tesis según la cual el usucapiente que tiene en posesión un predio rural y lo viene explotando económicamente, está obligado a probar que el citado bien "no es baldío", pues ello es extraño al propio espíritu de la ley. Dicho en otras palabras, si lo que viene de verse en materia de adquisición de la propiedad sobre la tierra es lo que cabe predicar de la relación entre particulares y el Estado cuando aquél demanda de este último la expedición de la resolución de adjudicación por el modo de la ocupación, no se entiende el por qué esa misma consideración, es decir, la de ser dueño que ostenta igualmente el poseedor económico de un predio rústico en los términos del artículo 762 del C.C., no le es a éste en cambio suficiente para obtener la declaración de pertenencia en todos aquellos casos en que prueba, además, que esa posesión se ha prolongado y con los demás requisitos que exige la ley.*

3. Los cargos, por lo que viene de verse, no prosperan

### CARGO PRIMERO

En él se acusa la sentencia de infringir los artículos 75—12, 77—7, 85—2, 97—2, 398, 401, 407—5 del C. de P.C., 2—7, 28, 54, 57 del Decreto 2303 de 1989, por falta de aplicación; 332 del C. de P.C., 27 del Decreto 2303 de 1989, 2o., 6o., 29 y 30 de la ley 135 de 1961.

Puntualiza para demostrarlo el recurrente, que el proceso de pertenencia tiene que adelantarse contra contradictores legítimos, y por eso el numeral 5o. del art. 407 del C. de P.C. (antes el 413) exige que "A la demanda deberá acompañarse un certificado del registrador de instrumentos públicos en donde consten las personas que figuren como titulares de derechos reales sujetos a registro, o que no aparece ninguna como tal"; certificado que, dice, permite "saber quiénes son los titulares del dominio sobre el bien, o de los derechos en que se haya desmembrado, y por tanto establecer si hay identidad entre dichos sujetos y los escogidos por el demandante como sujetos pasivos de la acción. Y porque solo en el caso de que, según ese certificado, no aparezca titular alguno de derecho real principal sobre el bien que es materia de la pertenencia, la demanda no tiene que dirigirse contra demandado concreto y conocido alguno".



Una vez precisa cuáles son los requisitos de toda demanda, entre los que menciona y transcribe el numeral 12 del artículo 76 del C. de P.C., el impugnante señala que cuando la demanda adolece de algún requisito que la torna inepta, ésta debe inadmitirse, porque si ello no ocurre y el proceso llega a sentencia, el Juez debe inhibirse de fallar de fondo por falta de demanda en forma. Ese defecto, precisa luego, es el que presenta este proceso, porque pedida la declaración de pertenencia respecto del predio rural denominado SATURNO, segregado del predio El Palmar, a la demanda se anexó el folio de matrícula de éste, pero no de aquél, lo que es constitutivo de inepta demanda, no obstante lo cual y muy a pesar de haber advertido ese defecto el ad— quem pronunció, tal como lo hizo el a—quo, sentencia de mérito.

#### SE CONSIDERA

*1. En ejercicio de las facultades que le otorgó el artículo transitorio 5o. de la Constitución Política, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2651 de 1991, por el cual se dictan normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales, entre ellas la del artículo 51 de dicho estatuto, ordenatoria de que "Sin perjuicio de lo dispuesto en los respectivos códigos de procedimiento acerca de los requisitos formales que deben reunir las demandas de casación, cuando mediante ellas se invoque la infracción de normas de derecho sustancial, se observarán las siguientes reglas:*

*"... 4a. No son admisibles cargos que por su contenido sean entre sí incompatibles. Si se presentan y adolecen de tal defecto, la Corte tomará en consideración los que, atendidos los fines propios del recurso de casación por violación de la ley, a su juicio guarden adecuada relación con la sentencia impugnada, con los fundamentos que le sirven de base, con la índole de la controversia específica mediante dicha providencia resuelta, con la posición procesal por el recurrente adoptada en instancia y, en general, con cualquier otra circunstancia comprobada que para el propósito indicado resultare relevante".*

*2. Como es fácil advertirlo del ataque contenido en los dos cargos precedentes y de su parangón con el actual, del defecto técnico acabado de mencionar se resiente precisamente este último, pues al paso que con*

éste se busca el quiebre de la sentencia para ser sustituida por una inhibitoria habida consideración de que no se da el presupuesto procesal demanda en forma, en aquellas otras censuras el recurrente pretende, cuai se dejó anunciado, que una vez casado aquel pronunciamiento se profiera sentencia de reemplazo que acoja las súplicas de la actora.

La impugnación aquí concebida por la casacionista, no sólo es pues abiertamente antagónica con la que desplegó en los dos cargos anteriores, sino que además y atendidos los fines propios del recurso de casación no guarda, como aquellos, adecuada relación con la sentencia atacada, ni con los fundamentos esenciales de la misma, y muchos menos con la posición procesal asumida por la recurrente en las instancias, con arreglo a las cuales abogó siempre por una decisión estimatoria.

Ante tan marcada incompatibilidad entre el contenido de aquellas acusaciones y la aquí propuesta, cuanto por la necesidad y conveniencia de que los litigantes asuman siempre una posición congruente con ellos mismos, con la contraparte y con la propia jurisdicción, la Sala se ve compeliada a echar mano de la disposición anteriormente transcrita, de cara a la cual estima pertinente no tomar en cuenta este cargo como si lo hizo con los anteriores, por razones de suyo explicables.

El cargo, por lo consiguiente, no está llamado a abrirse paso.

### DECISIÓN

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 1o. de diciembre de 1992, proferida en este proceso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. Las costas del recurso extraordinario son de cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

*Pedro Lafont Planetta, Nicolás Bechara Simancas, Eduardo García Sarmiento, Carlos Esteban Jaramilio Schloss, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra.*

**CONDICION RESOLUTORIA/PROMESA DE  
COMPRVENTA/MORA/CONTRATO  
BILATERAL/ACCION RESOLUTORIA/  
RESTITUCIONES MUTUAS**

1. Condición Resolutoria en el contrato de promesa de compraventa.
2. El contratante demandado no está en mora cuando el actor no ha cumplido con sus obligaciones. Cuando ambos contratantes desatenden las cargas recíprocas que les impone el acuerdo, se hace improcedente la resolución.
3. En qué eventos la mora del deudor, presupuesto de la resolución de los contratos bilaterales, toma cuerpo.
4. Efectos que genera la resolución del contrato de promesa de compraventa.  
E.F.: C.C. Art.: 1546; 1609, 1608; C. de P.C. Art.: 90  
Inciso; 2. *Ibidem*

**EXCEPCION/NOVACION**

En el presente caso, no se abre paso a la excepción de "novación de la obligación", por cuanto la intención de las partes al introducir el otro sí del contrato no fue la de sustituir unas obligaciones por otras, sino tan solo la de modificar los plazos para el cumplimiento de las así adquiridas.  
E.F.: C.C. Art.: 1687.

Sentencia Sustitutiva:

**DEMANDA DE RECONVENCION/  
LITISCONSORCIO NECESARIO**

Improcedencia de la demanda de reconvencción, estando de por medio un litisconsorcio necesario.

*Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil—* Santafé de Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de octubre mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Magistrado ponente: *Doctor Nicolás Bechara Salumancas*

*Referencia: Expediente No. 3759.*

*Sentencia N°134*

Al haber prosperado el recurso de casación interpuesto por el demandante principal contra la sentencia de 25 de abril de 1991, pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, en el proceso ordinario adelantado por Luis Emiro Linares Bejarano frente a José Manuel Monroy y Sonia Rodríguez Sánchez, procede la Corte, como Tribunal de instancia, a decidir el recurso de apelación que hizo valer la parte demandada contra el fallo de primer grado expedido el 9 de agosto de 1990 por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Santafé de Bogotá.

#### ANTECEDENTES

I. Por demanda presentada el 13 de abril de 1989, ante el Juzgado Trece Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, el mencionado demandante solicitó que con audiencia de los referidos demandados se declarase resuelto el contrato de promesa de compraventa celebrado por las mismas partes el 26 de marzo de 1988, en relación con el apartamento 301 de la calle 31 N°14-42 de Santafé de Bogotá; se dispusiese la restitución del bien raíz y el pago del valor de la cláusula penal pactada, a cargo de los demandados y a favor del demandante, al igual que el valor de los frutos civiles y naturales que ha debido producir el inmueble, hasta la fecha de su restitución.

II. Como fundamento de las anteriores pretensiones, citáronse los hechos siguientes:

"a) Con fecha 26 de marzo de 1988 prometió en venta a los demanda-

dos el inmueble referido, pactándose como precio la suma de \$8'500.000, pagaderos en la siguiente forma: \$500.000 el 28 de marzo de 1988; \$1'500.000 el 29 de abril del mismo año; \$3'000.000 el 30 de mayo, también del mismo año, y \$3'500.000 el 26 de septiembre de 1989. Se entregaron cheques para su cobro en esas fechas.

"b) Se convino el pago de \$85.000 mensuales por concepto de intereses sobre el saldo de \$3'500.000, a partir de junio de 1988, dentro de los cinco primeros días de cada período, una vez canceladas las cuotas anteriores.

"c) Los demandados incumplieron desde el primer momento, pues los tres primeros cheques no fueron pagados, por insuficiencia de fondos.

"d) El 8 de junio de 1988 se convino el pago del 50% del valor de la cláusula penal y el pago de los cheques devueltos así: \$1'500.000 el 15 de junio de 1988 y \$3'000.000 el 30 del mismo mes y año, quedando vigente \$1'000.000 por concepto de la cláusula penal, no obstante lo cual los demandados volvieron a incumplir por cuanto el 1º de julio de 1988 hicieron solamente un abono de \$1'000.000 y el 8 de agosto del mismo año pagaron \$2'000.000.

"e) El 8 de agosto de 1988 se adicionó el contrato en el sentido de que los prometeres compradores pagaban \$600.000 como pena, quedando reducida la cláusula penal a \$400.000 para el caso de incumplimientos posteriores.

"f) El 8 de julio de 1988 los prometeres compradores giraron un cheque por \$205.000 para cubrir los intereses por las cuotas de \$3'000.000 y \$2'000.000 que debían haberse cancelado en el mes de mayo, y también para cubrir los intereses del mes de junio de 1988 en relación con el saldo final de \$3'500.000.

"g) El demandante siempre estuvo listo a entregar el apartamento, desde mucho antes de mayo de 1988, entrega que se hizo solamente el 9 de agosto de ese año, en razón de que los demandados hasta entonces completaron la suma de \$5'000.000.

"h) Los demandados continuaron incumpliendo el contrato por cuanto

no pagaron los \$85.000 mensuales previstos como intereses a partir del mes de julio de 1988.

III. Enterados los demandados de las pretensiones del demandante contestaron oponiéndose a las mismas, contra las que propusieron las excepciones que denominaron: novación, incumplimiento del demandante, cumplimiento de los demandados, modificación del contrato, falta de causa, dolo y fraude contractual. Por separado demandaron en reconvencción, alegando incumplimiento del contrato por el prometiendovendedor y pidiendo la resolución de dicha convención, con las consiguientes restituciones mutuas y el pago de la cláusula penal. En subsidio, solicitaron se ordenase la suscripción de la escritura pública de compraventa. Previa inadmisión por el Juzgado de la demanda de mutua petición, se excluyó de la misma a Sonia Rodríguez Sánchez, como demandante en reconvencción.

IV. Adelantado el litigio, la primera instancia terminó con sentencia de 9 de agosto de 1990, mediante la cual se acogieron las pretensiones de la demanda principal, se denegaron las excepciones formuladas contra la misma e igualmente las pretensiones de la demanda de mutua petición.

V. Inconforme la parte demandada con la decisión del a-quo, en la debida oportunidad interpuso recurso de apelación, el que procede la Corte a resolver como Tribunal de instancia, ante el hecho de haberse casado la sentencia de segundo grado y haberse incorporado al litigio los elementos de convicción ordenados de oficio.

### CONSIDERACIONES

1. Por cuanto el derrumbamiento de la sentencia del Tribunal, en virtud de la prosperidad del recurso de casación, comprende únicamente las decisiones del ad-quem alusivas a la demanda principal, corresponde a la Corte, en este fallo sustitutivo, ocuparse de esos pronunciamientos, dejando a salvo las resoluciones que no fueron combatidas y que no son consecuencia directa de la pertinente enmienda.

2. Siendo, como se sabe, *el contrato de promesa de compraventa de naturaleza bilateral, en él tiene cabida la condición resolutoria, a*

términos de la cual el incumplimiento de las obligaciones de cargo de una de las partes, coloca a la otra, si cumplidora de las que le incumben, en posición de poder solicitar la resolución de esa convención, con fundamento en el artículo 1546 del C.C., norma de cuyo tenor literal se desprende que "En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado... Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios".

3. De manera que si con arreglo al artículo transcrito, el contratante cumplido tiene derecho a la resolución con indemnización de perjuicios, y si en armonía con el artículo 1615 del C. C. se debe la indemnización de perjuicios desde cuando el deudor se ha constituido en mora, es sin duda porque la resolución de los contratos bilaterales sólo puede decretarse cuando el contratante incumplido está en mora de satisfacer la prestación a su cargo. Además, es pertinente dejarlo en claro, para el buen suceso de la acción resolutoria proveniente del artículo 1546, no basta simplemente el incumplimiento de las obligaciones del contratante demandado, sino que, según se indicó, es preciso que el actor haya cumplido las suyas, pues al tenor del artículo 1609 del C.C. en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla o no se allane a cumplirlo por su parte en la forma y oportunidad acordadas.

4. Concordando, pues, los artículos 1546 y 1609 del C. C., habría que concluir que el contratante demandado no está en mora cuando el actor no ha cumplido con sus obligaciones, y que cuando ambos contratantes desatienden las cargas recíprocas que les impone el acuerdo, lógicamente se hace improcedente la resolución, quedándole a las partes otros correctivos jurídicos para la aniquilación del convenio.

5. La mora del deudor, presupuesto de la resolución de los contratos bilaterales, toma cuerpo en los siguientes eventos previstos por el artículo 1608 del C. C.:

"1º. Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora.



*"2°. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin dárla o ejecutarla:*

*"3°. En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor" (confrontar artículo 90, inciso 2°, C. de P.C.).*

6. Descendiendo al caso litigado y como lo puso de presente la Corte al despachar en forma favorable la demanda en casación, los prometedores compradores aquí demandados, José Manuel Monroy Rojas y Sonia Rodríguez Sánchez, incurrieron su obligación de pagar, mes a mes, la suma de \$85 000 por concepto del saldo del precio adeudado (\$3'500.000), obligación que, cual se sabe, asumieron en el contrato de promesa de compraventa que suscribieron con el actor Luis Emiro Linares Bajarano, para que tuviera cumplimiento a partir de la fecha de entrega del correspondiente inmueble, hecho éste que, también se dejó expuesto en su oportunidad, ocurrió el 9 de agosto de 1988 (fl. 52 este cuaderno).

Adicionalmente, el elenco probatorio del proceso pone de presente que los demandados incurrieron en mora de cumplir el preanotado compromiso, pues, justo es además reconocerlo, la conducta contractual del actor no introdujo, con arreglo al artículo 1609 del C. C., ningún factor enervante del fenómeno citado. Por ende, la pretensión resolutoria deprecada está llamada a prosperar, con desestimación, por certeza, de las excepciones de "incumplimiento del demandante a recibir el pago", (se refiere al de los intereses por el saldo del precio equivalente a \$3'500.000, se agrega), "falta de causa en el demandante para exigir la resolución del contrato", "modificación de los términos del contrato" y "dolo y fraude contractual". Además, por cuanto la intención de las partes al introducir los otros sí del contrato no fue la de sustituir unas obligaciones por otras, sino tan solo la de modificar los plazos para el cumplimiento de las así adquiridas, tampoco se abre paso la excepción de "novación de la obligación", propuesta, así mismo por los demandados.

7. En vista de que, como aquí ha sucedido, los efectos propios de la resolución del contrato de promesa de compraventa eladido no solo generan para los contratantes la exoneración de la obligación de concurrir a la celebración del contrato prometido, sino que las prestaciones que son anticipo del contrato prometido quedan sin causa, es razonable que las cosas vuelvan a su

estado anterior, lo cual significa que cada uno de los contratantes deberá restituir lo que hubiese dado o recibido en razón de las obligaciones pactadas.

Así, los demandados deben restituir al actor el inmueble prometido en venta, junto con los frutos civiles y naturales producidos o que dicho bien pudo producir, al paso que este último debe devolver a aquellos la parte del precio y los intereses pagados.

En cuanto al precio y a los intereses que el demandante debe restituir, es preciso señalar que, no obstante ser éste el contratante cumpliente, las sumas de dinero que recibió por esos conceptos debe devolverlas con corrección monetaria, habida cuenta que en esos precisos términos se le ordenó hacer esa restitución en la sentencia de primera instancia, sin que el actor se hubiese dolido de esa condena y menos hubiera recurrido de ella, conculcas de las que por fuerza se impone deducir su aceptación a la misma, con más veras si en el alegato que presentó en el trámite de la segunda instancia (fls. 9 y 10 C. 4) se limitó a solicitar al Tribunal la conformación de esa sentencia. De manera que esa específica carga habrá de mantenerse en esta decisión.

En orden, pues, a la revalorización de las sumas de dinero a restituir por parte del actor, preciso es señalar que los abonos al precio e intereses pagados por los promitientes compradores al promitente vendedor, se hicieron de la siguiente manera: \$500.000 el día 8 de junio de 1988 (confrontar contestación de los hechos 4, 5 y 6 de la demanda, fl. 34 C. 1); \$1.500.000 el 15 de junio de 1988 (contestación al hecho 7 de la demanda, fl. 34 C. 1); \$1.000.000 el 1º de julio de 1988 (contestación hecho 7 de la demanda), y \$2.000.000 el 8 de agosto de 1988 (contestación hecho 7 de la demanda). El promitente vendedor recibió además de los promitientes compradores, la cantidad de \$205.000 el 8 de julio de 1988 (contestación hecho noveno de la demanda, fl. 35 C. 1), por concepto de intereses.

9. Para la actualización de esos valores y la determinación de los frutos producidos por el inmueble a restituir, la Corte decretó, oficiosamente, prueba pericial. En relación con lo primero, los expertos, apoyándose en los índices de variación de precios al consumidor certificados por el DANE y que obran en el proceso, procedieron de la siguiente manera (fls. 11 y siguientes del cuaderno 2 de la actuación de la Corte): tomaron cada una de las sumas a restituir reservándolas a la fecha que corresponde el índice 0.0000 certificado por el DANE (noviembre de 1969 — certificado Nº 00003, folio 86 C. 2 de la

Corte), para obtener la base o la suma equivalente de cada una de las cantidades a restituir, a la fecha reservada de noviembre de 1969, cuando el índice del DANE era cero (0.000). En apropiada síntesis, para obtener con exactitud el punto de partida del ajuste monetario (la base), los peritos hicieron la reversión comentada para cada una de las cantidades a restituir, utilizando el índice vigente del mes inmediatamente anterior al de la fecha en que ellas se pagaron al prometiende vendedor, obteniendo con cada uno de esos valores la base correspondiente al mes de noviembre de 1969, base a la que le sumaron la variación ocurrida entre la fecha del pago y la del último índice certificado (base + variación), obteniendo esta última de multiplicar la base por el índice final certificado, dividiendo por ciento (100), pues ésta corresponde a la devaluación porcentual ocurrida entre las dos fechas. De esa manera, y en relación con los primeros \$500.000 a restituir por parte del prometiende vendedor, quien los recibió, como se dijo, el 8 de junio de 1988, los peritos cumplieron los siguientes pasos.

a) Base =  $\frac{\$500.000}{1 + \text{índice a mayo de 1988}/100}$  (columna extremo derecho del folio 90 C. 2).

$$\text{base} = \frac{\$500.000}{1 + 3.290,97/100} = \frac{500.000}{33,9097}$$

$$\text{base} = \$14.745,04$$

Los \$500.000 de junio de 1988 equivalen entonces, cumplida la reversión, a \$14.745,04 en noviembre de 1969, cuando el índice certificado por el DANE es cero (0.000).

$$\begin{aligned} \text{b) variación} &= \frac{\text{base} \times \text{índice final (il. 91 C. 2 Corte)}}{100} \\ &= \frac{14.745,04 \times 2.083,08}{100} \end{aligned}$$

$$\text{variación} = \$1.781.654,90$$

$$\text{Actualización} = \text{base} + \text{variación} = 14.745,04 + 1.781.654,90$$

$$\text{Actualización} = 1.796.399,94$$

Repitiendo dicho procedimiento, los peritos actualizaron las sumas restantes recibidas por el prometiende vendedor, a saber: \$1'500.000 (15 de junio de 1988), \$1'000.000 (1º de julio de 1988), \$2'000.000 (8 de agosto de 1988), y \$205.000 (8 de julio de 1988), operaciones al cabo de las cuales conceptuaron que dichas cantidades, debidamente revalorizadas, equivalen, en su orden, a \$5'389.201,23; \$3'534.801,22; \$6'943.864,57; y \$724.633,76; cifras que sumadas a la anterior (\$1'796.399,94) ascienden a un gran total de \$18'388.900,72 (fl. 13 C. 2 actuación Corte). Este último guarismo es el que deberá restituir el demandante a los demandados por concepto del precio e intereses de éste (ya revalorizados), por él recibidos, pues para la Corte el dictamen pericial es atendible en este punto no sólo porque no mereció reparo alguno por parte de los litigantes, cuanto porque ello se impone al tenor del artículo 241 del C. de P. C.

10. De otra parte, ninguna restitución se ordenará hacer al prometiende vendedor en razón de los \$1'600.000 que, conforme a los "otro si" del contrato de promesa de compraventa, le cancelaron los prometiendes compradores a título de cláusula penal pactada en él (hechos 6 de la demanda de reconversión y de su contestación; folios 8 y 20 cuaderno 2; e interrogatorio de parte absuelto por el actor, folio 70 C. 1), por cuanto ese pago representa el monto, anticipadamente convenido, de los perjuicios sufridos por aquél con los incumplimientos iniciales de los demandados y así resarcidos por el libre acuerdo de las partes.

11. Relativo al monto de los frutos que los demandados deben restituir al actor, es pertinente manifestar que, para no quebrantar el principio prohibitivo de la reformatio in pejus (artículo 357 C. de P. C.), se respetará el valor de los \$2'040.000 en que éstos fueron fijados en la sentencia de primera instancia y respecto del período transcurrido hasta cuando ella fue pronunciada (9 de agosto de 1990), pero se incrementará en el guarismo obtenido por el mismo concepto en el dictamen pericial decretado de oficio por la Corte, en cuanto atañe al período subsiguiente que no tuvo en cuenta aquél proveimiento. Es de ver, por tanto, que en el aludido dictamen, los peritos, apoyándose igualmente en los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, cuantificaron esos frutos de la siguiente manera (fl. 17 C. 2 Corte).

"8 agosto 1990 a 7 agosto 1991	\$1'578.003,80
"8 agosto 1991 a 7 agosto 1992	\$1'830.864,00
"8 agosto 1992 a 7 agosto 1993	\$2'164.880,00
"8 agosto 1993 a 7 agosto 1994	\$1'222.156,30".

Traídas a valor presente por los peritos esas sumas de dinero mediante el procedimiento y técnica de la reversión ya vistos (fl. 19 C. 2 de la Corte), ellas alcanzan, en su orden, estas cifras: \$2'590.334,74; \$2'360.659,30; \$2'306.162,90; y \$1'222.156,30, para un monto de \$8'473.313,24, que esta Sala encuentra pertinente apreciar habida cuenta de la admisible fundamentación de la pericia, y cuyo importe una vez sumado al que por el mismo concepto estableció el a-que en su sentencia (frutos civiles y naturales), arroja un gran total de \$10'513.313,24, que es en definitiva la cantidad que los demandados deberán restituir por dicho rubro.

12. No es pertinente resolver de mérito sobre la demanda de reconvencción, pues estando de por medio un litisconsorcio necesario entre las partes del proceso, determinado éste por la mediación del contrato preparatorio, la solicitud de resolución en aquella deprecada fue elevada únicamente por el demandado José Manuel Monroy Rojas, es decir, que dejó de comprender a la también demandada y prometedora compradora Sonia Rodríguez Sánchez, circunstancias que hacen imposible en esta instancia una decisión de fondo relativa a las pretensiones deducidas en el referido libelo, y que imponen, obviamente, un pronunciamiento inhibitorio, como el que en efecto se proferirá.

13. Ningún otro pronunciamiento cabe hacer en torno al litigio.

### DECISIÓN

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

### RESUELVE:

1º. CONFIRMAR los numerales segundo, tercero y quinto de la sen-

tencia de primera instancia, pronunciada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, el 9 de agosto de 1990.

2°. CONFIRMAR igualmente los literales a) y b) del numeral cuarto de la misma sentencia.

3°. REVOCAR el numeral primero de la citada sentencia del a-quo para, en su lugar, inhibirse de hacer pronunciamiento en relación con la demanda de reconvención presentada por el demandado José Manuel Monroy Rojas.

4°. REVOCAR el literal c) del numeral cuarto de la aludida sentencia del a-quo, para CONDENAR, en su reemplazo, al demandante Luis Emiro Linares Bejarano a restituir a los demandados José Manuel Monroy Rojas y Sonia Rodríguez Sánchez la cantidad de \$18'388.900,72, por concepto de precio e intereses, ya revalorizado, que de ellos recibió.

5°. CONDENAR a los demandados a pagar las costas de la segunda instancia.

6°. Autorizar a las partes para hacer las compensaciones a que haya lugar.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

*Pedro Lafont Pianetta, Nicolás Bechara Simancas, Eduardo García Sarmiento, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra*

## EXCEPCION PREVIA

Concepto y finalidad de las excepciones previas. Intención del legislador al consagrar el artículo 99, numeral 4o. del C. de P. C.

*Corte Suprema de Justicia -- Sala de Casación Civil --* Santafé de Bogotá, D. C., tres (3) de noviembre mil novecientos noventa y cuatro (1994).

*Referencia: Expediente No. 5078*

*Auto N° 336*

En escrito obrante a folios 1 a 4 de este cuaderno, se ha formulado por parte de los demandados GUILLERMO ARANGO OCAMPO Y CARLOS TULIO TRUJILLO BRAVO la excepción previa de "INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE LOS REQUISITOS FORMALES", apoyada en que el demandante debió acompañar con su demanda "la propia sentencia que dice ofrece ERRORES INEXCUSABLES y los procesos que en su corporeidad documental dieron origen a que los Magistrados se equivocar en forma ostensible e inexcusable".

### *PARA RESOLVER SE CONSIDERA:*

*Las excepciones previas son aquellos medios de defensa señalados expresamente en la ley, mediante los cuales puede el demandado cuestionar la conformación de la relación jurídica procesal, para que no se continúe con el proceso, o para que no se dicte sentencia de fondo mientras el defecto observado no sea depurado en la forma que corresponda, dicho en otros términos, las causales de excepciones previas consagradas taxativamente en la ley procesal civil como mecanismo de purificación del proceso, persiguen que el mismo se sanee desde el comienzo, para que pueda adelantarse regularmente y concluya con sentencia de mérito.*



*El artículo 99 del Código de Procedimiento Civil que regula el trámite y decisión de las excepciones previas, y para lo que acá interesa, en su numeral 4 reza:*

*"Cuando se trate de las excepciones contempladas en los numerales 4, 5, 6 y 7 del artículo 97, en el auto que dé traslado de ellas el Juez ordenará al demandante, dentro del término de dicho traslado, subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos".*

*Los términos en que está concebido el precepto transcrito, deja traslucir que la intención del legislador no fue otra que imponer al juez frente a la formulación de una de tales excepciones, un nuevo examen de la demanda y los anexos, para que en el evento de que efectivamente no reúna las formalidades legales o no se hubiesen acompañado los anexos exigidos por la ley, le ordene al demandante que subsane aquella o presente éstos, so pena que, de no acatar dicha orden, se declare probada la excepción, según lo prescrito en la parte final, del numeral 5 de la disposición en comento.*

*En este orden de ideas, y como en el caso que se analiza, los documentos que echó de menos la parte demandada, no encuadran dentro de ninguno de los motivos que configuran ineptitud de la demanda, obviamente en tales condiciones no se impone impartir la mentada orden, puesto que la misma a la postre resultaría ilegal.*

Así las cosas, siendo notoriamente improcedente el fundamento de la excepción invocada, debe rechazarse de plano (art. 38 ibídem, numeral 2).

**NOTIFIQUESE.**

Nicolás Bechara Simancas

**NULIDAD PROCESAL/INTERRUPCION PROCESAL/  
APODERADO-Enfermedad Grave/CARGA DE LA PRUEBA**

1. Supuestos necesarios para que se anule la actuación procesal cumplida a partir de la enfermedad del apoderado.  
Igual sentido: auto del 26 de abril de 1991.

2. Qué se entiende por "enfermedad grave"?  
Igual sentido: Autos del 26 de abril de 1991 y del 25 de noviembre de 1992.

3. La carga de la prueba en los eventos de enfermedad grave es sobremanera exigente, por cuanto no basta acreditar el quebranto de salud, sino primordialmente que es grave.  
F.F.: C. de P. C. Art.: 168 Numral. 2; 140 Numral.: 5.

*Corte Suprema de Justicia.— Sala de Casación Civil—* Sanatú de Bogotá, D. C., diez (10) de noviembre mil novecientos noventa y cuatro (1994).

*Referencia: Expediente No. 5106*

*Auto N° 343*

Decídese el incidente de nulidad propuesto por la parte demandante en este proceso ordinario iniciado por INES ESCALLON DE MARTINEZ Y RODRIGO HERNANDEZ HERNANDEZ contra PEDRO JUAN GUTIERREZ LOAIZA.

**ANTECEDENTES**

I. En escrito de 26 de septiembre de 1994, el doctor ERNESTO BARRERA MOLINA en su condición de apoderado de la parte demandante, solicita la nulidad "de todo lo actuado en el proceso de la referencia durante los días 12, 13, 14, 15, 16 y 19 de septiembre del año en curso".

II. Como razones de pedir plantea el doctor BARRERA MOLINA,

que debido a que durante ese lapso sufrió "una enfermedad grave consistente en una BRONQUITIS AGUDA Y CRÓNICA" que lo incapacitó completamente para salir de su residencia a atender asuntos profesionales y lo redujo dentro de su residencia "a actividades mínimas", no alcanzó a terminar y presentar "la demanda de casación en el término señalado, dándose así el evento de interrupción del proceso previsto por el numeral 2o. del artículo 168 del C. de P. C.", de conformidad con el numeral 5o. del artículo 140 *ibídem*.

III. Al admitir el recurso de casación, la Corte corrió traslado por 30 días a la parte recurrente para la presentación de la correspondiente demanda de casación, que comenzaron a correr a las 8 a.m. del 5 de agosto de 1994, y vencieron a las 6 p.m. del 16 de septiembre siguiente.

IV. Agotada la actuación correspondiente, procede la Corte a decidir el incidente, previas las siguientes

#### CONSIDERACIONES:

1. Dentro de las causales de interrupción del proceso consagradas por el artículo 168 del C. de P. C., invocó el peticionario la del numeral 2, que se refiere a la "muerte o enfermedad grave del apoderado judicial de alguna de las partes, o por exclusión del ejercicio de la profesión de abogado o suspensión en el", la que contempla hechos que cuando se presentan producen la nulidad de la actuación cumplida o adelantada a partir de entonces, de conformidad con el numeral 5 del artículo 140 del C. de P. C.

2. Afirmó el incidentalista que sufrió enfermedad grave entre el 12 y 19 de septiembre pasado, que lo incapacitó completamente para salir de su residencia, atender sus asuntos profesionales y lo redujo a actividades mínimas.

3. A términos del numeral 2o. del artículo 168 del C. de P. C., sólo la enfermedad grave del apoderado de las partes tiene connotación o trascendencia para lograr la interrupción del proceso. Sobre el citado particular ha dicho la Corte que "...Dos son entonces los supuestos para que se anule la actuación procesal cumplida a partir de la enfermedad del apoderado, a saber:

*"Que dicha enfermedad revista el carácter de grave y que la petición se formule dentro del término legal de cinco días, contados a partir de la recuperación de la capacidad para actuar.*

*"...En relación con el primer supuesto, la gravedad de la enfermedad, tiene dicho la jurisprudencia de la Corte, que ésta sólo se configura cuando el apoderado se ve en la imposibilidad de actuar con los caracteres de fuerza mayor o caso fortuito...*

*"...Empero esto no quiere dar a entender que cualquier clase de enfermedad pueda dar oportunidad a la interrupción. No. Siempre será grave, como lo dice el artículo 168, o sea aquella que impide realizar aquellos actos de conducta atinentes a la realización de la gestión profesional encomendada, bien por sí sola o con el aporte o colaboración de otro. Será grave, entonces la enfermedad que imposibilita a la parte o al apoderado en su caso, no solo la movilización de un lugar a otro, sino que le resta oportunidad para superar lo que a él personalmente le corresponde..." (auto de 26 de abril de 1991).*

4. En este orden de ideas, la carga de la prueba en los eventos de enfermedad grave es sobremanera exigente, por cuanto no basta acreditar el quebranto de salud, sino primordialmente que es grave, puesto que en el ámbito jurídico la gravedad de la enfermedad—dado la excepcional de sus consecuencias procesales—, se mira desde el punto de vista que la misma coloque al apoderado judicial en la imposibilidad real y evidente de poder cumplir con sus deberes profesionales, vale decir, que la gravedad del estado de salud es un concepto que debe ser apreciado en relación con la labor que el abogado debe desplegar.

5. Así las cosas, se decretó y recepcionó el testimonio del médico ALBERTO BAHAMON SOTO, quien por haber atendido al incidentalista y certificado sobre el estado de salud del paciente, podía dar razón acerca de la enfermedad padecida por ERNESTO BARRERA MOLINA, relatando que como médico de la familia de éste, fue llamado el 12 de septiembre último para que lo atendiera, y a quien encontró "en cama con alta temperatura, dificultad para respirar, tos y una inflamación de todo el tracto respiratorio", constatando que tenía una bronquitis aguda, faringitis, amigdalitis, para lo cual le recetó antibióticos y le recomendó reposo domiciliario, diciéndole "que iba a estar incapacitado para traba-

jar, para cualquier actividad durante una semana... habiéndole dado una incapacidad que iba del día lunes 12 de septiembre al lunes 19 de septiembre, inclusive", pues la enfermedad respiratoria era grave y le impedía realizar actividades distintas de las fisiológicas y la de tomar alimentos, sin que pudiera en esa semana "hacer ningún esfuerzo, ni físico, ni mental...".

6. Por tanto, si sólo se configura la enfermedad grave —según lo tiene dicho la Corte—, cuando el apoderado se ve imposibilitado para actuar en el proceso, imposibilidad que debe revestir los caracteres de fuerza mayor o caso fortuito, lo cual se traduce en que no toda enfermedad puede dar oportunidad a la interrupción, sino solamente la que tiene la connotación de grave, como lo exige el art. 168 del C. de P.C., "entendiéndose por ella la que por irresistible, haga extremadamente difícil o imposible el ejercicio del mandato, hasta el punto de que ni siquiera puedan utilizarse los mecanismos que la ley consagra para que el poder no tenga solución de continuidad en su ejercicio, cual sucede por ejemplo, con el fenómeno de la sustitución..." (auto de 25 de noviembre de 1992), colígese que el apoderado judicial de la parte demandante, si bien padeció quebrantos súbitos de salud durante el periodo comprendido entre el 12 y el 19 de septiembre postrero, lapso dentro del cual se agotó el traslado al recurrente para presentar la demanda de casación, la enfermedad no tuvo el alcance de impedirle el ejercicio del mandato, pues del concepto médico no aparece la existencia de la imposibilidad absoluta en la forma atrás señalada, que le hubiese restado hasta la opción de sustituir el poder.

7. Por tanto, si la enfermedad padecida por el mandatario judicial se coloca al margen de lo que en el campo jurídico se tiene entendido por **enfermedad grave**, que estructura la impetrada causal de interrupción del proceso cuando inequívocamente coloca a quien la sufre en la imposibilidad real de cumplir con sus deberes profesionales, deviene como corolario el fracaso de la nulidad deprecada, sin que haya lugar a imposición de costas en el incidente por no aparecer causadas. (art. 392-8 C. de P. C.).

### DECISIÓN:

Por lo expuesto en las consideraciones precedentes, la Corte Suprema de Justicia.

**RESUELVE:**

1o. DENEGAR la petición de nulidad procesal solicitada por la parte recurrente dentro del presente proceso.

2o. SIN COSTAS.

3o. Una vez ejecutorida esta providencia, por secretaría dése cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal 2o. del auto de 20 de septiembre pasado.

**NOTIFIQUESE**

*Pedro Lafont Planetto, Nicolás Bechara Simancas, Jorge Antonio Castillo Rugeles, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra.*

**SENTENCIA DESESTIMATORIA/REVISIÓN/COSTAS/HONORARIOS PROFESIONALES/PERJUICIOS-  
REGULACIÓN**

1) Consecuencias procesales que comporta la sentencia desestimatoria del recurso de revisión.

2) Distinción entre la condena al pago de costas y la condena al pago de indemnización de perjuicios.

3) Improcedencia de la reclamación de honorarios profesionales al amparo de la condena al pago de perjuicios. Legalmente su valor forma parte integrante de las costas y, por tal razón, cualquier objeción a su cuantía debe formularse en la oportunidad señalada por la misma ley procesal para tal efecto.

Igual sentido: Auto de 4 de agosto de 1981 y 13 de mayo de 1988.

E.F.: C. de P. C. Art. 393 Numral. 2 y 3.

*Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil—Santafé de Bogotá, D. C., once (11) de noviembre mil novecientos noventa y cuatro (1994).*

Magistrado ponente: *Doctor Rafael Romero Sierra*

*Referencia: Expediente No. 3865*

*Auto N° 347*

Decídese el incidente de regulación de perjuicios propuestos por el mandatario sustituto de los codemandados en revisión, Antonio Kelly Wilson y Hermelinda Cuéllar de Kelly, en el recurso de revisión interpuesto por Jesús Emilio Moreno Trujillo contra la sentencia de 7 de junio de 1991, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en el proceso de pertenencia promovido por los precitados demandados contra personas indeterminadas.



### I. ANTECEDENTES

1. Jesús Emilio Moreno Trujillo interpuso recurso de revisión contra la sentencia de 7 de junio de 1991, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena para resolver la consulta ordenada contra la sentencia de 13 de noviembre de 1990, proferida por el Juzgado Civil de Circuito de San Andrés (Isla) en el proceso de pertenencia adelantado por Antonio Kelly Wilson y Hermelinda Cuéllar de Kelly contra personas indeterminadas, cuya demanda fue definitivamente admitida mediante auto de 30 de julio de 1992.

2. Agotado el procedimiento dispuesto para la tramitación del aludido recurso extraordinario, esta Corporación le puso fin con sentencia de 10 de julio del año en curso, en virtud de la cual, además de declararse infundado el recurso de revisión, se condenó a la parte recurrente a pagarle a la parte demandada "...los perjuicios y las costas causadas con la formulación de esta impugnación extraordinaria...", por lo que se dispuso que los primeros se liquidaran por el procedimiento señalado en el inciso último del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil.

3. La parte beneficiada con la condena al mencionado pago de perjuicios, presentó por conducto de su mandatario sustituto el respectivo incidente, cuya liquidación se motivó en los siguientes términos:

"En virtud del recurso de revisión interpuesto por Jesús Emilio Moreno Trujillo contra la sentencia de siete (7) de junio de 1991, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en el proceso ordinario de Antonio Kelly Wilson y Hermelinda Cuéllar de Kelly contra personas indeterminadas, los demandados en esta eventualidad se vieron precisados a contratar los servicios profesionales de un abogado para que se desplazara hasta la ciudad de Santafé de Bogotá D.C., sede donde se encuentra la Corte Suprema de Justicia, lugar en donde se surtió el recurso "in" comento. Para el efecto contrataron al Dr. Fidel Antonio Corpus Suárez, abogado con domicilio y residencia en San Andrés (Isla) (...), quien también asistió a los ahora demandados, en la primera y segunda instancia dentro del proceso ordinario de Antonio Kelly Wilson y Hermelinda Cuéllar de Kelly contra personas indeterminadas.

"(...) de igual manera el Dr. Fidel Antonio Corpus Suárez contrató los servicios profesionales del suscrito, para que vigilara y representara la parte demandada en el recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia -Sala Civil- como se estipula en el contrato de prestación de servicios profesionales que se anexa.

"Se acordaron los HONORARIOS PROFESIONALES entre los DEMANDADOS en el recurso de revisión y el Dr. Fidel Antonio Corpus Suárez, por la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20'000.000.00) a todo costo, ello significa que el profesional del derecho corría con todos los gastos que representaban los desplazamientos a la ciudad de Santafé de Bogotá D. C., incluyendo pasajes de ida y regreso de San Andrés (Isla) a Santafé de Bogotá, D. C. y viceversa para contestar la demanda, aportar pruebas, estar pendiente de las pruebas que se practicarán, gastos de hotel, alimentación, gastos de oficina, telefax, télex, comunicación telefónica, servicios de mensajería, manutención, movilización en la ciudad capital, por el tiempo que fuere necesario, contratación de un profesional del derecho en Santafé de Bogotá, D. C., para lo indicado en el mismo contrato y por suma indicada.

"El Dr. Fidel Antonio Corpus Suárez, acordó con el suscrito honorarios basados en la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4'000.000.00) según documento escrito, los cuales recibí a satisfacción, quedando un saldo el cual doy por recibido; extendiéndose mi actuación por acuerdo mutuo verbal, hasta la decisión del incidente que ahora promuevo, de igual manera el cobro por la vía ejecutiva de las costas causadas con la formulación de esta impugnación extraordinaria, solicitud de copias informales y autenticadas por la II. Corte Suprema de Justicia; como también gestionar ante la sociedad garante lo relativo a la caución, para los efectos de ley.

"Los gastos anteriores fueron generados a raíz de la formulación de la impugnación del recurso extraordinario de revisión por el señor Jesús Emilio Moreno Trujillo, en razón de ello, debió contratarse a un profesional del derecho en San Andrés (Isla) y uno de Santafé de Bogotá D.C., con los consiguientes gastos que ello generó, sin cortar con los demás perjuicios causados a los señores Antonio Kelly Wilson y Hermelinda Cuéllar de Kelly y a su familia, desde el 7 de junio de 1991, fecha de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena hasta el 10. de julio de

1994, sentencia de la II. Corte Suprema de Justicia —Sala Civil— dentro del recurso interpuesto; tiempo que también deberá tenerse en cuenta para considerar viable, prudente y razonable los honorarios profesionales pactados, que a lo sumo perjudicaron el patrimonio de los señores demandados en razón del recurso ante la Corte”.

4. Vencido el término de traslado del precitado incidente y, como quiera que para decidirlo basta la prueba documental aportada, procédese a ello sin necesidad de la práctica de las pedidas en el respectivo escrito.

## II. CONSIDERACIONES

1. *Sabido es que entre las consecuencias procesales que comporta la sentencia desestimatoria del recurso de revisión se encuentran las de orden económico, traducidas, de un lado, en la obligación que de ella surge para el recurrente de indemnizar los perjuicios causados, y de otro, en el deber de pagar las costas procesales, tal cual lo dispone el inciso final del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, al estatuir que si se declara infundado el recurso, “... se condenará en costas y perjuicios al recurrente, y para su pago se hará efectiva la caución prestada...”, criterio de acuerdo con el cual nuestro derecho positivo distingue perfectamente entre la condena al pago de las costas y la condena al pago de la indemnización de perjuicios, distinción que no quiere decir que el pago de las costas no puede ir acompañado de la obligación de indemnizar daños y perjuicios, sino que en tal evento la indemnización podrá ser exigida, pero con independencia del procedimiento que para la exacción de las costas señala la misma codificación procesal civil. (Subrayas de la Sala).*

2. Y, respecto de las costas, cuyo concepto equivale, en general, a los “...gastos que es preciso hacer para obtener la declaración o ejecución judicial de un derecho, lo cual explica que de él se excluyen los que no son consecuencia directa del proceso propiamente dicho, así como los inhábiles para el mismo...” (Curso de Derecho Procesal Civil Hernando Morales Molina — pág. 530), o sea “...aquellos gastos que, debiendo ser pagados por la parte de un determinado proceso, reconocen a este proceso como causa inmediata y directa de su producción...” (Derecho Procesal Civil — Parte general - Jaime Guasp — pág. 566), conviene recordar que de ellas forma parte el gasto particular que se ocasiona frente a los defensores de la parte misma, es decir, las agen-

cias en derecho, según lo pregona la doctrina y lo consagra positivamente la ley.

En efecto: el numeral 2o. del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, determina que la liquidación de costas "...incluirá el valor de los impuestos de timbre, los honorarios de los auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan probados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las **agencias en derecho que fije el magistrado ponente o el juez, aunque se litigue sin apoderado**". (Subrayas de la Sala).

3. *Las precisiones legales que anteceden sirven de marco para ilustrar la improcedencia de la reclamación de honorarios profesionales al amparo de la condena al pago de perjuicios, por cuanto sin desconocer que ellos queden comprendidos "...en el daño como especie en el género, y más concretamente en el daño emergente o disminución del patrimonio..." (Hernando Morales M., obra citada, pág. 532), lo cierto es que legalmente su valor forma parte integrante de las costas y, por tal razón, cualquier objeción a su cuantía debe formularse en la oportunidad señalada por la misma ley procesal civil para tal efecto.*

4. Por lo tanto, en el presente caso no se requiere de mayores consideraciones para desembocar en la improsperidad del incidente postulado por el mandatarario judicial de los demandados en el recurso de revisión para obtener el pago de los honorarios pactados con sus poderdantes para la defensa de sus intereses en aquella actuación, por cuanto ninguna objeción se formuló por la parte beneficiada con dicha condena a la liquidación practicada por la Secretaría de esta Corporación el 22 de julio del año en curso (folio 189), aprobada, consecuentemente, por auto de 1o. de agosto de este mismo año (folio 189 v/to.).

5. Esta corporación, al abordar en pretérita oportunidad un caso similar al que ahora ocupa su atención, expresó que "...el inciso segundo del numeral 3o. del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, obliga a entender que "...la fijación de agencias en derecho sólo puede ser objetada dentro del respectivo traslado de la liquidación de costas, de donde se sigue que su cuantía no puede después ser materia de discusión en el incidente de regulación de perjuicios...", agregando luego que "...si el fallador

*señala el monto de las agencias en derecho y éste no se objeta en la oportunidad indicada antes, tal regulación se hace definitiva y, por tanto, obligatoria para las partes..." (autos de 4 de agosto de 1981 y 13 de mayo de 1988).*

6. Sin embargo, lo dicho no se opone a que la Corte, en vista de la exorbitante cuantía de los honorarios pactados en un contrato suscrito con posterioridad al proferimiento del fallo que clausuró el trámite del recurso de revisión, por el mandatario judicial de los demandados para defender los intereses de éstos en el trámite de la aludida impugnación extraordinaria, en el que solamente aparece como digno de consideración el escrito contenitivo de la réplica a la demanda de revisión (folios 79 a 85), pues los demás, muy escasos por cierto, solamente contienen la interposición de un recurso de súplica (folios 93 a 95) contra el auto admisorio que finalmente resultó impróspero, por su improcedencia, y la solicitud de copias de algunas piezas procesales, como de la sentencia con la cual concluyó el aludido recurso y de los folios en que aparecen las costas, las agencias en derecho y "...los aprobatorios de los mismos" (folios 191 y 192), se pudo haber incurrido por éste, así como por su sustituto, en la falta contra la honradez del abogado que contempla el numeral 1o. del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, se dispondrá que, con destino a la autoridad competente, se compulsen copias de las piezas pertinentes para la correspondiente averiguación disciplinaria en contra de los abogados Fidel Antonio Corpus Suárez y Alfredo Angel Sotomayor Tamara que como principal y sustituto, respectivamente, representaron en el trámite de este recurso a los demandados Antonio Kelly Wilson y Hermelinda Cuéllar de Kelly.

### III. DECISIÓN

En mérito de lo brevemente expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, rechaza la ficción de perjuicios presentada por la parte demandada para cuantificar la condena impuesta al recurrente en revisión, mediante sentencia de 1o. de julio del presente año, proferida en el recurso de revisión interpuesto por Jesús Emilio Moreno Trujillo contra la sentencia de 7 de junio de 1991, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en el proceso ordinario promovido por Antonio Kelly Wilson y Hermelinda Cuéllar de Kelly contra personas indeterminadas.

Condénase a Antonio Kelly Wilson y Hermelinda Cuéllar de Kelly al pago de las costas causadas en el trámite del presente incidente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1o. del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.

Por la Secretaría de la Sala Civil de esta Corporación, librese, con destino a la Sala Disciplinaria, seccionales del Consejo Superior de la Judicatura de Cartagena y Bogotá, respectivamente, y para los fines antes indicados, copia de toda la actuación surtida en el cuaderno contentivo del trámite del recurso de revisión referenciado.

Notifíquese.

*Pedro Lafont Pianetta, Nicolás Bechara Simancas, Jorge Antonio Castillo Rugeles, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor Marín Naranjo en (permiso), Rafael Romero Sierra*

## DEMANDA - Rechazo / REPOSICION / APELACION

Salvo disposición expresa que de modo categórico diga lo contrario, el auto que rechace una demanda, directamente o por virtud del recurso de reposición interpuesto contra el que en un comienzo la admitió, es apelable. Los puntos nuevos a que alude el art. 348 del C. de P.C., incluyen por mandato legal, la revocación de la admisión inicial de la demanda para la parte desfavorecida, es decir, para la parte actora en el proceso. Fundamento doctrinal.

Similar sentido: providencia del 9 de junio de 1980, G. J. CLXVI, pág. 38.

F.F.: C. de P. C. Art.: 348, 351, 352, 505 ibídem;

DECRETO Num.: 2282 Año: 1989.

*Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil.* Santafé de Bogotá, D. C., Dieciséis (16) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Magistrado Ponente: *Carlos Esteban Jaramillo Schloss.*

Referencia: Expediente No. 4033

Auto N° 348

Se decide el recurso de súplica interpuesto contra el auto del 14 de octubre de 1994, por el cual se repuso en el sentido de revocarlo, el auto del 7 de abril también de 1994 y, en su lugar, se rechazó una vez más la demanda de revisión presentada por AUGUSTO CAMPO CAMPO contra la sentencia del 28 de julio de 1987, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta en el proceso ordinario de declaración de pertenencia promovido por C.I. PRODECO PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. contra personas indeterminadas.



### ANTECEDENTES

1. El 27 de julio de 1992 AUGUSTO CAMPO CAMPO interpuso recurso de revisión contra la sentencia del 28 de julio de 1987 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta mediante la cual se puso fin al proceso ordinario de C.I. PRODECO PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. contra personas indeterminadas.

2. Advirtiendo esta Corporación que se había citado, entre otras, a una persona fallecida para la época de presentación de la demanda, mediante providencia del 24 de noviembre de 1993 se decretó la nulidad de lo actuado, incluido el auto admisorio de la demanda; en la misma oportunidad se declaró inadmisile la demanda por no estar correctamente integrado el contradictorio, concediendo al demandante en revisión un plazo de cinco días para subsanar el defecto advertido.

3. El 12 de enero de 1994 se ordenó por segunda vez corregir la demanda, indicando la dirección de los demandados señalados como nuevos integrantes de la litis en su aspecto subjetivo, advirtiéndose de manera expresa que el defecto destacado en el auto primero que llevó a inadmitir la demanda, fue subsanado del modo debido.

No obstante lo anterior, mediante solicitud del apoderado de C.I. PRODECO, PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A., por auto del 27 de enero de 1994 se rechazó la demanda de revisión presentada, por no haberse aportado la prueba de la validez de hereditero en vista de la cual fue llamada al proceso como demandada la señora EVA VIVES DE CAMPO ni las copias de la demanda de revisión para evacuar los traslados de rigor, ni haberse presentado dicha demanda en el término legal. También por solicitud de aquella entidad, dicho proveído se complementó para incluir la cancelación de la inscripción de la demanda, así como para imponerle al recurrente el deber de pagar las costas del proceso y los perjuicios que por su interposición se causaron y, al apoderado, de la multa correspondiente que ordena la ley.

El apoderado del demandante en revisión AUGUSTO CAMPO CAMPO interpuso recurso de súplica contra estas determinaciones argumentando, en esencia, que las razones para inadmitir el recurso de revisión habían sido subsanadas y la oportunidad para el rechazo de la demanda

había precluido, y agregó por último que, contra lo sostenido por la sociedad opositora, el término para interponer el recurso no había caducado por no serle aplicable al caso el Decreto 2282 de 1989 en este punto, sino la anterior disposición procesal la cual permitía que la acción de revisión, cuando se alegaba la causal prevista en el numeral séptimo del artículo 380, fuera entablada dentro de los dos años siguientes a aquel día en que la parte perjudicada con la sentencia, o su representante, tuvieran conocimiento de esta última, con un límite no superior a dos años.

4. En este estado las cosas, mediante auto del 16 de marzo de 1994, esta Sala, resolviendo sobre el recurso de súplica interpuesto, decidió revocar en todas sus partes los autos de fecha 27 de enero y 16 de febrero del año en curso. Y tuvo en consideración para hacerlo que, dados los antecedentes recapitulados sumariamente en los párrafos precedentes, la oportunidad para el rechazo de la demanda, aduciendo la presunta caducidad para hacer valer la pretensión impugnatoria en cuestión, se encuentra precluida y que las razones esgrimidas para sustentar los autos en ese entonces recurridos en súplica, no tienen base legal suficiente; disponiendo en consecuencia la revocatoria integral de los mismos para que el magistrado ponente procediera del modo que indican los incisos 2o. y 6o. del artículo 383 del Código de Procedimiento Civil.

5. Así, pues, en orden a lo dispuesto por la Sala, el magistrado ponente, mediante auto del 7 de abril de 1994, admitió a trámite la demanda de revisión tantas veces referida, ordenando los traslados y emplazamientos del caso y la inscripción de la demanda solicitada como medida cautelar.

A dichos traslados respondieron el curador ad litem de los interesados indeterminados, la curadora ad litem de los herederos indeterminados de José de Jesús Díazgranados Oligos y Ana Díazgranados de Bermúdez y el apoderado C.I. PRODECO PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A., quien, de manera simultánea con su escrito de réplica a aquella demanda, interpuso recurso de reposición contra el auto del 7 de abril de 1994 que según queda visto le dio curso, invocando las siguientes razones:

—Ineptitud formal de la demanda admitida, que hace consistir nuevamente en que no se señaló en la demanda el domicilio de la demandada EVA VIVES DE CAMPO y en que no se aportaron las copias necesarias para los traslados.

—Preclusividad de la revisión propuesta, teniendo en cuenta que la sentencia declarativa de prescripción adquisitiva se inscribió en el registro de instrumentos públicos del Círculo de Santa Marta el 24 de septiembre de 1987, luego el término para interponer el recurso de revisión venció el 23 de septiembre de 1989 y la demanda de marras se presentó el 31 de julio de 1992. Afirma, también, que el recurso de reposición procede de conformidad con lo establecido en el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil, siguiendo la más reciente jurisprudencia de la Corte al respecto, y apunta que no comparte los argumentos con apoyo en las cuales la Sala decidió el recurso de súplica interpuesto por el actor contra la providencia del 27 de enero de 1994, edicionada por la de fecha 16 de febrero siguiente.

Por su parte el mandatario judicial del demandante, en uso del respectivo traslado, contestó a la reposición manifestando que sí se entregó las copias cuando se las solicitó el magistrado, que la dirección de EVA VIVES DE CAMPO fue la indicada y por esto pudo hacerse la notificación, y en fin, que la sociedad opositora pretende revivir cuestiones frente a las que no está autorizado para proveer de nuevo el magistrado ponente, vista la decisión de esta Sala contenida en el auto de 16 de marzo de 1994.

6. Por auto del 14 de octubre de 1994, hoy recurrido en súplica y por ello objeto de estudio en este proveído, se decidió el recurso de reposición interpuesto por C.I. PRODECO PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A., en el sentido de reponer para revocar el auto del 7 de abril de 1994 y, en su lugar, rechazar la demanda de revisión presentada por AUGUSTO CAMPO CAMPO, por considerar caducado el derecho del accionante al no haber sido la demanda de revisión presentada dentro del término legal.

Repitiendo consideraciones sobre la materia efectuadas en el auto de 27 de enero de 1994, exprese esta nueva providencia de rechazo in limine que la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta, confirmada luego por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa misma ciudad, fue inscrita el 24 de septiembre de 1987 y la presente demanda fue presentada el 31 de julio de 1992, cuando ya había vencido el plazo de dos años contados a partir de la fecha de registro del que habla el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil, el cual fue modificado por el Decreto 2282 de 1989, modificación que comenzó a

regir el 10. de junio de 1990, entendiendo el magistrado encargado de conducir el negocio que la respectiva decisión, consistente en rechazar la demanda en vista de esa circunstancia temporal advertida, no se opone al auto del 16 de marzo de 1994 de la Sala "toda vez que en ésta la Corte al desatar el recurso de súplica en modo alguno se refirió a que no existiera término de caducidad, sino a que por haberse inadmitido inicialmente la demanda de revisión y subsanado los defectos anotados, no había lugar al rechazo por un motivo diferente, de ahí que haya consignado que el aspecto de la caducidad podía considerarse en otras oportunidades, tales como el fallo, oportunidad que precisamente ha surgido con la interposición del recurso."

7. Ante esta determinación, con fecha 24 de octubre de 1994 el apoderado de la parte recurrente en revisión interpuso súplica contra el auto que la contiene, por considerar que este auto, en el punto 50. de su parte expositiva, "le dio una interpretación que desarticula el procedimiento que la Corte había fijado". Añade que el término para interponer el recurso de revisión es el consagrado por el Código de Procedimiento Civil de 1970, en donde se tenía en cuenta un término de dos años contados a partir del día en que tuvo noticia del fallo objeto de impugnación término que fue modificado luego en 1989, para establecerse que los dos años empiezan a contarse desde la fecha de registro de la providencia.

Termina diciendo que el registro de la sentencia no se ha hecho en debida forma, "porque Cerro Blanco fue adjudicado a Máximo Díazgranados y a los Díazgranados Oligos en 1904, sentencia que sí fue debidamente registrada en la Oficina de Registro de Santa Marta" sin que el certificado hubiese sido llevado al proceso de pertenencia por C.I. PRODECO PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. para no tener que demandar a los CAMPO CAMPO ni a los descendientes de los Díazgranados. El certificado anexado a dicho proceso —afirma— es hechizo y hace referencia a un litigio frente al cual fue ajeno el demandante en revisión.

A su turno, mediante escrito presentado el 27 de octubre del presente año, el apoderado de la sociedad C. I. PRODECO S.A. se opuso al recurso de súplica, afirmando que el auto del 14 de octubre corresponde a la decisión al recurso de reposición y por consiguiente, según lo dispone el inciso 30. del artículo 348 del Código de Procedimiento Civil, no es susceptible

de recurso alguno, salvo que el auto que comienga la reposición contenga puntos no decididos en el anterior, entendiéndose por... "nuevos" aquellos que ostentan este carácter en la parte resolutive y no en las consideraciones que se hagan para confirmar o alterar sus conclusiones, según lo ha dicho la Corte en auto del 9 de junio de 1980. Esto mismo es aplicable al recurso de súplica, por ser un recurso de trámite y finalidad jurídica semejante a la reposición, es decir, que a juicio de la opositora el auto que decide un recurso de reposición no admite ser recurrido en súplica pues ello equivaldría a una especie de "reposición de reposición" que la ley descalifica.

Advierte también el escrito en referencia que el proceso de revisión es un proceso nuevo, diferente del proceso en que se dictó la sentencia cuya revisión se busca (auto del 11 de mayo de 1973, G.J. CXLVI, 66) y por tanto, la normatividad aplicable al recurso de revisión es la vigente al momento de interponerse la demanda. Así, en este caso, la norma aplicable al recurso de revisión sería el Código de Procedimiento Civil en su texto referido en 1989; estima, en este orden de ideas, que el plazo para proponer la demanda de revisión de la sentencia de pertenencia no es "el plazo que había comenzado a correr desde cuando esa providencia se emitió, o sea en 1987, y que por ello debe gobernarse por la legislación de 1970 sino por la de 1989, por cuanto el artículo 699 del Código de Procedimiento Civil, precitado, habla de "los términos que hubieren empezado a correr", aludiendo obviamente a que los plazos en procesos pendientes se rigen por las leyes vigentes cuando empieza a correr el término.

Por último, evocando la "economía procesal" expresa que encontrándose probada la extinción de la acción debido al fenómeno de la caducidad, resulta errado admitir una demanda revisoria y tramitar el proceso correspondiente, desgastando a la Corte en un proceso "cuya vacuidad tendrá que reconocer a la postre".

### CONSIDERACIONES

1. Dispone el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil que el auto que rechaza una demanda su reforma o adición, es apelable, salvo disposición en contrario, y la verdad es que sobran razones al legislador para considerar que una providencia de tanta trascendencia, sustancial y procesal, como el que contiene el rechazo de la demanda pueda ser conocido por un juez superior, para así, si es de caso, depurar la decisión proferida de

eventuales desviaciones en que haya podido incurrir a través del recurso de apelación, conocido éste como el más amplio y frecuente, aquel al cual, más que a ningún otro, está confiada la función propia de la impugnación según lo expresan autorizados doctrinantes.

Sin embargo, teniendo en cuenta el tenor literal del artículo 348, inciso 3 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, "el auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el que podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos", estimó esta corporación, en providencia del 9 de junio de 1980, que el proveído por el cual se decide una reposición de un auto admisorio de una demanda para revocarlo y en consecuencia rechazarla, no es apelable y por lo mismo contra esta decisión sustitutiva tampoco es de recibo el recurso de súplica, si es el caso. Argumentó entonces la Sala, por decisión de la mayoría de sus integrantes, que "cuando el resultado de la primera reposición es la revocatoria total del auto impugnado, no hay novedad jurídica hablando: es claro que gramaticalmente el contexto de la providencia es distinto al de la primera y que su decisión es la contraria: el auto que admite una demanda y el que revoca ese, son, en su contenido, antitéticos opuestos. Pero no puede en rigor jurídico decirse que el último contiene puntos no decididos en el anterior, pues en verdad que lo estudiado y decidido en ambas providencias es el mismo punto: si la demanda es o no admisible" (G.J. Tomo CLXVI, pág. 38). A su turno, en el correspondiente salvamento de voto los magistrados disidentes dejaron señalados motivos de importancia que los llevaron a no acoger el referido criterio, afirmando con razón que si un auto admisorio de una demanda, introductorio de un proceso cualquiera, llega a ser revocado para rechazarla por efecto de un recurso de reposición contra dicha providencia interpuesto, resulta "exorbitante" sostener que el demandante, a pesar de su condición sobrevenida de litigante agraviado por una decisión semejante, ya no puede impugnar el auto que se abstiene de darle curso a su libelo y le impide el acceso al proceso, ello porque la ameritada decisión se produjo al desatar un recurso de reposición.

Pero en todo caso, las dudas que pudieran quedar sobre esta debatida cuestión fueron eliminadas en la reforma contenida en el Decreto 2282 de 1989, cuando incluyó en el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil: relativo a la procedibilidad en general del recurso de apelación, un inciso que a la letra dice "cuando se accede a la reposición interpuesta por



una de las partes, la otra podrá apelar del nuevo auto si fuere susceptible de este recurso", norma que como se sabe, aparece reiterada, para el caso de los procesos de ejecución singular en el artículo 505 ib. en donde se expresó que "El mandamiento ejecutivo es apelable en el efecto devolutivo; el auto que lo niegue, en el suspensivo, previa notificación al ejecutado; y el que por vía de reposición lo revoque, en el diferido".

No debe perderse de vista, entonces, que el Código de Procedimiento Civil es un cuerpo normativo armónico y que, por ende, su coherencia interna no la quebranta el inciso 3o. del artículo 348. *Salvo disposición expresa que de modo categórico diga lo contrario, el auto que rechace una demanda, directamente o por virtud del recurso de reposición interpuesto contra el que en un comienzo la admitió, es apelable por mandato del artículo 351, numeral 1o., del Código de Procedimiento Civil, leído en concordancia en el inciso 3o. del artículo 352 ib. luego al tenor de este conjunto de disposiciones bien puede decirse que los puntos nuevos a que alude el artículo 348 del C. P. C. incluyen, por mandato legal, la revocación de la admisión inicial de la demanda para la parte desfavorecida con dicha determinación, es decir, para la parte actora en el proceso, tesis que por cierto cuenta con amplio respaldo en la doctrina científica como se desprende de los pasajes que a continuación se transcriben: "Si tan solo se pide reposición y esta se resuelve desfavorablemente, salvo que haya puntos nuevos, ya no cabe apelación, pues el artículo 348 es particularmente claro al advertir que contra el auto que decide la reposición no cabe ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior. Supongamos el caso del auto que decide una nulidad; contra él caben los recursos de reposición y de apelación? Si se interpone solo el recurso de reposición y el juez la niega, es decir, mantiene la providencia recurrida, contra esa determinación ya no cabe la apelación por la elemental razón que al ser mantenida las decisiones guardan unidad jurídica y faltaría el requisito de la oportunidad para recurrir. Pero si se interpone reposición y, en subsidio, apelación, si ésta se presentó oportunamente, aunque solo en forma condicional, y no prospera la reposición, se puede tramitar la apelación. Ahora bien, puede ocurrir que con ocasión de la prosperidad de la reposición el juez revoca su determinación; contra la misma no cabe reposición pues se violaría el principio de que no es procedente reposición de la reposición, pero si existe otro recurso, como el de apelación, perfectamente puede la parte ahora desfavorecida con la determinación interponerlo, porque cuando el inciso final del art. 348 dice que el auto que decide la*



reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, comprende dentro de tal expresión la posibilidad, lo cual, y para eliminar la más mínima duda al respecto, reafirma el artículo 352, en su inciso tercero, al destacar que cuando se acceda a la reposición interpuesta por una de las partes, la otra podrá apelar del nuevo auto si fuere susceptible de este recurso". (López B. Hernán Fabio, *Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano*, Pag. 600), criterios que comparte otro autorizado expositor al decir que "...No hay reposición de reposición, pues se alargaría demasiado el procedimiento, y al juez se le brinda solo una oportunidad para enmendar su error. Si se revoca la providencia, no hay novedad en el tema, jurídicamente hablando, aunque gramaticalmente su contexto sea distinto y su decisión contraria o diversa. El art. 348, inciso 3º., debe entenderse así cuando antitécnicamente dice que El auto que decide la reposición no es susceptible de recurso alguno, puesto que contra él procede en ocasiones el de apelación interpuesto por la otra parte. Lo que se quiso decir, es que no procede el recurso de la misma parte. A ésta le resta la apelación contra el auto cuya reposición no obtuvo éxito, siempre y cuando la haya interpuesto en tiempo (art. 352) y aquel fuere apelable. Sin embargo, la misma parte que ha interpuesto la reposición que no prospera, puede proponer otra vez dicho recurso, cuando el nuevo auto contenga puntos no decididos en el anterior, caso en que contra éstos pueden interponerse los recursos pertinentes, inclusive la apelación si fuere apelable el nuevo proveimiento. Puntos no decididos o nuevos, son los que por primera vez aparecen en el auto que resuelve la reposición, sea como decisiones o como órdenes, mas no en los considerandos, ya que las providencias judiciales obligan en la orden que imparten, o en la parte resolutoria; obviamente, la decisión u orden que reemplaza la revocada no es punto nuevo. Solo tiene este carácter un proveimiento extraño al que ha sido objeto el recurso, aun cuando se dicte como corolario de aquel. O como dice la Corte: se autoriza emplear nuevamente este remedio (recurso), pero solo respecto de aquello que no se hallaba contenido, ni aun implícitamente en él" (Morales M. Hernando, *Curso de Derecho Procesal Civil*, pag. 604).

Por lo expuesto y dada la condición de apelable que por su naturaleza tiene tal decisión, en el presente caso es viable el recurso de súplica interpuesto por la parte actora contra el auto de fecha 7 de abril de 1994 por el cual, en determinación unitaria del magistrado ponente, se rechazó de nuevo la demanda de revisión presentada.

2. Definida como queda la procedibilidad del recurso de súplica interpuesto, preciso es hacer ver que esta Sala afirmó en su auto del 16 de marzo de 1994 que "el plazo de caducidad establecido en el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil se refiere solo a la oportunidad que tiene el recurrente para proponer el recurso de revisión, mediante la demanda respectiva, la que una vez presentada ha de ser examinada por el Tribunal o por la Corte, según el caso, y si se reúnen los requisitos formales, debe el juzgador, para darle trámite al recurso, fijar la caución exigida por el artículo 383 ibidem. De ello se sigue que el momento determinante para establecer si la caducidad ha operado, es solo el de la presentación de la demanda con que se sustenta el recurso, y, por lo mismo, es ilegal tener en cuenta otros...", ello sobre la base de que, dejando a salvo obviamente la hipótesis excepcional prevista en el inciso 3o. del artículo 383 del Código de Procedimiento Civil, "... no es posible, de acuerdo con el sistema legal en cuestión, rechazar una demanda de revisión a la cual, de antemano, se le han hecho las correcciones exigidas al suspenderse la admisión de la misma, ello entre otras razones porque de los tres requisitos de procedibilidad (...) recién mencionados —atinentes a la oportunidad del recurso, a la sentencia revisable y a la legitimación para hacer uso de este tipo de impugnación extraordinaria— puede volverse a ocupar el juzgador en la etapa de decisión del recurso...", motivo por cuya virtud la Sala, en aquella providencia calendada el 16 de marzo del presente año, dijo claramente y ahora no queda otra alternativa distinta a reiterarlo de manera enfática, que en vista de la situación procesal que este expediente pone de manifiesto en la actualidad y atendidas así mismo la peculiares vicisitudes que llevaron a su configuración, la oportunidad para el rechazo de la demanda "sin más trámite" se encuentra precluida y que en orden a esta consideración cardinal, inexplicablemente ignorada en la providencia unitaria cuya revocatoria persigue este recurso de súplica que viene ocupando la atención de la Corte, carecen de base legal suficiente los autos, también unitarios, que se negaron a darle curso a dicha demanda por estimar que operó la caducidad consagrada en el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil.

Dicho en otras palabras y por cuanto esa providencia unitaria recién mencionada, a pesar de la determinación tomada por la Sala en el sentido que acaba de indicarse, insiste en rechazar de plano la demanda porque, en opinión del magistrado que suscribe y compartiendo el punto de vista acerca del tema expuesto por la sociedad opositora C.I. PRODECO S.A., la

pretensión impugnatoria en dicha demanda contenida, no fue entablada dentro del plazo que para el efecto indica la ley, lo que al fin de cuentas acontece en este caso es que por obra de un método indirecto que en apariencia tiene cobertura adecuada en el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil y cuyo origen estriba sin duda en un recurso de reposición que en atención a su contenido sustentatorio era de muy dudosa admisibilidad procesal frente a los categóricos mandatos del artículo 364 del mismo código. principalmente en su enunciado final, ha sido desconocido este último precepto con serio menoscabo para la "economía procesal" por la que, con encomiable insistencia, se ha venido abogando en esta accidentada actuación.

En efecto, el auto que expide el magistrado ponente limitándose a seguir las indicaciones de la Sala al decidir un recurso de súplica, asimilable en buena medida si se quiere al de obediencia de la decisión del superior y de disposición de lo pertinente para su rápido cumplimiento al que se refiere el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil cuando de la apelación se trata, no puede ser objeto de nuevos recursos que de hecho, por fuerza de las circunstancias procesales existentes en la especie concreta materia de análisis, tiendan a conseguir la revocatoria de aquél auto y, de consiguiente, la virtual ineficacia de los pronunciamientos realizados por la Sala. Es que si al tenor del artículo 364 del Código de Procedimiento Civil, esta clase de recursos no son de recibo cuando en forma directa se los quiere hacer valer contra lo decidido por la Sala, su procedencia es también a todas luces descartable cuando con el empleo de tales medios se aspira a que, como resultado de una decisión por contrario imperio del magistrado ponente adoptada acogiendo una solicitud inadmisibile de reposición, eso que tuvo a bien resolver la Sala en ejercicio de una clara competencia de control jurídico colegiado que le asigna el ordenamiento positivo, quede reducido a la nada.

En síntesis, además de ser viable, la súplica interpuesta prospera y, por tanto, hay lugar a disponer la revocatoria integral del auto del 14 de octubre de 1994 para, nuevamente, indicar que el magistrado ponente debió proceder, como en efecto lo hizo en auto del 7 de abril de 1994, del modo que indican los incisos 2o. y 6o. del artículo 383 del Código de Procedimiento Civil. Y asimismo, por fuerza de las razones explicadas líneas atrás, debe ser desechado el recurso de reposición contra esta última

providencia deducido por la Sociedad opositora C.I. PRODUCTOS DE COLOMBIA, PRODECO S.A.

### DECISIÓN

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, reiterando su providencia de fecha dieciséis (16) de marzo del año en curso, REVOCA en todas sus partes el auto del catorce (14) de octubre pasado, proferido en el transcurso de esta actuación por el magistrado ponente y, en su lugar, resuelve mantener el auto admisorio de la demanda que el mismo funcionario profirió con fecha siete (7) de abril del año en curso.

Una vez adquiriera firmeza esta providencia, pase de nuevo el expediente al despacho de dicho magistrado para lo de su competencia de acuerdo con la ley.

Notifíquese

*Pedro Lafont Planetta, Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor María Naranjo, Rafael Romero Sierra.*

**LITISCONSORCIO NECESARIO/SENTENCIA  
INHIBITORIA/NULIDAD PROCESAL-Principio  
PRINCIPIO DE LA PROTECCION/NULIDAD PROCESAL-  
Legitimación/CITACION/EMPLAZAMIENTO**

1) Cuando se presenta el litisconsorcio necesario?

2) Sólo estando presente en el respectivo juicio la totalidad de los sujetos activos y pasivos de la relación sustancial, queda debida e íntegramente constituida desde el punto de vista subjetivo la relación jurídico procesal, y por lo mismo sólo cuando las cosas son así podrá el juez hacer el pronunciamiento de fondo demandado. En caso contrario debe limitarse a proferir fallo inhibitorio.

Igual sentido: G.J. CXXXIV, pág. 170.

3) Fundamento de esta clase de litisconsorcio

4) Si contrariando la inescindibilidad de la causa, el juzgador profiere fallo de mérito, cualquiera de los litisconsortes necesarios podrá impugnarlo en casación.

Si lo hace por la causal quinta, la decisión debe haberle sido favorable

5) Según el principio de la protección, en casación la nulidad por quién puede invocarse? y el evento de la falta de integración del litisconsorcio necesario en quién recae?

6) Por quién pueden ser invocadas en casación, las causales de nulidad consistentes en la ilegitimidad de personería de una de las partes y en la falta de citación o emplazamiento de las personas que han debido ser llamadas al juicio?

Igual sentido: sentencia de 17 de marzo de 1967, no publicada

F.F.: C de P.C. Art: 368 Num: 5, 140 Num: 9

*Corte Suprema de Justicia.— Sala de Casación Civil—* Santafé de Bogotá, D. C., diecisiete (17) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Magistrado Ponente: *Doctor Nicolás Buchara Simancas*

*Ref: Expediente No. 4389*

*Sentencia Nº 136*

Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 30 de octubre de 1992, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo en este proceso ordinario promovido por Ana Celia Cárdenas Soler frente a Ana Isabel Álvarez Torres.

#### ANTECEDENTES

I. Mediante demanda repartida al Juzgado Primero Civil del Circuito de Duitama, Boyacá, la mencionada demandante solicita que con audiencia de la referida demanda se declare que ésta debe restituírle el inmueble ubicado en el área urbana de la citada ciudad, cuya nomenclatura, medidas y linderos se describen en la demanda, junto con los frutos que la actora ha dejado de percibir durante el tiempo en que la demandada ha poseído de manera ilegítima el bien.

II. Como fundamentos de esas pretensiones se indica que la demandante tiene la plena propiedad sobre el inmueble de que se trata, el cual se encuentra en poder de la demandada, quien lo posee sin justo título ni buena fe.

III. Enterada de la demanda, Ana Isabel Álvarez Torres la contestó oportunamente para oponerse a las pretensiones de la actora, de quien dijo no es la verdadera propietaria del inmueble que solicita en reivindicación, fuera de que el título por ella esgrimido alude solamente a un lote de terreno más no a la edificación levantada sobre él, y que en el evento de ser estimadas las pretensiones debe tenerse en cuenta que la demandada es poseedora de buena fe, con derecho al reconocimiento de las mejoras que ha hecho en el inmueble. Aduce de otra parte, al responder los hechos del libelo, que ella es la real propietaria y poseedora material del bien, en el cual levantó la edificación allí existente que su posesión es anterior al título

lo de la actora, quien además nunca ha poseído, y está obrando ilícitamente en este litigio por ser sólo una testaferra de la demandada.

IV. La demandada Ana Isabel Alvarez Torres presentó demanda de reconvencción contra la demandante principal Ana Celia Cárdenas Soler, en la cual solicitó que con la audiencia de esta última se hagan las declaraciones siguientes:

*"PRINCIPALES:*

"Que es simulado el contrato contenido en la escritura pública Nº 87 de fecha 1 de marzo de 1974, de la Notaría Segunda del Circuito de Duitama, por medio de la cual FLORENCIO OLIVEROS, dice vender a ANA CELIA CARDENAS SOLER, el inmueble relacionado en la misma escritura, descrito en los hechos de esta demanda, ya que no hubo por parte de FLORENCIO OLIVEROS, intención de venderle el inmueble a ANA CELIA CARDENAS SOLER, sino a ANA ISABEL ALVAREZ T. Que (sic) igualmente no hubo intención de ANA CELIA CARDENAS SOLER, de comprar el inmueble sino que simplemente actuó como testaferra de ANA ISABEL ALVAREZ T., para el acto de la escritura, ya que la verdadera compradora fue esta última que incluso ya ostentaba la posesión sobre el fundo.

"Que se comunique la declaración anterior al Notario Segundo del Circuito de Duitama para que se tome nota al margen de la matriz de la escritura Nº 87 del 1 de Marzo de 1974.

"Que se comunique al señor Registrador de Instrumentos Públicos y privados de Duitama, para que se cancele la inscripción de **propietaria** que aparece en el folio inmobiliario Nº 0740021551 del inmueble situado en la calle 10 Nº 16-36 de la actual nomenclatura y que se encuentra a nombre de ANA CELIA CARDENAS SOLER, y para que en lo sucesivo figure a nombre de ANA ISABEL ALVAREZ TORRES.

"Que se condene en costas a la demandada en reconvencción.

*"SUBSIDIARIAS:*

"En el evento de las pretensiones principales no sean atendidas, solicito, que se aprecien en su orden las siguientes:



*"PRIMERA SUBSIDIARIA:*

"1. que es nula (sic) el contrato de venta contenido en la escritura pública Nº 87 de fecha 1 de Marzo de 1974, de la Notaría Segunda del Circuito de Duitama, por medio de la cual FLORENCIO OLIVEROS, dice vender a ANA CELIA CARDENAS SOLER, el inmueble relacionado en la misma escritura, descrito en los hechos de esta demanda, ya que hizo falta el consentimiento tanto del vendedor como de la supuesta compradora, toda vez que entre ellos no existió acuerdo de voluntades ni precio porque quien contrató realmente en su calidad de compradora fue ANA ISABEL ALVAREZ T., existiendo por ende error en cuanto a la persona.

"2. Que se comuniqué la declaración anterior al Notario Segundo del Circuito de Duitama para que se tome nota al margen de la matriz de la escritura Nº 87 del 1 de Marzo de 1974.

"3. Que se comuniqué al señor Registrador de Instrumentos Públicos y Privados de Duitama, para que se cancele la inscripción de propiedad que aparece en el folio inmobiliario Nº 074 0021551 del inmueble situado en la calle 10 Nº 1636 de la actual nomenclatura y que se encuentra a nombre de ANA CELIA CARDENAS SOLER, y para que en lo sucesivo figure a nombre de ANA ISABEL ALVAREZ TORRES.

"4. Que se condene en costas a la demandada en reconvención.

*"SEGUNDA SUBSIDIARIA:*

"1. Que se declare que entre ANA ISABEL ALVAREZ T., y ANA CELIA CARDENAS SOLER, existió un contrato de MANDATO, para efectos del contrato contenido en la escritura pública Nº 87 de fecha 1 de Marzo de 1974, de la Notaría Segunda del Circuito de Duitama, por medio de la cual FLORENCIO OLIVEROS dice vender a ANA CELIA CARDENAS SOLER, el inmueble relacionado en la misma escritura, ya que ANA CELIA CARDENAS SOLER actuó como testafiero, por orden y voluntad de ANA ISABEL ALVAREZ T., donde la demandada en reconvención solo prestó su nombre para el acto de la escritura.

"2. Que en razón a la declaratoria anterior, se declare resuelto el contrato de MANDATO existente entre ANA ISABEL ALVAREZ T. y ANA

CELIA CARDENAS SOLER, ordenándose a esta última a restituir a la primera dentro del plazo que le fije la sentencia, la escritura sobre el inmueble materia de litigio tantas veces referido.

“3.- Que se oficie a la Notaría y al registro lo pertinente.

“4.- Que se condene en costas procesales a la demandada en reconvención”.

Los fundamentos de la demanda de reconvención se concretan a los siguientes hechos principales:

a) ANA ISABEL ALVARES TORRES mantuvo prolongada relación concubinaria con Luis Antonio Soler Riveros, sin procrear con él descendencia.

b) Vigente aquella relación, Ana Isabel Alvarez Torres compró a Florencio Oliveros, en la suma de \$40,000, el lote de terreno en cuestión, entrando en posesión material de él antes de que se otorgara la correspondiente escritura pública, acto este último previsto para el 1º de marzo de 1974 y frente a cuya inminente realización en la Notaría Segunda de Duitama, contó con el ingrediente de que el concubino Luis Antonio Soler Riveros convenció a la compradora para que, dados los problemas judiciales por él afrontados, ninguno de los dos concubinos apareciera como comprador en la escritura sino más bien un tercero, que resultó ser Ana Celia Cárdenas Soler, sobrina del concubino Soler Riveros, como en efecto se hizo, al aceptarlo así el vendedor.

c) Ana Celia Cárdenas Soler se comprometió, ese 1º de marzo de 1974, a “devolver la respectiva escritura a la verdadera compradora una vez cesaran los problemas judiciales...” de Soler Riveros o cuando así se lo exigieran los concubinos, todo lo cual resulta ser el antecedente para que en la escritura Nº 87 del 1º de marzo de 1974 aparezca la citada tercera como compradora del bien litigado.

d) La verdadera compradora, Ana Isabel Alvarez Torres, empezó a poseer materialmente el inmueble antes del 1º de marzo de 1974, merced a la entrega que de él le hizo Florencio Oliveros, y levantó en él, con dineros de su exclusiva propiedad, la edificación allí existente.

sobre el que su posesión quieta y pacífica se ha prolongado por más de 12 años.

e) Requerida Ana Celia Cárdenas Soler a devolver la escritura como se había obligado, siempre dilató el cumplimiento de su compromiso, hasta cuando se presentó el fallecimiento de su tío y concubino de Ana Isabel Álvarez Torres, el 22 de junio de 1985, que "precipitó la codicia..." de aquella, quien a principios de 1986 y con la colaboración de otros sobrinos suyos desalojó de parte de la segunda planta de la construcción a la reconviniente Ana Isabel Álvarez Torres.

5.- Poniéndole término a la primera instancia, el a-quo profirió sentencia el 3 de febrero de 1992, en la cual hizo los siguientes pronunciamientos:

"PRIMERO.- DECLARAR, probada la pretensión Tercera Subsidiaria de la demanda de Reconvención o sea, que ANA ISABEL ALVAREZ T., es poseedora material de buena fe, y propietaria de las mejoras existentes en el lote objeto de la demanda, tales como la edificación, cercamientos, cementados.

"SEGUNDO.- NEGAR, la excepción de Fondo propuesta por la Demandada en la Demanda principal (sic).

"TERCERO.- NEGAR, las pretensiones de la Demanda Principal (sic), por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

"CUARTO. DECLARAR, probada la excepción de Fondo de FALTA DE LA LEGITIMACION EN CAUSA EN LA ACCION DE SIMULACION propuesta por la contra-demandada en la demanda de Reconvención.

"QUINTO.- NEGAR, las excepciones Primera y Segunda, propuestas por la contra demandada en la demanda de Reconvención.

"SEXTO.- NEGAR, las pretensiones Primera principal; Primera Subsidiaria y Segunda Subsidiaria de la demanda de reconvención : por lo dicho en la parte motiva.

“SEPTIMO.- ORDENASE, la Cancelación de la Inscripción de la demanda de Reconvención, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de Duitama. Oficiese.

“OCTAVO.- CONDENASE a la Demandante Principal contra Demandada en Reconvención al pago del 30% de las costas del proceso”.

### *FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL*

No obstante encontrar configurados, en principio, los elementos axiológicos de la acción reivindicatoria, advierte líneas más adelante el Tribunal que habrá de negarse esa pretensión por encontrarse fundada la excepción de simulación, aspecto por el que, dice, comparte el fallo del *a-quo*, que vio aniquilado por eso el “dominio” de la actora como parte estructural de dicha acción. Con todo, el Tribunal manifiesta que si bien el tratamiento procesal dado por el *a-quo* a la simulación no es incorrecto, ella exigía si un pronunciamiento ya como excepción, ora como pretensión, que en el primer caso podía efectuar de oficio con arreglo al artículo 306 del C. de P.C., lo que resultaba igualmente viable respecto de la nulidad sustancial absoluta, y que en el segundo evento (como pretensión) conlleva las consecuencias inherentes a esa declaración, V. Gr. las de cancelación del registro y las pertinentes restituciones mutuas, aspecto este último, reitera, que no comporta la simulación como excepción, pues ésta sólo lleva aparejada la consecuencia de hacer impróspera la pretensión.

La simulación como pretensión, sigue indicando el Tribunal, no procede declararla cuando no concurren todas las personas que asistieron a la celebración del acto respecto del cual se deprecia, situación frente a la cual, acota, aquella únicamente puede ser declarada como excepción “con el solo efecto de inhibir o hacer impróspera la pretensión correspondiente de la demanda”, explicando que la “razón de esta exigencia es obvia: la declaración como pretensión implica que estén presentes todas las personas que de acuerdo a la ley son llamadas a debatir la situación, es decir, que configuren el litisconsorcio necesario, mientras el pronunciamiento como excepción solo produce efectos interpartes”. A ello añade que “Aplicando esto a la situación presente, quiere decir que si se declara simulación solamente con el carácter exceptivo, es declaración definitiva entre la demandante Ana Celia Cárdenas Soler y la demandada principal Isabel Alvarez, pero no es declaración oponible al vendedor del bien, señor Florencio

Oliveros, pues no es parte en este proceso; y para que proceda la declaración de simulación como verdadera pretensión, debe vincularse en calidad de parte”.

Descendiendo una vez más al caso litigado, el *ad-quem* precisa que no procede la declaración de simulación como pretensión, porque el vendedor del bien, Florencio Oliveros, no fue parte en la controversia, y por eso pasa a examinar si ese pronunciamiento es viable como excepción, esto es: si están probados los hechos que la estructuran y si el negocio celebrado fue traído a la actuación como hontanar de obligaciones, exigencias estas dos, advierte, que aunadas a la anterior (integración del litisconsorcio necesario) serían las encargadas de dar paso a la primera declaración (simulación como pretensión). En ese orden de ideas ocupándose de la demanda de reconvencción, expone seguidamente el sentenciador que la pretensión principal de simulación y la subsidiaria de nulidad absoluta allí deducidas, no se abren paso por la no citación al proceso del vendedor Florencio Oliveros, defecto que, continúa, “subsiste a través de toda la primera instancia, y se produce el fallo de primer grado en esas condiciones, fallo de fondo respecto de estas pretensiones de simulación y nulidad, numeral SEXTO de la parte resolutive”.

Pantualiza, en síntesis, respecto de la demanda de reconvencción, que las pretensiones de simulación y “nulidad relativa” (sic) deben resolverse en forma inhibitoria, acorde con lo visto (no estar integrado el litisconsorcio necesario); que idéntico tratamiento debe darse a la segunda pretensión subsidiaria, afínente a la declaración de existencia de un contrato de mandato entre Ana Isabel Álvarez Torres y Ana Celia Cárdenas Soler, en relación con la cual, dice, también quedaría excluida con la prosperidad de la excepción de simulación; y que la tercera pretensión subsidiaria si puede ser objeto de pronunciamiento de fondo ya que al apuntar a la propiedad de las mejoras existentes en el predio, no requiere integración de litis consorcio necesario alguno, aspecto por el que estima viable confirmar el pronunciamiento del *a-quo*, consistente en tener esas mejoras como efectuadas por la reconviniente.

Pasando por último al análisis del acervo probatorio, el Tribunal concluye finalmente que ciertamente existió simulación relativa (no absoluta cual lo dedujo el *a-quo*), por interposición fingida de persona en el negocio jurídico que se trata, en virtud de la cual se hizo figurar como compra-

dora del inmueble, sin serlo, a Ana Celia Cárdenas Soler, cuando quien en verdad ocupó ese extremo del acuerdo fue Ana Isabel Álvarez Torres y su compañero Luis Antonio Soler Riveros, razonamiento ese sobre el cual, insiste, es procedente declarar fundada la excepción de simulación al tenor del artículo 306 del C. de P. C. "solamente con el propósito de inhibir la pretensión reivindicatoria".

### LA DEMANDA DE CASACIÓN

Dos cargos por la causal primera de casación y uno por la quinta esgrime la recurrente contra la sentencia del Tribunal, de los cuales la Corte solo estudiará el último, por haber declarado inadmisibles la demanda contentiva del recurso extraordinario en cuanto a los dos iniciales, mediante providencia de 8 de julio de 1993.

### CARGO TERCERO

Por su conducto y una vez transcribe el numeral 9 del artículo 140 del C. de P. C., la recurrente acusa la sentencia diciendo que aún cuando el Tribunal hizo idéntica observación, dejó abierta la posibilidad de emplear este vicio como motivo de casación, "por cuanto la nulidad a que se hace referencia no fue subsanada legalmente", toda vez que el artículo 83 ibídem "es claro al ordenar que el Juez al admitir la demanda y observar que hay falta de integración del contradictorio ordenará dar traslado de la demanda a quienes faltan para integrarlo"; agregando finalmente que el mismo precepto dispone la citación de quien esté en esa circunstancia, de oficio o a petición de parte.

### SE CONSIDERA

*El fenómeno procesal del litisconsorcio necesario se presenta cuando la relación de derecho sustancial sobre la cual versa la controversia, está integrado por un número plural de sujetos en forma activa o pasiva, "en forma tal que no es susceptible de escindirse en tantas relaciones aisladas como sujetos activos o pasivos individualmente considerados existen, sino que se presenta como una sola, única e indivisible frente al conjunto de tales sujetos. En tal hipótesis, por consiguiente, un pronunciamiento del juez con alcances referidos a la totalidad de la relación no puede proceder con la intervención única de alguno o algunos de los ligados por aquella,*

*sino necesariamente con la de todos. Solo estando presente en el respectivo juicio la totalidad de los sujetos activos y pasivos de la relación sustancial, queda debida e íntegramente constituida desde el punto de vista subjetivo la relación jurídico-procesal, y por lo mismo solo cuando las cosas son así podrá el Juez hacer el pronunciamiento de fondo demandado. En caso contrario debe limitarse a preferir fallo inhibitorio" (G.J. CXXXIV, pág. 170).*

*Fundamento esencial del litisconsorcio necesario ha sido para la doctrina de la Corte el que la sentencia deba ser única y de idéntico contenido para todas las partes de la relación procesal, por ser única la relación material que los une y se contravierte en el proceso. De manera que si contrariando la inescindibilidad de la causa, el juzgador profiere fallo de mérito, cualquiera de los litisconsortes necesarios podrá impugnar en casación, ante lo cual es pertinente precisar que si lo hace por conducto de la causal quinta, la decisión debe haberle sido desfavorable, por cuanto entre los principios que rigen las nulidades está el de la PROTECCION, fundado en la necesidad de consagrar este remedio contra los agravios de las irregularidades procesales, y que además el vicio por la no citación no se huya saneado, pues la convalidación, que es otro de los principios rectores de esta figura, hace desaparecer la nulidad.*

*Inspirada la nulidad, como acaba de verse, en el principio de la PROTECCION, la jurisprudencia de la Corte ha sostenido de modo invariable que en casación la nulidad no puede invocarse indistintamente por cualquiera de las partes, sino exclusivamente por la que tenga interés en su declaración, que en el evento de la falta de integración del litisconsorcio necesario, recae solamente en el litisconsorte que no ha sido citado al proceso.*

*La Corte ha explicado este criterio diciendo que "las causales de nulidad consistentes en la ilegitimidad de personería de una de las partes, y en la falta de citación o emplazamiento de las personas que han debido ser llamadas al juicio, no pueden ser invocadas en casación sino por quien ha estado ilegítimamente representado, o no ha sido citado o emplazado, o lo ha sido en igual forma, pues que estando tales motivos de invalidación del proceso establecidos para proteger los fueros de la defensa exclusiva de dichas personas, es a ellas única-*



*mente a quienes corresponde el interés jurídico para hacerlos valer" (Sentencia de 17 de marzo de 1967, no publicada).*

Descendiendo al caso de este proceso es claro entonces que si a quien se omitió citar para los efectos del artículo 83 del C. de P. C. fue al vendedor Florencio Oliveros, quien no concurrió al proceso en su calidad de tal no obstante la relación material que lo ligaba con las partes del litigio, el sería el único llamado, en principio, a solicitar la nulidad del proceso, conclusión que de paso lleva a colegir que el aquí recurrente en casación carece de interés para invocar el vicio de que se duele.

El cargo, por ende, no prospera.

#### DECISIÓN

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 30 de octubre de 1992, proferida en este proceso ordinario por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo. Costas del recurso de casación a cargo de la parte demandante-recurrente.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVA EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

*Pedro Lafont Pianetta, Nicolás Bechara Simancas, Jorge Antonio Castillo Rugeles, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor Morín Naranjo, Rafael Romero Sierra*

## **CASACION- Procedibilidad / CASACION- Admisión**

1) Efectos acaecidos cuando no se satisfacen del modo que exige la ley, el cumplimiento de un conjunto de requisitos de procedibilidad del recurso de casación.

2) Cuando erradamente se declara admisible un recurso de casación el auto correspondiente no la obliga a tomar decisión alguna de fondo al estudiar los reparos hechos a la sentencia del Tribunal y darse cuenta cabal de la índole del pleito.

Igual sentido: Cas. Civ. de 20 de septiembre de 1994, sin publicar; G. J. ts. LXX, págs. 2, 107 y 850; XC, pág. 330, LXXVII, Pág. 51, CXXXVIII, pág. 83, CLI pág. 38 y CLXXVI, pág. 103.

F.F.: C. DE P.C. Art. 368, 371 *ibídem*.

## **CASACION- Carga Procesal / CASACION- Deserción**

La no satisfacción de la carga procesal - del art. 371 del C. de P.C. -, origina un motivo de deserción que además de producirse por el ministerio de la ley y no por obra de una declaración judicial, lleva consigo la ejecutoria de la sentencia.

Igual sentido: Auto de 20 de junio de 1977, sin publicar.

F.F.: C. de P.C. Art. 371, 372 inc. 1.

## **CASACION- Efectos**

No es potestad discrecional de la Corte, así como tampoco es materia entregada por el ordenamiento al poder de disposición de los litigantes, el transformar en "suspensivo" el efecto "devolutivo" que en la generalidad de los casos la ley le asigna al recurso de casación.

F.F.: C. de P.C. Art. 371.

*Cortes Suprema de Justicia — Sala de Casación Civil — Santafé de Bogotá, D.C., Dieciocho (18) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).*

Magistrado Ponente: *Carlos Esteban Jaramillo Schloss*

Ref: Expediente No. 4338

Sentencia Nº 137

Se decide lo pertinente acerca del recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha veintisiete (27) de enero de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso adelantado por la menor YURANI RAMIREZ contra ELICIO TOVAR MORENO.

### *I. El litigio:*

1. Mediante escrito que fue presentado el ocho (8) de marzo de 1991 y repartido al Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Neiva, directamente, Deysi Ramírez Mosquera demandó el reconocimiento de su hija YURANI RAMIREZ como hija extramatrimonial de ELICIO TOVAR MORENO; en consecuencia pidió ordenar la corrección del registro civil de nacimiento y fijar, inicialmente en forma provisional, la cuota de las mesadas alimentarias que el demandado debe pagar en favor de la menor demandante.

En su demanda la actora invocó como razón para pedir que desde junio de 1989 tuvo varias veces relaciones sexuales con el demandado fruto de las cuales nació YURANI RAMIREZ el dieciséis (16) de junio de 1990, sin que ELICIO TOVAR asumiera los gastos correspondientes.

En su oportuna contestación, el demandado se opuso a las súplicas deducidas en el libelo incoativo del proceso y adujo la promiscuidad sexual con otros hombres, observada por la madre de la menor demandante.

2. La primera instancia se tramitó con la práctica de pruebas solicitadas por las partes y terminó con la sentencia dictada en audiencia pública el diecisiete (17) de febrero de 1992, mediante la cual el juez del conocimiento declaró que ELICIO TOVAR MORENO "no es responsable de la paternidad de la menor YURANI RAMIREZ MOSQUERA"; desestiman-

do por tanto las pretensiones de la demanda y ordenó tener en cuenta tal determinación para los efectos indicados en el artículo 17 de la Ley 75 de 1968; en fin, se abstuvo de condenar en costas al no aparecer causadas.

3. Deconforme con lo así resuelto, la actora interpuso recurso de apelación que, concedido, llevó el proceso al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el que por intermedio de su Sala de Familia y luego de rituar el trámite del grado profirió su fallo de veintisiete (27) de enero de 1993 con el cual revocó la sentencia impugnada y, en su defecto, declaró que ELICIO TOVAR MORENO es el padre extramatrimonial de YURANI RAMIREZ; ordenó la corrección del registro civil de la menor; reconoció el ejercicio exclusivo de la patria potestad y el cuidado personal y directo de aquella, a la madre y fijó como cuota alimentaria provisional la suma de \$20.000 mensuales a cargo de TOVAR MORENO, condenado en costas de la primera instancia a la parte demandada.

## II. *Fundamentos de la providencia recurrida.*

El fondo de la sentencia recurrida parte de la base de que en el asunto sub judice la parte actora estriba su petición en la existencia de relaciones sexuales entre la madre de la menor, Deysi Ramírez Mosquera, y el presunto padre ELICIO TOVAR MORENO, por la época en que se presume aquella fue concebida, presupuesto que encontró demostrado el Tribunal con los testimonios que analizó individualmente, señalando que "aparecen recogidos con el ítero de los requisitos legales" sin que presenten "circunstancias ostensibles de inhabilidad o sospecha en la ciencia de su dicho". Añade Ramírez Mosquera, Juan de Jesús Perdomo, Ana Ofelia Balanta, y Ever García Bolaños. Añadió que además de estas pruebas de "carga" obra en el plenario el dictamen de genética practicada por el Instituto de Bienestar Familiar de Bogotá "cuyo resultado aunque parcial al no haberse ordenado por el funcionario a quo su práctica conforme lo dispuso el artículo 7o. de la Ley 75 de 1968, conceptúa la 'compatibilidad' sanguínea entre la parte demandada, la demandante y la menor YURANI, dictamen que recibió el trámite de contradicción que prevee el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, y no mereció reparo alguno dentro del traslado conveniente para ello".

También analizó una a una las pruebas pedidas por la parte demandada, las declaraciones de Gentil Cortés y Luis Eduardo Peña, sobre las

que dice que "son unánimes en expresar que su asistencia a la finca de los progenitores de la demandante Deysi Ramírez lo hacían con fines de tomar tinto y comer cuajada con miel, no notando que entre ELICIO y Deysi hubiera existido relación distinta a la de amistad, por cuanto los padres de ella eran celosos y poco la dejaban dialogar con ellos".

De todo lo anterior concluye el ad quem que es incuestionable que ELICIO TOVAR y Deysi Ramírez se conocieron e iniciaron amistad en junio de 1989, y más adelante apunta que "... la prueba aportada por la parte demandante establece inequívocamente que ELICIO TOVAR, valiéndose de la amistad que mereció por parte de los progenitores, pretextando con la actividad de enseñarle a conducir la camioneta y ayudarle a expedir el pase a Deysi Ramírez, aprovechó esas circunstancias para accederla carnalmente, en sitios cercanos a la finca y por varias oportunidades", apoyando estas apreciaciones en que, según dice, los testimonios de Amin Ramírez, Juan de Jesús Perdomo y Ever García Bolaños relatan con pormenores hechos manifiestos que son aceptados por el demandado "como lo son, las visitas frecuentes a la finca y el reclamo ofuscado que le hiciera el padre de Deysi, y pese a su enfática y reiterada negativa de no haber transportado a ésta en la camioneta, y que pretendió desligar con sus testigos, hecho confirmado por parte del trabajador García Bolaños". Opina lo contrario respecto de los testimonios que aporta el demandado, de los cuales dice que "dimana su parcialidad, queriendo éstos con sus exposiciones corroborarle la prohibición de transportar personas particulares en los vehículos automotores de la empresa y acomodándole a Deysi amoríos con un tal "Rolo" de quien dicen no conocer. Esta última afirmación no tiene asidero jurídico valedero, pues no existe prueba de las relaciones sexuales múltiples por parte de Deysi, sino por el contrario, según los antecedentes del proceso, una ingenua campesina sumisa al lado de sus padres".

### III. El recurso interpuesto:

Tomando pie en el numeral 1o. del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, contra la referida sentencia interpuso recurso de casación la parte demandada quien, en la oportunidad debida, presentó el correspondiente escrito sustentatorio, formulando allí dos cargos que no admiten decisión alguna de fondo, atendidas las siguientes:

*Consideraciones:*

1. *El derecho con que cuentan los litigantes de recurrir en casación y de obtener, en concreto, la enmienda de los vicios de actividad o de juzgamiento en que incurre determinada sentencia que a la instancia le puso fin, presupone como es bien sabido el cumplimiento de un conjunto de requisitos de procedibilidad que, no obstante ponerse ellos de manifiesto en diferentes etapas del procedimiento de conformidad con el cual dicho recurso ha de surtirse, todos en realidad producen a la postre un mismo efecto si no son satisfechos del modo que exige la ley, efecto consistente en impedir una resolución de fondo, estimatoria o desestimatoria, de las cuestiones que el recurrente aduce para justificar su impugnación. Dicho en otras palabras, la eficacia prohibitiva que cualquiera de estos requisitos produce, es absoluta y se despliega con este carácter en todas aquellas etapas, habida cuenta que, en situaciones normales, impide que a esas etapas se las pueda considerar como debidamente agotadas para pasar a la que sigue hasta llegar a la fase final de decisión del recurso, mientras que si por alguna circunstancia la secuela procesal avanza y culmina no obstante la falta de alguno de los requisitos en cuestión, se hace imposible cualquier pronunciamiento de mérito y así debe limitarse a registrarlo la Corte en su sentencia, restableciendo por lo tanto el imperio de las normas rituales que, debido precisamente a ese defecto no advertido en oportunidad, dejaron de aplicarse.*

*En este orden de ideas y en cuanto toca de manera concreta con las condiciones previas que consagra la ley para la admisibilidad del recurso de casación, condiciones que sin duda constituyen una especie de los requisitos de procedibilidad a los que acaba de hacerse referencia, ha sostenido la Corte que si llegare a admitirse ilegalmente tal recurso, en guarda del postulado de doctrina según el cual lo interlocutorio no ata a lo definitivo, puede ella posteriormente apartarse de su propia decisión y abstenerse de proferir sentencia de mérito para, por improcedente, rechazarlo: en efecto, por muchos años y utilizando una línea argumental de evidente consistencia lógica que sólo en fecha muy reciente se puso en entredicho por un discutido fallo de mayoría (Cas. Civ. de 20 de septiembre de 1994, sin publicar), obtenida dicha mayoría por cierto con la intervención de un conjuet, tuvo por sentido esta corporación que cuando erradamente se declara admisible un recurso de casación "... el auto correspondiente no la obliga a tomar decisión alguna de fondo al estudiar*

los reparos hechos a la sentencia del Tribunal y darse cuenta cabal de la índole del pleito. Ciertamente, si al entrar en el examen detenido del recurso propuesto advierte que le ha dado cabida sin fundamento legal, mal procedería atribuyéndole al auto capacidad para comprometerla en el nuevo error de asumir una competencia de que carece. Porque el auto en cuestión nunca tiene fuerza de sentencia, no cohibe a la Corte para declarar en providencia posterior la improcedencia del recurso..." (G. J. ts. LXX, pág. 2, 107 y 850, XC, pág. 330, LXXVII, pág. 51, CXXXVIII, pág. 83, CLI pág. 38 y CLXXVI, pág. 103).

2. Llegados a este punto en el análisis, es preciso recordar que los requisitos de los que depende la viabilidad procesal del recurso de casación, atendida la función específica que de acuerdo con la ley tienen reservada en las etapas sucesivas del trámite, son de distintas clases. No solamente hacen ellos referencia a la persona que puede hacer uso de este medio impugnativo de excepción y la legitimación con que ha de contar para hacer escuchar su protesta, a la naturaleza de la decisión jurisdiccional cuya información se pretende obtener, a los plazos perentorios de interposición y sustentación del recurso a las formalidades que debe reunir el escrito en que este último acto de postulación se manifiesta y, en fin, a la índole de las materias que, en consonancia con la técnica propia de cada una de las causales previstas en el art. 368 del C. de P.C., pueden ser ventiladas en casación. También aluden aquellos requisitos a ciertas actividades complementarias o concurrentes de las que suministra significativo ejemplo el art. 371 del mismo código y que son de inexcusable observancia, toda vez que en su defecto y con los alcances señalados líneas atrás, el recurso se torna improcedente.

Dispone en efecto, el precepto legal recién citado que cuando una sentencia que clausura la instancia y que contiene resoluciones ejecutables, ha sido recurrida en casación por la parte a quien esas resoluciones le ocasionan gravamen y dicha parte no ha obtenido la suspensión de su cumplimiento mediante la prestación de garantía suficiente, le corresponde al Tribunal ordenar la expedición de copias, a costa del impugnante y dentro de un término breve que la ley asimismo establece, para que la ejecución provisional de aquella providencia tenga lugar, todo ello en el entendido que si así no se suceden las cosas por omisión del Tribunal frente a la cual el recurrente guardó silencio, opere entonces la deserción del recurso interpuesto, recurso que por añadidura ha de ser declarado inad-



*misible según la letra, categórica por cierto, del inciso primero - in fine - del art. 372 del C. del P.C. Expresándolo de otro modo, significa esto que la no satisfacción de la carga procesal en mención, en la medida en que revela un abandono de la impugnación imputable al litigante interesado en deducirla, origina un motivo de deserción que, además de producirse por el ministerio de la ley y no por obra de una declaración judicial (cfr. Auto de 20 de junio de 1977, sin publicar), lleva consigo la ejecutoria de la sentencia, quedando excluida por ende cualquier actuación posterior que tomando pie en la concesión inicial de que fue objeto el recurso, signifique avanzar en un trámite que si de hecho llegare a darse, frente a esa deserción impuesta por la ley y las consecuencias que le son inherentes, resultaría irremediablemente ineficaz.*

*Así, pues, esas drásticas consecuencias que de la deserción son predicables y que vienen impuestas por un sistema legislado de obligatorio cumplimiento al decir del Art. 60. del C. de P.C., no desaparecen o se atenúan debido a la errónea admisión del recurso en que haya incurrido la Corte, puesto que como tantas veces ha sido necesario advertirlo, no es potestad discrecional suya, así como tampoco es materia entregada por el ordenamiento al poder de disposición de los litigantes, el transformar en "suspensivo" el efecto "devolutivo" que en la generalidad de los casos la ley le asigna al recurso de casación, ni mucho menos infundirle nueva vida cuando este último, por voluntad del legislador a cuyo imperio están semejadas sin atenuantes todas las autoridades judiciales según lo proclama el art. 230 de la C.N., ha de tenerse por abandonado.*

3. En la especie que hoy ocupa la atención de la Corte se observa que en el auto de fecha dieciséis (16) de febrero de 1993 (fl. 37 del cuad. 2), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva omitió ordenar la expedición de copias para los fines indicados en el Art. 371 del C. de P.C., a lo que se añade la inadvertencia de la parte recurrente en casación que no tomó la iniciativa, estando obligada a hacerlo, para que esa actividad se surtiera del modo debido, habida consideración que en el proceso en estudio la verdad es que la sentencia de segundo grado no fue recurrida por ambas partes, tampoco versó con exclusividad sobre cuestiones ainentes al estado civil de las personas ni en ella se efectuaron simples declaraciones, pues como consecuencia de la filiación extramatrimonial reconocida y de la paternidad en la misma providencia

imputada, de manera clara y explícita se condenó al demandado a pagarle a la menor demandante, en concepto de "... cuota alimentaria provisional...", la suma de veinte mil pesos mensuales.

Equivale lo anterior a decir que la corporación sentenciadora, en obediencia del Art. 371 del C. de P.C. tantas veces citado a lo largo de esta providencia, ha debido ordenar las copias para que con fundamento en ellas esa condena pudiera tener cumplimiento; al no hacerlo y tratarse de la impugnación contra una sentencia con tal contenido decisorio de inequívoco sentido condenatorio para el demandado recurrente, éste no podía exonerarse de la carga correspondiente con sólo pretextar que el Tribunal no mandó satisfacerla, luego debió pedir la expedición de las aludidas copias y cubrir los emolumentos necesarios.

Y como quiera que por fuerza de razones explicadas a espacio en apartes anteriores de estas consideraciones, es atribución de la Corte revisar la legalidad de la actuación surtida desde la interposición del recurso en orden a verificar el cumplimiento integral de todos los requisitos de que depende su procedibilidad, en esta especie no queda alternativa distinta a declarar que el formulado por la parte demandada es improcedente por haberse presentado, antes de ser admitido a trámite, una causa legal de deserción, pues en cuanto al punto señalado que se relaciona con la condena impuesta al pago de alimentos, no se solicitó suspender el cumplimiento del fallo, tampoco el recurrente ofreció prestar caución para el efecto y, en fin, nada en el expediente permite concluir con razonable posibilidad de acierto que a instancia de la parte sobre la cual pesa la respectiva carga por mandato de la ley, se hayan expedido las copias de la manera y con el destino que indica el Art. 371, inciso 4o., del C. de P.C.

Consiguientemente hay que decir que la Corte, por evidente sustracción de materia, no cuenta con atribuciones para estudiar en el fondo los dos cargos contenidos en la demanda presentada y, para salvar la deficiencia anotada, le corresponde entonces proferir decisión inhibitoria.

### DECISIÓN:

En mérito de las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre

de la República de Colombia y por autoridad de la ley, se inhibe de decidir en el fondo el recurso de casación propuesto por el demandado en el proceso de la referencia.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase la actuación al tribunal de origen.

*Pedro Lafont Pianetta, salva voto, Nicolás Bechara Simancas, salva voto, Jorge Castillo Rugeles. Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra.*

## CASACION- Deserción (SALVAMENTO DE VOTO)

No encontrándose el recurso en estado de deserción el fallo ha debido ser de mérito o de fondo.

Providencias citadas: G.J. Tomo XCIX, p. 687; auto de 21 de febrero de 1989 Exp. 1698; sentencia del 20 de septiembre de 1994.

F.F.: C. de P.C. art. 372 inc. 3, 371, 374, 365, 373 inc. 3, 4 ibídem.

SALVAMENTO DE VOTO

Referencia: Expediente No. 4338.

*1. Con relación a la anterior sentencia inhibitoria proferida en el proceso de la referencia, tomando como fundamento el estado de deserción del recurso de casación por incumplimiento de la carga procesal requerida para la ejecución de la sentencia impugnada, los suscritos magistrados, con el debido respeto, se permiten expresar su disenso, por cuanto, a nuestro juicio, no encontrándose el recurso en estado de deserción el fallo ha debido de ser de mérito o de fondo, por las consideraciones que a continuación se exponen.*

*2. Pues bien, la reforma procesal de 1989 (Decreto ley 2282 de 1989) no sólo adoptó explícitamente los principios de la ejecutabilidad general de la sentencia recurrida y de la preclusión de los efectos de su incumplimiento, sino que, más aún, reguló expresamente las oportunidades pertinentes.*

*2.1. En efecto, como consecuencia del efecto devolutivo de la concesión del recurso de casación, la precitada reforma, de una parte, mantuvo el criterio de la posibilidad de su ejecución imponiendo al recurrente desfavorecido totalmente con la sentencia, el deber de darle cumplimiento, o el de, si fuere el caso otorgar caución para la suspensión (art. 371, inc. 3o, C.P.C.), o consagrándole al recurrente favorecido parcialmente con el*

fallo (art. 374, inciso final, C.P.C.) la facultad ("podrá", dice el texto) de solicitar su cumplimiento en lo favorable.

2.2. Pero con relación al primer caso, la misma legislación reguló simultáneamente, las cargas procesales para el cumplimiento del fallo, con la oportunidad de cumplimiento de dichas cargas, los efectos de su incumplimiento y las oportunidades de establecimiento de estas últimas, ubicándolas dentro de las diferentes fases o etapas preclusivas que estructuran el trámite del recurso extraordinario de casación. Por esta razón, el legislador de 1989 si bien estableció (salvo lo dispuesto en el art. 372 inc. 3º, C.P.C.) una oportunidad para el cumplimiento de la carga procesal de suministrar lo necesario para las copias (previa solicitud, si el tribunal no lo hubiese ordenado) que faciliten el cumplimiento del fallo (dentro de los 3 días siguientes a su ejecutoria), no es menos cierto que consagró tres oportunidades para que el juez y las partes establecieran y discutieran su deserción, a saber: la primera, al momento del incumplimiento de dicha carga después de haberse concedido el recurso de casación por el tribunal (art. 371, inc. 3º C.P.C.), para que corresponda a esta Corporación su decisión; la segunda, al resolverse por la Corte la "admisibilidad del recurso" (tal como lo indica el inciso 3º del artículo 372 del Código de Procedimiento Civil); y la tercera, al examinar la misma Sala Civil de la Corte "los requisitos formales de la demanda" (art. 373, inc. 4º, Código de Procedimiento Civil, destinada a sustentar el recurso debidamente "concedido" y "admitido". Luego, fue una carga procesal concebida por el legislador como imperativo del recurrente para obtener la consecuencia favorable de la tramitación del recurso en las oportunidades de concesión y admisión del recurso y de admisión de la demanda, cuyos actos procesales de deserción en caso de incumplimiento, sólo pueden expedirse o reconocerse en estas específicas oportunidades. (Las subrayas son nuestras). Y son oportunidades que, al permitir que las decisiones se adopten por auto, otorgan, a su vez, la posibilidad de la impugnación correspondiente.

3. En cambio, no puede hablarse de deserción del recurso extraordinario de casación después de la ejecutoria del auto admisorio de la demanda de casación, ni tampoco de oportunidad adicional alguna para su reconocimiento en auto posterior o en sentencia que declare la inhabilitación para su conocimiento, por las razones que a continuación se expresan.

3.1. La primera de ellas consiste en que con dicha ejecutoria, formalmente quedó precluida la oportunidad para que las partes puedan aducir el incumplimiento por el recurrente de la carga procesal del suministro de lo necesario para la expedición de las copias indispensables para la ejecución, que sirva de fundamento para reclamar la deserción del recurso de casación, así como para que el juez pueda, de oficio o a solicitud de parte, proceder a su declaración por auto o por sentencia inhibitoria. Ello tiene su fundamento en la intención inequívoca de la reforma de 1989 de cerrar en esta fase dicha oportunidad excluyendo en ella toda posibilidad de decisión sobre el particular, cuando a diferencia de los momentos arriba mencionados (concesión y admisión de recurso, y admisión de demanda), no autoriza expresamente el análisis del incumplimiento de la precitada carga procesal y de la deserción del recurso. Además, tampoco fue estatuida esa carga procesal como condición para que la Corte adquiriera competencia o para que el recurso fuese fallado de fondo, por lo que la doctrina no puede darle ese alcance. Más aún, fuera de lo dicho observan los suscritos que tampoco puede llegarse a esta conclusión, por interpretación extensiva o por vía analógica. Pues no se trata de un defecto de expresión normativa, ni de un vicio que autorice dicha interpretación o creación normativa, sino, por el contrario, lo que realmente surge de dicha reforma es la existencia de una voluntad inequívoca de exclusión de la mencionada interpretación o analogía. Porque, como bien lo ha dicho la doctrina, "el concepto de carga... puede ser útil y provechosamente aplicado a la teoría del proceso, no se debe exagerar, no se debe querer acreditar en todo caso una carga procesal, aún allí donde el derecho procesal objetivo, al regular el ejercicio de derecho de acción y de contradicción en juicio y el desarrollo de la forma y en el tiempo de todas las actividades procesales, ha establecido particulares siendo de ejercicio que en ningún caso pueden entrar en el concepto todavía denominado de carga" (ver Rocco, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, p. 175).

3.2. La segunda razón es la de que materialmente con la ejecutoria del auto admisorio de la demanda, el ordenamiento patrio entiende que se configura un fenecimiento de la deserción inicial del recurso de casación. En efecto, no siendo la deserción del recurso un mero efecto procesal de extinción o muerte irreversible del recurso, que opere como caducidad, sino sencillamente el hecho voluntario del recurrente de abandonar el recurso que la ley infiere del mero incumplimiento de una carga procesal, puede entenderse la razón por la cual la misma ley autorice para que el



juez pueda reconocer su existencia en la concesión y admisibilidad del recurso de casación, así como en la admisibilidad de la demanda de casación, y no en época posterior. Porque si, no obstante el incumplimiento de esta carga procesal, el recurso es concedido por el tribunal y admitido por la Corte, para luego ser sustentado por demanda, que también es admitida por la Corte: es lógico admitir que si bien este recurso, sin dejar de existir, estuvo inicialmente en deserción o abandonado, posteriormente dejó de serlo cuando, después de toda esta actuación, resulta admitida su sustentación, sin oposición de los interesados ni declaración judicial. Porque si hasta este momento no se ha expedido declaración que reconozca cierta y definitivamente que hay abandono o deserción del recurso, es porque efectivamente no hubo abandono o este feneció si alguna vez existió. Es decir, la firmeza de la admisión de la demanda da seguridad jurídica suficiente a la existencia y sustentación del recurso de casación. De allí que ello explique que en dicha fase no se haya abierto una nueva oportunidad de declaración de deserción, pues, se repite, la que inicialmente tuvo existencia desapareció por la preclusión procesal correspondiente.

3.3. Finalmente, la tercera razón radica en que si es necesario, como efectivamente lo es, que la sentencia que resuelva el recurso extraordinario de casación, se profiera con respeto de las garantías constitucionales del derecho de defensa y de la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal (art. 29 y 228 C.P.); mal puede aquella providencia tener un carácter inhibitorio fundado en una deserción, aún en el evento en que esta existiese por estas consideraciones. En primer término, porque, además de desatender el criterio uniforme de deserción mediante auto (vgr. arts. 132, inc. 3o.; 371, inc. 3o.; 372, inc. 3o.; 373, inc. 4o.; etc. C.P.C.) consecuencialmente impide a las partes medios de impugnación contra la sentencia que reconoce la deserción como fundamento de la inhibición. Y en segundo lugar, porque con dicha sentencia inhibitoria, no sólo se limita a dar una interpretación rigurosa de la ley ritual que establece la deserción del recurso, admitiendo su posibilidad de reconocimiento hasta en la misma sentencia que ha de resolverlo, sino que más aún, contrariando el deber de fallar en el fondo se inhibe de hacerlo. Y con ello dicho fallo también se pondría al margen de la resolución del recurso de casación que, como es bien sabido, debe definir en el mérito la violación o no del derecho objetivo y, si fuere el caso, reparar el agravio infringido a las partes (art. 363 C.P.C.).



3.4. Por ello los suscritos magistrados reiteran una vez más la doctrina tradicional y reciente de esta Corporación sobre el particular.

3.4.1 En efecto, aún bajo la vigencia de la estricta reglamentación del recurso de casación y de su rigurosa interpretación, ahora atenuada, esta Sala nunca admitió la supervivencia de la deserción del recurso de casación, después de la ejecutoria del auto admisorio de la demanda de casación, cuando ella se fundaba en el incumplimiento de cargas procesales. Porque al estimar sujeta estas cargas al principio de la preclusión, ellas fenecían y se consideraban saneadas las irregularidades generadas por su incumplimiento, es decir, se tenía como saneada la deserción inicial del recurso extraordinario, lo cual hoy día cobra mayor vigencia frente a la reforma que se ha hecho mención. De allí que en esa oportunidad se dijera que el principio de la preclusión del que, como es bien sabido y al decir de Lorenzo Carnelli (*Cuestiones...*, p. 17, edición de 1953) "... va asentando en el camino, como quien dice, las certezas menores, verdaderos puentes o, en otra forma, nudos firmes de la trama procesal que hacen posible la producción de la sentencia y con esta la afirmación definitiva de sus decisiones componentes...", esto debido a que siendo lo cierto que las leyes procesales son de orden público en cuanto no es dable a las partes escoger las que a bien tengan para encauzar el procedimiento, no puede pasarse por alto que "... ella no puede impedir que como consecuencia de la abstención de una parte en interponer remedios legales, se consoliden determinadas situaciones irregulares cuyo acaecimiento, por su menor gravedad, no han sido consideradas por el legislador como causales de nulidad..." (G. J. Tomo XCIX, p. 687). Y más adelante señala la Corte con acierto que las cargas procesales, como la del pago de las costas, también precluyen, porque, expresa, "la verdad es que en este caso el provido admisorio del escrito de formulación del recurso extraordinario, fechado el veintiocho (28) de octubre de 1988 (fl. 163 del cdno. de la Corte), alcanzó plena firmeza; a pesar de crear una situación jurídica procesal ciertamente irregular, contra ella ningún reparo oportuno formuló la parte interesada no obstante que pudo hacerlo con amplitud suficiente. —nótese que para verificar la existencia de la carga insatisfecha y preparar su alegación en el tiempo debido, tuvo dicha parte el expediente entero a su disposición desde el 28 de mayo hasta el 28 de junio de 1988 (fls. 6 y 11, vta. a 25 de este cuaderno)—, luego es claro que aquella irregularidad quedó saneada y debió rechazarse, por

improcedente y extemporánea." (auto de 21 de febrero de 1989 -Exp. 1698). (Lo subrayado es nuestro).

3.4.2. Pero más recientemente, bajo la vigencia de la actual Carta Política de 1991, esta Sala, en sentencia del 20 de septiembre de 1994 (Exp. No. 4308), acertadamente dijo lo siguiente: "A título de introducción conviene advertir que cuando una sentencia es contentiva de resoluciones ejecutables y ha sido recurrida en casación por la parte agraviada, respecto de la cual no se ha solicitado por el recurrente la suspensión de su cumplimiento, le corresponde al Tribunal ordenar la expedición de copias a copia del impugnante, dentro del término legal, so pena de que el ad quem declare desierto el recurso, o de que la Corte lo inadmite".

"Empero, si a pesar de ser ejecutable el fallo proferido por el ad quem, y sin reparo de las partes se concede el recurso extraordinario por el Tribunal, se admite luego por la Corte y se tramita hasta usedar en estado de dictar sentencia con la cual debe ultimarse el recurso extraordinario, considera la Corporación que, en esas condiciones, debe declararse tal medio de impugnación, porque si bien el ordenamiento procedimental debe acortarse, también no se puede desconocer que en la misma legislación ritual sienta algunas reglas que son contentivas de principios universales, entre ellas, el de que el fin de los procedimientos se contrae a la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial (art. 4 del C. de P.C.), postulado éste que por revestir especial y trascendental importancia, el constituyente de 1991 lo elevó a la categoría de constitucional, con mayor alcance, al establecer que en las actuaciones judiciales "prevalecerá el derecho sustancial" (art. 228), lo cual se traduce, tal como lo tiene señalado la doctrina y la jurisprudencia, en que el derecho formulario no puede interpretarse y aplicarse con tanto rigor en procura de no sacrificar el denominado derecho sustancial, máxime cuando las partes litigantes no se han dolido de la actuación cumplida, teniendo las oportunidades legales para ello.

"Como antecedente de los postulados constitucionales rectores de la administración de justicia, entre ellos el de la prioridad o prevalencia del derecho sustancial sobre el ritual o formal, se afirmó en las discusiones de dicho principio por el Constituyente de 1991, que su razón de ser y su necesidad de enmarcarlo en la Carta, radica en que "se ha convertido la forma en un medio no para garantizar el derecho sino para negarlo. El

*descuido en el saneamiento de las formas conduzca con frecuencia al Juez a dictar sentencias inhibitorias, en abstracto, o a terminar el proceso con una nulidad. Debe entenderse que forma y contenido son inseparables en el Derecho de Defensa y Debido Proceso y que por descuido del Juez o de los abogados no puede sacrificarse el derecho sustancial. Habrá un instante en que, si no se alegaron vicios de procedimiento, éstos se entienden saneados para dar paso a la sentencia de fondo. Este principio dará lugar a una nueva concepción del derecho procesal: no más nulidades procesales al momento del fallo, ni sentencias inhibitorias, ni sentencias en abstracto, ni mucho menos sentencias absolutorias cuando el Juez se considera incompetente, como ha sucedido muchas veces de modo lamentable. Hoy el procedimiento se ha convertido en una excusa para eludir el fallo y negar el derecho impetrado'.*

*"Claro está, y es entendible, que no pretendió el Constituyente de 1991 hacer tabula rasa del derecho instrumental o procedimental, sino proscribir el excesivo rigorismo formal, pues de no ser así, no resultaría fácil explicar que por otra parte la misma Carta Política exija, como uno de los elementos del debido proceso, la observancia de las formas propias de cada juicio, tal como lo ha puesto de presente la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional".*

*"En pos de estos criterios, resulta más aceptable resolver el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, que sustruirse al conocimiento del mismo. lo cual explica las reflexiones que seguidamente se sientan..." (Las subrayas también son nuestras).*

4. Por todo lo expuesto, los suscritos estimamos que en el caso sub-examine ha debido ser de mérito y no inhibitorio el fallo de casación.

Fecha *ut supra*.

*Pedro Lafont Planetta, Nicolás Bechara Simancas.*

### **PROVIDENCIA JUDICIAL / ejecutoria**

La ejecutoria de la providencia que resuelve el recurso improcedentemente formulado no obstruye de ningún modo la firmeza de la decisión impugnada de una manera errónea.

F.F.: C. de P.C. Art. 331

### **TERMINO LEGAL / CASACION-Carga Proceso/CASACION-Copias**

El art. 371 - inciso 3o.— del C. de P.C., confiere al recurrente un término de los denominados "legales", condición que lo hace perentorio e improrrogable, término que tiene por objeto la atención de la carga de suministrar lo necesario para la expedición de las copias señaladas por el Tribunal.

F.F.: C. de P.C. Art.: 371 Inciso: 3. 18 ibidem.

### **CASACION-Inadmisión/CASACION-Cumplimiento Sentencia Recurrida/CASACION-Copias**

En el presente caso se inadmite el recurso de casación por cuanto no se ofreció prestar caución para efectos de suspender el cumplimiento de la sentencia, ni suministró tempestivamente lo necesario para la expedición de las copias ordenadas por el Tribunal con miras a facilitar la ejecución del fallo, lo que quiere decir que llegó a esta Corporación en estado de deserción.

F.F.: C. de P.C. Art.: 371 Inciso: 3. C. de P.C. Art.: 371 Inciso: 5ib.

*Corte Suprema de Justicia — Sala de Casación Civil* — Santafé de Bogotá, D. C., dieciocho (18) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Magistrado Ponente: *Dr. Héctor Marín Naranjo*

Rad. Expediente 5236

Auto Nº 351

Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad del recurso extraordinario de casación interpuesto por algunos de los demandados contra la sentencia proferida el 15 de julio de 1994 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, dentro del proceso ordinario adelantado por CARMENZA ULLOA LUENGAS, MARIA OTILIA LUENGAS DE ULLOA, ANA LILIA RIOS DE CURREA, ELVIA MORALES DE SANCHEZ E ISIDRO VILLAMIL, frente a ANTONIO DE JESUS ALFONSO, MARIA DEL TRANSITO PACHECO DE ALFONSO, JUAN EVANGELISTA SOTELO CORTES y MARIA ALICIA SALAS DE SOTELO.

#### ANTECEDENTES

1. Mediante la adudada sentencia, el ad-quem, quien adquirió competencia para fallar el litigio en virtud de la aplicación que de las disposiciones legales sobre descongestión judicial ha efectuado esta corporación, confirmó la proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Moniquirá, por medio de la cual se acogieron las pretensiones de la demanda, y, subsecuentemente, se revocó el contrato el contrato de compraventa celebrado entre los demandados mediante la escritura pública Nº 459 del 12 de octubre de 1989 y se dispuso el reingreso de los inmuebles enajenados al patrimonio de los deudores, para cuyo efecto se ordenó librar oficios al registrador de instrumentos públicos y al notario pertinentes.

2. Contra el fallo del tribunal interpuso el apoderado de los demandados JUAN EVANGELISTA SOTELO y MARIA ALICIA SALAS DE SOTELO, el recurso extraordinario de casación que fue concedido mediante providencia del 17 de agosto del año en curso por el tribunal superior del Distrito Judicial de Tunja, a la razón la corporación competente para tal efecto. Tal decisión fue adicionada luego en el sentido de ordenar la expedición de las copias necesarias para la ejecución de la sentencia.

Contra este auto complementario interpuso la parterecurrente el recurso de súplica, y, comoquiera que la impugnación le fue negada por improcedente, procedió a suministrar lo necesario para que compulsaran las copias ordenadas

## CONSIDERACIONES

1. El artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, prevé que "... las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuanto carecen de recursos, o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos..." (se subraya).

En consecuencia, en la medida en que una decisión judicial se encuentre en una de las tres situaciones que considera la norma transcrita logra la condición necesaria para que adquiera firmeza y se generen los efectos que le sean propios. Para establecer la existencia del primer supuesto, basta con determinar si de conformidad con la ley la providencia de que se trate es o no susceptible de recursos, cuestión que sellar su ejecutoria, independientemente de que alguna de las partes hubiese interpuesto erróneamente uno cualquiera. O sea que: si por mandato legal la providencia carece de recursos, el que intempestivamente formule una de las partes no ataja su ejecutoria.

En el segundo evento, la providencia alcanza firmeza por haber transcurrido el término de ejecutoria sin que el interesado hubiese interpuesto el recurso procedente. Esto significa que sólo en la medida en que el recurso propuesto sea el adecuado para impugnar aquella, o sea, cuando conforme a la ley la providencia atacada sea impugnabile por el medio elegido por el inconforme, acurra la secuela de interrumpir su término de ejecutoria. Entonces, el recurso improcedente no trunca el término de ejecutoria de las decisiones de ese modo impugnadas, sin perjuicio, como es natural, de que no se computen los días en que permanezca el asunto al despacho pendiente de resolución judicial.

Siendo las cosas como se acaban de indicar, es decir, si la impugnación improcedente no impide la ejecutoria de la providencia que por disposición legal carece de recurso, o de la de aquella que es susceptible de ataque mas por un medio distinto al escogido por el inconforme, debe inferirse, pues, que en el tercer evento, la firmeza de una providencia se interrumpe mientras adquiere ejecutoria la que desata el recurso que procedentemente se ha propuesto. O lo que es lo mismo, la ejecutoria de la providencia que resuelve el recurso improcedentemente



*formulado no obstruye de ningún modo la firmeza de la decisión impugnada de una manera errónea.*

2. *Dispone, por su lado, el art. 371 ejusdem, que la concesión del recurso de casación "... no impedirá que la sentencia se cumpla, salvo en los siguientes casos: Cuando verse exclusivamente sobre el estado civil de las personas; cuando se trate de sentencia meramente declarativa; y cuando haya sido recurrida por ambas partes..."*.

*Para facilitar el cumplimiento de la sentencia se establece más adelante, en el mismo artículo, que "... En el auto que conceda el recurso se ordenará que el recurrente suministre, en el término de tres días a partir de su ejecutoria, lo necesario para que se expidan las copias que el tribunal determine y que deban enviarse a juez de primera instancia para que proceda al cumplimiento de la sentencia, so pena de que el tribunal declare desierto el recurso. Para estos efectos se tendrá en cuenta lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 356..."*

*Se confiere allí, entonces, al recurrente un término de los denominados "legales", condición que de conformidad con lo previsto en el artículo 118 ibidem, lo hace perentorio e improrrogable, término que tiene por objeto la atención de la carga de suministrar lo necesario para la expedición de las copias señaladas por el Tribunal.*

3. *Así las cosas debe concluirse que si de manera equivocada interpone el recurrente en casación el recurso de súplica contra el auto de la sala que le ordenó suministrar las expensas necesarias para expedir las copias indispensables para ejecutar la sentencia atacada, medio de impugnación que en tal caso es improcedente por mandato del artículo 363 id, dicho recurso no tiene la virtualidad de interrumpir el término de ejecutoria de la providencia cuestionada, por lo que, a pesar del mismo, esta debe cumplirse. Entender las cosas de otra manera, significaría tanto como permitirle a una de las partes que invoque en su favor su propia negligencia procesal, amén de que el gobierno de la ejecutoria de las decisiones judiciales quedara al arbitrio de los interesados; con la secuela propia de la injustificada dilación de los procesos.*

4. En el asunto sub-judice se observa que la parte recurrente en casación interpuso el recurso de súplica contra el auto del 24 de agosto



pasado, mediante el cual se adicionó de oficio el del 17 del mismo mes, en el sentido de ordenar la expedición de las copias necesarias para la ejecución de la sentencia, mandato que en su oportunidad se había omitido. Tal auto fue notificado por estado del 26 de agosto siguiente, habiendo quedado ejecutoriado el día 31 en razón de que, reiterase, la súplica indebidamente propuesta no neutralizó la ejecutoria en curso. Así mismo, el término legal de que disponía el interesado para suministrar lo necesario a fin de que se expidieran las copias ordenadas venció el 5 de septiembre, razón por la cual, para el día siguiente, el 6 de septiembre, fecha en que entró el expediente al despacho para resolver sobre la súplica propuesta, el aludido término ya se encontraba vencido. Por lo tanto, el pago hecho con tal fin el día 16 de septiembre es extemporáneo, amén de que mientras transcurrió el plazo previsto en la ley, el expediente permaneció en la Secretaría a disposición de las partes.

5. Ahora bien, como quiera que en el trámite del recurso de casación corresponde a la Corte examinar la legalidad de la actuación surtida desde su interposición hasta la concesión del mismo inclusive, resulta evidente que en este caso ha de inadmitirse el interpuesto por la parte demandada, por cuanto no ofreció prestar caución para efectos de suspender el cumplimiento de la sentencia (art. 371 inciso 5 C. de P.C.), ni suministró tempestivamente lo necesario para la expedición de las copias ordenadas por el Tribunal con miras a facilitar la ejecución del fallo (Art. 371 inciso 3o. C. de P.C.), lo que quiere decir que llegó a esta Corporación en estado de deserción.

### DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, RESUELVE:

Declárase INADMISIBLE y por consiguiente desierto el recurso extraordinario de casación interpuesto por algunos de los demandados contra la sentencia proferida el 15 de julio de 1994 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, dentro del proceso ordinario adelantado por CARMENZA ULLOA LUENGAS, MARIA OTILIA LUENGAS DE ULLOA, ANA LILIA RIOS DE CURREA, ELVIA MORALES DE SANCHEZ E ISIDRO VILLAMIL, frente a ANTONIO DE JESUS ALFONSO, MARIA DEL TRANSITO

PACHECO DE ALFONSO, JUAN EVANGELISTA SOTELO CORTES  
Y MARIA ALICIA SALAS DE SOTELO.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

*Pedro Lafont Pianetta, Nicolás Bechara Simancas, Jorge Antonio  
Castillo Rugeles, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor Marín  
Naranjo, Rafael Romero Sierra.*

## **CASACION — Cumplimiento Sentencia RECURRIDA/CASACION — Copias**

1. Distinción entre la filosofía del legislador de 1931 y el de 1970, respecto de los efectos del cumplimiento de la sentencia recurrida en casación.

2. La ley ha prescrito que, a menos de tratarse de una de las excepciones legales, o de oferta de prestación de la caución a que alude el art. 374 del C. de P. C., la interposición del recurso de casación no obstruye el cumplimiento de la sentencia, razón por la cual el recurrente siempre, de manera indefectible, debe suministrar lo indispensable para que se expidan las copias requeridas para los fines anotados, sea porque el tribunal las ordene, sea porque el propio recurrente de tal manera lo indique ante la omisión del sentenciador.

H.F.: C. C. A. Art.: 177.

## **PLAZO / EJECUCION / SENTENCIA CONTRA ENTIDADES PUBLICAS**

El plazo previsto en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo suspende la ejecución forzada de la sentencia contra las entidades públicas, más no afecta otras formas de cumplimiento de las mismas.

H.F.: C. C. A. Art.: 177.

*Corte Suprema de Justicia.— Sala de Casación Civil.* Santafé de Bogotá, D. C., dieciocho (18) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

*Magistrado Ponente: Doctor Héctor María Narango*

*Ref: Expediente No. 5205*

*Auto N°352*

Despacha la Corte el recurso de reposición propuesto por la parte demandada contra el auto del 13 de octubre del año en curso, por medio del cual se declaró inadmisble el recurso extraordinario de casación que interpuso contra la sentencia proferida el 20 de mayo de 1994 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro del proceso ordinario adelantado por FELIPE MANUEL HAWASLY DEAN, quien actúa en su propio nombre y en el de LA SUCESION DE MIGUEL Y FELIPE HAWASLY MELUK, frente al MUNICIPIO DE MONTERIA.

### ANTECEDENTES

1. El *ad quem* confirmó la sentencia proferida por el Juzgado 1º Civil del Circuito de Montería, en virtud de la cual declaró que el municipio demandado era civilmente responsable "...de haber tomado en exceso la cantidad de cuatro mil ciento trece metros cuadrados (4.113 mts.<sup>2</sup>) de terreno de la que se le entregó como dación en pago por la..." susodicha sucesión, y por tanto, lo condenó a pagar en el término de seis meses la suma de \$61.695.000,00, o en su defecto, la "devolución de la cantidad de tierra".

2. Contra tal decisión interpuso el demandado el recurso extraordinario de casación, el cual le fue concedido mediante providencia del 12 de septiembre del año en curso.

3. Empero, por medio de la providencia impugnada la Corte inadmitió el susodicho recurso en consideración de que el interesado no deprecó la expedición de las copias necesarias para ejecutar la sentencia cuestionada, conducta que le incumbía ante el silencio del Tribunal al respecto.

### FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Luego de transcribir el texto del artículo 371 del Código de Procedimiento Civil, infiere el reposicionista que el recurso de casación solo puede declararse desierto en dos casos a saber: 1) cuando el interesado no suministra las expensas que el Tribunal le indique, y 2) cuando no constituye oportunamente la caución que ofrece. Subsecuentemente, no podía la Corte inadmitir el recurso invocando una causal no prevista en la ley, puesto que si el recurrente en casación no solicita la expedición de

copias para el cumplimiento de la sentencia impugnada, tal omisión carece de sanción alguna, además que se trata de una facultad que a este se le confiere.

Coteja, igualmente, el contenido del artículo 371, en su versión original, con el texto modificado por el decreto 2282 de 1989, para concluir que la tesis que la Corte expone podría acogerse en la tarea de interpretar el primero, pero es errónea si del segundo se trata.

Agrega, para finalizar, que de conformidad con el artículo 177 del C. C. A., la sentencia condenatoria proferida en contra de una entidad pública solo puede ejecutarse 18 meses después de su ejecutoria, razón por la cual no tiene sentido ordenar la expedición de copias destinadas a su cumplimiento.

### CONSIDERACIONES.

*1. Mientras que la ley 105 de 1931 establecía de manera excepcional el cumplimiento de la sentencia recurrida en casación, efecto para el cual exigía del interesado que lo solicitara tempestivamente y que otorgara oportuna y suficiente caución para responder por las restituciones a su cargo y por los perjuicios que llegare a causar, el decreto 1400 de 1970, por el contrario, invirtió tal principio por lo que antes era la excepción pasó a constituirse en la regla general. Ciertamente, en frente de la incuestionable realidad que mostraba cómo eran las cosas las sentencias que se casaban, optó el legislador por consagrar el efecto devolutivo de la casación como regla general y sólo de manera excepcional la suspensión de los efectos de las sentencias recurridas.*

Para asegurar el cumplimiento del fallo, el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil, reformado por el decreto 2282 de 1989, le impuso al impugnante la carga de suministrar lo necesario para que se expidan las copias que a juicio del Tribunal garanticen el cabal ejercicio de los derechos del vencedor, y en el evento en que aquel omite pronunciarse en tal sentido, determinó que al recurrente incumbía deprecarlo. Ha sido tal el celo del legislador sobre este aspecto, que no solo le asignó al Tribunal la potestad de declarar desierto el recurso cuando el recurrente elude el referido imperativo de suministrar las expensas necesarias para la expedición de las copias que se le señalan (artículo 371, inciso 3º), sino que, además,

el artículo 372 *ibidem*, le atribuyó a la Corte la facultad de inadmitir el recurso cuando "...no se hayan expedido las copias en el término a qué se refiere el artículo 371...", sin distinguir si el incumplimiento de la apuntada carga obedeció a que el recurrente no la satisfizo tempestivamente, o a que no pidió del Tribunal el señalamiento que este ha debido hacer desde antes.

En consecuencia, no es correcto sostener, como lo afirma el reposicionista, que carece la Corte de competencia para inadmitir el recurso de casación en el supuesto que se comenta, toda vez que de manera terminante el artículo 372 *eiusdem* así lo dispone; este precepto, no sobra decirlo, recogió positivamente una jurisprudencia reiterada de esta Corporación.

No puede decirse, tampoco, que el legislador no impuso un término para pedir el señalamiento de las copias que se precisan para el cumplimiento de la sentencia, y que en todo caso esta es una facultad de la parte, como lo insinúa el memorialista, puesto que, de un lado, el término que el impugnante echa de menos es el previsto en el artículo 311 del C. de P. C., esto es, el que tienen las partes para pedir la edición de los autos, y de otro lado, porque en virtud de que el recurso de casación no suspende el cumplimiento de la sentencia, salvo las excepciones legales —que no son del caso—, siempre que se necesiten deben compulsarse las copias pertinentes, criterio que no depende del arbitrio del recurrente, sino del contenido y naturaleza del fallo impugnado.

*Con otros términos, la ley ha prescrito que, a menos de tratarse de una de las excepciones legales, o de oferta de prestación de la caución a que alude el artículo 371 *eiusdem*, la interposición del recurso de casación no obstruye el cumplimiento de la sentencia, razón por la cual el recurrente siempre, de manera indefectible, debe suministrar lo indispensable para que se expidan las copias requeridas para los fines anotados, sea porque el Tribunal las ordene, sea porque el propio recurrente de tal manera lo indique ante la omisión del sentenciador.*

2. En la confrontación del texto del artículo 371 en la legislación de 1971 con el de la reforma de 1989, cree encontrar el memorialista un nuevo cimiento para su inconformidad, pues estima que en el primero "...el modo imperativo en que está empleado el verbo suministrar, no dejaba ninguna posibilidad al recurrente, o se hacía el suministro o se declara-

ha desierto el recurso...”, al paso que con la reforma, “...solo puede declararse desierto el recurso, cuando el recurrente no suministra lo necesario para la expedición...” de las copias ordenadas.

Sin embargo, además de lo ya dicho, es preciso agregar que el verdadero significado de la modificación que sobre el punto introdujo el decreto 2282 de 1989, fue el de evitar los equívocos que podrían presentarse a raíz de la eventual omisión del tribunal de la orden de expedir las mencionadas reproducciones, razón por la cual, y en sentido opuesto al raciocinio del libelista, lo que la norma hace es realzar la carga del recurrente en casación en el sentido de que el silencio del ad-quem sobre el punto no lo exonera de la misma y que, por tanto, no puede ampararse en él.

*3. Finalmente, el plazo previsto en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo suspende la ejecución forzada de la sentencia contra las entidades públicas, mas no afecta otras formas del cumplimiento de las mismas.*

Ciertamente, el efecto natural de las obligaciones es que el deudor cumpla la prestación debida en forma exacta y espontánea, y solo cuando este rehuse la satisfacción de la misma puede acudir el acreedor a la coacción que le brinda el Estado a través de la ejecución forzada. Vistas así las cosas, puede entenderse, entonces, que el precitado artículo 177 solo sometió al plazo suspensivo de 18 meses el ejercicio de la acción ejecutiva, disposición que encuentra justificación en la calidad del deudor y en las gravosas repercusiones que el uso cabal de la coacción podrían acarrearle a la administración, más no el cumplimiento voluntario de la sentencia, para cuyo efecto, por el contrario, dispone la norma que se envíe “inmediatamente” una copia de la misma al funcionario encargado de ejercer las funciones de Ministerio Público ante la entidad condenada con miras a elaborar una lista actual de las providencias condenatorias para que se incluyan en las partidas presupuestales correspondientes, e igualmente, eleva a causal de mala conducta pagar más lentamente que las demás las apropiaciones destinadas a atender las condenas judiciales, unión de que consagra que las sumas líquidas reconocidas en tales sentencias devengan los intereses comerciales durante los seis meses siguientes a su ejecutoria y los moratorios después de este término, sanción esta última que carece de todo sentido si el cumplimiento espontáneo de la prestación no fuere susceptible



*por encontrarse también sometida al plazo suspensivo de los 18 meses siguientes a su ejecutoria.*

En este orden de ideas, no puede decidirse razonablemente que por no ser "ejecutable" la sentencia objeto del recurso de casación no eran necesarias las copias exigidas por el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil, además que no puede preverse que el plazo a que alude el artículo 177 del C.C.A., no venza antes de que se desate el recurso de casación propuesto.

En consecuencia, el recurso no prospera.

### DECISION

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, NO REVOCA el auto de fecha 13 de octubre pasado.

Notifíquese.

*Pedro Lafont Pianetti, Nicolás Bechara Simancas, Jorge Castillo Rugueles, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra*

## COMPETENCIA/CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA/CONFLICTO DE JURISDICCION

Competencia del consejo Superior de la Judicatura, por intermedio de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria para dirimir los conflictos de jurisdicción. Ante la situación de hecho creada por la negativa reiterada de dicho organismo a hacerlo, la Corte ha venido desatando esos conflictos.

E.F.: Art. 256 de la C. N. num. 6; 234, 229 ibídem.

## MATRIMONIO/JURISDICCION DE FAMILIA

En el presente evento, la controversia es de naturaleza de las que indica el art. 5o. numeral 12 del decreto 2272 de 1989, esto es que se trata de un proceso contencioso sobre el régimen económico del matrimonio y por ende, su conocimiento incumbe a la jurisdicción de familia.

E.F.: Decreto 2272 de 1989 art. 5 num. 12.

*Corte Suprema de Justicia.— Sala de Casación Civil—* Santafé de Bogotá, D. C., veintiuno (21) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

*Magistrado Ponente: Doctor Carlos Esteban Jaramillo Schloss.*

*Ref: Expediente No. 5252*

*Auto N°353*

Se decide el conflicto de jurisdicción suscitado entre el Juzgado 6o. Civil del Circuito de Medellín y el Juzgado 2o. de Familia de la misma ciudad, en relación con el proceso ordinario promovido por GABRIEL DE JESUS CANO MUÑOZ contra MARIA GRACIELA CANO DE CANO y MARIA GRACIELA CANO DE CANO.

**ANTECEDENTES**

1. Mediante demanda presentada ante el Juzgado Civil del Circuito de Medellín (Reparto), el demandante, **GABRIEL DE J. CANO**, solicitó principalmente que se declare la simulación absoluta del contrato de compraventa contenido en la Escritura Pública No. 1076 de junio 11 de 1993 de la Notaría Novena de Medellín, por medio de la cual su cónyuge **MARIA GRACIELA CANO DE CANO**, vendió en favor del hijo común, Humberto León Cano Cano, el inmueble descrito en la demanda, adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal existente entre el demandante y la demandada, insolventando el haber social en forma aparente, pero sin recibir contraprestación alguna en beneficio de ésta, y aludiendo por lo tanto la participación que le corresponde al demandante.

La venta se realizó sin que mediara pacto real entre los cónyuges, sin que existiera insinuación que permitiera pensar en la existencia de una donación, y por un precio correspondiente al avalúo catastral, aunque su valor comercial sea aproximadamente cinco veces el anteriormente citado. Por último señala que el bien no fue entregado al ficticio comprador, y la demandada sigue percibiendo los frutos del inmueble, a pesar de haberse celebrado la compraventa hace más de un año.

Dadas las desaveniencias existentes entre el demandante y la demandada, aquel se retiró de su hogar común, y se le ha dicho en forma personal y directa que él carece de todo derecho frente a los bienes sociales, a pesar de haber siempre cumplido con las obligaciones a su cargo.

2. Correspondió el asunto inicialmente a el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín, despacho que rechazó la demanda por considerar que en ella se discutían derechos sobre el régimen económico del matrimonio y, por tanto, según la dispone el artículo 50, numeral 12, parágrafo 1o del Decreto 2772 de 1989, "la competencia para conocer de esta clase de procesos, le fue asignada a los señores jueces de familia", a quienes en consecuencia dispuso remitir el expediente.

3. Por su parte el Juez 2o. de Familia de Medellín rechazó de plano la demanda de simulación, suscitando el conflicto negativo de competencia, y ordenando en consecuencia remitir el expediente al Tribunal Superior de Medellín.

Justificó esta decisión argumentando lo siguiente:

En su opinión, en las acciones de simulación la materia de discusión sustancial es el contrato mismo o, en otros términos, la manifestación de voluntad como elemento para la validez y existencia del negocio jurídico simulado que afecta a terceros de buena fe.

Señala que en el presente caso no se discute el régimen patrimonial de los cónyuges, sino la manifestación de voluntad de uno de ellos declarada en un negocio jurídico y su real intención de contratar. Y si bien en la demanda se toma en consideración la intención que se tuvo de menoscabar el activo de la sociedad conyugal vigente, la referencia a este hecho simplemente busca dar legitimidad en la causa por activa, por cuanto esta acción solo puede ser impetrada por quien demuestre un interés jurídico en que se declare la simulación del conyugio público.

Resulta que en el caso de autos no se venían los derechos derivados de la sociedad conyugal, máxime cuando esta en ningún momento se pretende liquidar. Por tanto, dadas las características de la sociedad conyugal, que nace por el hecho de contraer matrimonio pero que se mantiene en suspenso en cuanto a su activo y pasivo hasta tanto no entre a disolverse, momento en que se discuten los bienes que le conforman, y teniendo presente que en el presente caso no se pone en consideración la disolución y liquidación de la sociedad, el conocimiento de la citada demanda no debe ser avocado por dicho juzgado de familia.

4. El Tribunal Superior de Medellín remitió a su turno lo actuado a esta corporación, por considerarse incompetente para resolver el conflicto, por darse éste entre un juez civil y uno de familia, con respecto al límite de sus atribuciones, contienda que por consiguiente no puede concebirse como de competencia, sino de "jurisdicción" y ante la negativa de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dirimir el asunto, corresponde a la Corte asumirlo.

### CONSIDERACIONES

*1. Ya en repetidas oportunidades ha expresado la Sala que conflictos como en el que ahora se ocupa, son de jurisdicción y que, por tanto, el órgano competente para dirimirlos es el Consejo Superior de la*

*Judicatura, por intermedio de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria (artículo 256, numeral 6 C. Nal.). A pesar de ello, ante la situación de hecho creada por la negativa reiterada de dicho organismo a hacerlo, la Corte ha venido desatando esos conflictos, como máximo Tribunal que es de la Justicia Ordinaria (artículo 234 C. N.), bajo una doble consideración, a saber: La primera, que así lo exigen la celeridad y la economía procesales, de una parte y, además, porque negarse a decidirlos equivaldría a dejar un proceso sin juez que lo resuelva, lo que resulta en pugna con el derecho de todas las personas "para acceder a la administración de justicia" (art. 229 C. N.), derecho este fundamental para la convivencia pacífica de los asociados (Autos 2 y 15 de octubre de 1992); y la segunda, que para hacerle frente a aquella situación, el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil —contra lo que se ha sostenido por esta misma Sala en algunas decisiones recientes de mayoría con apoyo en respetables argumentos que no son del todo convincentes— no ofrece solución apropiada, porque tal precepto, como se sabe, solo tiene el alcance de asignar a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial el conocimiento de los conflictos comunes de competencia entre autoridades de una misma especialidad jurisdiccional, y solamente de ellos, luego no se ocupa de las llamadas colisiones de "jurisdicción" pues siguiendo lineamientos constitucionales vigentes al momento de su promulgación y que no son distintos a los que orientan en la materia a la Carta Política de 1991, el referido precepto de la codificación civil da por descartado que, ante esa modalidad de contiendas, es autoridad orgánicamente distinta la llamada por el ordenamiento positivo para solucionarlas.*

Así, entonces, una determinación en el sentido que acaba de dejarse indicado, por fuera de tener sólido soporte constitucional y haberse acogido no hace mucho tiempo en un buen número de providencias de esta Sala que hoy de nuevo se prohíjan, le permite a la Corte brindarle a problemas de delicadas aristas como el que estos autos reflejan, un discernimiento consistente y uniforme cuyas benéficas consecuencias para la prestación del servicio de justicia en el ámbito de los litigios civiles, de familia y agrarios, son a todas luces evidentes.

2. Sentado lo anterior, ha de verse primeramente que mediante la demanda incoada se pretende obtener la declaración de simulación de un contrato de compraventa con miras a proteger los derechos que el demandante se atribuye en el haber de la sociedad conyugal existente entre él y la

demandada. Así pues las disposiciones que cuadra aplicar a la causa para pedir invocada en los términos que se dejan reseñados para apoyar la acción deducida, en últimas referida, según queda dicho, a la conformación de haber de la sociedad conyugal y la distribución de gananciales en una eventual liquidación, sin mayor dificultad se infiere *que se trata de una controversia de la naturaleza de las que indica el artículo 5o. numeral 12 del Decreto 2272 de 1989, esto es que se trata de un proceso contencioso sobre el régimen económico del matrimonio y por ende, su conocimiento incumba a la jurisdicción de familia, en este preciso caso al Juzgado Segundo de Familia de la ciudad de Medellín.*

### DECISION

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, declara que la jurisdicción señalada por la ley para conocer de la demanda identificada en la referencia es la de familia. En consecuencia, se ordena remitir el expediente al Juzgado Segundo de Familia de Medellín para que prosiga con el trámite correspondiente.

Comuníquese así mismo lo decidido al Juzgado Sexto Civil del Circuito de dicha ciudad.

Notifíquese

*Pedro Lafont Pianetta, Nicolás Bechara Simancas, Jorge Castillo Rugelas, Carlos Esteban Jaramillo Schiavo, Héctor María Narango, Rafael Romero Sierra*

## CONFLICTO DE COMPETENCIA / COMPETENCIA- Concepto, Factores

1) Noción de "competencia".

2) Para determinación de la competencia, el legislador acudió entre otros a los siguientes factores: subjetivo, objetivo, funcional y territorial. Carácter absoluto de los tres primeros y carácter relativo de éste último.

Igual sentido: auto No. 048 del 26 de Abril de 1988, no publicado.  
F.F.: C. de P.C. Art.: 23.

## FUERO ESPECIAL / COMPETENCIA TERRITORIAL. REGULACION DE VISITAS

Fuero especial de competencia territorial en lo que toca con los procesos de custodia, cuidado personal y regulación de visitas de menores de edad

F.F.: DECRETO Num.: 2272 Año: 1989 Art.: 8.

## COMPETENCIA PRORROGADA

En el presente caso, la competencia estaba tácitamente consolidada como consecuencia de la conducta procesal observada por el demandado.

F.F.: C. de P.C. Art.: 437, 144 num. 5.

*Corte Suprema de Justicia — Sala de Casación Civil — Sanafé de Bogotá, D.C. : noviembre veintiuno (21) de mill novecientos noventa y cuatro (1994).*

Magistrado Ponente: *Doctor Pedro Lafont Pianetta*



Referencia: Expediente No. 5247

Auto Nº 354

Decide la Corte el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados Tercero de familia de Cali y el Juzgado Promiscuo Municipal de "La Victoria" (Valle), con ocasión del conocimiento del proceso de regulación de visitas respecto de la menor FÁTIMA EUGENIA GONZÁLEZ VARGAS, promovido por la Defensoría Primera de Familia de Cali, en contra de HUGO LEÓN GÓMEZ POSSO.

### *1. ANTECEDENTES*

1. La defensora Primera de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, regional de Cali, obrando en defensa de los intereses de la menor Fátima Eugenia Gómez Vargas, con escrito presentado el 15 de Abril de 1994 (folios 3 a 6, C-1) demandó ante el juez de Familia de la ciudad de Cali la regulación de las visitas para la madre de la menor y en contra del padre extramatrimonial de la misma, ciudadano Hugo León Posso.

2. Basó las súplicas de su demanda la parte actora en los hechos que así se resumen:

2.1. Que ante esa defensoría compareció la señora Gloria Elena Vargas Niño, quien expuso que convivió durante 10 años aproximadamente en unión marital de hecho con Hugo León Gómez Posso, unión en la cual procrearon a la niña Fátima Eugenia Gómez Vargas, quien actualmente cuenta con 11 años de edad.

2.2. Que por desaverencias entre la pareja se desintegró la comunidad de vida, quedando la señora Gloria Elena Vargas con la custodia y cuidado personal de la niña.

2.3. Posteriormente los padres ante los inconvenientes surgidos por el cuidado y tenencia de la menor, acordaron verbalmente que ésta quedara bajo el cuidado personal del padre con el derecho de la madre a visitarla cada 15 días, pernodiendo con ésta el día sábado con regreso el domingo.

2.4. Dicho acuerdo se cumplió en un principio, pero como continuaron los conflictos entre la pareja, llegó el momento en que Hugo León Gómez

el padre, ya no permitió a la madre el derecho a visitar a la hija, razón por la que aquella acudió a la Defensoría de Familia para reclamar su derecho.

2.5. Por último se señala en el libelo que la menor Fátima Eugenia se encuentra en la actualidad bajo el cuidado y custodia personal del padre.

3. Admitida a trámite la demanda de ésta y sus anexos se ordenó correr traslado al demandado, quien una vez enterado, mediante apoderado le dio contestación manifestando no oponerse a las pretensiones, pero supeditando las visitas a la decisión que tome la menor. Proponiendo además la excepción de fondo que denominó "Incompetencia de Jurisdicción", fundada en el hecho de que el demandado y la menor Fátima Eugenia que bajo su cuidado se encuentra, no residen en la ciudad de Cali, sino en la población de "La Victoria" y concretamente en la carrera 9 No. 8-26 de esa localidad, lugar en donde la madre visitó a la hija las veces que lo hizo. Excepción ésta que consideró el juzgado no dar trámite por tener el carácter de previa y en este tipo de procesos tales medios defensivos no caben.

4. En desarrollo del trámite ordenado en la ley procesal y concretamente dentro de la audiencia de conciliación, el juzgado apoyándose en lo dispuesto en el artículo 148 del C. de P.C., se declaró incompetente territorialmente para continuar conociendo del proceso, arguyendo que es un hecho aceptado por las partes que la menor Fátima Eugenia Gómez Vargas tiene su domicilio y residencia en la población de "La Victoria" (Valle), razón por la que previas las respectivas anotaciones, ordenó el envío del expediente al juzgado promiscuo municipal de dicha localidad, al que consideró competente.

5. Recibidas las diligencias por el Juzgado Promiscuo Municipal de "La Victoria" (Valle), éste mediante auto calificado el 7 de octubre de 1994, declaró igualmente su incompetencia para conocer del asunto, sosteniendo en síntesis que si bien el artículo 80. del Decreto 2272 de 1989, determina que en los procesos de regulación de visitas en que el menor sea el demandante, la competencia territorial corresponde al juez del domicilio de éste, ello no ocurre aquí pues es la madre la demandante y la niña está bajo la custodia del padre que es el demandado, y que, además establecida la relación jurídico procesal, aplicando el principio de la *Perpetuatio Jurisdictionis*, la competencia ya no puede ser variada, salvo

en los casos que expresamente señala el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil.

6. Como se ha cumplido el trámite previsto en el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, procede la Corte a dirimir el conflicto descrito y en orden a hacerlo.

## II. CONSIDERACIONES

*1. Conocido es que la competencia es la facultad que por autoridad de la ley tiene un juez para administrar justicia respecto a específicos asuntos y en determinado ámbito territorial.*

*1.1. Para determinación de la competencia el legislador acudió entre otros, a los siguientes factores: subjetivo, objetivo, funcional y territorial, vale decir atendiendo la naturaleza del negocio, a la calidad de las partes, a las funciones que el juez está llamado a ejercer y al lugar donde debe ventilarse.*

*La competencia en razón de los factores subjetivo, objetivo y funcional tiene carácter absoluto, pues están establecidas en interés general, por lo que son de orden público y como tales se salen del arbitrio de los litigantes. No sucede lo mismo en cuanto a la distribución territorial, de la que se ha sostenido que no tiene carácter absoluto sino relativo, porque teniendo su inspiración prevalente privada "en principio y salvedad hecha de preceptos imperativos que estatuyan en sentido opuesto, lo común es que por la fuerza de la prórroga tácita se puedan hacer de lado y llegar a conocer del proceso validamente, un funcionario judicial diferente al señalado por la ley como competente". (auto No. 048 del 26 de abril de 1988, no publicado).*

*1.2. Ahora bien, en lo que toca con los procesos de custodia, cuidado personal y regulación de visitas de menores de edad, el artículo 80. del Decreto 2272 de 1989, fija un fuero especial de competencia territorial, el cual está determinado por el domicilio que tenga el menor demandante al momento de la presentación de la demanda, competencia así atribuida en favor de éste, a fin de facilitar el cumplimiento de la custodia, el cuidado y especialmente la regulación de visitas en el sitio en que el menor se desenvuelve, porque resulta ilógico obligar a éste a trasladarse a lugar diferen-*

te para que el progenitor que no lo tiene bajo su cuidado pueda cumplir el derecho-deber de visitarlo.

2. En el caso de autos es cierto como lo apreció el Juez Promiscuo de Familia de Cali, que no se discute en este asunto que el domicilio y residencia de la menor Fátima Eugenia Gómez Vargas es la población de "La Victoria" (Valle), circunstancia que fijaría la competencia en el juez de dicha localidad con fundamento en lo dispuesto en el citado artículo 8º. del Decreto 2272 de 1989. Sin embargo, avocado el conocimiento por el juez de Cali, el demandado debió alegar tal incompetencia en la oportunidad que la ley procesal para ello le concede, cual es, ante la prohibición del legislador de proponer excepciones previas en este tipo de procesos, los hechos que las configuran, alegarlos mediante el recurso de reposición del auto que admitió la demanda (Art. 437 del C. de P.C.), lo que el demandado no hizo, por lo que la competencia estaba tácitamente consolidada como consecuencia de la conducta procesal observada por el demandado, dejando de aplicar así el juzgado lo dispuesto en el numeral 5º. del artículo 144 *ibidem*, resultándole de esta manera injurídico que en el curso de una actuación oral y cuando la oportunidad para alegar la falta de competencia territorial había precluido, el Juez Tercero de Familia de Cali haya decidido apartarse del conocimiento del proceso y enviarlo al Juez Promiscuo Municipal de "La Victoria" (Valle). Luego, en tal evento ha llegado a esta Corporación un conflicto de competencia que, por su irregular formación, resulta ser meramente aparente. Pues habiéndose asumido y radicado definitivamente la competencia por parte del Juzgado Tercero de Familia de Cali, mal podía, como de hecho sucedió, generarse posteriormente en forma válida y eficaz un conflicto sobre esa competencia. De allí que deba la Corte abstenerse de dirimir este aparente conflicto, señalando la perpetuidad de competencia adquirida por el precipitado despacho.

### III. DECISIÓN

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE:

PRIMERO: Abstenerse de dirimir el aparente conflicto de competencia entre el Juzgado Promiscuo Municipal de "La Victoria" (Valle) y el Juez Tercero de Familia de Cali, pues corresponde al despacho últimamen-

te citado la competencia para seguir conociendo de este proceso de regulación de visitas promovido por la Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar regional de Cali en defensa de los intereses de la menor Fátima Eugenia Gómez Vargas, contra Hugo León Gómez Posso.

SEGUNDO. Remítase el expediente a dicho despacho judicial, haciéndole conocer esta decisión al juzgado promiscuo municipal de "La Victoria" (Valte).

Notifíquese.

*Pedro Lafont Pianetta, Nicolás Bechara Simancas, Jorge Custillo Rugeles, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra.*

**CONGRESO / ENTIDAD DESCENTRALIZADA /  
ESTABLECIMIENTO PUBLICO / NACION / PERSONA  
JURIDICA / IDENTIDAD DE PARTES**

- 1) Atribución constitucional del Congreso, para determinar la estructura de la administración nacional.
- 2) Clasificación y características de las entidades descentralizadas del orden nacional. Distinción entre estas y la Nación.
- 3) Carácter de establecimiento público de que goza el Fondo Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación Función de esta entidad a que se refiere el artículo 2o., literal j) del Decreto-Ley 0036 de 1992.
- 4) Inexistencia de identidad de partes entre la Nación y el precitado fondo, precitada entidad.

F.H.: C. N. (1886) Art.: 76 Numeral.: 9 y 10; C.N. Art.: 150 Numeral.: 7; DECRETO-LEY Num.: 1050 Año: 1968; DECRETO Num.: 3130 Año: 1968; LEY Núm.: 153 Año: 1887 Art.: 80; DECRETO-LEY Num.: 0036 Año: 1992 Art.: 2; LEY Num.: 1 Año: 1991 Art.: 37.

*Corte Suprema de Justicia — Sala de Casación Civil — Santafé de Bogotá, D.C., noviembre veintidós (22) de mil novecientos noventa y cuatro (1994).*

Referencia: Expediente No. 5066.

Auto N° 355

Se decide por la Corte el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA S.A. contra el auto de 27 de octubre de 1994, visible a folio 97 de este cuaderno.

### *1. ANTECEDENTES*

1. Mediante demanda que obra a folios 11 a 30 de este cuaderno, el Fondo Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, interpuso el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Civil—, el 15 de mayo de 1992, mediante la cual se decidió el recurso de casación que interpuso la parte demandada contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá el 14 de septiembre de 1992, en el proceso ordinario promovido por La Flota Mercante Grancolombiana S.A. contra la Empresa Puertos de Colombia.

2. En memorial que obra a folios 90 y 91 del cuaderno citado, el apoderado de la Flota Mercante Grancolombiana S.A. solicitó a esta Corporación declarar que operó la "preclusión de la acción por consumación" por cuanto "la misma parte representada por el mismo apoderado presentó con anterioridad un recurso de revisión con las mismas causas, el cual fue rechazado por la Corte", en auto de 3 de julio de 1994.

3. Prestada la caución que para los efectos señalados por el artículo 383 del Código de Procedimiento Civil fue exigida al recurrente y, recibido que fue el expediente contentivo del proceso en el que se dictó la sentencia objeto de este recurso de revisión, la Corte, en auto de 27 de octubre de 1994 (fl. 97), admitió la demanda con la cual se interpuso el recurso extraordinario de revisión aludido y, en auto de esa misma fecha, visible a folios 98 y 99, denegó la solicitud para que se declarara la preclusión por consumación para interponerlo, por cuanto, examinada la demanda con la cual se interpuso este recurso y la que fue rechazada por la Corte (fls. 32 a 51, en copias), se observó que en la una el recurrente es el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, y, en la otra es recurrente la Nación, representada para el efecto por el ministro de Obras Públicas y Transporte.

### *RAZONES DEL RECURRENTE EN REPOSICIÓN*

En memorial que obra a folios 110 a 112 de este cuaderno, el apoderado de la Flota Mercante Grancolombiana solicita se revoque el auto admisorio del recurso de revisión, e insiste en que operó ya la "preclusión por consumación" para formularlo. Tal afirmación la sustenta bajo



la argumentación de que la primera demanda de revisión fue presentada por la Nación, como "sucesora de la extinguida Empresa Puertos de Colombia" y conforme al poder conferido para ello por el ministro de Obras Públicas y Transporte, al paso que la nueva demanda de revisión fue presentada por el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, en virtud del poder conferido para ello a un profesional del derecho por el "Director General" y representante legal del Fondo mencionado. Siendo ello así, a juicio del recurrente, en ambas oportunidades se impetra la revisión de la misma sentencia por la misma parte, pues, en uno y otro caso, el recurso se ha formulado por el "ente que reemplaza a la Empresa Puertos de Colombia", es decir, por la misma parte.

### CONSIDERACIONES

1. Como es suficientemente conocido, bajo el imperio de la Constitución de 1886, con las modificaciones que al respecto fueron introducidas por el acto legislativo No. 1 de 1945 y el acto legislativo No. 1 de 1968, artículo 11, correspondía al Congreso "hacer las leyes" y, por medio de ellas, ejercer, entre otras, las funciones de "determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos", así como la de "expedir los estatutos básicos" de las entidades descentralizadas (artículo 76, numeral 9o. y 10o., Constitución Nacional derogada), atribuciones éstas que la Constitución de 1991 atribuyó igualmente al Congreso, conforme a lo dispuesto por el artículo 150, numeral 7o.

2. Así mismo, es de conocimiento público que *mediante los Decretos-leyes 1056 y 3130 de 1968, se reguló lo atinente a las entidades descentralizadas del orden nacional y se expidió el Estatuto Orgánico de ellas, clasificándolos en establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y empresas de economía mixta.*

3. *Tales entidades, como características comunes, tienen las de estar dotadas de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio; esto es, que no pueden confundirse en ningún caso con la Nación, actúan en forma independiente pero coordinada con la administración central, que ejerce sobre ellas tutela administrativa en los términos señalados en la ley según se trate de entidades adscritas o*

*vinculadas a un ministerio determinado, y su patrimonio es diferente del de La Nación*

4. *Por ministerio de la ley La Nación es persona jurídica, por haberlo así dispuesto el artículo 80 de la Ley 153 de 1887. Ello significa, entonces, que para todos los efectos, como persona de derecho público no puede ser confundida con otras personas también creadas por la ley, cual sucede con los establecimientos públicos, creados por el legislador para desempeñar determinadas funciones administrativas o para la prestación de un servicio público específico.*

5. Aplicadas las nociones anteriores al caso *sub-lite*, encuentra la Corte que el recurso de reposición interpuesto por la Flota Mercante Grancolombiana contra el auto visible a folio 97 de este cuaderno no puede prosperar, como quiera que:

5.1. El Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, creado por el Decreto-ley 0036 de 1992, en virtud de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de La República por el artículo 37 de la Ley 1a. de 1991, es un establecimiento público, persona jurídica distinta de la Nación, cuyo objeto fue señalado expresamente por el artículo 2o. del decreto citado.

5.2. *Conforme al mencionado artículo 2o., literal j) del Decreto-ley 0036 de 1992 (tenor 3), el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, es la entidad creada por el legislador para "ejercitar o impugnar las acciones judiciales y administrativas necesarias para la defensa y protección de los intereses de la Nación, de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, y del Fondo".*

5.3. Siendo ello así, a las claras aparece que no asiste la razón al recurrente en reposición en su aseveración de que existe identidad de partes entre la Nación y el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, y, por consiguiente, no puede predicarse que exista "preclusión por consumación" respecto de la formulación del recurso de revisión a que se refieren la demanda presentada por aquella y cuya copia obra a folios 32 a 51 de este cuaderno, rechazada por la Corte en auto de 3 de junio de 1994 (fls. 53 a 55, en copia) y la demanda presentada por el Fondo mencionado (fls. 11 a 30 de este

*cuaderno), que es un establecimiento público con personería jurídica distinta a la de la Nación.*

### DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado, RESUELVE:

NO REPONER el auto de 27 de octubre de 1994 visible a folio 97 de este cuaderno, mediante el cual se admitió la demanda presentada por el FONDO PASIVO SOCIAL DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA, en liquidación, para interponer el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Civil—, el 15 de mayo de 1992, mediante la cual se decidió el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, el 14 de septiembre de 1992, en el proceso ordinario promovido por la FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA S.A. contra la EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA.

En firme este auto, vuelva el expediente al Despacho.

Notifíquese.

*Pedro Lafont Planetta.*

## EXPEDIENTE-Remisión / CONSTANCIA

1) El C. de P.C., en su artículo 132, consagra dos vías para la remisión de expedientes.

2) No es la ausencia de la mera constancia la determinante de la sanción, sino el incumplimiento de las formalidades requeridas legalmente para elegir una vía distinta de la ordinaria para la remisión del expediente, el manantial de la pena respectiva. La constancia es apenas una prueba de que para tal efecto se cumplieron todas esas formalidades.

E.F.: C. de P.C. Art.: 132.

*Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - Santafé de Bogotá, veintitrés (23) de noviembre de mil novecientos noventa y tres (1993).*

Magistrado Ponente: *Dr. Rafael Romero Sierra.*

Expediente No. 5118

Decídese el recurso de reposición interpuesto por el demandante contra el auto de 20 de octubre del año en curso, mediante el cual esta Corporación inadmitió el recurso de casación interpuesto por el mismo contra la sentencia de 7 de junio del presente año, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Rionacha en este proceso ordinario de Moritz Goldringer Galsberg contra Mohamed Ahmad Raia.

### *I. FUNDAMENTOS DEL RECURSO.*

Luego de relacionar las actuaciones que desembocaron en la inadmisión del aludido recurso extraordinario, el recurrente presenta como apoyo

de su gestión impugnativa los argumentos que seguidamente se compendian:

a) Que del contenido del artículo 132, cuyo texto reproduce, se establece que hay dos maneras para remitir el expediente a lugar diferente de la sede del despacho judicial que conoce del asunto, a saber: una, por correo ordinario "... caso en el cual deben pagarse en la Oficina Postal los portes de ida y regreso y si no se pagan se declara desierto el recurso"; y otra, por un medio más rápido "... caso en el cual, como se dice en el auto recurrido, el impugnante debe manifestarlo así al Secretario del Tribunal ... *documental o verbalmente*... entregándole... el valor total del porte..., de lo que se deja constancia, sin que en parte alguna del art. 132 del C.P.C. esté prevista una sanción por la omisión de tal constancia", por lo que frente al contenido de los oficios 759 y 818 del Tribunal de Riohacha (folios 19 y 29 del cuaderno de la Corte), "... ninguna duda puede quedar, ni es objeto de discusión, que el recurrente solicitó el envío del expediente por medio más rápido y *pagó los portes*, completos y en tiempo, de ida y regreso", en virtud de las siguientes deducciones:

"Lo primero (solicitud de envío rápido) porque el pago no tiene sentido sin la petición. Sin la solicitud de envío no podría explicarse el pago de los \$30,000.00. ¿Para qué pagaba la parte actora \$30,000.00 a la secretaría encargada del Tribunal de Riohacha, si no para que enviara el expediente rápidamente? No se necesita un esfuerzo intelectual mayúsculo para realizar tan elemental inferencia y llegar a tan obvia conclusión. (art. 249 C.P.C.)".

b) Que respecto del contenido del inciso 4o. del artículo 132 del Código de Procedimiento Civil, cuyo tenor igualmente transcribe, "tres preguntas deben contestarse sobre el contenido de esta disposición, para continuar concluyendo la ilegalidad de la providencia recurrida", a saber:

"¿Puede solicitarse verbalmente el envío del expediente por medio diferente al correo ordinario? Si. Así lo reconoce la Corte, la solicitud no tiene que ser escrita. La parte interesada puede hacerla verbalmente, como ocurrió en este y, por lo tanto, por proceder así, no puede ser sancionada.

"2. A quién corresponde colocar la constancia escrita de la solicitud verbal? Sin duda alguna al Secretario del Tribunal. Si la parte intere-

sada puede hacer verbalmente la solicitud es al Secretario del Tribunal al que corresponde dejar la constancia escrita de haber recibido dicha solicitud verbal.

"Tan es así que de acuerdo con el art. 71 No. 7 del C.P.C., un deber de las partes y sus apoderados es ... Abstenerse de hacer anotaciones marginales o interlineadas, subrayados o dibujos de cualquier clase en el expediente, so pena de incurrir en multa de un salario mínimo mensual...

"... ¿Qué sanción está prevista en la ley para el caso que no se coloque la constancia de petición verbal de envío del expediente por medio especial? Ninguna. Esta respuesta resulta con toda claridad de los incisos 3 y 4 del art. 132 que copiamos nuevamente.

"(...)".

c) Que "la sanción que consiste en declarar desierto o inadmisibile el recurso de casación está prevista únicamente en el inciso tercero del art. 132 del C.P.C., y solamente para el caso en que "... no se han pagado en su totalidad los portes", por cuanto "en el inciso cuano, que es el aplicable a este caso, no está contemplada ninguna sanción y menos para el caso en que el secretario del Tribunal no deja la constancia allí prevista, circunstancia que demuestra palmariamente la manifiesta ilegalidad del auto anulado", pues "la ley no dice, en parte alguna que si falta la constancia debe declararse desierto el recurso o inadmitirse por la Corte. Si el legislador hubiese pretendido que así fuera, expresamente el art. 132 del C.P.C. diría que la falta de dicha constancia traerá como consecuencia la inadmisión del recurso, pero eso no dice la norma citada (art. 27 C.C.)".

Puntualiza que "la falta inicial de la constancia del inciso 4 del art. 132 del C.P.C. es una simple irregularidad (parágrafo del art. 140 del C.P.C.), no imputable a la parte interesada; irregularidad que ha quedado saneada con las respuestas recibidas del Tribunal de Rionacha, sin que esté prevista en la ley una sanción para la omisión y menos tan drástica como la inadmisión del recurso de casación, porque las sanciones no se pueden aplicar análogamente, como equivocadamente se hace en el auto recurrido".

"Así las cosas —prosigue el recurrente— la sanción que se pretende imponer es ilegal; pero además es injusta, porque se está imponiendo a una

parte inocente de la omisión, en la medida en que el recurrente, como se explicó atrás, no es el obligado a dejar tal constancia y la omisión ha sido reconocida o si se quiere confesada por el Tribunal de Rionhacha como suya, no del recurrente, al decir en el folio 759 (folio 19) que "... según recibo archivado... el doctor... apoderado recurrente en casación... depositó en este Despacho en junio de 1994 la suma de TREINTA MIL PESOS M/C (\$30.000.00) para el envío y regreso del proceso a esa Corporación, y por olvido involuntario no se anexó dicho recibo al informativo...", remitiendo después, con oficio 818 "... la suma de TRES MIL PESOS M/L (\$3.000.00) para el porte de devolución..." de tal manera que no pueden quedar dudas al respecto".

d) Finalmente, aduce que como "... lo ha aceptado la Corte y todos los Tribunales del país en múltiples casos..." y aún en el mismo auto recurrido, "las partes no tienen por qué perjudicarse de las omisiones o inexperiencia de los funcionarios judiciales (Secretaría encargada del Tribunal de Rionhacha)", y que si "... inicialmente no se dejó la constancia del inc. 4 del art. 132 del C.P.C. es un hecho no imputable a la parte, que se presentó por circunstancias ajenas al recurrente, de las cuales no puede derivar circunstancias adversas y, en cualquier caso, es una irregularidad para la cual no está prevista una sanción"; que, además, "la parte recurrente en casación desarrolló una conducta diligente, solicitando verbalmente al Secretario del Tribunal el envío del expediente por medio más seguro y pagando oportunamente los portes de ida y regreso, cumpliendo de esta manera con todas sus cargas".

### CONSIDERACIONES

1. El argumento cardinal de la impugnación, según se establece de la síntesis precedente, radica en que la ley procesal civil no establece ninguna sanción para la parte recurrente, o al menos, la deserción o inadmisión del respectivo recurso, cuando ésta, acogiéndose al sistema previsto en el numeral cuarto (4o.) del artículo 132 del Código de Procedimiento Civil, omite el cumplimiento de los requisitos allí exigidos para la remisión de expedientes a lugar distinto de la sede del despacho judicial que conoce del asunto correspondiente, en la medida en que se estima que la pena consagrada en el aludido precepto sólo opera en el evento contemplado en el inciso segundo (2o.), es decir, para cuando, dentro del sistema ordinario de remisión, la parte obligada al pago del porte, no lo hace "... dentro de los



diez días siguientes..." al de la llegada del expediente a la oficina postal respectiva, con estribo en que "... en materia de sanciones —ha dicho la Corte— como en asuntos de nulidad, el criterio y las normas sobre el particular, según lo tiene establecido la jurisprudencia y la doctrina, son de carácter restrictivo y por eso el principio de analogía jamás tiene incidencia en esas materias. Quiere lo anterior decir que el juzgador debe ceñirse estrictamente, cuando aplica una sanción, al texto de la norma que la impone, sin poder deducir nunca consecuencias que la hagan más severa, porque de proceder así, el juzgador impondría o agravaría una sanción que no quiso imponer ni agravar el legislador..." (CSDJ, Cas. Civ. Sentencia de 28 de junio de 1963, M.P. Enrique López De la Pava).

2. El precitado argumento carece de fundamento legal si se tiene en cuenta que el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 132, al consagrar dos vías para la remisión de expedientes, edificó sobre la primera, denominada ordinaria en virtud del medio elegido para tal efecto, toda la estructura requerida para tal finalidad, señalando los principios generales de tal forma de remisión, como la oficina receptora, los plazos para el pago oportuno de los portes, y las consecuencias derivadas del incumplimiento de esta última obligación.

Así, se dispuso en el inciso primero del mencionado artículo 132 *ibídem* que "la remisión a un lugar diferente se hará por correo ordinario"; en el inciso segundo del mismo precepto que "la parte a quien corresponda pagar el porte deberá cancelar su valor de ida, y regreso en la respectiva oficina postal, dentro de los diez días siguientes al de la llegada a ésta del expediente o de las copias..."; y, en el inciso tercero que "si pasado ese término no se han pagado en su totalidad, el jefe de dicha oficina los devolverá al juzgado remitente con oficio explicativo, y el juez declarará desierto el recurso si fuere el caso, por auto que sólo tiene reposición".

3. Se previó, sin embargo, la posibilidad de emplear un medio más eficaz que el correo ordinario, que al mismo tiempo ofreciera suficientes garantías para la remisión de expedientes, consagrada en el inciso cuarto del artículo en cita, en virtud de la cual "cuando una parte solicite al secretario el envío a otro lugar por el medio más rápido que ofrezca suficientes garantías, deberá entregarle a aquel la totalidad del valor del porte, dentro de los tres días siguientes al de la ejecutoria del auto que dispuso la remisión, de lo cual se dejará constancia en el expediente".

alternativa sometida, desde luego, como no podría ser de otra manera, a las consecuencias adversas que el incumplimiento de las formalidades requeridas para su utilización, se habían previsto para la general, entre ellas, la declaración de deserción del correspondiente medio impugnativo, como lo pone de manifiesto el celo del legislador al regular de manera, por demás exhaustiva, la forma y término en que debía acudirse a esa opción, determinando que la remisión de expedientes por vía distinta de la ordinaria debía estar precedida de una "... solicitud al secretario...", para la remisión de expediente por "... el medio más rápido que ofrezca suficientes garantías", formulada "... dentro de los tres días siguientes al de la ejecutoria del auto que dispuso la remisión...", de lo cual "... se dejará constancia en el expediente".

4. Es claro, entonces, que no es la ausencia de la mera constancia la determinante de la sanción, sino el incumplimiento de las formalidades requeridas legalmente para elegir una vía distinta de la ordinaria para la remisión del expediente, el monto de la pena respectiva; y que la constancia es apenas una prueba de que para tal efecto se cumplieron todas esas formalidades, las que en el presente caso no aparecen cabalmente satisfechas, pues la constancia obrante al folio 19 de este cuaderno tan sólo da cuenta de que el mandatario judicial de la parte actora "... depositó en este despacho en junio 17 de 1994 la suma de TREINTA MIL PESOS (\$30.000.00) para el envío y regreso del expediente a esa Corporación y por olvido involuntario no se anexó dicho recibo al informativo", de lo cual no puede deducirse, con absoluta certeza, que simultáneamente hubiese elevado petición alguna para que el expediente se remitiera por camino diferente del ordinario, por cuanto el olvido involuntario allí confesado no se refiere a constancia alguna en el sentido indicado, sino al acompañamiento del recibo expedido por la suma depositada.

5. De manera que sigue vigente la consideración de que el mandatario judicial del demandante no elevó petición, escrita o verbal, para que la secretaria del Tribunal remitiera el expediente por un medio más rápido que ofreciera suficientes garantías, pues de ello no hay prueba alguna en el expediente y la constancia expedida tan sólo dice referencia al pago de la suma de dinero para la remisión del mismo, sin que sea procedente recurrir al sistema de la inferencia para dar por cumplida tal formalidad, pues al respecto no puede quedar duda alguna, razón por la cual el único medio de prueba admisible para tal efecto es la constancia

que sobre el particular sienta la secretaría del Tribunal, especialmente cuando la petición es verbal.

### *II. Decisión*

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, no reponc el auto de fecha precitada.

Notifíquese.

*Pedro Lafont Pianeta, Nicolás Bechara Simancas, Jorge Castillo Rugeles, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra.*

## **PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL.—Causales**

Las causales que permiten presumir la existencia de paternidad extramatrimonial y en virtud de las cuales se autoriza su declaración judicial, son autónomas e independientes unas de otras.

Igual sentido: Sentencia 11 de febrero de 1987, ordinario Tño Nicolás Cadena contra Nicolás Liévano Aguirre como heredero de Isidalecio Liévano Aguirre, G.J. CLXXXVIII, pág. 27.

F.F.: LEY Núm.: 45 Año: 1936 Art.: 4; LEY Núm.: 75 Año: 1968 Art.: 6.

## **RELACIONES SEXUALES /CONCEPCION**

Finalidad de esta causal —relaciones sexuales— que autoriza la declaración judicial de filiación paterna. La ley 75 de 1968, modificando lo que en el punto establecía el numeral 4o. del art. 4 de la Ley 45 de 1936, concede efectos jurídicos a las simples relaciones sexuales llevadas a cabo durante la época en que se presume realizada la concepción, sin requerir que aquellas revistan necesariamente condiciones de notoriedad y estabilidad.

Igual sentido: Sentencia 11 de septiembre de 1972 G.J.T. CXLIII, pág. 146.

F.F.: LEY Núm.: 75 año: 1968; LEY Núm.: 4 Año: 1936 Art.: 4 Numeral: 4.

## **VIOLACION NORMA SUSTANCIAL.—Vía Indirecta ERROR DE HECHO Y DE DERECHO**

1. La violación indirecta de norma de derecho sustancial, puede ocurrir cuando el fallador en la apreciación de las pruebas erra por equivocación de hecho o de derecho en esa actividad. En qué consiste cada uno de estos errores.

Igual sentido: sentencia 055 de 25 de febrero de 1988, sentencia 025 febrero 25 de 1988 G.J. I, CXCI, No. 2431, págs. 76 y 77.

2. Evidencia del error fíctico.

Igual sentido: Sentencia de 23 de mayo de 1989 (G.J.I. CXCVI, No. 2435, primer semestre, pág. 136).

F.F.: C. de P. C. Art.: 368 Numeral.: 1

## INDICIO

El indicio que se deduce de la compatibilidad de caracteres genéticos entre el presunto padre y quien respecto de él reclama ser su hijo, no es el estado actual de la ciencia un indicio necesario, sino meramente contingente, razón esta por la cual, por sí solo no puede servir de fundamento a una sentencia que declare la filiación paterno filial que se investiga.

## TECNICA DE CASACION—

### **Yuxtaposición de Argumentos /CASACION Carga Procesal**

En el presente caso, se viola la regla técnica de la inexistencia de fundamentos contradictorios. Igualmente no se cumplió con la carga procesal de demostrar en qué consistió la violación de las normas de disciplina probatoria que mereciana como infringidas en la enunciación de la censura.

F.F.: DECRETO Num.: 2651 Año: 1991 Art.: 51 Numeral.: 4.

*Corte Suprema de Justicia. — Sala de Casación Civil—* Santafé de Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Magistrado Ponente: *Doctor Pedro Lafont Planetta*

*Ref: Expediente No. 4415*

*Sentencia N° 138*

Se decide el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del

Distrito Judicial de Cali —Sala de Familia— el 10 de marzo de 1993, en el proceso ordinario iniciado por MARGARITA SANCHEZ LONDOÑO como representante legal de su menor hija YORLADIS SANCHEZ contra JORGE HUMBERTO TORRES ROBAYO.

### *1. ANTECEDENTES*

1. Mediante demanda promovida por el Defensor de Familia, la señora MARGARITA SANCHEZ LONDOÑO, en representación de su hija YORLADIS SANCHEZ, promovió un proceso que por reparto correspondió conocer al Juzgado Cuarto Civil de Familia de Cali, para que surtida su tramitación legal se declarase que el demandado JORGE HUMBERTO TORRES ROBAYO, es el padre extramatrimonial de la menor YORLADIS SANCHEZ, nacida en Cali el 29 de junio de 1981 y para que, se condene al demandado al pago de pensión alimentaria a la citada menor, así como se disponga que la patria potestad y cuidado personal queden radicados en cabeza de la madre.

2. Como supuestos fácticos de estas pretensiones, en síntesis expone la demanda los siguientes:

2.1. Que Jorge Humberto Torres Robayo y Margarita Sánchez Londoño, en razón de la vecindad de sus viviendas en el barrio "La Independencia" de la ciudad de Cali, se conocieron desde niños y sus familias mantuvieron desde entonces relaciones de amistad.

2.2. Que Jorge Humberto Torres Robayo, luego de contraer matrimonio en el año de 1979 tomó en arrendamiento parte de la casa de los padres de Margarita Sánchez Londoño, razón por la cual el trato con él se hizo cada vez más frecuente, al punto que Jorge Humberto Torres Robayo y la actora "se enamoraron e iniciaron un noviazgo muy oculto ya que no podía comentar a sus padres esa relación por la situación del señor Torres" (fl. 4, C. Principal).

2.3. Que el demandado y Margarita Sánchez cada 8 días se encontraban "en el barrio León XIII", lugar a donde acudía la actora por cuanto en él vive una prima suya, Doris Trujillo y que, de allí salían "en un carro azul pequeño" de propiedad del marido de Nohemí Torres, cuñado del demandado.

2.4. Que en esas condiciones sostuvieron la actora y el demandado

relaciones sexuales periódicas, como producto de las cuales ella quedó en estado de embarazo, el cual culminó con el nacimiento de la menor YORLADIS SANCHEZ, el 20 de junio de 1981.

2.5. Que el demandado se ha negado a reconocer la paternidad de la citada menor.

3. Admitida que fue la demanda y notificado de ello el demandado, le dio contestación en escrito suscrito por él, sin acreditar calidad de abogado, (fls. 9 y 10, C-Ppal.), en el cual se opone a la prosperidad de las pretensiones, formula las excepciones que denomina "falta de legitimación en cuanto a la causa", "carencia de derecho para demandar", "no ser el padre de la menor" e "inexistencia de la obligación". Respecto a los hechos, manifiesta que contrajo matrimonio el 15 de octubre de 1975; que no vive en casa de la demandante, que no ha tenido ningún noviazgo, ni relaciones sexuales con ella y que no le consta el nacimiento de la menor.

4. Practicadas las pruebas que fueron decretadas, el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Cali, profirió sentencia de primer grado el 18 de agosto de 1992 (fls. 32 a 39, cdno. ppal.), en la cual declaró que Jorge Humberto Torres es el padre de la menor Yorladis Sánchez, le fijó una cuota alimentaria de \$15.000 con destino a ésta, concedió la patria potestad y cuidado personal de esa niña a su progenitora Margarita Sánchez Londoño y ordenó inscribir el fallo en el acto de registro civil de nacimiento de Yorladis Sánchez, en la Notaría Quinta del Circuito de Cali.

5. Apelada la sentencia de primera instancia por el demandado, (fl. 41, cdno. ppal.), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali desató la apelación mediante la suya de 10 de marzo de 1993 (fls. 6 a 16, C-4), en la cual revocó el fallo de primer grado y, en su lugar resolvió denegar las pretensiones de la demanda.

6. Interpuesto entonces, por conducto de apoderado el recurso extraordinario de casación contra la sentencia del Tribunal, (fl. 13, C-4), éste lo concedió en auto de 16 de abril de 1993 (fl. 21, C-4) y, luego de su tramitación, de él se ocupa ahora la Corte para decidirlo.



## II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

1. Luego de historiar el litigio y la actuación cumplida durante la primera instancia, el Tribunal encuentra que están reunidos los presupuestos procesales y que como no advierte causal de nulidad, ha de procederse a dictar sentencia de mérito.

2. A continuación expresa que conforme a la modificación introducida por el artículo 60. de la Ley 75 de 1968 a la Ley 45 de 1936, hay lugar a declarar la paternidad extramatrimonial cuando se invoquen en la demanda para el efecto las relaciones sexuales entre el presunto padre y la madre de la criatura, por la época en que se presume la concepción, siempre y cuando se encuentren aquellas demostradas o hubiera lugar a presumirlas conforme a la ley.

3. Luego de citar parcialmente doctrina jurisprudencial de esta Corporación respecto de la causal invocada por la actora para impetrar la declaración de paternidad de Jorge Humberto Torres Robayo respecto a la menor Yorladis Sánchez (Js. 9 a 11, C-4), expresa que ha de examinarse el material probatorio recaudado en un proceso a fin de determinar si puede prosperar la pretensión de filiación extramatrimonial aludida.

4. A ese respecto encuentra el sentenciador de segundo grado demostrado con el acta de registro civil de nacimiento de Yorladis Sánchez, tanto este hecho como que su progenitora es Margarita Sánchez Londoño.

5. Analiza enseguida las declaraciones testimoniales rendidas por Carmen Ospina, Luis Edilberto Sánchez Londoño y Luis Enrique Sánchez, de las cuales asevera que "no aportan ninguna convicción sobre el hecho debatido, esto es, el referente al trato carnal que tuvieron Jorge Humberto Torres Robayo y Margarita Sánchez" (fl. 12, C-4). Así, respecto del testimonio de Carmen Ospina, quien afirma conocer a Margarita Sánchez, "desde que nació" y al demandado aproximadamente desde "hace 20 años", manifiesta el Tribunal que la declarante expresó haber conocido el estado de embarazo de la actora, haber sabido del nacimiento de la menor a que este proceso se refiere, cuya paternidad es atribuida por la madre a Jorge Humberto Torres, a quien la testigo afirma no haber visto "en la calle y menos en cuestiones de amoríos", según expone el Tribunal a folio 13 del cuaderno citado. De la misma manera, a

juicio del Tribunal tampoco prueba las relaciones sexuales entre la actora y el demandado la declaración de Luis Edilberto Sánchez Londoño, hermano de la demandante, pues éste manifiesta que ni él ni su familia se dieron cuenta de que su hermana sostuviera este tipo de relaciones con el señor Torres y solo supieron de ellas porque así se lo contó Margarita Sánchez cuando resultó embarazada. Por su parte, el otro testigo, Luis Enrique Sánchez, padre de la actora, manifestó conocer al demandado desde niño y haber presenciado que Jorge Humberto Torres y Margarita Sánchez tenían relaciones de amistad, sin que llegara a sospechar un noviazgo entre ellos. Agregó además que su hija le contó que "a finales del año 1990 al salir del juzgado Jorge Humberto la estaba esperando y le dijo que si retiraba la demanda él le prestaba ayuda económica" (fl. 13, C-4).

6. Aduce el Tribunal que dado el secreto en que fueron mantenidas según la demandante las relaciones sentimentales existentes entre ella y el demandado "se tornó bien difícil" su demostración, y que, de las pruebas que fueron practicadas no se encuentra establecido que puedan inferirse relaciones sexuales del trato personal y social entre la pareja por la época de la concepción de la menor Yorladis Sánchez, pues el simple hecho de que el demandado hubiera vivido "como inquilino en la misma casa de la señora Margarita Sánchez, pero en plantas separadas, para la época en que debió tener lugar la concepción", no puede inferirse "la existencia de la convivencia sexual alegada como causal de paternidad" (fl. 14, C-4).

7. En cuanto a la peritación antropoheredobiológica practicada a la menor Yorladis Sánchez y al demandado Jorge Humberto Torres Robayo que arrojó como resultado la posible paternidad de éste respecto de aquélla por compatibilidad de los caracteres genéticos de una y otra, afirma el Tribunal que ese indicio, en este proceso no se encuentra corroborado por otras pruebas, por lo que no es suficiente para que con fundamento en él se declare la paternidad extramatrimonial impetrada en la demanda.

8. Por último, concluye el Tribunal que como la parte demandante "no cumplió con la carga probatoria imuesta expresamente por el art. 177 del C. de P. Civil de demostrar los hechos por ella afirmados", la sentencia apelada debe revocarse y, en su lugar, denegar las pretensiones de la parte actora.

### III. LA DEMANDA DE CASACIÓN

Dos cargos formula el recurrente a la sentencia impugnada, ambos por violación indirecta de normas de derecho sustancial, invocando para proponerlos la primera de las causales de casación establecidas por el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual se despacharán con algunas consideraciones comunes.

#### CARGO PRIMERO

Con apoyo en el artículo 368, numeral 1o. del Código de Procedimiento Civil, acusa el recurrente la sentencia impugnada, por quebrantar los artículos 1o. y 4o., numeral 4o. de la Ley 45 de 1936, 6o. numeral 4o. de la Ley 75 de 1968, 66 y 92 del Código Civil, 1, 2, 5, 18, 20, 21, 22 y 23 del Código del Menor, 228 y 44 inc. 2 de la C.N., 63, 92, 95, 176, 248, 249 y 250 del Código de Procedimiento Civil, normas éstras que fueron violadas por el sentenciador "como consecuencia de errores cometidos en la apreciación de los medios de prueba que militan en el expediente" (fl. 9, C. Corte).

En la argumentación para sustentar la censura, manifiesta la recurrente que el Tribunal incurrió en "desacertada contemplación objetiva" de las declaraciones rendidas por Carmen Ospina Ospina (fl. 1, C-2), Luis Sánchez (fls. 3, 8 y 9, C-2), Luis Edilberto Sánchez Londoño (fls. 2, 6 y 7, C-2) y Luz Estella Fernández Valdez (fls. 5, 6 y 7, C-3), así como respecto de los interrogatorios de parte absueltos por la actora y por el demandado (fls. 1, 2 y 3, C-3 y fls. 11, 12 y 13 C-2 respectivamente), y en la apreciación de la peritación antropoheredobiológica practicada a la menor Yorladis Sánchez y a su presunto padre (fls. 9 a 12, cdno. Corte).

En orden a alcanzar el fin perseguido con la demanda de casación, la recurrente emprende un análisis de las pruebas referidas y expresa que, si bien la testigo Carmen Ospina Ospina "no refiere hechos que hablen de la relación amorosa o sexual de la pareja Torres Sánchez, sí deja entrever esa amistad que nace desde la más tierna edad por razones de vecindario y trato familiar, que permite inferir un trato personal y social que unido a la comunidad de vivienda, así sea en pisos diferentes, sirve para deducir que ellos se entrevistan y surja ese entendimiento amoroso que culminó con el trato sexual que dio nacimiento a la niña Yorladis, quien tiene un gran

parecido físico con el señor Torres R. y sus hermanos la aceptan como su hija (fl. 9v., cdno. Corte). En igual forma relievra la impugnadora que el relato de Luis Edilberto Sánchez Londoño, padre de la actora es el de un hombre de escasa cultura, pero "sincero y honesto", que coincide en la afirmación de la vieja amistad que unió a su familia y, por consiguiente a Margarita Sánchez Londoño con Jorge Humberto Torres Robayo, así como respecto del hecho de que el demandado en algunas ocasiones maneja un automóvil Simca azul, de propiedad de un cuñado, en que la ocupación del demandado es la de policía y que, además, su hija Margarita, aquí demandante, desde muy corta edad padece de epilepsia, hechos éstos que corrobora la declaración de Luis Enrique Sánchez, hermano de la actora. Por su parte, del dicho de Luz Estrella Fernández Valdez se infiere un trato de amistad entre la pareja Sánchez-Torres, que el Tribunal pasó por alto.

El yerro del sentenciador, a juicio de la demandante en casación, reside "en pretender exigir de los testigos un relato lleno de precisiones tales como fechas con día, mes y año, olvidando que existen otros detalles que nos llevan a y ubicarnos en el tiempo como es el mismo embarazo y la fecha de nacimiento de la menor; lugares con características y especificaciones que el común de la gente no recuerda", todo lo cual produjo un amigüilamiento del "testimonio como fuente del hecho indicio que nos va a mostrar otro hecho propio del debate". El razonamiento del Tribunal lleva a concluir que en virtud de que las relaciones amorosas y sexuales de la actora con el demandado se mantuvieron ocultas por el estado civil de éste y por la amistad de largos años con su familia, impide a la justicia la declaración de paternidad deprecada en la demanda, para exigir "una prueba directa y una notoriedad del trato carnal que el legislador ha superado y la jurisprudencia y la doctrina desechan por ser contrarios al interés social de la familia y el menor que tutelan las normas violadas" (fl. 11, cdno. Corte).

En relación con los interrogatorios de parte absueltos por la actora y el demandado, destaca la recurrente que el señor Jorge Humberto Torres Robayo acepta su ocupación como policía y conductor en esa institución, al igual que manifestó ser cierto su conocimiento de Doris Trujillo, prima de la demandante, a cuya casa ella acudía para sostener luego según el dicho de la demandante las citas clandestinas con el demandado que éste se empeña en negar. Así mismo manifiesta la recurrente que al revisar el interrogatorio de parte absuelto por Jorge Humberto Torres Robayo puede observarse que éste acepta que "con ocasión de estos trámites le dijo que si

quería plata tenía que retirar la demanda y que ella dijo que no" (fl. 11 v., cdno. Corte).

A todo lo anterior, ha de agregarse que la peritación antropológico-biológica practicada a la madre al presunto padre y a la menor, dio como resultado una compatibilidad genética de éste con su presunta hija, que, a contrario de lo sostenido por el Tribunal sí resulta corroborada por "otros elementos probatorios", cuales son las declaraciones testificales y las respuestas a los interrogatorios de parte, mencionados anteriormente.

De otro lado, debe anotarse que el demandado, sin ser abogado, le dio contestación personalmente a la demanda, circunstancia ésta que equivale a no haber dado respuesta oportuna a la demanda, lo que constituye indicio grave en contra del demandado, no deducido por el sentenciador.

#### *CARGO SEGUNDO*

Acusa la sentencia impugnada en este cargo la recurrente, con apoyo en la causal primera de casación establecida por el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, por violación de los artículos 10. y 40., numeral 40., de la Ley 45 de 1936; 60., numeral 40. de la Ley 75 de 1968; 66 y 92 del Código Civil; 1, 2, 5, 18, 20, 21 y 23 del Código del Menor; 42, 44 inc. 2o. y 228 de la Constitución Nacional; 63, 92, 95, 176, 248, 249 y 250 del Código de Procedimiento Civil.

En la argumentación expuesta para sustentar el cargo, expresa la demandante en casación que el Tribunal incurrió en "una desacertada contemplación jurídica de la prueba", pues su enfoque no se dirigió a hacer una realidad el postulado consagrado en el artículo 50. del Código del Menor que le garantiza el derecho a que se le defina su filiación, ni tampoco consultó el interés supremo de la menor Yorladis Sánchez, y, antes bien, no hizo uso de los poderes oficiosos que le otorga el legislador para hacer una realidad la protección del menor, como era su deber si consideraba que existió "alguna falencia en el desarrollo el proceso y el caudal probatorio" (fl. 12v, cdno. Corte).

Así mismo expresa que el Tribunal, incurrió en error de derecho en el análisis de las pruebas mencionadas en el cargo anterior, al cual se remite, especialmente en cuanto hace referencia al supuesto incumplimiento de la

carga de la prueba por la parte actora (fl. 12v. edno. Corte).

Además, asevera la recurrente que por el Tribunal no se tuvo en cuenta que la menor Yorladis Sánchez requiere una especial protección, habida cuenta de que su progenitora Margarita Sánchez Londoño padece de epilepsia, lo que, a su juicio, "bien puede general la nulidad del proceso", al igual que ocurre por haber desconocido el mandato contenido en el artículo 10o. del Código del Menor que ordena que en todo proceso judicial o administrativo que pueda afectar a menores de edad, es imperativo que éstos sean oídos directamente o por medio de un representante, conforme a la ley.

El Tribunal, al decir de la censura incurrió en "error de derecho", por no haber tenido en cuenta que de "un examen prolijo de la prueba indiciaria" habría permitido dictar una sentencia favorable a las pretensiones de la demanda como quiera que se encuentra demostrado que el demandado sostuvo relaciones sexuales con Margarita Sánchez Londoño, por la época de la concepción de la menor Yorladis Sánchez, por lo que la sentencia "debe casarse para que cobre plena vigencia el fallo de primer grado que consulta la realidad del proceso" (fls. 13 y 14 edno. Corte).

### CONSIDERACIONES

1. Ante todo precisa la Corte que para decidir el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de segunda instancia en este proceso, se dará aplicación al artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, dado que este recurso extraordinario fue interpuesto con posterioridad al 10 de enero de 1992, fecha en la cual entró a regir la mencionada norma legal.

2. *Conforme se desprende de lo dispuesto por el artículo 4o. de la Ley 45 de 1936 con la redacción que le fue imprimida por el artículo 6o. de la Ley 75 de 1968, las causales que permiten presumir la existencia de paternidad extramatrimonial y en virtud de las cuales se autoriza su declaración judicial, son autónomas e independientes unas de otras. Precisamente por esta razón, tiene dicho la jurisprudencia de la Corte que "quien interente la respectiva acción deberá citar exactamente la causal o causales en que fundamenta sus pretensiones y demostrar los hechos en que éstas se apoyan, puesto que el juzgador para fallar solamente podrá tener en cuenta los lineamientos que el demandante le*



haya señalado en su demanda y resulten probados, y no otros que aunque también sean suficientes para establecer la veracidad de la situación planteada por aquél, no hayan sido aducidos en el libelo" (Sentencia 11 de febrero de 1987, ordinario Tito Nicolás Cadena contra Nicolás Liévano Aguirre como heredero de Indalecio Liévano Aguirre, G. J. CLXXXVIII, pág. 27).

3. En ese orden de ideas, es claro que quien pretenda la declaración judicial de paternidad extramatrimonial, frente a las seis presunciones consagradas por el artículo 4o. de la Ley 45 de 1936, con las modificaciones introducidas por el artículo 6o. de la Ley 75 de 1968, puede optar por una de ellas, por varias o por todas, en cuyo caso correrá con la carga de probar los hechos constitutivos correspondientes, sin que pueda en ningún caso el fallador acoger favorablemente las pretensiones por una causal diferente, pues ello comportaría flagrante violación al derecho de defensa de la parte demandada.

4. Con respecto a las relaciones sexuales extramatrimoniales, como causal que autoriza la declaración judicial de filiación paterna, la Ley 75 de 1968, tal cual lo ha puesto de relieve la jurisprudencia de esta Corporación, "tiende indiscutiblemente a facilitar la investigación de la paternidad buscando hacer efectivos los derechos que tiene todo ser humano de conocer quiénes son sus padres y de que se le reconozca la totalidad de las ventajas que deben emanar de la filiación. En pos de esa meta, la citada ley, modificando lo que en el punto establecía el numeral 4o. del artículo 4o. de la Ley 45 de 1936, concede efectos jurídicos a las simples relaciones sexuales llevadas a cabo durante la época en que se presume realizada la concepción, sin requerir que aquellas revistan necesariamente condiciones de notoriedad y estabilidad. En el sistema imperante, demostrado que entre el presunto padre y la madre existieron relaciones sexuales en esa época, tal hecho es suficiente para presumir la paternidad natural de aquél y para que haya lugar a declararla judicialmente" (Sentencia 14 de septiembre de 1972 G.J. T. CXLIII, pág. 146).

5. Habida consideración de que las relaciones sexuales, de ordinario no son percibidas en forma directa por terceros, el legislador en forma expresa autoriza al juzgador para inferirlas del trato personal y social entre la madre y el presunto padre, apreciado dentro de las circunstancias



*en que tuvo lugar y teniendo en cuenta sus antecedentes, naturaleza, intimidad y continuidad, lo que significa que este hecho indicador ha de encontrarse plenamente establecido en el proceso para que pueda operar la presunción, pues ésta no es sino la consecuencia lógico-jurídica de aquel como supuesto fáctico, por mandato legal (Art. 4o. Ley 45 de 1936, subrogado por el art. 6o. de la Ley 75 de 1968).*

6. Como es suficientemente conocido, la violación indirecta de norma de derecho sustancial, puede ocurrir cuando el fallador en la apreciación de las pruebas yerra por equivocación de hecho o de derecho en esa actividad. Al respecto, tiene dicho esta Corporación, entre otras, en sentencia 055 de 25 de febrero de 1988, que "el error de hecho, que consiste en el desacuerdo objetivo sobre la existencia y el contenido de la prueba, tiene lugar cuando el Tribunal da por demostrado un hecho sin que exista el medio probatorio que lo acredite o cuando por dejar de apreciar una prueba que obraba en los autos encontró no establecido el hecho que aquella sí probaba, constituyendo también errónea apreciación de facto el dar a una prueba existente un significado contrario al de la evidencia de hecho que ella ostenta. El error de derecho, por el contrario, se refiere al desacuerdo en que incurre el fallador en la valoración de la prueba que existe en el proceso frente a su regulación legal, dándose en las siguientes hipótesis: cuando tiene en cuenta pruebas que se han aducido sin la observancia de los requisitos establecidos para su producción o se desechan, luego de considerarlas en su realidad objetivas, por estimar que tales requisitos no se cumplieron estando satisfechos; cuando se le da a un medio probatorio un valor que la ley no le reconoce para el caso o le niega el que sí le otorga la ley siendo el requerido para acreditar un hecho o acto jurídico, o cuando da éste por demostrado con prueba distinta a la pertinente o cuando exige para probar un hecho un medio que la ley no establece (Sentencia 025 febrero 25 de 1988 G.J. T. CXCI, No. 2431, págs 76 y 77).

7. En el caso de autos, analizados como se verá a continuación los cargos propuestos por la recurrente contra la sentencia impugnada, éstos no pueden prosperar por las razones siguientes:

7.1. Por lo que hace al primer cargo, observa la Corte que:

7.1.1. Examinadas las declaraciones rendidas por Carmen Ospina

Ospina, Luis Edilberto Sánchez Londoño, Luis Enrique Sánchez, Luz Stella Fernández Valdés (fls. 1, C-2; 2, 6, y 7, C-2; 3, 8 y 9, C-2; 5, 6 y 7, C-3, respectivamente), aparece que en ellas todos los testigos dan cuenta de la existencia de amistad entre la familia de Margarita Sánchez Londoño y Jorge Humberto Torres Robayo, así como los tres primeros coinciden en afirmar que la actora asevera que el padre de la menor Yorladis Sánchez es el demandado y, además, en que éste y su familia vivieron por la época en que aquélla resultó embarazada, en pisos diferentes de un mismo inmueble; pero ninguno de los testigos mencionados relata haber siquiera tenido conocimiento de que existieran relaciones sentimentales entre Jorge Humberto Torres Robayo y Margarita Sánchez Londoño, ninguno narra haberlos visto en alguna ocasión actuar como pareja de enamorados en su comportamiento público, o haberlos visto juntos en actividades sociales, todo lo cual saca adelante la conclusión probatoria del Tribunal en el sentido de no encontrar demostrados los hechos indicadores que permitan inferir fundadamente la existencia de relaciones sexuales entre la actora y el demandado, a consecuencia de las cuales ésta hubiese quedado en estado de embarazo. Así, si del trato social y personal entre Jorge Humberto Torres Robayo y Margarita Sánchez Londoño, dada su naturaleza, continuidad e intimidad, sólo pudo establecerse una relación de amistad, la convicción del Tribunal sobre el particular no aparece en forma ostensible como reñida con la realidad probatoria que obra en el expediente, es decir, no se ha demostrado la evidencia del yerro que se endilga al sentenciador, requisito éste que exige expresamente la ley para la prosperidad de la acusación que en casación se haga a una sentencia por violación indirecta de normas sustanciales a consecuencia de error de hecho en la apreciación probatoria. Por ello, tiene dicho la jurisprudencia que "en tratándose de la causal primera y si el ataque viene montado sobre la alegada existencia de un error material o de hecho, cual acontece en este caso, por exigirlo el texto explícito del segundo inciso del numeral 1o. del artículo 368 del C. de P. C. no le basta al impugnante acreditar que el ad quem incurrió en cualquier equivocación de esa índole; es condición ineludible que el error aparezca de modo manifiesto en el proceso pues si así no ocurre, vale decir si no es palmaria la contradicción entre el juicio y la realidad indiscutida que ofrecen los autos, "...si para advertirlo se requieren previos y mas o menos esforzados razonamientos, o si el se manifiesta como una posibilidad y no como una certeza, entonces, aunque se demuestre el yerro ése suceder no tendrá incidencia en el recurso

extraordinario", como lo recordó la Corte en sentencia de 23 de mayo de 1989 (G.J.T. CXCVI, No. 2435, 1989, primer semestre, pág. 136).

7.1.2. De otra parte, es verdad averiguada que el indicio que se deduce de la compatibilidad de caracteres genéticos entre el presunto padre y quien respecto de él reclama ser su hijo, no es en el estado actual de la ciencia un indicio necesario, sino meramente contingente, razón esta por la cual, por sí solo no puede servir de fundamento a una sentencia que declare la filiación paterno filial que se investiga, y solo puede apoyar un fallo favorable a esa pretensión cuando sea concurrente y convergente con otros hechos indicadores de la paternidad impetrada, por lo que tampoco es evidente el yerro de hecho del Tribunal por este aspecto en la sentencia impugnada.

7.1.3. De la misma manera, examinadas las respuestas a los interrogatorios de parte absueltos por la actora y el demandado en este proceso, no aparece tampoco yerro ostensible en su apreciación, pues de su lectura no surge que el sentenciador hubiere alterado por suposición o preterición el contenido de tales respuestas y, además, por lo que hace al demandado en ninguna de ellas aceptó ser el padre de la menor Yorladis Sánchez ni haber sostenido relaciones sexuales con la progenitora de ésta.

7.1.4. Por último, el censor afirma que "el demandado... no dió respuesta válida a la demanda" y que "esta falta de contestación... constituye un indicio grave en su contra, conducta procesal que aunada al Haz probatorio plasma... el acogimiento positivo de la paternidad..., lo que marca el desierto del tribunal" (Fls. 12 y 12vto. Corte).

Al respecto observa la Sala que la precitada afirmación, además de no señalar en forma expresa o inequívoca la clase de yerro que pretende atribuirle al tribunal, si de hecho o de derecho, omite precisar la relación directa con los demás indicios, que, a su juicio, conducirían a la demostración del hecho indicador, del cual ha debido deducir en forma lógica el tribunal la presunción de paternidad. Y es bien sabido que en materia de ataque en casación de la prueba indiciaria, debe el recurrente asumir, en forma más exigente, la carga indicada. Pues no le es dable a la Corte, debido al carácter dispositivo del recurso, proceder de oficio en la calificación del yerro si pretende atribuirsele equívocamente al tribunal; ni tampoco puede la misma Corporación, por la naturaleza y evaluación de

*la prueba indiciaria, inferir, motu proprio, las razones que tuvo el censor para llegar a la conclusión de una apreciación equivocada del tribunal.*

Pero aún en el caso en que dicha acusación resultase ajustada a la técnica, y todavía más aún en el evento de aceptarse en gracia de discusión que le cabe razón al casacionista, queda incólume la conclusión restante del tribunal de la inexistencia de otros indicios que, además de plurales, fuesen expresivos e inequívocos (por su gravedad, concordancia y convergencia) con las demás pruebas de "un trato personal y social entre la madre y el presunto padre", suficiente para que, de acuerdo con las circunstancias, antecedentes o características de las mismas, pudiera concluir en la plena prueba de las relaciones sexuales entre ellos en la época en que se presume la concepción, para deducir con base en ello la presunción de paternidad cuya declaración judicial se pide (arts. 250 y 248 C.P.C. y 60, Inc. 4o., de la ley 45 de 1936, en la redacción de la ley 75 de 1968). Luego, si ello es así la censura sería intrascendente para quebrar el fallo, pues, aun a pesar de ello, se mantendría inmodificable. Luego, ante este fracaso la Corte queda relevada de su estudio de fondo.

7.2. En cuanto respecta al segundo cargo, la Corte observa que debe proceder a un rechazo.

7.2.1. Por que habiéndose formulado por la causal primera de casación, resulta contradictorio con el primer cargo ya estudiado, pues, mientras en éste, se acusa la sentencia de ser violatoria de las normas sustanciales a consecuencia de errores de hecho en la apreciación de las pruebas, en este segundo cargo se le eróilga al tribunal haber cometido error de derecho en la misma actividad valorativa. Y como quiera que, por la contradicción que envuelven los conceptos de error de hecho y error de derecho, los ataques respecto de las mismas apreciaciones probatorias por uno y otro concepto, resultan contradictorios sean en el mismo cargo o fuera. Por lo cual se viola en el primer caso la regla técnica de la inexistencia de fundamentos contradictorios en el mismo cargo, y ahora (a partir del numeral 4 del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991) la regla técnica de la compatibilidad que deben guardar los cargos por la causal primera de una de casación, pues su contradicción los hace incompatibles. Por tal circunstancia, a la Corte le correspondió el estudio del primer cargo, desechando el presente,

porque era el que más guardaba relación principalmente con la sentencia impugnada, que hizo una apreciación objetiva de las pruebas, y con la posición de la parte recurrente, accionante en el proceso, que siempre dió prioridad al contenido del acervo probatorio allegado al plenario. Sin embargo, no obstante ser lo anterior suficiente para rechazar el segundo cargo, la Corte tampoco pasa por alto otras deficiencias técnicas que también impiden su estudio de fondo.

7.2.2. En efecto, no es de recibo mezclar como lo hace la recurrente en un cargo por supuestos errores de derecho en la apreciación de la prueba la acusación de que puede haberse incurrido en nulidad procesal por no haber oído a una de las partes interesadas, en este caso a la menor Yorladis Sánchez (fl. 13, cdno. Corte), deficiencia ésta que, por sí sola, sería suficiente para el fracaso del cargo así propuesto.

7.2.3. De otra parte, la recurrente no cumplió con la carga procesal de demostrar en qué consistió la violación de las normas de disciplina probatoria que menciona como infringidas en la enunciación de la censura, lo que impide a la Corte un pronunciamiento de fondo sobre el particular, ya que ese vacío de la demanda de casación no permite conocer la razón de la acusación por ese concepto, deficiencia que no puede ser suplida por la Corporación, ni aun apelando para el efecto a lo dispuesto por el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, dada la naturaleza extraordinaria del recurso de casación y la limitación de la competencia de la Corte a los precisos límites y contenido de la demanda para sustentar el recurso.

8. No prosperan, pues, los cargos aquí analizados, propuestos contra la sentencia impugnada.

#### IV. DECISION

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali —Sala de Familia—, el 10 de marzo de 1993, en el proceso ordinario iniciado por MARGARITA SANCHEZ LONDOÑO en representación de la menor YORLADIS SANCHEZ, contra JORGE HUMBERTO TORRES ROBAYO.

Costas a cargo de la parte recurrente, Tásense.

Cópiese, Notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

*Pedro Lafont Pianetta, Nicolas Bechara Simancas, Jorge Castillo  
Rageles, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor Marín Naranjo,  
Rafael Romero Sierra*

## **INTEGRACION DE CARGOS-Improcedencia**

F.F.: DECRETO Núm.: 2651 Año: 1991 Art.: 51

## **NORMA SUSTANCIAL / PERTENENCIA / NORMA PROBATORIA**

Tienen carácter de normas de derecho sustancial los artículos 407 del actual C. de P. C., antes 413 de la misma codificación (para el ejercicio de la acción de pertenencia) y 762 del C. C. No lo tienen los arts. 2518 del C. C.; 187 y 246 del C. de P. C., pues éstos dos últimos tienen la particularidad de ser normas probatorias.

F.F.: C. de P. C. Art.: 407, 137, 246; C. C. Art.: 762, 2518, Ext. 186.

## **VIOLACION NORMA SUSTANCIAL.**

### **— Ataque todas las pruebas**

No es procedimiento correcto en este recurso extraordinario el ataque aislado de los medios de prueba.

Igual sentido: CXLII. 140.

## **ERROR DE HECHO — Modalidades**

Suposición. Preterición.

Igual sentido: Cas. Civ. de 24 de octubre de 1975 CLI, 260.

## **CASACION — Objeto**

El recurso de casación no tiene por objeto, como si se tratara de una tercera instancia, revisar libremente el pleito o las cuestiones debatidas en los dos grados, provocando un nuevo análisis de las pruebas para deducir su poder de convicción judicial.

Igual sentido: Cas. Civ. de 20 de junio de 1947; LXII, 467.



## POSESION / PRESCRIPCION / DOMINIO

La posesión material, que es la que verdaderamente constituye el fundamento de la usucapión, debe ser el reflejo inequívoco de un poderío efectivo sobre una cosa determinada que tiene que ponerse de manifiesto en una actividad asidua, autónoma y prolongada que corresponda al ejercicio del derecho de propiedad.

Igual sentido: G. J. Ts. XLVI, 716; CXXXI, 185.

*Corte Suprema de Justicia.— Sala de Casación Civil—* Santafé de Bogotá, D. C., veinticinco (25) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Magistrado ponente: *Dr. Rafael Romero Sierra*

*Expediente 4357.*

*Sentencia Nº 139*

Decídase el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 22 de octubre de 1992, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja en este proceso ordinario del municipio de Muzo (Boyacá) contra personas indeterminadas.

*1 ANTECEDENTES*

1) Frente a personas indeterminadas, el municipio de Muzo (Boyacá) solicitó que, previo el trámite del proceso ordinario, se declarase que "... ha adquirido por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio el derecho pleno y absoluto de propiedad de los siguientes inmuebles: Lote No. 1.— Un lote de terreno situado en el área urbana de la población de Muzo (Boy), alínderado generalmente así: Por un costado en extensión de sesenta y tres metros (63 mts), linda con la calle tercera (3a), por costado (sic) en extensión de quince (15 mts), linda con la carrera 8a; por otro costado en extensión de doce (12 mts) negros y doce (12 mts) (sic) linda con propiedad de Alejandro Moyano; en treinta (30) metros con terrenos de propiedad de Virgilio Cuan y por el último costado en extensión de veinticinco (25) metros linda con terrenos de propiedad de María Ortigón Campos y encierra. Lote No. 2.— Lote de terreno situado en el área urbana de la población o localidad de Muzo (Boy) alínderado generalmente

así: Por un costado en extensión de sesenta y dos metros (62 mts) linda con la calle 1a.; por otro costado en extensión de cuarenta metros (40 mts), linda con la carrera 6a; por otro costado en extensión de cuarenta metros (40 mts) linda con la carrera 7a; y por el último costado linda con predios de Irmo Ramón León Jurado en extensión de ocho metros con ochenta centímetros (8.80 mts), Carmen Rosa López en extensión de nueve metros con treinta centímetros (9.30 mts), Alicia Parra de Briceño en extensión de siete metros (7 mts), Tito Ortega en extensión de cinco metros con treinta centímetros (5.30 mts), Agustín Lugo en extensión de ocho metros con sesenta centímetros (8.60 mts) y Rafael Campos, hoy herederos, en extensión de catorce metros con sesenta centímetros (14.60 mts) y encierra", que, como consecuencia de tal declaración, se ordene la inscripción de la sentencia respectiva en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chiquinquirá, y su protocolización en una notaría de dicha ciudad; y que, en caso de oposición, se condene en costas al opositor u opositores que se presenten.

2. El mandatario judicial del ente territorial demandante adujo como supuestos fácticos de las anteriores peticiones los hechos que a continuación se resumen:

Que el municipio de Muzo (Boy), representado por su Alcalde, ha poseído materialmente en forma tranquila e ininterrumpida los inmuebles o lotes de terreno relacionados en esta demanda, por un lapso superior a los veinte (20) años, establecido por la ley como requisito indispensable para adquirir el dominio por el método (sic) de la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio; que, dicha posesión, sobre los inmuebles relacionados en la demanda tradujeron en "... ejercitar... todos los actos o hechos a que da derecho el dominio pleno, sin limitación de ninguna naturaleza y que han consistido en arrendar parte de los inmuebles, cercarlos, edificarlos, y haber dispuesto de ellos en su uso, cuidado, como dueño y poseedor exclusivo del mismo"; que la aludida entidad territorial "... ha detentado la posesión material y realizado la explotación económica de los lotes antes descritos, con anterioridad a 1965, en nombre propio, con verdadero ánimo de señor y dueño, y sin reconocer dominio ajeno u otros derechos a personas distintas a sí mismo"; que, de consiguiente, la posesión invocada se ha ejercido en forma "... durante más de veinte años, ejercitando todos los derechos posesorios correspondientes; y que, el derecho de dominio sobre los inmuebles relacionados en esta demanda por parte

del municipio de Muzo, ha sido reconocido públicamente por todo el vecindario, pues el ejercicio de la posesión material sobre él, se confunde exactamente con el de dominio en virtud de haberse ejercido con ánimo de señor y dueño en forma quieta, tranquila, pacífica e ininterrumpida”.

3. El curador *ad litem* de las personas indeterminadas recorrió el traslado de la demanda manifestando que no se opone a las declaraciones impetradas por el demandante “siempre que se demuestre lo que pretende”; y en cuanto a los hechos, expresó que por tratarse de meras afirmaciones era indispensable la prueba correspondiente.

4. Agotado el trámite del proceso ordinario de mayor cuantía, la primera instancia concluyó con sentencia del 18 de mayo de 1992, parcialmente estimatoria de las pretensiones del municipio demandante; y la segunda, abierta en virtud del recurso de alzada interpuesto por la parte actora, se clausuró con fallo de 22 de octubre del mismo año, mediante el cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, salvo la modificación relacionada con la declaración de pertenencia respecto del lote No. 1, confirmó las restantes determinaciones.

5. Contra el fallo del *ad quem*, el ente demandante interpuso recurso de casación, impugnación que debidamente sustanciada, pasa a decidirse por la Corte.

## II. LA SENTENCIA RECURRIDA Y SUS FUNDAMENTOS

Superado el recuento de los antecedentes del litigio, reseñados las aspiraciones de la parte actora y resumida la posición adoptada por las personas indeterminadas a través de su curador *ad litem*, así como relacionada la actuación surtida en primera instancia, el Tribunal, a vuelta de hacer algunas precisiones en torno a los presupuestos necesarios para obtener la declaración judicial de pertenencia, puntualiza que la sentencia recurrida, en virtud de la cual se “... acogió en forma parcial la usucapión sobre uno de los bienes pretendidos y la desestimó sobre la parte restante y el segundo de los individualizados”, debe modificarse para despachar favorablemente la declaración de dominio sobre la totalidad del lote No. 1 y confirmarse en relación con la determinación adoptada con el lote No. 2, para lo cual siema las siguientes precisiones:

a. En relación con el lote No. 1 expresa que el fraccionamiento de la declaración de pertenencia no es posible, por cuanto "...de procederse así, estaría atribuyéndose dominio sobre bien diferente al pretendido, que es lo mismo que cambiar de objeto...", razón por la cual el juez no puede, de oficio, "...crear un inmueble diferente al pretendido y declarar la presencia de la usucapión porque eso no fue lo demandado..."; y que tal situación "...no puede confundirse con la de la reivindicación, evento en el cual, aunque lo poseído sea menor de todo el inmueble, en cuanto a la sentencia no limita la singularidad del bien, no impide ordenar la restitución en consonancia con el artículo 305 del C. de P. C."

Por tanto, el juzgador de segundo grado afirmó, a renglón seguido, que tal consideración ameritaría, por sí sola, la revocatoria del fallo apelado en el punto, si no fuese porque en el expediente milita la prueba suficiente para declarar la pertenencia sobre la totalidad del lote No. 1, como son la inspección judicial y los testimonios de Dustano Bustos Caicedo, Lino de Jesús Campos Pinilla y Campo Elías Pachón Guzmán, "...quienes advirtieron circunstancias tales como haber habitado en el lugar por tiempo superior a los treinta años en forma continua, señalan que ciertamente ha sido el municipio de Muzo, quien (sic) por todo ese tiempo ha ejercido la posesión material de dicho inmueble en forma pública, ininterrumpida y con exclusión de toda otra persona, situación que se ha consolidado mediante la plantación de edificaciones y su destino a ser ocupadas en la forma observada durante la diligencia de inspección judicial".

Agrega la Sala sentenciadora que estos medios de prueba "...analizados en conjunto no permiten dudar acerca de los hechos posesorios por el tiempo y en las circunstancias previstas por la ley para usucapir en forma extraordinaria, por lo que la demanda debe prosperar, como se dejó expuesto, sobre todo el inmueble, toda vez que si bien actualmente no está construido en su totalidad, los actos de señorío han sido exteriorizados sobre la zona destinada al solar. Es decir, la posesión ha estado plasmada unitariamente tanto sobre la parte edificada como la que no ha sido objeto de plantación".

Sin embargo, prosigue el fallador de instancia, "Situación contraria, como lo precisó el *a-quo*, concurre respecto del lote No. 2", determinación que apoya en las siguientes razones:

"Aunque los dos últimos citados anteriormente dicen que el demandante ha poseído este inmueble, la verdad es que uno y otro advierten ser actualmente Concejales del municipio de Muzo, circunstancia que en el principio ya los torna en testigos sospechosos por el interés que les asiste por defender los intereses del demandante, y finalmente al emitir sus dichos aportan circunstancias que generan duda en torno a sus afirmaciones, ya que señalan que creen que así deben ser los hechos y reconocen simultáneamente que en tiempo atrás funcionó el Hospital Santa Ana de Muzo".

"Y a acrecentar esta duda que dejan con sus versiones los declarantes comentados, se agrega el testimonio del otro testigo, el que resalta que hasta hace unos quince años el inmueble fue poseído por el Hospital; y que desde entonces ha observado mandándolo a Pastora Anzola; hechos que son constatados por el *ad quo* durante la diligencia de inspección judicial y que consta en el acta respectiva".

"Evaluando estos medios de prueba, como se dijo en la sentencia recurrida, no aparece aprobada la posesión material en las circunstancias y por el tiempo referido por la ley en favor del demandante, razón para que la carga probatoria no encuentre satisfacción y conlleve a la negación de las pretensiones en torno al bien".

## II. EL RECURSO EXTRAORDINARIO

Dos cargos conforman la demanda presentada por la parte actora-recurrente contra la sentencia acabada de resumir, ubicados en el ámbito de la causal primera de casación, los que la Corte despachará conjuntamente por las razones que en su oportunidad se expondrán.

### *Cargo primero*

Acúsase la sentencia de infringir los artículos 762 y 2518 del Código Civil, así como los artículos 187 y 243 del Código de Procedimiento Civil, como consecuencia de los errores de hecho en que incurrió el Tribunal en la apreciación de los testimonios de Lino de Jesús Campos Pirilla y Campo Elías Pachón Guzmán, reparos que concreta de la siguiente manera:

De entrada, la censura afirma que el error consistió en "no darle credibilidad a dos testimonios, en relación con el lote No. 2, pero sí, en lo afirmado sobre el lote No. 1", para luego de reproducir el pasaje pertinente del fallo impugnado, expresar que "el tribunal rechaza a estos dos declarantes, y repito, sólo en lo referente al lote No. 2; empero, como asunto curioso o paradógico, los dos testigos si fueron válidos y creíbles, en relación con la posesión del municipio, sobre el lote No. 1", cuyo aparte correspondiente también transcribe.

De consiguiente, prosigue el recurrente, "...los dos señores mencionados, fueron eficaces para consolidar la posesión del lote No. 1, pero no para el lote No. 2; a pesar de que para la apreciación de los dos inmuebles, el Tribunal acepta que los dos testigos tienen un domicilio superior a los 30 años, y conocieron de todos los antecedentes, en torno a la posesión de los mismos, por parte del municipio".

Apoyado en tales apreciaciones, el impugnante estima conveniente recordar el contenido de la versión de Campo Elías Pachón Guzmán, luego de lo cual sienta las siguientes conclusiones, así:

"1. Lote No. 2, sabe que funcionó el Hospital de Muzo, hasta el año 1960. Esa fecha indica que en adelante el municipio ejerció una vez más la posesión, hasta la presentación de la demanda en 1990, es decir, por espacio de 30 años.

"2. El hecho de que funcionara el Hospital de Muzo, no era óbice para afectar la posesión del municipio, porque es evidente que se entregó para localizar allí una dependencia oficial del mismo municipio, pues el Hospital es de carácter municipal.

"3. Extraña al censor que el Tribunal aduzca *duda*, por parte del testigo, en torno a la posesión de este inmueble, pues si se aprecia el texto de su versión, es contundente en indicar que una vez que se trasladó el hospital, el municipio lo tomó como campamento de obreros y centro para las obras públicas municipales. Es decir, no se justifica esa presunción de *duda*, porque el hombre es explícito en indicar cuáles fueron los actos de señor y dueño por parte de dicho municipio.

"4. Finalmente, respecto del calificativo de sospechoso, que le endil-



ga el Honorable Tribunal, por ser Concejal del municipio, ese aspecto bajo ningún punto de vista se puede per se, llegar a calificar bajo esa circunstancia de sospecha, porque se trata de un ciudadano honorable y pulcro, que por tener la investidura de edil, no puede, no debe, llegar a sospecharse de su versión; máxime que, por su antigüedad en el municipio, y la forma como indicó conocer los actos de señor y dueño del municipio, denotan que su versión es digna de crédito. Ahora bien, esa situación de concejal, surgió de su propia iniciativa, no de que el juzgado tuviera como punto de referencia ese factor. No, sino, que el hombre para reforzar que conocía la situación en torno a los títulos de los dos predios, recalzó que a pesar de ser concejal desde 1950, no sabía que hubiera esa titulación.

"5. De igual manera, es mayor la preocupación, en torno a la divisibilidad del testimonio que hace el tribunal, porque insisto, fue digno de crédito, para la posesión del lote No. 1, y todo porque había una construcción; pero no la posesión del lote No. 2, porque no había ninguna construcción. Luego, no se explica el porqué esa óptica en la apreciación del testimonio, cuando se trata sobre los mismos aspectos?"

Por tanto, afirma la censura, "...se demuestra que sin mayor esfuerzo, hay una protuberante falla por parte del Tribunal en la apreciación y valoración de esta prueba, según los factores comentados".

Adoptando idéntico procedimiento al empleado para cuestionar la apreciación y valoración del testimonio de Campo Elías Pachón Guzmán, la censura emprende la crítica probatoria del testimonio de Lino de Jesús Campos Pinilla, para lo cual, luego de copiar fragmentos de su relato, extrae las siguientes conclusiones:

"1. Tanto el primero como el segundo lote, son conocidos por el testigo, en razón, no sólo a ser concejal del pueblo, durante algunos años, sino a su condición de ser domiciliado por muchos años en ese municipio.

"2. Este asunto de la condición de concejal, vale la pena aclararlo para determinar que cuando rindió su versión, no tenía esa condición, luego, no hay porqué llegar a *dudar* de testimonio.

"3. En efecto, si se aprecia en detalle y con cuidado, el juez comisiona-



do debió advertir si el testigo para esa fecha, ya tenía o no esa calidad. Es decir, no se puede interpretar, como un hecho actual la pregunta del juez, cuando le dijo: 'Como se tiene conocimiento que usted *ha sido concejal...*' porque se tomó la pregunta *en pasado*, no en presente; por tanto, se desvirtúa la calificativo (sic) de sospechoso, que se endilgó, de manera parcial y divisoria, por parte del Tribunal.

"4. Es que esa glosa, debe insistirse, surgió respecto del lote No. 2, porque se ha visto hasta la saciedad, que fue válido para declarar la posesión del lote No. 1".

Reitera el recurrente que "...en este aspecto no surge la posibilidad de *dubius*, o de planteamientos forzados o extraordinarios por parte del censor, para demostrar el yerro del Tribunal, puesto que de bulto, a simple vista, surge la contradicción, en torno a que si el testigo fue idóneo y responsivo, para la posesión del lote No. 1, porqué, resultó siendo todo lo contrario, para declarar el derecho del lote No. 2. He ahí la flagrancia de la disparidad de criterio por parte del sentenciador impugnado".

Por último, el impugnante estima conveniente recordar la doctrina de la Corte en torno al testigo sospechoso y a los requisitos exigidos por la jurisprudencia para la prosperidad de los cargos fundados en la causal primera de casación, al amparo de presuntos yerros de valoración probatoria, para rematar expresando que "...se tiene que en relación con el análisis de los testimonios afectados por la *duda* y la *sospecha*, por parte del II. Tribunal, el suscrito censor, no ha tenido que entrar en profundas disquisiciones de tipo doctrinario ni semántico, menos aún sustantivo y procesal, para colegir, que el sentenciador del tribunal, erró en torno a la valoración de esos testigos, porque en primer lugar, no hay *duda* sobre la posesión del lote No. 2, en cabeza del municipio de Muzo, por un espacio, superior a los 20 años; y en segundo, que la situación de haber sido, para uno, y de ser, para otro, concejales del municipio, no son razones válidas para descartarlos en la forma como lo hizo el fallo impugnado. Amén, de que resulta una abismal contradicción, que hubiera sido admitido en cuanto al primer lote, pero para el segundo, no".

#### *Cargo segundo*

En éste, tildase la sentencia de ser violatoria de los mismos textos

legales invocados en el cargo primero, por "...interpretar en forma diversa el sentido de la declaración del señor Dustano Bastos Caicedo".

En el desenvolvimiento de la impugnación, el censor expresa que "este ciudadano, apareció en la diligencia de inspección, y manifestó ser un *vecino* del sector, pero nunca ser un *colindante*. Sin embargo, el señor Juez, le tomó una versión jurada...", de la que, una vez transcritos algunos párrafos, destaca los siguientes aspectos:

"1. A pesar de que indica que en el lugar habitan las señoras Pastora Anzola y Dora Anzola, lo cierto es que el testigo es uniforme en indicar que el dueño es el Hospital de Santa Ana de Muzó.

"2. Ahora bien, sobre el porqué sabía que el dueño era dicho hospital, sólo atinó a decir que ...porque mis papues (sic) decían eso.

"3. Es decir, que con semejante explicación, no puede haber fundamento válido para dar credibilidad a una versión que tiene esas falencias de tipo conceptual y de referencia.

"4. En consecuencia, no se puede, no se debe, admitir, que el declarante sea válido e idóneo, como para que con base en su versión, se pueda echar por la borda la declaración de los otros dos testigos ya comenados en forma extensa".

Y después de trasuntar el pasaje de la sentencia recurrida, en el que el tribunal refuerza su convicción de que el municipio de Muzo no ha poseído el lote No. 2, el recurrente sienta la siguiente reflexión.

"Sobre el particular se pregunta, cómo es posible aceptar el dicho de Bustos, cuando eso de los 15 años, es un decir, porque no estuvo sujeto a ninguna confrontación. Acaso porque el Señor Juez, dentro de sus facultades de ordenar pruebas de oficio, no tenía el derecho de oficiar al Hospital Santa Ana, para establecer hasta cuando funcionó ese hospital, y si era o no municipal? Es decir, no se puede aceptar porque un *vecino*, que no es el colindante, venga de amañó, a ser oído, y que su versión de oídas, sirva para desvirtuar una posesión de más de 20 años por parte del demandante.

Agrega el impugnante que resulta preocupante que el Juzgado, dentro de las facultades probatorias no hubiese recibido el día de la diligencia de inspección judicial a las personas que allí mismo relaciona, que son colindantes del lote No. 2 y "...en esa especial condición, debían tener más claridad y contundencia para especificar con alguna precisión, aspectos importantes, como si el hospital funcionó y hasta cuándo, si el municipio tuvo o no, el campamento de obras públicas, si se tomó el predio como depósito de materiales de construcción; y en fin todos los aspectos que en forma objetiva fueron referidos por dos testimonios, que valieron para el lote No. 1, pero fueron rechazados para el lote No. 2. A decir, verdad, para la ley, hay gran diferencia entre el vecino y el colindante. Pues el primero, puede no tener precisión sobre hechos referentes a la posesión, y entrar en divagaciones, que a la postre resultan perjudicando derechos, como ocurre en este caso, donde la versión del señor Bustos resulta poderosa, porque es capaz de suplantar el dicho de los señores Pachón y Campos"; además, afirma que, "...es inexplicable que estando presente la señora Pastora Anzola en esa diligencia, no se hubiese percatado el Juzgado de tomar una versión con los formalismos legales. Apenas, se vé que hizo una breve referencia, y nada más. Ese proceder es ilógico e inadmisible en un funcionario judicial".

El recurrente cierra el cargo, puntualizando que "de lo anterior se colige que la omisión en tomar versiones a los colindantes y a la persona que estaba a título de tenedora, resultó siendo grave para los intereses del municipio de Muzo, porque como se vió el tribunal tomó como válida la versión insegura e infundada del señor Damián Bustos, quien al decir que la señora Pastora Anzola, vivía en ese predio desde hace 15 años, concluyó que no se cumplía un requisito fundamental para declarar la prescripción, como era el tiempo superior a los veinte años, aspectos que si corroboran los testigos que sirvieron para declarar el primer lote No. 1, en cuanto a la posesión, pero que para lo propio del lote No. 2, no valieron según lo comentado".

### CONSIDERACIONES

1. Ni siquiera acudiendo al sistema de la integración de los cargos, previsto en el numeral tercero (3o) del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, es posible hallarle mérito alguno a la presente impugnación por cuanto se trata de una demanda en la que se desconocen frontalmente los

requisitos, tanto legales como técnicos, absolutamente indispensables para proponerle a la Corte un pronunciamiento de fondo sobre la cuestión debatida, como sin necesidad de mayor esfuerzo se palpa de su simple lectura.

2. En efecto: a primer golpe de vista se observa que, sin pretender exigir la integración de la confinada proposición jurídica completa, el recurrente ni siquiera ajusta su libelo a la regla primera del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, que le permite, cuando se invoca la infracción de normas de derecho sustancial, señalar cualquiera de las normas de esa naturaleza que *"...constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada..."*, por cuanto omitió el señalamiento del artículo 407 del actual Código de Procedimiento Civil, antes 413 de la misma codificación, que indudablemente conforma la norma de derecho sustancial fundamental para el ejercicio de la declaración de pertenencia, en cuanto reconoce el derecho de pedirla *"...por todo aquél que pretenda haber adquirido el bien por prescripción"*, cuyo quebranto puede producirse, entre otras hipótesis, por aplicación indebida, cuando sin concurrir los presupuestos para tal declaración, se accede a ella, o por falta de aplicación cuando, como sucede en el caso presente, el recurrente afirma que están satisfechos los requisitos para dicho efecto y, sin embargo, no se le despacha favorablemente la declaración solicitada, omisión que bajo el imperio de la legislación anterior a la vigencia del Decreto 2651 de 1991, constituía motivo suficiente para definir adversamente la gestión impugnativa extraordinaria, y que, actualmente sigue siéndolo, a pesar de la vigencia del mismo, como que *en este nuevo ordenamiento, si bien se prohibió exigir la integración de la proposición jurídica, se le impuso al recurrente la obligación de señalar cualquiera de las normas de derecho sustancial que constituyan "...la base esencial del fallo impugnado ..."*, que, como es apenas obvio, en el presente caso no puede ser otra que aquella que le reconoce al usucapiente el derecho de obtener la correspondiente declaración de pertenencia, cuando concurren los presupuestos para ganar por el modo de prescripción, ordinaria o extraordinaria, la propiedad de un determinado bien.

3. De manera que, si a juicio del recurrente, solamente resultaron infringidos los artículos 762 y 2518 del Código Civil, siendo de reconocerlo linaje sustancial el primero, en cuanto establece una presunción de dueño en favor del poseedor, mas no el segundo, que se limita a relacionar los bienes que se pueden ganar por el aludido modo, la impugnación

no propone más que un debate acerca de la posesión, pero deja de lado la controversia de fondo enfocada a obtener la declaración de dominio sobre uno de los bienes raíces relacionarlos en la demanda. Dicho en otras palabras, el censor únicamente cuestiona el fallo del tribunal en cuanto afirmó que el municipio de Muzo no había demostrado posesión sobre el lote No. 2, pero ningún reparo formula frente a la decisión final de negar la declaración de pertenencia, solicitada igualmente respecto del mencionado lote. Para que ello fuera así, era necesario, incuestionablemente, denunciar como vulnerado el precitado artículo 407 del Código de Procedimiento Civil. No sobra decir, que los otros preceptos denunciados en los cargos, vale decir, los artículos 187 y 246, también del Código de Procedimiento Civil no son normas de rango sustancial sino de carácter probatorio.

4. Pero, como arriba se dijo, no es éste el único defecto que se le puede anotar al libelo de casación, pues desde el punto de vista técnico, los cargos, separados o conjuntamente, aparecen claramente incompletos, por cuanto si se repasa detenidamente la sentencia impugnada se advertirá que la determinación del *ad quem*, en cuanto negó la declaración de pertenencia sobre el lote No. 2, no descansó solamente sobre el análisis de la prueba testimonial que enjuicia el recurrente, sino también sobre la inspección judicial que practicó el *a-quo* sobre dicho bien, elemento de juicio que por sí solo sirve para sustentar la cuestionada decisión, pues en el punto, el tribunal, una vez sentado el criterio de que los testimonios de Campo Elías Pachón Guzmán y Lino de Jesús Campos Pinilla no demostraban la posesión reclamada por el municipio de Muzo sobre el predio urbano distinguido con el No. 2, apreciación que reforzó con la versión de Dustano Bustos Caicedo, afirmó que los hechos relatados por este último fueron "...constatados por el *a-quo* durante la diligencia de inspección judicial y que consta en el acta respectiva". En el punto, la Corte reiteradamente ha dicho que "... *No es procedimiento correcto en este recurso extraordinario el ataque aislado de los medios de prueba, porque aún en el evento de hacerlo victoriosamente subsistirían las razones que en torno a los demás expuso el sentenciador, y que por ser suficientes para fundar la decisión hacen inevitablemente impróspera la acusación*" (CXLII, 140).

5. Pero si en gesto de amplitud pudiese la Corte pasar por alto tales falencias, tampoco encontraría en la censura motivo fundado para que-

brar la sentencia recurrida, pues lo cierto es que el escrito contentivo de la impugnación, que se identifica más con regular alegato de instancia que con una demanda de casación, fuera de consignar el particular modo de apreciar las pruebas que propone el recurrente, cuyo criterio pretende imponer al del tribunal, demostrar algunas inquietudes acerca de la manera como se recepcionó el testimonio de Dustano Bustos Caicedo y de su extrañeza por no recibir otros, olvidando que el mandatario judicial de la entidad recurrente estuvo presente en la diligencia de inspección judicial y ningún reparo opuso a la recepción de dicha declaración ni desplegó diligencia alguna para contrainterrogar ni para procurar la recepción de otras declaraciones, como hasta ahora lo viene a precisar, habida consideración de que corría por su cuenta la demostración cabal de los presupuestos necesarios para acceder a la declaración de pertenencia que había impetrado, ningún esfuerzo realizó para demostrar que en franca contradicción con lo afirmado por tales testigos, el tribunal dedujo arbitraria e ilógicamente que el municipio de Muzo no había acreditado posesión alguna sobre el lote No. 2, incurriendo, por ende, en el error de hecho denunciado, cuando, como en infinidad de veces lo ha repetido la jurisprudencia de esta Corporación *"...la impugnación de una sentencia por error de hecho tiene que concretarse a establecer que el fallador ha supuesto una prueba que no obra en los autos o que ha ignorado la presencia de la que sí está en ellos, hipótesis éstas que comprenden la desfiguración del medio probatorio, bien sea por adición de su contenido (suposición), o por cercenamiento del mismo (preterición); y que es preciso que la conclusión sobre la cuestión de hecho a que llegó el sentenciador como causa de dicho yerro en la apreciación probatoria, sea contraria evidente, esto es, contraria a la realidad fáctica establecida por la prueba..."* (Cas. Civ. de 24 de octubre de 1975; CLI, 260), por cuanto *"...el recurso de casación no tiene por objeto, como si se tratara de una tercera instancia, revisar libremente el pleito o las cuestiones debatidas en los dos grados, provocando un nuevo análisis de las pruebas para deducir su poder de convicción judicial. La Corte, como tribunal de casación, no se ocupa directamente del fondo mismo de los negocios, y su misión no es la de enmendar libremente cualquier irregularidad o deficiencia en que incurran los Tribunales Superiores, sino la de examinar la sentencia recurrida en sus relaciones con la ley y dentro de los límites y temas que proponga la demanda fundamental..."* (Cas. Civ. de 20 de junio de 1947; LXII, 467).



En efecto: nada diferente de lo deducido por el *ad quem* puede extraerse de las lacónicas declaraciones de Campo Elías Pachón Guzmán (folios 15 y 16, Cdno. No. 2) y Lino de Jesús Campos Pinilla (folios 17 y 18, Cdno. No. 2) cuando aquél afirmó que el municipio de Muzo no había demostrado posesión sobre el lote distinguido en la demanda inicial con el número 2, por cuanto "...al emitir sus dichos aportan circunstancias que generan duda en torno a sus afirmaciones, ya que señalan que creen que así deben ser los hechos y reconocen simultáneamente que en tiempo atrás funcionó el Hospital de Santa Ana de Muzo...", pues tal es lo que objetivamente se establece de los pasajes pertinentes de sus versiones, así:

CAMPO ELIAS PACHON GUZMAN, al preguntársele sobre el conocimiento que tuviese acerca de la posesión ejercida por el municipio de Muzo "...sobre los lotes relacionados en el numeral primero de la demanda (se le leen los linderos al declarante)" CONTESTO: "Si señor ese lote es donde se encuentra construida la Alcaldía Municipal, cuando llegué a Muzo la Alcaldía era donde hoy son las escuelas y al poco tiempo construyeron aquí donde estamos, recuerdo tanto que el constructor era un señor bandiño lo que no recuerdo es el año pero eso data desde antes de mil noventa y seis (1960), antes este lote estaba vacío pero el municipio ya ejercía posesión sobre este lote. *El segundo lo es donde antiguamente funcionó el Hospital de Muzo, yo al decir que el lote era del Municipio que lo había cedido al hospital pero no sé como lo cedería, cuando yo llegué acá en 1936 había un hospital el Hospital fue trasladado para donde está en la actualidad eso fue como en 1958 o 1960 casi en la misma época de trasladar para allá*"; e, inquirido acerca de la posesión ejercida por el municipio demandante sobre los dos aludidos lotes de terreno y sobre los actos posesorios ejercidos, RESPONDIO: "El lote primero sí porque está construida la Alcaldía Municipal y todavía funciona y el segundo lote también ha ejercido el Municipio porque construyó el campamento para los obreros del municipio, de la Secretaría de Obras y Caminos Vecinales y se hizo depósito de arena y tubería para carreteras allá se construyó la tubería y entonces está en posesión del municipio". Indagado sobre el conocimiento que pudiera tener acerca de los dueños de tales lotes antes de que los poseyera el municipio, DIIO: "Para bienes miosirencos (sic) o valdíos (sic) porque nunca le conocí ningún dueño".

Preguntado sobre la posible existencia de títulos sobre dichos lotes, CONTESTO: "No señor no los he conocido y soy Concejal del Municipio



desde 1950"; y, averiguado si, por ser concejal del Municipio alguna vez habló sobre la legalización de los títulos del municipio en relación con los lotes mencionados, CONTESTO: "Recuerdo que tuvieron un intento de legalización pero no supe definitivamente que pasó con eso". Finalmente manifestó que no tenía nada más que agregar a su declaración.

LINO DE JESUS CAMPOS PINILLA, dijo respecto de la posesión alegada por el municipio de Muzo sobre los lotes relacionados en el numeral primero de la demanda que "Si conozco que en primer término que el Municipio ha tenido en posesión ese lote hace más de treinta años y sobre parte de ese lote en mención el municipio construyó la Casa Municipal con todas sus dependencias y desde entonces ha estado quieta y pacífica posesión. Bueno en relación con el segundo lote también lo conozco desde unos veinticinco a treinta años que el Municipio lo ha tenido en posesión siendo esos los linderos de ambos lotes de lo cual doy fé, especificando que en el segundo lote funcionó el Hospital antiguo 'Santa Ana' de Muzo". Y respecto de los actos posesorios ejercidos por el Municipio sobre los aludidos lotes, expresó: "Bueno siempre el Municipio ha tenido su posesión, en todo en cuanto se refiere a los dos lotes". Preguntado sobre la existencia de dueños sobre los dos mencionados lotes antes de que el Municipio los poseyera, dijo: "Bueno tengo conocimiento que sobre el primer lote donde está construida la Casa Municipal fue adquirido por pertenencia y posiblemente el segundo también". Sobre títulos expresó: "Todavía no yo personalmente no tengo conocimiento o no sé que la Alcaldía tenga o posea algún título". Preguntado que, si por haber sido concejal del municipio, se había alguna vez de la legalización de los títulos de tales predios, contestó: "Bueno si se habló y le dieron poder a un abogado para que tramitara todo lo relacionado con los bienes de estos dos lotes el abogado es el doctor Cuadrado, esto se hizo por medio del Concejo Municipal y la Junta de Gobierno cuando se desempeñaba como Alcalde el Dr. Joaquín Pablo Suavita Armero". Al igual que el anterior declarante, manifestó que no tenía nada más que agregar a su testimonio. (Subrayas de la Sala).

6. Ahora bien: si de conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Corte, la posesión material, que es la que verdaderamente constituye el fundamento de la usucapión, debe ser el reflejo inequívoco de un poderío efectivo sobre una cosa determinada que, por imperativo legal (art. 762 del Código Civil), tiene que ponerse de manifiesto en una actividad así-

*dua, autónoma y prolongada que corresponda al ejercicio del derecho de propiedad, es decir, "... por una serie de actos de inconfundible carácter y naturaleza, que demuestran su realización y el vínculo directo que ata a la cosa poseída con el sujeto poseedor..."* (C. J. Ts. XLVI, 7 16; CXXXI 185). resulta pertinente afirmar que las declaraciones de las personas precitadas distan mucho de evidenciar los elementos tipificadores de la posesión requerida para que el ente estatal ganara por el fenómeno de la prescripción extraordinaria el dominio de alguno de los dos lotes en mención, y desde luego muchos menos el distinguido en la demanda inicial como el número 2; sólo que en razón del principio dispositivo que gobierna el recurso de casación no le es permitido a la Corte tocar temas distintos de los que en su demanda propone el recurrente, razón por la cual la declaración de pertenencia efectuada por el tribunal sobre el lote No. 1 permanece intangible.

7. De suerte que, no habiendo demostrado la censura el error de hecho que se le endilga al tribunal en la apreciación de las precitadas declaraciones, resulta inútil averiguar por el yerro de facto denunciado en la apreciación del testimonio de Dostano Bustos Caicedo que, como ya se vio, únicamente le sirvió al sentenciador de segundo grado como elemento corroborativo de la ausencia del ánimo posesorio del municipio sobre el lote en cuestión, como igualmente resulta estéril averiguar por el error de facto en que se afirma incurrió el *ad quem* al arrojar sobre tales declarantes el manto de la sospecha por ser ediles del municipio, pues tal afirmación de llegar a no ser cierta, sería intrascendente para quebrar el fallo impugnado, por cuanto a pesar de tal circunstancia, tales testimonios fueron sopesados, con las consecuencias anotadas.

De consiguiente, los cargos no prosperan.

#### IV. DECISION

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 22 de octubre de 1992, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja (Boyacá) en este proceso ordinario del Municipio de Muzo (Boyacá) contra personas indeterminadas. Por cuanto no aparecen causadas, y la entidad territorial demandante no puede ser condenada a pagar agencias en

derecho, no se impone condena en costas en este recurso extraordinario.

COPIESE, NOTIFIQUESE y oportunamente DEVUELVASE al tribunal de origen.

*Pedro Lafont Pianetta, Nicolas Bechara Simancas, Jorge Antonio Castillo Rugeles, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Hector Marin Naranjo, Rafael Romero Sierra.*

## MANDATO MERCANTIL-Revocación

1) Titularidad tanto de la revocación como de la renuncia del mandato mercantil.

2) Excepción al derecho de revocación en virtud del contrato de mandato.

3) Mandato "en interés común"; fundamento de su irrevocabilidad.

4) Cuando hoy en día el art. 1279 del C. de Co. establece una excepción a la regla de la revocabilidad del mandato, derivada dicha excepción del interés conjunto que en el asunto puedan tener mandante y mandatario, ese interés no se refiere a que este último tenga derecho a una retribución por los servicios prestados, retribución que en el campo propio de los mandatos comerciales por lo demás siempre va a percibir.

Igual sentido: G.J., t. LXVIII, pág. 151.

E.F.: C. Co.: Art.: 1279, 1264, Art.: 1264; Co. de 1887 art. 341, C.C. Art.: 2191.

*Corte Suprema de Justicia — Sala de Casación Civil —* Santafé de Bogotá, D.C., Veintiocho (28) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Magistrado Ponente: *Carlos Esteban Jaramillo Schlus*

Ref.: expediente 4371.

Sentencia N°140

Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fecha dieciocho (18) de diciembre de 1992,

contra la sentencia de fecha dieciocho (18) de diciembre de 1992, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario seguido por MARCA CREATIVIDAD Y MERCADEO LIMITADA contra MANUELITA S.A.

### *1. EL LITIGIO Y SUS ANTECEDENTES:*

En la demanda con que se abrió el proceso en mención se solicitó:

Que se declare que entre la Sociedad MANUELITA S.A. y la SOCIEDAD MARCA CREATIVIDAD Y MERCADEO LIMITADA se celebró un contrato comercial de mandato con representación, por virtud del cual la primera instituyó a la segunda como su agente publicitario, contrato que cumplió en forma estricta el mandatario.

Que como consecuencia de haber violado MANUELITA S.A. en forma intempestiva y unilateral el contrato de mandato sin existir autorización para ello, se le condene a pagar dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria del fallo que así lo declare las siguientes sumas:

La suma de trece millones ochocientos noventa y siete mil doscientos cincuenta y cinco pesos (\$13.897.255.00) correspondientes al 17.65% por concepto de la comisión de agencia dejada de pagar en razón del contrato celebrado entre el demandado y la Programadora RCN TV., el cual tuvo un valor de setenta y ocho millones setecientos treinta y siete mil ochocientos noventa y ocho pesos (\$78.737.898.00).

La suma equivalente a los intereses moratorios del 36% anual, liquidados en forma gradual, mes por mes, durante siete meses sucesivos, a partir del primero de julio de 1988, tomando como base las siete cuotas de once millones novecientos once mil novecientos treinta y dos pesos (\$11.911.932) en que fue fraccionado entre el anunciante y la programadora el pago total del valor del contrato.

A la cantidad de dinero que resulte al aplicar la revalorización o corrección monetaria a las sumas a que sea condenada la parte demandada.

Subsidiariamente a las condenas anteriores, se requirió que se condene al pago de las cantidades de dinero que de acuerdo al dictamen de peritos expertos se determine en el proceso para las condenas anteriores o que hayan de regularse por el procedimiento señalado en el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil.

Se pide además que se condene a la demandada al pago de las costas del proceso.

Las pretensiones así irindividualizadas, se fundan en los hechos que en seguida pasan a resumirse.

a) La sociedad actora, en su calidad de comerciante y en virtud de acuerdos verbales y escritos, entregó al anunciante MANUELITA S.A. el desarrollo creativo, la coordinación y la producción de varias campañas publicitarias.

Así, al finalizar el año 1987 y comienzo de 1988, MANUELITA S.A. solicitó a la SOCIEDAD MARCA CREATIVIDAD Y MERCADEO LIMITADA la presentación de un plan de mercadeo y publicidad con su presupuesto respectivo. Estos proyectos fueron analizados conjuntamente por altos funcionarios de las partes, y dada la magnitud de la negociación, la Junta Directiva de MANUELITA S.A. aprobó la campaña, el presupuesto de inversión y la comisión por la Agencia.

b) Como resultado de esta negociación, la SOCIEDAD MARCA CREATIVIDAD Y MERCADEO LIMITADA realizó la producción de los comerciales "Azúcar alta presión" y "Donde hay azúcar", cuyo valor fue de nueve millones cinco mil trescientos cuarenta y cinco pesos con 12/100 (\$9.005.345,12), suma que fue pagada a los proveedores de trabajo publicitario. El contrato comprendió, no solamente la producción, plan de mercadeo, evaluación del proyecto y análisis de estrategias, sino además la defensa de los intereses de los anunciantes en las negociaciones con los medios y el seguimiento de la pauta.

c) En este orden de ideas, la SOCIEDAD MARCA CREATIVIDAD Y MERCADEO LIMITADA intervino en la negociación celebrada entre MANUELITA S.A. y RCN TV. Y cuando dicha programadora

presentó a MANUELITA S.A. una oferta de programación para el período Marzo - Diciembre de 1988 por valor neto de setenta y ocho millones setecientos treinta y siete mil novecientos ochenta y nueve pesos (\$78.737.989.00), utilizando en dicha oferta los elementos y la asesoría de la campaña preparada por la sociedad demandante, ésta, al recibir la oferta para su evaluación, dejó constancia de las desventajas que le encontraba para los intereses de MANUELITA S.A.

d) La programadora RCN TV, inició el 10. de mayo de 1988 la ejecución de la campaña con toda la producción, asesoramiento y recomendaciones en cuanto a la distribución y utilización de espacios presentados por la SOCIEDAD MARCA CREATIVIDAD Y MERCADEO LIMITADA, y esta última, por su parte, continuó haciendo su seguimiento con el exclusivo fin de controlar el desarrollo, intensidad de la pauta y reposición de ciaras.

Sorpresivamente MANUELITA S.A. en carta del 12 de mayo de 1988, comunicó a la Agencia que para el año 1988 la inversión publicitaria sería manejada en forma directa, es decir, excluyendo la intermediación de la que viene haciéndose mención. Se afirmó también que la negociación con RCN fue realizada sin que en ella hubiera tomado parte la entidad demandante.

Sin embargo, el escrito de demanda hace énfasis en que a pesar de la anterior comunicación, en la carta No. 532 de mayo 9 de 1988, RCN TV, afirmó que la oferta presentada a MANUELITA S.A. se estructuró conjuntamente con la SOCIEDAD MARCA CREATIVIDAD Y MERCADEO LIMITADA.

e) Posteriormente, en carta No. 2699 del 23 de junio de 1988, MANUELITA S.A. ofreció a la SOCIEDAD MARCA CREATIVIDAD Y MERCADEO LIMITADA el 15% de comisión sobre la pauta de comerciales pasados entre el 30 de abril y el 12 de mayo de 1988. El pago se haría hasta ese día, fecha en la cual vencían los treinta días de aviso de la decisión de continuar manejando directamente la campaña publicitaria y la inversión por ella representada.

f) A esta comunicación respondió la SOCIEDAD MARCA CREATIVIDAD Y MERCADEO LIMITADA con carta de junio 28 de 1988,



en la que manifestó estar dispuesta a llegar a un arreglo, condicionándolo al pago de las facturas Nos. 0063, 0064 y 0065 del 31 de mayo de 1988, en el plazo de una semana.

g) MANUELITA S.A. no pagó en el plazo indicado. Después, ya habiendo pagado parcialmente algunas facturas, solicitó la expedición de un paz y salvo, el cual fue entregado por la SOCIEDAD MARCA CREATIVIDAD Y MERCADEO LIMITADA, pero limitándolo a publicidad (producción de comerciales), sin hacerlo extensivo a las comisiones de agencia a que tenía derecho sobre las pautas contratadas con RCN TV.

h) Concluye entonces la demanda que, por cuanto en el Contrato No. 403-88 de abril 28 de 1988 celebrado entre MANUELITA S.A. y la programadora RCN TV, ésta "pautaría" un mínimo de setenta y ocho millones setecientos treinta y siete mil novecientos ochenta y nueve pesos (\$78.737.989.00) durante un período de siete meses, comprendidos entre mayo y noviembre de 1988, pagadero en cuotas iguales por un valor de once millones doscientos cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y cuatro pesos (\$11.248.284.00), MANUELITA S.A. le adeuda a la SOCIEDAD MARCA CREATIVIDAD Y MERCADEO LIMITADA las comisiones correspondientes al período comprendido entre el 1 de junio de 1988 y el 31 de diciembre de 1988 las cuales equivalen al 17.65% sobre la pauta total de setenta y ocho millones setecientos treinta y siete mil novecientos ochenta y nueve pesos (\$78.737.989.00).

2. La sociedad demandada dio respuesta a la demanda incoada, oponiéndose a las pretensiones, negando algunos hechos y afirmando no constarle otros, argumentando la transacción como defensa tanto previa como de fondo. Igualmente propuso las excepciones de existencia de contratos diferentes al mandato con representación, que no dan lugar a las consecuencias jurídicas a que se refiere la demanda y la de pago.

3. Conoció del asunto inicialmente el Juez Sexto Civil de Circuito de Bogotá quien, primeramente desestimó la excepción de transacción interpuesta como previa. Luego mediante providencia de veintisiete (27) de enero de 1992, al no encontrar prueba en el expediente sobre la duración del contrato de mandato acordado entre las partes, ni posibili-

dad de distinción contractual o legal entre los términos publicidad y comisión de agencia que permitiera inferir la obligación de MANUELITA S.A. de pagar al demandante su comisión, resolvió negar las pretensiones de la parte demandante y condenarla en costas, teniendo en cuenta que esta última había expedido el recibo de paz y salvo por concepto de publicidad.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, en fallo proferido con fecha dieciocho (18) de diciembre de 1992, confirmó en todas sus partes la sentencia del a quo y condenó en costas a la parte actora.

## II. *LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA EN CÁSAÇÃO:*

Luego de hacer un rápido recuento de los antecedentes procesales y afirmar la "... idoneidad del juicio" para arribar a una decisión de fondo sobre las pretensiones que son objeto de la demanda incoada, pasa el Tribunal a exponer de manera escalonada, unos en subsidio de otros, los diferentes motivos que a su juicio concurren para que deba ser desechado el recurso de apelación interpuesto y, por lo tanto, confirmada la sentencia de primer grado.

En efecto, tomando el contrato de mandato como "abrevadero de la pretensión" para sujetarse a los términos invocados por la parte demandante, no encontró el juzgador colegiado convención entre las partes que dispusiera la irrevocabilidad del mandato y, por ende, consideró ajustada a las previsiones legales la actitud asumida por el mandante, en este caso MANUELITA S.A. de disponer la terminación del contrato, lo que se hace todavía más visible si se tiene en cuenta que "... los extremos temporales del contrato no estaban debidamente definidos" y de ahí que "... la parte demandada no podía violar la prohibición de terminación anticipada del contrato ..." porque entre los estipulantes no se fijó un plazo cierto hasta el cual se extendiera su vigencia.

Pero aun admitiendo todo el mandato, como sus límites temporales y la conducta culposa del mandante, estima el fallador ad quem que la pretensión del demandante está condenada al fracaso por cuanto el porcentaje del 17.65% que se estima como costumbre mercantil, al decir del

actor, no fue demostrado en el juicio, haciendo imposible cuantificar los perjuicios a cargo de la demandada, "orfandad probatoria que no puede subsanarse de oficio porque ya la Cámara de Comercio certificó la inexistencia de la costumbre mercantil". Tampoco aceptó el Tribunal como soporte probatorio de tal porcentaje lo dicho por la parte demandada en los documentos relativos a la transacción, porque si esta aceptó una oferta del 15%, "ello acaeció como preámbulo a la transacción según se desprende de los documentos visibles a folios 22, 23 y 3 del cuaderno No. 2. En el folio 22 del cuaderno 2 aparece la comunicación enviada por la demandada en junio 23 de 1988, en que ofrece como 'propuesta integral' (textual) un porcentaje del 15%. La transacción (folio 3 cuaderno 2) es de fecha 26 de junio de 1988. De esta manera se evidencia que la oferta de un 15% de comisión se emitió como una hipótesis de la transacción y no como una regla sugerida para esos efectos y no con carácter general para todas las relaciones".

Finalmente, concluye el Tribunal expresando que si los anteriores argumentos fueren insuficientes, "por obra de la transacción entre las partes, el contenido de este litigio residual". La transacción efectuada dejó por fuera del pago realizado únicamente las comisiones por el comercial de los "sobrecitos", comisión que es ajena a las pretensiones de la demanda.

### III. DEMANDA DE CASACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

Un único cargo, para combatir la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, formuló la sociedad actora sustentando dicho cargo en la causal primera del artículo 368 del Código de procedimiento Civil, por error manifiesto de hecho en la apreciación del material probatorio que, de modo indirecto y por falta de aplicación, llevó al quebranto de los artículos 1, 2, 12, 822, 824, 864, 870, 871, 879, 883, 884, 1262, 1263, 1264, 1265, 1279, 1280, 1282 del Código de comercio y los artículos 1494, 1495, 1501, 1502, 1602, 1603, 1608, 1613, 1614, 1615, 1617, 1618, 1624, 1626, 2199, 2469 y 2485 del Código Civil.

Al decir del recurrente, debe tenerse presente que el mandato es revocable, pero que esta condición sustrae no sólo cuando se pacta su

irrevocabilidad, sino también cuando se ha conferido en interés del mandatario o de un tercero, en cuyo caso podrá revocarse por justa causa, requisito que en la especie no se encuentra demostrado a pesar de que, por tratarse de un mandato retribuido era forzoso entender que su celebración también interesaba a la firma demandante.

Observa entonces un primer error del ad quem al no apreciar que el representante legal de la sociedad demandada admitió en el interrogatorio realizado la existencia de un contrato de mandato para publicidad, con una remuneración del 15%, la cual se aplicó no solo durante el desarrollo de ese contrato, sino que se siguió aplicando a otro comercial. Es decir, esta remuneración del 15% no regía sólo para la transacción relacionada con los dos comerciales que dieron base al presente litigio.

Señala el casacionista que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá desacertó igualmente al pasar por alto el texto del escrito en que se dedujo la excepción previa de transacción (fs. 24 a 29 del C. 2), escrito en el cual se reconoce el contrato de publicidad celebrado entre las partes y el derecho de la sociedad mandataria a cobrar remuneración o porcentaje por su gestión.

Así mismo, pretirió el fallador ad quem el acta No. 664 de septiembre 6 de 1986 de la Junta Directiva de MANUELITA S.A. (Fs. 83 a 85 del C.1) en la que se consignó que se estaba adelantando un contrato de publicidad con Fernando Romero, representante legal de la hoy llamada MARCA CREATIVIDAD Y MERCADEO LIMITADA, y que los honorarios del mandatario serían del 15%.

Concluye en esta misma línea el recurrente afirmando que el mandato "fue conferido en interés del mandatario remunerado y que, por tanto, de conformidad con la parte final del artículo 1279 del Código de Comercio la sociedad mandante (MANUELITA S.A.) carecía de facultad de revocar a su libre arbitrio el mandato, mientras no demostrara una justa causa, que, de otra parte, en este litigio nunca fue alegada", luego estuvieran o no fijados los límites temporales del mandato a los que aludió la sentencia impugnada, ese contrato "... por virtud de haber sido conferido en beneficio de la sociedad demandante que tenía derecho a una remuneración del 15%, no podía ser revocado por Manuelita S.A. a su talante...".

De otra parte, al ignorar las pruebas antes señaladas y apoyar su decisión sólo en los documentos visibles a fls. 3, 22 y 23 del C. 2, el Tribunal entendió que el porcentaje del 15% sólo había sido aceptado para la transacción y no con carácter general para todas las relaciones. Además, estando demostrado el porcentaje que correspondía a la comisión, no tenía importancia que no se hubiera probado que es costumbre mercantil permanecer con el 17.65%, o que la Cámara de Comercio hubiera certificado que tal costumbre no existe. En otros términos, si se acordó entre las partes un 15%, la aplicación de la costumbre mercantil era meramente subsidiaria.

El Tribunal entonces debió condenar a MANUELITA S.A. con base en el porcentaje probado (15%) y no en el solicitado (17.65%), aplicando así el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil.

Por último, el recurrente encuentra que el ad quem erró al apreciar el paz y salvo (f. 3 C.2) en el que se expresa que ese finiquito sólo se extendió por concepto de pagos de publicidad, sin extenderlo a la comisión del 15% sobre la inversión que por valor de setenta y ocho millones setecientos treinta y siete mil novecientos ochenta y nueve pesos (\$78.737.989.00) pagó MANUELITA S.A. a RCN TV, por las pautas contratadas respecto a los comerciales "Azúcar alta pureza" y "Donde hay azúcar", pues en el campo de las comunicaciones no se ofrece duda de que una cosa es publicidad y otra comisión de agencia por las inversiones que haga el anunciante en los distintos medios, como lo aceptó el representante de la firma demandada al responder al interrogatorio.

### SE CONSIDERA

*Siguiendo el hilo conductor de la sentencia, en sus diferentes etapas, comienza el recurrente censurando el criterio expuesto en dicha providencia en relación con la posibilidad de revocar el mandato otorgado a la Agencia demandante, aun cuando esta última tenía interés en el negocio, punto de evidente importancia acerca del cual es pertinente observar lo siguiente:*

*1. Al igual que ocurre en el campo civil según los términos del art.*

2189 - - nuns. 3o. y 4o. -- del C. Civil, la relación de mandato mercantil se basa en un vínculo personal de confianza entre mandante y mandatario que hace posible, al menos como principio general, que cada uno de ellos pueda ponerle fin unilateralmente a ese vínculo, mediante la revocación, cuando es el primero quien ejerce esta facultad, y mediante la renuncia si es el segundo quien lo hace.

Puede, entonces, la sola voluntad aislada del mandante revocar "... a su arbitrio..." (Art. 2191 del C. Civil) y por lo tanto en el momento que mejor le convenga, el encargo conferido bajo el supuesto, desde luego, que en situaciones ordinarias la ejecución o inejecución de dicho encargo afecta, de modo principal y directo, los intereses del mandante únicamente y al desaparecer aquella base de confianza sobre la que el contrato descansa, por obra de la ameritada facultad podrá desaparecer también la relación jurídica que de él emana. En otras palabras, la regla general en esta materia es que, respetando siempre el deber de buena fe como lo exigen con absoluta claridad los arts. 871 y 1280 del C. de Com. el mandante puede ejercitar el derecho de revocación que la ley le otorga en resguardo de sus intereses, sin fundar su determinación o explicar las razones que lo mueven a proceder así ni justificar tampoco faltas imputables a mandatario, y por eso mismo ha de entenderse que, dándose estas condiciones y aun cuando la revocación se haga conocer del público por medios de la índole de los que señala el art. 2199 del C. Civil en su inciso final, el mandante que en esta forma actúa no ofende por ese sólo hecho al mandatario y por consiguiente no compromete su responsabilidad, habida cuenta que, como suelen expresarlo autorizados expositores, "... por haberse concertado el mandato en interés del mandante, el mandatario debe esperar que se le retiren sus poderes desde el instante en que el mandante haya perdido ese interés o no tenga ya confianza en su encargo..." (Henri, León y Jean Mazeaud. Lecciones, Parte Tercera, Vol. IV, Num. 1418).

2. Pero este derecho de revocación "ad nutum" que por principio le permite al mandante recuperar la gestión directa de sus propios negocios cuando a bien lo tenga y sin faltar por ello a lo pactado por virtud del contrato de mandato, encuentra importantes excepciones en el Art. 1279 del C. de Com. texto éste que registrando en buena medida un ilustrativo antecedente en el Art. 341 del C. de Com derogado de



1887, dice lo siguiente: "... El mandante podrá revocar total o parcialmente el mandato, a menos que se haya pactado la irrevocabilidad o que el mandato se haya conferido también en interés del mandatario o de un tercero, en cuyo caso sólo podrá revocarse por justa causa..."

Así, pues, de conformidad con el precepto legal que acaba de transcribirse, en los dos eventos de excepción por él contemplados, por revocación del encargo confiado, no puede haber expiración lícita del mandato sino en tanto medien, debidamente demostrados por el mandante como es apenas natural suponerlo, circunstancias constitutivas de "justa causa" de ordinario equiparables con la fuerza mayor o con la culpa exclusiva del mandatario. Y de esos dos eventos cuyo efecto cardinal es este último, necesario es referirse con detenimiento al segundo, atinente al mandato llamado "en interés común" que en sustancia es irrevocable aún cuando no se haya pactado la cláusula que así lo declare, no solamente porque es esta figura la que trae a colación el cargo formulado, sino porque de estarse a la confusa redacción empleada en la sentencia, el Tribunal parece haberlo ignorado en una muestra de deplorable ligereza que, por fuerza de las razones adelante expresadas, no trae sin embargo las consecuencias que el recurrente pretende atribuirle en orden a justificar su derecho a obtener la información de la mencionada providencia, fundado en la alegada falta de aplicación de aquella norma, leída en concordancia con el Art. 1264 del C. de Com.

3. En efecto, aun a falta de pacto expreso que establezca la irrevocabilidad, esta se da con todas sus secuelas cuando el mandato, o para decirlo con mayor precisión, cuando el encargo que constituye su objeto, ha sido otorgado, no solamente en interés del mandante como acontece en el supuesto común que quedó visto al comenzar estas consideraciones, sino también en interés de terceros o incluso del propio mandatario, interés para cuya determinación ha de apreciarse, no el contrato de mandato en sí mismo, sino el negocio que el mandatario tiene la misión de concluir; y puestas en este orden las ideas, el fundamento de la irrevocabilidad salta a la vista, pues así como el mandato dado en interés exclusivo del mandante es por naturaleza revocable, toda vez que en este evento — como se dejó apuntado líneas atrás — el mandatario siempre debe esperar el retiro de sus poderes por voluntad del único interesado en que el encargo mantenga vigencia, no ocurre



*lo propio si el mandatario es alguien que también tiene interés en la conclusión del negocio al que se refiere la gestión encomendada, ya que en casos con estas características se configura, por voluntad del mandante, un interés conjunto o colectivo destinado a perdurar mientras la necesidad de dicha gestión subsista y frente al cual no es razonable sostener que, con todo, ese mismo mandante retuvo para sí la facultad exorbitante de destruir el nexo comunitario de tal manera creado y que por añadidura excede el ámbito de sus poderes de disposición, revocando por acto unilateral el mandato.*

*En conclusión, si para comprobar la existencia de un mandato irrevocable por haberse concertado en interés directo de las dos partes, mandante y mandatario, los factores cruciales de interpretación los suministra el contenido del negocio final para cuya celebración fue puesto en práctica ese mecanismo contractual de carácter instrumental, forzoso es entender, siguiendo por cierto claros derroteros de doctrina jurisprudencial forjada al amparo del Art. 341 del C. de Com de 1887, que no todo mandato retribuido, por el sólo hecho de serlo, entra en la categoría en estudio, habida cuenta que aun cuando sea cierto a todas luces que el mandatario retribuido tiene interés en el mandato, también lo es que de ordinario no lo tenga en el contrato cuya realización se le encargó: "... El interés económico a que hace mención el Art. 341 del C. de Com — dijo la Corte hace más de cuarenta años con el propósito de explicar el concepto recién expuesto — no se reduce sino a aquellos casos en que éste — el comisionista — ejecuta el acto jurídico como consecuencia de una relación directa, o mejor como titular de un derecho in re sobre los efectos que recibe en consignación y sobre los cuales puede disponer, no por cuenta ajena y a su nombre, sino por su cuenta y a su propio nombre, como sucede cuando concurren las circunstancias de tener el comisionista el carácter de tal y a la vez el de copropietario de los efectos y valores consignados. Aparece entonces sí, el interés económico directo del comisionista en la ejecución del acto jurídico de la comisión, a la vez que defiende sus propios intereses, protege los de su comitente, por ser comunes el éxito o fracaso de las respectivas operaciones. Cuando se procede como simple comisionista no hay interés económico directo alguno vinculado al acto jurídico de la venta de los valores; basta con atender las obligaciones que acarrea el encargo, sin que tenga participación ni responsabilidad en el éxito o fracaso pecuniario de las ope-*

*razones o ventas, y siempre que no se hubiese obrado culposamente en el desempeño del encargo. La remuneración de la comisión no constituye interés económico en su ejecución para el comisionista (...) En otra forma, el legislador no hubiera previsto la excepción de la irrevocabilidad de la comisión en los términos del Art. 341 del C. de Com: toda comisión sería por su naturaleza irrevocable, por la simple estipulación de la remuneración."* (G.J., t. LXVIII, pág. 151). Entonces, cuando hoy en día el Art. 1279 del C. de Com establece una excepción a la regla de revocabilidad del mandato, derivada dicha excepción del interés conjunto que en el asunto puedan tener mandante y mandatario, ese interés no se refiere a que este último tenga derecho a una retribución por los servicios prestados, retribución que en el campo propio de los mandatos comerciales por lo demás siempre va a percibir (Art. 1264 del C. de Com), y darle a la cuestión tratamiento distinto significa, de acuerdo con el categórico argumento expuesto en el pasaje de jurisprudencia recién transcrito, transformar el Art. 1279 del C. de Com en un espectro inoperante pues, trasándose de relaciones mercantiles, el mandato siempre sería conferido en interés común y, por lo tanto, jamás sería revocable, salvo la remota posibilidad de un pacto expreso en contrario, interpretación ésta que conduce en la práctica a eliminar el derecho de revocación, no obstante regularlo con notoria amplitud el Cap. III del Título XIII del Libro Cuarto del Código de Comercio vigente en el país desde 1977.

4. Pasando ahora a la especie de esta litis donde debe tenerse por admitido, dados los términos específicos de la tesis impugnativa planteada en sede de casación, que son las reglas del mandato mercantil representativo las llamadas a regir el contrato de publicidad que, combinado con el de creación publicitaria, celebraron las dos sociedades que son partes en este proceso, la una (demandada) en su condición de anunciante y la otra (actora) obrando como agencia encargada de crear, preparar y programar, a cambio de una retribución, comunicación publicitaria en interés de la primera, de entrada es necesario hacer ver que los elementos probatorios de contraste, indicados por la censura para demostrar el yerro notorio que le endilga a la sentencia en el cargo deducido, no ponen para nada en evidencia que la aludida relación de mandato, por haberse concertado en "interés común" del anunciante y de la agencia, fuera irrevocable y no "... esencialmente revocable..." como lo proclamó el Tribunal de instancia. En efecto, y como el mismo

recurrente se encarga de destacarlo, esas pruebas se limitan a acreditar que por la gestión publicitaria contratada, la agencia demandante tenía derecho a cobrar una contraprestación en dinero, expresada ella en un 15% y no en el 17.65% que se fijó en el escrito de demanda que al proceso le dio comienzo, poniendo así de manifiesto una circunstancia que, según quedó visto a espasio en apartes anteriores de esta providencia, de suyo no autoriza a afirmar que por obra de ella, como lo sostiene la impugnación, el mandato se estipuló también "... en beneficio de la sociedad demandante" y, por ende, revocarlo lícitamente no era posible sino concurriendo una justa causa como lo exige el Art. 1279 del C. de Com. Para los fines de este último precepto, se repite, la remuneración del mandatario no es indicador de la existencia de un interés que no sea el que con exclusividad asiste de ordinario al mandante, luego en esta que es su fase de mayor relieve el cargo que sin remedio en el vacío.

En segundo lugar y por lo que atañe a los restantes errores probatorios de hecho denunciados, debe observarse que, dándolos incluso por establecidos con la contundencia que pide la ley, no tendrían entonces la influencia necesaria para modificar la decisión absolutoria sometida a crítica. El Tribunal, haciendo gala de un aparente afán de plenitud que contrasta con las someras apreciaciones que por salir del paso tuvo por conveniente dedicarle a cada tema, continuó examinando si en el proceso se había llegado a probar "... la remuneración y la cuantía del cargo imputable a la parte demandada...", suponiendo desde luego, por vía de conjetura, la culpa de la compañía anunciante, la cual, como se recapituló atrás, el mismo sentenciador colegiado había excluido al considerar que no hubo falta de dicha entidad al dar por terminado el mandato unilateralmente. En otras palabras, por tratarse esa consideración de una mera suposición que a manera de hipótesis dejó consignada el Tribunal en su fallo, así hubiese habido error en la apreciación del material probatorio que obra en el plenario acerca de la retribución pactada en favor de la agencia demandante, ello no puede llevar a la casación reclamada porque de todas formas habría que decir, respetando obviamente la congruencia interna del juicio jurisdiccional por emitirse, que en tanto MANUELITA S.A. no violó de manera intempestiva y unilateral el contrato de mandato tantas veces mencionado, no hay lugar a efectuar las condenas pecuniarias que, apoyándose en ese supuesto, exige la sociedad MARCA CREATIVIDAD Y MERCADEO LTDA.

Por último, respecto de la secuencia documental aducida en instancia para sustentar la excepción de transacción, es claro que si la agencia demandante, después del conflicto surgido con relación a la comisión que le correspondía sobre el valor global del contrato de difusión publicitaria de los mensajes denominados "Azúcar Alta Pureza" y "Donde Hay Azúcar", expide un paz y salvo en los términos y con los alcances que da cuenta el documento visible a fl. 3 del cuaderno 2 del informativo — recordando en consecuencia la contraprestación adeudada por el producto comercial llamado "Sobrecitos" y haciendo de lado aquella sobre las que versaba la controversia en este momento latente —, puede concluirse sin contrariar el sentido común que se aceptó la propuesta integral de arreglo ofrecida por la firma demandada, todavía con mayor razón si se advierte que es en verdad dudoso que prestaciones de la índole de las "... comisiones de agencia por inversiones publicitarias..." por las que aboga el recurso, sean en realidad desembolsos que deba hacer el anunciante en adición a la retribución de antemano pactada con la agencia que instrumenta técnicamente determinada gestión publicitaria o, por el contrario, descuentos exigibles a los medios con los que son celebrados los respectivos contratos de difusión, duda que por fuerza impide dar por sentado que la corporación falladora, al no ver las cosas del modo que indica en su discurrir casacionista, cayo en burda equivocación capaz de hacer que el juicio en cuestión caiga a la vez en ostensible arbitrariedad y valga recordar, como muchas veces lo hiciera la Corte, que "*... aun en el evento de que el nuevo estudio prohijado en la censura produjera vacilaciones más o menos intensas, no dejaría de ser obvio que la ruptura del fallo acusado ha de fundarse en la certeza y no en la duda...*" (G.J. ts. CVII, pág. 289, y CXXXIX, pág. 240).

El cargo, pues, debe ser desestimado.

### DECISIÓN

En mérito de las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que con fecha dieciocho (18) de diciembre de 1992, profirió en el proceso ordinario de la referencia el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Las costas en casación son de cargo de la parte recurrente. Téanse en su oportunidad.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

*Pedro Lafont Pianetta, Nicolás Bechara Simancas, Jorge Castillo Rugeles, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra.*

## CONFLICTO DE COMPETENCIA / DIVORCIO / MATRIMONIO-Cesación efectos Civiles

La ley habla con notoria imprecisión conceptual de proceso de divorcio (vincular) y de "cesación de efectos civiles del matrimonio" como dos especies de un mismo género. Esta circunstancia no puede conducir a los jueces a inadmitir tales demandas cuando en ellas se hable de divorcios no obstante estar referidas a matrimonios canónicos, pues trátase de una misma realidad jurídica.

### AUTO DE CONFLICTO DE COMPETENCIA (364)

R.E.: C. de P.C. Art.: 40.

*Corte Suprema de Justicia — Sala de Casación Civil —* Santafé de Bogotá, D.C. veintinueve (29) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. (1994)

Magistrado Ponente: *Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles*

Ref: Expediente No. 5264

Auto N°364

Decídese el conflicto de competencia que en torno al conocimiento del proceso instaurado por Alfonso Duque Bótero frente a María Gertrudis Muñoz Pérez encara a los Juzgados Tercero Promiscuo de Familia de Pereira y Promiscuo de Familia de Riosucio.

### I. ANTECEDENTES

Pide el demandante en el libelo introductorio que se decrete, junto con otros ordenamientos consecuentes, la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico que lo une con la demandada.

La demanda fue representada ante la Administración Judicial Seccional Risaralda, Oficina que, por reparto, se la asignó al Juzgado 3o. Promiscuo de Familia el cual, por auto de treinta (30) de agosto próximo pasado, decidió rechazar la demanda por falta de competencia, aduciendo para tal efecto, que como el domicilio común anterior de los cónyuges no lo conserva el demandante, y que el de la demandada actualmente se desconoce, la competencia la tiene el juez del domicilio del demandante. En razón de lo anterior, ordenó enviar el expediente al Juez Promiscuo de Familia de Riosucio (Caldas).

A su vez, el Juzgado Promiscuo de Familia de Riosucio (Caldas), tras hacer referencia al artículo 83 del Código Civil que trata de la pluralidad de domicilios, consideró que el ordinal 4o. del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, manda que también será competente para conocer entre otros asuntos del proceso de divorcio, el juez que corresponda al domicilio común anterior de los cónyuges mientras el demandante lo conserve. Que como en la demanda se afirma que el último domicilio conjunto lo tuvieron los cónyuges en Pereira, el mismo que conserva el demandante, desde el punto de vista sustantivo y procesal, es el Juez Promiscuo de Familia de allí, quien debe conocer del proceso de divorcio del matrimonio Duque Muñoz. En tal virtud, declaró su incompetencia y dispuso la remisión del expediente a esta Corporación.

#### CONSIDERACIONES:

Con miras a dirimir el conflicto, lo primero que establece la Sala es que del cabal entendimiento del libelo introductorio, se infiere que el demandante invocó el fuero concurrente previsto en el numeral 4o. del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil y en virtud del cual, demanda en la ciudad de Pereira (Risaralda), por haber sido este el último domicilio común que él aún conserva.

En efecto, no otra cosa puede deducirse, de lo expuesto en el acápite "competencia" de la misma y de la exposición de los hechos que le sirven de fundamento. Tal inferencia se ve aún más clara, con la manifestación que en tal sentido, hace el apoderado del actor, en el renglón primero, del enunciado "Domicilios" del escrito de demanda (Fl. 2, c.1).



Ahora bien, el artículo 5 de la Ley 25 de 1992, al modificar el artículo 152 del Código Civil, ratificó la disolución del matrimonio civil por *divorcio* y agregó que "... los efectos civiles de todo matrimonio religioso cesarán por *divorcio* decretado por el Juez de Familia o Promiscuo de Familia, mientras que en materia del vínculo remitió a las normas y Cánones del ordenamiento religioso pertinente.

Luego, en el artículo 11 *ibídem*, aparecen consagrada la disolución del vínculo en el caso del matrimonio civil, y la simple cesación de los efectos civiles como consecuencia del divorcio en el matrimonio religioso, así como la definición de otras secuelas, como resultado de la "sentencia que decreta el divorcio". Vale decir, que en este último evento, el vínculo matrimonial permanece intangible en el ámbito religioso, mientras sus efectos, en el plano jurídico, tanto personales (deberes y derechos recíprocos, estado civil de casados, legitimidad de la descendencia), como patrimoniales (régimen de bienes del matrimonio) se extingue.

Y para mantener la distinción, la ley habla entonces, con *notoria imprecisión conceptual*, de *procesos de divorcio (vincular)* y de "*cesación de efectos civiles del matrimonio*" como dos especies distintas de un mismo género. Esta circunstancia no puede conducir a los jueces, como ha acontecido en no pocas oportunidades, a inadmitir tales demandas cuando en ellas se hable de divorcios no obstante estar referidas a matrimonios canónicos, pues trátase, como se dijo, de una misma realidad jurídica.

Todo lo anterior, pues, lleva a la Sala a la conclusión en que cuando el artículo 12 de la mencionada ley 25 de 1992 preceptúa que: "... Las causales, competencias, procedimientos y demás regulaciones establecidas para el divorcio, la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso, la separación de cuerpos y la separación de bienes, se aplicarán a todo tipo de matrimonio celebrado antes o después de la presente ley...", haciendo distinción entre "*divorcio*" y "*cesación de efectos civiles del matrimonio religioso*", se refiere al susodicho precepto, a un mismo tipo de proceso, cuya sentencia conlleva consecuencias aparentemente disímiles, pero que en el fondo son coincidentes: se trata de un lado, de la disolución del vínculo y, de otro, de la extinción de los efectos civiles de una cierta clase de matrimonio. Pero que en todo caso, las causales, reglas de competencia y procedimientos son comunes. Por lo tanto, habiendo con-

*sagrado el Código de Procedimiento Civil un fuero concurrente en el numeral 4 del artículo 23 para efectos de establecer la competencia por el factor territorial en los procesos de divorcio de matrimonio civil, tal regla sin lugar a dudas, es aplicable a este asunto por mandato expreso de la ley.*

Así, pues, el desconocer el demandante el domicilio y la residencia de la demandada, aquél tenía la facultad de demandar la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, ante el Juez del domicilio común anterior, en la medida en que lo conservara.

En tal virtud, siendo por el momento suficientes las manifestaciones del demandante y sin perjuicio de las facultades que la ley procesal le otorga a la demandada, para contradecirlas, se enviará el expediente al Juez Tercero Promiscuo de Familia de Pereira (Risaralda) para que asuma su conocimiento.

#### DECISIÓN

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,

#### RESUELVE

DECLARAR que es el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Pereira (Risaralda), el competente para conocer del proceso de "Cesación de los efectos civiles del matrimonio católico" instaurado por Alfonso Duque Botero frente a María Gertrudis Muñoz Pérez.

En consecuencia, por la Secretaría envíesele el expediente y comuníquesele lo decidido al Juzgado Promiscuo de Familia de Riosucio (Caldas).

Notifíquese.

*Pedro Lafont Pianetta, Nicolás Bechara Simancas, Jorge Antonio Castillo Rugeles, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor Martín Naranjo, Rafael Romero Sierra.*

**DERECHO DE ACCIÓN / RESPONSABILIDAD  
PATRIMONIAL / RESPONSABILIDAD CIVIL DEL  
JUEZ / PERJUICIO MORAL.**

1) Concepto del derecho de acción.

2) El ejercicio de una acción autorizada por la ley, como lo es la consagrada por el artículo 40 del C. de P.C., no entraña la hipótesis que contempla el numeral 1o. del art. 74 ib. —temeridad o mala fe por manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda—, dado que, quien así procede, está haciendo uso de una facultad legal, en cuyo caso, el resultado adverso no lo compromete en la responsabilidad patrimonial del art. 72 ibídem.

3) Resarcimiento de los daños morales a quien fuere llamado a un proceso y con ocasión de éste hubiese sufrido un perjuicio de esa naturaleza, ora porque se mantuvo en un estado de angustia permanente, ya porque se le afectó en su personalidad. Reparación pecuniaria de esta clase de daños. Distinción entre la aceptación de la resarcibilidad de los daños no patrimoniales con el régimen al que se encuentra sometido esta modalidad indemnizatoria. ¿De dónde proviene el perjuicio moral? Subdivisión de éste. Régimen probatorio del daño extrapatrimonial.

Igual sentido: fallo de casación publicado en la G.J. Num. 1515, pág. 220; Cas. de 22 de agosto, publicada en G.J.T. XXXI, pág. 83; G.J. Num. 1926 pág. 367; Cas. Civil del 15 de marzo de 1941 (G.J. Num. 1966, pág. 795; sentencia de 2 de julio de 1987; sentencias del 23 de abril de 1941 y 26 de marzo de 1943, ambas de negocios Generales publicadas en la G.J. Num. 1971 y 1966, C.I.II, pág. 128 y siguientes; auto del 13 de mayo de 1988.

4) En el presente caso, se estima en la cantidad de 500.000.00 el valor del daño moral subjetivo, a cada uno de los funcionarios absueltos.

F.F.: C. de P.C. Art.: 392

*Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil –* Santafé de Bogotá, D.C. veintinueve (29) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. (1994)

Referencia: Expediente: 4366

Acto N° 365

Decídese el incidente de regulación de perjuicios propuestos por la apoderada judicial de los demandados Ariel Salazar Ramírez, Cesar Julio Valencia Copete y Clara Inés Vargas H. en el proceso ordinario instaurado por Ibo Roa Roa.

### ANTECEDENTES

1. Ibo Roa Roa, por medio de apoderado judicial, presentó ante la Corte Suprema de Justicia, demanda ordinaria contra Ariel Salazar Ramírez, Cesar Julio Valencia Copete y Clara Inés Vargas Hernández, en su condición de Magistrados del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, para que se los declare civilmente responsables de los perjuicios que se le causaron, con ocasión del fallo del 22 de octubre de 1992 (fs. 115 y ss. c.l.)

2. La Corte, mediante sentencia del 27 de julio de 1994 (folios 109 y siguientes, cuaderno No. 1), negó las pretensiones de la demanda, absolviendo a los magistrados demandados de los cargos formulados por el actor y condenó a éste, a pagar a los últimos, los perjuicios a ellos causados con el litigio, los que se liquidarían, mediante el trámite incidental correspondiente.

3. En escrito visible a folios 2 y 3 de este cuaderno, la procuradora judicial de los demandados, solicitó se fijara el valor de los perjuicios morales que el demandante le causó a los primeros.

4. Surtido el trámite incidental pertinente sin réplica de la parte opositora, de su decisión se ocupa ahora la Corte.

### CONSIDERACIONES

La indemnización de perjuicios que se impone como consecuencia de

haberse denegado la condena por responsabilidad civil, en los casos de que trata el artículo 40 del C. de P.C., obedece a consideraciones especiales dentro de la regulación excepcional que el Estatuto Procesal Colombiano hace de la responsabilidad patrimonial que asuman las partes en las actuaciones judiciales.

*Siendo el derecho de acción un derecho subjetivo público y procesal que permite a los particulares hacer uso del servicio público de la administración de justicia, resulta generalmente legítimo mover los órganos jurisdiccionales, asumiendo con lealtad los deberes, cargas y obligaciones que le impone la legislación procesal, en virtud del cual solamente se debe responder por las costas en caso de ser vencido (art. 392 C.P.C.). Empero, cuando se incumple el deber de obrar sin temeridad o se abusa de los derechos procesales, incurre quien así actúa en responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados que, con base en la prueba de tal conducta, origina la correspondiente condena en la sentencia, o auto que lo decida.*

Y siguiendo el criterio subjetivo de esta responsabilidad, se precisa:

Uno de los casos en que se presume que ha existido temeridad o mala fe, es el señalado en el numeral 1º del artículo 74 del C. de P.C., esto es, cuando es manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda. Concebida así la norma, debe entenderse que *el ejercicio de una acción autorizada por la ley, como lo es la consagrada por el artículo 40 del C. de P.C., no entraña la hipótesis que contempla el numeral 1º del artículo 74 ibídem, ya que este, en muchas veces, no depende del juicioso estudio que haga del problema jurídico, sino del conocer judicial, (criterios, experiencia del funcionario, etc.), al cual es ajeno.*

*Con todo, como es posible que quien fuere llamado a un proceso y con ocasión de éste hubiese sufrido un perjuicio moral, ora porque se mantuvo en un estado de angustia permanente, ya porque se le afectó en su personalidad resulta obvio que quien injustamente los originó deba resarcirlos.*

Precisamente la Corte sobre el punto ha sostenido lo siguiente:

"Postulado de valor axiomático en el ordenamiento jurídico nacional, fruto por cierto de una larga y fecunda evolución jurisprudencial iniciada por la Corte (fallo de Casación publicado en la G.J. Num. 1515, pág. 220) en el año de 1992, es aquel según el cual, por imperativo de los arts. 2341 y 2356 —este último en su primer inciso— del Código Civil, todo daño es resarcible, aún el no patrimonial, si se ha provocado por un ataque antijurídico a un interés legítimo reconocido como tal por el Derecho. De aquí entonces, que ya en 1924 (Casación de 22 de agosto, publicada en G.J. T. XXXI, pág. 83), aludiendo al carácter resarcible de esta clase de agravios y para responder a los conocidos reparos que contra esa idea se han planteado los teorizantes y prácticos, dijo la Corporación que '... tratándose de estimar perjuicios que pueden llamarse morales, por no referirse al daño pecuniario en la hacienda y patrimonio del damnificado, se presenta el escollo de la indeterminación de la cuantía por falta de unidad de medida para su apreciación; pero ello no es motivo para desconocer el hecho de la reparación, aun cuando esta sea difícil o imposible. En estos casos debe buscarse una reparación pecuniaria que de alguna manera reemplace o permita reemplazar el bien perdido o el dolor sufrido, haciendo la pena menos sensible, abriéndole al querellante una nueva fuente de alivio y bienestar...' para añadir algunos años después en 1937 (G.J. Num. 1926 pág. 367), a través de la Sala de Negocios Generales y con el ostensible objetivo de señalar precisos derroteros en busca de evitar peligrosas desviaciones que así como '... la reparación pecuniaria del daño moral se ha aceptado por la mayoría de las legislaciones, no obstante las opiniones de eminentes tratadistas que se oponen a que se aprecie en dinero el daño / moral...' no es menos cierto que esa reparación '... no debe ser limitada ni puede aceptarse como una regla general para todos los casos de indemnización por daños civiles'.

"Síguese de cuanto acaba de decirse que una cosa es que se acepte la resarcibilidad de los daños no patrimoniales, si se quiere a la manera de escuela indiscutida del principio de conformidad con el cual '... todo derecho lesionado requiere una reparación necesaria para conservar la armonía social...' (Casación de 22 de agosto de 1924 antes citada), y otra harto diferente, es el régimen al que se encuentra sometida esta modalidad indemnizatoria. Los equívocos en este aspecto abundan y, con inusitada frecuencia, las consecuencias son lamentables, no obstante que la doctrina jurisprudencial de la Corte ha trazado directrices claras y categóricas sobre este particular en un buen número de providencias. Una de ellas, la sentencia



de casación civil de 15 de marzo de 1941 (G.J. Num. 1966, pág. 795) en cuyos considerandos se leen los siguientes pasajes, muy a la medida de la especie en estudio: "... *Perjuicio moral es el que proviene de un hecho ilícito que ofende, no los derechos patrimoniales ni la persona física, sino la personalidad moral del damnificado, hiriendo uno de sus intereses legítimos o bienes no económicos de los que integran lo que generalmente se llama patrimonio moral de una persona. El daño moral se puede entender de dos maneras que dan lugar a su subdivisión: en perjuicios morales propiamente dichos, que son los que afectan la parte social del patrimonio moral, como los atentados contra el honor, la reputación, las consideraciones sociales (...) y en perjuicio de afección que son los que hieren la parte afectiva del patrimonio moral, las convicciones y los sentimientos de amor dentro de las vinculaciones familiares, como la pérdida de o el daño a personas queridas (...) ambas especies de daño moral se han tenido por nuestra jurisprudencia como fuentes generadoras de la obligación de reparar...*".

Líneas adelante, y refiriéndose al régimen probatorio del daño expatrimonial, precisó:

"Una segunda reflexión, es que, en este campo de suyo intrincado y tan propenso a fomentar quiméricas expectativas, a los precedentes judiciales, debe tenerse en su cabal significado y es por eso que, en cuanto al régimen probatorio del daño expatrimonial se refiere, las presunciones simples y las probanzas que se producen 'in re ipsa...' — vale decir aquellas emergentes de una situación de hecho tal que hace presumir que la misma deba ser fuente del perjuicio — unas y otras empleadas para darle solución a un tipo especial de problemas consustanciales a la reparación del daño moral, no pueden ser evocadas a la ligera para aspirar, por ejemplo y como acontece en el presente caso, a que la presunción de perjuicios morales causados a los parientes cercanos de la víctima fallecida, admitida por la Corte y sin duda columna vertebral tanto del pronunciamiento que tuvieron a bien citar los tres interesados (sentencia de 2 de julio de 1987, aun no publicada) como tantos otros que le sirven de antecedentes — v.gr. las sentencias de 23 de abril de 1941 y 26 de marzo de 1943, ambas de la Sala de Negocios Generales publicadas en la G.J. Nums. 1971 y 1996, así como la sentencia de casación de 11 de mayo de 1976 publicada en el tomo CLII de la G.J. págs. 128 y siguientes — por sí sola y sin más nada sirva para tasar en cantidad líquida el monto de la indemnización del agra-



vio moral del que se quejan los Magistrados absueltos, equiparando o dando a entender que requieren de idéntico tratamiento numérico la satisfacción económica que, a título de afirmación de la injusticia cometida, va destinada a mitigar el pesar o aflicción sufridos, cuando median vínculos cercanos de carácter familiar, por la muerte de un hijo o del cónyuge, por una parte, y por la otra las consecuencias de la misma naturaleza — en esencia padecimientos o humillaciones — que haya traído aparejadas el ataque contra la reputación de los aludidos funcionarios” (auto del 13 de mayo de 1988).

Ahora bien, como de un lado la existencia y la intensidad del daño moral alegado deben ser establecidas positivamente con los elementos de convicción apropiados, toda vez que es apenas su cuantificación monetaria y siempre dentro de restricciones caracterizadamente estrictas, la materia en la que el juzgador le corresponderá obrar según su prudente arbitrio, dado que el daño moral está sujeto a las prescripciones comunes relativas al perjuicio como elemento de la responsabilidad por culpa civil extra-contractual, particularmente en lo atinente a su efectividad y a la intensidad real de los sentimientos afectados; y, de otro, que en tratándose en últimas, de daños extrapatrimoniales que no atañen a bienes susceptibles de reposición en términos económicos sino a verdaderos derechos personalísimos del individuo — por ejemplo a la dignidad inherente a una determinada investidura, al honor o a la reputación —, la eventual indemnización en dinero no puede ser nada diferente a un... “*quantum*” destinado a representar la justa medida de una satisfacción pecuniaria y personal de la víctima (auto cit.), es de precisar:

En el presente caso, los magistrados demandados, en el escrito de regulación de perjuicios, no concretaron en una suma específica, el monto de tales daños morales, ni menos, precisaron qué otras circunstancias, distintas a las consideradas en la providencia que los absolvió, les causó el daño moral cuya cuantificación hoy reclaman. Por la aludida falta de determinación y como no se señalaron parámetros que sirvan de guía para hacer dicha regulación, la Corporación, arrendida la investidura de los demandados, al igual que las circunstancias especiales que rodearon este evento, estima en la cantidad de Quinientos mil pesos moneda corriente (\$500.000,00), el valor del daño moral subjetivo, a cada uno de los funcionarios absueltos.

Por las razones así expuestas, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, fija en la suma de Quinientos mil pesos (\$500.000.00) moneda legal colombiana, la cuantía de los perjuicios que IBO ROA ROA debe pagar a cada uno de los doctores ARIEL SALAZAR RAMIREZ, CESAR JULIO VALENCIA COPETE Y CLARA INES VARGAS HERNANDEZ.

*Sin costas en el incidente.*

Notifíquese.

*Pedro Lafont Pianetta, Nicolás Bechara Simancas, Jorge Antonio Castillo Rugeles, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra.*

**VIOLACION NORMA SUSTANCIAL—Vía Directa e  
Indirecta/ERROR DE HECHO Y DE DERECHO/NORMA  
PROBATORIA**

1) El recurrente en casación puede acusar la sentencia que combate por supuesta violación de normas de derecho sustancial, e invocar transgresión o inobservancia de tales normas, ya por vía directa, ora por vía indirecta, con absoluta independencia de las conclusiones probatorias a que llegó el sentenciador en la primera hipótesis, o planteando un disenso respecto de tales conclusiones en la segunda hipótesis, aduciendo para el efecto que el fallador incurrió en errores de hecho o de derecho en la apreciación probatoria.

2) De la diferencias existentes entre esas dos clases de yerros en la apreciación de las pruebas, no es admisible su alegación en un mismo campo y respecto de una misma prueba en forma simultánea.

Similar sentido: G.J., tomo XC, pág. 92; G.J. No. 2179, pág. 389.

3) Los arts. 198, 248, 249, 250, 252, numeral 3 del C. de P. C., son normas de disciplina probatoria, cuya transgresión —de haberse producido— sería el medio para la ocurrencia de errores de derecho en la apreciación probatoria.

Pero no es de recibo alegar cuando la causal invocada es la violación indirecta de normas sustanciales por error de hecho en la apreciación probatoria.

*Corte Suprema de Justicia. — Sala de Casación Civil. — Santafé de Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).*

Magistrado Ponente: *Doctor Pedro Lafont Pionera*

Se decide por la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá —Sala Civil—, el 18 de marzo de 1993, en el proceso ordinario promovido por EMEL DURAN JAIMES contra LA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA, S.A.

### *1. ANTECEDENTES*

1. Mediante demanda que obra a folios 43 a 47 del cuaderno uno, el señor Emel Durán Jaimes convocó a La Nacional Compañía de Seguros Generales de Colombia S. A., para que, previo el trámite de un proceso ordinario de mayor cuantía, se declarase a la demandada como obligada al pago "del siniestro ocurrido el 4 de noviembre de 1987 en cuanto al vehículo con placas UR-3699 por estar asegurado con la póliza No. 04-274.264 expedida por la compañía demandada", así como al pago de "los perjuicios materiales" de los cuales ha sido víctima el actor, como "tomador y beneficiario" del seguro mencionado, como consecuencia del "incumplimiento" de la compañía demandada respecto de sus obligaciones derivadas de ese contrato (fl. 43, C-1).

2. Como presupuestos fácticos de sus pretensiones, en resumen, expuso el demandante los siguientes:

2.1. El señor Emel Durán Jaimes contrató un seguro de automóviles con La Nacional Compañía de Seguros Generales de Colombia S. A., para amparar con él el riesgo de daño total o parcial del vehículo de placas UR-3699, marca Ford LT 900, motor No. 10917523, chasis 4490WVJG9126, modelo 1980, dedicado al servicio público de carga, así como "un trailer marca Inca Freinauff, color marfil, el primero hasta por la suma de \$10'000.000,00 y el segundo, hasta por la suma de \$1'500.000,00, contrato de seguro que aparece contenido en la póliza distinguida con el número 04-274-264, expedida por la compañía demandada.

2.2. La "tractomula" descrita en el numeral precedente, se accidentó el 4 de noviembre de 1987 en la carretera que de Cúcuta conduce a Bucaramanga, razón por la cual el tomador y beneficiario del seguro auxiliado solicitó a la compañía aseguradora demandada el pago del valor de la reparación del vehículo según lo pactado, reclamación esta que fue objeto

da por La Nacional Compañía de Seguros Generales de Colombia S. A., por cuanto, según se dijo, en la tractomula aludida, se transportaba al momento del accidente mercancía "azarosa, inflamable o explosiva", sin "la previa notificación a la compañía".

2.3. Los daños parciales ocasionados al vehículo en el accidente de tránsito ocurrido el 4 de noviembre de 1987, conforme a los gastos de reparación pagados por el demandante ante la negativa a hacerlo por parte de la compañía aseguradora demandada, ascendieron a \$5'448.000,00, a lo cual debe agregarse por concepto de lucro cesante, la suma de \$10'000.000,00, que se obtiene de restar al valor del producto mensual (\$24'000.000,00, en 30 días a razón de \$80.000,00 diarios), el valor de las costas de operación del vehículo.

2.4. Al momento del accidente, la póliza de seguro cuyo pago se reclama se encontraba vigente y el actor nada adeudaba a la compañía aseguradora por concepto de la prima respectiva.

2.5. La causa del accidente ocurrido al vehículo aludido el 4 de noviembre de 1987, no fue el transporte de mercancías "azarosas, inflamable o explosiva", sino el haberse cedido "la bancada de la carretera por el peso del automotor" (fl. 44, C-1).

3. Notificada la compañía aseguradora aquí demandada del auto admisorio de la demanda y corrido que le fue el traslado de la misma y sus anexos, le dió contestación como aparece a folios 62 a 64 del cuaderno uno. En ella, se opuso en forma absoluta a las pretensiones del actor, manifestó estar a lo que se pruebe respecto de los hechos invocados para sustentarlas y propuso las excepciones que denominó "culpa del asegurado", "incumplimiento" de este, "terminación" del contrato de seguro, "nulidad" del mismo y "exclusión del riesgo" (fl. 63, C-1).

4. Como culminación de la primera instancia, el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, dictó sentencia el 15 de septiembre de 1992 (fs. 188 a 191, C-1), en la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

5. Apelado el fallo de primer grado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá - Sala Civil—, profirió sentencia

para desatar la apelación el 18 de marzo de 1993 (fls. 15 a 22, C-7), en la que se confirmó la dictada por el a-quo.

6. Recurrida entonces en casación la sentencia de segunda instancia por la parte actora, de la decisión de este recurso extraordinario se ocupa ahora la Corte.

## *II- LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL*

El tribunal, luego de examinar la actuación cumplida durante la primera instancia, halló reunidos los presupuestos procesales y, por ello, encontró que era procedente dictar fallo de mérito.

En esa dirección, expresa luego que en este proceso la parte actora no cumplió la carga de probar el siniestro del cual deriva la obligación de la compañía demandada para con el asegurado, pues, a su juicio, "las declaraciones aportadas" para ello resultar "inidóneas", pues no fueron contradichas por la parte demandada, sino simplemente acompañadas a la demanda inicial, como quiera que fueron recaudadas como pruebas anticipadas, y los testigos "no fueron convocados" a diligencia de ratificación de sus declaraciones, como lo exige el art. 229 del Código de Procedimiento Civil (fl. 20, C-7).

De otra parte, aún haciendo caso omiso de la "deficiencia probatoria en punto a la demostración del siniestro", tampoco podrían prosperar las pretensiones del actor, por cuanto este no comunicó al asegurador el transporte de mercancías "azarosas", es decir, de aquellas "cuyo tratamiento involucra riesgo o inseguridad", como sucede con el combustible que "se reconoce llevaba el vehículo siniestrado", razón por la cual, conforme a lo dispuesto por el artículo 1060 del Código de Comercio, "se produjo la terminación del amparo" (fl. 21, C-7).

## *III - LA DEMANDA DE CASACION*

Dos cargos formula el recurrente a la sentencia impugnada y, en ambos, invoca para proponerlos la primera de las causales de casación consagradas por el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil.

Dado que en el primero de los cargos erigidos para combatir el fallo

del tribunal no se denunció ninguna norma sustancial, motivo por el cual la demanda se inadmitió en relación con el mismo, se circunscribe entonces ahora la Corte el análisis y decisión del segundo de ellos.

### *CARGO SEGUNDO*

Acusa el censor la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá —Sala Civil— en este proceso, de “quebrantar indirectamente en la apreciación de la prueba, los artículos 198, 248, 249, 250, 252, numeral 3o. del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación” y los “artículos 1077 y 1060 del Código de Comercio por aplicación indebida” (fls. 13, edno. Corte).

En desarrollo del cargo, expresa el recurrente que el tribunal no tuvo en cuenta que en el proceso se produjo “confesión del apoderado” de la parte demandada, como se deduce de la ausencia de “desconocimiento de la ocurrencia del siniestro” y su aceptación de éste al proponer entre otras excepciones las de “culpa grave e incumplimiento del asegurado y prescripción” (fls. 13 y 14, edno. Corte).

De igual manera, el sentenciador de segundo grado, incurrió en “omisión de los indicios que dan por probado el siniestro”, como se infiere de “las declaraciones extraproceso, analizadas en la sentencia respectiva, pues si el artículo 279 del Código de Procedimiento Civil les da el carácter de prueba sumaria con mayor razón tendrán el carácter de indicio, si se encuentran debidamente probados (art. 248 del C. de P. C.)” (folio 14, edno. Corte), al igual que ocurre con la conducta procesal de la parte demandada.

Así mismo, manifiesta el recurrente que se produjo en el proceso la prueba de siniestro que el tribunal echa de menos, con “el reconocimiento implícito que se hizo de las comunicaciones cruzadas entre las partes siendo aportadas al proceso”, sin que se hubieren “desconocido por quiza correspondía (art. 276 del C. de P. C.)” (folio 14, edno. Corte).

Con tales deficiencias en la apreciación probatoria, a juicio del censor se violaron los artículos 1077 del Código de Comercio, por “aplicación indebida” y 1060 del mismo código por la misma razón.



Finalmente, manifiesta el recurrente que: "Comparada la conclusión probatoria del sentenciador con lo que demuestran en su conjunto los medios de convicción, se observa la comisión de yerro fáctico", pues, de haber tenido en cuenta las pruebas referidas se habría dado por demostrado "la existencia del siniestro" y la sentencia habría impuesto "la condena solicitada en el petitum demandatorio" (fls. 15 y 16, edno. Corte). Y, a renglón seguido, asevera el impugnador que, por lo dicho queda establecida "la cadena de errores de derecho cometidos por el dispensador de la justicia de segunda instancia" (folio 16, edno. Corte), por lo que ha de casarse la sentencia objeto de este recurso extraordinario.

### CONSIDERACIONES

1. Como es bien conocido, el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, permite al recurrente en casación acusar la sentencia que combate por supuesta violación de normas de derecho sustancial (causal 1a.), invocar la transgresión o inobservancia de tales normas, ya por la vía directa, ora por la indirecta, esto es, con absoluta independencia de las conclusiones probatorias a que llegó el sentenciador en la primera hipótesis, o planteando un disentiimiento respecto de tales conclusiones en la segunda hipótesis, aduciendo para el efecto que el fallador incurrió en errores de hecho o de derecho en la apreciación probatoria.

2. Dado que estas dos modalidades de error en la apreciación probatoria, son de naturaleza y contenido por completo diferente, como quiera que el yerro de hecho siempre radica en la contemplación objetiva o material de la prueba, al paso que el error de derecho en esa actividad jurisdiccional invariablemente se predica respecto de la contemplación jurídica de las pruebas, esto es, sobre la inobservancia de las normas de disciplina probatoria por el juez, desde siempre se ha exigido al recurrente que acude a la invocación de la causal primera de casación por supuesta violación indirecta de normas de derecho sustancial, no solo la indicación de las pruebas que dice mal apreciadas, sino, además, el señalamiento concreto de la especie de error que enrostra al fallador haber cometido al examinar y fijar la cuestión fáctica debatida en el proceso.

3. De ahí que tiene por sentado la jurisprudencia de esta Corporación, que de las diferencias existentes entre el error de hecho y el de derecho en la apreciación de las pruebas, no es admisible su alegación en un mismo

campo y respecto de una misma prueba en forma simultánea, pues ello pugna abiertamente con la lógica jurídica, ya que "para que aparezca el derecho es necesario tener en cuenta la prueba existente, es decir, analizarla, y desde el momento en que dicha labor se efectúa, ya no ha habido lugar a error de hecho, que implica desconocer la prueba que obra en autos o reconocer la que en ellos no existe" (G. J., tomo XC, pág. 92), doctrina a cuyo respecto agrega la Corte que, en caso de causarse simultáneamente de la comisión de estas dos especies de yerro sobre la misma prueba ello es contrario a la técnica propia del recurso y al derecho de contradicción del opositor, pues por lo que concierne a la tramitación del recuso, a qué se atiene el opositor para combatir el cargo: al de hecho, o al de derecho? Y el juez en casación, qué rumbo sigue? Los dos? Imposible. El uno o el otro? No habría razón para seguir este y descartar aquel" (G. J. No. 2179 pág. 389).

4. Aplicadas las nociones someramente expuestas en los numerales que anteceden, es evidente que el segundo de los cargos formulados por el recurrente contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá en este proceso, está destinado al fracaso, sea cual fuere el enunciamiento que se le de a la mencionada acusación.

4.1. Entendida la impugnación tal como aparece redactada por el casacionista, observa la Corte que se denuncian como infringidos los artículos 198, 248, 249, 250, 252, numeral 3o. del Código de Procedimiento Civil (folio 13, edno. Corte), normas todas ellas de disciplina probatoria, cuya transgresión, —de haberse producido—, sería el medio para la ocurrencia de errores de derecho en la apreciación probatoria pero que, como es sabido, no es de recibo alegar cuando la causal invocada es la violación indirecta de normas sustanciales por error de hecho en la apreciación probatoria. Sin embargo, mas adelante el censor acusa la sentencia recurrida por "yerro fáctico" (fl. 15, edno. Corte) en la labor de apreciación de las pruebas (confesión, testimonio, folios 14 y 15, edno. Corte) y termina con la aseveración de que en esa labor el sentenciador incurrió en una "cadena de errores de derecho" (fl. 16, edno. Corte) lo que a todas luces pugna con la lógica pues, siendo radicalmente diferentes el yerro de derecho y el de hecho no se entiende, de ninguna manera, su aducción respecto de las mismas pruebas, como soporte de la acusación pues ello conduce a un estado de perplejidad tal que impide a la Corte el estudio de fondo de ese cargo,

ya que esas especies de error no pueden coexistir, y a la Corte le está vedado escoger a su arbitrio uno de ellos. Así, ante la magnitud de la contradicción que envuelve por este aspecto la censura, esa sola deficiencia la condena al fracaso, sin que nada pueda hacerse por la Corte para evitarlo, pues, como se sabe, el carácter extraordinario del recurso de casación se lo impide.

4.2. Pero aún entendida la presente acusación como formulada por violación indirecta de las normas sustanciales, a consecuencia de errores de derecho cometidos por el ad-quem con violación de las normas de disciplina probatoria indicadas al comienzo del cargo y reiteradas al final del mismo; tampoco encuentra la Corte que se haya ajustado a la regla técnica de la sustentación del yerro de derecho aducido. Porque si bien el casacionista aduce algunos reparos jurídicos de valoraciones probatorias, no es menos cierto que los hace descamisar en situaciones de contemplación objetiva de los medios probatorios que reflejan la estructuración de errores de hecho. En efecto, cuando el recurrente afirma tajantemente que el tribunal no tuvo en cuenta la confesión del apoderado, que incurrió en la omisión de indicios que dan por probado el siniestro y que echó de menos la prueba del reconocimiento implícito que hiciera la demandada del siniestro, está sin duda haciendo reparos de carácter objetivo sobre la existencia de la prueba, consistente en endilgarle al sentenciador de segundo grado no haber visto o no haber tenido en cuenta los citados medios de prueba, existiendo en el proceso, lo cual estructura, dentro de la concepción de la técnica de casación pertinente, errores de hecho, y estos errores, por suponer la omisión total o parcial de la apreciación fáctica de la prueba, no pueden servir de fundamento para edificar o sustentar errores de derecho, que, contrariamente a lo dicho, presuponen la existencia y observancia fáctica de tales medios de convicción. Por consiguiente, encuentra también defectuosa la Sala la aducción de yeros fácticos o de hecho para sustentar la comisión de errores de derecho en la violación indirecta de normas de derecho sustancial.

4.3. Pero aún siendo admisible la acusación sub-examine entendida como formulada por violación indirecta de normas de derecho sustancial, cometida a consecuencia de errores de derecho, con la consiguiente eliminación de los mencionados defectos incompatibles relativos a los errores de hecho, dicha impugnación, aún ajustándose a lo dispuesto en el num. 4 del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, no alcanzaría a satisfacer plena-

mente la técnica de casación. Porque adolecería de la falencia de incompleta, que impediría también a la corte por este motivo abordar su estudio de fondo, por no tener la virtualidad de modificar la sentencia atacada. En efecto, si el sentenciador de segundo grado, fuera del defecto de valoración probatoria mencionada, también apoyó su decisión en "la terminación del amparo" por la omisión de comunicación del asegurado al asegurador de la existencia de transporte de mercancías azarosas (art. 1060 del C. Co., fl. 21, C-67), era deber del recurrente atacar de manera directa y frontal esta fundamentación, la que, por ser por sí sola suficiente para mantener el fallo impugnado, lo dejó incólume. Siendo así las cosas, la acusación reducida solamente al primero de los pilares mencionados, al dejar indemne el segundo que sostiene el fallo, hace inócuo el estudio de aquella.

Por lo dicho, no prospera pues, el cargo objeto de análisis.

#### IV. DECISION

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **NO CASA** la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá —Sala Civil—, el 18 de marzo de 1993, en el proceso ordinario promovido por Emel Durán Jaimes contra La Nacional Compañía de Seguros Generales de Colombia S. A.

Costos a cargo de la parte recurrente. Tásense.

Cópiase, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

*Pedro Lafont Pianetta, Nicolás Bechara Simancas, Jorge Castillo Rugeles, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor Martín Naranjo, Rafael Romero Sierra*

### **ERROR IN PROCEDENDO/PRINCIPIO DE LA CONGRUENCIA/INCONGRUENCIA/ VIOLACION NORMA SUSTANCIAL**

1) Si el petitum de la demanda y las excepciones del contradictor señalan el campo en que puede y debe moverse el juez, resulta patente que si éste falla por fuera de lo pedido, o condena o más de lo suplicado, o deja sin resolución materias que le fueron sometidas oportuna y legalmente, entonces, comete un error in procedendo y quebranta de manera franca el principio de la congruencia de las sentencias.

Igual sentido: sentencia 325 de 29 de agosto de 1988.

2) Para saber si hay congruencia, y en consecuencia, hallar asidero a la causal segunda de casación, sólo debe tenerse en cuenta la parte resolutive del fallo.

Igual sentido: G.J.T. LXXVIII, pág. 882.

3) La violación de la norma sustancial (art. 1081 del Código de Comercio) sería alegable por la primera de las causales legales de casación y no por la segunda de ellas.

### **PRESCRIPCION ORDINARIA/ CONTRATO DE SEGURO/ SEGURO DE VIDA**

1) La prescripción ordinaria de los dos años de las acciones derivadas de un contrato de seguro de vida, comienza a correr cuando se ha conocido o debido tener conocimiento de la muerte del asegurado.

## PRESCRIPCION INTERRUPCION

Inteligencia del art. 90 del C. de P. C.

Igual sentido: sentencia del 1° de octubre de 1986, G.J. CLXXXIV, N° 2423, pág. 304.

F.F.: C. de P. C. Art.: 90, 698 ibídem; C. C. Art.: 2524; DECRETO Num.: 1400 y 2019 de 1970; DECRETO Num.: 2282 Año: 1989 Art.: 1, mod. 183.

*Corte Suprema de Justicia. – Sala de Casación Civil. – Santafé de Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).*

Magistrado Ponente: *Doctor Pedro Lafont Pianetta.*

*Ref: Expediente N° 4443*

*Sentencia N° 143*

Se decide el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali –Sala Civil–, el 20 de noviembre de 1992 en el proceso ordinario promovido por MARTHA CECILIA RUIZ DE SOLARTE en su propio nombre y como representante legal de los menores JAZMIN ELIANA Y ROY ALEXANDER SOLARTE RUIZ contra la COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A.

### I. ANTECEDENTES

1. Mediante demanda que por reparto correspondió conocer al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cali y que obra a folios 23 a 26 del cuaderno N° 1, la señora MARTHA CECILIA RUIZ DE SOLARTE, en su propio nombre y en representación de sus hijos mejores JAZMIN ELIANA y ROY ALEXANDER SOLARTE RUIZ, convocó a un proceso ordinario de mayor cuantía a la COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A., para que por la jurisdicción se condene a la parte demandada a pagar a MARTHA CECILIA RUIZ DE SOLARTE la suma de un millón de pesos (\$1.000.000.00), más los intereses legales a la tasa del 3.0125% mensual y los moratorios que se causaron a partir del 25 de junio de 1988 y hasta la fecha de su cancelación, por concepto del valor de la suma asegurada conforme a contratos de seguro contenidos en las pólizas 15709 y 15710, expedidos por esa Compañía Aseguradora. Igualmente



impetra que se condene a la parte demandada al pago de la suma de dos millones de pesos (\$2'000.000), conforme a lo pactado en la "cláusula de indemnizaciones adicionales por muerte accidental", con los intereses corrientes a la tasa del 3.0125% mensual y moratorios del 4.98%, a partir del 25 de junio de 1988 y hasta la fecha en que el pago se efectúe, así como las sumas de dos millones de pesos (\$2'000.000) y un millón de pesos (\$1'000.000), conforme a los anexos de las pólizas ya mencionadas, en ambos casos con intereses corrientes y moratorios a las tasas señaladas, a partir del 25 de junio de 1988 y hasta que el pago se efectúe, todo por haber ocurrido el siniestro cuyo riesgo se amparó con dichas pólizas de seguro, es decir, la muerte de José Rolando Solarte Plaza. Así mismo pretende se condene a la Compañía demandada al pago de intereses corrientes y moratorios a ROY ALEXANDER SOLARTE RUIZ y JAZMIN ELIANA SOLARTE RUIZ, por el período comprendido entre el 25 de junio de 1988 y el 7 de septiembre de 1989, fecha esta última en que a ellos se efectuó un "pago parcial" (fs. 24 y 25, C. 1).

2. La parte demandante aduce como supuestos fácticos de las pretensiones anteriores, los que se resumen así:

2.1. José Rolando Solarte Plaza, cónyuge de Martha Cecilia Ruiz de Solarte y padre de Roy Alexander y Jazmín Eliana Solarte Ruiz, tomó el 12 de junio de 1987 un seguro de vida, mediante póliza No. 15709, por la suma de dos millones de pesos (\$2'000.000), en el cual señaló como beneficiarios, por partes iguales, a su cónyuge e hijos ya citados.

2.2. En la póliza de seguro mencionada se pactó una cláusula de indemnización adicional en caso de muerte o desmembración accidental, por la suma de dos millones de pesos (\$2'000.000), y fue complementada además con el anexo No. 6717, por una suma asegurada de dos millones de pesos (\$2'000.000).

2.3. El señor José Rolando Solarte Plaza mediante póliza 15710 tomó igualmente a la misma compañía un seguro ordinario de vida por la suma de un millón de pesos (\$1'000.000), con un anexo a cláusula de indemnización adicional en caso de muerte o desmembración por causa accidental, por suma de un millón de pesos (\$1'000.000).

2.4. El tomador de los seguros aludidos falleció el 25 de abril de 1988



en el municipio de El Bordo (Cauca), como consecuencia de herida causada con arma de fuego en la vía pública.

2.5. Dentro de los 15 días siguientes al fallecimiento de José Rolando Solarte Plaza su cónyuge, Martha Cecilia Solarte, presentó reclamación a la COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A. para el pago de las sumas aseguradas con las pólizas a que se ha hecho referencia en los numerales precedentes, reclamación ésta que fue objetada por la compañía demandada en cuanto al valor estipulado en el anexo 6717 y al porcentaje que pudiera corresponder a la viuda del causante.

2.6. A los menores Jazmín Eliana y Roy Alexander Solarte Ruiz se les canceló la suma de dos millones de pesos (\$2'000.000), el 7 de septiembre de 1989 conforme a su carácter de beneficiarios del seguro tomado por su padre, según lo ya expuesto.

2.7. Conforme a las resoluciones Nos. 1361 del 3 de marzo de 1989 y 1360 del 3 de mayo de ese año, emanadas de la Superintendencia Bancaria, los intereses corrientes fueron fijados para esa época a la tasa del 3.0125% y 4.98% mensual, respectivamente.

3. Admitida la demanda el 20 de abril de 1990 (fl. 31, C-1), se ordenó la notificación de ese auto y el traslado de la misma y sus anexos al representante legal de la COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A., por conducto del juez comisionado, diligencia ésta que el Juzgado Veintuno Civil del Circuito de Santafé de Bogotá ordenó cumplir por auto calendarado el 15 de mayo de 1990.

Pagada la notificación por el apoderado de la parte actora el 10 de junio de 1990 (fls. 39, C-1), esta diligencia se llevó a cabo el 6 de junio de ese año, conforme aparece en el acta respectiva, visible a folio 40 del cuaderno citado.

4. La COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A., le dio contestación a la demanda en escrito que obra a folios 65 a 72 del cuaderno No. 1, en el cual se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones las que denominó "ausencia de derecho para reclamar el valor del seguro", "riesgos excluidos y no cubiertos", "cobro de lo no debido" y "prescripción". Respecto a los hechos, aceptó la demandada la expedición de las pólizas de seguro y sus anexos.

5. Cumplida la tramitación propia de la primera instancia, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cali le puso fin a ella mediante sentencia dictada el 23 de junio de 1992 (fls. 106 a 111, C-1), en la cual declaró probada "la excepción de prescripción" propuesta por la parte demandada y condenó en costas a la actora.

6. Apelado el fallo de primer grado por la parte vencida, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali —Sala Civil—, desató la apelación mediante sentencia proferida el 20 de noviembre de 1992 (fls. 9 a 12, cdno. Tribunal), en la cual se confirmó la del a-quo.

7. Interpuesto entonces el recurso extraordinario de casación contra la sentencia del Tribunal, éste fue concedido por auto de 26 de abril de 1993 (fl. 32, cdno. Tribunal), de cuya decisión se ocupa ahora la Corte.

## *II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL*

1. El Tribunal, luego de sintetizar el litigio y la actuación llevada a cabo por el Juez y por las partes durante la primera instancia, encontró cumplidos los presupuestos procesales y válida esa actuación, por lo que procede a dictar sentencia de mérito.

2. A continuación manifiesta que planteada por la parte demandada la excepción de prescripción se impone analizarla por razones de economía procesal.

3. En ese orden de ideas, luego de recordar el contenido del artículo 1081 del Código de Comercio, señala que efectivamente se operó la prescripción alegada por la parte demandada, por cuanto el auto admisorio de la demanda fue notificado el "5 de julio de 1990" (fl. 11, cdno. Tribunal), lo que quiere decir que ello ocurrió después de vencidos los dos años del fallecimiento de José Rolando Solarte Plaza, acaecido el 25 de abril de 1988, razón por la cual ha de darse aplicación al artículo 1081 del Código de Comercio, en cuyo primer inciso se establece que las acciones que se derivan del contrato de seguro están sujetas a prescripción ordinaria de dos años, que empiezan a contarse "desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción" (fl. 11, cdno. Tribunal).

Agrega además el Tribunal, que por negligencia de la parte actora no se notificó el auto admisorio de la demanda dentro de los precisos términos señalados en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil para evitar que se consumara la prescripción, la que, en consecuencia, declaró, con razón, el fallador de primer grado en la sentencia recurrida.

### *III. LA DEMANDA DE CASACION*

Dos cargos formula la recurrente a la sentencia impugnada. De ellos el primero por incongruencia del fallo (artículo 368, numeral 2o. C.P.C.), y el segundo por violación indirecta de normas de derecho sustancial (artículo 368, numeral 1o. C.P.C.), cargos éstos que serán despachados en el orden en que fueron propuestos.

#### *CARGO PRIMERO*

Acusa en este cargo la sentencia impugnada la recurrente, por cuanto, a su juicio, ella no está "en consonancia con los hechos y pretensiones de la demanda" (fl. 10, edno. Corte).

En la argumentación expuesta para sustentar la censura, manifiesta la recurrente que el Tribunal se limitó a realizar un análisis superficial de lo dispuesto por el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil y, en esa dirección, por una simple comparación de fechas concluyó en la existencia de la prescripción ordinaria del contrato de seguro, establecida por el artículo 1081 del Código de Comercio, tomando para el efecto como puntos de referencia la fecha de fallecimiento de José Rolando Solarte Plaza (25 de abril de 1988) y la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda a la sociedad Compañía de Seguros de Vida Aurora S. A. (6 de julio de 1990).

El Tribunal, incurrió en incongruencia según la demandante en casación, porque no tuvo en cuenta que las actuaciones tendientes a obtener la notificación personal de la entidad demandada y que correspondía adelantar a la parte actora se cumplieron en tiempo, lo que significa que si "transcurrieron más de dos años no fue precisamente por negligencia de la parte actora sino por trámites propios del juzgado y en desarrollo de los procedimientos establecidos" circunstancias éstas que, de haber sido tenidas en cuenta por el Tribunal, lo habrían llevado a "concluir que la parte actora

fue diligente y que la excepción que se declaró probada no podía prosperar" (fl. 11, cdno. Corte).

Para reafirmar lo dicho, hace la recurrente un recuento de las actuaciones procesales cumplidas para la notificación de la parte demandada y expresa (fls. 11 y 12, cdno. Corte), al final de lo cual insiste en que "desde el momento de presentada la demanda el 29 de marzo de 1990 de manera casi que rápida y diligente por parte del actor se dieron todos los pasos hasta lograr la notificación personal y el traslado de la demanda al demandado, cumpliéndose en ese lapso con una serie de requisitos legales y trámites propios del procedimiento civil", que permiten concluir que la prescripción declarada en la sentencia realmente no ocurrió (fl. 12, cdno. Corte).

### CONSIDERACIONES

1. Conforme a lo dispuesto por los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia que ponga fin al litigio sometido a decisión de la jurisdicción del Estado, ha de contener un pronunciamiento expreso y claro sobre las pretensiones de la demanda y las excepciones formuladas por el demandado cuando proceda resolver sobre ellas.

2. Como puede apreciarse, esas normas legales se encuentran dirigidas a reglar la actividad del juzgador al momento de fallar la controversia, razón esta por la cual la infracción de las mismas constituye un error in procedendo, dado que cuando en él se incurre se desconoce por el sentenciador que las partes, al impetrar sus pretensiones en la demanda o formular excepciones aciertan a evitar la prosperidad de aquellas, delimitan el campo donde el Estado ha de ejercer su jurisdicción en ese litigio, salvo que en virtud de normas de orden público la ley lo autorice para hacer pronunciamientos oficiosos relacionados con el mismo. Por esta razón, tiene dicho la doctrina de la Corte que "*si el petitum de la demanda y las excepciones del contradictor señalan el campo en que puede y debe moverse el juez, resulta patente que si éste falla por fuera de lo pedido, o condena a más de lo suplicado, o deja sin resolución materias que le fueron sometidas oportuna y legalmente, entonces, comete un claro yerro in procedendo y quebranta de manera franca el principio de la congruencia de las sentencias, en virtud del cual, como ya se dijo, el fallo debe ser una respuesta acompañada con*

*cada una de las pretensiones deducidas y de las excepciones propuestas" (Sentencia 325 de 29 de agosto de 1988).*

3. De esta suerte, aparece que la falta de consonancia de la sentencia necesariamente ha de resultar de comparar lo pedido por las partes en la etapa de la litis contestatio del proceso y lo decidido por el juzgador al proferir el fallo, es decir, que a ella escapa la parte motiva de éste, asunto éste en torno del cual tiene dicho desde antiguo la jurisprudencia de esta Corporación que *"para saber si hay congruencia, y en consecuencia, hallar asidero a la causal segunda de casación, solo debe tenerse en cuenta la parte resolutive del fallo, según doctrina constante de la Corte, quien además añade que la causal no autoriza ni puede autorizar a entrar en el examen de las consideraciones que han servido al juzgador como motivo determinante de su fallo" (G.J. T. LXXVIII, pág. 882).*

4. Aplicadas las nociones anteriores al examen del cargo aquí analizado, se encuentra que no puede prosperar, por cuanto:

4.1. Al cotejar la sentencia atacada con la contestación a la demanda (fls. 9 a 12, cdno. Tribunal y 65 a 72, C-1 respectivamente), aparece que el fallo de segundo grado es confirmatorio de lo resuelto por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cali, despacho judicial que declaró probada la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada (fi. 71, C-1), lo que indica sin lugar a duda de ninguna naturaleza, que lo decidido guarda relación con la petición de la parte demandada para que se declarase la prescripción aludida, lo que, de suyo, señala que el cargo está condenado al fracaso.

4.2. Agréguese a lo anterior, que los yerros que la censura endilga al Tribunal por no haber tenido en cuenta la actividad desplegada por la parte demandante en procura de la notificación del auto admisorio de la demanda a la Compañía de Seguros de Vida Aurora S. A., lo que, en su opinión llevó al sentenciador a una conclusión equivocada respecto de su posible negligencia para que ese acto procesal se ajustara a lo dispuesto por el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil para interrumpir la prescripción, es asunto ajeno por completo a la incongruencia del fallo sobre la cual se erige este cargo, ya que, si en virtud de esa equivocación se incurrió en violación del artículo 1081 del Código de Comercio, como lo asevera la recurrente, *esa violación de la norma sustancial acabada de men-*

*cionar sería alegable por la primera de las causales de casación señaladas por la ley (artículo 368 C. P. C.) y no por la segunda, como aquí se hizo.*

Por lo dicho, el cargo no prospera.

### CARGO SEGUNDO

Acusa la impugnadora la sentencia recurrida en este cargo, por ser violatoria del artículo 1081 del Código de Comercio por violación indirecta, a consecuencia de "error manifiesto de hecho en la apreciación de la contestación de la demanda" (fl. 12, cdno. Corte).

En procura de sustentar el cargo, expresa la demandante en casación que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali "analiza de manera equivocada el contenido normativo del artículo 90 del C. de P. Civil del año 71, vigente al momento de presentarse la demanda" y, en su conclusión de que se debe confirmar la declaración de existencia de la prescripción propuesta como excepción por la parte demandada, razón por la cual se produjo la violación del artículo 1081 del Código de Comercio.

En ese orden de ideas, afirma la recurrente que el Tribunal no se detuvo a analizar que, luego de admitida la demanda, para su notificación fue comisionado el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, despacho judicial éste que mediante auto de 3 de mayo de 1990 solicitó se adicionara la comisión, lo que efectivamente se llevó a cabo como aparece a folio 35 del cuaderno No. 1; de tal manera que la orden de cumplir con esa comisión solo vino a proferirse el 24 de mayo de 1990 (fl. 36, C-1), y, en desarrollo de ella, luego de pagadas las expensas para el efecto se cumplió la notificación aludida "el 6 de julio de 1990" (fl. 40, C-1).

Así las cosas, a juicio de la recurrente, si la notificación del auto admisorio de la demanda se cumplió luego de transcurridos dos años de la muerte de José Rolando Solarte Plaza, ello no ocurrió por negligencia del actor sino por cuanto se estaba cumpliendo rigurosamente lo dispuesto por el artículo 90 del C. de P. C., "Trámites que no se podían pasar por alto y que suspendían cualquier término prescriptivo" (fl. 13, cdno. Corte).



## CONSIDERACIONES

1. Precisa la Corte que en materia de seguros, la legislación patria consagra dos tipos de prescripciones para "las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen": la ordinaria y la extraordinaria.

1.1. Pero tratándose de prescripción ordinaria, ha preceptuado el legislador que ésta "será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción" (Art. 1081 C.Co.).

1.2. Luego, la prescripción ordinaria de dos años de las acciones derivadas de un contrato de seguro de vida, comienza a correr cuando se ha conocido o debido tener conocimiento de la muerte del asegurado, porque si con esta se configura siniestro (art. 1072 C.Co.) que le da origen al poder de reclamar el valor del seguro (Arts. 1080 y 1077 C.Co.), basta simplemente el conocimiento que de ellas se tenga (vgr. por el testimonio, certificaciones, conocimiento directo, etc.) o que, por las circunstancias que la rodea, ha debido tenerse ese conocimiento de hecho (vgr. como cuando se trata de familiares o allegados que vivían con el difunto, o eran vecinos, y que, por esto y otros motivos, debieron conocer, etc.) o de derecho (vgr. registro de defunción), pues a partir de este momento se adquiere el entendimiento suficiente para solicitar las reclamaciones y promover las acciones del caso.

2. Ahora bien, para el establecimiento o no de la mencionada prescripción, se hace necesario precisar por la Corte el fenómeno de su interrupción a la luz del texto original del Código de Procedimiento Civil aplicable en el caso subexamine.

2.1. Con todo, previamente advierte la Sala que durante la vigencia de los artículos 2524 del Código Civil y 29 de la Ley 95 de 1890, hubo discusión doctrinaria en torno a la interrupción de la prescripción civil, pues al paso que unos sostenían que ella ocurría en la fecha de presentación de la demanda, otros argumentaban que tal interrupción se llevaba a efecto solamente cuando se notificara al demandado el auto admisorio de la demanda. Por ello, para poner fin a esa controversia, el artículo 698 del C. de P. C., derogó en forma expresa los artículos 2524 del Código Civil y



29 de la Ley 95 de 1890 y el legislador reguló de nuevo la materia conforme a lo prescrito por el artículo 90 del Código e Procedimiento Civil expedido mediante Decretos 1400 y 2019 de 1970; norma ésta cuyo texto original rigió hasta el 1.º de junio de 1990, fecha en que entró en vigencia el Decreto 2282 de 1989, que lo sustituyó por el actual (artículo 1.º, decreto citado, modificación 183, al C.P.C.).

2.2. Esta Corporación, en sentencia de 1.º de octubre de 1986, para fijar la inteligencia que ha de darse al artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, —en su texto original, expresó que allí se establecen “tres plazos sucesivos e ininterrumpidos, que corren desde el día siguiente al del vencimiento del anterior, para que la interrupción de la prescripción, adquisitiva o extintiva, opere desde la presentación de la demanda, que son: el de cinco días, que arranca siempre desde el día siguiente al de la admisión de la demanda, para que el demandante provea lo necesario para notificar el auto admisorio al demandado; el de diez días para la notificación personal del auto admisorio al demandado; y, el de dos meses, para que si dentro del plazo anterior no se pudo notificar personalmente al demandado, el demandante “efectúe las diligencias para que se cumpla con un curador ad litem...”. De tal suerte, el plazo de los dos meses comienza invariablemente desde el día siguiente al del vencimiento de los diez días que tiene el juzgado para notificar personalmente al demandado, sin perjuicio de la prisa que haya empleado el demandante para obtener más prontamente el emplazamiento de aquél” (G. J. T. CLXXXIV, No. 2423, 1986, pág. 304).

3. Aplicadas las nociones anteriores al caso sub-lit., encuentra la Corte que el cargo segundo propuesto contra la sentencia impugnada no está llamado a tener éxito, por las razones que van a expresarse:

3.1. Del examen del expediente, aparece que José Rolando Solarte Plaza falleció el 25 de abril de 1988 (fl. 3, C-1); e igualmente se encuentra demostrado que la demanda inicial fue presentada el 20 de marzo de 1990 (fls. 23 a 26v., C-1).

3.2. Del mismo modo se observa que el auto admisorio de la demanda aludida, fue proferido por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cali, el 20 de abril de 1990, (fl. 31v., C-1); y en esa misma fecha, se libró el des-

pacho comisorio No. 089 al Juzgado Civil del Circuito de Bogotá para cumplir la diligencia de notificación del auto admisorio de la demanda, que por reparto correspondió al Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de esta ciudad, despacho judicial que, como puede verse a folio 36 del cuaderno No. 1, el 15 de mayo de 1990 ordenó realizar la notificación aludida, para auxiliar en esta forma el despacho comisorio a que se ha hecho referencia. Además, se observa que las expensas necesarias para el pago de la notificación fueron canceladas el 10 de junio de 1990, según constancia que obra a folio 3 del mismo cuaderno, luego de lo cual esa notificación se cumplió el 6 de junio de 1990, conforme al acta de la diligencia respectiva (fl. 40, C-1).

3.3. Pues bien, como surge con absoluta transparencia de las actuaciones procesales que acaban de ser mencionadas, es evidente que la parte actora no dio cumplimiento a la carga procesal que para ella establecía el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, razón ésta por la cual, no puede tenerse como interrumpida la prescripción desde la fecha en que la demanda fue presentada y, dado que la notificación del auto admisorio de ésta se efectuó el día 6 de junio de 1990 (no 6 de julio de ese año, como afirma la parte recurrente en casación), forzosamente ha de concluirse que no erró el Tribunal al declarar la prescripción alegada por la parte demandada como excepción invocando para el efecto lo dispuesto por el artículo 1081 del Código de comercio, como quiera que entre el 25 de abril de 1988 (fecha de la muerte de José Rolando Solarte Plaza y en la que, por el carácter de los demandantes debió conocerse, cuestión indiscutida en el proceso) y la fecha en que se cumplió la notificación del auto admisorio de la demanda (6 de junio de 1990), transcurrieron más de dos años, tiempo señalado por la norma citada del Código de Comercio para que opere la prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro.

En consecuencia, no prospera el cargo segundo.

#### IV- DECISION

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali - Sala Civil— el 20 de noviembre de 1992, en el proceso ordinario promovido por MARTHA

CECILIA RUIZ DE SOLARTE en su propio nombre y como representante legal de los menores JAZMIN ELIANA y ROY ALEXANDER SOLARTE RUIZ, contra la COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A.

Costas a cargo de la parte recurrente. Téase.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

*Pedro Lafont Pinnetta, Nicolás Bechara Simancas, Jorge Castillo Rugeles, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra*

**REPRESENTACION/INOPONIBILIDAD/NEGOCIO  
JURIDICO/CAPACIDAD/VALIDEZ/NULIDAD  
SUSTANCIAL/PRINCIPIO "LO QUE UNA PERSONA  
EJECUTA EN NOMBRE DE OTRA NO TENIENDO PODER  
DE ELLA NI DE LA LEY PARA REPRESENTARLA, CARECE  
DE EFECTOS CONTRA EL REPRESENTADO"/CONSENTI-  
MIENTO/MANDATO/INEXISTENCIA**

1) Los actos de los representantes que desborden sus poderes son sancionados por el ordenamiento con una particular forma de ineficacia que se conoce como la inoponibilidad del negocio frente al representado, figura distinta a cualquier otro tipo de sanción de los actos irregulares, especialmente las dimanantes de la incapacidad de la persona.

Igual sentido: Cas. Junio 24 de 1954: G.J. LXVII, pág. 852.

2. Distinción entre los conceptos: "capacidad" y "oponibilidad"; "invalidéz", "inoponibilidad" y "declaratoria de nulidad".

3. Principio "lo que una persona ejecuta en nombre de otra no teniendo poder de ella ni de la ley para representarla, carece de efectos contra el representado".

4. Concepto del término jurídico "consentimiento". Operancia de éste respecto del contrato de mandato.

Igual sentido: G.J. XLVII, pág. 81 y ss.

5. Distinción entre "inoponibilidad" e "inexistencia" del negocio.

F.F.: C. C. Art.: 1750, 1505, 1502, 2304 Ibídem.

**INTERPRETACION DE LA DEMANDA**

La interpretación de la demanda es una labor que debe emprender el

Juez para desentrañar el querer del demandante, querer que está ahí, implícito en el libelo pero que no se muestra claro o coherente. Pero en modo alguno, so pretexto de interpretar lo que es obvio, puede el fallador darle un alcance distinto a la misma, o hacerle decir lo que objetivamente no dice, o, en resumidas cuentas, alterar ostensiblemente su contenido. Interpretación del libelo introductorio del proceso en la que se pide nulidad de un contrato, más no una declaratoria de inoponibilidad.

*Corte Suprema de Justicia.— Sala de Casación Civil—* Santafé de Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Magistrado Ponente: *Doctor Héctor Marín Naranjo*

*Ref: Expediente No: 4025*

*Sentencia Nº 144*

Decide la Corte el recurso de casación propuesto por el demandado (demandante en reconvención), contra la sentencia proferida el 26 de febrero de 1992 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso ordinario adelantado por LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE "EL TRIUNFO", frente a MISAEL MUÑOZ ROBAYO.

### ANTECEDENTES

1. Correspondió al Juzgado Civil del Circuito de Fusagasugá conocer del escrito introductorio en el cual la entidad demandante solicitó que se declarara que es "...Nula, por haberse celebrado dolosa e ilegalmente al omitir los requisitos o formalidades que la ley prescribe para su valor, como el hecho de NO haber sido aprobada por Asamblea; por versar sobre bienes inmuebles pertenecientes a la JUNTA DE ACCION COMUNAL EL TRIUNFO y que por lo tanto no se pueden disponer o cambiar de destinación, sin el consentimiento favorable del Ministerio de Gobierno, la Escritura Pública No. 7448 del veintitrés (23) de Noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), de la Notaría Veintinueve (29) del Círculo de Bogotá, donde consta la compraventa de la finca 'LA FLORESTA' al demandado MISAEL ROBAYO MUÑOZ..."

Consecuentemente deprecó la nulidad de todo acto que se haya celebrado con ocasión de la mencionada escritura y la restitución del predio que constituye su objeto. Igualmente, pretende que se declare al demandado responsable de la pérdida de los bienes de la susodicha finca, "bien sea por venta u otro motivo"; de su deterioro; de los frutos que con mediana inteligencia hubiese podido producir la finca y, finalmente, de los perjuicios que se hayan podido causar a la entidad demandante.

2. -Los hechos que sustentan tales peticiones, bien pueden resumirse de la siguiente manera:

El día 10 de septiembre de 1983 se llevó a cabo una Asamblea extraordinaria de la Junta de Acción Comunal demandante de la cual da fe el acta número 49 y en la cual se lee que "...El presidente levantó la sesión y convocó para la sesión ordinaria del 30 de noviembre de 1993, previa aprobación de la proposición votada por unanimidad, por la cual se autoriza a la Junta Directiva la negociación de la finca de la Cruz Roja para la conservación de los servicios que allí se prestan y la estabilidad y sede de la Junta allí, procurando sacar de ello el mejor beneficio posible en orden al beneficio común..."

El señor ENRIQUE CASTAÑO ANGEL, quien a la sazón se desempeñaba como presidente de la Junta, adquirió en nombre de esta a la Cruz Roja la susodicha finca, mediante escritura No. 6975 de noviembre 9 de 1984 de la Notaria 29 de Bogotá, por un precio de \$2.000.000.00 que la vendedora declaró recibido de la compradora a su entera satisfacción.

Pocos días después, el mencionado CASTAÑO ANGEL, sin ninguna autorización de la Junta de Acción Comunal, suscribe la Escritura No. 7448 de Noviembre 23 de 1984 por medio de la cual da en venta al demandado MUÑOZ, ROBAYO un lote que se desengloba del predio recién adquirido.

Los intervinientes justifican el negocio, agrega el actor, diciendo que el presidente de la Junta se encontraba autorizado mediante un escrito denominado "PROPOSICION UNICA", de cuya aprobación dejó constancia el secretario de la Asamblea en el mismo documento, para conseguir dinero en préstamo y para pagarlo "comprometiendo el mismo inmueble en hipoteca, vender parte del mismo para cancelar la obligación y...",

documento este que el demandante considera "un truco jurídico", "una mentira", para despojar a la Junta del predio. En tal virtud, la hicieron aparecer como deudora del demandado MUÑOZ ROBAYO de la suma de \$2.000.000, para cuyo pago dio un lote de la finca que siguió llamándose "LA FLORESTA", mientras que la vendedora se reservó uno que pasó a llamarse "LA BASTILLA".

Estando así las cosas, la negociación referida en la Escritura No. 7448 "...fue abiertamente dolosa e ilegal...", quedando claro que "...es nula por donde se le mire...", como nulo resulta también cualquier acto derivado de ella.

3. -Una vez notificado el demandado del auto admisorio de la demanda, se opuso a sus pretensiones, aceptó algunos de los hechos que la fundamentan pero negó otros, propuso excepciones de mérito y demandó en reconvencción los perjuicios causados por la JUNTA DE ACCION COMUNAL con la inscripción de la demanda y los actos de perturbación a su posesión.

4. -La primera instancia concluyó con sentencia de junio 8 de 1989, por medio de la cual el *A quo* declaró la ineficacia del contrato de compraventa contenido en la escritura 7448 aludida y dispuso lo pertinente a las restituciones mutuas. Por orden del Superior, la sentencia fue posteriormente complementada para efectos de negar las pretensiones de la demanda de reconvencción.

Contra estas decisiones interpuso la parte demandada el recurso de apelación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el cual, después de decretar y practicar algunas pruebas, lo desató mediante providencia de 26 de febrero de 1992 que revocó la impugnada y en su defecto decretó la nulidad relativa de la compraventa contenida en la citada escritura 7448, junto con la cancelación de su anotación en el folio de matrícula correspondiente. En orden a establecer las restituciones mutuas condenó al demandado a restituir el inmueble junto con sus frutos civiles y naturales, los cuales estimó en la suma de \$7.411.651. A su vez, ordenó a la demandante devolver la suma de \$9.600.000,00 correspondiente al precio del inmueble que el demandado pagó a la Cruz Roja. Así mismo, confirmó la sentencia complementaria y ordenó compulsar copias para adelantar una investigación penal por los hechos que originaron el litigio.



### LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Luego de narrar los antecedentes del litigio y las incidencias del proceso, anota el Tribunal que la nulidad de los negocios jurídicos puede ser de dos clases: la absoluta y la relativa. De la primera dice que se presenta cuando el objeto o la causa son ilícitos, o cuando no se cumplen las formalidades previstas por la ley o cuando tales actos son celebrados por personas absolutamente incapaces; mientras que los demás vicios constituyen nulidad relativa.

Como quiera que reconoce la falta de claridad de la demanda, pasa a desentrañar su alcance para concluir que se pretende la declaratoria de la nulidad relativa de la compraventa cuestionada, puesto que "...se enfatizó en la ausencia de autorización respecto del representante legal de la Junta por parte de la asamblea, para celebrar el negocio jurídico, mediante el cual se transfirió la propiedad del bien al demandado...", hecho este que califica como cardinal en la controversia.

Dentro de este orden de ideas expresa que las personas jurídicas deben tener una persona natural como representante legal, el cual debe actuar sin "rebasar sus facultades, debe moverse dentro del preciso marco de las potestades que se le hayan conferido...", porque de no ser así, sus actos no obligan al ente colectivo, esto es, no lo comprometen válidamente sino en la medida en que su querer esté plasmado en los estatutos o en las autorizaciones expresas que le haya otorgado la Asamblea General.

Revisado el expediente no encuentra el ad-quem el acuerdo que hubiese facultado al presidente de la Junta a vender el inmueble, toda vez que del tenor literal del acta No. 49 no puede inferirse tal facultad, mientras que el Secretario expidió una copia en donde hizo contar en forma habilitada y contrariando la realidad una autorización que "...brota solamente del ingenio de quien la suscribe...", puesto que la única autorización que otorgó la asamblea fue la de permitir la compra del lote a la Cruz Roja. Los testimonios en contrario, continua el Tribunal, no son contundentes por ser de oídas o apoyarse en circunstancias que "...enfrentadas con lo plasmado en el acta susodicha, no pueden resultar avantes..."

Como el vicio así descrito no genera nulidad absoluta, debe entenderse que es relativa. De otro lado, como considera lo dicho suficiente para des

estimar las excepciones, se adentra en disponer lo pertinente a las restituciones mutuas, punto en el cual rechaza la objeción al dictamen pericial por no haber precisado el supuesto error grave alegado y, por el contrario, lo acoge.

Así pues, ordena al demandado restituir la suma de \$5.670.402 por concepto de frutos civiles y la de \$1.741.249 de frutos naturales. Como encuentra demostrado que la Junta de Acción Comunal pagó a la Cruz Roja el precio con el cheque de gerencia que le facilitó el demandado, ordena la devolución de tal suma con su corrección monetaria, todo lo cual, para la fecha de la sentencia, ascendía a la suma de \$9.600.000.co

### *LA DEMANDA DE CASACION*

Tres cargos formula el recurrente contra la sentencia recurrida, de los cuales el segundo está llamado a prosperar, razón por la cual a él limita la Sala su examen.

### *SEGUNDO CARGO:*

Con apoyo en la causal primera de casación, se acusa a la sentencia recurrida de ser directamente violatoria de los artículos 1.740, 1.741, 1.743, 1.746, 961 y 964 del Código Civil por aplicación indebida de los mismos.

En desarrollo del cargo argumenta el censor que para el Tribunal la carencia de autorización del representante legal de una persona jurídica para realizar un acto específico, mira a la omisión de una exigencia del estado de la persona que se sanciona con nulidad relativa.

Sin apartarse de la situación fáctica o el análisis probatorio realizado por el ad-quem, afirma que la extralimitación en el ejercicio de los poderes no genera una nulidad relativa del contrato, puesto que este es válido, pero solo vincula al representante legal frente al tercero.

Después de anotar que por definición legal las Juntas de Acción Comunal son Corporaciones y de resaltar las características de estas últimas, manifiesta que cuando su representante legal se excede en las atribuciones que se le han concedido, tal acto es válido, pero inoponible a la per-

sona jurídica y solo obliga en forma personal al representante, tal como lo dispone el artículo 640 del C. C.

Cita a continuación una jurisprudencia de la Corte donde se hace distinción entre una y otra figura, y concluye que el Tribunal violó las normas citadas por aplicarlas indebidamente, pues es el artículo 640 *ibidem*, el que gobierna el conflicto.

Agrega a continuación que la extralimitación de poderes no es causal de nulidad del acto o contrato, es aserto que se deduce no solo del artículo 640, sino también, de las normas propias de la sociedad y el mandato, refiriéndose específicamente a los artículos 2087 y 2120 *id.*, especialmente, este último que dispone que "...Si el socio contrata a nombre de la sociedad, pero sin poder suficiente, no la obliga frente a terceros sino en subsidio y hasta la concurrencia del beneficio que ella hubiere reportado del negocio..." (subrayas textuales).

Tras una nueva cita de la Corte sobre el punto, finaliza la acusación diciendo que no es viable la nulidad pedida con base en los hechos narrados en la demanda y que por lo tanto, la Corte deberá casar la sentencia recurrida y, en sede de instancia, revocar la de primera instancia.

### CONSIDERACIONES

Las personas jurídicas desarrollan su capacidad de obrar, por medio de sus **órganos o representantes**, quienes ante la falta de una voluntad natural del ente colectivo, actúan en las relaciones jurídicas **comprometiéndola**, dentro de los límites trazadas por la ley, los estatutos y la finalidad de la persona jurídica. Cuando tales órganos o representantes rebasan esos hitos, las relaciones que de ese modo nacen no vinculan a la persona jurídica. Es decir, como de antaño lo sostuvo la Corte y hoy se reitera, "...es, pues, apenas lógico que si sobre la capacidad de derecho se mide y demarca la capacidad de obrar, y de esta se encarga a los órganos, estos deben moverse dentro de esta capacidad, es decir, sin sobrepasar los poderes conferidos para ejercerla. Por fuera de ellos los órganos obran como si no pertenecieran a la persona jurídica, y en tales circunstancias los actos ejecutados no le son oponibles. Es lo que reza el artículo 640 respecto de las corporaciones y fundaciones..." (Cas. Junio 24 de 1954).

Resulta, pues, atendible sostener que los actos de los representantes que desborden los límites antedichos son sancionados por el ordenamiento con una particular forma de ineficacia que se conoce como la **inoponibilidad del negocio frente al representado**, figura distinta a cualquier otro tipo de sanción de los actos irregulares, especialmente las dimanantes de la incapacidad de la persona.

En efecto, mientras la capacidad es la aptitud inherente del individuo para disponer de sus intereses particulares, de cuya falta se deriva la nulidad del negocio, sea absoluta o relativa, como reacción del derecho o los diversos grados de incapacidad, la oponibilidad del acto atañe a la amplitud o extensión de los efectos, que son consubstanciales a su estructura, en frente de otros sujetos. La generación de estos efectos, presupone la existencia y la validez del acto dispositivo.

Con mayor aproximación, mientras la invalidez es un juicio negativo de valor del contrato "... al que le falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y calidad o estado de las partes..." (art. 1.740 ejusdem), que acarrea como consecuencia su extinción frente a las partes y a terceros, de manera tal que, una vez declarada judicialmente se reputa como si nunca hubiese existido, la inoponibilidad no conduce a la desaparición del negocio, sino que neutraliza la producción de los efectos del mismo en frente de alguien, todo bajo el entendido de que su validez entre las partes es incontrovertible. En este caso, el negocio es, en sí mismo, válido, pero es la expansión de sus efectos propios la que se ve disminuida ante quienes de otro modo, serían sus destinatarios naturales. O lo que es igual, la inoponibilidad hace siempre relación a alguien que, por determinadas circunstancias suscitadas en su propia génesis, no es afectado por el negocio. Pero como este, entre quienes le dieron origen, no tiene ningún reproche sigue, siendo válido y por ende eficaz. La declaratoria de nulidad, en cambio sea relativa o absoluta, genera la extinción del negocio y de sus efectos, no sólo frente a las partes, sino también frente a terceros.

Al ser distintos, pues, los fenómenos de la nulidad, bien sea absoluta o relativa, y la inoponibilidad, predicados ambos de los actos y contratos, no puede invocarse una con el fin de alcanzar las consecuencias propias de la otra.

De la imposibilidad de abordar judicialmente la inoponibilidad de los actos del representante frente al representado a través de la nulidad relativa ya se ha ocupado la Corte en algunas oportunidades.

Así, en sentencia de agosto 24 de 1938 dijo esta Corporación:

"...Hasta hoy se había tenido como doctrina jurídica en Colombia la solución de que la extralimitación de poderes del mandatario vicia los actos respectivos de nulidad relativa, saneables por ratificación expresa o tácita del mandante, o por la prescripción de 4 años, del artículo 1.750 del Código Civil, que es el plazo para demandar la rescisión de los contratos heridos de nulidad relativa.

"...Pero esa doctrina debe ser rectificada porque se basa en una interpretación dislocada del artículo 2186 del mismo código, cuando habla de que los actos excesivos del mandatario se pueden cubrir por la ratificación.

*"...En efecto. Es principio legislativo deducido a contrario sensu del artículo 1.505 del Código Civil, que lo que una persona ejecuta en nombre de otra no teniendo poder de ella ni de la ley para representarla, carece de efectos contra el representado. Este principio, aún de simple razón natural, es apenas una de las primeras aplicaciones lógicas de aquel otro consagrado por el artículo 1.502, ibidem, básico de toda la teoría de las obligaciones, según el cual uno de los cuatro elementos esenciales para que una persona se obligue a otra por un acto de declaración de voluntad, consiste en el consentimiento del obligado.*

"...El consentimiento es, pues, condición indispensable, la primera y la principal de todas, para que un acto o contrato tenga existencia jurídica.

"...En el mandato, el consentimiento del mandante se expresa a través del mandatario, de suerte que en esta forma los derechos y las obligaciones que nacen de las convenciones celebradas por éste los adquiere directamente aquel y lo ligan personalmente con los terceros con quienes ha contratado el mandatario, porque el mandatario obra para tales efectos reemplazando y sirviéndole de instrumento al mandante..."

## Más adelante agrega:

"...Dado que el consentimiento expreso o presunto del mandante a los actos llevados a cabo en nombre de este por el mandatario, es lo que crea el vínculo jurídico del primero ante los terceros y lo que en esencia singulariza la noción del mandato, infiérese sin esfuerzo, que las gestiones del mandatario verificadas con extralimitación de sus poderes no caben dentro de la citada noción. Por faltarles a los actos excesivos el consentimiento del dueño, necesariamente tienen que desplazarse a otra construcción jurídica, por que ya no son negocios o gestiones, como los llama la ley, que el mandante haya confiado al mandatario. Constituyen con propiedad una verdadera administración de negocios ajenos sin mandato, figura que en el lenguaje legal llámase 'agencia oficiosa' (Artículo 2304, *ibidem*)..."

Tras desarrollar tal aserto, afirma la Corte que, aparte "...El agente oficioso solo obliga al interesado ante terceros cuando la gestión redunde en provecho de este, o ha sido ratificada. En los demás casos, trátase de actos inoponibles al dueño; es decir, de actos que en relación con él son ineficaces o inexistentes. En manera alguna nulos, como quiera que la nulidad, aún la radical, exige siquiera un principio de existencia del acto jurídico. Mal puede ser nulo lo que no ha nacido, lo que carece de vida, así sea aparente ante la ley. El acto jurídico que se ha creado sin mi consentimiento ni mi intervención, relativo a mis bienes, es para mí como si no existiera; no es un acto nulo de nulidad absoluta, sino un acto que nadie me puede oponer para que yo lo cumpla. Siendo para mí ese negocio concerniente a mi patrimonio *res inter alios acta*, no tengo necesidad de romper el vínculo jurídico que contra mí pretenda deducírseme, porque no habiendo vínculo por ausencia total de mi consentimiento, nada hay que romper.

"...Por esta razón el mandante no está obligado a demandar la nulidad absoluta, mucho menos relativa de los negocios llevados a cabo por el mandatario fuera de las pautas del respectivo poder. Le basta no prestarles su consentimiento..." (G. J. XLVII. Pág. 81 y ss.).

*En sentencia posterior se reafirmó la Corte en el punto y expresó que "...Solo resta agregar, en relación con el presente cargo, ya que la sentencia declara la nulidad de la venta del predio, que, de conformidad con la doctrina general, consagrada por la Corte, la acción de nulidad no es el medio necesario para recuperar los bienes transferidos en virtud de con-*

*trato celebrado por los órganos o representantes de la persona jurídica, exralimitado sus poderes, porque se trata de algo más simple: de un fenómeno de inoponibilidad, ya que el ente moral es absolutamente extraño al acto o contrato..." (Negrilla textual, G.J. LXVII. Pág. 852).*

*No es que la inoponibilidad sea asimilable a la inexistencia, puesto que la última no es una sanción que se impone al negocio, o sea, que éste, en sí mismo existe o no existe, tanto frente a las partes, como frente a terceros, mientras que en aquella el negocio existe, sólo que no produce efectos respecto de otros. Lo que se desea poner de relieve es cómo ante el representado, el acto que excede los poderes que ha otorgado, no lo afecta. Por el contrario, la aptitud vinculante del contrato solo recae sobre el representante, quien por ende se legitima para alegar cualquier vicio de los que la ley sanciona con nulidad relativa, comoquiera que es él quien lo viene a sufrir.*

Si las cosas son como se ha dicho, y si en el caso sometido ahora a consideración de la Corte se discuten las atribuciones del representante para celebrar el acto impugnado, mas no aspectos relacionados con la capacidad misma del ente colectivo, debe concluirse que se está ante un fenómeno de inoponibilidad de tal negocio respecto de la demandante, pero no de su nulidad relativa.

En este orden de ideas, la sentencia recurrida violó directamente los artículos 1.740, 1.741, 1.743, 1.746, 961 y 964 del C. C., razón por la cual habrá de casarse.

### SENTENCIA SUSTITUTIVA

Actuando la Corte como Tribunal de instancia observa que, sin lugar a dudas, impetra el demandante la declaratoria de nulidad de la compraventa contenida en la escritura 7448 de 1984, otorgada en la Notaria 29 del Círculo de esta ciudad.

Así, en la pretensión primera se pide la nulidad del mencionado negocio "...por haberse celebrado dolosa e ilegalmente al omitir los requisitos o formalidades que la ley prescribe para su valor, como el hecho de NO haber sido aprobada por la Asamblea..."



Consecuentemente se dice en la segunda pretensión que "...Queda rescindido, por el vicio de Nulidad...", mientras que en la tercera se afirma que "...es nula también cualquier otra escritura o acto que se haya ocasionado o celebrado con ocasión de la escritura 7448 de Noviembre 23 de 1984..."

En cuanto a los hechos alegados como supuestos de la nulidad deprecada, aluden a la supuesta falta de atribuciones del representante legal de la entidad demandante para enajenar el predio referido, circunstancia que, como tantas veces se ha dicho, genera la inoponibilidad del negocio frente al representado, como claramente lo establece el artículo 640 *ejusdem*.

*Ahora bien, no debe olvidarse que la interpretación de la demanda es una labor que debe emprender el Juez para desentrañar el querer del demandante, querer que está ahí, implícito en el libelo pero que no se muestra claro o coherente. Pero en modo alguno, so pretexto de interpretar lo que es obvio, puede el fallador darle un alcance distinto a la misma, o hacerle decir lo que objetivamente no dice, o, en resumidas cuentas, alterar ostensiblemente su contenido.*

*Así pues, como en la situación sub-judice se pidió la nulidad de un contrato, pero no se adujo ninguna de las causales que la ley contempla para tal efecto, sino que, por el contrario, se fundamentó en una supuesta falta de atribuciones del representante legal, deficiencia esta que, como se ha repetido, no tiene los alcances que pretende el demandante, la demanda no puede prosperar. Y no puede pretenderse que el *petitum* de la demanda sea entendido en el sentido de ver allí una declaratoria de inoponibilidad, a fin de que resulte en coherencia con los hechos, porque, dada la distinta naturaleza y los diferentes efectos de aquella y de la nulidad realmente implorada, un paso semejante equivaldría a variar el *petitum* de la demanda, punto hasta el que no alcanzan las facultades interpretativas del fallador.*

Marginalmente debe anotarse que tampoco allegó la parte actora, a la cual le incumbía hacerlo con miras a la prosperidad de sus peticiones, copia de los estatutos de la Junta de Acción Comunal que acreditaran los límites de la actividad de sus representantes para inferir de allí la falta de poder para enajenar el inmueble aludido.

Igualmente, que la autorización del Ministerio de Gobierno que reclama el demandante solo se exige para las negociaciones a las cuales aluden taxativamente los artículos 7 y 8 del decreto 2726 de 1980, a cuya estirpe no pertenece el que se sometió a composición judicial.

De otro lado, no aparece prueba alguna de los perjuicios que hubiese causado la demandante al demandado por causa de las supuestas perturbaciones a su propiedad, ni la naturaleza de los mismos, razón por la cual, lo decidido con respecto a la demanda de reconvención habrá de mantenerse.

En efecto, gravitaba sobre el demandante en reconvención la carga de probar aquellos aspectos con miras a la prosperidad de sus pretensiones, carga que desatendió en el transcurso del proceso.

#### DECISION

Por lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia recurrida, esto es, la proferida el 26 de febrero de 1992 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso ordinario adelantado por LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE "EL TRIUNFO", frente a MISAFEL MUÑOZ ROBAYO, y en sede de instancia.

#### RESUELVE

PRIMERO. — REVOCAR la sentencia proferida el 8 de junio de 1989 por el Juzgado Civil del Circuito de Fusagasugá.

SEGUNDO. — En su lugar, se DENIEGAN las pretensiones de la demanda, y por lo tanto, se ABSUELVE de las mismas al demandado.

TERCERO. — CONFIRMAR el numeral primero de la sentencia complementaria dictada por ese mismo Despacho Judicial el día 22 de abril de 1991.

CUARTO. — Se condena a la parte demandante a pagar el 70% de las costas del proceso. Téanse.

QUINTO. -- Decretar la cancelación del registro de la demanda. Oficiese a la oficina pertinente.

Cópiase, notifíquese y cúmplase.

*Pedro Lafont Planetta, Nicolás Bechara Simancas, Jorge Antonio  
Castillo Rugeles, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor Marín  
Naranjo, Rafael Romero Sierra*

**PRESCRIPCION ADQUISITIVA Y EXTINTIVA/  
PRESCRIPCION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA /  
PERTENENCIA / POSESION / RECTIFICACION  
DOCTRINARIA**

1) Clasificación de la prescripción en "extintiva" o liberatoria y la "adquisitiva", llamada también por la doctrina "usucapión". Esta segunda modalidad de prescripción puede ser de dos tipos: "ordinaria" y "extraordinaria".

Igual sentido: G.J. LXVI, pág. 347.

2) Elementos configurantes para la existencia de una declaración judicial de pertenencia por prescripción inmobiliaria de carácter extraordinario.

Igual sentido: G.J. ts. CXIII, pag. 113, CLII, pag. 24, CXCII, pag. 278, y CXCVI, pág. 77.

3) Importancia de la posesión como forma de adquirir la propiedad. Elementos. Forma como se manifiesta la posesión.

Igual sentido: G.J.T. LXXXVI, pág. 34; G.J., CXXXI, pág. 185.

4) Distinción entre la posesión requerida para la usucapión extraordinaria y la exigida por la agraria. Rectificación doctrinaria.

5) La posesión cuya prueba tiene a su cargo el prescribiente ha de referirse a la porción de tierra cuya pertenencia es reclamada.

Igual sentido: G.J. ts. LXXX, pág. 97, y CII, pág. 118.

F.F.: C.C. 2518, 2527, 673, 2512, 762, 981 ibídem; LEY Num.: 50 Año: 1936 Art.: 1; C. de P. C. art. 407; LEY Num.: 200 Año: 1936 Art.: 12; LEY Num.: 4 Año: 1973 Art.: 2 y 4; C. de P.C. Art.: 375 Inciso: 4.

**CASACION-Ataque todos los fundamentos**

Si la declaración del vicio sometido a la consideración del Tribunal de

casación no tiene injerencia esencial en la resolución jurisdiccional y esta pudiera apoyarse en premisas no censuradas eficazmente, el curso interpuesto carecerá de la necesaria consistencia infirmatoria y tendrá que ser desechado.

Igual sentido: G.J. t. CLXVI, pag. 583, citada en Cas. Civ. de 5 de mayo de 1992, sin publicar.

### ERROR IN JUDICANDO

Eficacia causal del error in judicando.

### MEDIO NUEVO

En virtud del imperativo de técnica legal que repudia el medio nuevo en sede de casación, no es dable atacar por vez primera ante la Corte los elementos probatorios que como tales no tuvieron tacha alguna en los trámites de la instancia.

Igual sentido: G.J. t. LXXXIII, pág. 76.

*Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil — Santafé de Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994)*

*Magistrado ponente: Carlos Esteban Jaramillo Schloss*

Referencia: Expediente No. 4321

Sentencia Nº 146

Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia de fecha veintiuno (21) de julio de 1992, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario de pertenencia seguido por LUIS RAFAEL VILLAR contra MARIA OFELIA, OSCAR JAVIER, ANGELA MARIA, IVAN JOSE, JORGE HUGO y MARCO ANTONIO RODRIGUEZ AGUILAR, junto con GUILLERMO GOMEZ MELGAREJO, GUILLERMO SAENZ JARAMILLO, la sociedad INVERSIONES ROMA LTDA. y las personas indeterminadas que se crean con derecho sobre el bien raíz materia del proceso.

### *I. ANTECEDENTES*

1. En la demanda con que se abrió el proceso en mención, adicionada mediante el escrito que obra a folio 10 del cuaderno principal, se solicitó:

6

a. Que se declare que el actor ha adquirido por la vía de prescripción adquisitiva de dominio extraordinario el inmueble cuya ubicación y linderos se establecen en la demanda.

b. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene la inscripción del fallo en el libro correspondiente de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Circuito.

c. Que se condene en costas a quien se opusiere a las pretensiones de la demanda.

Fundamenta su solicitud en los siguientes hechos:

LUIS RAFAEL VILLAR ha tenido por espacio de tiempo muy superior a los 20 años la posesión real y material de un lote de terreno en construcción de 18.43 hectáreas, ubicado en el kilómetro 17 de la carretera que de Santa Marta conduce a Ciénaga, Corregimiento de Gaira (Departamento del Magdalena), cuyos linderos especifica en la siguiente forma: Norte: Con terrenos que son o fueron de Zoila de la Hoz y que hoy tiene Alfredo Calderón, quien compró este lindero a Ana Nova Gil. Sur: con terreno de Martín Ceballos. Este: Con carretera Santa Marta a Ciénaga, en medio teniendo al frente los predios de Gabriel Sánchez Ramírez, de Arnoldo Vengoechea y de Arturo Porras; y Oeste: con la línea férrea del Ferrocarril Nacional del Magdalena.

— Durante este lapso, el demandante ha venido poseyendo el predio a título de señor y dueño, realizando actos sobre este inmueble, como son la limpieza constante del predio y el levantamiento de una residencia en la que el actor habita continuamente.

— La posesión ejercida sobre el inmueble por el demandante ha sido pública, ininterrumpida y pacífica, sin reconocer dominio a otros respecto del inmueble.

2. A la demanda presentada respondieron los demandados en la siguiente forma:

a. El apoderado de MARIA OFELIA, OSCAR JAVIER, ANGELA MARIA, IVAN JOSE y MARCO ANTONIO RODRIGUEZ AGUILAR, en su escrito de contestación de la demanda solicitó se absolviera a sus poderdantes de todas las pretensiones de la demanda (F 73 y 107 C. 1). En cuanto a los hechos expresó:

(i) Que el lote de terreno al que se alude en la demanda fue poseído siempre y en forma sucesiva por Ana Nova Gil, "cuien lo vendió a Andrés Arata y a Guy Henry Epaulard, éste a Inversiones Epaulard Bayet y Cía Ltda. Andrés Arata los hermanos Rodríguez Aguilar, Inversiones Epaulard Bayet y Cía Ltda a Enrique José Correa Betancourt, éste a INVERSIONES ROMA LTDA. y esta a JUAN GUILLERMO SAENZ JARAMILLO y a GUILLERMO GOMEZ MELGAREJO, como se demuestra con la escritura 465 de fecha 30 de marzo de 1978, otorgada en la Notaría Tercera de Barranquilla y registrada el 31 de mayo del mismo año en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta".

(ii) Los dueños sucesivos del mencionado predio han ejercido la posesión sobre él y por ello se ha visto en la necesidad de desalojar a los diferentes invasores que, como el demandante, procedieron a dañar cercas para abrirse campo en las invasiones.

(iii) El demandante no ha ejercido nunca posesión alguna sobre el inmueble ni ha introducido mejoras o realizado limpiezas. La casa de material y techo de teja que el predio contenía, cuando fue comprado por los hermanos RODRIGUEZ AGUILAR, así como las cercas que lo circundaban, fueron destruidas por los invasores quienes desaparecían cuando los verdaderos dueños los amenazaban con la policía.

Entre 1973 y 1983 el instituto de crédito territorial embargó el 50% del inmueble perteneciente entonces a la sociedad Inversiones Epaulard Bayet y Cía Ltda, y durante la vigencia de la aludida medida, realizó la vigilancia del predio sin permitir posesión violenta de invasores.

b. El curador ad litem, en representación de las personas indetermina-



das, contestó brevemente la demanda, solicitando la prueba de los hechos descritos por el demandante. (F. 106 C.1).

c. En fin, el curador ad litem de los señores JUAN GUILLERMO SAENZ, GUILLERMO GOMEZ MELGAREJO y del representante legal de la sociedad INVERSIONES ROMA LTDA., contestó también la demanda, solicitando la prueba de los hechos descritos por el demandante y ateniéndose en cuanto a las pretensiones, a lo que resulte cabalmente justificado dentro del proceso. (F. 108 C.1).

3. Conoció del asunto inicialmente el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta, quien consideró que el predio, a pesar de figurar en la matrícula inmobiliaria como rural, dada su localización en zona de alta actividad turística, no debía ser tratado como tal. Por lo tanto se abstuvo de declarar la nulidad propuesta en tal sentido en el alegato de conclusión por la parte demandada.

Declaró así mismo que LUIS RAFAEL VILLAR adquirió por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio el inmueble en litigio y ordenó la inscripción de la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Circuito de Santa Marta. Para terminar, condenó en costas a la parte demandada que compareció al proceso.

Fundamentó su decisión en el material probatorio que obra en el expediente, como son la diligencia de inspección judicial, el testimonio de Alejo Rueda, de Fermín Mejía y de Josefa María Suárez Sandoval, elementos éstos que al no haber sido desvirtuados por la parte opositora, demuestran en concepto del juzgador la posesión alegada, base de la declaración de pertenencia efectuada en el fallo.

4. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en fallo del veintiano (21) de julio de 1992, revocó en todas sus partes la sentencia del a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

## *II. Fundamentos del fallo impugnado*

1. Advierte el Tribunal para empezar que el incidente de nulidad propuesto por la parte demandada y que se apoya en el hecho de ser rural el inmueble objeto del litigio y por lo tanto de exclusiva competencia de la

jurisdicción agraria el conocimiento del proceso, fue irregularmente resuelto en la parte resolutive de la sentencia.

2. Procede luego a analizar si en el caso en referencia se reunieron los requisitos necesarios para que opere la prescripción adquisitiva de dominio, requisitos que la misma corporación se encarga de enumerar, así:

a. Que la cosa u objeto sea susceptible de prescripción, requisito que en efecto aparece demostrado, observando que la demanda se dirigió contra las personas en cuyo nombre se encuentra registrado el derecho real de propiedad sobre el inmueble en cuestión.

b. Que la cosa haya sido poseída durante veinte años, requisito este que al decir de la providencia en estudio, trató de demostrarse con los testimonios rendidos en el proceso, una inspección judicial al lugar y el interrogatorio de parte absuelto por el actor. actuación esta última que no llevó a la convicción al Tribunal de que se haya ejercido una verdadera posesión completa sobre el predio, por cuanto allí se limitó a decir el absolvente que había sembrado berenjena y arroz, cultivos que regaba con agua de pozo que es salobre, pero que, sin embargo, al llegar el verano abandonó estos cultivos y se dedicó a la pesca, y que allí tuvo a su señora y sus hijos.

En cuanto a los testimonios de Alejo Rueda y Germán Mejía, ambos afirman haber conocido hace más de veinte años al demandante, pero ninguno de los dos habla sobre la explotación económica de LUIS RAFAEL VILLAR, salvo plantaciones de arroz y berenjena, la primera de las cuales no es posible cultivar en una zona desértica y, menos, es posible regar con agua salobre. Por consiguiente, estima el Tribunal que LUIS RAFAEL VILLAR, no obstante haber vivido en esa región por el tiempo indicado en la demanda, no ha explotado económicamente el terreno "... y su ocupación por el contrario a la agricultura (sic) se dedica a la pesca, por la situación del terreno a la orilla del río y no a las labores agrícolas...".

c. Que la posesión haya sido ininterrumpida y al respecto considera el Tribunal que este requisito no se encuentra probado tampoco, por cuanto, primero, obra en el expediente copia de una querrela policiva, definida mediante la Resolución de fecha 3 de noviembre de 1990 de la Alcaldía de Santa Marta, confirmada por la Resolución No. 1221 del 6 de septiembre del mismo año, emanada de la Gobernación del Departamento, en la cual

se expresa que se dejó a Carlos Lacouture Dangond en posesión del terreno cuestionado; y, segundo, el mismo LUIS RAFAEL VILLAR aceptó haber tenido "denuncias policivas por ocupación de hecho con el señor Lacouture Dangond", advirtiendo igualmente que en el cuaderno 3 de pruebas de la parte demandada, aparece la Resolución No. 589 de Mayo 10 de 1990, proferida por el Gerente Regional del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, que adjudica un predio a José Benito Cerra Torres con linderos parecidos o iguales a los del predio en litigio, con lo cual se acredita que los linderos de la finca que se pretende usucapir no se encuentran plenamente identificados, todo lo cual lleva a concluir que el fallo apelado debe revocarse "... como quiera que los dos últimos elementos —de los tres señalados al comienzo— no se encuentran probados, amén de revisarse una sentencia sin ningún análisis jurídico y probatorio..."

### *III. DEMANDA DE CASACION Y CONSIDERACIONES DE LA CORTE*

Para combatir la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta en desarrollo del recurso interpuesto, formuló el actor demanda de casación que da razón de tres cargos que la Corte pasa a estudiar en forma conjunta pues como adelante se verá, ninguno cuenta con la eficacia necesaria para producir la infirmación del fallo impugnado.

#### *CARGO PRIMERO:*

Considera el actor que la citada providencia infringe la ley sustancial por vía indirecta, como consecuencia de manifiestos errores de hecho en la apreciación del material probatorio, al aplicar indebidamente los artículos 1 de la Ley 200 de 1936, modificado por la Ley 4 de 1973 en su artículo 2o, y al no aplicar los artículos 25, 29, 669, 762, 764, 770, 782, 981, 2512, 2513, 2517, 2522, 2527, 2528, 2531, 2532, modificado por la Ley 50 de 1936 en su artículo 1o, todos del C. C. y el art. 407 del C. P. C. subrogado por el Decreto 2282 de 1989 art. 1o, num. 210. Y por interpretación errónea de los artículos 673 y 2518 del C. C.

Según el recurrente, el Tribunal no tuvo en cuenta "que cualquier acto positivo, material que realice el agente sobre el predio que pretende adquirir en virtud del fenómeno de la prescripción extraordinaria, constituye acto suficiente para ejercer la posesión, y si ese acto lo realiza motu proprio (sic), está indicando que no reconoce derechos ajenos, entre los actos reali-

zados por LUIS RAFAEL VILLAR tenemos: corte de madera, construcción de casas, cerramiento, plantaciones o cementeras y otros de igual significación”.

Afirma que la posesión requerida para adquirir el dominio de un bien inmueble por prescripción extraordinaria es la posesión común, definida en el artículo 762 y siguientes del Código Civil, y no la exigida para la prescripción especial agraria, consagrada en el artículo 1 de la ley 200 de 1936, modificado por la Ley 4a de 1973 art. 2o, sin importar que el bien sea rural o urbano.

En opinión del recurrente, el Tribunal erró al exigir que el predio fuera explotado económicamente, requisito que no exige el artículo 2.518 del Código Civil, sino la ley 200 de 1936, la cual no es aplicable a la posesión común, y menos tratándose la solicitud de una prescripción adquisitiva extraordinaria, la cual sanea a todas las demás, y se aplica a bienes rurales y urbanos.

El apoderado de la parte actora estima que la declaración de Josefa María Suárez Sandoval no fue apreciada por el Tribunal, violando así de manera indirecta las normas sustantivas enunciadas en la formulación del cargo. Esta declaración, según el recurrente, demostraba que LUIS RAFAEL VILLAR había ejercido la posesión del predio que originó el litigio, con ánimo de señor y dueño por más de 25 años.

Otras pruebas no fueron correctamente apreciadas. En efecto, afirma el recurrente que el señor Lacouture Dangond no interrumpió la posesión del demandante. Las denuncias policivas por ocupación de hecho, fueron presentadas por éste último, por cuanto Lacouture puso una cerca dentro del predio de LUIS RAFAEL VILLAR. La interrupción no ocurrió, porque los actos atentatorios no fueron de tal magnitud como para lograr sustraer el bien de la esfera de la custodia y/o tenencia del poseedor. Por el contrario, la querrela policiva por intento de perturbación de la posesión, reafirma la posesión, con ánimo de señor y dueño, que el señor Villar ejerce sobre el predio.

En cuanto a la querrela policiva de José Benito Cerra Torres contra Carlos Lacouture Dangond por presunta perturbación de un terreno que venía poseyendo el primero de estos, anota el recurrente que el fallo emiti-

do en esta diligencia administrativa, no vincula a quienes no fueron parte en el proceso policivo civil, como lo es LUIS RAFAEL VILLAR. Además, según los linderos establecidos en dicha diligencia, el predio poseído por Cerra Torres, es diferente al que posee LUIS RAFAEL VILLAR, según se observa al comparar los linderos que se tuvieron en cuenta en cada diligencia de inspección judicial. Resulta el recurrente que los fallos emitidos por la Alcaldía de Santa Marta y por la Gobernación del Magdalena en los cuales se ordenó "volver las cosas al estado inmediatamente anterior", fechados el 3 de julio y el 6 de septiembre de 1990 respectivamente, fueron anteriores a la inspección judicial realizada en el predio que afirma poseer el señor Villar, en la cual se le encontró ejerciendo esa posesión con ánimo de señor y dueño. Por lo tanto concluye que la citada querrela policiva no privó ni interrumpió la posesión invocada por el actor.

Reitera el recurrente en casación que del acta de la diligencia de inspección judicial sobre el inmueble, se desprende con claridad que allí se constató la posesión del bien, el cercamiento realizado y la construcción hecha por LUIS RAFAEL VILLAR, que remplazó la antigua, donde también había habitado.

Considera así mismo que los testimonios rendidos por Alejo Rueda y Fermín Mejía son prueba de que el demandante ha permanecido por más de 20 años en el terreno sin ser molestado.

En cuanto a la Resolución No. 589 de mayo 10 de 1990 emanada del Incora, por la cual se adjudicó a Cerra Torres un predio, el recurrente expresa que, a diferencia de lo que estableció el Tribunal, los linderos no coinciden con los del predio que es objeto de la demanda de pertenencia.

Al decir del recurrente, LUIS RAFAEL VILLAR no fue despojado de su posesión por la acción de Lacouture Dangond al intentar correr la cerca y menos que el primero de ellos la hubiera recuperado con violencia, "porque esta no se presume sino en los casos de inversión del título, o sea para quien originalmente recibió a título de mera tenencia, que no es el caso que nos ocupa".

#### *Cargo segundo:*

La sentencia impugnada violó por vía indirecta, como consecuencia de

error de derecho en la apreciación del material probatorio, los artículos 1 de la Ley 200 de 1936, modificado por el artículo 2o. de la Ley 4 de 1973, así como también los artículos 25, 29, 669, 762, 764, 770, 782, 981, 2512, 2513, 2517, 2522, 2527, 2528, 2531 y 2532, modificado por la Ley 50 de 1936 en su artículo 1, todos del Código Civil, y por interpretación errónea los artículos 673 y 2518 del Código Civil, señalando igualmente la violación medio, determinante del error de derecho denunciado, de los artículos 183, 185, 251, 252, 253, 254, 256, 407 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 43 y 44 del Decreto 1250 de 1970.

La prueba erróneamente apreciada fue la resolución No. 589 de mayo 10 de 1990 del Incora, la cual fue aportada por la parte demandada en fotocopia simple, y no se cotejó su autenticidad. Por lo demás, tampoco fue inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos como lo ordena la ley.

#### *Cargo tercero:*

La sentencia acusada es directamente violatoria por aplicación indebida de los artículos 1 de la Ley 200 de 1936, modificado por la Ley 4 de 1973 en su artículo 2 y por falta de aplicación de los artículos 25, 29, 669, 762, 764, 770, 782, 981, 2512, 2513, 2517, 2522, 2527, 2528, 2531, y 2532, modificado por la Ley 50 de 1936 en su artículo 1, todos del Código Civil y del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, subrogado por el Decreto 2282 de 1989 artículo 1o. num. 210 y por errónea interpretación de los artículos 673 y 2518 del Código Civil.

Estima el recurrente que el Tribunal se equivocó al exigir la explotación económica del terreno, haciendo caso omiso de los demás actos materiales que configuran la situación posesoria requerida para adquirir el dominio por prescripción extraordinaria.

#### *Se considera:*

1. Por cuanto se trata de una clasificación que encuentra acogida en el conjunto de disposiciones que integran, en sus cuatro capítulos, el Título XII del Libro Cuarto del Código Civil, es de común ocurrencia que de la prescripción se diga que, en el derecho vigente en el país, es ella una institución única que revista dos modalidades, a saber: La "extintiva" o



*liberatoria cuya órbita propia son los derechos y las acciones en general, y la 'adquisitiva', llamada también por la doctrina "usucapión" y que al tenor del art. 2518 del código recién citado, tiene su radio de acción en la adquisición de los derechos reales ajenos, especialmente el de propiedad, fundada dicha adquisición en la posesión prolongada que, "...con las condiciones legales" y durante un período de tiempo determinado, ejerza persona distinta a sus titulares sobre las cosas en que tales derechos recaen, siendo de advertir que, a su turno, esta segunda modalidad de prescripción puede ser de dos tipos como lo expresa de modo categórico el art. 2527 ibidem: "ordinaria" cuando se produce en favor de un poseedor de buena fe que dispone además de un justo título, y "extraordinaria" cuando se apoya simplemente en la posesión material ininterrumpida por el término que en la actualidad señala el art. 1º, de la L. 50 de 1936, modo de adquirir este último en el que por consiguiente "...no es necesario título alguno y se presume de derecho la buena fe, sin embargo de la falta de un título adquisitivo de dominio..." (G.J. t. LXVI, pag. 347).*

*En este orden de ideas, de acuerdo con el sistema normativo que acaba de describirse en los que son sus lineamientos vertebrales, ha sostenido de manera reiterada la doctrina jurisprudencial que el buen suceso de una demanda con las características que pone de presente la que al proceso ordinario de la referencia le dio comienzo, encaminada de suyo a obtener, con los efectos erga omnes que le atribuye el art. 407 -Num. 11º- del C. de P. C., una declaración judicial de pertenencia por prescripción inmobiliaria de carácter extraordinario requiere de la confluencia de los siguientes elementos: a) La posesión material en el actor o usucapiente que afirma haber ganado el dominio de este modo; b) El transcurso de un plazo de veinte años durante el cual esa situación posesoria se haya prolongado; c) La utilidad de la posesión para prescribir por no resentirse de los vicios de discontinuidad y clandestinidad, es decir por haber sido pública y no interrumpida en el mencionado lapso; y en fin, d) Un bien raíz cuya propiedad sea susceptible de ser adquirida por prescripción (G.J. ts. CXIII, pag. 113, CLII, pag. 24, CXCH, pag. 278, y CXCVI, pag. 77), requisitos éstos de entre los que es preciso destacar ahora el primero, no solamente por virtud del papel preponderante que el mismo cumple en el instituto que se viene examinando, sino porque al no encontrarlo demostrado en la forma debida, y unido a ello a otras razones aducidas en la providencia para mayor abundamiento, en el caso de autos el Tribunal decidió revocar la sentencia estimatoria de la demanda, proferida en pri-*



mera instancia, para en su lugar rechazar las pretensiones en dicho escrito formuladas por el actor.

2. En efecto, si ha de entenderse de acuerdo con los arts. 673 y 2512 del C. Civil que la usucapión es una adquisición de la propiedad que se lleva a cabo mediante la posesión del bien cuya pertenencia se reclama, continuada de modo visible y sin interrupción durante el tiempo que la ley indica, solta a la vista entonces que el contenido esencial de este modo de adquirir, el núcleo alrededor del cual gira su disciplina, lo constituye sin duda la posesión pues como suelen decirlo los escritores contemporáneos, inspirándose en la autoridad de renombrados comentaristas y compiladores del derecho romano, por definición la usucapión opera "*favore possessionis*" y por lo tanto debe ser ella, fundamentalmente, consecuencia de una vigorosa apariencia de titularidad reflejo de aquellos actos positivos o materiales capaces de exteriorizar en términos concluyentes ese genuino señorío al que con precisión aluden los arts. 762 y 981 del C. Civil, toda vez que la publicidad derivada de una situación posesoria tal que ha tenido prolongada duración temporal, por el ministerio de la ley ha de ser considerada por todos como dominio, transformándose así un simple poder de hecho que, si se dan ciertas condiciones, el ordenamiento positivo protege, en una realidad jurídica consolidada y por norma inmovible que, como ya se indicó, no sólo afecta al prescribiente sino también a los terceros en general.

Queda claro, pues, que ningún tipo de prescripción adquisitiva podrá consumarse si no se posee lo cosa cuyo dominio se afirma haber adquirido por ese modo, y esa posesión "*ad usucapionem*", revestida en cuanto es tal de utilidad para el propósito indicado, no puede ser otra distinta a la que, identificando los dos elementos que integran la sustancia del fenómeno en cuestión, describe el art. 762 recién citado, vale decir la que cuenta con virtualidad suficiente para hacer público el señorío del hombre sobre las cosas por medio de actos positivos, inequívocos, acerca de cuya consistencia y significado tiene, la jurisprudencia definidos de vieja data, en multitud de decisiones, valiosos derroteros conceptuales que hoy, frente a las consideraciones efectuadas por el Tribunal Superior de Santa Marta para sustentar el juicio jurisdiccional impugnado, es aconsejable recordar: "...La posesión, como simple relación de dominio de hecho amparada por el orden jurídico — dijo la Corte en 1957 (G. J. T. LXXXVI, pag. 14) — implica la vinculación de la voluntad de una persona a un *Corpus*, como

si esa relación emanara del derecho de propiedad. Por eso, se ha dicho con razón que la posesión no es otra cosa que la exteriorización del dominio, un reflejo de este derecho fundamental, ya que el poseedor se vincula a la cosa como si fuera un propietario y ejecuta los actos como si fuera dueño, sin respeto a determinada persona,...", agregando luego, en otra sentencia posterior, que si la posesión es ante todo un hecho, "...su existencia como fenómeno trascendente en la vida social debe manifestarse también por una serie de actos de inconfundible carácter y naturaleza, que demuestren su realización y el vínculo directo que ata a la cosa poseída con el sujeto poseedor. Tales actos deben guardar íntima conexión con la naturaleza intrínseca y normal destinación de la cosa que se pretende poseer, y así vemos que el art. 983 del C. Civil establece por vía de ejemplo, que la posesión del suelo deberá probarse por hechos positivos de aquellos a que sólo da derecho el dominio como el corte de madera, la construcción de edificios y cerramientos, el cultivo de plantaciones o sementeras y otros de igual significación..." (G.J., t. CXXXI, pág. 185), de donde se siguen dos conclusiones de suma importancia toda vez que, según se verá en su momento, no obstante poner de presente que en buena medida son erróneas aquellas consideraciones efectuadas por el Tribunal, por falta de la trascendencia necesaria resultan inoperantes los tres cargos aquí formulados contra la sentencia.

a) Lo primero que se concluye luego de la detenida lectura de los preceptos citados y de los textos de jurisprudencia que han afirmado la doctrina legal correcta que con base en ellos corresponde seguir, es que para la consumación de la prescripción adquisitiva del dominio sobre inmuebles por derecho común, ordinario o extraordinario, no exigen las referidas normas otra cosa distinta a que el poseedor realice, durante el tiempo que la ley determina y dada la índole de la finca, los mismos actos que en relación con ella llevaría a cabo un propietario, y allí donde éste no habría ejecutado ninguno que signifique aprovechamiento económico del predio, nada en este sentido podría pedírsele al poseedor, por manera que incurren en lamentable confusión quienes, como en la especie litigiosa en examen el fallador colegiado de segunda instancia, sin mayor análisis hacen actuar en este plano elementos que, en cuanto tomados al parecer de la prescripción por explotación económica de las tierras que consagra el art. 12 de la L. 200 de 1936, leído en concordancia con el art. 1o de este mismo estatuto - disposiciones ambas reformadas por los arts. 2o y 4o de la L. 4a de 1973 -, no son en modo alguno de recibo en supuestos en

que la pretensión de declaración de pertenencia incoada, no invoca la usucapión especial de carácter agrario que dichas disposiciones consagran y regulan.

*La posesión material en concepto de dueño, llamada "clásica" por algún sector de doctrina porque es la necesaria de acuerdo con el Código Civil para ganar por prescripción la propiedad de predios rurales ajenos, no tiene por fuerza que imprimírsela para su cabal comprobación el sentido de una explotación económica, por lo que se ha dicho con sobrada razón que la posesión requerida por la usucapión extraordinaria "...hasta que sea posesión, al paso que la exigida por la agraria es indispensable, además, que sea económica..." (José J. Gómez. Bienes. Edición actualizada de 1981, Cap. XII, Sección Quinta), enunciado éste desconocido por el Tribunal al echar de menos en varios apartes de su fallo la prueba de "...la explotación económica del terreno..." que a su juicio debió suministrar el demandante, incurriendo en consecuencia en un ostensible error de apreciación jurídica que con acierto muestran el primero y el tercero de los cargos formulados y que, de conformidad con el art. 375, inciso 4o, del C. de P. C., obliga a la Corte a hacer la correspondiente rectificación doctrinaria.*

*b) La segunda conclusión por destacar es que la posesión cuya prueba tiene a su cargo el prescribiente, ha de referirse por fuera de cualquier género de duda razonable a la porción de tierra cuya pertenencia es reclamada, lo que en otras palabras quiere significar que debe existir completa identidad entre la finca sobre la cual arraiga el actor la situación posesoria que acredita, puesta de manifiesto como se sabe en actos físicos de uso, goce y transformación acompañados de la intención inequívoca de someter ese predio al derecho de dominio al que de ordinario corresponden dichos actos, y aquella que es señalada como objeto de la pretensión declarativa entablada, identidad que es indispensable porque en tratándose del reconocimiento judicial de una titularidad real, preciso es saber con absoluta certeza cuál es el inmueble sobre el cual ella incide, desde luego en el entendido que en el ámbito de la posesión y la función legitimante que con ayuda del tiempo le compete cumplir, las inscripciones inmobiliarias carecen de contenido y alcance (G.J. ts. LXXX, pág. 97, y CH, pag. 118).*

*En síntesis, sin esta perfecta y expresiva identificación, la acción irremediablemente se encuentra condenada al fracaso.*

3. Según el escrito de demanda que a este proceso le dio principio y la copia del folio de matrícula inmobiliaria anexo a él complementada esta evidencia con el dictamen pericial practicado en desarrollo de una diligencia de inspección judicial que tuvo lugar en el sitio el día 26 de febrero de 1991 (fls. 11 y 12 del Cuad. 2 del informativo), los linderos del predio "Se Verá" ubicado en el corregimiento de Gaira (Magdalena) en el kilómetro 17 de la carretera que de Santa Marta conduce a Ciénaga, son los siguientes: Por el Norte con terrenos que son o fueron de Zoila de la Hoz y que luego tuvo Alfredo Calderón quien compró a Ana Nova Gil, en extensión de 316 metros; por el Sur y en extensión de 496 metros, con terrenos de Martín Ceballos; por el Este con la carretera mencionada frente a predios de Gabriel Sánchez Ramírez, Arnoldo Vengoechea y Arturo Porras, en extensión de 176 metros; y por el Oeste, en 340 metros, con la línea del ferrocarril nacional del Magdalena, mientras que por Resolución 589 de 1990, cuya copia es integrante por cierto del Acta de aquella diligencia por iniciativa del entonces apoderado judicial de la parte demandante (fls. 13 y 14 del mismo cuaderno 2), el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria adjudicó a José Benito Cerra Torres un terreno calificado de baldío y denominado "Acoromar", con una cabida de 38 hectáreas 125 metros cuadrados, que al tenor del acta oficial en mención tiene los siguientes linderos: Por el Norte con Zoila de la Hoz en 380 metros; por el Sur con Productos Colombia Producción en 520 metros; por el Este con la carretera troncal del Caribe en 825 metros; y por el Oeste con la línea de ferrocarril en 445 metros, circunstancia que lleva a advertir que aun cuando la realidad es que a la luz de estos documentos se trata de predios rurales que tienen distinto nombre y sus medidas lineales no son idénticas, lo que sí no es posible aceptar es que dos inmuebles, teniendo iguales linderos por tres de sus costados, sean por entero diferentes; o son el mismo o, por lo menos, uno esta comprendido dentro del otro, y la confusión llega a su punto culminante si se tiene en cuenta la Resolución proferida el 3 de julio de 1990 por la Alcaldía Mayor de Santa Marta (fls 12 y siguientes del Cuad. 3 del expediente), habida consideración que de estarse a los antecedentes de hecho que dicho acto refiere, es el mismo adjudicatario Cerra Torres quien en defensa de una posesión que dijo haber mantenido por espacio de veinticinco años sobre un predio también distinguido con el nombre "Se Verá", con cabida de 38 hectáreas de tierra y cuyos linderos se asemejan en mucho a los reseñados en aquella Resolución de adjudicación, entabló querrela de carácter polícivo por perturbación contra Carlos Lacouture Dangond.

Así, pues, luego de realizar un pormenorizado examen en su conjunto de este caudal probatorio, bien puede concluirse que la identidad del predio rural cuya propiedad pretende haber adquirido por prescripción extraordinaria el demandante en este proceso, no quedó establecida con la exactitud que requiere la ley y, por ende, la corporación sentenciadora no se equivocó al indicar ese defecto como uno de los motivos de suyo suficientes para fundamentar la negativa a declarar la pertenencia, todavía con mayor razón cuando es el mismo prescribiente quien, al absolver un interrogatorio en audiencia celebrada el día 25 de abril de 1991 (fls. 2 y 3 del cuad. 4 del informativo), admite que en el inmueble descrito en su demanda y cuyo dominio afirma haber adquirido por posesión continuada durante un tiempo "...may superior a los veinte años...", ocupa una parte el adjudicatario José Benito Cerra Torres y que, por consiguiente, ambos son vecinos.

4. A la luz de todo cuanto queda dicho en los párrafos que anteceden, ninguno de los tres cargos formulados en el escrito sustentario del recurso puede alcanzar la finalidad infirmatoria que con su interposición persigue la parte actora en el proceso de origen, habida consideración que aun cuando dos de ellos, el primero y el tercero, ponen de manifiesto que el fallo censurado adolece en realidad de errónea motivación jurídica, y el segundo alude a una cuestión probatoria que de haber sido propuesta del modo debido en instancia podría ahora revestir alguna importancia, lo cierto es que ninguno tiene la influencia decisoria necesaria para alcanzar aquél objetivo.

a) En efecto, con especial énfasis ha sostenido la doctrina jurisprudencial que *el recurso de casación, para lograr los propósitos que en concreto le son inherentes, debe contar siempre con la fundamentación adecuada, y por disponerlo así la ley, es al propio recurrente al que le toca demostrar el cabal cumplimiento de este requisito. "...lo que supone, además de la ocurrencia de un gravamen a él ocasionado por la providencia en cuestión, acreditar que tal efecto se produjo por efecto de alguno de los motivos específicos que la ley consagra, no por otros, y que entre el vicio denunciado en la censura y aquella providencia, se da una precisa relación de causalidad, teniendo en cuenta que, cual lo ha reiterado con ahínco la doctrina científica, si la declaración del vicio (...) sometido a la consideración del Tribunal de casación no tiene inferencia esencial en la resolución jurisdiccional y esta pudiera apoyarse en premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto carecerá entonces de la necesi-*



ria consistencia infirmatoria y tendrá que ser desechado. Y cuando de aducir la causal primera de casación se trata, por fuerza del anterior principio se ha dicho con razón que no cualquier error de juzgamiento es el que autoriza el empleo exitoso de esta vía procesal, sino que debe tratarse de un error referido a la sentencia definitiva como causa eficiente de la ilegalidad de la que adolece, vale decir de un defecto que de manera directa repercute sobre ella, determinando su sentido decisorio, requiriendo éste acerca de cuya justificación teórica y de los alcances que le son propios, la Corte tiene precisado que (...) en el sistema colombiano y en la generalidad de los que prohíben el modelo tradicional, para que el recurso extraordinario conduzca a la casación de la sentencia combatida no basta que medie una violación de norma jurídica, sino que es preciso además que tal quebranto sea la determinante de la resolución tomada en dicho fallo, que es justamente lo que la doctrina universal ha llamado la *eficacia causal del error in iudicando*. O sea (...) que es menester que la resolución judicial esté basada en la infracción legal, es decir que exista un nexo de causalidad entre dicha infracción y la resolución que con base en ella se toma, de tal manera que el declarar la violación pueda tener un valor y efectos prácticos. Si la providencia combatida en casación, no obstante su errónea motivación jurídica, se conforma en sus disposiciones a lo que el derecho prescribe, éstas no podrán quebrarse..." (G. J., t. CLXVI, pag. 583) (Cas. Civ. de 5 de mayo de 1992, sin publicar). En consecuencia, si como en el caso presente acontece según quedó señalado al efectuarse el respectivo resumen, la sentencia del Tribunal se ofrece apoyada en varias razones, autónomas cada una y por lo tanto bastantes por sí solas para resistir el peso de la resolución jurisdiccional en dicha providencia contenida, la acusación operante esta subordinada al ataque, tanto simultáneo como eficaz, de las ameritadas razones, requisito que no reúnen los tres cargos en estudio, pues a pesar de configurarse el error de calificación jurídica que denuncia con acierto el censor acerca de la clase de posesión que era de su resorte probar, resultando por lo mismo equivocados también los criterios que la corporación sentenciadora puso en práctica para examinar la evidencia de carácter testimonial y documental allegada al expediente, y sin embargo de reflejar la sentencia impugnada que, en la formación del juicio jurisdiccional sobre los hechos, tuvo relevancia la copia de un documento público que en verdad puede dar lugar a reparos según la letra del art. 256 del C. de P. C., la decisión desestimatoria de la declaración de pertenencia sigue teniendo firme respaldo en la ausencia de prueba de la identidad de la finca que se pretende adquirida por prescripción y aquella

en que se afirma tuvieron ocurrencia, por más de veinte años, actos positivos de significación posesoria. En otras palabras, permaneciendo esta base del fallo incólume y con ella la resolución que sustenta integralmente, por obra de los principios que acaban de recordarse pierden trascendencia aquellos desaciertos.

b) Y en lo que atañe al cargo segundo en particular, relativo a un posible error probatorio de derecho en que habría caído el Tribunal al reconocerle eficacia demostrativa a la copia de la Resolución 589 expedida con fecha 10 de mayo de 1990 por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, obligado es hacer notar que frente a una alegación de esta índole y en vista de la conducta desplegada durante el transcurso de las instancias por la parte hoy recurrente, se impone sin lugar a duda alguna el *imperativo de técnica legal que repudia el medio nuevo en sede de casación y en cuya virtud "...no es dable auerar por vez primera ante la Corte los elementos probatorios que como tales no tuvieron tacha alguna en los trámites de la instancia..."* (G.J., t. LXXXIII, pag. 76), imperativo que desde luego adquiere vigencia incontrastable cuando, como en la especie sub lite sucede según puede leerse el Acta de la diligencia de Inspección Judicial practicada por el Juzgado 3o Civil del Circuito de Santa Marta el día 26 de febrero de 1991 (cf. fls. 11 a 14 del cuad. 2 del expediente), esas fuentes de prueba blanco de ardidos ataques en casación por supuesta irregularidad del procedimiento seguido para su producción procesal, han sido aportadas, sin la salvedad apropiada, por el mismo litigante autor de tales críticas.

*Por lo visto, pues, los cargos no prosperan.*

### DECISIÓN

En mérito de las consideraciones que anteceden la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, N O C A S A la sentencia que en el proceso ordinario de la referencia y con fecha veintiuno (21) de julio de 1992, profirió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta.

Por cuanto el recurso interpuesto da lugar a rectificación doctrinaria, no es del caso imponer condena al pago de costas.



*Copiese, notifiquese y en su oportunidad devuélvase el expediente a la oficina judicial de origen.*

*Pedro lafont Pianetta, Nicolas Bechura Simancas, Jorge Castillo Rugeles, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Hector Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra.*

## **PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL — Posesión Notoria**

En lo que respecta a la posesión notoria del estado civil de hijo extramatrimonial, fue preocupación del legislador la de establecer los hechos en que, por lo dicidientes, fuertes, manifiestos y persuasivos, son los que comúnmente revelan la filiación.

## **VALORACION PROBATORIA / AUTONOMIA DEL JUZGADOR / PRESUNCION DE ACIERTO / PRESUNCION DE LEGALIDAD**

La tarea de apreciar el haz probatorio ha sido encomendada a los juzgadores de instancia, quienes en el punto gozan por tanto de autonomía; de donde se sigue que las conclusiones a que arriben están revestidas de la presunción de acierto y legalidad, y, en consecuencia, merecen respetabilidad que este orden de premisas les suministra.

## **ERROR DE HECHO**

Evidencia del yerro fáctico.

Igual sentido: Cas. Civ. de 28 de septiembre de 1977 .

## **TESTIMONIO — Valoración en conjunto**

Valoración en conjunto de la prueba testimonial respecto de los elementos configuradores de la posesión notoria.

Igual sentido: Cas. Civ. de 24 de enero de 1992; CLIX, 81.

R.F.: C. de P. C. Art.: 187.

## **CASACION — Característica**

No es la casación una tercera instancia en la que pudiera ensayarse

nuevamente una mejor manera de apreciar las probanzas, así y todo resulte la ensayada con más apego a la lógica, o con mayor perfil dicaléctico, o en fin, con indiscutible fuerza convincente.

PONENTE: Rafael Romero Sierra

### TESTIMONIO DEL VECINO

Como la vecindad supone una relación constante y encadenada, normalmente no puede precisarse el momento justo en que algo de rutina sucedió.

*Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Santafé de Bogotá, treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).*

Magistrado ponente: *Dr. Rafael Romero Sierra*

*Expediente No. 4310*

*Sentencia N° 147*

Decídese el recurso de casación interpuesto por la codemandada María Nelly Rodríguez González contra la sentencia de 10 de noviembre de 1992, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca en el proceso ordinario en el que es demandante Jaime Cañón y demandados Carlos Rodríguez Godoy, María Nelly Rodríguez González y herederos indeterminados de Vicente Rodríguez Godoy.

### *.I. ANTECEDENTES*

1. Tal proceso se suscitó por la demanda en que Jaime Cañón, demandando a Carlos Rodríguez y también a los herederos indeterminados ya mencionados, solicitó se le declarase hijo extramatrimonial de Vicente Rodríguez Godoy, con derecho a intervenir en la sucesión de éste en "condición de heredero de mejor derecho, y a reclamar, en consecuencia la totalidad de los bienes herenciales", los cuales le deben ser restituidos, con los aumentos y frutos respecto de los que estén en posesión de los demandados; asimismo, que se haga la anotación respectiva en la oficina competente del registro del estado civil, y también el registro de la sentencia en la oficina respectiva de Instrumentos Públicos.

2. El aspecto fáctico de lo así pedido, bien puede compendiarse del siguiente modo:

a. Como quiera que Jaime Cañón nació el 11 de diciembre de 1958, o sea, después de 180 días de que Vicente Rodríguez sostuvo relaciones sexuales estables con Herminia Cañón, es éste su padre extramatrimonial, quien falleció en Girardot el 22 de julio de 1979.

b. Jaime tiene a ese respecto la posesión notoria de tal estado civil, pues Vicente Rodríguez lo trató "como a su propio hijo proveyendo a su subsistencia, y sus deudos y amigos y el vecindario del domicilio en general, le han reputado como hijo de tal padre en virtud de tal tratamiento, el cual se prolongó por espacio de más de 5 años".

El demandante estudió en el Instituto Olaya Herrera de Girardot en los años 1975 y hasta mediados de 1976, y allí lo matriculó Vicente Rodríguez "como su padre, y sufragó los gastos de su educación. Otro tanto ocurrió en el Colegio San Luis Gonzaga de allí, en el año 1976".

3. Reanudada la actuación después de una nulidad procesal, Carlos Rodríguez Godoy recorrió el traslado manifestando que "Niego el derecho que invoca el actor y me opongo a que se hagan las declaraciones y condenaciones imputadas"; en cuanto a los hechos, los negó en su gran mayoría y destacó que la madre del actor fue contratada por Elisa Rodríguez (hermana del causante), en el año 1962, "para desempeñar oficios domésticos en la casa tienda de ésta", y que Herminia "llevó con ella a Jaime de tres años de edad"; al morir Elisa, Herminia continuó trabajando allí como empleada doméstica de Vicente Rodríguez.

También lo recorrió, y en términos similares, María Nelly Rodríguez González, "heredera de Fermín Rodríguez Godoy, hermano legítimo del fallecido Vicente Rodríguez Godoy"; simultáneamente formuló demanda de reconvención suplicando la nulidad del registro civil de nacimiento del folio 556 del tomo 100 de la Notaría de Girardot, así como del registro eclesiástico de la Parroquia San Miguel de la misma ciudad (con fundamento en el cual se extendió aquél) siendo que se trató de una segunda partida eclesiástica y, por ende, carente de validez.

4. Prosperó la excepción previa que de caducidad de los efectos patri-

moniales propusieron los herederos indeterminados; se denegó en cambio respecto de Carlos Rodríguez Godoy y Nelly Rodríguez.

5. La primera instancia culminó con sentencia de 3 de abril de 1992, en la que el Juzgado Promiscuo de Familia de Girardot declaró la filiación implorada y la vocación hereditaria del demandante, y ordenó la inscripción en el registro civil de nacimiento de Jaime Cañón; pero denegó las restituciones solicitadas, y desestimó las pretensiones de la demanda de reconvención.

6. María Nelly recurrió en apelación; y, el Tribunal Superior de Cundinamarca, decidió confirmar la sentencia.

7. Como se dijo, contra la sentencia del Tribunal interpuso la misma impugnante recurso de casación.

## *II. La sentencia del Tribunal*

1. Cumplido el recuento procesal y litigioso, establecida la concurrencia de las condiciones propias de un fallo de mérito; y, definido que dos son las causales de paternidad esgrimidas, de las cuales se halló impróspera la consagrada en el numeral 4 del artículo 6 de la ley 75 de 1968, se ocupó el sentenciador de la otra, atinente a la posesión notoria del estado de hijo extramatrimonial, prevista en el numeral 6 de la norma en cita.

Así que, una vez la perfiló jurídicamente, a cuyo efecto destacó el trípole de elementos que debe comprobarse, relativos como se sabe al trato, fama y tiempo, procedió a examinarla frente al acervo probatorio arrojado a los autos, al cabo de lo cual, previa relación de los diversos testimonios recaudados y de las inspecciones judiciales practicadas en los colegios donde estudió el demandante, dijo categóricamente:

“El cardumen probatorio a que se ha hecho referencia, demuestra en forma plena que VICENTE RODRÍGUEZ GODOY por un período superior al exigido por la ley trató a JAIME CAÑÓN como a su hijo, repren-diéndolo cuando las circunstancias así lo ameritaban, suministrándole sustento, entendido este como alimentación, vivienda, educación, recreación; comportándose social y familiarmente como un verdadero padre, comportamiento que fue captado por el vecindario y que es expresado sin ningun-

na reticencia por los declarantes, quienes en forma amplia, manifestaron al juzgado el origen de su conocimiento, mostraron total imparcialidad, porque ninguno de ellos confesó tener vínculos de consanguinidad, afinidad o de otra índole con el demandante, surgiendo para la Sala el convencimiento sobre la paternidad que se deprecia, dadas las especiales características de los declarantes, quienes por su edad, vecindad y seriedad, merecen íntegra credibilidad en sus afirmaciones”.

De ahí en adelante acometió la labor de refutar cada uno de los argumentos con que la parte demandada ensayó informar la paternidad recabada. Estudio que abrió con el relativo a que el demandante fue doblemente bautizado con indicación de distinta madre (en una figura Gladys Moreno y en otra Herminia Cañón), y sin que en ninguna figure el nombre del padre, argumento al que el Tribunal le restó trascendencia “en cuanto a la causal que se pretende probar”.

Continuando con tal examen, aseveró que tampoco se desvirtúa la paternidad con “la afirmación lacónica que se hace sobre la calidad de empleada doméstica que se le quiere endilgar a la madre del demandante”. A lo que añadió: “hay plena convicción sobre ese carácter múltiple que ocupó HERMINIA CAÑÓN en la vida del difunto RODRIGUEZ GODOY, porque si tomamos en su verdadero sentido las palabras del testigo CARLOS EDUARDO CAÑAS MARTÍNEZ, fue realmente importante el papel que cumplió la madre de JAIME en la vida del causante, como que lo acompañó durante un largo trayecto de su existencia, le ayudó a administrar sus bienes, compartieron el mismo techo, educaron en forma conjunta al actor, y fueron catalogados dentro del vecindario como una pareja de concubinos que tenían un hijo común, al que prodigaron el trato que corresponde en estos casos”.

También le restó virtualidad a la versión de algunos testigos que se limitan a “contarle al juzgado sin mayores argumentos” que cuando Herminia llegó en calidad de sirviente doméstico a la casa de Vicente llevaba consigo al hoy demandante. “Esta premisa -- dice el juzgador -- no desdibuja en manera alguna los hechos de los cuales han dado cuenta los demás testigos, no significa que si solo a partir de 1962, la pareja formalizó su pública convivencia, no se hubieran podido conocer antes y entablar relaciones íntimas, este hecho no ha sido controvertido, sino que se parte de una conclusión equivocada, como es que solo los protagonistas de la

historia se conocieron en el año 1962, cuando Herminia llegó a desempeñar oficios domésticos en casa de VICENTE y su hermana ELISA”.

De otro lado, no es atendible que Vicente haya asumido en condición de patrono los daños que causaba Jaime en su infancia, “porque todos los testigos enfáticamente informan que siempre lo hizo en calidad de padre”.

Existe el hecho “no controvertido” de que Vicente figuró como acudiente en algunos establecimientos educativos en los que estudió el demandante, elemento corroborador de la paternidad, pues allí “se le tuvo como a su verdadero padre y no como un extraño”. Lo que consolida Eduardo Buitrago al declarar que Vicente le pedía orientación como maestro de escuela que era a la sazón.

Paso seguido dio en agregar:

“Como punto final vale la pena hacer referencia al escrito que aparece al folio 141 del cuaderno No. 1, en donde el demandado CARLOS RODRIGUEZ GODOY, en forma expresa manifiesta que JAIME CAÑON es hijo extranmatrimonial de Vicente Rodríguez y así ha sido reconocido por toda la familia; circunstancia que no puede tenerse como plena prueba, pero que sí constituye indicio que refuerza el haz probatorio mencionado”.

Por último, encontró bien denegada la pretensión de la demanda de mutua petición y estimó intocable, para los efectos propios del recurso de apelación, la denegación que de las restituciones hizo el *a-quo*.

### *III. La demanda de casación*

Se ha formulado un cargo en el que se denuncia el quebranto indirecto, por aplicación indebida, de los artículos 1, 4 (ordinal 6), 6 y 7 (inciso primero) de la ley 45 de 1936 (con las modificaciones de la ley 75 de 1968), 398, 1008, 1040, 1045, 1240 (con las modificaciones de la ley 29 de 1982 para las tres últimas), 1241 y 1321 del Código Civil, debido a manifiestos yerros fácticos en que cayó el sentenciador.

Comienza el recurrente por recordar que la ley tiene consagrado, para asegurar la veracidad del testigo, algunos requisitos a tener en cuenta en la recepción de la prueba, entre los cuales subraya el de la razón de la ciencia



del dicho, que, de no cumplirse, le resta todo valor probatorio al testimonio, como así lo tienen sentado la doctrina y la jurisprudencia, haciendo varias citas al respecto.

Y ocurre que aquí los cinco testimonios que tuvo presente el Tribunal no cumplen los requisitos legales de eficacia probatoria, como que “no son responsivos, ni exactos, ni completos, pues se limitan a afirmar hechos o a emitir conceptos, sin expresar la razón de su dicho. No hay propiamente en ellos — para emplear los términos de la Corte— “una información testimonial sino una apreciación conceptual, que no es de la incumbencia del testigo”, amén de que se les formularon preguntas insinuantes.

A intento de demostrarlo, no sin antes señalar que el Tribunal comenzó inexplicablemente por el examen de los solicitados por la parte demandada, los que ciertamente nada dicen sobre lo inquirido, pasó a criticar los pedidos por la actora, a cuyo propósito extrajo los pasajes que a su juicio estimó relevantes, así:

a. Basta la mera lectura del testimonio de Rosa María Barrios, “para advertir, al rompe, las graves fallas de que adolece: la testigo en efecto, se limita a hacer afirmaciones de carácter general tales como las de que Vicente salía *siempre* con Jaime, que lo llevaba a la escuela y respondía por él *siempre*, que iba con su hijo a *toda hora*, que lo presentaba en *todas partes* como su hijo, que *todo el mundo* sabía que Jaime era hijo de Vicente, que nunca le *negaba nada a Jaime*, y que respondía *en todos los problemas* de su hijo, sin precisar, como lo manda el artículo 228, numeral 3, del C.P.C., las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho, ni, por lo mismo, dar la razón de su dicho”. Agrega que las expresiones subrayadas son “vagas e imprecisas y, por ende, nada prueban”, porque emplear las expresiones *siempre*, *a toda hora*, *en todas partes*, implican que la testigo “hubiera estado permanentemente con él, y esto es materialmente imposible. La testigo ha debido precisar en qué ocasiones vio a Vicente salir con Jaime, a qué escuela lo llevaba, cuándo y dónde presenció, quiénes sabían que Jaime era hijo de Vicente, en qué colegios lo matriculó, cómo tuvo conocimiento de este hecho y de que pagaba la pensión, y en qué consistió el trato de padre que le daba Vicente a Jaime. Sólo así se puede tener certeza de que la testigo dice la verdad con conocimiento exacto de los hechos. Nada de esto dice aquella y, por consiguiente, su dicho carece de fuerza probativa”.

Ello sin contar que algunas preguntas fueron ostensiblemente insinuantes, como ocurrió con la que se le hizo sobre la posesión notoria, en la que se incluyó todas las circunstancias constitutivas de la misma, al punto de que es casi una reproducción fiel del artículo 6 de la ley 45 de 1936; a la testigo, pues, se le restó espontaneidad; por el contrario, se le construyó a responder lo que se le preguntó, y así dijo que “todos sus amigos y vecindario lo reputaban a Jaime como hijo suyo”.

Concluye la censura que “Por no haber percatado el sentenciador la manifiesta falta de responsividad de este testimonio, ni las demás fallas que me permití notar, incurrió en evidente yerro fáctico”.

b. Al continuar con el de Eduardo Buitrago Murillo expresó que es notoria “la falta de responsividad de este testimonio”, pues igualmente se limitó a hacer afirmaciones generales, “tales como las de que *en los días festivos* solía Vicente dar paseos con su hijo en un parque, que *siempre* compartieron la misma casa y comedor, que *siempre* respondió por la subsistencia del niño, que *éste siempre* se alimentaba en la misma tienda, que *varias veces* vio a Vicente sacar platar para el pago de pensiones de los colegios y exigir los recibos correspondientes, que *siempre* presentaba a Jaime como su amigo, pero sin explicar sus respuestas, previsando las circunstancias de tiempo, modo y lugar como ocurrió el hecho y por qué lo presencié. No dice por qué le consta que todos los días festivos salía Vicente a pasear con Jaime en el mismo parque, ni por qué estaba presente el testigo cuando aquél sacaba la plata de la caja para el pago de pensiones, ni cómo supo que era ésta la finalidad, ni cómo tuvo conocimiento de que exigía los recibos correspondientes”, y así con los demás hechos de que dio cuenta.

Por otro lado, el de que Jaime siempre comiera en la misma tienda y compartiera la misma casa, no implica la posesión notoria, pues ello se explica por “la circunstancia de ser hijo de la empleada al servicio de Vicente, como lo aseveran varios testigos”; por lo demás, la posesión notoria demanda también el “suministro de vestuario, de atención médica, etc.”.

Hay que tomar nota, asimismo, de que no obstante afirmar que conoce a Vicente y a Herminia desde 1961, niega el hecho, narrado por numerosos declarantes, de que Herminia tuviera entonces un niño de tres años. “Lo

que pone de manifiesto que el testigo no dice la verdad y que el testimonio, por lo mismo, carece de credibilidad".

c. En Tulio Rodríguez Rodríguez también es manifiesta la falta de responsividad por cuanto "no da razón alguna de su dicho", afirmando simplemente que Vicente presentaba a Jaime como su hijo, "sin precisar a quiénes, dónde y cuándo", ni se refirió a los hechos que constituyen el elemento fama, lo que no se cumple con la mera afirmación de que otras personas lo consideraban como tal.

Y fluye inverosímil que Vicente le hubiese pedido al testigo que le sirviera de padrino del niño, en razón a que el declarante, según lo dice, "molestaba" a Herminia, amén de que la partida bautismal dice que el padrino fue Alvaro Rodríguez.

Entonces, si tales fallas se pasan por alto, es porque el Tribunal "incurrió en nuevo y protuberante error fáctico".

d. Carlos Eduardo Cañas Martínez, igual que los anteriores, carece de la ciencia del dicho, pues no explica cuándo y dónde y por qué afirma que Vicente mantenía a Jaime porque este vivió al lado de aquél; que lo buscaba cuando se perdía, y que todas las personas de ese sector lo consideraban como hijo de Vicente. Lo demás que narró sobre educación, vestuario y dinero, dijo haberlo escuchado a Herminia, convirtiéndose aquí en testimonio de oídas. Con el agregado de la contradicción "evidente y notoria" respecto del tiempo que dijo conocer a Herminia, pues en un lado afirmó que desde el año 1967 y en otro se refirió a hechos de 1956.

e. De Libardo Antonio Garzón Torres le llama la atención "el hecho de que después de ocho años, el testigo recuerda con precisión que fue Vicente quien solicitó verbalmente la matrícula de Jaime, y que al hacerlo le hubiera manifestado que es su hijo; así como el hecho de que él era quien pagaba personalmente las pensiones y asistía a las reuniones de padres de familia, siendo muchas las personas que van a solicitar matrícula, a pagar pensiones y a las reuniones de padres de familia"; sin que, de otro lado, exprese motivo alguno de singular relieve que justifique el recuerdo preciso.

También carece de la ciencia del dicho, pues no elucida por qué fue él quien recibió la solicitud de matrícula, y no el secretario, ni por qué le

consta que Vicente era el pagador de las pensiones y que asistía a las reuniones. "De otra parte cabe observar que de ser cierto que Vicente le manifestó al testigo que Jaime era su hijo, se trataría de una confesión extrajudicial, y el solo dicho de aquel, carente de responsividad, no la prueba plenamente como lo exige el artículo 195, numeral 6, del C. de P. C."

Tras la crítica de estos testimonios, el censor anota globalmente que si el Tribunal hubiere "percutado las evidentes falas de que adolecen, principalmente en lo tocante con su falta de responsividad, no habría tenido por probados, de manera irrefragable, los elementos constitutivos de la posesión notoria de hijo extramatrimonial".

Pasó luego a examinar las inspecciones judiciales practicadas en los colegios donde estudió Jaime. En cuanto al denominado Departamental Integrado dijo que al Tribunal no le mereció ningún comentario especial el que en el acta de matrícula figurase como padre de aquél Heliodoro Moreno; y pasó por alto, además, que el rector de allí manifestó que tal nombre lo suministra o la madre o el acudiente o el alumno, de donde se sigue que tuvo que haberlo suministrado Herminia Cañón, o el mismo Jaime que contaba ya catorce años de edad y debía saber quién era el padre. Y naturalmente que también prefirió la circunstancia de que el declarante Alvaro Rodríguez corroboró ese hecho, exactamente al dar cuenta de que Herminia le comentó, cuando él hizo las veces de padrino, que el padre de Jaime era Heliodoro Moreno.

Se trató de enervar la firma que allí aparece de Herminia, trayendo la tarjeta de identidad en la que figura que ella no sabe firmar, pero debe tenerse en cuenta que entre uno y otro episodio transcurrieron 19 años y es factible que para entonces hubiese aprendido a firmar, como lo hace verosímil el hecho de aparecer dos años después firmando también la matrícula en el colegio Bárbula; y, de otra parte, no es esa la manera de probar la falta de autenticidad sino con el dictamen grafológico, que brilla por su ausencia. "Tales firmas siguen, por tanto, gozando de la presunción de autenticidad".

Respecto del colegio San Luis Gonzaga, anota que existen dos matrículas, una del año 1974 y la otra de 1976, pero en ésta, a diferencia de aquélla, los espacios correspondientes a padre y madre aparecen en blanco, lo que trató de justificar el rector con el argumento de que en esa ocasión

se sometió la matrícula a la condición de que posteriormente se llevase al padre para la firma respectiva; de donde resulta la poca seriedad con que allí se sentaban las matrículas, desde que se permitía que ulteriormente se llenasen los espacios. Por suerte que no hay certeza de que la primera matrícula haya sido llevada en el momento de sentarse o después, y en este caso quizás a espaldas de Vicente.

En el Instituto Bárbula, no aparece el nombre del padre de Jaime, lo que sorprende porque figurando allí Herminia Cañón como madre no se entiende cómo se deja ese espacio sin llenar si, un año después, en el San Luis Gonzaga se había llenado con el de Vicente Rodríguez. "Por qué no lo hizo Jaime Cañón? Sería que no sabían a quién hacer figuras como padre, si a *Heliodoro Moreno* como aparece en la matrícula de 1973 (...) o a Vicente Rodríguez?".

En la matrícula del Olaya Herrera no percató el sentenciador que aparece como madre la señora María Cañón —igual que en la del Departamental Integrado en el año 1973—, "lo que suscita dudas acerca del verdadero nombre de la madre de Jaime": ni percató que el espacio correspondiente al nombre del padre quedó en blanco, no obstante haber intervenido Vicente Rodríguez, a quien se hizo figurar como tal en la del San Luis Gonzaga. "Si en esta ocasión, habiendo firmado Vicente en el renglón 'padre o acudiente', no dijo ni hizo constar que fuera el padre, necesariamente firmó como acudiente". Además, el rector manifestó que las pensiones las llevaba el alumno y nunca se averiguaba quién se la había suministrado.

Todas estas matrículas, dice el censor, deben ser analizadas sin perder de vista que la única causal a la que deben apuntar es a la de la posesión notoria del estado de hijo, y concretamente a demostrar el elemento educación, que fue la única que el Tribunal tuvo en cuenta para proferir sentencia extintoria; en ningún caso, pues, se podrían mirar como apras para estructurar otra causal no pedida, como podría ensayarse con la de la declaración inequívoca de paternidad en prueba literal.

Y lo cierto es que ellas no conducen a demostrar la averiguada educación, pues en las únicas que firmó Vicente lo hizo en el renglón "padre o acudiente"; y la sola firma no significa que le hubiere costado la educación a Jaime. "Al haber visto en esas dos matrículas prueba concurrente

del elemento de educación, uno de los constitutivos de la posesión notoria, alteró la realidad objetiva de las mismas al encontrar en ellas algo que no expresan”.

Finalmente, el sentenciador atribuyó calidad de indicio a la afirmación que por escrito hizo Carlos Rodríguez (folio 141, cuaderno I), en donde reconoció que efectivamente Jaime es hijo de Vicente, pero sin darse cuenta el juzgador de que dicho demandado, a vuelta de oponerse a las pretensiones y negar sus fundamentos de hecho, vendió “los derechos hereditarios” que en la sucesión de Vicente le corresponde; lo cual es trascendente, porque desde ese momento “dejó Carlos de tener interés en la sucesión, y con la intención de perjudicar a Nelly, sin lograrlo desde luego, hizo la manifestación susodicha. Para entonces era ya un tercero, y para que su declaración pudiera tener algún valor tenía que haberla hecho con las formalidades legales propias del testimonio”, lo que no se cumplió, careciendo por tanto de todo valor probatorio.

El recurrente dice que es suficiente la demostración de los diversos yerros fácticos que así puso en evidencia; pero que para mayor certeza cabe analizar la prueba de la parte demandada, la cual fue desatendida por el Tribunal sin tomar que concurre a evidenciar la manera equivocada con el manejo de las pruebas. Así, Deissy Rodríguez, Alvaro Rodríguez, Fabio Rodríguez, Luciano Botero, Manuel Guerrero, Helena Godoy y Pedro Prada narran que conocieron a Herminia en casa de Jaime desempeñándose como empleada doméstica, habiendo llegado a ésta con el niño Jaime.

Respecto de lo cual se equivoca el sentenciador cuando dice que este último hecho no desdibuja su conclusión, porque no se descarta que antes de todo ello se hubieren conocido Vicente y Herminia y que sólo del año 1962 en adelante vinieron a hacer pública su relación; yerra porque —asegura el casacionista— “no existe prueba alguna” de que se hubieren conocido y entablado relaciones con antelación. Y en cuanto a la condición de empleada, no es cierto que los declarantes hayan sido lacónicos, pues se refieren ampliamente a ese hecho; más aún, la propia Herminia corrobora la declaración de los testigos “cuando en el poder que confirió al abogado (...) para solicitar la declaratoria de yacencia de la herencia de Vicente Rodríguez, que en fotocopia debidamente autenticada obra al folio 45 del cuaderno primero, dice que le asistía interés para formular tal solicitud ‘como empleada que fue del citado causante’. No queda, por consiguiente,



la menor duda de que Herminia Cañón vivió en la casa de Vicente y de Elisa en su condición de empleada doméstica de los mismos". Si, entonces, los testigos en que se fundó el Tribunal niegan estos dos hechos se pone "en duda la veracidad de sus declaraciones".

"Este hecho, el de que Herminia viviera en la misma casa de Vicente como empleada, junto con su hijo, explica el que los testigos vieran a Jaime en la casa de aquel, comiendo, viviendo, durmiendo, etc., y que Vicente le hubiera cobrado cierto afecto, al punto de servirle de acudiente en dos ocasiones".

El impugnador destaca a continuación la duda acerca del verdadero nombre de la madre del actor, para añadir: "si el nombre de la madre de Jaime se halla en tela de juicio, el del padre sí que ofrece motivos de duda", al punto de que en un acta de matrícula aparece como tal Heliodoro Moreno.

Con tal incertidumbre, "podrá afirmarse con certeza que es Vicente Rodríguez el padre del demandante? Si por irrefragable se entiende lo que es evidente, lo que no admite discusión, podrá decirse que frente a las pruebas que demuestran que Heliodoro Moreno es el padre de Jaime, de una parte; y a los testimonios carentes de responsividad y exactitud con que se pretende demostrar la paternidad de Vicente Rodríguez, de otra, podrá decirse, repito, que existe prueba irrefragable de que evidentemente es éste el padre extramatrimonial de Jaime? Ciertamente que no, señores Magistrados".

Por todo ello es que el sentenciador resultó vulnerando las normas sustanciales enunciadas de comienzo.

### CONSIDERACIONES

*1. La causal de paternidad en que a esta altura del proceso gravita la controversia, como bien lo preciso el casacionista, es la relativa a la posesión notoria del estado de hijo, la cual halló demostrada el Tribunal.*

*No está de sobra recordar que acreditada tal posesión notoria se levanta la presunción de que quien prodigó ese tratamiento es el padre de la persona que lo recibe, y, por ende, hay lugar a declarar judicialmente*



esa paternidad (ley 75 de 1968, num. 6). Y conviene dejar en claro, previamente a afrontar el análisis probatorio orientado a investigar su configuración en la presente litis, que "acaso con la finalidad de impedir que de tal forma de acreditar el estado civil se abusase, fue preocupación del legislador la de establecer los hechos en que, por lo dicentes, fuertes, manifiestos y persuasivos, son los que comúnmente revelan la filiación, prescribiendo al efecto que la posesión notoria del estado de hijo extramatrimonial 'consiste en que el respectivo padre o madre haya tratado al hijo como tal, proveyendo a la subsistencia, educación y establecimiento, y en que sus deudos y amigos, o el vecindario del domicilio en general, lo hayan reputado como hijo de dicho padre o madre, a virtud de aquel tratamiento' (art. 4 de la ley 45 de 1936), lo cual debe extenderse por un período de cinco años continuos, por lo menos (art. 9 de la citada ley 75, modificatorio del 398 del Código Civil)", todo lo cual debe aparecer probado de manera irrefragable; y se ha puntualizado también que se trata de hechos "que lejos de ofrecer un concepto abstracto e inabordable, tienen que estar traducidos en hechos perceptibles y al alcance de los conocimientos de los demás, cuando menos del vecindario donde se escenifica comportamiento semejante, y principalmente referidos, quepa repetirlo, a la subsistencia, educación y establecimiento del hijo" (Cas. Civ. de 24 de enero de 1992, aún sin publicar).

2. Naturalmente que la tarea de apreciar el haz probatorio ha sido encomendada a los juzgadores de instancia, quienes en el pecto gozan por tanto de autonomía; de donde se sigue que las conclusiones a que arriben están revestidas de la presunción de acierto y legalidad, y, en consecuencia, merecen la respetabilidad que este orden de premisas les suministra. De manera que sólo excepcionalmente pueden ser objeto de cuestionamiento en casación, y no más que en el evento de aparecer que el sentenciador, lejos de obrar con discreción dentro del marco autónomo citado, franquea sus límites e incide en el terreno que repudia la lógica y el buen sentido, bien sea sacando conclusiones contraevidentes u otorgando o negando mérito demostrativo a medios de prueba que no satisfacen las reglas probatorias establecidas en la ley, esto es, para expresarlo en breve y en lenguaje propio de la casación, cuando comete yerro fáctico o de derecho.

*Valga enfatizar que el primero de tales yerros, el de hecho, que es el que aquí se denuncia, se estructura, conforme con las puntualizaciones*

*acabadas de referir, cuando es de tal magnitud el desacierto que su detección no demanda ingentes esfuerzos, sencillamente porque teniendo luz propia no requiere de nada más para brillar con intensidad. Precisamente es lo que exige la ley cuando regulando el punto habla de error manifiesto, o sea, "el que aparece prima facie; y que justamente por ser tan protuberante para hallarlo no son menester mayores esfuerzos" (Cas. Civ. de 28 de septiembre de 1977).*

3. Puesta la Corte en el camino de escudriñar el contenido mismo de las declaraciones que en sentir del censor fueron muy mal apreciadas por el juzgador *ad quem*, se tiene:

a. Rosa María Barrios, de 42 años de edad, vecina de Girardot, manifestó, en síntesis, que cuando llegó a vivir al hotel Imperial de la ciudad anotada, en el año 1959, conoció a Vicente Rodríguez, a la mamá de éste, al niño Jaime (de quien dijo más adelante que estaba pequeñito a la sazón) y a la señora Herminia Cañón, porque justamente éstos vivían al frente. "El niño, que era Jaime, salía con él don Vicente, lo llevaba a la escuela, y él salía siempre con él, lo llevaba a la Escuela y respondía por él siempre. Tuvo varios problemas con el hijo mío, y siempre el que respondía en todo era don Vicente (...). Después compraron el Hotel Bogotá y se vinieron a vivir todos al Hotel Bogotá".

Narró que "yo una vez entré a comprar una tefia y estaban al pie del reléfono y se puso don Vicente muy bravo porque ellos dos (se refiere a Vicente y a Herminia) estaban dándose besos ahí al pie del teléfono y como yo entré y no golpié para entrar don Vicente se puso bravo por eso (...). Yo hasta hace cuatro años que vine de vivir allá. Hasta esa parte para donde él iba era con su hijo a toda hora". Por entonces la testigo le insinuó a Herminia que arreglara su situación en vida de Vicente:

Señaló que Herminia y Vicente vivían como marido y mujer, pues "no le dijo que don Vicente la celaba a ella y ella lo celaba a él"; y el presentaba a Jaime como su hijo, "En los colegios él era el que firmaba los recibos de colegio porque él era el que lo matriculaba y pagaba, y todos sus amigos y el vecindario lo reputaban a Jaime como hijo suyo". Jaime despachaba en la tienda que por entonces tenían, "él disponía de las cosas de la tienda, fue que don Vicente nunca le negaba nada a Jaime".

En cuanto a los problemas suscitados entre Jaime y el hijo de la testigo, ésta aclaró que el primero de ellos se presentó cuando "Jaime me escalabró al hijo mío. Yo fui a ponerle problema a don Vicente, don Vicente cogió el hijo mío y lo llevó a la droguería y le pagó todos los gastos que yo tuve con el pelado". Otro día, Jaime se llevó a mi hijo y lo tuvo todo el día en la calle, y ante el reclamo suyo le dijo Vicente a la testigo que Jaime "se estaba comiendo era lo de él", y que nada ajeno "se estaba jartando", que para eso tenía "un padre que le daba para que se gastara lo que quisiera, que no como el hijo mío que no tenía nada".

Herminia vivió con Vicente hasta el día que éste murió, "vivían en el Hotel Bogorí".

E interrogada por la eventual condición de empleada doméstica de Herminia, dijo: "Yo no creo que el patrón con la empleada fuera a cargar con ese hijo para donde él fuera sin ser hijo de él. Ahora el día que yo entré y lo encontré besándola a ella al pie del teléfono yo no creo que el patrón fuera a besar la sirvienta siendo la sirvienta".

b. Eduardo Barrago Murillo, también vecino de Girardot, 45 años de edad, expresó que "Hace veintidós años conocí al señor Vicente Rodríguez y a la señora Herminia Cañón, cuando tenían una tienda de víveres y abarrotes ubicado en la Avenida del Ferrocarril", y que le consta que ellos convivían "porque siempre los veía ir y venir, la persona que siempre estaba al lado de sus negocios era la citada señora. Cuando yo iba para mi trabajo y venía siempre hacía escala en esa tienda bien sea para tomar gaseosas o comprar cigarrillos o tomar alguna cerveza, siempre veía al frente del negocio al mencionado señor y a la mencionada señora. El niño Jaime Rodríguez (sabró que lo conocía por este nombre) la señora cuidaba de él, don Vicente lo reprendía a ratos. Como yo trabajaba en ese entonces en las Escuelas Departamentales de Cundinamarca, él me pidió el favor, don Vicente de que en qué colegio lo podía matricular a estudiar. Yo le dije que el colegio debía estar cerca a la casa porque era un niño infante, y él procedió a matricularlo en uno de los colegios de la carrera 12 o sea en el San Luis Gonzaga. El siempre me decía a mí yo quiero que mi hijo Jaime se capacite aprenda bastante para cuando yo esté ya en edad madura venga a ser mi reemplazo o administrador de lo que tengo (...) Yo como persona vinculada al magisterio en ese tiempo lo aconsejaba al niño Jaime de que estudiara con juicio, sobresaliera en sus

estudios (...) yo los veía a tarde, mediodía y noche compartir la mesa del comedor porque ellos acostumbraban a no cerrar la tienda. El, don Vicente, le decía mijo no salga del negocio sin permiso a ninguna parte, la mamá le daba quejas a don Vicente del comportamiento del niño (...) Don Vicente en los días festivos salía especialmente a dar paseos por el parque Sucre antiguo con su hijo Jaime”.

Después, retirado del magisterio, “fundé un negocio cerca a la tienda de él”, del que se surtía por ser éste mayorista, llegando por esa vía a tener muy buena amistad comercial, “a raíz de eso él en cierta ocasión me pidió un favor cuando el hijo ya estaba en bachillerato y había perdido cuatro áreas que cómo se iba a hacer para arreglar el problema. Yo le dije enfáticamente la única alternativa es que repita el curso (...) ya el muchacho le gustaba tomarse sus cervezas y aguardientes varias veces me tocó ir a la tienda de él a cobrarle cuentas a Jaime Rodríguez por concepto de licor consumido en mi negocio Bar La Fogata (...) y él siempre contestó yo respondo por las cuentas de mi hijo (...) De modo que este par de señores Vicente Rodríguez y Herminia Cañón son los padres auténticos del niño Jaime Rodríguez siempre compartieron la misma casa, el mismo comedor (...) Ahora no le diré yo solamente lo puede decir todo el vecindario de la Avenida del Ferrocarril que era bastante numeroso, por la situación geográfica de la tienda en mención, primero por la cantidad de clientes que visitaban esa tienda, los negocios vecinos del transbordo y la cantidad de gente que viene a tarde y mañana porque esa es ruta o camino de los vecinos” de todos los barrios que allí relacionó.

“Casualmente porque mi casa queda ubicada a cuatro cuadras y media de esa tienda en mención, de ahí fue que conocí a don Vicente Rodríguez, a doña Herminia y al niño Jaime (...) todo esto lo digo basado en la situación geográfica de mi casa y el mencionado negocio de don Vicente”, quien respondió por la subsistencia de Jaime: “el niño siempre se alimentaba en la misma tienda”.

“Vicente le decía a Jaime ‘mijo’ y las respuestas de Jaime eran papi con mucho gusto voy a hacerlo, papi no puedo hacerlo porque voy a jugar con mis amigos, papi no hago la tarea porque me duele la cabeza (...) Años más tarde don Vicente Rodríguez compró el Hotel Bogotá para ir a vivir allá su familia más ampliamente. Doña Herminia y su hijo pasaron al

Hotel ya como una vivienda más amplia y don Vicente siempre seguía como de rutina en la tienda humilde. Doña Herminia venía al medio día y por la tarde con los alimentos para su marido acompañado (sic) de su heredero Jaime. Eso no solamente lo veía yo lo veía todo el vecindario y los transeúntos que a esas horas es bastante generoso o numeroso”.

Cuando se topaba con Vicente muy de mañana, éste le contaba: “voy para el hotel Bogotá a levantar a mi hijo que es bastante perezoso y le toca entrar al colegio a las siete de la mañana, de acá que haga tareas y arregle su desayuno allá sale con el horario”.

Interrogado acerca de la presunta condición de empleada doméstica de Herminia, fue enfático en decir que “de modo que ese asunto de vivir bajo el mismo techo, compartir alimentos el mismo lecho su hijo al lado sus bocados mutuamente, sus caricias sus celos, doña Herminia cuando quedaba sola en la Caja respondiendo eso solamente lo hace el marido con la mujer, de modo que por las anteriores razones Vicente y Herminia eran marido y mujer que no le hubiera dado el visto bueno un Juez o un cura eso era cosa aparte...”.

c. Tulio Rodríguez, 81 años, aseguró que a Vicente lo conoció “por allá desde el año 55 para acá. Lo conocí porque tenía un negocio, y en esa época como yo estaba joven y me gustaba la cerveza yo iba a ese negocio a tomar cerveza (...) cuando vi fuera a la señora Herminia viviendo con él” ahí en el negocio; “ellos se trataban como marido y mujer, tan es así que al poco tiempo, porque somos hasta compadres, ví a la señora Herminia embarazada. Y toda la vida los ví viviendo juntos, hasta la presente que se murió don Vicente y quedaron viviendo Jaime y la mamá en las propiedades de don Vicente”; en ese lugar tuvieron el hijo; “don Vicente presentaba a Jaime como a su hijo, lo alzaba (...) Yo no le conozco más familia a don Vicente sino a la señora Herminia y a su hijo”; cuando éste hacía alguna diablura, a Vicente le daban las quejas; el vecindario lo consideraba su hijo.

Le consta que Herminia vivió con Vicente ahí en el negocio “porque yo tomaba cerveza ahí y veía que Herminia era la mujer de él; porque yo la veía destapando la cerveza (...); ella entró sin hijos ahí (...) el único hijo que tuvo fue a Jaime, de don Vicente. y por ahí en la cuadra todo el mundo sabía que el niño era de él”.

d. Carlos Eduardo Cañas Martínez, 60 años, comerciante, expuso: a Vicente "lo conozco hace unos veinte años. A la señora Herminia hace unos quince únicamente. Esto se debe a que en el año de 1967 tomé en arriendo un local a poca distancia del negocio de él y que se denominó y actualmente se denomina Residencias Marta". Se conocían porque se dedicaban a idéntico negocio; motivo por el cual "frecuentemente cambiábamos impresiones sobre la situación inclusive el manejo de varios clientes (...) qué clase de personas son (...). A la señora únicamente la conozco desde hace 15 años manejando el establecimiento de don Vicente Rodríguez Godoy, denominado Hotel Bogotá"; y en otro negocio que él tenía, también la veía administrando, y como era mayorista, en ese negocio se proveía el declarante.

Aclaró que desde "el año 56 únicamente conocí al lado de don Vicente y a la señora pero no en una forma íntima como cuando viví ya directamente como vecino". Y agregó: "Desde esa época que he sido vecino de él sí me consta que era don Vicente y la señora los que vivían únicamente en el Hotel como dueños". Dicha señora era la "encargada de hacer los alimentos para todos tres y el aseo del Hotel, administración (...) porque don Vicente permanecía en la tienda, pasaba únicamente a horas de comida y cuando ya cerraba por la noche los veía yo que pernoctaban ahí todos tres".

El declarante le dio posada a Jaime en su negocio, a quien conocía porque, además, era condiscípulo de su hijo; allí se quería porque el papá lo iba a castigar; al otro día don Vicente iba preguntando diciéndole que ya no lo castigaría, e incluso preguntaba cuánto debía de hospedaje "y como los vecinos nos prestamos servicios yo jamás le cobré nada".

"Don Vicente lo mantenía porque ese muchacho vivía al lado de él (...) lo buscaba cuando se perdía (...) Ahora es que está sufriendo ese muchacho porque mientras estuvo al lado del padre don Vicente no sufría las penurias que lo he visto sufriendo en estos días, porque tenían el apoyo de él (...) Todo el personal de ese sector en sus comentarios no sólo consideraba a Jaime Rodríguez como el hijo de Vicente Rodríguez Godoy sino que también se comentaba que la señora era la mujer o sea la madre de Jaime era la concubina con don Vicente hacían vida marital ambos (...), la creencia de todos nosotros era que lógicamente ellos disfrutaban de los bienes de don Vicente máxime cuando esa señora le hacía de mujer, le hacía de ser-



vicio doméstico, le hacía de tendera, le llevaba los alimentos, administraba el hotel y todo lo demás”.

Hermínia vivió en el Hotel Bogotá bajo el mismo techo con Vicente Rodríguez. “De puertas para adentro de su hotel, no puedo afirmar ninguna intimidad, lo que sí me consta es que todos los demás durante quince años administró ella ese hotel, barría, lavaba las sábanas, arreglaba las piezas porque nunca hubo otro servicio ahí (...) me consta que trabajó durante todo ese tiempo así, haciendo los oficios”.

e. Y, finalmente, Libardo Antonio Garzón Torres, rector del Colegio San Luis Gonzaga, declaró en el curso de la inspección judicial practicada a dicho plantel educativo, que conoció a Vicente Rodríguez “porque en febrero de 1974 solicitó matrícula para el joven JAIME CAÑÓN quien dijo era su hijo y solicitaba matrícula para mi colegio”, año en el cual efectivamente se matriculó para el curso primero de enseñanza media comercial; fue Vicente “quien solicitó la matrícula y la firmó personalmente en su calidad de padre”, quien pagó las pensiones y concurría a las reuniones de padres de familia a recibir los informes de su hijo Jaime Cañón.

Explicó que en el año 1976, el joven solicitó nuevamente matrícula en su colegio, lo cual hizo a mitad de año porque adujo estar aburrido en el colegio donde se encontraba, a lo que se accedió pero con la condición de que posteriormente trajera al padre a firmar la matrícula, lo que no sucedió finalmente.

2. Las anteriores probanzas testificales, repítese, son los puntales de la decisión combatida en casación. De su conjunto dedujo el Tribunal que estaba configurada la posesión notoria del estado de hijo extramatrimonial; conclusión que puesta de cara a lo que de ellas se dejó relacionado, no muestra al rompe, sin mayor esfuerzo dialéctico; como legalmente se exige, que sea contravidente. A lo que viene bien poner de resalto que el *ad quem* formó su convencimiento del análisis global de tales medios, como es deber legal, esto es, de un estudio intertestimonial, y no particularizado como es el que, con el propósito de informarlo, ensaya el casacionista.

Y si, como es verdad, a ello adicionó el indicio que derivó de la manifestación que el demandado Carlos Rodríguez Godoy hizo al folio 141 del Cuaderno No. 1, consistente en que reconoció que en verdad el demandan-



te es hijo de su hermano Vicente, decreta la posibilidad de un yerro protuberante.

En la ocurrencia de autos, como acaso en todos los pleitos, la convicción surge no tanto del examen sectorial o fragmentario del acervo probatorio, como del que se haga conjuntando y articulando unos y otros elementos de prueba, de tal suerte que es perfectamente posible que, a los efectos de averiguar por un hecho que interesa al proceso, un determinado medio de prueba nada o muy poco diga en sí mismo considerado, vale decir, desgajado de los demás; mas cuando hace parte de la sumatoria probatoria, precisamente porque a su lado se coloquen otros vehículos que igual concóyvan a recorrer el camino hacia la obtención de la verdad, se lo ve robustecer en gran medida y pasa entonces, de su condición de poca valía con que antaño se mostraba, a resultar decisivo y determinante. May puesto en razón, pues, es el mandato de la ley al señalar que *"Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto"* (artículo 187 del Código de Procedimiento Civil); y también lo está el criterio de la Corte al señalar, en punto no más que de la prueba testimonial, que *"puede suceder entonces que los declarantes aisladamente considerados no constituyan de suyo la prueba fidedigna de ello, pero es que no es ese el examen que impone la ley, la lógica ni la naturaleza misma de las cosas"* (Cas. Civ. de 24 de enero de 1992), y que *"no puede extremarse el rigor en el análisis de los testimonios en procesos como éste, a tal punto que cada testigo declare sobre la totalidad de los elementos configuradores de la posesión de estado o que no pueda sumarse el tiempo en que un testigo presencié unos hechos al de que otro fue presencial"* (CLIX, 81).

Reflexiones que cobran particular vigencia en la especie judicial que ahora se juzga. A la verdad que los testimonios recaudados, cada uno por su lado, no suministran la plena convicción de los hechos que dibujan la posesión notoria; sería un exceso, en efecto, decir que uno cualquiera de ellos da cuenta exacta de la provisión del padre dirigida a la subsistencia, educación y establecimiento del demandante; así como afirmar que de todos dimana una declaración cabal sobre el elemento fama, etc. Empero, de las versiones sumadas se halla indiscutiblemente probado que Jaime Cañón, y su progenitora, vivieron en la misma morada que Vicente Rodríguez Godoy, primero en una tienda, y en un hotel de propiedad del último, después, convivencia que perduró por largos años. Incontestable

también que allí, por consecuencias, no sólo pernoctaba el menor y su madre sino que se alimentaba y obtenía lo necesario para su subsistencia y su formación educativa, como que en esas circunstancias cursó sus estudios en varios establecimientos del lugar. En una palabra, allí encontró Jaime lo que le fue monester en orden a su subsistencia y educación; y por un término no inferior a cinco años (los declarantes refieren épocas que sobrepasan incluso los dos lustros).

Tanto es así, que tal estado de cosas es admitido por la parte recurrente, pues esos hechos, objetivamente hablando, no han sido desconocidos; lo que el casacionista procura es demostrar que la connotación jurídica de los mismos no es la que el Tribunal les atribuyó; alega el recurrente, evidentemente, que tal tratamiento no obedeció a una relación filial, sino que devino como secuela de que Herminia era la empleada doméstica de dicha casa. En resumen, un mismo hecho es visto desde diferente perspectiva.

Y sin demostrar que la inferencia del Tribunal es producto de la suplantación probatoria, que es contraevidente, busca el recurrente que la suya sea la que finalmente se prohíje. Vale decir, que el quiebre de la sentencia se persigue sobre la base, no de un yerro evidente del sentenciador, sino del que se estima un mejor análisis de pruebas, cosa que, como se sabe, es inaceptable en casación. Al Tribunal no se le puede enjuiciar en este recurso extraordinario de no haber hecho el mejor de los análisis probatorios, lo cual no significa que no sea de descart, sino de lo que debe ser acusado es de que su juicio repugna a la lógica, precisamente por no ser el fiel reflejo de lo que muestra el aspecto probatorios del proceso. Por supuesto que *no es la casación "una tercera instancia en la que pudiera ensayarse nuevamente una mejor manera de apreciar las probanzas, así y todo resulte la ensayada con más apego a la lógica, o con mayor perfil dialéctico, o, en fin, con indiscutible fuerza convincente*. No. Análisis de corte tal no impone como obligada conclusión que la sentencia combatida deba ser quebrada; de suyo no es suficiente. Únicamente estará investido de tan particular virtualidad cuando su solo planteamiento haga brotar que el criterio del sentenciador fue totalmente desenfocado, que está por completo divorciado de la más elemental sín-déresis: si se quiere, que repugna al buen juicio" (Sentencias de la Sala de Casación Civil de 11 de julio de 1990 y 24 de enero de 1992).

3. Pero no es todo. Porque si la sentencia sale indemne, cosa que afir-

ma la Corte, con el mero planteamiento que viene de ponerse a flote, *a fortiori* lo será si se mira que los declarantes Rosa María Barrios, Eduardo Buitrago Murillo, Tulio Rodríguez Rodríguez, Carlos Eduardo Cañas Martínez y Libardo Antonio Garzón Torres, amén de constarles lo que se dijo aparece indiscutido en el proceso, o sea que Jaime vivió, se alimentó y educó compartiendo el techo con Vicente Rodríguez, narraron hechos que, si bien no estructuran por sí solos la causal, sí han sido admitidos por la jurisprudencia como corroborantes, y, por ende, no pueden ni deben ser subestimados por el juez para la certera, formación de su convencimiento. Han dicho, evidentemente, que el comportamiento entre Vicente y la madre de Jaime era de marido y mujer, pernoctaban bajo el mismo techo, tomaban alimentos juntos (en compañía del menor), se celaban mutuamente, incluso fueron sorprendidos cuando se besaban; asimismo, el especial afecto que Vicente mostraba con Jaime, responsabilizando por sus faltas, reprendiéndolo, preocupándose constantemente por su suerte, tomando consejo para el adelantamiento de sus estudios, solicitando matrícula en el colegio San Luis Gonzaga, pagando las deudas que contraía en materia de hospedaje y licor, nombrándole como a su hijo, paseando en su compañía (Buitrago precisó que en el parque Sucre) etc.; trátase de hechos que, repítase, aun cuando no fundan de suyo la específica causal de la posesión notoria, "no por ello solo ha de mirárselos desprovistos de todo índice demostrativo, dado que su valor puede resultar, y de hecho resulta en no pocas eventualidades, importante por sobre todo cuando con su convergencia coadyuvan a persuadir al juzgador" (Sentencia de 24 de enero de 1992, citada).

Testimonios, los ya relacionados, respecto de los cuales no es dable alegar la absoluta falta de credibilidad que sugiere el casacionista, porque resulta de mayor importancia ver que se trata de personas que por razones de vecindad, cuestionar que esta fuera de duda, tienen por qué haber conocido el desarrollo de los hechos, de pronto no con la minuciosidad, y hasta con la curiosidad, que sugiere la censura, pero sí dentro de los términos globales que es de usanza y aceptación entre el vecindario; además de que hay que contar con la circunstancia de que Vicente tenía una tienda que facilitaba que allí llegasen los vecinos y en general los transeúntes que se veían precisados a pasar por el lugar (como de manera categórica lo señalan los testigos Buitrago y Rodríguez), lo que hace propicio el conocimiento de los hechos.

Es el lugar oportuno para destacar que así como no hay empeño en mostrar como patrón la recepción que aquí se hizo del testimonio, tampoco es dable reconocer que los testigos ofrezcan carencia absoluta de la razón de su dicho. Buitrago, por ejemplo, dio exacta cuenta del por qué sabía lo que narraba, al decir que la tienda de Vicente era paso obligado, a donde llegaba a comprar diversos artículos e inclusive a tomar cerveza, lo que al cabo le mereció la confianza de dicho señor, quien, sabedor de que se trataba de persona vinculada al magisterio, le tomaba consejos para la educación de Jaime; relación de amistad a la que más tarde se sumó la comercial; cosa parcialmente idéntica sucedió con Rodríguez y Cañas, otros declarantes. Y Rosa María explicó detenidamente por qué afirma que Vicente respondía por las faltas de Jaime, narrando los episodios concretos en los que resultó afectado su hijo.

Por otra parte, tal mérito testimonial no puede arruinarse buscando trabajosamente entre las líneas de la versión cualquier inexactitud u omisión, por minúscula que sea; porque si pese a ello el valor *in integrum* no se desmerece, quedarán entonces condenadas a la intrascendencia, dado que es muy de notar que las meras inexactitudes no fuerzan a concluir que el testigo esté mintiendo; ni se puede converir con el método de desperdigar unos declarantes de otros, según quedó dicho atrás. En primer lugar, habida cuenta que la producción de la prueba no es hoy cuestión privada, sino pública, una de cuyas más acusadas virtudes es la de permitir a la contraparte el derecho de interrogar, a objeto de que, mediante una declaración salpicada de preguntas y repreguntas, cumpla con la tecnología propia en persecución de la verdad. En segundo lugar, porque siendo de admitir que las diligencias aquí cumplidas no son paradigmáticas en la observancia plena de los requisitos legales para la recepción del testimonio, tampoco es dable llegar al extremo de señalar que los testigos carecen totalmente de la ciencia del dicho; ha de verse, a este propósito, que ya se tuvo ocasión de señalar cómo la vecindad es aquí un elemento de destacada figuración, por supuesto que, entre otras cosas, releva de que el testigo diga con precisión matemática cuando, dónde y por qué presencié los hechos; los vecinos normalmente se dan cuenta de hechos no únicos sino plurales; de ahí que fácilmente se caiga en utilizar términos como "siempre", a "toda hora", "nunca", etc., como los que emplearon los declarantes Rosa María y Buitrago. Por manera que, como la vecindad supone una relación constante y encadenada, normalmente no puede precisarse el momento justo en que algo de rutina sucedió; y si de seguir al

recurrente se tratara, e ingresar por lo mismo así sea momentáneamente en la particularización, toparía con que algunas de las críticas afloran infundadas, y otras intrascendentes.

Así, no es cierto que Cañas haya incidido en notoria contradicción al señalar cuánto hacia que conocía a Herminia. Porque aun cuando en un lado habló de quince años y en otro se refirió al año 1956, aclaró suficientemente que la diferencia radicaba en que habiéndolos conocido (a ella y a Vicente) desde esta última anualidad, sólo hasta después pudo conocerlos más de cerca, lo que aconteció cuando "en el año 1967 tomé un arriendo un local a poca distancia del negocio de él"; de ahí que enfatizara que en el "año 56 únicamente conocí al lado de don Vicente y a la señora pero no en una forma íntima como cuando viví ya directamente como vecino".

De otra parte, ajenas de relevancia están las críticas en relación con las inspecciones judiciales practicadas en colegios diversos del San Luis Gonzaga, puesto que no más con ésta, especialmente por la declaración que dentro de ella rindió el rector, se comprueba que allí solicitó Vicente la matrícula correspondiente, pagaba las pensiones y asistía a las reuniones de padres de familia; versión cuya verosimilitud no se desvenaja por la única prevención de que no es posible que haya recordado con exactitud tales acontecimientos, si es que, como sucede, encuentra sólido respaldo en los otros declarantes que dieron fe de la preocupación de Vicente por la educación de Jaime. Y cabe decir todavía que en lo que atañe concretamente a la inspección del San Luis Gonzaga, no es lógico deducir, como lo deduce el casacionista, que si en la segunda matrícula no aparece el nombre de Vicente como el padre de Jaime, en contraste con lo que ocurrió en la primera, es porque tanto Jaime y la madre ya sabían a la sazón que el padre era otro distinto a Vicente.

Y, en fin, cualquiera sea la inspección judicial que se analice, había que destacar que lo importante no es averiguar quién figura como padre en el acta respectiva de matrícula, porque ello sólo nada o muy poco indicaría, por supuesto si se recuerda que el elemento pertinente a probar es que el presunto padre *proveyó* a la educación, cuestión que aquí se da por demostrada, no tanto porque en el colegio aludido aparezca el nombre de Vicente, cuanto porque la sumatoria de las declaraciones así lo indican.

Así como tampoco goza de importancia capital la condición de



empleada doméstica que respecto de Herminia trata de probar el recurrente, porque aún admitiéndola (especialmente porque ella así lo manifestó verdaderamente en el poder que menciona la censura), ello no empuja la conclusión final que soporta la decisión, pues aquí no se trata de demostrar que dicha señora fue efectivamente concubina de Vicente, sino de zereeditar la posesión notoria del estado de hijo extramatrimonial; y por ahí mismo es anodino que se haga énfasis en la eventual incertidumbre sobre la maternidad de Jaime (por los distintos nombres con que aparece en algunos documentos), dada precisamente la causal que se halló demostrada; por lo demás, no es una calidad que en este caso excluya de por sí un posible trato carnal, por cuanto había comunidad de techo y una convivencia prolongada, en las circunstancias que narran los testigos.

Igualmente es inexacto hallar irregularidad en el indicio que a la prueba testimonial anexó el Tribunal, derivado de la manifestación literal contenida en el libelo visto al folio 141 del cuaderno 1, toda vez que no por el hecho de haber cedido Carlos Rodríguez sus derechos hereditarios dejó su condición de demandado para convertirse en un tercero, para así señalar que tal manifestación carece por entero de valor probatorio por no haberse sometido a los requisitos legales pertinentes. Porque lo cierto es que, pese a ello, vale decir, a la cesión de los derechos, su condición de demandado aparece incólume, por supuesto que la calidad de heredero con que se lo convocó al juicio es incesible, la cual, por lo mismo, conserva a despecho de haberse desprendido de los efectos patrimoniales inherentes a dicho estado.

4. En compendio, las varias argumentaciones de la censura no tienen virtualidad para debelar la conclusión probatoria del tribunal; lo que ciertamente no se alcanza con apenas introducir dudas o vacilaciones en sus apreciaciones. Como ocurre con todo lo que viene de verse, e incluso con lo que ensaya sembrarse por el hecho de que algunos testimonios traídos por la parte demandada indicaron que cuando Herminia llegó a casa de Vicente ya llevaba consigo la criatura, pretendiendo el casacionista que sea más de atender dichos declarantes que todos los otros en que se cimentó el tribunal, y por esto solo descubrir un yerro de la magnitud que demanda la casación; amén de que la espontaneidad de los susodichos testigos se halla seriamente comprometida por la forma como fueron interrogados sobre el particular, según consta en el acta respectiva, contienen una alta dosis de sugestibilidad. Y, en cualquier caso, la causal demostrada no hace del todo

indispensable indagar por la veracidad de aquella circunstancia, como sí lo sería en caso de que la causal fuera la basada en ayuntamiento carnal.

En casación, como es bien sabido, no basta plantear razonamientos propios más o menos atendibles; porque no son las brumas lo que hace aparecer totalmente desacertado el juicio del sentenciador, sino la cabal demostración de que su razonamiento es escandalosamente desacertado. Consideración habida que, como tantas veces se ha repetido, *"aun en el evento de que un nuevo estudio del haz probatorio produjera vacilaciones más o menos intensas sobre el acierto o el desatino del sentenciador en las conclusiones fácticas, mientras que no aparezca que existe contraevidencia, es obvio que la ruptura del fallo acusado sólo podría fundarse en la certeza y no en la duda"* (Cas. Civ. de 17 de junio de 1964, G. J. T. 107, pág. 288; 21 de marzo de 1980; 21 de junio de 1984 y 6 de julio de 1987, aún no publicadas).

5. Desembócase entonces en que el cargo no se abre paso.

#### IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley. NO CASA la sentencia proferida en este proceso el 10 de noviembre de 1992 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca.

Costas del recurso a cargo de la recurrente. Tásense.

Cópiese, notifíquese y oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.

*Pedro Lafont Pianetta, Nicolás Bechara Simancas, Jorge Antonio Castillo Rugeles, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra*



## CONFLICTO DE COMPETENCIA / ACCION REIVINDICATORIA

En el presente evento, habiéndose invocado por el demandante el lugar de ubicación del bien como uno de los aspectos para determinar el juzgado llamado a conocer del proceso reivindicatorio, es al Promiscuo del Circuito de Ayapel a quien corresponde tramitarlo.

F.F.: C. de P.C. Art.: 23 Numeral.: 10

*Corte Suprema de Justicia — Sala de Casación Civil*    Santafé de Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Magistrado Ponente: *Nicolás Bechara Simancas*

Referencia: Expediente No. 5266

Auto N° 377.

Se decide el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados Promiscuo del Circuito de Ayapel (Córdoba) y Civil del Circuito Caucaasia (Antioquia), en este proceso iniciado por Generosa María Herrera Cuadrado contra Joaquín Yepes Rodríguez.

### ANTECEDENTES

I.—Ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel solicitó la mencionada actora, se declare que ella es la propietaria del predio rural “El Porvenir”, ubicado en la región de Pueblo Nuevo-Popales, municipio de Ayapel, con matrícula inmobiliaria No. 141-0013247 de la Oficina de Instrumentos Públicos de ese lugar, alindado en la forma indicada en la demanda; y que, como consecuencia de lo anterior, se condene al citado demandado, poseedor, la restituya dicho bien.

II.—Para deprecar sus pretensiones ante tal funcionario, la actora tomó en consideración “la naturaleza de la acción, la vecindad de las partes, la ubicación del inmueble y la cuantía que la estimó en más de un millón ochocientos mil pesos...”.

III.—Contestada oportunamente la demanda, el demandado propuso excepciones previas, entre ellas la de incompetencia, consistente en tener él su domicilio en el municipio de Nechi (Antioquia), ser de mayor cuantía el monto de la pretensión, y en que el predio materia de la misma está situado en el municipio de Caucasia (Antioquia); excepción que declaró probada el referido Juzgado en razón de la cuantía, remitiendo el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel.

IV.—Con fundamento en el numeral 8 del artículo 99 del C. de P.C., este último despacho asumió el conocimiento del proceso, disponiendo en el mismo proveído la continuación del trámite de las excepciones previas, en orden a lo cual decretó algunas pruebas tendientes a establecer el domicilio del demandado y el lugar de ubicación del bien, el término de cuya práctica resolvió, por auto de 3 de agosto del año en curso, declarar probada la excepción de falta de competencia, aduciendo que como el inmueble está localizado en el municipio de Caucasia, es al Juez Civil del Circuito de allí a quien corresponde conocer de la actuación, remitiéndole la misma.

V.—En poder del expediente, este otro funcionario tampoco admitió su competencia, pues consideró, en auto de 11 de octubre del año que transcurre, que al tenor de las correspondientes escrituras y el certificado de libertad y propiedad obrantes en los autos, la ubicación del predio “corresponde al paraje o vereda Popales del Municipio de Ayapel-Córdoba”, y que, por lo consiguiente, es al Juez del Circuito de ese lugar el llamado a ocuparse del asunto. Por ello, suscitó el respectivo conflicto, y remitió el expediente a la Corte para su solución.

### SE CONSIDERA

1.—Como el conflicto materia de decisión fue suscitado entre Juzgados de diferente distrito judicial, esta Corporación es ciertamente la llamada a dirimirlo, conforme al inciso 1o. del artículo 28 del C. de P.C.

2.—Con ese exclusivo propósito, al Sala sienta las siguientes reflexiones:

Al responder los hechos de la demanda; el demandado dejó sentadas las bases sobre las que apoya su oposición a las pretensiones de la actora, y con tal propósito adujo las pruebas pertinentes a ese acto procesal. Examinadas aquellas y estas no es difícil advertir que las 22 hectáreas del predio "El Porvenir" que según dicha parte le quedaron a Generosa María Herrera Cuadrado después de traspasar a sus hermanos lo que les correspondía y sobre las cuales versa la pretensión reivindicatoria de este proceso, pasaron luego a poder de Edilberto Lara, "quien a su vez las tradita a YEPES", quedando comprendidas aquellas dentro de la porción de 141 hectáreas del mismo predio adquiridas por Octavio Agudelo Peláez, mediante escritura 607 de 22 de junio de 1993, corrida en la Notaría de Caucaasia, documento en el que se precisa (fl. 47 C. ppal.) cómo la extensión de tierra allí vendida (141 hectáreas) está ubicada en "la región de Pueblo Nuevo Popales de la jurisdicción del municipio de Ayapel (Córdoba)". Lo anterior permite concluir que la citada porción de 22 hectáreas está situada realmente en el municipio de Ayapel. Así lo hace inferir adicionalmente la escritura 133 de 29 de abril de 1993, en virtud de la cual se protocolizó la mortuoria de José Antonio Herrera y se le asignó en ella a Generosa María Herrera Cuadrado el predio "El Porvenir" del cual hace parte la porción de terreno materia de su actual pretensión reivindicatoria. Esa escritura se había registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos de Ayapel, pues, por otra parte, el bien aparece registrado allí desde 1962, cuando el prenotado causante lo adquirió de Luis Alberto Hoyos por escritura 361 de 28 de noviembre de 1962, de la Notaría de Ayapel (fl. 15 C. 1).

Algo más, en la promesa de compraventa suscrita entre Generosa María Herrera Cuadrado y Edilberto Lara Castrillón (fl. 42 C. ppal.) respecto de la porción ya aludida del predio "El Porvenir", estos contratantes puntualizan que el bien (las 22 hectáreas) está ubicado en "el paraje Popales, municipio de Ayapel" todo lo cual refuerza la conclusión anterior, con más veras si se tiene en cuenta que en la contestación de la demanda se deja en claro que "EDILBERTO LARA... a su vez tradita a YEPES", y que "mientras allegaban documentos y paz y salvos, YEPES hace una permuta de esas aproximadamente 111 hectáreas

(incluida en ellas las 22 hectáreas indicadas anteriormente, se agrega) con el señor CARLOS MARIO ESCOBAR, quien a su vez las transfiere a título de venta a don OCTAVIO AGUDELO PELÁEZ..." De manera que si Lara Castrillón "adquirió" 113 hectáreas de José Antonio Herrera, 6 de Danilo Herrera y 22 de Generosa María Herrera (141 en total), todas ellas en comprensión municipal de Ayapel (fl. 47 C. 1), que luego "enajenó" a Octavio Agudelo Peláez con la mediación de David Alfonso Herrera, (quien "al menos sobre el papel ostentaba el derecho de dominio"), ciertamente se dan bases probatorias para establecer que el bien materia de la acción reivindicatoria aquí formulada está localizado en Ayapel.

Y aun cuando del medio de convicción obrante al folio 35 del C. 2 y aducido extemporáneamente al trámite de las excepciones previas se desprende que para la Regional Antioquia del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria el bien pretendido en reivindicación está ubicado en el municipio antioqueño de Nechí, es lo cierto que al folio 26 del mismo cuaderno milita informe del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Seccional Córdoba, según el cual el mismo predio está localizado en Ayapel.

*3.—De manera que habiéndose invocado por el demandante el lugar de ubicación del bien como uno de los aspectos para determinar el Juzgado llamado a conocer del proceso, es al Promiscuo del Circuito de Ayapel a quien corresponde tramitarlo.*

4.—El conflicto deberá resolverse, entonces, disponiendo que el competente para conocer de la demanda reivindicatoria en cuestión es el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel.

### DECISIÓN

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, dirime el conflicto aquí surgido en el sentido de DISPONER que el competente para conocer de la presente acción es el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel, Córdoba, a quien se ordena remitir la actuación, previa información de lo resuelto al Juzgado Civil del Circuito de Cauca, Antioquia.

Por Secretaría, remítanse las comunicaciones a que haya lugar.

Notifíquese.

*Pedro Lafont Pianetta, Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier Tamayo Jaramillo.*

## CASACIÓN-Pago de Portes

Oportunidades y maneras de hacer el pago de los portes, de que trata el art. 132 del C. de P.C.

Igual sentido: auto de 26 de junio de 1991; Acta No. 56 del 22 de julio de 1991.

E.F.: C. de P.C. Art.: 132.

*Corte Suprema de Justicia -- Sala de Casación Civil*      **Santafé de Bogotá, D.C.**, trece (13) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Magistrado Ponente: *Nicolás Bechara Simancas*

Referencia: Expediente No. 5276.

Auto N° 378

Provee la Corte respecto de la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por Williplast de Colombia Limitada y William Bernardo Callejas, demandantes en reconvención, contra la sentencia de 30 de septiembre de 1994 pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en este proceso ordinario promovido por José Otoniel Zuluaga Zuluaga y Néilson Zuluaga Pineda frente a los aquí recurrentes.

### *Antecedentes*

I. Por sentencia de 6 de mayo de 1994, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Medellín le puso término a la primera instancia del proceso, desestimando las pretensiones de la demanda principal, del mismo modo que las aducidas en reconvención.

II.—Inconformes con lo así decidido, los demandados reconvenientes interpusieron apelación, recurso que desató el Tribunal Superior del

Distrito Judicial de Medellín mediante sentencia de 30 de septiembre del presente año, confirmando la del a-quo.

III.—Contra este segundo pronunciamiento recurrió en casación la misma parte, recurso que concedió el Tribunal por auto de 25 de octubre de 1994, en el que dispuso el envío del expediente a la Corte Suprema de Justicia. Para tal efecto, los recurrentes expresaron estar dispuestos a cumplir con la carga del pago de partes impuesta en el artículo 132 del C. de P.C., manifestación ante la cual el Secretario de dicha Corporación dispuso: “Se acepta la petición que hace el señor apoderado... en el sentido de estar dispuesto a pagar el PORTE TRIPLE de este proceso, para ser enviado a SANTAFE DE BOGOTA, a la II. Corte Suprema de Justicia, para surtir el recurso de casación. A efecto, se dispone enviar el expediente con un empleado de la Secretaría, a la Administración Postal, para que allí se diga cuanto es el peso y el valor del proceso...”.

IV.—Después de hacer constar que pesado el expediente en la Oficina Postal de Medellín el valor del porte se fijó en \$40.040, y que esa suma fue suministrada al Tribunal por el apoderado de los recurrentes, el Secretario con Oficio No. 810 de 8 de noviembre de 1994, remitió la actuación a la Corte.

### SE CONSIDERA

1. En lo que atañe a la remisión de expedientes para diligencias o actuaciones que deban surtirse en lugar diferente a la sede del despacho judicial que ha venido conociendo del proceso, dispone el inciso 2o. del artículo 132 del C. de P.C. que ésta se hará por correo ordinario y que “la parte a quien corresponda pagar el porte deberá cancelar su valor de ida y regreso en la respectiva Oficina Postal, dentro de los diez días siguientes a la llegada a ésta del expediente o de las copias...”. Si pasado dicho término, prosigue el inciso 3o. de la misma norma “no se han pagado en su totalidad, el Jefe de dicha oficina lo devolverá al Juzgado remitiendo con oficio explicativo, y el Juez declarará desierto el recurso si fuere el caso, por auto que solo tiene reposición...” prevé adicionalmente el inciso 4o. del citado precepto que “Cuando una parte solicite al secretario el envío a otro lugar por el medio más rápido que ofrezca suficientes garantías, deberá entregarle a aquél la totalidad del valor del porte, dentro de los tres días siguientes al de la ejecutoria del auto que dispuso la remisión, de lo cual se dejará constancia en el expediente”.



2. Esta Sala, luego de señalar el alcance y cabal entendimiento atribuirle a la preanotada disposición (auto de 26 de junio de 1991), estimó pertinente hacer conocer esas directrices de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial (Acta No. 56 de 22 de julio de 1991), remitiéndoles, con tal propósito, comunicación circular, acompañada con copia del susodicho proveído. Se precisó en ella que:

*"... En el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil se definen con sentido limitativo evidente dos oportunidades y maneras para el pago de los portes, a saber:*

*"A.—Una de carácter especial o excepcional por cuya virtud el interesado puede elegir un medio de remisión más rápido y seguro que el correo ordinario, facultad de la que debe hacerse uso dentro de los tres (3) días siguientes al de ejecutoria de la providencia en que se ordena la remisión del expediente: ha de tener expresión, el ejercicio de dicha facultad, en una solicitud explícita en tal sentido dirigida al Secretario, individualizándose en ella tanto el medio que se pretenda utilizar como su costo total que, en el acto, deberá ser cubierto, entregándole la suma que corresponda al Secretario; y en fin, es deber ineludible de éste último dejar constancia circunstanciada en el informativo de todo lo anterior, constancia que con idénticas exigencias de contenido es forzoso dejar aún si la petición no fuere viable para tratarse de un sistema de remisión que no ofrezca las debidas garantías.*

*"Así, entonces, conviene recalcar que en la hipótesis de la que se viene hablando no es al Secretario a quien, a su arbitrio, le corresponda escoger el medio de envío de los expedientes. Su función reside, primero, en aceptar o rechazar el que el interesado indica, para luego, si lo acoge, recibir la totalidad de los portes, siendo de cargo de la misma parte interesado suministrar la información acerca de su valor exacto que, como es apenas natural inferirlo, representa lo único que por tal concepto le está permitido a dicho empleado recibir, expidiendo desde luego el comprobante que así lo justifique.*

*"B. La segunda que por cierto es la ordinaria o común y por la tanto supone que no se haya ejercitado eficazmente la facultad descrita en el párrafo precedente, consiste en que pasados los tres (3) días mencionados y en orden a darle cumplimiento a la providencia que haya dispuesto la*

*remisión, de inmediato y sin necesidad de instancia de parte interesada el expediente debe ser llevado a la oficina postal del lugar para que allí, dentro de los diez (10) días siguientes, se pague el valor de los portes de ida y regreso, señalando la propia ley que de no ser satisfecha la carga dentro de ese lapso, la oficina postal tiene la obligación de retornar el expediente al despacho de origen, acompañado de oficio explicativo".*

*Insistiose en la misma circular emanada de esta Sala, que "... En consecuencia, no atendida la carga de pago de portes en forma legal según sea la modalidad empleada, el expediente no puede ser enviado al lugar de destino ni por el secretario ni por la oficina postal, y previo informe detallado del primero, la autoridad jurisdiccional del conocimiento resolverá lo que fuere conducente frente a la situación procesal concreta de la que se trate".*

3.—Acogido, por tanto, el sistema de remisión especial al cual se ha hecho referencia, a él debe estarse integralmente no sólo la parte llamada a cumplir con el pago de los portes del expediente que en consecuencia debe hacer la manifestación y el pago de los mismos en forma extemporánea, sino la secretaría del correspondiente despacho judicial a cuyo cargo está hacer efectivo el envío por el "medio de remisión más rápido y seguro...", distinto del correo ordinario, que haya seleccionado aquél. Optado, por el contrario, el sistema de remisión ordinario, el pago de los portes debe cumplir, con arreglo a lo visto, dos exigencias simultáneas, a saber: hacerse en la respectiva oficina de correo postal por la parte a quien corresponde esa carga, y efectuarse dentro de los diez (10) días siguientes al en que se haya recibido allí el expediente.

4.—Estructurado pues el sistema de remisión ordinaria contemplado en el inciso 2o. del artículo 132 del C. de P.C. sobre la base de los dos supuestos que acaban de contemplarse, es obvio que el incumplimiento de uno cualquiera de ellos conduce a la inobservancia de ese precepto y, de contra, a la deserción del recurso si a ello obedece la remisión del expediente. De manera que si, ante el silencio de la parte que tiene a su cargo el pago de portes o ante su ninguna indicación concreta acerca del medio de envío especial que pretende emplear, se impone la remisión del expediente por correo ordinario o postal, el secretario del despacho judicial que debe efectuar aquella está llamado a enviar la actuación a la oficina de correo al término de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que así lo dispone

(la remisión), para que la parte interesada acuda allí a pagar los portes, dentro de los diez (10) días siguientes. Sólo así se da entonces cumplimiento al mandato legal contenido en la disposición en cita y es además la única manera de dejar a salvo la ocurrencia ope legis del motivo de deserción ya visto.

5.—Descendiendo al caso de este proceso, ninguna dificultad ofrece constatar cómo, pese al envío y contenido de la circular ya referida, el Secretario del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín recibió de la parte recurrente en casación el valor de los portes para la remisión del expediente a la Corte, sin que aquella le hubiese manifestado su intención de valerse de un medio más rápido, seguro y distinto del correo postal, conducto este último a través del cual terminó remitiéndose por ese secretario la actuación. En estas condiciones, ni se dio cumplimiento al artículo 132 del C. de P.C. en punto al pago de portes para la remisión especial o excepcional allí prevista, ni se observó tampoco el procedimiento señalado para la remisión ordinaria, pues, a despecho de la prevenciones del legislador y de las orientaciones de la Corte en orden a su cabal obediencia, el Secretario de la citada Corporación, con la complacencia de la parte recurrente, hizo un compuesto de uno y otro procedimiento, que dieron al traste con el mandato de ley.

6.—Así, cumplido en dichas condiciones el envío del expediente a la Corte, se halla de por medio el motivo de deserción del recurso antes visto, toda vez que el pago de portes no se ciñó a los requerimientos legales. Por la misma razón, al pago que se declarará la deserción, se dispondrá el envío de copia de esta providencia y de la circular aquí mencionada a la competente autoridad para que se investigue la conducta del susodicho secretario.

### DECISIÓN

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara INADMISIBLE y en consecuencia desierto el recurso de casación interpuesto por Williplast de Colombia Limitada y William Bernaréo Callejas, demandantes en reconvencción, contra la sentencia de 30 de septiembre de 1994 pronunciada en este proceso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

Por Secretaría, envíese copia de esta providencia y de la circular de esta Sala de la Corte a que se alude en su parte motiva al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, para que se investigue la conducta del señor Harlen Uribe Suárez, con arreglo a lo expresado en otro aparte de este mismo proveimiento.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

*Pedro Lafont Pianetta, Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier Tamayo Jaramillo, salvamento de voto.*

**INVESTIGACION DISCIPLINARIA  
(SALVAMENTO DE VOTO)**

Se salva voto en lo que se refiere a la solicitud de investigación disciplinaria contra el secretario de la Sala Civil del Tribunal.

***SALVAMENTO DE VOTO***

Comparto la decisión de la Sala en lo que toca con la declaración de deserción del recurso de Casación.

Por el contrario, me aparto de la decisión mayoritaria en lo que se refiere a la solicitud de investigación disciplinaria contra el secretario de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, señor HARLEM URIBE, como quiera que su conducta no justifica tal investigación.

Javier Tamayo Jaramillo

**RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL-Actividad  
Peligrosa/PERJUICIOS/RECTIFICACION DOCTRINARIA**

1) El responsable de los perjuicios causados en desarrollo de una actividad peligrosa desplegada mediante una cosa inanimada es su propietario, en principio, no por ser tal sino en virtud de la presunción de ser guardián de dicho sujeto.

Igual sentido: G.J. Tomo CXCVI, pág. 153; G. J. tomo CXLII, pág. 188.

2) Necesidad de demostrar la calidad de propietario de la cosa inanimada que, empleada en el ejercicio de una actividad peligrosa, ocasiona daño y así declararlo responsable de perjuicios causados con la cosa inanimada de su propiedad.

3) Rectificación Doctrinaria.

F.F.: C. C. Art.: 2356.

*Corte Suprema de Justicia.— Sala de Casación Civil—* Santafé de Bogotá, D. C., quince (15) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Magistrado Ponente: *Doctor Rafael Romero Sierra*

*Ref: Expediente No. 4250.*

*Sentencia N° 148*

Decídese el recurso extraordinario de casación interpuesto por el demandante contra la sentencia de 28 de julio de 1992, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en este proceso ordinario de Nelson Giraldo Gómez contra Carlos Alberto Vélez Moreno y Esmeralda Sofía Ochoa Crespo.

### *I. ANTECEDENTES*

1) —En el referido proceso, Nelson Giraldo Gómez demandó a Carlos Alberto Vélez Moreno y a Esmeralda Sofía Ochoa Crespo, para que con su citación y audiencia, se les declarase "...solidariamente responsables de todos los perjuicios ocasionados por la colisión ocurrida el día 29 de octubre de 1988 por el vehículo de placas ID-32-32 conducido por el señor Carlos Alberto Vélez Moreno y de propiedad de la señora Esmeralda Sofía Ochoa Crespo, al vehículo de placas TI-44-28..., conducido por el señor Luis Alberto Salazar Arboleda; que, como consecuencia de tal declaración, se les condenase al pago de las siguientes sumas de dinero, a título de perjuicios:

1) -Daño emergente representado en los siguientes conceptos: a. "el valor comercial del vehículo, avaluado en la suma de DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000,00)"; b. "...DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS (\$10.200,00) pagado... a Grúas García y al servicio de grúas del Ito (sic) por los servicios de grúa"; c. "...CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$54.000,00) por concepto de parqueo, de los restos del vehículo de placas TI-44-28".

2) -Lucro cesante, traducido en "lo que... dejó de percibir, desde el momento de la colisión, teniendo en cuenta el estado inservible en que quedó el vehículo y que éste era única fuente de ingresos, rubro éste que se tasaré mediante peritos teniendo en cuenta los ingresos... que obtenía en la explotación del servicio público que prestaba en el día y en la noche".

3) -Tanto a los perjuicios determinados como a los fijados por posición parcial (sic) se les aplicará la corrección monetaria desde el momento de ocurrencia de los hechos hasta el pago efectivo".

2. El demandante adujo como sustrato fáctico de las anteriores peticiones los hechos que a continuación se compendian:

a.—El 29 de octubre de 1988, siendo aproximadamente las cinco de la mañana, en la caile 30 con la carrera 65 de la ciudad de Medellín, colisionaron el automóvil marca Renault 18 GTX, color rojo y negro, modelo 1986, de placas ID-32-32, de propiedad de Esmeralda Sofía Ochoa Crespo, conducido por Carlos Alberto Vélez Moreno, y el taxi de servicio



público marca Fiat, modelo 1981, color amarillo y negro, de placas TI-44-28, afiliado a Rayo Tax, de su propiedad, conducido por Luis Alberto Salazar, debido a la imprudencia del conductor del vehículo primeramente mencionado, quien transitaba a alta velocidad por la calle 30 de occidente a oriente y cruzó en rojo el semáforo de la carrera 65, golpeando fuertemente su vehículo que se desplazaba por ésta de sur a norte, "...tirando del golpe a éste, a la canalización ubicada en ese sector y quedando el vehículo ID-32-32 detenido por un poste", por lo que su conductor, dado el estado de inmovilidad en que quedó el vehículo "...huyó por otros medios del lugar de la colisión sin prestar auxilio al conductor del vehículo de placas TI-44-28 que, junto con su vehículo yacían en el fondo de la canalización", siendo "...auxiliado en ese difícil trance por el cuerpo de bomberos de la cra. 65 (cerca al aeropuerto Olaya Herrera) y el vehículo fue transportado en grúa a los patios del tránsito municipal".

b.-Sufrió, por tanto, pérdida total del automotor, el que fue avaluado en la suma de \$2.000.000.00; como tal vehículo era de servicio público, por esa razón de él obtenía lo necesario para vivir él y su familia, y desde la fecha de la colisión se ha visto privado de un medio de subsistencia, pues el vehículo le procuraba "...normalmente la suma de \$7.000.00 pesos diarios y en la noche lo conducía el señor Luis Alberto Salazar Arboleda quien entregaba a su propietario la suma de \$4.000.00".

c.-El croquis e informe correspondiente al relatado accidente se levantó y rindió sin la presencia del conductor del automóvil causante de la colisión, diligencia dentro de la cual se comprobó que el chofer del taxi no presentaba ningún grado de alcohol; pagó por servicios de grúas al tránsito la suma de \$5.200.00 y al señor José Rodríguez de Grúas García \$5.000.00

3.-El demandado Carlos Alberto Vélez Moreno se opuso rotundamente al despacho favorable de las pretensiones deducidas por el actor; y, respecto de los hechos, salvo el relacionado con el accidente, afirmó que no eran ciertos. Propuso, además, excepciones de fondo bajo la denominación de "carencia de fundamentos para incoar la acción por parte activa", "culpa exclusiva de la víctima", y "compensación de culpas", actitud que igualmente adoptó la codemandada Esmeralda Sofía Ochoa Crespo, a través de su curadora *ad litem*, designada ante su incomparecencia, por ignorarse el lugar donde pudiese recibir notificaciones.

4. Agorado el trámite del proceso ordinario de mayor cuantía, la primera instancia culminó con sentencia de 22 de febrero de 1991, totalmente favorable a las pretensiones del demandante; y la segunda, abierta en virtud del recurso de alzada interpuesto por el demandado y de la consulta ordenada respecto de la codemandada, la clausuró el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín con sentencia de 28 de julio de 1992, mediante la cual, salvo algunas modificaciones en torno al monto de las indemnizaciones, mantuvo las declaraciones y condenas iniciales, pero solamente frente a Carlos Alberto Vélez Moreno, como quiera que absolvió de ellas a la codemandada Esmeralda Sofía Ochoa Crespo.

5.—Contra esta última determinación, el demandante, como ya se dijo, interpuso recurso de casación, impugnación que por encontrarse debidamente sustanciada pasa a decidirse por la Corte.

## *II. La sentencia recurrida y sus motivaciones*

Recordando los presupuestos exigidos por la doctrina y la jurisprudencia para el buen suceso de la pretensión indemnizatoria deducida de la responsabilidad civil extracontractual, y que su demostración corre por cuenta de la parte que aspira al resarcimiento de los perjuicios sufridos, salvo que aquélla se funde en el ejercicio de actividades calificadas como peligrosas, en cuya hipótesis está exonerada de probar la culpa del agente causante del daño, por cuanto se presume "...caso en el cual son obligados a reparar el daño tanto la persona que desarrolla dicha actividad, como aquélla por cuenta de la cual se ejerce ésta", el Tribunal precisa que, en consecuencia, "...al demandado debe demostrársele que es el autor de la actividad peligrosa que causó el siniestro o que quien la estaba ejerciendo es un dependiente suyo, pero él puede quedar exonerado de la responsabilidad probando que el daño se produjo por caso fortuito o fuerza mayor, el hecho de un tercero o por culpa exclusiva de la víctima, esto es, que su culpa "haya sido la causa exclusiva del daño, que absorba de alguna manera pero íntegramente la imprudencia y el descuido del demandado, los cuales, por consiguiente, no tendrán ya ninguna trascendencia en la producción del perjuicio" (Cas. Civ. de mayo de 1982, Jurisprudencia y Doctrina, tomo No. 127, pág. 563).

A renglón seguido el sentenciador de instancia agrega que "...el ejercicio de la actividad peligrosa de conducir un automotor es un hecho que no

coincide con la calidad de propietario del vehículo, pues la ejerce tanto quien realiza personalmente esa labor, aunque no sea propietario o poseedor de aquél, como la persona por cuenta de la cual se lleva a efecto. Pero, como lo advirtió esta Corporación en reciente sentencia "no necesariamente la ejerce quien figure en los registros de las oficinas del tránsito, y aún más, tal figuración es al efecto irrelevante y máximo significaría una posible presunción de hombre de que el ejercicio se realiza por tal persona".

En ese orden de ideas, el *ad-quem*, luego de relacionar nuevamente los pormenores del accidente de tránsito automovilístico, ocurrido en la madrugada del 29 de octubre de 1988, en la intersección de la carrera 65 con la calle 30 de la ciudad de Medellín, entre el Renault de placas ID 32 32 y el taxi Fiat de placas TI 44 28, y de puntualizar que la discrepancia, al fin y al cabo, gira en torno a la persona causante de la colisión, sienta la siguiente precisión:

"Al respecto adviértese que en este caso la parte demandante, que es la víctima, tiene a su favor la culpa presunta que pesa sobre el codemandado Carlos Alberto Vélez en su calidad de agresor, pues era éste quien conducía el Renault 18 que colisionó contra el costado izquierdo del taxi en el cruce de la calle 30 con la carrera 65. Y tal presunción no fue desvirtuada porque no existe prueba de que el choque se hubiere producido por culpa exclusiva del taxista o que éste haya concurrido a su producción con algún error de conducta de su parte. En efecto, los únicos testimonios relativos a la ocurrencia de los hechos son los de Oscar Alonso Yepes Rojas y Luis Alberto Salazar Arboleda, conductor del Fiat perteneciente al actor, y, según comenta el primero, a eso de las cinco de la mañana del 28 de octubre de 1988, cuando subía por la calle 30 en un vehículo de la empresa Seguridad Atlas, después de haber pasado por el cruce de la carrera 65 escuchó un 'guarapazo', por lo que detuvo la marcha y se devolvió, habiendo establecido que se trataba de la colisión del taxi y el Renault 18; explica que él avanzaba a una velocidad aproximada de 50 a 60 kilómetros por hora y que media cuadra antes de llegar al referido cruce observó que el semáforo se hallaba en verde, e igualmente, que el ruido del choque lo escuchó cuando se hallaba media cuadra más adelante de ese cruce (fl. 6 vto., cuad. ppil.). O sea que entre el momento en que observó en verde el semáforo de la calle 30 y el instante en que escuchó el estruendo del choque, el demandante alcanzó a recorrer una cuadra, lo que significa que el conductor del Renault se

encontraba a una cuadra aproximadamente de distancia de dicho cruce cuando Yepes alcanzó a observar el semáforo en verde, si realmente transitaba el Renault a velocidad normal, como afirma tal testigo (fl. 7, fte., cuad. ppal.), esto es, no superior a 50 kilómetros por hora que es la velocidad máxima permitida en el área urbana (art. 148, inc. 2o. C. Nal. de Tránsito Terrestre), porque si la velocidad era mayor, necesariamente tenía que hallarse a más de una cuadra de distancia. Por lo tanto, el testimonio de Yepes Rojas solo constituye prueba fehaciente de que el semáforo de la calle 30 con la carrera 65 estaba en verde en el instante en que Carlos Alberto Vélez Moreno se acercaba a él y se hallaba a una cuadra de distancia del mismo, pero no de que aún permaneciera en verde cuando ingresó a ese cruce. De ahí que tampoco dé certeza respecto a que el semáforo de la carrera 65 se encontraba en rojo en el momento en que el taxi cruzaba la calle 30, máxime si se tiene en cuenta que el conductor de este último declara que estaba en verde (fl. 28 fte., cuad. 2). Además, está demostrado con el testimonio de Yepes Rojas que como consecuencia del choque el taxi cayó a la canalización (fl. 6 vto., cuad. ppal.), lo que permite deducir que el Renault debía viajar a excesiva velocidad para que por efecto de su colisión contra el costado izquierdo del Fiat éste fuera lanzado a dicha canalización. Todo esto indica igualmente que no están demostradas las excepciones propuestas por el codemandado Carlos Alberto Vélez Moreno" (págs. 16 y 76 vto., edno. No. 4).

Por consiguiente, la Sala sentenciadora concluye que "Es indudable, entonces, que éste último debe responder por los perjuicios sufridos por el actor debido a dicho accidente, lo que no se puede predicar respecto a la codemandada Esmeralda Soffa Ochoa Crespo, ya que no se acreditó que por su cuenta o con autorización suya aquel condujera ese día el Renault. Por ello debe absolversele de los cargos que en la demanda se deducen en su contra".

Así las cosas, el Tribunal dedicó las líneas finales de su providencia a cuantificar el monto de los perjuicios reclamados por el actor, recibidos por éste con ocasión del accidente de tránsito automovilístico ocurrido en las circunstancias de tiempo, modo y lugar relatados en la demanda, cuya autoría se atribuyó exclusivamente al codemandado Carlos Alberto Vélez Moreno.

### *III. El recurso extraordinario*

Dos cargos integran la demanda de casación presentada por el demandante para sustentar el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia proferentemente resumida, ubicados en el ámbito de la causal primera de casación prevista por el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, que la Corte despachará conjuntamente por las razones que en su momento se expondrán.

#### *Cargo primero*

Acúsase la sentencia de quebrantar, de manera directa, los artículos 1494, 1568, 1613, 1614, 2344 y 3456 del Código Civil, por falta de aplicación, en cuanto absolvió a la codemandada Esmeralda Sofía Ochoa Crespo de los cargos formulados en la demanda introductoria del proceso.

En el desenvolvimiento de la impugnación de la censura asevera que "Es evidente que si el Tribunal sentenciador absolvió a la codemandada, no obstante haber sido convocada al proceso como responsable del daño, en su calidad de propietario del automóvil Renault 18 que ocasionó el accidente, es porque no dio aplicación a los artículos citados al inicio de la censura, especialmente el artículo 2356 del C. Civil que, según la doctrina y la jurisprudencia colombianas, es el fundamento de la responsabilidad civil extracontractual por el daño causado en el ejercicio de actividades peligrosas como la conducción de vehículos automotores, actividad esta en que el perjuicio causado en su desarrollo se presume haber ocurrido por culpa no solamente de quien, en el momento de presentarse el accidente, conducía el automotor, sino también por culpa de la empresa a que estaba afiliado el vehículo mencionado", apreciación que respaldó con lo expresado por esta Corporación en sentencia de 18 de mayo de 1972 (G.J. CXLII, pág. 188), cuyos pasajes pertinentes transcribe.

De suerte que, dice el recurrente: "...el Tribunal de Medellín, pues, no obstante carecer de reparo a la prueba con que el juez *a-quo* dio por acreditado el dominio del automóvil Renault 18 en cabeza de la codemandada Esmeralda Sofía Ochoa Crespo, y no obstante tener a ésta como propietaria de ese vehículo, la absolvió por una equivocada inteligencia del artículo 2356 del C. Civil que impone también al propietario reparar el perjuicio que se ocasiona en el ejercicio de la actividad peligrosa desplegada con

aquella. La errada inteligencia de esa norma (no de la prueba aportada al proceso) consistió en creer rotundamente, muy a pesar de la exposición contenida en el salvamento de voto, que era necesario, a más de la prueba aportada para demostrar que la codemandada era dueña del automóvil Renault", acreditar que por su cuenta o con autorización suya "el otro demandado conducía el automotor el día del accidente".

Tras explicar las razones por las cuales enfiló la impugnación por la vía directa, la censura asegura que una fiel inteligencia del artículo 2356 del Código Civil "...implicaba para el tribunal, al encontrar prueba suficiente del proceder culposo del conductor, por excesiva velocidad, que automáticamente tuviera por acreditado también la culpa de la propietaria del vehículo, ya que, por otra parte, el tribunal halló demostrados los otros elementos de la responsabilidad aquiliana", precisión que igual reclina sobre el fallo de esta Corporación, proferido el 12 de abril de 1991 (extractos de jurisprudencia, segundo trimestre de 1991, pág. 26), cuya similitud jurídica con el presente caso, según el recurrente, "es innegable".

Reitera el impugnante que "...ningún reparo formuló el tribunal al ver que el demandante pidió la condena solidaria de los dos demandados, el uno como conductor del automóvil Renault 18 y la otra como propietaria del mismo automotor que, en desarrollo de una actividad eminentemente peligrosa, como es la conducción de automóviles, causó el daño. Por tanto, el haber hallado el proceder culposo del conductor por la excesiva velocidad a que conducía el vehículo en el momento del accidente, el H. Tribunal, como realmente lo sostiene el salvamento de voto y cual es la doctrina constante de la Corte, ha debido dar también por demostrada la culpa de la propietaria del automóvil Renault 18, señora Esmeralda Sofía Ochoa Crespo, aplicando así en su genuino sentido el texto del artículo 2356 del C. Civil"

"En tales circunstancias —concluye la censura— y haciendo actuar los artículos 1494, 1568, 1613, 1614, 2344 y 2356 del Código Civil, el tribunal *ad-quem* para no quebrantar estas disposiciones por inaplicación, como lo hizo, debió fulminar la condena no sólo contra el conductor demandado, Carlos Alberto Vélez Moreno, sino también y solidariamente, contra la propietaria del automóvil Renault 18, Esmeralda Sofía Ochoa Crespo, quien, por haberse causado el perjuicio en desarrollo de una actividad peligrosa, es igualmente responsable en su calidad de dueña del automotor, según la doctrina que contiene el artículo 2356 citado"



*Cargo primero*

Aquí, tildase la sentencia de quebrantar, en forma indirecta, los artículos 2347 y 2349 del Código Civil, por aplicación indebida, y 1494, 1568, 1613, 1614, 2341, 2344 y 2356 *ibidem*, por falta de aplicación, como consecuencia del error de hecho en que incurrió el Tribunal en la interpretación del libelo incoatorio del proceso.

A manera de introducción, el recurrente expresa que este cargo lo formula “...ad-cautelam, para el evento de que se considere que, por haber exigido la prueba de que el demandado Vélez fuese dependiente de Esmeralda Sofía Ochoa y que por cuenta de ésta o con su autorización conducía el automóvil Renault, el Tribunal situó el caso debatido no dentro de la responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas y en especial en ejercicio de actividad peligrosa, sino en el ámbito de la responsabilidad por el hecho ajeno”.

En tal orden de ideas, el censor afirma que “cometiendo error de hecho en la interpretación de la demanda, el fallador ad-quem, a pesar de que entendió bien que Carlos Alberto Vélez Moreno fue convocado a este litigio como la persona que, en el momento del accidente, conducía el automóvil Renault 18, no obstante pasó por alto que a Esmeralda Sofía Ochoa Crespo se la convoca, en la demanda introductoria, simplemente como propietaria de aquel automóvil y no como la persona por cuya cuenta o autorización el codemandado Vélez Moreno conducía el mencionado automóvil Renault. Tergiversó, pues, el II. Tribunal el contenido objetivo de la demanda al creer que, como hecho de la *causa petendi*, se hubiese alegado que la demandada Esmeralda Sofía era la persona por cuenta de quien el conductor Vélez Moreno desarrollaba la actividad peligrosa de conducir automotores, o que éste fuese un dependiente suyo, o persona autorizada por ella para pilotear ese automóvil. Cometiendo el error fáctico que le endilgo dejó de ver que en la demanda introductoria del proceso se llama a la codemandada Esmeralda Sofía Ochoa Crespo como responsable de los perjuicios causados en el desarrollo de una actividad peligrosa desplegada mediante cosa inanimada de su propiedad: el automóvil Renault 18”.

Así, prosigue el impugnante, alterando gravemente el contenido objetivo de la demanda “...el Tribunal pasó por alto que la demandada Ochoa Crespo fue convocada al proceso a responder en su simple y específica



calidad de propietaria del automotor causante de los perjuicios cuya reparación se solicita, calidad de dueña que expresamente se le atribuye en el hecho primero de la demanda y que luego se reitera de manera inequívoca al formularse la pretensión A del petitum al solicitarse que se declare la responsabilidad de Esmeralda Sofía Ochoa Crespo propietaria del vehículo causante del daño cuya reparación se inapetra”.

De manera que, puntualiza el recurrente, si el sentenciador de segundo grado no hubiese incurrido en el yerro de *factio* predescrito, “...no habría exigido, para condenar a Esmeralda Sofía, la prueba de que ‘por cuenta o con autorización suya’ Vélez Moreno conducía el automóvil de su propiedad el día del accidente, pues ella no fue demandada como patrona de Vélez, ni como explotadora económica de ese vehículo, sino simplemente como propietaria de una cosa inanimada que al ser utilizada desarrollando una actividad peligrosa, causó daños al demandante”, y si hubiere entendido recramente la demanda “...habría situado el litigio dentro del ámbito de la responsabilidad por el hecho ajeno, haciendo actuar los artículos 2346 a 2349 y 2352 del C. Civil, que le regulan, y si hubiere entendido en su normal dimensión jurídica el artículo 2356 del C. Civil, para condenar a la dueña del automóvil Renault 18 no hubiera exigido la demostración de que por su cuenta o con autorización suya el codemandado Carlos Alberto Vélez Moreno conducía ese automotor al momento de acaecer el accidente”.

El censor recuerda, a renglón seguido, “...que la doctrina de la Corte, fundada en la equidad y con el definido propósito de favorecer a las víctimas del ejercicio de actividades peligrosas, cuyos agentes crean la inseguridad para los asociados, respaldada en el artículo 2356 del C. Civil ha expresado que cuando se ocasiona un daño por el accionar de una máquina que desarrolla actividad peligrosa, la responsabilidad civil por el perjuicio recae no solamente en quien manejaba la máquina, sino también en el propietario de ésta, como guardián de la misma...”; y que “...es también provechoso recordar, como lo decidió la Corte en fallo de 12 de abril de 1991, que probaba la culpa de quien conducía un automóvil que al chocar con otro lo daña, *el propietario* de aquél también debe ser condenado a la reparación de los perjuicios causados, pues la culpa del primero ‘se refleja inexorablemente’ y ‘en su condición de responsable de la actividad peligrosa’, en el *propietario* del automotor”.

Por tanto, dice el recurrente, por tratarse en el presente caso de daños causados en el desarrollo de la actividad peligrosa de conducir automóviles y sin necesidad de tener que acreditarse que el codemandado Vélez Moreno actuaba por cuenta o con autorización de Esmeralda Sofía Ochoa, "...al hallar prueba idónea del proceder culposo de aquel, debió fulminar también condena contra la dueña del automotor; y al no hacerlo así, al absolverla, quebrantó los textos legales señalados al inicio de este cargo que indican como fuente de la obligación los hechos culposos y que, tratándose del ejercicio de actividad peligrosa, imponen la obligación de resarcir, tanto el daño emergente como el lucro cesante, no sólo al que personalmente maneja la máquina causante del daño, sino igualmente al propietario de ésta", por cuanto "...como lo viene diciendo la Corte 'la responsabilidad del dueño por las cosas inanimadas proviene de la calidad que de guardián de ellas presúmese tener' (G. J. CXI.II, 188)".

Finalmente, el censor advierte que si el caso se sitúa en el terreno de la culpa probada, por cuanto el Tribunal halló demostrada la negligencia del conductor, "...entonces, como norma de responsabilidad aquiliana quebrantada señaló el artículo 2341 del C. Civil".

### CONSIDERACIONES

1.—La censura, en su integridad, es absolutamente clara en destacar que la inconformidad del recurrente radica solamente en que la declaración de responsabilidad y consiguiente condena al resarcimiento de perjuicios, que se le impuso al demandado Carlos Alberto Vélez Moreno como autor de la colisión automovilística, acaecida en la alborada del 29 de octubre de 1988, en la convergencia de la calle 30 con la carrera 65 de la ciudad de Medellín, no se hubiese extendido igualmente a la codemandada Esmeralda Sofía Ochoa Crespo, en su calidad de propietaria del automotor de servicio particular, tal como se solicitó en la demanda incoatoria del proceso, pues en su sentir, la absolución que a ella se le impartió en el fallo impugnado fue el resultado, en el primer cargo, de equivocada interpretación del artículo 2356 del Código Civil, que finalmente desembocó en su inaplicación, por cuando dicho precepto rectamente entendido permite, en principio, cobijar con tal tipo de declaraciones y de condenas al propietario del automotor que, utilizado por él o por otro en el desempeño de una actividad peligrosa, cause daño a una persona en su integridad o en sus bienes, bajo la presunción de ser guardián de dicho objeto, y en el

segundo, del yerro de facto consistente en haber pasado por alto que a Esmeralda Sofía Ochoa Crespo se le citaban, en la demanda introductoria del proceso, simplemente como propietaria del vehículo Renault 18 y no como la persona por cuya cuenta o con cuya autorización el codemandado Vélez Moreno conducía el mencionado vehículo.

De manera que la censura, en el primer cargo, deja al margen de reproche y, por tanto, intocable en casación, tanto la labor realizada por el Tribunal en la apreciación de los elementos de juicio incorporados al expediente, como la conclusión que de ellos extrajo para fulminar en contra de Carlos Alberto Vélez Moreno la declaración de responsabilidad por los sucesos de que da cuenta la demanda introductoria del proceso, así como la subsiguiente condena que se le impuso de resarcir los perjuicios que por aquellos hechos se le ocasionaron al demandante; y, en el segundo, critica la labor interpretativa realizada por el *ad-quem* sobre la demanda incoatoria del proceso, en cuanto dejó de ver que en dicha pieza procesal se llamaba a la precitada codemandada como responsable de los perjuicios causados en el desarrollo de una actividad peligrosa desplegada mediante cosa inanimada de su propiedad: el automóvil Renault 18.

2. A propósito del tema que constituye el fundamento cardinal de la impugnación que ahora ocupa la atención de la Corte, deviene tempestivo advertir que el planteamiento jurídico de la censura corresponde al criterio sentado por la Corte al respecto, por cuanto es incuestionable que, de conformidad con el estado actual de la jurisprudencia, *el responsable de los perjuicios causados en el desarrollo de una actividad peligrosa desplegada mediante una cosa inanimada es su propietario, en principio, no por ser tal sino en virtud de la presunción de ser guardián de dicho sujeto, pues como lo ha dicho esta Corporación "...aunque la guarda no es inherente al dominio, sí hace presumir en quien tiene el carácter de propietario..."* (G. J. Tomo CXCVI, pág. 153), razón por la cual cuando la acción indemnizatoria se ejerce como consecuencia de los perjuicios irrogados en aquellos eventos, como acontece en este caso concreto, aflora inconsistente el criterio del *ad-quem* en la medida en que estima "irrelevante" la calidad de propietario de la cosa inanimada que, empleada en el ejercicio de una actividad peligrosa, ocasiona el daño, para declarar a su propietario responsable del perjuicio y, consecuentemente, de la respectiva obligación resarcitoria, así como ciertamente innecesaria, por lo acabado de expresar, la concurrencia procesal de otra prueba como la reclamada en

el presente caso; pero, desde luego, debe dejarse totalmente claro que para que tales declaraciones y condenas procedan, es preciso tener en cuenta que *la aludida calidad constituye un presupuesto fáctico que inexorablemente debe acreditarse en el proceso, y reconocerse así por el sentenciador de instancia, como requisito indispensable para imponerle al propietario la respectiva condena al pago de los perjuicios causados con la cosa inanimada de su propiedad, tal como en el punto lo tiene averiguado la jurisprudencia de la Corte, para lo cual basta la reproducción del siguiente pasaje:*

*"De manera que si a determinada persona se le prueba ser dueña o empresaria del objeto con el cual se ocasionó el perjuicio en desarrollo de una actividad peligrosa, tal persona queda cobijada por la presunción de ser el guardián de dicho objeto — lo que desde luego admite prueba en contrario — pues aunque la guarda no es inherente al dominio, sí hace presumirla en quien tiene el carácter de propietario.*

*"O sea, la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad que de guardián de ellas presúmese tener.*

*"Y la presunción de ser guardián puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico, como el de arrendamiento, el de comodato, etc. o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada". (G. J. tomo CXLII, pág. 188). (Subrayos de la Sala).*

3. Así puestas las cosas, es preciso observar que el cargo primero arranca de un presupuesto no establecido expresamente por *el ad-quem*, como es el relacionado con la entidad de propietario que se le atribuye a la codemandada Esmeralda Sofía Ochoa Crespo en el libelo introductorio del proceso, respecto del vehículo automotor conducido por Carlos Alberto Vélez Moreno, pues como lo pone de manifiesto el resumen del fallo impugnado, para el sentenciador de segundo grado tal aspecto resultó intrascendente, así se tratase de responsabilidad civil deducida del ejercicio de actividades peligrosas mediante el empleo de cosas inanimadas.

En efecto: después de relacionar los requisitos exigidos para la prosperidad de la acción indemnizatoria de perjuicios ocasionados en el campo

de la responsabilidad civil extracontractual, el tribunal sienta las siguientes precisiones:

"...Pero en tratándose de responsabilidad por el ejercicio de actividades consideradas peligrosas, como lo es la conducción de automotores, la doctrina y la jurisprudencia nacionales, con apoyo en el artículo 2356 del C. Civil, consideran que 'la culpa se presume', por lo que será suficiente, para que prospere la pretensión indemnizatoria, que el demandante demuestre la existencia del daño y que éste se produjo a causa de una actividad calificada como peligrosa, caso en el cual son obligados a reparar el daño tanto la persona que desarrolla la actividad, como aquella por cuenta de la cual se ejerce ésta.

"En consecuencia, al demandado debe demostrársele que es el autor de una actividad peligrosa que causó el siniestro o que quien la estaba ejerciendo es un dependiente suyo, pero él puede quedar exonerado de la responsabilidad probando que el daño se produjo por caso fortuito o fuerza mayor, el hecho de un tercero o por culpa exclusiva de la víctima, esto es, que su culpa 'haya sido la causa exclusiva del daño, que absorba de alguna manera pero íntegramente la imprudencia y el descuido del demandado, los cuales, por consiguiente, no tendrán ya ninguna trascendencia en la producción del perjuicio' (Cas. civ. de 27 de mayo de 1982, Jurisprudencia y Doctrina, tomo No. 127, pág. 563).

"Por lo demás, el ejercicio de la actividad peligrosa de conducir un automotor es un hecho que no coincide con la calidad de propietario del vehículo, pues la ejerce tanto quien realiza personalmente esa labor, aunque no sea propietario o poseedor de aquél, como la persona por cuenta de la cual se lleva a efecto. Pero, como lo advirtió esta Corporación en reciente sentencia 'no necesariamente la ejerce quien figura en los registros de las oficinas de tránsito, y aún mas, tal figuración es al efecto irrelevante y máximo significaría una posible presunción de hombre de que el ejercicio se realiza por tal persona'".

Y en desarrollo de ese criterio, el Tribunal, luego de establecer probatoriamente la autoría material del daño en el demandado Carlos Alberto Vélez Moreno, como conductor del vehículo Renault 18, afirmó lo siguiente:



“Es indudable, entonces, que éste (...) debe responder por los perjuicios sufridos por el actor debido a dicho accidente, lo que no se puede predicar respecto a la codemandada Esmeralda Sofía Ochoa Crespo, ya que no se acreditó que por su cuenta o con autorización suya aquél condujera ese día el Renault. Por ello debe absolversele de los cargos que en la demanda se deducen en su contra”.

4.—De manera que, si conforme con lo precedentemente transcrito, para el sentenciador de segundo grado lo fundamental para responsabilizar a la demandada Esmeralda Sofía Ochoa Crespo de los daños ocasionados por el codemandado Carlos Alberto Vélez Moreno y, consecuentemente, para extenderle a ésta las mismas condenas que se le impusieron a aquél, era la prueba de “...que por su cuenta o con autorización suya aquél condujera ese día el Renault...”, mas no la de que fuera la propietaria del mismo, por cuanto para el perseguido fin “...tal figuración es al efecto irrelevante y máximo significaría una posible presunción de hombre de que el ejercicio se realiza por tal persona...”, razón por la cual ninguna labor probatoria desplegó con el propósito de averiguar por la prueba de la calidad de propietaria con la que se convocaba al proceso a la precitada demandada, ni sentó, por tanto, conclusión alguna acerca de si la premencionada codemandada era o no propietaria de aquel vehículo, la columna vertebral del cargo inicial se destruye totalmente, por cuanto brota inexacta la afirmación cardinal del censor en el sentido de que “el II. Tribunal de Medellín, (...), no obstante carecer de reparo a la prueba con que el juez *a-quo* dio por acreditado el dominio del automóvil Renault 18 en cabeza de la codemandada Esmeralda Sofía Ochoa Crespo, y no obstante tener a ésta como propietaria del vehículo, la absolvió por una equivocada inteligencia del artículo 2.356 del C. Civil que impone también al propietario (guardián de la cosa inanimada) la obligación de reparar el perjuicio que se ocasiona en el ejercicio de la actividad peligrosa desplegada con aquella...”, pues como ya se advirtió, ningún examen practicó el Tribunal sobre la prueba aportada para tal efecto, “...ni dio por acreditado el dominio del automóvil Renault 18 en cabeza de la codemandada Esmeralda Sofía Ochoa Crespo...”, ni tuvo a ésta “...como propietaria del vehículo...”. Y, si bien es cierto que el *a-quo* reconoció, con alguna dificultad, a la premencionada codemandada como propietaria del vehículo automotor que en las circunstancias de tiempo, modo y lugar narrados en la demanda, conducía Carlos Alberto Vélez Moreno en la mañana en que ocurrió el accidente, razón por la cual aquélla resultó igualmente responsable del accidente y, por consi-

guiente, condenada al pago de los perjuicios causados al vehículo de propiedad del demandante, no puede asegurarse tajantemente, como en el punto lo afirma la censura, que dicha conclusión probatoria permaneciera incólume en el fallo recurrido, por cuanto si bien es incuestionable que el fallador de primer grado arribó a aquella determinación, también es cierto que el *ad-quem* no hizo pronunciamiento alguno en tal sentido, por cuanto para él tal aspecto resultaba "irrelevante"; de manera que si bien es verdad que el Tribunal pasó silente en el punto y, por tanto, no controvertió en sentido alguno la precitada conclusión del *a-quo*, tampoco puede afirmarse categóricamente que la acogiera, como quiera que resultándole "irrelevante" tal aspecto, guardó absoluto silencio acerca de si dicha codemandada era o no, al tenor de las probanzas arrojadas al proceso, dueña de aquel vehículo.

5. Y como con lo discurrido se pone de manifiesto que la Corte no considera que el Tribunal, a pesar de haber exigido "...la prueba de que el demandado Vélez fuese dependiente de Esmeralda Soffa Ochoa Crespo y que por cuenta de ésta o con su autorización conducía el automóvil Renault...", situó el caso debatido en el ámbito de la responsabilidad por el hecho ajeno, sino en el campo de la responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas empleadas en el ejercicio de actividades peligrosas, el cargo segundo, al tenor de su preámbulo, resulta privado de todo fundamento para impulsar el estudio de la cuestión probatoria allí planteada, y ello es suficiente para marcar su improsperidad; lo cual no impide que la Corte, aún situada en el contorno de la impugnación, reitera que la ausencia de pronunciamiento expreso acerca de la propiedad del vehículo Renault 18 en el patrimonio de la codemandada Esmeralda Soffa Ochoa Crespo, determina que el cargo también resulte inane, como quiera que el error de hecho denunciado sería igualmente intrascendente, en la medida en que aún teniendo en cuenta que en la demanda incoatoria del proceso se convocaba a la premencionada demandada como propietaria del aludido automotor, la decisión final habría sido la misma, en virtud de la inutilidad que para el *ad-quem* revestía la demostración de dicha calidad, amén de que tal afirmación contenida en dicha pieza procesal no prueba por sí sola la calidad que se le atribuye a Ochoa Crespo como dueña del automóvil, resultando, por lo demás, el cargo incompleto.

6. Los cargos son, en consecuencia, imprósperos; sin embargo, *en virtud de la rectificación doctrinaria que propiciaron los argumentos aduci-*



*dos para estructurar el primer cargo, se exonerará al recurrente de la condena al pago de las respectivas costas, de conformidad con lo dispuesto sobre el particular en el artículo 375 in fine del Código de Procedimiento Civil.*

#### *IV. DECISIÓN*

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida en este proceso el 28 de julio de 1992 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

Sin costas en el recurso extraordinario, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este fallo.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

*Pedro Lafont Pianetta, Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor Martín Narango, Rafael Romero Sierra, Javier Tamayo Jaramillo*

# INDICES

## CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

### RELATORIA SALA CIVIL

#### CONSECUTIVO DE JURISPRUDENCIA SEGUNDO SEMESTRE DE 1994

Código Interno de Magistrado

- 1- Dr. Carlos Escobar Jaramillo Schluss
- 2- Dr. Pedro Lafont Pianella
- 3- Dr. Héctor María Naranjo
- 4- Dr. Alberto Ospina Botero  
Dr. Nicolás Rechart Samancus (desde 1o. octubre de 1994)
- 5- Dr. Eduardo García Sarmiento  
Dr. Jorge Antonio Castilla Rugeles (noviembre de 1994)  
Dr. Francisco Javier Tamayo Jaramillo (desde 1o. diciembre de 1994)
- 6- Dr. Rafael Romero Sierra.

Nota: La (s) significa año unitario.

### JULIO

casaliente	consecutivo	año, mes, día	código de magistrado
4329	S-084	94.07.01	2
3865	S-085	94.07.01	6
4145	S-086	94.07.07	4
4385	S-087	94.07.11	5
3656	S-088	94.07.12	2
3576	S-089	94.07.15	3
3894	S-090	94.07.15	1

4366	S-091	94.07.27	5
4090	S-092	94.07.29	4
4655	A-213	94.07.05	2
5033	A-214	94.07.05	5
4891	A-216	94.07.06	4
4655	A-217	94.07.07	15
5030	A-218	94.07.07	3
5065	A-221	94.07.07	0
5055	A-222	94.07.11	1
5057	A-223	94.07.11	2
5016	A-224	94.07.11	0
4889	A-226	94.07.13	4
4924	A-227	94.07.14	3
4997	A-228	94.07.14	6
5073	A-229	94.07.14	0
4743	A-230	94.07.19	0
5071	A-231	94.07.21	0
5049	A-232	94.07.22	55
5087	A-233	94.07.22	55
5092	A-234	94.07.25	1
	A-235	94.07.25	6
4846	A-236	94.07.27	6
5088	A-237	94.07.28	1
5011	A-238	94.07.28	4
5042	A-238A	94.07.29	3
5016	A-239	94.07.29	4
5080	A-240	94.07.28	0
	A-241	94.07.28	65

## AGOSTO

4351	S-093	94.08.04	2
4320	S-094	94.08.04	2
4319	S-095	94.08.04	2
4227	S-096	94.08.08	1

4231	S-097	94.08.08	1
4288	S-098	94.08.08	1
4358	S-099	94.08.08	2
4081	S-100	94.08.09	5
3797	S-101	94.08.10	3
3790	S-102	94.08.11	3
4129	S-103	93.08.11	6
4009	S-104	94.08.19	6
3890	S-105	94.08.22	3
3959	S-106	94.08.22	3
5077	A-242	94.08.01	6
4329	A-243	94.08.02	2
4960	A-244	94.08.03	3
5063	A-245	94.08.04	6
5027	A-246	94.08.08	0
4733	A-247	94.08.08	1
5094	A-248	94.08.08	1
5119	A-249	94.08.08	6
4998	A-250	94.08.09	4
4875	A-251	94.08.09	55
5097	A-252	94.08.09	65
5125	A-253	94.08.10	15
4997	A-254	94.08.10	6
5118	A-255	94.08.10	65
5034	A-256	94.08.12	5
5008	A-257	94.08.16	0
5108	A-258	94.08.16	6
5031	A-259	94.08.16	0
	A-260	94.08.16	0
5084	A-261	94.08.17	2
5001	A-265	94.08.23	2
5138	A-263	94.08.18	15
5017	A-264	94.08.18	0
5105	A-266	94.08.21	2
5140	A-267	94.08.23	25

	A-267A	94.03.23	2S
3692	A-268	94.08.24	0
4971	A-269	94.08.23	0
5113	A-270	94.08.24	4S
5038	A-271	94.08.25	4S
	A-272	94.08.24	6S
5097	A-273	94.08.24	6S
4581	A-274	94.08.25	0
5151	A-275	94.08.29	2S
5018	A-276	94.08.29	6
4347	A-277	94.08.30	4
5062	A-278	94.08.31	4

## SEPTIEMBRE

4060	S-107	94.09.01	1
4363	S-108	94.09.01	2
3776	S-109	94.09.07	6
3971	S-110	94.09.08	3
4377	S-111	94.09.12	2
4293	S-112	94.09.12	2
3979	S-113	94.09.13	3
3960	S-114	94.09.15	3
4308	S-115	94.09.20	4
4344	S-116	94.09.27	4
4384	S-117	94.09.29	2
4216	S-118	94.09.30	6
4165	S-119	94.09.30	6
4224	S-120	94.09.30	6
4245	S-121	94.09.30	6
5136	A-279	94.09.01	1
5041	A-280	94.09.06	6S
5139	A-281	94.09.07	3
5118	A-282	94.09.07	0
5160	A-283	94.09.13	4S

5104	A-284	94.09.13	0
5008	A-285	94.09.13	0
5065	A-286	94.09.14	0
5178	A-287	94.09.19	0
5176	A-288	94.09.21	4S
5120	A-289	94.09.22	6
4581	A-290	94.09.22	6S
5159	A-291	94.09.26	2
5183	A-292	94.09.26	2
4285	A-293	94.09.26	2
4611	A-294	94.09.29	0
5168	A-295	94.09.29	3
5136	A-296	94.09.29	6S

## OCTUBRE

4188	S-122	94.10.06	6
4355	S-123	94.10.10	4
4407	S-124	94.10.14	2
3972	S-125	94.10.19	1
4383	S-126	94.10.20	4
4323	S-127	94.10.21	6
1352	S-128	94.10.24	1
4371	S-129	94.10.24	1
3000	S-130	94.10.25	5
4372	S-131	94.10.27	4
3868	S-132	94.10.31	3
4306	S-133	94.10.31	1
4359	S-134	94.10.31	4
4644	A-297	94.10.03	6S
4960	A-298	94.10.04	3
5181	A-299	94.10.04	6S
5101	A-300	94.10.04	6S
5178	A-301	94.10.05	4S
5082	A-302	94.10.05	6S



5194	A-303	94.10.05	65
5184	A-305	94.10.06	1
5187	A-306	94.10.07	15
5202	A-307	94-10-07	15
5209	A-308	94.10.07	45
5124	A-309	94.10.11	45
5196	A-310	94.10.12	3
5171	A-311	94.10.12	6
5154	A-312	94.10.12	0
5205	A-313	94.10.13	0
3865	A-314	94.10.13	65
5122	A-315	94.10.13	65
4023	A-316	94.10.14	55
5217	A-317	94.10.18	65
5213	A-318	94.10.20	4
5118	A-319	94.10.20	6
5024	A-320	94.10.20	3
5176	A-321	94.10.26	4
5240	A-322	94.10.27	15
5126	A-323	94.10.27	3
5181	A-324	94.10.27	4
4756	A-325	94.10.27	65
5134	A-326	94.10.31	0
5114	A-327	94.10.31	0
5242	A-328	94.10.31	0
5206	A-329	94.10.31	4
5233	A-330	94.10.31	65
4722	A-331	94.10.31	65

## NOVIEMBRE

4427	S-135	94.11.17	4
4389	S-136	94.11.17	3
4338	S-137	94.11.18	1
4415	S-138	94.11.24	2

4357	S-139	94.11.25	6
4371	S-140	94.11.28	1
4366	S-141	94.11.28	4
4438	S-142	94.11.30	2
4443	S-143	94.11.30	2
4025	S-144	94.11.30	3
4008	S-145	94.11.30	3
4321	S-146	94.11.30	1
4310	S-147	94.11.30	6
5150	A-332	94.11.02	2
5190	A-333	94.11.02	3
5234	A-334	94.11.02	65
5238	A-335	94.11.02	65
5246	A-336	94.11.03	4
5246	A-337	94.11.04	2
5245	A-338	94.11.08	1
5081	A-339	94.11.08	4
5262	A-340	94.11.09	0
5239	A-341	94.11.09	5
5107	A-342	94.11.10	2
5106	A-343	94.11.10	4
3992	A-344	94.11.10	55
5041	A-345	94.11.10	65
5175	A-346	94.11.11	1
3865	A-347	94.11.11	6
4053	A-348	94.11.16	1
5085	A-349	94.11.16	2
4364	A-349A	94.11.16	65
4355	A-350	94.11.17	0
5235	A-351	94.11.18	3
5205	A-352	94.11.18	3
5252	A-353	94.11.21	1
5247	A-354	94.11.21	2
5066	A-355	94.11.22	25
5271	A-356	94.11.23	4

5118	A-357	94.11.23	6
5150	A-358	94.11.24	2
5234	A-359	94.11.24	6S
5085	A-360	94.11.28	2S
5265	A-361	94.11.28	6S
4722	A-362	94.11.28	6S
5182	A-363	94.11.28	6S
5264	A-364	94.11.29	5
4366	A-365	94.11.29	5
5188	A-366	94.11.29	5
4008	A-367	94.11.30	3
5270	A-368	94.11.30	3
5254	A-369	94.11.30	3
5180	A-370	94.11.30	3
5284	A-371	94.11.30	5
5251	A-372	94.11.30	6
5041	A-373	94.11.30	6S

## DICIEMBRE

4260	S-148	94.12.15	6
5066	A-374	94.12.09	2S
5236	A-375	94.12.14	3
4355	A-376	94.12.12	4
5266	A-377	94.12.13	4
5276	A-378	94.12.13	4
3865	A-379	94.12.12	0
5078	A-380	94.12.15	4
5304	A-381	94.12.15	4

**INDICE ALFABETICO**  
**PROVIDENCIAS PUBLICADAS Y NO PUBLICADAS**  
**SEGUNDO SEMESTRE DE 1994**

	Páginas
ABOGADO (S-090) .....	75
ABUSO DEL DERECHO (S-215) .....	705
ACCION REIVINDICATORIA (A-277; A-285) .....	1204/
ACCION REIVINDICATORIA — Identidad del Bien (S-116) .....	544
ACCION REIVINDICATORIA — Legitimación (S-119) .....	465
ACCION RESOLUTORIA (S-134) .....	961
ACTA DE NACIMIENTO (S-089) .....	65
ACTO JURIDICO (S-132) .....	911
ACUMULACION DE PRETENSIONES (S-125; A-334) .....	704
AFLIACION (S-130) .....	846
AMPARO DE POBREZA (A-242; A-275; A-371) .....	155/373/
ANALOGIA (S-130) .....	845
ANEXOS (A-270; A-334) .....	2
ANIMUS SOCIETATIS (S-102) .....	305
APELACION (A-348; A-339; A-340) .....	986/
APODERADO — Enfermedad Grave (A-343) .....	974
APODERADO DE OFICIO (A-242) .....	155
ARBITRIUM JUDICIUM (S-088) .....	49
ARRENDAMIENTO — Renovación (S-132) .....	912
AUTONOMIA DEL JUZGADOR (S-099; S-100; S-107; S-118; S-147; S-098; S-135) .....	1177/270/287/378/586/
BIEN AGRARIO (A-265; S-133) .....	359
BIEN BALDIO (S-133) .....	943
BIEN RURAL (S-133) .....	943
BUENA FE (S-084) .....	8

	Páginas
CADUCIDAD (S-087) .....	33
CAPACIDAD (S-144) .....	1144
CAPACIDAD DE GOCE (S-097) .....	227
CAPACIDAD LABORAL (S-130) .....	845
CAPACIDAD LEGAL (S-097) .....	227
CAPACIDAD PARA SER PARTE (S-097) .....	227
CAPACIDAD PROCESAL (S-097) .....	227
CARGA DE LA PRUEBA (S-090; S-105; S-108) .....	974/76/329/
CARGA PROCESAL (A-227) .....	59
CASACION — Admisión (S-137; A-224; A-238; A-255; A-317; A-335) .....	1009/
CASACION — Ataque todos los fundamentos (S-146) .....	1158
CASACION — Características (S-093; S-094; S-105; S-147; S-101; S-122) .....	1177/174/187/229/
CASACION — Carga Procesal (A-258; S-107; S-108; A-282; A-351; S-137; S-138; A-221; A-229; A-310; A-313; A-360; A-366; S-145) .....	1009/1025/1061/325/379/396/445/
CASACION — Cargos (S-095; S-094; S-097; S-117; S-118; S-120; S-125; S-132; S-133; A-326) .....	174/187/229/586/941/944/563/616/708
CASACION — Causales (S-094; S-097; S-117) .....	174/230/563/
CASACION — Concesión (A-324) .....	905
CASACION — Copias (A-258; A-352; A-351; A-221; A-229; A-284; A-292; A-312; A-313; A-328; A-375) .....	1025/1025/1031
CASACION — Cuantía (A-237; A-324; A-310; A-321) .....	905/138/
CASACION — Cumplimiento Sentencia Recurrída (S-115; A-352; A-351; A-221; A-224; A-229; A-234; A-284; A-286; A-298; A-312; A-310; A-313; A-328) .....	1025/1031/526/
CASACION — Deserción (A-258; S-137; S-115; A-221; A-241; A-244; A-260; A-271; A-292; A-298; A-300; A-309; A-310; A-313; A-315; A-319; A-360; A-375) .....	1009/1018/538/
CASACION — Efectos (S-137; A-292) .....	1009/
CASACION — Finalidad (S-096; A-286; A-375) .....	204/
CASACION — Fundamentos de la acusación (S-114) .....	514
CASACION — Inadmisión (A-351; A-292) .....	1025/

## Páginas

CASACION — Interés para Recurrir (A-318; A-324; A-321) .....	793/902/905
CASACION — Justiprecio (A-237; A-318; A-324; A-321) .....	793/902/138
CASACION — Objeto (S-139) .....	1077
CASACION — Pago de Porte (A-282; A-378; A-319; A-335) .....	1209/445/
CASACION — Procedencia (A-237; A-266; A-368) .....	138/365/
CASACION — Procedibilidad (S-137) .....	1009
CASACION — Sustentación (S-120) .....	616
CERTIFICADO DEL REGISTRADOR (S-133) .....	943
CITACION (S-124; S-136) .....	998/
CITACION DE RECONOCIMIENTO (A-218; A-281) .....	29/413/
COMPETENCIA (A-281; A-353; A-330) .....	1037/359/413
COMPETENCIA — Concepto. Factores (A-354) .....	1042
COMPETENCIA (SALVAMENTO DE VOTO) (A-265) .....	359
COMPETENCIA A PREVENCIÓN (A-218) .....	29
COMPETENCIA PRIVATIVA (A-295; A-329) .....	581/
COMPETENCIA PRORROGADA (A-354) .....	1042
COMPETENCIA TERRITORIAL (A-218; A-281; A-295; A-354; A-239; A-248; A-261; A-279; A-305; A-311; A-341; A-369) .....	1042/29/413/581/
COMPRAVENTA DE CUERPO CIERTO (S-096) .....	204
COMPRAVENTA POR CAÍDA (S-096) .....	204
COMUNIDAD (S-095) .....	187/
CONCEPCIÓN (S-138) .....	1060
CONDENA EN ABSTRACTO (A-277) .....	174
CONDENA EN CONCRETO (S-091) .....	104
CONDICIÓN RESOLUTORIA (S-134) .....	961
CONFESIÓN (S-105; S-113) .....	329/500/
CONFLICTO DE ATRIBUCIÓN (A-295; A-223) .....	581
CONFLICTO DE COMPETENCIA (A-218; A-265; A-281; A-354; A-364; A-377; A-213; A-216; A-226; A-228; A-231; A-238; A-239; A-245; A-248; A-250; A-256;	

.....	Páginas
A-261, A-276, A-278; A-279; A-289; A-306; A-305; A-311; A-329, A-341, A-372, A-369) .....	1042/1111/1204/29/359/413/
<b>CONFLICTO DE JURISDICCION</b>	
(A-265; A-353; A-216; A-226; A-228; A-238; A-250; A-256, A-276, A-278, A-346) .....	1037/359/1111
CONGRESO (A-355) .....	1048
CONGRUENCIA CON LA CAUSA (S-097) .....	226
CONGRUENCIA CON LAS EXCEPCIONES (S-120) .....	616
CONGRUENCIA CON LOS HECHOS (S-094; S-097; S-112) .....	174/226/
<b>CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA</b>	
(A-265; A-353, A-346) .....	1037/359/
CONSENTIMIENTO (S-144) .....	1144
CONTRATOS (A-239, A-372) .....	941/705/
CONTRATO BANCARIO (S-129) .....	830
CONTRATO BILATERAL (S-134) .....	961
CONTRATO DE SEGURO (S-143; S-103) .....	1131
CORRECCION MONETARIA (S-092) .....	144
CONSTANCIA (A-357) .....	1053
COPOSESION (S-095) .....	187
CORRECCION MONETARIA (S-126; S-132) .....	784/911/144/
COSA JUZGADA (S-084; S-090) .....	777/
COSTAS (A-243; A-347, A-376) .....	979/170/
CUASIDELITO (S-125) .....	705
CUENTA CORRIENTE (S-091) .....	103
CUENTA CORRIENTE BANCARIA (S-129) .....	830
CULPA (S-088; S-125; S-104) .....	843/49/705
CHEQUE (S-091; S-126; S-129; A-245) .....	784/830/103/
DAÑO (S-120) .....	843/845
DAÑO EMERGENTE (S-130) .....	845
DEBER DEL JUZGADOR (S-130) .....	846/481
DECLARACION DE PARTE (S-113) .....	500/
DELITO (S-125) .....	705
DEMANDA — Inadmisión (S-097; A-257) .....	227/



	Páginas
DEMANDA — Requisitos ( S-097; S-114; S-116; A-270) .....	229/514/544/
DEMANDA — Reclamo (A-348; A-252) .....	986/
DEMANDA DE CASACION (S-149; A-254; A-257; A-271; A-385; A-309; A-323; A-326; A-327; A-332; A-358) .....	514
DEMANDA DE RECONVENCION (S-123; S-134) .....	961/657/
DEMANDA DE REVISION (A-227; A-263; A-272; A-274; A-280; A-296; A-302; A-301; A-322; A-373. ) .....	59/
DEMANDA EN FORMA ( S-097) .....	228
DERECHO ANGLÓSAXON ( S-090) .....	76
DERECHO DE ACCION ( A-365; A-274) .....	1115/
DERECHO DE DEFENSA (S-091; S-115; S-086; S-098) .....	104/226/526/
DERECHO DE GENTES ( S-090) .....	75
DERECHO DE IMPUGNACION (A-282) .....	445
DESERCIÓN ( A-227) .....	59
DICTAMEN PERICIAL (A-237; S-100; S-105; S-107; S-125; A-318; S- 130) .....	793/845/287/330/379/
DICTAMEN PERICIAL. — Objeción (A-349A) .....	138/707
DINERO (S-130) .....	845
DISPOSICIONES CONTRADICTORIAS ( S-097) .....	226
DIVORCIO (A-364) .....	1111
DOCUMENTO FORMAL ( S-091) .....	103
DOCUMENTO NUEVO (S-084) .....	7
DOLO (S-125) .....	705
DOMINIO (S-111; S-139) .....	1078/465/
DONACION (S-097) .....	226
EMPLAZAMIENTO ( S-087; A-316; S-124; S-136) .....	998/33/697/
EMPLAZAMIENTO INDEBIDO — Legitimación (S-114) .....	513
ENTIDAD DE CREDITO (S-125) .....	705
ENTIDAD DESCENTRALIZADA ( A-355) .....	1048
EQUIDAD (S-130) .....	845
ERROR DE DERECHO ( S-100; S-105; S-106; S-108; S-112; S-113; S-117) .....	286/287/330/342/500/562/

## Páginas

ERROR DE HECHO ( S-095; S-097; S-100; S-102; S-107; S-108; S-111; S-113; S-117; S-118; S-123; S-124; S-125; S-127; S-132; S-147; S-086; S-098; S-135) .....	803/911/912/1177/226/ 287/305/705/709/379/465/500/514/562/586/657/674
ERROR DE HECHO — Modalidades ( S-096; S-097; S-100; S-139) .....	1077/230/286/204/
ERROR DE HECHO — Requisitos (S-095; S-100; S-116) .....	160/286/544/
ERROR DE HECHO Y DE DERECHO ( S-097; S-099; S-125; S-138; S-142; S-101; S-103; S-131; S-135; S-141; S-145) .....	1060/1122/230/270/396/707/ 1159
ERROR INJUDICANDO (S-146) .....	1159
ERROR IN PROCEDENDO ( S-097; S-132; S-143) .....	911/1131/226/228
ERROR INEXCUSABLE ( S-091) .....	103
ESCRITURA PUBLICA ( S-097; S-112) .....	227/481/
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL (S-132) .....	912
ESTABLECIMIENTO PUBLICO ( A-355) .....	1048
ESTADO CIVIL ( S-089; S-110) .....	65/450
EXCEPCION (S-107; S-134) .....	961/379/
EXCEPCION DE MERITO (S-120) .....	616
EXCEPCION PREVIA ( S-097; A-336; A-329; A-333) .....	972/227/228/
EXCEPTIO PLURIM CONSTATUTORUM (S-107) .....	379
EXEQUATUR (S-090; A-253; ) .....	75/77
EXEQUATUR — Rechazo ( A-267; A-273; A-283) .....	369/
EXPEDIENTE — Remisión (A-282; A-357; A-255; A-319; A-335) .....	1053/445/
EXHIBICION DOCUMENTAL ( A-326) .....	133
FALTA DE NOTIFICACION ( S-087; A-316; A-307) .....	330/697/
FAMILIA (S-130) .....	843
FILIACION EXTRAMATRIMONIAL ( S-089) .....	65
FILIACION MATRIMONIAL (S-089) .....	65
FRUTOS ( S-123) .....	657/
FUERO ESPECIAL ( A-354; A-213; ) .....	1042
HECHOS ( S-097; S-108) .....	174/229/397/

	Páginas
HEREDERO — Calidad ( S-097) .....	227
HÉRMENEUTICA JURÍDICA ( S-091; A- 265) .....	103/359
HIPOTECA (S-128) .....	818
HONORARIOS PROFESIONALES (A-347, A-379) .....	979/
IDENTIDAD DE PARTES ( A-355) .....	1048
INCONGRUENCIA .....	707
INCONSONANCIA ( S-094; S-097; S-124; S-125; S-132; S-143; S-098) .....	174/673/
INDEBIDA REPRESENTACION (S-097; A-316) .....	228/697/
INDICIO ( S-102; S-106; S-108; S-111; S-113; S-117; S-124; S-138) .....	1061/305/342/397/465/500/562/675
INMUEBLE (S-132) .....	912
IDENTIFICACION PERSONAL (S-117) .....	562
INEPTITUD DE LA DEMANDA ( S-097; S-114; S-116; A-336; I .....	229/514/544
INEXISTENCIA (S-144) .....	1144
INOPONIBILIDAD (S-144) .....	1144
INTEGRACION DE CARGOS ( S-139) .....	1077
INTERES LEGAL (S-130) .....	845
INTERESES (S-125) .....	784
INTERPRETACION CONTRACTUAL (S-122) .....	230/586/
INTERPRETACION DE LA DEMANDA ( S-097; S-124; S- 125; S-132; S-144; S-098 ) .....	911/912/1144/226/229/705/
INTERRUPCION PROCESAL (A-343; A-217) .....	974/
INSPECCION JUDICIAL ( A-236) .....	133
INVESTIGACION DISCIPLINARIA (A-378, A-379) .....	1215
INTERPRETACION CONTRACTUAL ( S-097; S-118) .....	586
JURISDICCION — Clasificación (A-265) .....	359
JURISDICCION AGRARIA (A-368) .....	365
JURISDICCION DE FAMILIA ( A-265; A-353; A-216; A-226; A-228; A-238; A-256; A-276, 278, A-346) .....	355/413/
JURISDICCION ECLESIASTICA ( A- 267) .....	369
JUZGADOR DE INSTANCIA (S-108; S-118; S-121; S-086) .....	270/287/396/562/654/708

	Páginas
JURISDICCION DE FAMILIA (A-218) .....	1037/297
JURISDICCION ORDINARIA (A-265; A-231) .....	359/
JUZGADOR DE INSTANCIA (S-099; S-100; S-117; S-125) .....	378
LEALTAD PROCESAL (S-084; S-107) .....	8/377/
LEGADO (S-124) .....	673
LEGITIMACION EN LA CAUSA (S-107) .....	377
LEGITIMO CONTRADICTOR (S-107; S-125) .....	377/704/
LETRA DE CAMBIO (S-091) .....	103
LEY (S-090; S-120) .....	76
LIBROS DE COMERCIO (A-236) .....	133
LITISCONSORCIO FACULTATIVO (S-107; ) .....	377/
LITISCONSORCIO NECESARIO (S-125; S-134; S-136; A-344) .....	961/998/704/
MANDATO (S-144; A-376) .....	1144/
MANDATO MERCANTIL — Renovación (S-140) .....	1095
MANIOBRA FRAUDULENTE (S-085) .....	21
MANIOBRA FRAUDULENTE — Finalidad (S-084) .....	8
MATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL (S-089) .....	65
MATERNIDAD LEGITIMA (S-089) .....	65
MATRIMONIO (S-130; A-353; A-346) .....	843/1037/
MATRIMONIO — Cesación Efectos Cíviles (A-364; ) .....	1111
MATRIMONIO CANONICO (A-267) .....	369
MEDIO MIXTO (S-115) .....	526
MEDIO NUEVO (S-097; S-115; S-118; S-146; S-086) .....	1159/227/587/
MEJOR (S-130) .....	845
MINISTERIO PUBLICO (S-106) .....	342
MORA (S-134) .....	961
NACION (S-133; A-355) .....	943/1048
NEGOCIO JURIDICO (S-097; S-144) .....	1144/227/
NORMA CONSTITUCIONAL (A-265) .....	359/
NORMA LEGAL (A-265) .....	359
NORMA PROBATORIA (S-139; S-142; A-254) .....	1077/1122/
NORMA SUSTANCIAL (S-139; A-254; A-257; A-285; A-332; A-323; A-358; A-366; A-370) .....	1077/

	Páginas
NOTARIO (S-097; S-112) .....	227/481
NOVACION (S-134) .....	961
NULIDAD EN LA SENTENCIA (S-085) .....	21
NULIDAD PROCESAL	
(S-097; S-107; S-114; S-117; S-124; A-343; A-217) .....	974/228/377/513/563
NULIDAD PROCESAL — Legitimación	
(S-107; S-114; S-136; A-349) .....	998/377/513
NULIDAD PROCESAL — Oportunidad (S-087; A-349) .....	33
NULIDAD PROCESAL — Principios (S-124; S-136) .....	998/673
NULIDAD SUSTANCIAL	
(S-097; S-119; S-120; S-132; S-144; A-327) .....	911/1144/227/599
OBLIGACION DE ENTREGAR (S-096) .....	204
OBLIGACION EXTRANJERA (S-090) .....	77
OCCUPACION (S-133) .....	943
ORDEN PUBLICO (A-218; S-090) .....	29/77
PAGO (S-091) .....	77/103
PAGO DE LO NO DEBIDO (S-132) .....	911
PARTE (S-106) .....	342
PARTICION (S-119) .....	599
PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL	
(S-089; S-093; S-099; S-100; S-106; S-108) .....	65/160/270/286/342
PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL —	
Causales (S-100; S-138) .....	1060/287
PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL —	
Legitimación (S-107) .....	377
PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL —	
Poseción Notoria (S-121; S-147) .....	1177/634
PATRIMONIO AUTÓNOMO (S-097) .....	227
PERJUICIOS (S-091; S-094; S-109; S-148) .....	1216/104/174/417
PERJUICIOS — Legitimación (S-125; S-130) .....	843/705
PERJUICIOS — Regulación (A-247; A-314) .....	979
PERJUICIO MATERIAL (S-088) .....	49
PERJUICIO MORAL (S-088; A-365) .....	1115/49
PERJUICIO MORAL — Prueba (S-130) .....	845

	Páginas
PERSONAS (S-097) .....	227
PERSONA JURIDICA (A-355) .....	1048
PERTENENCIA (S-133; S-139) .....	943/1077/1158/657/
PLAZO (A-352) .....	1031
PODER (S-097) .....	228
PODER DEL JUZGADOR (S-125; A-247) .....	709
POSESION (S-111; S-133; S-139; S-146) .....	943/1078/1158/657/
POSESION NO FORIA (S-089) .....	65
PRECLUSION	
(A-275; A-233; A-308; A-337; A-349; A-256; A-360) .....	373/
PRESCRIPCION (S-133; S-139) .....	943/1078
PRESCRIPCION — Interrupción (S-143) .....	1131
PRESCRIPCION ADQUISITIVA	
EXTRAORDINARIA (S-095) .....	187
PRESCRIPCION ADQUISITIVA	
ORDINARIA (S-095) .....	187/
PRESCRIPCION ADQUISITIVA Y EXTINTIVA	
(S-123; S-146) .....	1158/657/
PRESCRIPCION ORDINARIA (S-143) .....	1131
PRESCRIPCION ORDINARIA	
Y EXTRAORDINARIA (S-146) .....	1158
PRESUNCION (S-125) .....	707
PRESUNCION DE ACIERTO (S-122) .....	1177/
PRESUNCION DE PATERNIDAD (S-105; S-108; S-127) .....	803/229/
PRESUNCION LEGAL (S-133) .....	943
PRESUNCION DE ACIERTO (S-099; S-147) .....	270
PRESUPUESTO PROCESAL (S-091; S-097) .....	103/228
PRETENSION (S-097; S-108; S-114) .....	229/397/514/
PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL	
(S-113; A-375) .....	526/
PRINCIPIO "LO QUE UNA PERSONA EJECUTA EN NOMBRE DE OTRA NO	
TENIENDO PODER DE ELLA NI DE LA LEY PARA REPRESENTARLA,	
CARECE DE EFECTOS CONTRA EL REPRESENTADO" (S-144) .....	1144
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA (S-125) .....	704

## Páginas

PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD	
DE LOS HECHOS (S-107) .....	378/
PRINCIPIO DE LA AUTORIDAD	
DEL PRECEDENTE LEGAL (S-090) .....	76
PRINCIPIO DE LA APRECIACION RACIONAL (S-089) .....	66
PRINCIPIO DE LA CONGRUENCIA (S-143) .....	1131
PRINCIPIO DE LA CONVALIDACION (S-107) .....	377
PRINCIPIO DE LA INFORMALIDAD (S-120) .....	616
PRINCIPIO DE LA PROHIBID (S-084) .....	8
PRINCIPIO DE LA PROTECCION (S-136) .....	998
PRINCIPIO DE LA RESPONSABILIDAD	
DE EMPRESA (S-129) .....	830
PRINCIPIO DE LA TRASCENDENCIA (S-107; S-114) .....	377/513/
PRINCIPIO DE LIBERTAD PROBATORIA (S-092) .....	160
PRINCIPIO PROCESAL (S-090) .....	75/
PRINCIPIO SUSTANCIAL (S-090) .....	75/
PRINCIPIOS (S-084; S-090; A-306) .....	8/75/
PROCESO ABREVIADO (A-266) .....	365
PROCESO DECLARATIVO (S-107) .....	377/
PROCESO EJECUTIVO (S-087; A-261; A-311; A-329) .....	33
PROCESO LIQUIDATORIO (A-295) .....	581
PROCESO PENAL (S-094; S-114) .....	174/513
PROMESA DE COMPRAVENTA (S-124) .....	961
PROMESA DE CONTRATO (S-096) .....	204
PROVIDENCIA JUDICIAL — Ejecutoria	
(A-351; A-260; A-375) .....	1025/
PROTECCION AL CONSUMIDOR (S-125) .....	705
PRUEBA ANTROPOMORFOLOGICA	
(S-105; S-106; S-108; S-107; S-127) .....	803/330/342/379/397/
PRUEBAS (A-230; A-349A) .....	99/
PRUEBAS — Valoración en Conjunto	
(S-089; S-100; S-102; S-106; S-130; S-101) .....	846/66/286/305/342
PRUEBA CONDUCENTE (A-320) .....	799
PRUEBA PERTINENTE (A-320) .....	799



	Páginas
PRUEBA SUPERFLUA (A-320) .....	799
QUEJA — Procedencia (A-266; A-337) .....	365/
RECIPROCIDAD — Clases (S-090) .....	76
RECTIFICACION DOCTRINARIA (S-146; S-148) .....	1158/1216/
RECURSO — Oportunidad (A-275) .....	373/
RECURSO DE ANULACION (S-084) .....	8
REGIMEN CAMBIARIO (S-090) .....	77
REGISTRADOR (S-097) .....	227
REGISTRO CIVIL (S-110) .....	450
REGISTRO PUBLICO (S-097; A-316; S-128) .....	818/227/697/
REGULACION DE VISITAS (A-354) .....	1042
RELACIONES SEXUALES (S-093; S-099; S-100; S-107; S-108; S-121; S-138) .....	1060/65/160/270/286/3220/379/634/
REPOSICION (A-348; A-285; A-298; A-304; A-312; A-339; A-362; A-379) .....	986/
REPOSICION — Finalidad (A-316) .....	697
REPOSICION — Procedencia (A-316) .....	697
REPRESENTACION (S-097; S-144) .....	1144/227/
RESPONSABILIDAD (S-130) .....	846
RESPONSABILIDAD CIVIL DEL JUEZ (S-091; A-365; A-334; A-359) .....	1115/103/
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL (S-088; S-091) .....	49/103/
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL (S.S., S-109) .....	417
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL — Actividad Peligrosa (S-130; S-148; S-104) .....	843/1216/
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL — Legitimación (S-130) .....	843
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL — Presupuestos (S-130) .....	843
RESPONSABILIDAD MEDICA (S-088) .....	49
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (A-365) .....	1115
RESTITUCIONES MUTUAS (S-132; S-134) .....	911/961
RETIRO DE LA DEMANDA (A-325) .....	207
REVISION (S-085; A-347; A-290; A-379) .....	979/211/

	Páginas
REVISION — Caducidad (A-316; A-307) .....	697
REVISION — Características (A-243; A-296; A-308; A-307; A-356) .....	170/
REVISION — Deserción (A-227; A-232) .....	59/
REVISION — Finalidad (S-085) .....	7
REVISION — Improcedencia (S-087; S-084; A-325; A-296; A-322) .....	907/8/33/
REVISION — Naturaleza (S-084) .....	33
REVISION — Oportunidad (A-316; A-233; A-307) .....	373/697/
REVISION — Procedencia (S-084; S-087; A-287; A-223; A-301) .....	541/
SANCION (S-126) .....	784
SECRETARIO JUDICIAL (A-282) .....	445
SEGURO DE VIDA (S-143) .....	1131
SENTENCIA (S-124; A-301) .....	673
SENTENCIA — Aclaración (A-243) .....	170/
SENTENCIA — Adición (A-243) .....	170
SENTENCIA — Efectos (S-084) .....	7
SENTENCIA CONTRA ENTIDADES PUBLICAS (A-352) .....	1031
SENTENCIA DE NULIDAD (A-267) .....	369
SENTENCIA INHIBITORIA (S-125; S-136) .....	998/544/704
SOCIEDAD CONYUGAL (S-119) .....	599/
SOCIEDAD DE HECHO CONCUBINARIA (S-102) .....	305/
SENTENCIA DESESTIMATORIA (A-347) .....	979
SENTENCIA INCONSONANCIA .....	673
SUCESION (S-097; A-320) .....	227/
SUJETO PROCESAL (S-106) .....	342
SUPLICA (A-227; A-230; A-236; A-348; A-224; A-238A; A-246; A-268; A-301; A-339) .....	59/99/133/
SUSPENSION PROCESAL (S-114) .....	513
TITULO VALOR (S-091; A-231; A-245; A-248; A-305; A-329; A-341; A-372) .....	103
TECNICA DE CASACION (S-094; S-097; S-115; ) .....	174/229/526/

## Páginas

<b>TECNICA DE CASACION — Yuxtaposición</b>	
de Argumentos ( S-118; S-132; S-133; S-138; S-086) .....	911/944/1061/586
<b>TERCERO RESPONSABLE (S-130) .....</b>	<b>843</b>
<b>TERMINO LEGAL (A-351) .....</b>	<b>1025</b>
<b>TESTAMENTO ( S-124) .....</b>	<b>673</b>
<b>TESTIMONIO ( S-115) .....</b>	<b>270/305/329/526/</b>
<b>TESTIMONIO — Grupo de Testigos (S-100; S-124) .....</b>	<b>287/674/</b>
<b>TESTIMONIO — Identificación del Testigo (S-117) .....</b>	<b>562/</b>
<b>TESTIMONIO — Ratificación ( A-230; S-090) .....</b>	<b>99/</b>
<b>TESTIMONIO — Valoración en Conjunto</b>	
(S-117; S-121; S-147) .....	1177/286/562/634
<b>TESTIMONIO DEL VECINO ( S-147) .....</b>	<b>1178</b>
<b>TESTIMONIO EXTRAPROCESO ( A-230) .....</b>	<b>99</b>
<b>TESTIMONIO SOSPECHOSO</b>	
(S-100; S-113; S-121; S-127) .....	802/287/500/634/
<b>TRANSPORTE ( S-130) .....</b>	<b>846</b>
<b>TRATO PERSONAL Y SOCIAL ( S-093; S-121) .....</b>	<b>160/634/</b>
<b>TRIBUNAL DE CASACION</b>	
( S-107; S-108; S-121; S-125; S-086; A-330) .....	378/396/634/708/
<b>TRIBUNAL SUPERIOR ( A-265; A-223) .....</b>	<b>359/</b>
<b>UNION MARITAL DE HECHO (S-130) .....</b>	<b>843</b>
<b>VALIDEZ ( S-144) .....</b>	<b>1144</b>
<b>VALORACION PROBATORIA ( S-089; S-100; S-105; S-117; S-125;</b>	
<b>S-127; S-147; S-135) .....</b>	<b>803/1177/66/270/287/329/562/709</b>
<b>VEHICULO AUTOMOTOR ( S-130) .....</b>	<b>846</b>
<b>VIOLACION NORMA SUSTANCIAL</b>	
(S-094; S-117; S-132; S-143; A-323) .....	911/1131/174/563
<b>VIOLACION NORMA SUSTANCIAL —</b>	
<b>Ataque todas las pruebas (S-139; S-086; S-141) .....</b>	<b>1077</b>
<b>VIOLACION NORMA SUSTANCIAL —</b>	
<b>Ataque todos los fundamentos</b>	
(S-110; S-104; S-131; S-141) .....	450
<b>VIOLACION NORMA SUSTANCIAL —</b>	
<b>Via Directa ( S-097) .....</b>	<b>240</b>

## Páginas

## VIOLACION NORMA SUSTANCIAL.—

Vía Directa e Indirecta (S-118; S-124; S-125; S-128 ;

S-142; S-103; S-145) .....704/708/818/1122/586/674

## VIOLACION NORMA SUSTANCIAL.—

Vía Indirecta ( S-093; S-108; S-111; S-112; S-113; S-116; S-117;

S-124; S-125; S-138; A-332) .....1060/160/396/465/500/544/562/707/

# CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

## INDICE CRONOLOGICO PROVIDENCIAS

### II

20/10/1994

**DICTAMEN PERICIAL/CASACION-Justiprecio/**

**CASACION-Interés para Recurrir.....Pag. 793**

En caso de ser acogido por el Tribunal el dictamen pericial que justiprecia el interés para recurrir en casación, la Corte no puede inadmitir el recurso bajo el pretexto de que el perito se equivocó al evaluar la cuantía del interés, y así mismo cuando se deniega el recurso porque el justiprecio muestra un resultado cuantitativo inferior al límite legal, la Corte tampoco puede separarse del experticio.

Igual sentido: providencias de 19 de junio de 1992 y 30 de mayo de 1994

**PONENTE** : Nicolás Bechara Simancas

**AUTO DE QUEJA (318)**

**FECHA** : 20/10/1994

**DECISION** : AJUSTADO A LA LEY AUTO RECURRIDO EN QUEJA

**PROCEDENCIA** : T.S.D.J.

**CIUDAD** : SANTIAGO DE CHILE

**SUJETOS** :

DEMANDADO GOMEZ VDA. DE SERNA, SOLEDAD; Y HEREDEROS INDETERMINADOS DE OBDULIO SERNA.

DEMANDANTE CARDENAS SERNA, OMAR; JOSE OLIVER, OBEID, OMAIRA Y MARIA OLERY CARDENAS SERNA, LEONEL, ORLANDO, MARIA DORIS, ANCISAR, HECTOR, LUIS ALFONSO Y EMMA LOPEZ SERNA, JOSE LÚBIER Y

**JOSÉ OSCAR MOLINA SERNA.**

**PROCESO** : 005213

**PUBLICADA** : Si

**DETALLE PUB.** : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470

**FUENTE FORMAL** : C. de P.C. Art.: 366, 370, ibídem.

**PRUEBA CONDUCTENTE/ PRUEBA PERTINENTE**

**PRUEBA SUPERFLUA** .....Pag. 799

Alcance de las expresiones "condiscordia de la prueba", "pertinencia de la prueba" y "prueba superflua".

**AUTO DE SUPLICA (320)**

**FECHA** : 20/10/1994

**DECISION** : MANTIENE AUTO RECURRIDO EN SUPLICA

**PROCEDENCIA** : Jco. 12 Hm. 5o. Pco. Fia

**CIUDAD** : Stk. Bta. Tunja

**SUJETOS** :

**JUICIO DE SUCESORIO DE RAFAEL MORENO SANDOVAL** .....

**PROCESO** : 005024

**PUBLICADA** : Si

**DETALLE PUB.** : 2o. SEMESTRE-4o. TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 Pág. : Extracto: 166

**CONFLICTO ESPECIAL DE COMPETENCIA/ SUCESION** .....Pag. 803

Aplicación de la regla No. 14 del art. 73 del C. de P.C., para determinar la competencia de los asuntos en el caso del adelantamiento de dos juicios de sucesión del mismo causante.

**AUTO DE SUPLICA (320)**

**FECHA** : 20/10/1994

**DECISION** : MANTIENE AUTO RECURRIDO EN SUPLICA

**PROCEDENCIA** : Jco. 12 Hm. 5o. Pco. Fia

**CIUDAD** : Stk. Bta. Tunja

**SUJETOS** :

**JUICIO DE SUCESORIO DE RAFAEL MORENO SANDOVAL** .....

**PROCESO** : 005024

**PUBLICADA** : Si

**DETALLE PUB.** : 2o. SEMESTRE-4o. TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 Pág. : Extracto: 166

**FUENTE FORMAL** : C. de P.C. Art.: 22 Numeral: 14; 624 ibídem.

21/10/1994

**TESTIMONIO SOSPECHOSO/**

**VALORACION PROBATORIA** .....Pag. 803

1) Dada la condición humana, el error es cuestión constante y normal en el testimonio.

2) Distinción del tratamiento dado por el legislador a la valoración del testimonio sospechoso en el régimen tarifario de pruebas y el de apreciación científica de las mismas.  
Igual sentido: CCXVI, pág. 21

3) El testimonio sospechoso debe analizarse de cara a los demás medios de convicción.

PONENTE : Rafael Romero Sierra  
SENTENCIA DE CASACIÓN (127)  
FECHA : 21/10/1994  
DECISION : NO CASA  
PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
CIUDAD : SAN JUAN DE PASTO  
SUJETOS :  
DEMANDADO : MEJIA MEJIA, VICENTE GILBERTO  
DEMANDANTE : TREJO QUISTANCHALA, DORA ZULIEMA, representada por Clementina Quistanchala.  
INTERPUESTO POR : DEFENSOR DE FAMILIA  
PROCESO : 004323  
PUBLICADA : Si  
DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-3er.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 Extracto: 167  
FUENTE FORMAL : C. Judicial Art.: 672; C. de P.C. Art.: 217.

**ERROR DE HECHO** ..... Pag. 803

El error de hecho en la apreciación de las pruebas que conduce a la violación de la ley sustantiva y que permite la casación de un fallo, tiene que ser manifiesto.  
Igual sentido: LXXXVII, p. 972

PONENTE : Rafael Romero Sierra  
SENTENCIA DE CASACION (127)  
FECHA : 21/10/1994  
DECISION : NO CASA  
PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
CIUDAD : SAN JUAN DE PASTO  
SUJETOS :  
DEMANDADO : MEJIA MEJIA, VICENTE GILBERTO  
DEMANDANTE : TREJO QUISTANCHALA, DORA ZULIEMA, representada por Clementina Quistanchala.  
INTERPUESTO POR : DEFENSOR DE FAMILIA  
PROCESO : 004323  
PUBLICADA : Si  
DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-3er.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 Pág.: Extracto: 167  
FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 368 Numeral: 1.

**PRUEBA ANTROPOMERENDOBIOLOGICA/**



**PRESUNCION DE PATERNIDAD** .....Pag. 803

El exámen antroponorendabiológico, no constituye motivo autónomo o causal independiente que dé lugar a presumir la paternidad extramatrimonial y, por ende, a declararla judicialmente con apoyo en éste único medio de prueba.

Igual sentido: Cas. Civ. de 24 de noviembre de 1987, sentencia No. 448.

PONENTE : Rafael Romero Sierra  
 SENTENCIA DE CASACION (127)  
 FECHA : 21/10/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : SAN JUAN DE PASTO  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : MELIA MEJIA, VICENTE GILBERTO  
 DEMANDANTE : TREJO QUISTANCHALA, DORA ZULEIMA, representada por Clementina Quistanchala.  
 INTERPUESTO POR : DEFENSOR DE FAMILIA  
 PROCESO : 004323  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-3er.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 Extracto: 167

24/10/1994

**VIOLACION NORMA SUSTANCIAL-Vía Directa e Indirecta** .....Pag. 818

La violación directa se da independientemente de todo error en la estimación de los hechos, o sea, sin consideración a los medios de convicción que haya tenido en cuenta el sentenciador en su juicio; por el contrario, la indirecta tiene lugar cuando el fallador deja de aplicar una norma que regula el caso o hace actuar una que le es extraña, esto por efecto de haber incurrido en errores en la estimación de las pruebas.

Igual sentido: Casación Civil de 7 de diciembre de 1990, sin publicar; G. J. Tomo CXLVI, pág. 60; Casación Civil de 22 de noviembre de 1993, sin publicar.

PONENTE : Carlos Eschán Jaramillo Schloss  
 SENTENCIA (128)  
 FECHA : 24/10/1992  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : RILEDA MERCHAN, MARTHA ESPERANZA  
 DEMANDANTE : VACA AVILA, ALEGINO  
 INTERPUESTO POR : Parte demandante  
 PROCESO : 004352  
 PUBLICADA : Si

DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE; Tomo: CCXXXI Número: 2470  
FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 368 Numeral.: 1.

### CONTRATO BANCARIO/ CUENTA CORRIENTE

#### BANCARIA/ CHEQUE/ PRINCIPIO DE LA

#### RESPONSABILIDAD DE EMPRESA .....Pag. 830

1) Responsabilidad del Banco con el cuentacorrentista por el pago de un cheque falso. Excepción.

2) Ejercicio de la banca de depósito equiparado al de una empresa comercial. Principio de la responsabilidad de la empresa

Igual sentido: G. J. Tomo CLII, pág. 526; G. J. Num. 1943, pág. 73

PONENTE : Carlos Esteban Jaramillo Schloss  
SENTENCIA (129)  
FECHA : 24/10/1994  
DECISIÓN : CASA  
PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
CIUDAD : SANTIAGO DE CALI  
SUJETOS :  
DEMANDADO : Banco del Estado  
DEMANDANTE : Soc. Comercializadora El Esfuerzo S.A.  
INTERPUESTO POR : Parte demandada  
PROCESO : 004311  
PUBLICADA : Si  
DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE 3er.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 Pág.: Extracto: 169  
FUENTE FORMAL : C. de Co. Art.: 1391, 732; LEY Num.: 46 Año: 1923.

#### HIPOTECA/ REGISTRO PUBLICO .....Pag. 818

1) Aunque se haya pagado la obligación principal, la hipoteca no desaparece del todo hasta tanto no se agoten las formalidades impuestas por la ley para que ese resultado se produzca

2) Qué atribución desempeña el acreedor y cuál facultad puede ejercitar el deudor respecto de las formalidades requeridas para la cancelación de la hipoteca.

3) Finalidades que cumple la atribución patrimonial de garantía del registro de creación y cancelación de la hipoteca en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al bien sobre el cual recae y en favor del acreedor.

PONENTE : Carlos Esteban Jaramillo Schloss  
SENTENCIA DE CASACION (128)  
FECHA : 24/10/1994  
DECISIÓN : NO CASA

PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C.  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : RUEDA MERCHAN, MARTHA ESPERANZA  
 DEMANDANTE : YACA AVILA, ALEGINO  
 INTERPUESTO POR : Parte demandante  
 PROCESO : 004352  
 PUBLICADA : Si  
 OFICIALE PUB. : 2o.SEMESTRE-4o.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número:  
 2470 Pág.: Extracto: 168  
 FUENTE FORMAL : C.C. Art.: 2435, 2457; DECRETO Num.: 960 Año: 1970  
 Art.: 49.

25/10/1994

**PERJUICIO-Legitimación / RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL-  
 Legitimación / MATRIMONIO/ TERCERO RESPONSABLE / UNION MARITAL  
 DE HECHO/ FAMILIA. ....Pag. 843**

1) El reclamante del resarcimiento debe tener legitimación activa para depreciar la condena al responsable, entendiéndose que tiene legitimación en cuanto se le vulnera o lesiona un derecho por existir norma jurídica que le garantiza una facultad de exigencia de satisfacción de un comportamiento o de una prestación de la que se ve privada por causa del hecho dñoso.

Igual sentido: sentencia de Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia del 8 de abril de 1960 (G. J. T. XCII, pág. 771).

2) Legitimación del cónyuge sobreviviente para reclamar del tercero responsable el resarcimiento del daño padecido por la muerte de su consorte.

3) Tratamiento dado en el derecho comparado, en la legislación nacional y en la jurisprudencia nacional respecto de la posibilidad de reconocimiento del derecho del concubino a reclamar del otro ciertos comportamientos o prestaciones. Trascendencia de la unión marital de hecho.

Igual sentido: Sentencia del 23 de marzo de 1985 del Tribunal Supremo Español; Sentencia del 15 de septiembre de 1948, Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, G. J. LXIV, pág. 632; sentencias del 11 de noviembre de 1992 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal; Sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera del 29 de abril de 1980 - Exp.: No. 2306, del 29 de noviembre de 1991 - Exp. 6487 y 27 de enero de 1994 - Exp. 7955; Sala de Revisión de Tutela de la Corte Constitucional, sentencias del 12 de agosto de 1993 (T. 326, no publicada) y del 10 de noviembre del mismo año (T.517 N.P.) y sentencia del 8 de junio de 1993 (T. 212 N.P.) de la misma corporación; Sentencia de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia del 8 de abril de 1960 (G. J.T. XCI, pág. 771).

4) La Carta protege la familia extramarital en cuanto tiene las características de la familia matrimonial, pudiendo afirmarse que para serlo solamente faltaría el vínculo conyugal.

5) No es relevante el vínculo de parentesco o conyugal el factor determinante de la legitimación activa para reclamar la indemnización. Supuestos necesarios para configurar dicho derecho.

PONENTE : Eduardo García Samiento  
 SENTENCIA SUSTITUTIVA DE CASACIÓN (130)  
 FECHA : 25/10/1994  
 DECISION : CONFIRMA PARCIALMENTE SENTENCIA DEL  
 J.2o.CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN  
 PROCEDENCIA : T.S.DJ.  
 CIUDAD : MEDELLIN  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS : MEJIA GIL, JOSE LIBORIO  
 TORO RETANCUR, LUIS EDUARDO y la SOC. COLOMBIANA DE DISTRIBU-  
 CION LTDA.  
 DEMANDANTES : AVILA LOPEZ, RITO ANTONIO; NUÑEZ ARCE, NUMAR  
 OBEIMAR; RETANCUR MESA, ALBERTO IVAN; SERRANO, MARLENY en nom-  
 bre propio y en representación de los menores BARBARA, MARTHA CECILIA Y  
 OMBIR YESID NUÑEZ SERRANO, ESTHER JULIA CASTILLO ORJUELA en nombre  
 propio y en representación de los menores DIEGO FERNANDO, CARLOS ENRIQUE y  
 JAVIER NUÑEZ CASTILLO.  
 PROCESO : 003900  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 Extracto:  
 170  
 FUENTE FORMAL : C.C. Art.: 2341; C.FEJA.BOLIVIA Art.: 159 ; C.C. PERUA-  
 NO Art.: 369 ; C.C.ESPAÑOL Art.: 1902; LEY Num.: 90 Año: 1946 Art.: 54; LEY Num.:  
 90 Año: 1946 Art.: 55; LEY Num.: 100 Año: 1993 Art.: 47; LEY Num.: 100 Año: 1993  
 Art.: 74; LEY Num.: 100 Año: 1993 Art.: 163; C.C. Art.: 329; LEY Num.: 54 Año: 1990;  
 C.N. Art.: 42.

## RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL.

Presupuestos/ CULPA / RESPONSABILIDAD

EXTRA CONTRACTUAL-Actividad Peligrosa / DAÑO .....Pag. 843

- 1) Presupuestos que dan lugar a configurar la responsabilidad civil por culpa aquiliana.
- 2) Concepto de culpa. Culpa causada en actividades peligrosas: Distinción entre la culpa concurrente y la culpa exclusiva de la víctima.
- 3) Concepto de daño. El daño se extiende no sólo a las personas que dependían de la víctima sino también a los bienes.
- 4) Respecto del daño causado con una actividad peligrosa por la ley se presume la culpabilidad no sólo del conductor sino del dueño y empresario de la cosa con la cual se ocasionó el perjuicio.

Igual sentido: G. J., t. CXI-II, pág. 188. Sent. del 18 de mayo de 1972

PONENTE : Eduardo García Sarmiento  
 SENTENCIA SUSTITUTIVA DE CASACION (130)  
 FECHA : 25/10/1994  
 DECISION : CONFIRMA PARCIALMENTE SENTENCIA DEL  
 12o.CIVIL CIRCUITO DE MEDELLIN  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : MEDELLIN  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS : MEJIA GIL, JOSE LIBORIO  
 TORO BETANCUR, LUIS EDUARDO y la SOC. COLOMBIANA DE DISTRIBUCION LTDA.  
 DEMANDANTES : AVILA LOPEZ, RITO ANTONIO; NUÑEZ ARCE, NUMAR  
 OBEIMAR; BETANCUR MESA, ALBERTO IVAN; SERRANO, MARLENY en nombre propio y en representación de los menores BARBARA, MARTEA CECILIA Y  
 OBER YESID NUÑEZ SERRANO, ESTHER JULIA CASTILLO ORJUELA en nombre propio y en representación de los menores DIEGO FERNANDO, CARLOS ENRIQUE y  
 JAVIER NUÑEZ CASTILLO.  
 PROCESO : 003000  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-4o.TRIMESTRE. Tomo: CCXXXI. Número:  
 2470 Pág. : Extracto: 170  
 FUENTE FORMAL : C.C. Art.: 2341, 2356 ibidem.

#### **MENOR/ CAPACIDAD LABORAL/ PERJUICIO/ DAÑO .....Pag. 848**

1) Cuando hay menores con capacidad laboral futura, la jurisprudencia nacional, ha optado por indemnizarlos hasta el día en que estén en condiciones de obtener empleo y si no hay pruebas al respecto se presume que el auxilio se habría prestado hasta cuando éstos cumplieran 18 años.

Igual sentido: 2 de julio de 1968, Anales, T. LXXV, pág. 324; 27 de marzo de 1981, Anales, T.C., pág. 403.

2) Es muy difícil hallar un equivalente exacto entre el monto de la indemnización y el daño.

Igual sentido: G. J. T. XCVI, pág. 690

PONENTE : Eduardo García Sarmiento  
 SENTENCIA SUSTITUTIVA DE CASACION (130)  
 FECHA : 25/10/1994  
 DECISION : CONFIRMA PARCIALMENTE SENTENCIA DEL  
 12o.CIVIL CIRCUITO DE MEDELLIN  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : MEDELLIN  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS : MEJIA GIL, JOSE LIBORIO

TORO BETANCUR, LUIS EDUARDO y la SOC. COLOMBIANA DE DISTRIBUCION LTDA.

DEMANDANTES : AVILA LOPEZ, RITO ANTONIO; NUÑEZ ARCE, NUMAR OBEIMAR; BETANCUR MESA, ALBERTO IVAN; SERRANO, MARLENY en nombre propio y en representación de los menores BARBARA, MARTHA CECILIA Y OBER YESID NUÑEZ SERRANO; ESTHER JULIA CASTILLO ORJUELA en nombre propio y en representación de los menores DIEGO FERNANDO, CARLOS ENRIQUE y JAVIER NUÑEZ CASTILLO.

PROCESO : 003000

PUBLICADA : Si

DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-3er.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 Pág. : Extracto: 170

**DICTAMEN PERICIAL** .....Pag. 845

¿Cuándo se considera que existe un dictamen pericial fundamentado?

PONENTE : Eduardo García Sarmiento

SENTENCIA SUSTITUTIVA DE CASACION (130)

FECHA : 25/10/1994

DECISION : CONFIRMA PARCIALMENTE SENTENCIA DEL J.2o.CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN

PROCEDENCIA : T.S.D.J.

CIUDAD : MEDELLIN

SUJETOS :

DEMANDADOS : MEJIA GIL, JOSE LIBORIO

TORO BETANCUR, LUIS EDUARDO y la SOC.COLOMBIANA DE DISTRIBUCION LTDA.

DEMANDANTES : AVILA LOPEZ, RITO ANTONIO; NUÑEZ ARCE, NUMAR OBEIMAR; BETANCUR MESA, ALBERTO IVAN; SERRANO, MARLENY en nombre propio y en representación de los menores BARBARA, MARTHA CECILIA Y OBER YESID NUÑEZ SERRANO; ESTHER JULIA CASTILLO ORJUELA en nombre propio y en representación de los menores DIEGO FERNANDO, CARLOS ENRIQUE y JAVIER NUÑEZ CASTILLO.

PROCESO : 003000

PUBLICADA : Si

DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-3er.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 Pág. : Extracto: 170

**DINERO/ DAÑO EMERGENTE/**

**EQUIDAD/ INTERES LEGAL/ ANALOGIA** .....Pag. 845

Tratándose de sumas de dinero, como daño emergente que no esté demostrada la inversión que podría dársele, la equidad impone calcular como rendimiento que el dinero habría podido producir, el mínimo señalado por la ley, esto es el interés del 6 % anual, conforme con el artículo 1617 del Código Civil, aplicable para el efecto por analogía.

Igual sentido: Sentencias del 10. de junio de 1957 (G. J.T. LXXV, pág. 588), del 8 de julio de 1964 (G. J.T. CVIII, pág. 296) y del 5 de noviembre de 1964 (G. J., T. CIX, pág. 542) dictadas por la Sala de Negocios Generales.

PONENTE : Eduardo García Sarmiento  
 SENTENCIA SUSTITUTIVA DE CASACION (130)  
 FECHA : 25/10/1994  
 DECISION : CONFIRMA PARCIALMENTE SENTENCIA DEL  
 J.2o.CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : MEDELLIN  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS : MEJIA GIL, JOSE LIBORIO  
 TORO BETANCUR, LUIS EDUARDO y la SOC.COLOMBIANA DE DISTRIBUCION  
 LTDA.  
 DEMANDANTES : JAVILA LOPEZ, RITO ANTONIO; NUÑEZ ARCE, NUMAR  
 OBHIMAR; BETANCUR MESA, ALBERTO IVAN; SERRANO, MARLENY en nom-  
 bre propio y en representación de los menores BARBARA, MARTHA CECILIA Y  
 OBER YESID NUÑEZ SERRANO; ESTHER JULIA CASTILLO ORJUELA en nombre  
 propio y en representación de los menores DIEGO FERNANDO, CARLOS ENRIQUE y  
 JAVIER NUÑEZ CASTILLO.  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-3er.TRIMESTRE, Tomo: CCXXXI Número:  
 2470 Pág. : Extracto: 170  
 FUENTE FORMAL : C.C. Art. 1617.

PERJUICIO MORAL-Prueba .....Pag. 845

En lo que atañe a los perjuicios morales, no es suficiente demostrar un vínculo determina-  
 do con la persona de quien se decía económicamente, por ejemplo cónyuge, compaño-  
 ro permanente, padres e hijos, sino que es necesario probar por lo menos con hechos indi-  
 ciatarios que realmente existía una situación afectiva, sentimental, moral, de tal intensidad,  
 que al producirse la muerte esa situación resulta gravemente afectada y debía presumirse  
 que causa una aflicción.

Igual sentido: S. 28 febrero de 1990

PONENTE : Eduardo García Sarmiento  
 SENTENCIA SUSTITUTIVA DE CASACION (130)  
 FECHA : 25/10/1994  
 DECISION : CONFIRMA PARCIALMENTE SENTENCIA DEL  
 J.2o.CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : MEDELLIN  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS : MEJIA GIL, JOSE LIBORIO  
 TORO BETANCUR, LUIS EDUARDO y la SOC.COLOMBIANA DE DISTRIBUCION  
 LTDA.



**DEMANDANTES** : AVILA LOPEZ, RITO ANTONIO; NUÑEZ ARCE, NUMAR OBEIMAR; BETANCUR MESA, ALBERTO IVAN; SERRANO, MARLENY en nombre propio y en representación de los menores BARBARA, MARTHA CECILIA Y OBER YESID NUÑEZ SERRANO; ESTHER JULIA CASTILLO ORJUELA en nombre propio y en representación de los menores DIEGO FERNANDO, CARLOS ENRIQUE y JAVIER NUÑEZ CASTILLO.

**PROCESO** : 003000

**PUBLICADA** : Si

**DETALLE PUB.** : 2o.SEMESTRE-3er.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 Extracto: 170

#### **AFILIACION / VEHICULO**

**AUTOMOTOR / RESPONSABILIDAD** .....Pag. 846

El solo hecho de estar afiliado un vehículo a determinada sociedad, implica que ésta en principio soporta alguna responsabilidad y tenga algún control sobre el vehículo.

Igual sentido: CLJ., 73; sentencia del 1o. de febrero de 1991

**PONENTE** : Eduardo García Sarmiento

**SENTENCIA SUSTITUTIVA DE CASACION (130)**

**FECHA** : 25/10/1994

**DECISION** : CONFIRMA PARCIALMENTE SENTENCIA DEL J.2o.CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN

**PROCEDENCIA** : T.S.D.J.

**CIUDAD** : MEDELLIN

**SUJETOS** :

**DEMANDADOS** : MEJIA GIL, JOSE LIBORIO

TORO BETANCUR, LUIS EDUARDO y la SOC.COLOMBIANA DE DISTRIBUCION LTDA.

**DEMANDANTES** : AVILA LOPEZ, RITO ANTONIO; NUÑEZ ARCE, NUMAR OBEIMAR; BETANCUR MESA, ALBERTO IVAN; SERRANO, MARLENY en nombre propio y en representación de los menores BARBARA, MARTHA CECILIA Y OBER YESID NUÑEZ SERRANO; ESTHER JULIA CASTILLO ORJUELA en nombre propio y en representación de los menores DIEGO FERNANDO, CARLOS ENRIQUE y JAVIER NUÑEZ CASTILLO.

**PROCESO** : 003000

**PUBLICADA** : Si

**DETALLE PUB.** : 2o.SEMESTRE-3er.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470-Pág. : Extracto: 170

**TRANSPORTE** .....Pag. 846

Las empresas de transporte en principio gozan de autonomía para seleccionar el personal de conductores.

**PONENTE** : Eduardo García Sarmiento

**SENTENCIA SUSTITUTIVA DE CASACION (130)**

**FECHA** : 25/10/1994

DECISION : CONFIRMA PARCIALMENTE SENTENCIA DEL  
J.2o.CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN  
PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
CIUDAD : MEDELLIN  
SUJETOS :  
DEMANDADOS : NUÑEZ CASTILLO, JAVIER (menor)  
DEMANDANTES : AVILA LOPEZ, RITO ANTONIO  
NUÑEZ ARCE, NUMAR OBEIMAR; BETANCUR MESA, ALBERTO IVAN;  
SERRANO, MARLENY; NUÑEZ SERRANO, BARBARA (menor); NUÑEZ SERRANO,  
MARTHA CECILIA (menor); NUÑEZ SERRANO, OBER YESID (menor); CASTILLO  
ORFUELA, ESTHER JULIA; NUÑEZ CASTILLO, DIEGO FERNANDO (menor);  
NUÑEZ CASTILLO, CARLOS ENRIQUE (menor).  
PROCESO : 003000  
PUBLICADA : Si  
DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-3er.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número:  
2470 Pág. : Extracto: 170  
FUENTE FORMAL : LEY Núm.: 15 Año: 1959.

#### DEBER DEL JUZGADOR /

PRUEBAS-Valoración en Conjunto .....Pag. 846

El juzgador tiene que valorar en conjunto las pruebas.

PONENTE : Eduardo García Sariniano  
SENTENCIA SUSTITUTIVA DE CASACION (130)  
FECHA : 25/10/1994  
DECISION : CONFIRMA PARCIALMENTE SENTENCIA DEL  
J.2o.CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN  
PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
CIUDAD : MEDELLIN  
SUJETOS :  
DEMANDADOS : MEJIA GIL, JOSE LIBORIO; TORO BETANCUR, LUIS  
EDUARDO; SOC. COLOMBIANA DE DISTRIBUCION.  
DEMANDANTES : AVILA LOPEZ, RITO ANTONIO; NUÑEZ ARCE, NUMAR  
OBEIMAR; BETANCUR MESA, ALBERTO IVAN; SERRANO, MARLENY; NUÑEZ  
SERRANO, BARBARA (menor); NUÑEZ SERRANO, MARTHA CECILIA (menor);  
NUÑEZ SERRANO, OBER YESID(menor); CASTILLO ORFUELA, ESTHER  
JULIA; NUÑEZ CASTILLO, DIEGO FERNANDO (menor); NUÑEZ CASTILLO,  
CARLOS ENRIQUE (menor); NUÑEZ CASTILLO, JAVIER (menor).  
PROCESO : 003000  
PUBLICADA : Si  
DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-3er.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número:  
2470 Pág. : Extracto: 170

27/10/1994

RETIRO DE LA DEMANDA/ REVISIÓN-Improcedencia .....Pag. 907

Concepto de "retiro de la demanda". Improcedencia de éste, respecto del recurso de revisión.

Igual sentido: CXXXIV, 10

**PONENTE** : Rafael Romero Sierra (solo)  
**AUTO DE REVISION (325)**  
**FECHA** : 27/10/1994  
**DECISION** : SE NIEGA SOLICITUD  
**PROCEDENCIA** : T.S.D.J.  
**CIUDAD** : IBAGUE  
**SUJETOS** :  
**DEMANDADO** : ORTIZ DE ROSETO, NINI  
**DEMANDANTE** : GUZMAN DURAN, YESID  
**INTERPUESTO POR** : La demandada  
**PROCESO** : 004756  
**PUBLICADA** : Si  
**DETALLE PUB.** : 2o.SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 Extracto: 172  
**FUENTE FORMAL** : C. de P.C. Art.: 75, 88, 340, 341, 347, 383 ibidem.

**CASACION - Interés para**

**Recurrir / CASACION-Justiprecio** ..... Pag. 902

1) Si el interés para recurrir no se encuentra definido, ya porque del contenido del fallo no puede precisarse, o porque éste contiene condenas que no corresponden a la época de la sentencia, es indispensable decretar la prueba pericial para establecerlo, y una vez determinado, el Tribunal resolver sobre la concesión del recurso extraordinario, de acuerdo con la cuantía vigente.

2) En el presente caso, el tribunal cedió equivocadamente el monto de dicho interés, al no tomar en cuenta otros conceptos complementarios de la pretensión

**PONENTE** : Nicolás Bechara Simancas  
**AUTO DE QUEJA (324)**  
**FECHA** : 27/10/1994  
**DECISION** : SE DISPONE DEVOLVER ACTUACION AL TRIBUNAL  
**PROCEDENCIA** : T.S.D.J.  
**CIUDAD** : SANTIAGO DE CALI  
**SUJETOS** :  
**DEMANDADO** : "FERROMOLQUES S.A."  
**DEMANDANTE** : LA FEDERAL COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.  
**INTERPUESTO POR** : Parte demandante.  
**PROCESO** : 005181  
**PUBLICADA** : Si  
**DETALLE PUB.** : 2o.SEMESTRE-4o.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 Pág.: Extracto: 171  
**NOTAS ACLARATORIAS** : SALVAN VOTO: Drs. Pedro Lafont Pianetta y Rafael Romero Sierra.  
**FUENTE FORMAL** : C. de P.C. Art.: 370.

**CASACION- Concesión (SALVAMENTO DE VOTO) / CASACION - Cuantía (SALVAMENTO DE VOTO) / CASACION - Interés para Recurrir (SALVAMENTO DE VOTO) .....Pag. 905**

Está mal denegada la concesión del recurso de casación, en la medida en que desde el punto de la cuantía del interés para recurrir, la resolución desfavorable para la parte actora, contenida en la sentencia recurrida, supera el monto de la cifra requerida para tal efecto que en sentir de los magistrados que salvan voto, equivale a \$22.000.000,00.

**PONENTE** : Nicolás Bechara Simancas  
**AUTO DE CASACION (324)**  
**FECHA** : 27/10/1994  
**DECISION** : DEVOLVER ACTUACION AL TRIBUNAL  
**PROCEDENCIA** : T.S.D.J.  
**CIUDAD** : SANTIAGO DE CALI  
**SUJETOS** :  
**DEMANDADO** : "TERROMOLQUES S.A."  
**DEMANDANTE**: LA FEDERAL COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.  
**INTERPUESTO POR** : Parte demandante.  
**PROCESO** : 005181  
**PUBLICADA** : Si  
**DETALLE PLB.** : 2o.SEMESTRE 4o.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 Pág.  
**NOTAS ACLARATORIAS** : : SALVAN VOTO: Drs. Pedro Lafont Planeta y Rafael Romero Sierra.

31/10/1994

**RESTITUCIONES MUTUAS/ NULIDAD SUSTANCIAL/ ACTO JURIDICO/ CONTRATO/ CORRECCION MONETARIA .....Pag. 911**

En tratándose de restituciones mutuas, aún de oficio, deben ser ordenadas como consecuencia de la declaratoria de nulidad de un acto o contrato. El juzgador también de oficio, debe disponer la revalorización de las sumas de dinero a reintegrarse por razón de las mismas.

**PONENTE** : Héctor Marín Naranjo  
**SENTENCIA (132)**  
**FECHA** : 31/10/1994  
**DECISION** : NO CASA  
**PROCEDENCIA** : T.S.D.J.  
**CIUDAD** : MEDELLIN  
**SUJETOS** :  
**DEMANDADOS** : GONZALEZ, PEDRO LUIS; DISTRIBUIDORA DE CONFITES LTDA; ESCOBAR, JAIME; SANTAMARÍA DE ESCOBAR, ROSA ELENA.  
**DEMANDANTES**: HURTADO SALDARRIAGA, FABIO; SALAZAR ZULUAGA, JAIME.

INTERPUESTO POR : Parte demandante  
 PROCESO : 003868  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE. Tomo: CCXXXI Número: 2470

**INCONGRUENCIA/ ERROR IN PROCEDENDO/ ERROR DE HECHO/ INTER-  
 PRETACION DE LA DEMANDA .....Pag. 911**

1) Cuándo incurre el juzgador en incongruencia?

2) Diferencia entre el error in procedendo, tipificador de la incongruencia, y el error de hecho en que se puede caer al apreciar la demanda, propio de la causal primera de casación.

PONENTE : Héctor Marín Naranjo  
 SENTENCIA DE CASACION (132)  
 FECHA : 31/10/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : MEDELLIN  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS : GONZALEZ, PEDRO LUIS; DISTRIBUIDORA DE CONFITES LTDA; ESCOBAR, JAIME; SANTAMARIA DE ESCOBAR, ROSA ELENA.  
 DEMANDANTES: HURTADO SALDARRIAGA, FABIO; SALAZAR ZULUAGA, JAIME  
 INTERPUESTO POR : Parte demandante  
 PROCESO : 003868  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE. Tomo: CCXXXI Número: 2470  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 305 ; Art.: 368 Numeral.: 2.

**VIOLACION NORMA SUSTANCIAL/**

**PAGO DE LO NO DEBIDO .....Pag. 911**

Desacuerdo del juzgador en su juicio, susceptible a la luz de la causal primera de casación, respecto de la aplicabilidad o alcance del art. 2318 del C.C.

PONENTE : Héctor Marín Naranjo  
 SENTENCIA DE CASACION (132)  
 FECHA : 31/10/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : MEDELLIN  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS : GONZALEZ, PEDRO LUIS; DISTRIBUIDORA DE CONFITES LTDA; ESCOBAR, JAIME; SANTAMARIA DE ESCOBAR, ROSA ELENA.  
 DEMANDANTES: HURTADO SALDARRIAGA, FABIO; SALAZAR ZULUAGA, JAIME

INTERPUESTO POR : Parte demandante  
 PROCESO : 003868  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 FUENTE  
 FORMAL : C. C. Art: 2318 .

### CASACION-Cargos / TECNICA DE CASACION-

**Yuxtaposición de Argumentos** ..... Pag. 911  
 Contradicción de argumentos en los cargos —o el asunto queda gobernado por el art. 518 del C. de Co. y fue este transgredido por el tribunal, o se encuentra sujeto al artículo 2014 del C.C.-

PONENTE : Héctor Marín Naranjo  
 SENTENCIA DE CASACION (132)  
 FECHA : 31/10/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : MEDELLIN  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS : GONZALEZ, PEDRO LUIS; DISTRIBUIDORA DE CONFITES LTDA; ESCOBAR, JAIME; SANTAMARIA DE ESCOBAR, ROSA ELENA,  
 DEMANDANTES: HURTADO SALTARRIAGA, FABIO, SALAZAR ZULUAGA, JAIME  
 INTERPUESTO POR : Parte demandante  
 PROCESO : 003868  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 FUENTE  
 FORMAL : C. de Co. Art : 518; C.C. art.2014 .

### ARRENDAMIENTO-Renovación/ ESTABLECIMIENTO

**COMERCIAL/ INVUEBLE** ..... Pag. 912

El ejercicio del derecho a la renovación del contrato de arrendamiento en favor del arrendatario de inmueble ocupado con establecimiento comercial por no menos de dos años consecutivos, al igual que el de cualquiera otro, no es absoluto en el sentido de que su titular se lo puede imponer, sin más, al sujeto pasivo, u sea, al propietario del establecimiento,

PONENTE : Héctor Marín Naranjo  
 SENTENCIA DE CASACION (132)  
 FECHA : 31/10/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : MEDELLIN  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS: GONZALEZ, PEDRO LUIS; DISTRIBUIDORA DE CONFITES LTDA;  
 ESCOBAR, JAIME; SANTAMARIA DE ESCOBAR, ROSA ELENA

DEMANDANTES : HURTADO SALDARRIAGA, FABIO; SALAZAR ZULUAGA, JAIME.  
 INTERPUESTO POR Parte demandante  
 PROCESO : 003868  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470  
 FUENTE FORMAL : C. de Co. Art. 519.

**ERROR DE HECHO/INTERPRETACION****DE LA DEMANDA .....Pag. 912**

En el caso sub-judice, no se le atribuye al tribunal un trascendente error fáctico en el entendimiento de la demanda.

PONENTE : Héctor Marín Narango  
 SENTENCIA DE CASACION (132)  
 FECHA : 31/10/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : MEDELLIN  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS: GONZALEZ, PEDRO LUIS; DISTRIBUIDORA DE CONFITES LTDA; ESCOBAR, JAIME; SANTAMARIA DE ESCOBAR, ROSA ELENA.  
 DEMANDANTES: HURTADO SALDARRIAGA, FABIO; SALAZAR ZULUAGA, JAIME.  
 INTERPUESTO POR Parte demandante  
 DELITOS :  
 PROCESO : 003868  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470

**VIOLACION NORMA SUSTANCIAL-Via Directa .....Pag. 912**

La vía directa presupone que el impugnador no ha de disentir de los hechos según los vió el juzgador.

PONENTE : Héctor Marín Narango  
 SENTENCIA DE CASACION (132)  
 FECHA : 31/10/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : MEDELLIN  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS: GONZALEZ, PEDRO LUIS; DISTRIBUIDORA DE CONFITES LTDA; ESCOBAR, JAIME; SANTAMARIA DE ESCOBAR, ROSA ELENA.  
 DEMANDANTES: HURTADO SALDARRIAGA, FABIO; SALAZAR ZULUAGA, JAIME  
 INTERPUESTO POR Parte demandante



PROCESO : 003868  
 PUBLICADA : SI  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE. Tomo: CCXXXI Número: 2470

# TECNICA DE CASACION- Yuxtaposición

de Argumentos/ CASACION-Cargos .....Pag. 944

Incompatibilidad de argumentos presentados en los cargos.

PONENTE : Nicolás Bochara Simancas  
 SENTENCIA DE CASACION (133)  
 FECHA : 31/10/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : CUNDINAMARCA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS: Personas Indeterminadas  
 DEMANDANTE: ZAMUDIO DE MOLINA, ALCIRA.  
 INTERPUESTO POR: Parte demandante  
 PROCESO : 004306  
 PUBLICADA : SI  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE. Tomo: CCXXXI Número: 2470  
 FUENTE FORMAL : DECRETO Num.: 2651 Año: 1991 Art: 51; C.N. Art: trans. 5.

# PREScripción/ PERTENENCIA/ POSESION/ BIEN RURAL/ PRESUNCION LEGAL/ BIEN BALDIO/ CERTIFICADO DEL REGISTRADOR/ NACION/ OCUPACION .....Pag. 943

1) El fenómeno jurídico de la prescripción como acción y como excepción.

2) Fundamento de la acción de pertenencia. Condición de prescriptible que debe tener el bien objeto de la declaración de pertenencia

3) Si el actor ejerce posesión económica sobre el predio rural pretendido en usucapión, en ningún caso podrá exigírsele acreditar que ese bien "no es baldío" por haber salido del dominio del Estado y haber pasado a ser de propiedad privada.

4) Presunciones legales respecto de bienes baldíos que se establecen conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. a 4o. de la Ley 700 de 1936.

Igual sentido: Sentencia de 9 de marzo de 1939, G. J. XLVII, pág. 798; sentencias de 11 de agosto de 1943, G. J. LVI, pág. 46; y 15 de julio de 1952, G. J. LXXII, pág. 385; G. J. LXXXIII, pág. 74; reiterada en sentencia de 31 de julio de 1962, G. J. XCIX, pág. 172.

5) Con el certificado de registro inmobiliario se persigue únicamente la integración del litisconsorcio necesario, pero jamás que sirva de prueba de la calidad de propiedad privada que tiene el inmueble.

6) Quien por consiguiente, incorpora su trabajo a los baldíos de la Nación y los mejora con edificaciones, plantaciones o sementeras que acrecientan la riqueza pública, adquiere de inmediato el dominio del suelo, no por transferencia alguna, sino por el modo originario de la ocupación con que el ordenamiento protege y respalda al poseedor económico de tierras sin otro dueño que el Estado.

Igual sentido: sentencia de 2 de septiembre de 1964; G. J. CVIII, pág. 239.

PONENTE : Nicolás Bechara Simancas

SENTENCIA DE CASACION (133)

FECHA : 31/10/1994

DECISION : NO CASA

PROCEDENCIA : T.S.D.J.

CIUDAD : CUNDINAMARCA

SUJETOS :

DEMANDADOS : PERSONAS INDETERMINADAS

DEMANDANTE : ZAMUDIO, ALCIRA

INTERPUESTO POR : Parte demandante

PROCESO : 004306

PUBLICADA : Si

DETALLE PUB. : 2a. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 Extracto: 173

FUENTE FORMAL : LBY Num.: 126 Año: 1928 ; C. de P.C. Art.: 407; C.C. Art.: 2512 ; LBY Num.: 200 Año: 1936 Art.: 1, 2, 3 y 4; C.C. Art.: 762, 675.

#### DEMANDA DE RECONVENCION

( SENTENCIA SUSTITUTIVA ) / LITISCONSORCIO

NECESARIO (SENTENCIA SUSTITUTIVA) .....Pag. 961

Imprudencia de la demanda de reconvención, estando de por medio un litisconsorcio necesario.

PONENTE : Nicolás Bechara Simancas

SENTENCIA SUSTITUTIVA DE CASACION (134)

FECHA : 31/10/1994

DECISION : CONFIRMA PARCIALMENTE SENTENCIA DEL J. 13

CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTAFE DE BTA.

PROCEDENCIA : T.S.D.J.

CIUDAD : SANTAFE DE BOGOTA, D.C.

SUJETOS :

DEMANDADOS : MONROY, JOSE MANUEL; RODRIGUEZ SANCHEZ, SONIA.

DEMANDANTE: LINARES BEJARANO, LUIS EMIRO

INTERPUESTO POR: La parte demandante

PROCESO : 003759

PUBLICADA : Si

DETALLE PUB. : 2a.SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470

**EXCEPCION/NOVACION .....Pag. 961**

En el presente caso, no se abre paso a la excepción de "novación de la obligación", por cuanto la intención de las partes al introducir el otro sí del contrato no fue la de sustituir unas obligaciones por otras, sino tan solo la de modificar los plazos para el cumplimiento de las así adquiridas.

PONENTE : Nicolás Bechara Simancas  
 SENTENCIA SUSTITUTIVA DE CASACION (134)  
 FECHA : 31/10/1994  
 DECISION : CONFIRMA PARCIALMENTE SENTENCIA DEL J.13  
 CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA FE DE BOGOTA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : SANTA FE DE BOGOTA, D.C.  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS : MONROY, JOSE MANUEL; RODRIGUEZ SANCHEZ, SONIA.  
 DEMANDANTE: LINARES BEJARANO, LUIS EMIRO  
 PROCESO : 003759  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470  
 FUENTE FORMAL : C.C. Art. 1587.

**CONDICION RESOLUTORIA/ PROMESA DE COMPRAVENTA/ MORA/  
 CONTRATO BILATERAL/ ACCION RESOLUTORIA/  
 RESTITUCIONES MUTUAS .....Pag. 961**

1) Condición Resolutoria en el contrato de promesa de compraventa, de naturaleza bilateral.

2) El contratante demandado no está en mora cuando el actor no ha cumplido con sus obligaciones. Cuando ambos contratantes cargan las cargas recíprocas que les impone el acuerdo, se hace improcedente la resolución.

3) En qué eventos la mora del deudor, presupuesto de la resolución de los contratos bilaterales, toma cuerpo.

4) Efectos que generan la resolución del contrato de promesa de compraventa.

PONENTE : Nicolás Bechara Simancas  
 SENTENCIA SUSTITUTIVA DE CASACION (134)  
 FECHA : 31/10/1994  
 DECISION : CONFIRMA PARCIALMENTE SENTENCIA DEL J.13  
 CIVIL DEL CTO. SANTA FE DE BOGOTA, D.C.  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : SANTA FE DE BOGOTA, D.C.  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS : MONROY, JOSE MANUEL; RODRIGUEZ SANCHEZ, SONIA.  
 DEMANDANTE: LINARES BEJARANO, LUIS EMIRO

INTERPUESTO: parte demandante

PROCESO : 003759

PUBLICADA : Si

DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-3er.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número:

2470 Pág.: Extracto: 174

FUENTE FORMAL : C.C. An.; 1546; 1609, 1608; C. de P.C. Art.: 90 Inciso: 2 ibídem.,

03/11/1994

#### **EXCEPCIÓN PREVIA/ INEPTITUD DE LA DEMANDA .....Pag. 972**

Concepto y finalidad de las excepciones previas. Intención del legislador al consagrar el artículo 99, numeral 4o. del C. de P.C. En el presente caso, los documentos que echa de menos la parte demandada, no encuadran dentro de los motivos de que configuran ineptitud de la demanda.

PONENTE : Nicolás Bechara Simancas (Solo)

AUTO DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL (3346)

FECHA : 03/11/1994

DECISION : SE RECHAZA DE PLANO EXCEPCIÓN INVOCADA

SUJETOS :

DEMANDADOS : ARANGO OCAMPO, GUILLERMO, TRUJILLO BRAVO,

CARLOS TULIO

PROCESO : 005078

PUBLICADA : Si

DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE,4o.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número:

2470

FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 99 Numeral.: 4.

10/11/1994

#### **NULIDAD PROCESAL/ INTERRUPTIÓN PROCESAL/ APODERO-Enfermedad Grave / CARGA DE LA PRUEBA .....Pag. 974**

1) Supuestos para que se ante la actuación procesal cumplida a partir de la enfermedad del apoderado.

Igual sentido: auto del 26 de abril de 1991

2) Qué se entiende por "enfermedad grave".

Igual sentido: Autos del 26 de abril de 1991 y del 25 de noviembre de 1992

3) La carga de la prueba en los eventos de enfermedad grave es sobremanera exigente, por cuanto no basta acreditar el quebranto de salud, sino primordialmente que es grave.

PONENTE : Nicolás Bechara Simancas

AUTO DE INCIDENTE DE NULIDAD ( 343)

FECHA : 10/11/1994

DECISION : SE DENIEGA PETICION DE NULIDAD  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : GUTIÉRREZ LOAIZA, PEDRO JUAN  
 DEMANDANTES : ESCALLÓN DE MARTÍNEZ, INÉS Y ... HERNÁNDEZ  
 HERNÁNDEZ, RODRIGO  
 PROCESO : 005106  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE-4o. TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número:  
 2470 Pág. . Extracto: 175  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 168 Numeral.: 2; 140 Numeral.: 5.

11/11/1994

**SENTENCIA DESESTIMATORIA /  
 REVISION / COSTAS/ HONORARIOS**

**PROFESIONALES / PERJUICIOS-Regulación** ..... Pag. 979

1) Consecuencias procesales que comporta la sentencia desestimatoria del recurso de revisión.

2) Distinción entre la condena al pago de costas y la condena al pago de indemnización de perjuicios.

3) Imprudencia de la reclamación de honorarios profesionales al amparo de la condena al pago de perjuicios. Legalmente su valor forma parte integrante de las costas y, por tal razón, cualquier objeción a su cuantía debe formularse en la oportunidad señalada por la misma ley procesal para tal efecto.

Igual sentido: Autos de 4 de agosto de 1981 y 13 de mayo de 1988.

PONENTE : Rafael Romero Sierra  
 AUTO DE REVISION (347)  
 FECHA : 11/11/1994  
 DECISION : RECHAZA LIQUIDACION DE PERJUICIOS  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : CARTAGENA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS : PERSONAS INDETERMINADAS  
 DEMANDANTES : KELLY WILSON, ANTONIO y CUELLAR DE KELLY,  
 HERMELINDA  
 INTERPUESTO POR : JESUS EMILIO MORENO TRUJILLO.  
 PROCESO : 003865  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 Extracto:  
 176  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 393 Numeral.: 2 y 3.

16/11/1994

**DEMANDA - Rechazo / REPOSICION / APELACION .....Pag. 986**

1) Salvo disposición expresa que de modo categórico diga lo contrario, el auto que rechaza una demanda, directamente o por virtud del recurso de reposición interpuesto contra el que en un comienzo la admitió, es apelable. Los puntos nuevos a que alude el art. 348 del C. de P.C., incluyen por mandato legal, la revocación de la admisión inicial de la demanda para la parte desfavorecida, es decir, para la parte actora en el proceso. Fundamento doctrinal.

Similar sentido: providencia del 9 de junio de 1980, G. J. CLXVI, pág. 38.

**PONENTE** : Carlos Esteban Jaramillo Schloss  
**AUTO DE SUPPLICA (348)**  
**FECHA** : 16/11/1994  
**DECISION** : REVOCA AUTO  
**PROCEDENCIA** : T.S.D.J.  
**CIUDAD** : SANTA MARTA  
**SUJETOS** :  
**DEMANDADO** : PERSONAS INDETERMINADAS  
**DEMANDANTE** : C.I. PRODECO PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A.  
**INTERPUESTO POR** : CAMPO CAMPO, AUGUSTO  
**PROCESO** : 004033  
**PUBLICADA** : Si  
**DETALLE PUB.** : 2o.SEMESTRE-4o.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número:  
 2470 Extracto: 177  
**FUENTE FORMAL** : C. de P.C. Art.: 348 , 351, 352, 505 ibidem: DECRETO  
 Num.: 2282 Año: 1989

**SUPPLICA / REVISION-Rechazo**

**PONENTE** : Carlos Esteban Jaramillo Schloss  
**AUTO DE SUPPLICA (348)**  
**FECHA** : 16/11/1994  
**DECISION** : REVOCA AUTO  
**PROCEDENCIA** : T.S.D.J.  
**CIUDAD** : SANTA MARTA  
**SUJETOS** :  
**DEMANDADO** : PERSONAS INDETERMINADAS  
**DEMANDANTE** : C.I. PRODECO PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A.  
**INTERPUESTO POR** : CAMPO CAMPO, AUGUSTO  
**PROCESO** : 004033  
**PUBLICADA** : Si  
**DETALLE PUB.** : 2o.SEMESTRE-4o.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número:  
 2470 Extracto: 177  
**FUENTE FORMAL** : C. de P.C. Art. 363, 380.

17/11/1994

**LITISCONSORCIO NECESARIO/ SENTENCIA INHIBITORIA/  
NULIDAD PROCESAL-Principio / PRINCIPIO DE LA PROTECCION/  
NULIDAD PROCESAL-Legitimación/ CITACION/  
EMPLAZAMIENTO** .....Pag. 998

1) Cuando se presenta el litisconsorcio necesario?.

2) Sólo estando presente en el respectivo juicio la totalidad de los sujetos activos y pasivos de la relación sustancial, queda debida e íntegramente constituida desde el punto de vista subjetivo la relación jurídico procesal, y por lo mismo sólo cuando las cosas son así podrá el juez hacer el pronunciamiento de fondo demandado. En caso contrario debe limitarse a proferir fallo inhibitorio.

Igual sentido: G. J.CXXXIV, pág. 170

3) Fundamento de esta clase de litisconsorcio.

4) Si contrariando la inescindibilidad de la causa, el juzgador profiere fallo de mérito, cualquiera de los litisconsortes necesarios podrá impugnarlo en casación. Si lo hace por la causal quinta, la decisión debe haberle sido desfavorable.

5) Según el principio de la protección, en casación la nulidad por quién puede invocarse? Y en el evento de la falta de integración del litisconsorcio necesario en quién recae?

6) Por quién pueden ser invocadas en casación, las causales de nulidad consistentes en la ilegitimidad de personería de una de las partes, y en la falta de citación o emplazamiento de las personas que han debido ser llamadas al juicio?.

Igual sentido: Sentencia de 17 de marzo de 1967, no publicada

PONENTE : Nicolás Becerra Simancas

SENTENCIA DE CASACION (136)

FECHA : 17/11/1994

DECISION : NO CASA

PROCEDENCIA : T.S.D.J.

CIUDAD : SANTA ROSA DE VITERBO

SUJETOS :

DEMANDADO : ALVAREZ TORRES, ANA ISABEL.

DEMANDANTE : CARDENAS SOLER, ANA CELIA

INTERPUESTO POR : Parte demandante

PROCESO : 004389

PUBLICADA : Si

DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-4o.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número:

2470 Pág. : Extracto: 178

FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 368 Numeral.: 5, 140 num. 9.

18/11/1994



**CASACION - Cumplimiento Sentencia Recurrída /****CASACION - Copias .....Pag. 1031**

1) Distinción entre la filosofía del legislador de 1931 y el de 1970, respecto de los efectos del cumplimiento de la sentencia recurrída en casación,

2) La ley ha prescrito que, a menos de tratarse de una de las excepciones legales, o de oferta de prestación de la caución a que alude el art. 374 del C. de P.C., la interposición del recurso de casación no obstruye el cumplimiento de la sentencia, razón por la cual el recurrente siempre, de manera indefectible, debe suministrar lo indispensable para que se expidan las copias requeridas para los fines anotados, sea porque el tribunal las ordene, sea porque el propio recurrente de tal manera lo indique ante la omisión del sentenciador

**AUTO DE REPOSICIÓN (352)**

FECHA : 18/11/1994  
 DECISION : NO REVOCA AUTO  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : MONTERIA  
 DEMANDADO : Municipio de Montería  
 DEMANDANTE : Hawasly Dean, Felipe Manuel, en su propio nombre y en el de la sucesión de MIGUEL Y FELIPE HAWASLY MELUK.  
 PROCESO : 005205  
 PUBLICADA : Si  
 DEFALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-4o.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 ExL181  
 FUENTE FORMAL : C.C.A. Art. 177.

**PLAZO/EJECUCION/ SENTENCIA****CONTRA ENTIDADES PUBLICAS .....Pag. 1031**

El plazo previsto en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo suspende la ejecución forzada de la sentencia contra las entidades públicas, mas no afecta otras formas de cumplimiento de las mismas.

PONENTE : Héctor Marín Naranjo

**AUTO DE REPOSICIÓN (352)**

FECHA : 18/11/1994  
 DECISION : NO REVOCA AUTO  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : MONTERIA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Municipio de Montería  
 DEMANDANTE : Hawasly Dean, Felipe Manuel, en su propio nombre y en el de la sucesión de MIGUEL Y FELIPE HAWASLY MELUK.  
 DELITOS :  
 PROCESO : 005205  
 PUBLICADA : Si

DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE 4o.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 Ext. 181  
FUENTE FORMAL : C.C.A. Art. 177.

#### **CASACION-Inadmisión / CASACION-Cumplimiento**

**Sentencia Recurrida / CASACION-Copias .....Pag. 1025**

En el presente caso se inadmitió el recurso de casación por cuanto no se ofreció prestar caución para efectos de suspender el cumplimiento de la sentencia, ni suministró tempestivamente lo necesario para la expedición de las copias ordenadas por el Tribunal con miras a facilitar la ejecución del fallo, lo que quiere decir que llegó a esta Corporación en estado de deserción.

PONENTE : Héctor Marín Naranjo  
AUTO DE CASACION ( 351 )  
FECHA : 18/11/1994  
DECISION : INADMISIBLE Y DESIERTO RÉCURSO DE CASACION  
PROCEDENCIA : T.S.D.J. SANTA ROSA DE VITERBO  
PROCESO : 005236  
PUBLICADA : Si  
DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 FUENTE  
FORMAL : C. de P.C. Art.: 371 Inciso: 3, C. de P.C. Art.: 371 Inciso: 5.

#### **TERMINO LEGAL / CASACION-**

**Carga Procesal/CASACION-Copias .....Pag. 1025**

El art. 371 -inciso 3o.- del C. de P.C., confiere al recurrente un término de los denominados "legales", condición que lo hace perentorio e ininterrogable, término que tiene por objeto la atención de la carga de suministrar lo necesario para la expedición de las copias señaladas por el Tribunal.

PONENTE : Héctor Marín Naranjo  
AUTO DE CASACION (351 )  
FECHA : 18/11/1994  
DECISION : INADMISIBLE Y DESIERTO CASACION  
PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
CIUDAD : SANTA ROSA DE VITERBO  
SUJETOS :  
DEMANDADOS : ALFONSO, ANTONIO DE JESÚS; SOTELO CORTES, JUAN  
EVANGELISTA; SALAS DE CORTES, MARÍA ALICIA;  
DEMANDANTES: ULLOA LUENGAS, CARMENZA; ... LUENGAS DE ULLOA,  
MARÍA OTILIA; RIOS DE CURREA, ANA LILIA; ... MORALES DE SÁNCHEZ,  
ELVIA; VILLAMIL RODRÍGUEZ, JUAN ISIDRO.  
PROCESO : 005236  
PUBLICADA : Si  
DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-4o.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número:  
2470 Pág. : Extracto: 180  
FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 371 Inciso: 3, 118 ibídem.

**PROVIDENCIA JUDICIAL / EJECUTORIA ..... Pag. 1025**

La ejecutoria de la providencia que resuelve el recurso improcedentemente formulado no obstruye de ningún modo la firmeza de la decisión impugnada de una manera errónea.

PONENTE : Héctor Marín Naranjo  
 AUTO DE CASACION (351)  
 FECHA : 18/11/1994  
 DECISION : INADMISIÓN Y DESIERTO RECURSO DE CASACION  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : SANTA ROSA DE VITERBO  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO ALFONSO, ANTONIO DE JESÚS; SOTELO CORTES, JUAN EVANGELISTA; SALAS DE CORTES, MARÍA ALICIA  
 DEMANDANTES: ULLOA LUENGAS, CARMENZA; LUENGAS DE ULLOA, MARÍA OTILIA; RÍOS DE CURREA, ANA LILIA; MORALES DE SÁNCHEZ, ELVIA; VILLAMIL RODRÍGUEZ, JUAN ISIDRO.  
 PROCESO : 005236  
 PUBLICADA : SI  
 DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-4o.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 Extracto: 180  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art. 331.

**CASACION-Efectos ..... Pag. 1009**

No es potestad discrecional de la Corte, así como tampoco es materia entregada por el ordenamiento al poder de disposición de los litigantes, el transformar en "suspensivo" al efecto "devolutivo" que en la generalidad de los casos la ley le asigna al recurso de casación.

PONENTE : Carlos Escham Jaramillo Schloss  
 SENTENCIA DE CASACION (137)  
 FECHA : 18/11/1994  
 DECISION : SE INHIBE DE DECIDIR EN EL FONDO EL RECURSO DE CASACION  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : NEIVA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO TOVAR MORENO, ELICIO  
 DEMANDANTE RAMIREZ, YURANI, menor representada por DIEYSI RAMIREZ MOSQUERA.  
 INTERPUESTO POR Parte demandada  
 PROCESO : 004338  
 PUBLICADA : SI  
 DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-4o.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 Pag.: Extracto:  
 NOTAS ACLARATORIAS ..... : SALVAN VOTO: Nicolás Beehäm Simancas;

Pedro Lafont Planella .

FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 371.

**CASACION-Procedibilidad / CASACION-Admisión .....Pag. 1009**

1) Efectos asociados cuando no se satisfacen del modo que exige la ley, el cumplimiento de un conjunto de requisitos de procedibilidad del recurso de casación.

2) Cuando erradamente se declara admisible un recurso de casación el auto correspondiente no la obliga a tomar decisión alguna de fondo al estudiar los reparos hechos a la sentencia del Tribunal y darse cuenta cabal de la índole del pleito.

Igual sentido: Cas. Civ. de 20 de septiembre de 1994, sin publicar; G. Jts.LXX, pág. 2, 107 y 850; XC, pág. 330, LXXVI, Pág. 51, CXXXVIII, pág. 83, CLI pág. 38 y CLXXVI, pág. 103.

3) Distintas clases de requisitos de los que depende la viabilidad procesal del recurso de casación.

PONENTE : Carlos Esteban Jaramillo Schloss

SENTENCIA DE CASACION (137)

FECHA : 18/11/1994

DECISION : SE INHIBE DE DECIDIR EN EL FONDO EL RECURSO DE CASACION

PROCEDENCIA : T.S.D.J.

CIUDAD : NEIVA

SUJETOS :

DEMANDADO : TOVAR MORENO, ELICIO

DEMANDANTE : RAMIREZ, YURANI

INTERPUESTO POR : Parte demandada

PROCESO : 004338

PUBLICADA : Si

DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-4o TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 Pág.: Extracto: 179

NOTAS ACLARATORIAS ..... : SALVAN VOTO: Nicolás Bechara Simancas y

Pedro Lafont Planella .

FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 368, 371 ibídem.

**CASACION-Carga Procesal / CASACION-Deserción .....Pag. 1009**

La no satisfacción de la carga procesal -del art. 371 del C. de P.C.-, origina un motivo de deserción que además de producirse por el ministerio de la ley y no por obra de una declaración judicial, lleva consigo la ejecutoria de la sentencia.

Igual sentido: Auto de 20 de junio de 1977, sin publicar.

PONENTE : Carlos Esteban Jaramillo Schloss

SENTENCIA DE CASACION (137)

FECHA : 18/11/1994

DECISION : SE INHIBE DE DECIDIR EN EL FONDO EL RECURSO

DE CASACION  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : NEIVA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : TOVAR MORENO, ELICIO  
 DEMANDANTE : RAMIREZ, YURANI, menor representada por DEYSI RAMI-  
 REZ MOSQUERA.  
 INTERPUESTO POR : Parte demandada  
 PROCESO : 004338  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-4o.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número:  
 2470 Pág. : Extracto: 139  
 NOTAS ACLARATORIAS : SALVAN VOTO: Drs. Nicolás Buchara Simancas y Pedro  
 Lafont Pianetta.  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art. 371, 372 inc. 1.

**CASACION-Deserción (SALVAMENTO DE VOTO) .....Pag. 1018**

No encontrándose el recurso en estado de deserción el fallo ha debido ser de mérito o de fondo.

Providencias citadas: G. J. Tomo XCIX; p. 687; auto de 21 de febrero de 1989 Exp. 1698; sentencia del 20 de septiembre de 1994

PONENTE : Carlos Esteban Jaramillo Schloss  
 SENTENCIA DE CASACIÓN (S. 137)  
 FECHA : 18/11/1994  
 DECISION : SE INHIBE DE DECIDIR EN EL FONDO EL RECURSO  
 DE CASACION  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : NEIVA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : TOVAR MORENO, ELICIO  
 DEMANDANTE : RAMIREZ, YURANI, menor representada por DEYSI RAMI-  
 REZ MOSQUERA.  
 INTERPUESTO POR : Parte demandada  
 PROCESO : 004338  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-4o.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número:  
 2470 Pág. : Extracto: 179  
 NOTAS ACLARATORIAS: SALVAN VOTO: Nicolás Buchara Simancas y Pedro Lafont  
 Pianetta.  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. art. 372 inc. 3, 371, 374, 365, 373 inc. 3, 4 ibídem.

21/11/1994

**COMPETENCIA / CONSEJO SUPERIOR**

**DE LA JUDICATURA / CONFLICTO DE JURISDICCION .....Pag. 1037**

Competencia del Consejo Superior de la Judicatura, por intermedio de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria para dirimir los conflictos de jurisdicción. Ante la situación de hecho creada por la negativa reiterada de dicho organismo a hacerlo, la Corte ha venido desatando esos conflictos.

PONENTE: CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS  
 AUTO DE CONFLICTO DE JURISDICCION (353)  
 FECHA: 21/ 11/ 1994  
 DECISION: Jurisdicción de Familia corresponde conocimiento  
 PROCEDENCIA: Jdo. 6o. Civ. Cto.- 2o. Flia.  
 CIUDAD: Medellín  
 SUJETOS:  
 DEMANDADO: MARÍA GRACIELA CANO DE CANO Y OTRA  
 DEMANDANTE: CANO MUÑOZ GABRIEL DE JESÚS  
 PROCESO: 5252  
 PUBLICADA: Si  
 FUENTE FORMAL: art. 256 de la C.N. núm. 6; 234, 229 ibidem.

#### MATRIMONIO / JURISDICCION DE FAMILIA .....Pag. 1037

En el presente evento, la controversia es de naturaleza de las que indica el art. 5o. numeral 12 del decreto 2272 de 1989, esto es que se trata de un proceso contencioso sobre el régimen económico del matrimonio y por ende, su conocimiento recae a la jurisdicción de familia.

AUTO DE CONFLICTO DE JURISDICCION (353)  
 FECHA: 21/ 11/ 1994  
 DECISION: Jurisdicción de Familia corresponde conocimiento  
 PROCEDENCIA: Jdo. 6o. Civ. Cto.- 2o. Flia.  
 CIUDAD: Medellín  
 SUJETOS:  
 DEMANDADO: María Graciela Cano de Cano y otra  
 DEMANDANTE: Cano Muñoz Gabriel de Jesús  
 PROCESO: 5252  
 PUBLICADA: Si  
 FUENTE FORMAL: decreto 2272 de 1989 art. 5 núm. 12

#### COMPETENCIA PRORROGADA .....Pag. 1042

En el presente caso, la competencia estaba tácitamente consolidada como consecuencia de la conducta procesal observada por el demandado.

PONENTE: Pedro Lafont Pionetta  
 AUTO DE CONFLICTO (354)  
 FECHA: 21/11/1994  
 DECISION: ABSTENERSE DECIDIR APARENTE CONFLICTO DE  
 COMPETENCIA.  
 PROCEDENCIA: J.3o. FLIA.-PCOMPAL.  
 CIUDAD: S.DE CALI LA VICTORIA (VALLE)

**SUJETOS** :  
**DEMANDADO** GÓMEZ POSSO, HUGO LEÓN  
**DEMANDANTE** DEFENSORIA 1A DE FLIA — CALI —  
**PROCESO** : 005247  
**PUBLICADA** : Si  
**DETALLE PUB.** : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 FUENTE  
**FORMAL** : C. de P.C. Art. 437, 144 num. 5.

### CONFLICTO DE COMPETENCIA /

**COMPETENCIA -Concepto, Factores** .....Pag. 1042

1) Noción de "competencia".

2) Para determinación de la competencia, el legislador acudió entre otros a los siguientes factores: subjetivo, objetivo, funcional y territorial. Carácter absoluto de estos tres primeros y carácter relativo de este último.

Igual sentido: auto No. 048 del 26 de Abril de 1988, no publicado.

**PONENTE** : Pedro Lafont Planeta  
**AUTO DE CONFLICTO (354)**  
**FECHA** : 21/11/1994  
**DECISION** : ABSTENERSE DE DECIDIR APARENTE CONFLICTO  
**DE COMPETENCIA**  
**PROCEDENCIA** : 1a FLIA- J.PCO, MPAL  
**CIUDAD** : SANTIAGO DE CALI- LA VICTORIA (VALLE)  
**SUJETOS** :  
**DEMANDADO** GÓMEZ POSSO, HUGO LEÓN  
**DEMANDANTE** DEFENSORIA 1A DE FLIA - CALI  
**PROCESO** : 005247  
**PUBLICADA** : Si  
**DETALLE PUB.** : 2o SEMESTRE-4o. TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número:  
 2470 Pág. : Extracto: 182  
**FUENTE FORMAL** : C. de P.C. Art. 23.

### FUERO ESPECIAL / COMPETENCIA TERRITORIAL /

**REGULACION DE VISITAS** .....Pag. 1042

Fuero especial de competencia territorial en lo que toca con los procesos de custodia, cuidado personal y regulación de visitas de menores de edad.

**PONENTE** : Pedro Lafont Planeta  
**AUTO DE CONFLICTO (354)**  
**FECHA** : 21/11/1994  
**DECISION** : ABSTENERSE DE DECIDIR APARENTE CONFLICTO DE  
**COMPETENCIA**  
**PROCEDENCIA** : 3a FLIA- J.PCO, MPAL  
**CIUDAD** : SANTIAGO DE CALI- LA VICTORIA (VALLE)  
**SUJETOS** :



DEMANDADO : Gómez Posso, Hugo León  
 DEMANDANTE : Defensoría la de Fla - Cali -  
 PROCESO : 005247  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-4o.TRIMESTRE Tome: CCXXXI Número:  
 2470 Pág. : Extracto: 182  
 FUENTE FORMAL : DECRETO Num.: 2772 Año: 1989 Art.: 8.

22/11/1994

**CONGRESO / ENTIDAD DESCENTRALIZADA / ESTABLECIMIENTO  
 PUBLICO / NACION / PERSONA JURIDICA / IDENTIDAD**

**DE PARTES** .....Pag. 1048

1) Atribución constitucional del Congreso, para determinar la estructura de la administración nacional.

2) Clasificación y características de las entidades descentralizadas del orden nacional. Distinción entre estas y la Nación.

3) Carácter de establecimiento público de que goza el Fondo Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación. Función de esta entidad a que se refiere el artículo 2o., literal j) del Decreto-Ley 0036 de 1992

4) Inexistencia de identidad de partes entre la Nación y el precitado fondo, precitada entidad.

PONENTE : Pedro Lafont Pianetta  
 AUTO DE REPOSICION (355 )  
 FECHA : 22/11/1994  
 DECISION : NO REPONE  
 PROCEDENCIA : T.S.J.  
 CIUDAD : SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 SUJETOS :  
 DEMANDANTE : Flota Mercante Grancolombiana S.A.  
 DEMANDANTES : Empresa Puertos de Colombia.  
 INTERPUESTO : El demandante  
 PROCESO : 005066  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-4o.TRIMESTRE Tome: CCXXXI Número:  
 2470 Pág. : Extracto: 183  
 FUENTE FORMAL : C.N.(1886) Art.: 76 Numeral.: 9 y 10; C.N. Art.: 150  
 Numeral.: 7; DECRETO-LEY Num.: 1050 Año: 1968; DECRETO Num.: 3130 Año: 1968  
 ; LEY Num.: 153 Año: 1887 Art.: 80 ; DECRETO-LEY Num.: 0036 Año: 1992 Art.: 2 ;  
 LEY Num.: 1 Año: 1991 Art.: 27.

23/11/1994

**EXPEDIENTE-Remisión / CONSTANCIA .....Pag. 1053**

1) El C. de P.C., en su artículo 132, consagra dos vías para la remisión de expedientes.

2) No es la ausencia de la mera constancia la determinante de la sanción, sino el incumplimiento de las formalidades requeridas legalmente para elegir una vía distinta de la ordinaria para la remisión del expediente, el manantial de la pena respectiva. La constancia es apenas una prueba de que para tal efecto se cumplieron todas esas formalidades.

PONENTE : Rafael Romero Sierra  
 AUTO DE REPOSICION (357)  
 FECHA : 23/11/1994  
 DECISION : NO REPONE AUTO  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : RIOHACHA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO AHMAD RAHAL, MOHAMED  
 DEMANDANTE GOLDRINGER GALSBERG, MORITZ  
 PROCESO : 005118  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUBL. : 2o.SEMI-STRE-4o.TRIMESTRE Torno: CCXXXI Número:  
 2470 Extracto: 184  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 132

24/11/1994

**VIOLACION NORMA SUSTANCIAL-Via Indirecta/ ERROR****DE HECHO Y DE DERECHO .....Pag. 1060**

1) La violación indirecta de norma de derecho sustancial, puede ocurrir cuando el fallador en la apreciación de las pruebas erra por equivocación de hecho o de derecho en esa actividad. En qué consiste cada uno de estos errores.

Igual sentido: sentencia 055 de 25 de febrero de 1988; sentencia 025 febrero 25 de 1988 G. J. c. CXCH, No. 2431, págs. 76 y 77.

2) Evidencia del error fáctico.

Igual sentido: Sentencia de 23 de mayo de 1989 G. J.T.CNCV, No. 2435, primer semestre, pág. 136

PONENTE : Pedro Lafont Pianetta  
 SENTENCIA DE CASACION (138)  
 FECHA : 24/11/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : SANTIAGO DE CALI  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO FORRES ROBAYO, JORGE HUMBERTO

DEMANDANTE : SANCHEZ LONDOÑO MARGARITA, como representante de YORDALIS SANCHEZ.  
 INTERPUESTO POR : Parte demandante  
 PROCESO : 004415  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 368 Numeral.: 1.

#### TECNICA DE CASACION-Yuxtaposición de Argumentos /

**CASACION-Carga Procesal** .....Pag. 1061

En el presente caso, se viola la regla técnica de la inexistencia de fundamentos contralictorios. Igualmente no se cumplió con la carga procesal de demostrar en qué consistió la violación de las normas de disciplina probatoria que menciona como infringidas en la enunciación de la censura.

PONENTE : Pedro Lafont Planetta  
 SENTENCIA DE CASACION (138)  
 FECHA : 24/11/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : SANTIAGO DE CALI  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : TORRES ROBAYO, JORGE HUMBERTO  
 DEMANDANTE : SANCHEZ LONDOÑO MARGARITA, como representante de YORDALIS SANCHEZ  
 INTERPUESTO POR : Parte demandante  
 PROCESO : 004415  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 FUENTE FORMAL : DUCRELO Num.: 2651 Año: 1994 Art.: 51 Numeral.: 4.

#### PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL-Causales

.....Pag. 1060

Las causales que permiten presumir la existencia de paternidad extramatrimonial y en virtud de las cuales se autoriza su declaración judicial, son autónomas e independientes unas de otras.

Igual sentido: Sentencia 11 de febrero de 1987, ordinario Tino Nicolás Cadena contra Nicolás Liévano Aguirre como heredero de Indalecio Liévano Aguirre, G. J. CLXXXVIII, pág. 27

PONENTE : Pedro Lafont Planetta  
 SENTENCIA DE CASACION (138)  
 FECHA : 24/11/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : SANTIAGO DE CALI  
 SUJETOS :

DEMANDADO TORRES ROYAYO, JORGE HUMBERTO  
 DEMANDANTE SANCHEZ LONDOÑO MARGARITA, como representante  
 de YORDALIS SANCHEZ.  
 INTERPUESTO POR Parte demandante  
 PROCESO : 004415  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-4o.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número:  
 2470 Pág. : Extracto: 185  
 FUENTE FORMAL : LEY Num.: 45 Año: 1936 Art.: 4; LEY Num.: 75 Año: 1968  
 Art.: 6.

# RELACIONES SEXUALES / CONCEPCION .....Pag. 1060

Finalidad de esta causal —relaciones sexuales— que autoriza la declaración judicial de filiación paterna. La Ley 75 de 1968, modificando lo que en el punto establecía el numeral 4o. del art. 4 de la Ley 45 de 1936, concede efectos jurídicos a las simples relaciones sexuales llevadas a cabo durante la época en que se presume realizaba la concepción, sin requerir que aquellas revistan necesariamente condiciones de notoriedad y estabilidad. Igual sentido: Sentencia 14 de septiembre de 1972 G. J.T. CXLIJII, pág. 146.

PONENTE : Pedro Lafont Planeta  
 SENTENCIA DE CASACION (138)  
 FECHA : 24/11/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.JJ.  
 CIUDAD : SANTIAGO DE CALI  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO TORRES ROYAYO, JORGE HUMBERTO  
 DEMANDANTE SANCHEZ LONDOÑO MARGARITA, como representante  
 de YORDALIS SANCHEZ.  
 INTERPUESTO POR Parte demandante  
 PROCESO : 004415  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE 4o.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número:  
 2470 Pág. : Extracto: 185  
 FUENTE FORMAL : LEY Num.: 75 Año: 1968; LEY Num.: 45 Año: 1936 Art.: 4  
 Numeral: 4.

# INDICIO .....Pag. 1061

El indicio que se deduce de la compatibilidad de caracteres genéticos entre el presunto padre y quien respecto de él reclama ser su hijo, no es en el estado actual de la ciencia un indicio necesario, sino meramente contingente, razón esta por la cual, por sí solo no puede servir de fundamento a una sentencia que declare la filiación paterno-filial que se investiga.

PONENTE : Pedro Lafont Planeta  
 SENTENCIA DE CASACION (138)

FECHA : 24/11/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : SANTIAGO DE CALI  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : TORRES ROBAYO, JORGE HUMBERTO  
 DEMANDANTE : SANCHEZ LONDOÑO MARGARITA, como representante  
 de YORDALIS SANCHEZ.  
 INTERPUESTO POR : Parte demandante  
 PROCESO : 004415  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE-4o. TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número:  
 2470 Pág.: Extractos: 185

25/11/1994

**INTEGRACION DE CARGOS** ..... Pag. 1077  
 Inprocedencia.

PONENTE : Rafael Romero Sierra  
 SENTENCIA DE CASACION (139)  
 FECHA : 25/11/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : TUNJA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : PERSONAS INDETERMINADAS  
 DEMANDANTE : MUNICIPIO DE MUZO (BOYACA)  
 INTERPUESTO POR : Parte demandante  
 PROCESO : 004357  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470  
 FUENTE FORMAL : DECRETO Num.: 2653 Año: 1991 Art.: 51 Numeral.: 3.

#### **NORMA SUSTANCIAL / PERTENENCIA /**

**NORMA PROBATORIA** ..... Pag. 1077

Tienen carácter de normas de derecho sustancial los artículos 407 del actual C. de P.C., antes 413 de la misma codificación (para el ejercicio de la acción de pertenencia) y 762 del C.C. No lo tienen los arts. 2518 del C.C.; 187 y 246 del C. de P.C., pues éstos dos últimos tienen la particularidad de ser normas probatorias.

PONENTE : Rafael Romero Sierra  
 SENTENCIA DE CASACION (139)  
 FECHA : 25/11/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.

CIUDAD : TUNJA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS PERSONAS INDETERMINADAS  
 DEMANDANTE MUNICIPIO DE MUZO (BOYACA)  
 INTERPUESTO POR PARTE DEMANDANTE  
 PROCESO : 004357  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 407, 437, 246 ; C.C. Art.: 762, 2518,  
 Exl. 186.

#### **VIOLACION NORMA SUSTANCIAL-**

**Ataque todas las pruebas ..... Pag. 1077**

No es procedimiento correcto en este recurso extraordinario el ataque aislado de los medios de prueba.

Igual sentido: CXLII, 140.

PONENTE : Rafael Romero Sierra  
 SENTENCIA DE CASACION (139)  
 FECHA : 25/11/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : TUNJA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS PERSONAS INDETERMINADAS  
 DEMANDANTE MUNICIPIO DE MUZO (BOYACA)  
 INTERPUESTO POR PARTE DEMANDANTE  
 PROCESO : 004357  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470

#### **ERROR DE HECHO-Modalidades ..... Pag. 1077**

Suposición, Preterición.

Igual sentido: Cas. Civ. de 24 de octubre de 1975 CLI, 260.

PONENTE : Rafael Romero Sierra  
 SENTENCIA DE CASACION (139)  
 FECHA : 25/11/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : TUNJA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS Personas Indeterminadas  
 DEMANDANTE MUNICIPIO DE MUZO (Boyacá)  
 INTERPUESTO POR Parte demandante  
 PROCESO : 004357

PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470

**CASACION-Objeto** .....Pag. 1077

El recurso de casación no tiene por objeto, como si se tratara de una tercera instancia, revisar libremente el pleito o las cuestiones debatidas en los dos grados, provocando un nuevo análisis de las pruebas para deducir su poder de convicción judicial.  
 Igual sentido: Cas. Civ. de 20 de junio de 1947; LXII: 467.

PONENTE : Rafael Romero Sierra  
 SENTENCIA DE CASACION (139)  
 FECHA : 25/11/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : TUNJA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS PERSONAS INDETERMINADAS  
 DEMANDANTE MUNICIPIO DE MUZO (BOYACA)  
 INTERPUESTO POR PARTE DEMANDANTE  
 PROCESO : 004357  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470

**POSESION / PRESCRIPCION / DOMINIO** .....Pag. 1078

La posesión material, que es la que verdaderamente constituye el fundamento de la usucapión, debe ser el reflejo inequívoco de un poderio efectivo sobre una cosa determinada que tiene que ponerse de manifiesto en una actividad asidua, autónoma y prolongada que corresponda al ejercicio del derecho de propiedad.  
 Igual sentido: G. J. Ts. XLVI, 7° 6; CXXXI, 185

PONENTE : Rafael Romero Sierra  
 SENTENCIA DE CASACION (139)  
 FECHA : 25/11/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : TUNJA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS PERSONAS INDETERMINADAS  
 DEMANDANTE MUNICIPIO DE MUZO (BOYACA)  
 INTERPUESTO POR PARTE DEMANDANTE  
 PROCESO : 004357  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470  
 FUENTE FORMAL : C.C. Art.: 762 ;

28/11/1994



**MANDATO MERCANTIL - Revocación** .....Pag. 1095

1) Titularidad tanto de la revocación como de la renuncia del mandato mercantil.

2) Eventos de excepción al derecho de revocación en virtud del contrato de mandato.

3) Mandato "en interés común": Fundamento de su irrevocabilidad.

4) Cuando hoy en día el art.1279 del C. de Com. establece una excepción a la regla de la revocabilidad del mandato, derivada dicha excepción del interés conjunto que en el asunto puedan tener mandante y mandatario, ese interés no se refiere a que este último tenga derecho a una retribución por los servicios prestados, retribución que en el campo propio de los mandatos comerciales por lo demás siempre va a percibirlo.

Igual sentido: G. J., LXVIII, pág. 151

**PONENTE** : Carlos Esteban Jaramillo Schloss**SENTENCIA DE CASACION** (140)**FECHA** : 28/11/1994**DECISION** : NO CASA**PROCEDENCIA** : T.S.D.J.**CIUDAD** : SANTAFE DE BOGOTÁ**SUJETOS** :**DEMANDADO** : MANUELITA S.A.**DEMANDANTE** : MARCA CREATIVIDAD Y MERCADERO LTDA.**INTERPUESTO POR** : LA PARTE ACTORA**PROCESO** : 004371**PUBLICADA** : Si**DETALLE PUB.** : 2o.SEMESTRE-4o.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número:

2470 Pág. : Extraordin. 187

**FUENTE FORMAL** : C. Co.; Art.: 1279, 1264, Art.: 1264; C. de Co. de 1887 art. 341; C.C. Art.: 2191.

29/11/1994

**DERECHO DE ACCION / RESPONSABILIDAD  
PATRIMONIAL / RESPONSABILIDAD CIVIL DEL****JUEZ / PERJUICIO MORAL** .....Pag. 1115

1) Concepto del derecho de acción.

2) El ejercicio de una acción autorizada por la ley, como lo es la consagrada por el artículo 40 del C. de P.C., no entraña la hipótesis que contempla el numeral 1o. del art. 74 ib. — temeridad o mala fe por manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda —, dado que, quien así procede, está haciendo uso de una facultad legal, en cuyo caso, el resultado adverso no lo comprometerá en la responsabilidad patrimonial del art. 72 ibídem.

3) Resarcimiento de los daños morales a quien fuere llamado a un proceso y con ocasión de éste hubiese sufrido un perjuicio de esa naturaleza, ora porque se mantuvo en un esta-

do de angustia permanente, ya porque se le afectó en su personalidad. Reparación pecuniaria de esta clase de daños. Distinción entre la aceptación de la resarcibilidad de los daños no patrimoniales con el régimen al que se encuentra sometido esta modalidad indemnizatoria. De dónde proviene el perjuicio moral?. Subdivisión de éste. Régimen probatorio del daño extrapatrimonial.

Igual sentido: fallo de casación publicado en la G. J. Num. 1515, pág. 220; Cas. de 22 de agosto, publicada en G. J.T. XXXI, pág. 83; G. J. Num. 1926 pág. 367; Cas. Civil del 15 de marzo de 1941 (G. J. Num. 1966, pág. 795; sentencia de 2 de julio de 1987; sentencias del 23 de abril de 1941 y 26 de marzo de 1943, ambas de negocios Generales publicadas en la G. J. Num. 1971 y 1966, CLII, págs. 128 y siguientes; auto del 13 de mayo de 1988.

4) En el presente caso, se estima en la cantidad de 500.000,00 el valor del daño moral subjetivo a cada uno de los funcionarios absueltos.

PONENTE : JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES

AUTO DE REGULACION DE PERJUICIOS (365)

FECHA : 29/11/1994

DECISION : SE FIJA EN LA SUMA DE 500.000 LA CUANTIA DE PERJUICIOS MORALES A CUDOS.

DEMANDANTE: IHO ROA ROA

DEMANDADOS: ARIEL SALAZAR RAMIREZ, CESAR JULIO VALENCIA COPETE y CLARA INES VARGAS HERNANDEZ

PROCESO : 004366

PUBLICADA : SI

DETALLE PCB. : 2o.SEMESTRE 4o.TRIMESTRI: Tomo: CCXXXI Número: 2470 Pág.: Extracto: 189

FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art. 392.

CONFLICTO DE COMPETENCIA /

DIVORCIO / MATRIMONIO-Casación efectos Civiles .....Pag. 1111

La ley habla con notoria imprecisión conceptual de proceso de divorcio (vincular) y de "cesación de efectos civiles del matrimonio" como dos especies de un mismo género. Esta circunstancia no puede conducir a los jueces a inadmitir tales demandas cuando en ellas se hable de divorcios no obstante estar referidas a matrimonios canónicos, pues trátase de una misma realidad jurídica.

PONENTE : JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES

AUTO DE CONFLICTO DE COMPETENCIA (364)

FECHA : 29/11/1994

DECISION : J-3o. PCO.FLIA. PEREIRA COMPETENTE

PROCEDECENCIA : J-3o.PCO.FLIA.-PCO.FLIA.

CIUDAD : PEREIRA-RIOSUCIO

SUJETOS :

DEMANDADO : Muñoz Pérez, María Gertrudis

DEMANDANTE : Duque Boiero, Alfonso

PROCESO : 005264  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-4o.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número:  
 2470 Pág. : Extracto: 188  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art. 40.

30/11/1994

**VIOLACION NORMA SUSTANCIAL.-Vía Directa e Indirecta/ ERROR DE HECHO Y DE DERECHO/**

**NORMA PROBATORIA .....Pag. 1122**

1) El recurrente en casación puede acusar la sentencia que combate por supuesta violación de normas de derecho sustancial, o invocar transgresión o inobservancia de tales normas, ya por vía directa, ora por vía indirecta, con absoluta independencia de las conclusiones probatorias a que llegó el sentenciador en la primera hipótesis, o planteando un disenso respecto de tales conclusiones en la segunda hipótesis, aduciendo para el efecto que el fallador incurrió en errores de hecho o de derecho en la apreciación probatoria.

2) De las diferencias existentes entre esas dos clases de yerros en la apreciación de las pruebas, no es admisible su alegación en un mismo campo y respecto de una misma prueba en forma simultánea.

Similar sentido: G. J., tomo XC, pág. 92; G. J. No.2179, pág. 389.

3) Los arts. 198, 248, 249, 250, 252, numeral 3 del C. de P.C., son normas de disciplina probatoria, cuya transgresión -de haberse producido-, sería el medio para la ocurrencia de errores de derecho en la apreciación probatoria. Pero no es de recibo alegar cuando la causal invocada es la violación indirecta de normas sustanciales por error de hecho en la apreciación probatoria.

PONENTE : Pedro Lafont Pinetti  
 SENTENCIA DE CASACION (142)  
 FECHA : 30/11/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.DJ.  
 CIUDAD : SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : LA NAL. CÍA. DE SEGUROS GENERALES DE  
 COLOMBIA S.A.  
 DEMANDANTE : EMEL DURAN JAIMES  
 INTERPUESTO POR : PARTE DEMANDANTE

**INTERPRETACION DE LA DEMANDA .....Pag. 1144**

La interpretación de la demanda es una labor que debe emprender el Juez para desentrañar el querer del demandante, querer que está ahí, implícito en el libelo pero que no se muestra claro o coherente. Pero en modo alguno, so pretexto de interpretar lo que es

obvio, puede el libelador darle un alcance distinto a la misma, o hacerle decir lo que objetivamente no dice, o, en resumidas cuentas, alterar ostensiblemente su contenido. Interpretación del libelo introductorio del proceso en la que se pide nulidad de un contrato, mas no una declaratoria de inoponibilidad.

PONENTE : Héctor Marín Naranjo

SENTENCIA DE CASACION (144)

FECHA : 30/11/1994

DECISION : CASA

PROCEDENCIA : T.S.D.J.

CIUDAD : CUNDINAMARCA

SUJETOS :

DEMANDADO : MUÑOZ ROBAYO, MISALI

DEMANDANTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE "EL TRIUNFO"

INTERPUESTO POR : EL DEMANDADO

PROCESO : 004025

PUBLICADA : Si

DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 Extracto: 190

**CASACION-Ataque todos los fundamentos** .....Pag. 1158

Si la declaración del vicio sometido a la consideración del Tribunal de casación no tiene injerencia esencial en la resolución jurisdiccional y esta pudiera apoyarse en premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto carecerá de la necesaria consistencia infirmatoria y tendrá que ser desechado.

Igual sentido: G. J.J.CLXVI, pág. 583, citada en Cas. Civ. de 5 de mayo de 1992, sin publicar.

PONENTE : Carlos Esteban Juramilla Schloss

SENTENCIA DE CASACION (146)

FECHA : 30/11/1994

DECISION : NO CASA

PROCEDENCIA : T.S.D.J.

CIUDAD : SANTA MARTA

SUJETOS:

DEMANDADOS : RODRIGUEZ AGUILAR, MARIA OFELIA y Otros.

DEMANDANTE : VILLAR, LUIS RAFAEL

INTERPUESTO POR : PARTE ACTORA

PROCESO : 004321

PUBLICADA : Si

DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470

**ERROR IN JUDICANDO** .....Pag. 1159

Eficacia causal del error in judicando.

PONENTE : Carlos Esteban Juramilla Schloss

SENTENCIA DE CASACION (146)

FECHA : 30/11/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : SANTA MARTA  
 SUJETOS:  
 DEMANDADOS RODRIGUEZ AGUILAR, MARIA OFELIA y Otros.  
 DEMANDANTE VILLAR, LUIS RAFAEL.  
 INTERPUESTO POR PARTE ACTORA  
 PROCESO : 004321  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470

#### MEDIO NUEVO .....Pag. 1159

En virtud del imperativo de técnica legal que repudia el medio nuevo en sede de casación, no es dable atacar por vez primera ante la Corte los elementos probatorios que como tales no tuvieron fecha alguna en los trámites de la instancia.

Igual sentido: G. J., t. LXXXIII, pág. 76

PONENTE : Carlos Esteban Jaramillo Schloss  
 SENTENCIA DE CASACION (146)  
 FECHA : 30/11/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : SANTA MARTA  
 SUJETOS:  
 DEMANDADOS RODRIGUEZ AGUILAR, MARIA OFELIA y Otros.  
 DEMANDANTE VILLAR, LUIS RAFAEL  
 INTERPUESTO POR PARTE ACTORA  
 PROCESO : 004321  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470

#### VALORACION PROBATORIA/ AUTONOMIA DEL JUZGADOR/ PRESUNCION DE ACIERTO/

#### PRESUNCION DE LEGALIDAD .....Pag. 1177

La tarea de apreciar el haz probatorio ha sido encomendada a los juzgadores de instancia, quienes en el punto gozan por tanto de autonomía; de donde se sigue que las conclusiones a que arriban están revestidas de la presunción de acierto y legalidad, y, en consecuencia, merecen respetabilidad que este orden de premisas les suministra.

PONENTE : Rafael Romero Sierra  
 SENTENCIA DE CASACION (147)  
 FECHA : 30/11/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : CUNDINAMARCA

SUJETOS :  
 PROCESO : 004310  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS RODRIGUEZ GODOY, CARLOS; RODRIGUEZ GONZA-  
 LEZ, MARIA NELLY y Hcos. Ind. de Vicente Rodríguez Godoy.  
 DEMANDANTE CAÑON, JAIME  
 INTERPUESTO POR RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA NELLY  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470

**ERROR DE HECHO .....Pag. 1177**

Evidencia del yerro fáctico.

Igual sentido: Cas. Civ. de 28 de septiembre de 1977

PONENTE : Rafael Romero Sierra  
 SENTENCIA DE CASACION (147)  
 FECHA : 30/11/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : CUNDINAMARCA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS RODRIGUEZ GODOY, CARLOS; RODRIGUEZ GONZALEZ,  
 MARIA NELLY y Hcos. Ind. de Vicente Rodríguez Godoy.  
 DEMANDANTE CAÑON, JAIME  
 INTERPUESTO POR RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA NELLY  
 PROCESO : 004310  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470

**TESTIMONIO-Valoración en conjunto .....Pag. 1177**

Valoración en conjunto de la prueba testimonial respecto de los elementos configuradores de la posesión notoria.

Igual sentido: Cas. Civ. de 24 de enero de 1992: CLIX, 81.

PONENTE : Rafael Romero Sierra  
 SENTENCIA DE CASACION (147)  
 FECHA : 30/11/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : CUNDINAMARCA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS RODRIGUEZ GODOY, CARLOS; RODRIGUEZ GONZA-  
 LEZ, MARIA NELLY y Hcos. Ind. de Vicente Rodríguez Godoy.  
 DEMANDANTE CAÑON, JAIME  
 INTERPUESTO POR RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA NELLY  
 PROCESO : 004310

PUBLICADA : SI  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 187.

# **CASACION- Característica .....Pag. 1177**

No es la casación una tercera instancia en la que pudiera ensayarse nuevamente una mejor manera de apreciar las probanzas, así y todo resulta la ensayada con más apego a la lógica, o con mayor perfil dialéctico, o en fin, con indiscutible fuerza convincente.

PONENTE : Rafael Romero Sierra

SENTENCIA DE CASACION (147)

FECHA : 30/11/1994

DECISION : NO CASA

PROCEDENCIA : T.S.D.J.

CIUDAD : CUNDINAMARCA

PROCESO : 004310

PUBLICADA : SI

DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470

# **TESTIMONIO DEL VECINO .....Pag. 1178**

Como la vecindad supone una relación constante y encadenada, normalmente no puede precisarse el momento justo en que algo de rutina sucedió.

PONENTE : Rafael Romero Sierra

SENTENCIA DE CASACION (147)

FECHA : 30/11/1994

DECISION : NO CASA

PROCEDENCIA : T.S.D.J.

CIUDAD : CUNDINAMARCA

SUJETOS :

DEMANDADOS RODRIGUEZ GODOY, CARLOS; RODRIGUEZ GONZA-

LEZ, MARIA NELLY y Hros. Ind. de Vicente Rodríguez Godoy.

DEMANDANTE CAÑON, JAIME

INTERPUESTO POR RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA NELLY

PROCESO : 004310

PUBLICADA : SI

DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470

# **PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL - Posesión Notoria .....Pag. 1177**

En lo que respecta a la posesión notoria del estado civil de hijo extramatrimonial, fue preocupación del legislador la de establecer los hechos en que, por lo diccidentes, fuertes, manifiestos y persuasivos, son los que continuamente revelen la filiación.

PONENTE : Rafael Romero Sierra

SENTENCIA DE CASACION (147)

FECHA : 30/11/1994

DECISION : NO CASA



PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : CUNDINAMARCA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS RODRIGUEZ GODOY, CARLOS; RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA NELLY y  
 Hros. Ind. de Vicente Rodríguez Godoy.  
 DEMANDANTE CAÑON, JAIME  
 INTERPUESTO POR RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA NELLY  
 PROCESO : 004310  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470

**ERROR IN PROCEDENDO / PRINCIPIO  
DE LA CONGRUENCIA / INCONGRUENCIA /**

**VOLACIÓN NORMA SUSTANCIAL. .... Pag. 1131**

1) Si el petitum de la demanda y las excepciones del contradictor señalan el campo en que puede y debe moverse el juez, resulta patente que si éste falla por fuera de lo pedido, o condena a más de lo suplicado, o deja sin resolución materias que le fueron sometidas oportuna y legalmente, enautes, comete un yerro in procedendo y quebranta de manera franca el principio de la congruencia de las sentencias.  
Igual sentido: sentencia 325 de 29 de agosto de 1988.

2) Para saber si hay congruencia, y en consecuencia, hallar asidero a la causal segunda de casación, sólo debe tenerse en cuenta la parte resolutive del fallo.  
Igual sentido: G. J. T. LXXVIII, pág. 882.

3) La violación de la norma sustancial (art. 1081 del Código de Comercio) sería alegable por la primera de las causales legales de casación y no por la segunda de ellas.

PONENTE : Pedro Lafont Pianetta  
 SENTENCIA DE CASACION (113)  
 FECHA : 30/11/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : SANTIAGO DE CALI  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO LA CÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.  
 DEMANDANTE MARTHA CECILIA RUIZ SOLARTE en su nombre propio y  
 en representación de los menores YAZMIN ELIANA y ROY ALEXANDER SOLARTE  
 RUIZ.  
 INTERPUESTO POR PARTE DEMANDANTE  
 PROCESO : 004443.  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 368 Numeral: 1 y 2, 304 y 305 ibídem; C. Co.  
 Art.: 1081.

**REPRESENTACION / INOPONIBILIDAD / NEGOCIO JURIDICO / CAPACIDAD / VALIDEZ / NULIDAD SUSTANCIAL / PRINCIPIO "LO QUE UNA PERSONA EJECUTA EN NOMBRE DE OTRA NO TENIENDO PODER DE ELLA NI DE LA LEY PARA REPRESENTARLA, CARECE DE EFECTOS CONTRA EL REPRESENTADO" / CONSENTIMIENTO / MANDATO / INEXISTENCIA ...** Pag. 1144

1) Los actos de los representantes que desborden sus poderes son sancionados por el ordenamiento con una particular forma de ineficacia que se conoce como la inoponibilidad del negocio frente al representado, figura distinta a cualquier otro tipo de sanción de los actos irregulares, especialmente las dimanantes de la incapacidad de la persona. Igual sentido: Cas. Junio 24 de 1954; G. J. L. XVI, pág. 852.

2) D. distinción entre los conceptos: "capacidad" y "oponibilidad"; "invalidéz", "inoponibilidad" y "declaratoria de nulidad".

3) Principio "Lo que una persona ejecuta en nombre de otra no teniendo poder de ella ni de la ley para representarla, carece de efectos contra el representado".

4) Concepto del término jurídico "consentimiento". Operancia de éste respecto del contrato de mandato.

Igual sentido: G. J. X. VII, pág. 81 y ss.

5) Distinción entre "inoponibilidad" e "inexistencia" del negocio.

PONENTE : Héctor María Naranjo  
SENTENCIA DE CASACION (144)  
FECHA : 30/11/1994  
DECISION : CASA  
PROCEDENCIA : I.S.D.J.  
CIUDAD : CUNDINAMARCA  
SUJETOS :  
DEMANDADO : MUÑOZ ROBAYO, MISAEL  
DEMANDANTE JUNTA DE ACCIÓN COMunal DE "EL TRIUNFO"  
INTERPUESTO POR : EL DEMANDADO  
PROCESO : 104025  
PUBLICADA : S.  
DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-4o.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 Pág. : Extractos 191  
FUENTE FORMAL : C.C. Arts. 1750, 1503, 1502, 2304 Ibídem.

**PRESCRIPCION ADQUISITIVA Y EXTINTIVA / PRESCRIPCION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA / PERTENENCIA / POSESION / RECTIFICACION DOCTRINARIA** .....Pag. 1158

2) Clasificación de la prescripción en "extintiva" o liberatoria y la "adquisitiva". llamada también por la doctrina "usucapión". Esta segunda modalidad de prescripción puede ser de dos tipos: "ordinaria" y "extraordinaria".

Igual sentido: G. J. L. LXVI, pág. 347.

2) Elementos configurantes para la existencia de una declaración judicial de pertenencia por prescripción inmobiliaria de carácter extraordinario.

Igual sentido: G. J., ts. CXIII, pág. 113., CLII, pág. 24, CXCI, pág. 278, y CXCVI, pág. 77.

3) Importancia de la posesión como forma de adquirir la propiedad. Elementos. Forma como se manifiesta la posesión.

Igual sentido: G. J., ts. LXXXVI, pág. 14; G. J., ts. CXXXI, pág. 185

4) Distinción entre la posesión requerida para la usucapión extraordinaria y la exigida por la agraria. Rectificación doctrinaria.

5) La posesión cuya prueba tiene a su cargo el prescribiente ha de referirse a la porción de tierra cuya pertenencia es reclamada.

Igual sentido: G. J., ts. LXXX, pág. 97, y CII, pág. 118.

PONENTE : Carlos Esteban Juramilla Schloss

SENTENCIA DE CASACION (146)

FECHA : 30/11/1994

DECISION : NO CASA

PROCEDENCIA : T.S.D.J.

CIUDAD : SANTA MARIA

SUJETOS:

PROCESO : 004321

PUBLICADA : Si

DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-4o.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 Pág.: Extracto: 192

FUENTE FORMAL : C.C. 2518, 2527, 673, 2512, 762, 981 ibidem; LEY Num.: 50 Año: 1936 Art.: 1; C. de P.C. art. 407; LEY Num.: 200 Año: 1936 Art.: 12;

LEY Num.: 4 Año: 1973 Art.: 2 y 4; C. de P.C. Art.: 375 Inciso: 4.

#### PRESCRIPCION ORDINARIA / CONTRATO

DE SEGURO/ SEGURO DE VIDA .....Pag. 1131

1) La prescripción ordinaria de los dos años de las acciones derivadas de un contrato de seguro de vida, comienza a correr cuando se ha conocido o debido tener conocimiento de la muerte del asegurado.

PONENTE : Pedro Lafont Pianella

SENTENCIA DE CASACION (143)

FECHA : 30/11/1994

DECISION : NO CASA

PROCEDENCIA : T.S.D.J.

CIUDAD : SANTIAGO DE CALI

SUJETOS :

DEMANDADO : LA CÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.

DEMANDANTE : MARTHA CECILIA RUIZ SOLARTE en su nombre propio

y en representación de los menores YAZMIN ELIANA y ROY ALEXANDER SOLARTE RUIZ

INTERPUESTO POR : PARTE DEMANDANTE  
 PROCESO : 004443  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE. Tomo: CCXXXI Número: 2470, Ext. 190.  
 FUENTE FORMAL : C. de Co. Art.: 1081, 1072, 1080, 1077 ibídem.

**PRESCRIPCION-Interrupción** .....Pag. 1131

Inteligencia del art. 90 del C. de P.C.

Igual sentido: sentencia del 1o. de octubre de 1986, G. J.CI.XXXIV, No. 2423, pag. 304

PONENTE : Pedro Lafont Planeta  
 SENTENCIA DE CASACION (143)  
 FECHA : 30/11/1994  
 DECISIÓN : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 DEMANDADO : LA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.  
 DEMANDANTE : MARIA CECILIA RUIZ SOLARTE en su nombre propio y en representación de los menores YAZMIN ELIANA y ROY ALEXANDER SOLARTE RUIZ.  
 INTERPUESTO POR : PARTE DEMANDANTE  
 PROCESO : 004443  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o. SEMESTRE. Tomo: CCXXXI Número: 2470 Ext. 190  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 90, 698 ibídem ; C.C. Art.: 2524; DECRETO Num.: 14(X) y 2019 de 1970; DECRETO Num.: 2282 Año: 1989 Art.: 1, modf. 183.

13/12/1994

**CASACION-Pago de Porte** .....Pag. 1209

Oportunidades y maneras de hacer el pago de los portes, de que trata el art. 132 del C. de P.C.

Igual sentido: auto de 26 de junio de 1991; Acta No.56 del 22 de julio de 1991.

PONENTE : Nicolás Bechara Simancas  
 AUTO DE CASACION (378)  
 FECHA : 13/12/1994  
 DECISIÓN : INADMISIBLE Y DESIERTO CASACION  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : MEDELLIN  
 SUJETOS :  
 PROCESO : 005176  
 PUBLICADA : Si  
 DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-4o.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número: 2470 Pág.: Extracto 191

NOTAS ACLARATORIAS ..... : SALVA VOTO: Dr. Javier Tamayo Jaramillo.  
FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art. 132.

#### CONFLICTO DE COMPETENCIA/

ACCION REIVINDICATORIA .....Pag. 1204

En el presente evento, habiéndose invocado por el demandante el lugar de ubicación del bien como uno de los aspectos para determinar el juzgado llamado a conocer del proceso reivindicatorio, es al Planiisco del Circuito de Ayapel a quien corresponde tramitarlo.

PONENTE : Nicolás Becerra Simancas

AUTO DE CONFLICTO DE COMPETENCIA (377)

FECHA : 13/12/1994

DECISION : J.Pen.Cto. de Ayapel, Córdoba, competente

PROCEDENCIA : J.Pen.Cto.-Civ.Cto.

CIUDAD : AYAPEL- CAUCASIA

SUJETOS :

DEMANDADO : YEPES RODRÍGUEZ, JOAQUÍN EMILIO

DEMANDANTE : HERRERA HERRERA, GENEROSA MARÍA

PROCESO : 005266

PUBLICADA : Si

DETALLE PUB. : Tomo: CCXXXI Número: 2470

FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art. 23 Numeral: 10.

#### INVESTIGACION DISCIPLINARIA

(SALVAMENTO DE VOTO: .....Pag. 1215

Se salva voto en lo que se refiere a la solicitud de investigación disciplinaria contra el secretario de la Sala Civil del Tribunal.

PONENTE : Nicolás Becerra Simancas

AUTO DE CASACION (378)

FECHA : 13/12/1994

DECISION : INADMISIBLE Y DESIERTO RECURSO DE CASACION

PROCEDENCIA : T.S.D.J.

CIUDAD : MEDELLIN

SUJETOS :

DEMANDADO : SOC. "WILLIPLAST DE COLOMBIA LTDA." Y  
CALLEJAS, WILLIAM BERNARDO

DEMANDANTE : ZULUAGA ZULUAGA, JOSÉ OTONIEL Y NELSON  
ZULUAGA PINEDA.

PROCESO : 005276

PUBLICADA : Si

DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-4o.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número:  
2470 Extracto: 191

NOTAS ACLARATORIAS ..... : SALVA VOTO: Dr. Javier Tamayo Jaramillo.

15/12/1994

**RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL-Actividad****Peligrosa/ PERJUICIOS/ RECTIFICACION DOCTRINARIA .....Pag. 1216**

1) El responsable de los perjuicios causados en desarrollo de una actividad peligrosa desplegada mediante una cosa inanimada es su propietario, en principio, no por ser tal sino en virtud de la presunción de ser guardián de dicho sujeto.

Igual sentido: G. J. Tomo CXCVI, pág. 153; G. J. tomo CXLII, pág. 188

2) Necesidad de demostrar la calidad de propietario de la cosa inanimada que, empleada en el ejercicio de una actividad peligrosa, ocasiona daño y así declararlo responsable de perjuicios causados con la cosa inanimada de su propiedad.

3) Rectificación Doctrinaria.

PONENTE : Rafael Romero Sierra

SENTENCIA DE CASACION (148)

FECHA : 15/12/1994

DECISION : NO CASA

PROCEDENCIA : C.S.D.J.

CIUDAD : MEDELLIN

SUJETOS :

DEMANDADOS : VELEZ MORENO, CARLOS ALBERTO y OCHOA CRESPO, ESMERALDA SOFIA

DEMANDANTE : GIRALDO GOMEZ, NELSON

INTERPUESTO POR : EL DEMANDANTE

PROCESO : 00-260

PUBLICADA : Si

DETALLE PUB. : 2o.SEMESTRE-4o.TRIMESTRE Tomo: CCXXXI Número:

2470 Pág. : Extracto: 192

FUENTE FORMAL : C.C. Art. 2556.

## INDICE CRONOLOGICO DE PROVIDENCIAS

### NO PUBLICADAS

#### SEGUNDO SEMESTRE DE 1994

05/07/1994

#### CONFLICTO DE COMPETENCIA / FUERO ESPECIAL / ALIMENTOS

El fuero especial de competencia que consagra el art. 139 del decreto 2737 de 1989 para esos procesos de alimentos, está determinado por el domicilio que tenga el menor en el momento de la presentación de la demanda.

PONENTE : Pedro Lafont Planetta

AUTO DE CONFLICTO DE COMPETENCIA (213)

FECHA : 05/07/1994

DECISION : Jdo. Peo. Mpal de Urumita (Guajira) competente.

PROCEDENCIA : Jdo. Peo. Mpal. Urumita (Guajira) y 3o. Peo. Flta de Valledupar (Cesar)

SUJETOS :

DEMANDADO : Corrales Arzuaga Waldemiro.

DEMANDANTE : Corrales Murgas Juan Ricardo, menor representado por el defensor de familia.

PROCESO : 005032

PUBLICADA : No

FUENTE FORMAL : art. 139 del decreto 2737 de 1989

C. de P.C. Art.: 70 Inciso: 4, 344 inc.1

#### APODERADO - Facultades / DESISTIMIENTO DEL RECURSO / CASACION - Desistimiento

Por cuanto el apoderado no tenía facultad para desistir, y no obstante habérsele solicitado que cumpliera con dicha facultad no lo hizo, se inadmite el desistimiento del recurso de casación.

PONENTE : Eduardo García Sarmiento

AUTO DE CASACION (214)

FECHA : 05/07/1994

DECISION : No aceptar desistimiento del recurso de casación

SUJETOS :



DEMANDADO	Mejía Calderón, Giovanni Anibal
DEMANDANTE	De la Calle de Fundiño, Cecilia
PROCESO	: 005033
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL:	: C. de P.C. Art.: 70 Inciso: 4, 344 inc. 1

06/07/1994

**CONFLICTO DE COMPETENCIA / CONFLICTO DE JURIS-  
DICCION / CORTE SUPREMA DE JUSTICIA/ JURISDICCION CIVIL / JURIS-  
DICCION DE FAMILIA**

Si ciertamente la ley no le atribuye a la Corte en pleno competencia para dirimir conflictos de jurisdicción o de competencia que se susciten entre dos juzgados pertenecientes a un mismo distrito judicial, esta Corporación se abstiene de decidirlo, y consecuentemente, dispone el envío de la actuación al Tribunal Superior correspondiente, a fin de que haga el pronunciamiento debido.

Igual sentido: providencia del 7 de octubre de 1993

Salvamento de Voto:

El asunto debió ser asumido y resuelto directamente por la Corte. El conflicto que surge entre un juez civil y uno de familia con respecto al límite de sus atribuciones, no puede concebirse como de competencia, sino de jurisdicción.

PONENTE	: Alberto Ospina Botero
AUTÓ DE CONFLICTO (216)	
FECHA	: 06/07/1994
DECISION	: Abstenerse decidir conflicto
PROCEDENCIA	: Id. P. Civ. Civ. - P. Civ. Flia
CIUDAD	: Ambos juzgados de: Puerto Berrio
SUJETOS	:
DEMANDADO	: Ciro Buitrago, Aura Amparo
DEMANDANTE	: Ramírez, Manuel Antonio
PROCESO	: 004891
PUBLICADA	: No
NOTAS ACLARATORIAS	: SALVAN VOTO: Drs. Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor Marín Naranjo, Pedro Lafont Planella.
FUENTE FORMAL	: C.N. Art.: 256; DECRETO 2652 Año: 1991; C. de P.C. Art.: 28, 152; DECRETO Num.: 528 Año: 1964, C.N. Art.: 116, 246, 247, 221 ibídem; LEY Num.: 20 Año: 1972.

07/07/1994

**DERECHO DE DEFENSA / MEDIO NUEVO**

Se quebrantaría el derecho de defensa entre los contendientes, si uno de los litigantes pudiera echar mano en casación de hechos, extremos o planteamientos no alegados o formulados en instancia.

Igual sentido: G.J. LXXXIII, pág. 76.

**VIOLACION NORMA SUSTANCIAL- Ataque todos los fundamentos / TECNICA DE CASACION**

El ataque diminuto constituye defecto ídienten del mismo, suficiente para que el despacho del cargo omita ocuparse de los restantes motivos de la acusación.

**ERROR DE HECHO / JUZGADOR DE INSTANCIA / TRIBUNAL DE CASACION**

Perfiles que debe tener el error fáctico para ser de recibo en casación. Distinción entre la atribución que le corresponde al juzgador de instancia y a la Corte como tribunal de casación. Cuándo los juicios del primero, admiten censura en casación.

Igual sentido: Casación Civil de 17 de junio de 1964 G.J. Tomo 107, pág. 277.

FUENTE FORMAL

: C. de P.C. Art.: 368 Numral.: 1o.

**INTERRUPCIÓN PROCESAL/ APODERADO- Muerte o Enfermedad Grave / REGISTRO DE DEFUNCIÓN / NULIDAD PROCESAL**

Qué determina la interrupción del proceso civil. Uno de esos eventos interruptivos es la muerte o enfermedad grave del apoderado judicial de alguna de las partes, que tipifica un acontecimiento que legis y en cuanto prueba acabada del mismo se allegue en la forma y tiempo debidos, lleva consigo la paralización del proceso desde el momento en que tuvo lugar, lo que implica que quede viciada por principio al menos toda la actuación surtida con posterioridad, hasta tanto reanudarla no fuere legalmente posible.

En el presente caso, obra en el expediente copia auténtica del registro de defunción del apoderado judicial y se declara la nulidad de lo actuado.

PONENTE	: Carlos Esteban Jaramillo Schloss (Solo)
AUTO DE REVISION (217)	
FECHA	: 07/07/1994
DECISION	: DECLARA NULIDAD DE LO ACTUADO
PROCEDENCIA	: T.S.D.J.
CIUDAD	: IBAGUE
SUJETOS	:
DEMANDADO	GUTIERREZ DE GONGORA, EDELMIRA
DEMANDANTE	DIAZ DIAZ, ATANOL
SOLICITADO POR	Parte Recurrente
PROCESO	: 004655
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: C. de P.C. Art.: 168, 169, 140 num. 5 del C. de P.C.

**CASACION - Cumplimiento Sentencia Recurrída / CASACION-Carga Procesal / CASACION-Copias / CASACION-Deserción**

Cuando el fallo objeto de esta impugnación no esté comprendido dentro de las salvedades de que trata el art. 371 del C. de P.C., lo decidido en él debe cumplirse, y para tal fin, el Tribunal debe ordenar al recurrente que suministre en el término allí establecido, lo necesario para que se expidan las copias que él determine, a fin de que sean remitidas al Juez de primera instancia, y éste disponga lo pertinente para su cumplimiento. En el

evento en que el Tribunal no ordene la expedición de copias, sobre el recurrente grava la carga de suministrar lo indispensable para dicho fin, si la sentencia recurrida no es de las que están exentas de cumplimiento y, por ende, debe impetrar la expedición de las que con tal propósito considere necesarias, so pena de que se declare desierto el recurso.

**AUTO DE SALA (221)**

FECHA : 07/07/1994  
 DECISIÓN : INADMISIBLE Y DESIERTO RECURSO DE  
 CASACION  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : SANTIAGO DE CALI  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : ASEGURADORA COLSEGUROS S.A.  
 DEMANDANTE : CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y  
 MINERO  
 PROCESO : 005065  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 371.

11/07/1994

**SUPLICA / CASACION - Admisión / CASACION-Cumplimiento Sentencia  
 Recurrida / IMPERATIVO PROCESAL.**

1) Procedencia del recurso de súplica, en tratándose del auto que resuelve sobre la admisión del recurso de casación.

2) Cumplimiento de los fallos recurridos en casación. Excepción Imperativos procesales del interés de los litigantes cuando recurren a través de este medio de impugnación.

(igual sentido: Auto del 10 de mayo de 1994. N.P.)

**AUTO DE SUPLICA (224)**

FECHA : 11/07/1994  
 DECISIÓN : MANTIENE AUTO PROFERIDO POR MAGIS-  
 TRADO PONENTE  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : SANTAFE DE BOGOTA, D.C.  
 SUJETOS :  
 Mercedes  
 DEMANDADO : Ana Mercedes Espinosa  
 DEMANDANTE : García Alvarado, Rogelio  
 PROCESO : 005016  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 363, 371.

**CONFLICTO DE ATRIBUCION / REVISION-Procedencia / TRIBUNAL SUPERIOR / JURISDICCION CIVIL.**

El recurso extraordinario de revisión es procedente, entre otras, contra las sentencias cje-

autorizadas pronunciadas por los Jueces Civiles del Circuito, recurso éste del cual han de conocer, en única instancia, las Salas Civiles de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial correspondiente. Ello se predica de las sentencias proferidas en asuntos netamente civiles, tanto por los Jueces Civiles del Circuito como de aquellos Jueces Promiscuos del Circuito que, por su competencia, conozca de aquellos. Así mismo aquellos fallos que en asuntos civiles conozcan otros Jueces (de Familia, Laboral o Penal), tal como cuando, por razón de impedimento o recusación del Juez Civil del Circuito competente, tengan que conocer excepcionalmente de "asuntos civiles", en estos eventos actúan como Jueces Civiles y no como otros jueces especializados.

**PONENTE** : Pedro Lafont Planetta  
**AUTO DE CONFLICTO (223)**  
**FECHA** : 11/07/1994  
**DECISION** : ABSTENERSE DECIDIR APARENTE CONFLICTO  
**PROCEDENCIA** : T. S. D.J. (SALA CIVIL Y FAMILIA)  
**CIUDAD** : SANTA MARTA  
**SUJETOS** :  
**DEMANDADO:** ANGELA ROSA RODRIGUEZ DE HENRIQUEZ  
**DEMANDANTE** MARIA ROSARIO RODRIGUEZ DE BARRANCO  
**PROCESO** : 005057  
**PUBLICADA** : No  
**FUENTE FORMAL** : C. de P.C. Art. 379, 26 ibídem.

#### **CONFLICTO DE COMPETENCIA / SUCESSION**

En el presente caso, no existe conflicto de ninguna clase que deba ser destacado, ni de tipo positivo ni de tipo negativo, respecto de un proceso de sucesión.

**PONENTE** : Carlos Esteban Jaramilla Schloss  
**AUTO DE CONFLICTO DE COMPETENCIA (222)**  
**FECHA** : 11/07/1994  
**PROCEDENCIA** : Jdo.2 Pco.Flia.-Pco.Flia.  
**CIUDAD** : Florencia- Garzón. (Huila)  
**SUJETOS** : SUCESSION DE LETICIA SANCHEZ DE PEÑA  
**DECISION** : SE DISPONE ENVIAR ACTUACION AL J. 2o.  
**PCUO. FLIA.FLORENCIA (CAQUETA)**  
**PROCEDENCIA** : 1.2o.PCUO. FLIA.-PÇO. FLIA.  
**CIUDAD** : FLORENCIA-GARZON  
**PROCESO** : 005055  
**PUBLICADA** : No

13/07/1994

#### **CONFLICTO DE COMPETENCIA / CONFLICTO DE JURISDICCION / CORTE SUPREMA DE JUSTICIA/ JURISDICCION CIVIL / JURISDICCION DE FAMILIA**

Si ciertamente la ley no le atribuye a la Corte en pleno competencia para dirimir conflic-

tos de jurisdicción o de competencia que se susciten entre dos juzgados pertenecientes a un mismo distrito judicial, esta Corporación se abstiene de decidirlo, y consecuentemente, dispone el envío de la actuación al Tribunal Superior correspondiente, a fin de que haga el pronunciamiento debido.

Igual sentido: providencia del 7 de octubre de 1993

#### Salvamento de Voto:

El asunto debió ser asumido y resuelto directamente por la Corte. El conflicto que surge entre un juez civil y uno de familia con respecto al límite de sus atribuciones, no puede concebirse como de competencia, sino de jurisdicción.

**PONENTE** : Pedro Lafont Pinnoua  
**AUTO DE CONFLICTO DE COMPETENCIA(276)**  
**FECHA** : 13/07/1994  
**DECISION** : SE ABSTIENE CONOCER CONFLICTO  
**PROCEDENCIA** : J.27 CIV.CTO. 18 DE F.I.A.  
**CIUDAD** : ambos de SANTAPE DE BOGOTA, D.C.  
**SUJETOS** :  
**DEMANDADO** : Rodríguez Gnatavita, Vicente y otros  
**DEMANDANTE** : Díaz de Díaz, Ana Teresa y otros  
**PROCESO** : 004889  
**PUBLICADA** : No  
**NOTAS ACLARATORIAS** : SALVAN VOTO: Drs. Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor María Naranjo y Pedro Lafont Pinnoua.  
**FUENTE FORMAL** : C.N. Art. 256; decreto Num.: 2652 Año: 1991; C. de P.C. Art. 28; C. de P.T. Art. 152; DECRETO Num.: 528 Año: 1964; C.N. Art. 116, 246, 247, 221.

14/07/1994

#### \* CONFLICTO DE JURISDICCION/ CONFLICTO DE COMPETENCIA / CORTE SUPREMA DE JUSTICIA/ JURISDICCION CIVIL/ JURISDICCION DE FAMILIA

Si ciertamente la ley no le atribuye a la Corte en pleno competencia para dirimir conflictos de jurisdicción o de competencia que se susciten entre dos juzgados pertenecientes a un mismo distrito judicial, esta Corporación se abstiene de decidirlo, y consecuentemente, dispone el envío de la actuación al Tribunal Superior correspondiente, a fin de que haga el pronunciamiento debido.

Igual sentido: Autos del 7 de octubre de 1993, 3 y 8 de marzo de 1994.

#### SALVAMENTO DE VOTO:

El asunto debió ser asumido y resuelto directamente por la Corte. El conflicto que surge entre un juez civil y uno de familia con respecto al límite de sus atribuciones, no puede concebirse como de competencia, sino de jurisdicción.

**PONENTE** : Rafael Romero Sierra  
**AUTO DE CONFLICTO (228)**  
**FECHA** : 14/07/1994  
**DECISION** : ABSTENERSE DECIDIR CONFLICTO  
**PROCEDENCIA** : J. 2o.Civ.Clo.-1o.Pauo. de Flia.  
**CIUDAD** : umbos de Tulua  
**SUJETOS** :  
**DEMANDADO** : Cadena Erazo, Silvio  
**DEMANDANTE** : Millan Sánchez, Visitación  
**PROCESO** : 804997  
**PUBLICADA** : No  
**NOTAS ACLARATORIAS** : SALVAN VOTO: Drs. Carlos Esteban Jaramillo Schloss; Héctor Marín Naranjo ; Pedro Lafont Pianetta .  
**FUENTE FORMAL** : C. N. Art.: 256; DECRETO Num.: 2652 Año: 1991; C. de P.C. Art.: 28; C. de P.T. Art.: 152 ; DECRETO Num.: 528 Año: 1964; C.N. Art.: 246, 247, 221 ibídem.

#### **CASACION - Cumplimiento Sentencia Recurrída /**

#### **CASACION-Copias / CASACION-Carga Procesal**

Si la sentencia recurrida debe cumplirse, incumbe al tribunal indicar en el auto que concede el recurso de casación las piezas procesales que deben copiarse para tal efecto. Impero, si así no acontece, esto es, si no se pronuncia al respecto, gravita sobre el recurrente la carga procesal de solicitar su expedición, so pena de que se declare desierto el recurso.

#### **AUTO DE CASACION (229)**

**FECHA** : 14/07/1994  
**DECISION** : INADMISIBLE Y DESIERTO RECURSO DE  
**CASACION**  
**PROCEDENCIA** : T.S.D.J.  
**CIUDAD** : SAN JUAN DE PASTO  
**SUJETOS** :  
**DEMANDADO** : Montenegro Montenegro, José Manuel; y otros.  
**DEMANDANTE** : Vilalba Villacís, Luis Gonzalo Hernán  
**PROCESO** : 005073  
**PUBLICADA** : No  
**FUENTE FORMAL** : C. de P.C. Art.: 371

21/07/1994

#### **CONFLICTO DE COMPETENCIA / TITULO VALOR/ FUERO CONTRAC-** **TUAL**

Cuando se cobra compulsivamente un título valor, no es viable tener en cuenta las normas del Código de Comercio, ni el fuero concurrente señalado en el numeral 5o. del artículo 23 del C. de P.C., a menos que exista prueba incontrovertible de un contrato suscrito entre las futuras partes procesales.

Igual sentido: Auto del 26 de marzo de 1992; auto del 28 de octubre de 1993. Exp.: No. 4656, N.P.

### **JURISDICCION ORDINARIA**

Clasificación de la jurisdicción ordinaria, en virtud del principio de la especialidad de las diversas materias.

Igual sentido: Sentencia del 29 de abril de 1994, N.P.

### **AUTO DE CONFLICTO DE COMPETENCIA (231)**

**FECHA** : 21/07/1994  
**DECISION** : J. 4o. CIVIL MUNICIPAL DE TUNJA COMPETENTE  
**PROCEDENCIA** : J.1o. CIV. MPAL-4o. CIV. MPAL.  
**CIUDAD** : SOGAMOSO-TUNJA  
**SUJETOS** :  
**DEMANDADOS** : TIZAMBRE OCHOA, RITA y CAMARGO, BARBARA.  
**DEMANDANTE** : CIRCULO DE LECTORES S.A.  
**PROCESO** : 005071  
**PUBLICADA** : No  
**FUENTE FORMAL** : C. de P.C. Art. 23 NUM.1

22/07/1994

### **PRECLUSION / REVISION-Oportunidad / RECURSO ORDINARIO -Diferencias / CASACION - Diferencias**

Concepto de preclusión. Sin embargo de que la revisión, a diferencia de los recursos ordinarios y también de la casación, supone que la acción inicial y el proceso que ésta genera se hallen agotados, su ejercicio tiene que seguirse también por el principio preclusivo.

Igual sentido: Providencia del 20 de septiembre de 1974 N.P.

**PONENTE** : Eduardo García Samaniego  
**AUTO DE REVISION (233)**  
**FECHA** : 22/07/1994  
**DECISION** : INADMISIBLE DEMANDA DE REVISION  
**PROCEDENCIA** : T.S.D.J.  
**CIUDAD** : MEDELLIN  
**SUJETOS** :  
**DEMANDANTE** : Bravo de Ríos, Netty del Socorro  
**DEMANDADO** : Martínez Sierra, Margarita Adolina y otros  
**PROCESO** : 005087  
**PUBLICADA** : No

### **REVISION - Deserción / REVISION-Caución**

Se declara desierto el recurso extraordinario de revisión, en razón de que la parte interesada no prestó la caución exigida para que éste fuera tramitado como lo ordena el pri-



mer inciso del art. 383 del C. de P.C.

PONENTE	: Eduardo García Sarmiento (Solo)
AUTO DE REVISION (232)	
FECHA	: 22/07/1994
DECISION	: Se declara desierto recurso
PROCEDENCIA	: T.S.D.J.
CIUDAD	: SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.
SUJETOS	:
DEMANDADO	: Matíz, Hernando
DEMANDANTE	: Murillo Alvarado, Ana Belén,
PROCESO	: 005049
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: C. de P.C. Art. 383 Inciso: 1o.

25/07/1994

#### DEMANDA DE EXEQUATUR- Traslado/ DECRETO DE PRUEBAS

Surtido el traslado de la demanda, se abre a pruebas la tramitación conforme lo establecido en el numeral 5o. del artículo 695 del C. de P.C.

PONENTE	:
AUTO DE EXEQUATUR (235)	
FECHA	: 25/07/1994
DECISION	: SE ABRE A PRUEBAS LA PRESENTE TRAMITACION
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: C. de P.C. Art. 695 Numeral: 5.

#### CASACION - Cumplimiento Sentencia Recorrida

El tribunal en acatamiento del artículo 371 del C. de P.C., ha debido ordenar las copias para con ellas se cumpliera la sentencia; al no hacerlo y tratarse de la impugnación contra una sentencia susceptible de ser cumplida, el casacionista no puede exonerarse de la carga vista con solo pretextar que el tribunal no se la ordenó cumplir y debía solicitar su expedición, suministrando los emolumentos indispensables.

Igual sentido: Auto de 22 de octubre de 1990

PONENTE	: Carlos Esteban Jaramillo Schloss
AUTO DE CASACION (234)	
FECHA	: 25/07/1994
DECISION	: INADMISIBLE POR ENCONTRARSE DESIERTO EL RECURSO DE CASACION
PROCEDENCIA	: T.S.D.J.
CIUDAD	: SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.
SUJETOS	:
DEMANDADO	: Soc. Transportes de Carga Expreso Bolivariano Ltda.
DEMANDANTE	: Soc. EXIMAS LTDA.

PROCESO : 005092  
PUBLICADA : No  
FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 371

28/07/1994

**CONFLICTO DE COMPETENCIA/ CONFLICTO DE JURISDICCION / CORTE SUPREMA DE JUSTICIA/ JURISDICCION CIVIL/ JURISDICCION DE FAMILIA**

Si ciertamente la ley no le atribuye a la Corte en pleno competencia para dirimir conflictos de jurisdicción o de competencia que se susciten entre dos juzgados pertenecientes a un mismo distrito judicial, esta Corporación se abstiene de decidirlo, y consecuentemente, dispone el envío de la actuación al Tribunal Superior, a fin de que haga el pronunciamiento debido.

Igual sentido: Providencia del 7 de octubre de 1993.

**SALVAMENTO DE VOTO:**

El asunto debió ser asumido y resuelto directamente por la Corte. El conflicto que surge entre un juez civil y uno de familia con respecto al límite de sus atribuciones, no puede concebirse como de competencia, sino de jurisdicción.

PONENTE : Pedro Laforst Pianetta  
AUTO DE CONFLICTO (238)  
FECHA : 28/07/1994  
DECISION : ABSTIENE DE CONOCER CONFLICTO  
PROCEDENCIA : T.S.J.F.A.-31 CIV. MPAL.  
CIUDAD : SANTAFE DE BOGOTA  
SUJETOS :  
DEMANDADO : SUCESION DE HUMBERTO ARIZA ARDILA  
DEMANDANTE : Ariza Ariza, Juvenal  
PROCESO : 005611  
PUBLICADA : No  
NOTAS ACLARATORIAS : SALVAN VOTO: Drs. Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor María Narango y Pedro Laforst Pianetta.  
FUENTE FORMAL : C.N. Art.: 256, 116, 246, 247, 221 ibídem.

**CASACION-Deserción**

En el caso sub-judice, se da aplicación al inciso 3o. del art. 373 del C. de P.C. y subsecuentemente se declara desierto el recurso de casación.

PONENTE : Rafael Romero Sierra  
AUTO DE CASACION (241)  
FECHA : 28/07/1994  
DECISION : SE DECLARA DESIERTO EL RECURSO DE CASACION  
CASACION  
PROCEDENCIA : T.S.D.J.

CIUDAD	: SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.
SUJETOS	:
DEMANDADOS	: MANOTAS CORREA, JUAN PABLO c/ INVER-
SIONES Y PROMOCIONES MACOR LTDA.	
DEMANDANTE	: CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA
COLMENA	
INTERPUESTO POR	: Parte demandante
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: C. de P.C. Art.: 373 Inciso: 3

29/07/1994

**SUPLICA / CASACION-Admisión**

Se revoca el auto suplicado por medio del cual se admitió el recurso de casación propuesto por la parte demandante, a fin de remitir de nuevo el expediente al Tribunal de origen para que haga las constataciones a su cargo para determinar si es o no procedente dicho recurso por razón de la cuantía.

PONENTE	: Héctor Marín Naranjo
AUTO DE SUPLICA (238 A)	
FECHA	: 29/07/1994
DECISION	: REVÓCA AUTO ADMISORIO DEL RECURSO
DE CASACION	
SUJETOS	:
DEMANDADOS	: Muñoz López, Diego Gabriel y otros
DEMANDANTE	: Rojas, Marco Antonio
PROCESO	: 0015042
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: C. de P.C. Art.: 363, 366, 372, 370 ibídem.

**CONFLICTO DE COMPETENCIA/ COMPETENCIA TERRITORIAL / CONTRATOS / SOCIEDAD-Sucursal**

Regla general para determinar la competencia territorial. Regla especial contenida en el numeral 5 del art. 23 del C. de P.C., relacionada con los procesos a que da lugar un contrato. En el presente caso, ante la inexistencia de sucursales en agencias de la firma demandada, en su defecto, debe aplicarse la regla general de competencia contenida en el numeral 1o. del precitado artículo, sin que para tal efecto tenga incidencia alguna el lugar de su cumplimiento.

PONENTE	: Rafael Romero Sierra
AUTO DE CONFLICTO DE COMPETENCIA (239)	
FECHA	: 29/07/1994
DECISION	: J.CIV. CTO. SANTIAGO DE CALI COMPETEN-
TE	
PROCEDENCIA	: J.12 CIV.CTO.-UNICO CIV. CTO.
CIUDAD	: BARRANQUILLA-RIOHACHA
SUJETOS	:

DEMANDADO : Transportes Atlas Ltda. "Trans Atlas"  
 DEMANDANTE : Colombiana de Drogas Barranquilla Ltda.  
 PROCESO : 1005046  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art. 23 Numeral: 1 y 7.

03/08/1994

**CASACION-Deserción**

Los motivos de deserción del recurso son de orden legal procesal, de orden público y obligatorio cumplimiento, de efectos inmediatos y que inciden sobre el trámite del recurso que se ha adelantado no obstante su preexistencia; por ende, si se observan con posterioridad a su ocurrencia, ello amado seguir adelante con la actuación.

PONENTE : Héctor Marín Naranjo  
 AUTO DE CASACION (244)  
 FECHA : 03/08/1994  
 DECISION : SE INADMITE DEMANDA DE CASACION  
 DEMANDADO : Horno de Mariacuri, Lda. en  
 DEMANDANTE : Jiménez Torres, Otaniel  
 PROCESO : 004960  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art. 371.

04/08/1994

**CONFLICTO DE COMPETENCIA / CHEQUE/ TITULO VALOR/ FUERO CON-  
CURRENTE**

Como la expedición del cheque, al igual que la de los títulos valores en general, no tienen naturaleza contractual, no resulta viable elegir como fuero de competencia el fuero concurrente señalado en el numeral 5o. del artículo 23 del C. de P.C., sino el general contemplado en el numeral 1o. del precitado artículo.

Igual sentido: providencias del 2 de julio de 1986; 15 y 18 de abril de 1994

PONENTE : Rafael Romero Sierra  
 AUTO DE CONFLICTO DE COMPETENCIA (245)  
 FECHA : 04/08/1994  
 DECISION : 1. CIV. CTO. RIONEGRO (ANT) COMPETENTE  
 PROCEDENCIA : 1. CIV. CTO.- 4o. CIV. CTO.  
 CIUDAD : RIONEGRO-MEDELLIN  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO: EDIFICADORA TORREMARINA LTDA  
 DEMANDANTE : ESTRADA BOTERO, RUBEN JAIRO  
 PROCESO : 1005063  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art. 23 Numeral: 1 Y 5.

08/08/1994

# **INTERPRETACION DE LA DEMANDA / DERECHO SUSTANCIAL / DERECHO DE DEFENSA / INCONGRUENCIA/ AUTONOMIA DEL JUZGADOR / ERROR DE HECHO**

1) Si al estudiar la demanda se encuentra que ésta no ofrece la suficiente claridad y precisión en los hechos ni en las súplicas, el juez está llamado a interpretarlo para desentrañar el verdadero propósito de su autor y no sacrificar el derecho sustancial, labor que sin embargo no le da atribuciones para pronunciarse, al momento de fallar, sobre pretensiones no propuestas o hechos no invocados, pues esta conducta, que sería de recreación del libelo y no de interpretación del mismo, no solo violaría el derecho de defensa del demandado sino que volvería el fallo incongruente.

2) Eventos en los cuales sea innecesaria la labor interpretativa del Juez, para obtener el recto sentido de la demanda.

3) Autonomía del Juzgador para interpretar la demanda, salvo error evidente de hecho. Igual sentido: sentencia del 21 de julio de 1987; Sentencia de 4 de Noviembre de 1970, Tomo CXXXVI, págs. 82 y 83.

PONENTE	: Carlos Esteban Jaramillo Schloss
SENTENCIA DE CASACION (098)	
FECHA	: 08/08/1994
DECISION	: NO CASA
PROCEDENCIA	: T.S.D.J.
CIUDAD	: TUNJA
SUJETOS	:
DEMANDADO	SEMINARIO CONCILIAJ DE TUNJA o SEMINARIO MAYOR DE LA ARQUIDIOCESIS DE TUNJA
DEMANDANTE	FUN. CAJA VOCACIONAL (en liquidación)
PROCESO	: 004288
PUBLICADA	: No

## **DEMANDA DE REVISION/ REVISION-Inadmisión**

1) Procedencia del recurso de revisión.

2) En el presente caso, el recurrente omitió identificar la sentencia, su fecha y el día en que quedó ejecutoriada, razón por la cual se declara inadmisibile la demanda de revisión y se le concede el término legal para subsanar tales defectos.

PONENTE	: Rafael Romero Sierra
AUTO DE REVISION (249)	
FECHA	: 08/08/1994
DECISION	: SE INADMITE DEMANDA DE REVISION
SUJETOS	:
INTERPUESTO POR	Ricón Galvis, Nahon Estanislao
PROCESO	: 005115
PUBLICADA	: No

**FUENTE FORMAL**

: C. de P.C. Art.: 379, 382, 383 ibídem.

**PROCESO CIVIL / NULIDAD PROCESAL-Resolución / PODER DEL JUZGA-DOR**

En el ámbito del proceso civil, para despojar de sus efectos a una determinada actuación específicamente afectada por alguno de los vicios que señalan los arts. 140 y 141 del C. de P.C., es necesaria por regla general una declaración judicial, habida cuenta que, salvo en el caso de la simulación particular que con relación a la prueba contemplada en el inciso final del art. 29 de la C.N., la nulidad no opera de pleno derecho y es por lo tanto indispensable la correspondiente resolución. En el presente caso, se desecha la solicitud de nulidad al tenor de lo dispuesto en el art. 38, num. 2 del C. de P.C.

**PONENTE**

: Carlos Esteban Jaramillo Schloss (Solo)

**AUTO DE REVISION (247)****FECHA**

: 08/08/1994

**DECISION**

: SE RECHAZA LA SOLICITUD DE NULIDAD

**SUJETOS**

:

**DEMANDADO**

: BOTERO SALAZAR S.A.

**DEMANDANTE**

: CALLO ZULUAGA, ARTURO

**PROCESO**

: 004733

**PUBLICADA**

: No

**FUENTE FORMAL**

: C. de P.C. Art.: 38 Numral.: 2; 140, 141 ibídem;

C.N. : Art.: 29.

**SUPLICA**

En el caso sub iudice, el recurso de súplica es extemporáneo y consecuentemente, no se abre paso:-

**AUTO DE SUPLICA (246)****FECHA**

: 08/08/1994

**DECISION**

: RECHAZA RECURSO PROPUESTO

**PROCEDENCIA**

: T.S.D.J.

**CIUDAD**

: SANTAPE DE BOGOTA, D.C.

**SUJETOS**

:

**DEMANDADO**

: RIOS MARTINEZ, ARGENIO

**DEMANDANTE**

: GÓMEZ GUTIERREZ, CARLOS

**INTERPUESTO POR**

: El demandado

**PROCESO**

: 005027

**PUBLICADA**

: No

**FUENTE FORMAL**

: C. de P.C. Art.: 363.

**CONFLICTO DE COMPETENCIA / ACCION CAMBIARIA / TITULO VALOR / COMPETENCIA TERRITORIAL**

1) En relación con el art. 23 numeral 5 del C. de P.C., cuando se pretende el ejercicio de una acción cambiaria determinada por el cobro de un título valor por la vía ejecutiva, y no de una acción de responsabilidad por incumplimiento, no existe razón para acudir a

dicha norma. En estos eventos debe aplicarse la norma general contenida en el numeral 1o. del citado artículo.

2) El artículo 621 del C. de Co., no es una norma que indique la competencia por facción territorial de los procesos judiciales. Carácter supletorio de esta norma.

PONENTE : Carlos Esteban Jaramillo Schloss  
**AUTO DE CONFLICTO DE COMPETENCIA (248)**  
 FECHA : 08/08/1994  
 DECISION : J. 24 CIV. MPL. DE SANTA FE DE BOGOTA  
 COMPETENTE  
 PROCEDENCIA : 24o. CIV. MPL.-24 CIV. MPAL.  
 CIUDAD : MEDALLIN-SFE. DE BOGOTA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Yunayusa Villarreal, Héctor Ricardo  
 DEMANDANTE : Soc. Mercallanas Ltda.  
 PROCESO : 005094  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art. 23 Numeral: 1, 5 ibídem: C. de Co.  
 : Art. 621.

09/08/1994

#### **DEMANDA-Rechazo/ ANEXOS**

De conformidad con el art.85 del C. de P.C., y so pena del rechazo, dentro del término de cinco días, se pide al actor allegar anexos a la demanda.

PONENTE : Rafael Romero Sierra (Solo)  
**AUTO (252)**  
 FECHA : 09/08/1994  
 DECISION : SE PIDE AL ACTOR ALLEGAR DOCUMENTOS  
 PROCESO : 005097  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art. 85

#### **DECRETO DE PRUEBAS**

Se abre a pruebas el presente asunto.

PONENTE : Eduardo García Samciento (Solo)  
**AUTO (251)**  
 FECHA : 09/08/1994  
 DECISION : SE RESUELVE SOBRE LAS PRUEBAS PEDIDAS POR LAS PARTES  
 PROCESO : 004875  
 PUBLICADA : No

**CONFLICTO DE JURISDICCION/ CONFLICTO DE COMPETENCIA / CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / JURISDICCION CIVIL / JURISDICCION DE FAMILIA**



**LIA**

Si ciertamente la ley no le atribuye a la Corte en pleno competencia para dirimir conflictos de jurisdicción o de competencia que se susciten entre dos juzgados pertenecientes a un mismo distrito judicial, esta Corporación se abstiene de decidirlo, y consecuentemente, dispone el envío de la actuación al Tribunal Superior correspondiente, a fin de que haga el pronunciamiento debido.

Igual sentido: providencia del 7 de octubre de 1993.

**SALVAMENTO DE VOTO:**

El asunto debió ser asumido y resuelto directamente por la Corte. El conflicto que surge entre un juez civil y uno de familia con respecto al límite de sus atribuciones, no puede concebirse como de competencia, sino de jurisdicción.

PONENTE	: Alberto Ospina Botero
AUTO DE CONFLICTO (250)	
FECHA	: 09/08/1994
DECISIÓN	: ABSTENERSE DECIDIR CONFLICTO
PROCEDENCIA	: J. 16 CIV. CTÓ.- 2o. PCO FLIA
CUIDAD	: TULUA
SUJETOS	
DEMANDADO	: Restrepo Sarmiento, Antonio José
DEMANDANTE	: Mallica Cuellar, Esperanza
PROCESO	: 004998
PUBLICADA	: No
NOTAS ACLARATORIAS	: SALVAN VOTO: Drs. Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Héctor Marín Naranjo y Pedro Lafont Planella.
FUENTE FORMAL	: C.N. Art.: 256, 116, 246, 247, 221 ibídem; DECRETO Num.: 2652 Año: 1991, C. de P.C. Art.: 24, C. de P.T. Art.: 152; DECRETO Num.: 328 Año: 1964

10/08/1994

**ERROR DE HECHO Y DE DERECHO/ CASACION-Carga Procesal/ PRETERICION PROBATORIA/ PRUEBAS-Valoración en Conjunto (1)**

1) Mientras el error de hecho se desplaza en el plano de la materialidad o corporeidad de la prueba, el de derecho lo hace en el de su normatividad. Carga procesal del casacionista en tratándose de estas dos clases de yerros.

2) Una cosa es que la prueba no sea apreciada por no haber sido percibida, y otra muy diferente que no se la correlacione con los restantes que obran en el proceso; en aquello hay preterición de la prueba, y en este transgresión del artículo 187 del C. de P.C.

**CASACION - Característica (2)**

La casación es un recurso excepcional, no asimilable a otra instancia más del proceso.

PONENTE	: Héctor Marín Naranjo
SENTENCIA DE CASACION (101)	

FECHA	: 10/08/1994
DECISION	: NO CASA
PROCEDENCIA	: T.S.D.J.
CIUDAD	: SANTA FE DE BOGOTA, D.C.
SUJETOS	:
DEMANDADOS	: INVERSIONES BELTRAN INBEL LTDA y otros.
DEMANDANTE	: GOMEZ GRANADOS, RAFAEL ALFREDO
PROCESO	: 003797
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: C. de P.C. Art. 374, Art. 187.

#### DEMANDA DE CASACION / NORMA SUSTANCIAL / NORMA PROBATORIA

1) Entre otros requisitos, la demanda de casación debe señalar, si se trata de la causal primera, las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas. Manera de señalar las normas de esa naturaleza, conforme al Decreto 2651 de 1991.

2) Los artículos 187 y 241 del Código de Procedimiento Civil, no son normas de carácter sustancial, sino de carácter probatorio, como que se refieren, el primero a la manera como se aprecian las pruebas en general y, el segundo, en particular, al dictamen pericial.

PONENTE	: Rafael Romero Sierra
AUTO (254)	:
FECHA	: 10/08/1994
DECISION	: INADMISIBLE Y DESIERTO RECURSO DE
CASACION	:
PROCEDENCIA	: T.S.D.J.
CIUDAD	: SANTA FE DE BOGOTA, D.C.
SUJETOS	:
DEMANDADO	: Cia Colombiana de semillas "Colsemillas Ltda."
DEMANDANTE	: Grigales Tabares, José Norberto
PROCESO	: 004991
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: C. de P.C. Art. 187, 241, 373, 368 num. 1. ibidem.

#### SENTENCIA EXTRANJERA / EXEQUATUR

La sentencia extranjera cuyo reconocimiento se solicita, debe ser definitiva de acuerdo con las reglas procesales propias del país donde ha sido dictada, y esa circunstancia debe aparecer cumplidamente demostrada para que pueda admitirse a trámite el pedido de exequatur.

PONENTE	: Carlos Esteban Jaramillo Schloss
AUTO DE EXEQUATUR (253)	:
FECHA	: 10/08/1994
DECISION	: SE RECHAZA DEMANDA DE EXEQUATUR
PROCEDENCIA	: Jo. FUJIMORI SUGINAMI-KU

CIUDAD : TOKIO (JAPON)  
 SUJETOS :  
 SOLICITADO POR : Lavane de Sato, María Angelica  
 PROCESO : 00N125  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art. 695 Numral; 2 Inciso: 3.

#### **EXPEDIENTE-Remisión / CASACION-Admisión**

Se verifica sobre si la remisión del expediente se realizó de conformidad con el art. 132 del C. de P.C., antes de resolver sobre la admisión del recurso de casación.

PONENTE : Rafael Romero Sierra (Solo)  
 AUTO DE CASACION (255)  
 FECHA : 11/08/1994  
 DECISION : SE LIBRA OFICIO AL TRIBUNAL Y A LA OFICINA DE "SERVIENTREGA", DE RIOHACHA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : RIOHACHA  
 PROCESO : 005118  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art. 132.

11/08/1994

#### **VIOLACION NORMA SUSTANCIAL- Vía Directa e Indirecta/ ERROR DE HECHO Y DE DERECHO/ CONTRATO DE SEGURO/ POLIZA DE SEGURO**

1) A la violación de la ley sustancial como motivo de casación, puede llegarse por dos vías diferentes: la directa y la indirecta. Presupuestos de cada una de éstas.

2) Precisión de los conceptos "error de hecho" y "error de derecho"; Punto común y diferencias entre estas dos clases de errores.

3) Error de derecho en tratándose del certificado de modificación si constituye o no prueba para demostrar la renovación de la póliza de seguro.

Igual sentido. Cas. Civ. de 7 de diciembre de 1990, sin publicar; Cas. Civ. de 20 de febrero de 1990, sin publicar; Cas. Civ. de 8 de junio de 1978.

PONENTE : Rafael Romero Sierra  
 SENTENCIA DE CASACION (103)  
 FECHA : 11/08/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : MEDELLIN  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : SEGUROS ALFA LTDA.  
 DEMANDANTE : SOC. CONTROL SISTEMATIZADO LTDA.  
 INTERPUESTO POR : Parte demandante

PROCESO : 004129  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 363 Numral.: 1.

12/08/1994

**CONFLICTO DE JURISDICCION/ CONFLICTO DE COMPETENCIA / CORTE SUPREMA DE JUSTICIA/ JURISDICCION CIVIL/ JURISDICCION DE FAMILIA**

Si ciertamente la ley no le atribuye a la Corte en pleno competencia para dirimir conflictos de jurisdicción o de competencia que se susciten entre dos juzgados pertenecientes a un mismo distrito judicial, esta Corporación se abstiene de decidirlo, y consecuentemente, dispone el envío de la actuación al Tribunal Superior correspondiente, a fin de que se haga el pronunciamiento debido.

Igual sentido: providencia del 7 de octubre de 1993.

**SALVAMENTO DE VOTO:**

El asunto debió ser asumido y resuelto directamente por la Corte. El conflicto que surge entre un juez civil y uno de familia con respecto al límite de sus atribuciones, no puede concebirse como de competencia, sino de jurisdicción.

PONENTE : EDUARDO GARCIA SARMIENTO  
 AUTO DE CONFLICTO (256)  
 FECHA : 12/08/1994  
 DECISION : ABSTENERSE DECIDIR CONFLICTO  
 PROCEDENCIA : JUICIO-FAMILIA  
 CIUDAD : ambos de ROLDANILLO  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Ballesteros Castro, Luis Angel  
 DEMANDANTE : Ballesteros Rios, Manglory y otros.  
 PROCESO : 005034  
 PUBLICADA : No  
 NOTAS ACLARATORIAS : SALVAN VOTO: Carlos Esteban Jaramillo Schloss; Héctor Murín Naranjo; Pedro Lafont Pianeta.  
 FUENTE FORMAL : C.N. Art.: 256, 116, 246, 247, 221 ibidem;  
 DECRETO Num.: 2652 Año: 1991, C. de P.T. Art.: 152; DECRETO Num.: 528 Año: 1961.

16/08/1994

**MEMORIAL / CASACION-Deserción/ PROVIDENCIA JUDICIAL-Ejecutoria**

Por extemporánea se rechaza la solicitud contenida en el memorial, toda vez que el auto que declaró desierta el recurso de casación, alcanzó ejecutoria sin haber sido impugnado en oportunidad.

PONENTE : Rafael Romero Sierra (Solo)  
 AUTO DE CASACION (260)  
 FECHA : 16/08/1994

DECISION	: SE RECHAZA LA SOLICITUD
SUJETOS	:
DEMANDANTE	: CUESTA DE CASTILLA, ELIDA
PUBLICADA	: No

**DEMANDA DE CASACION / DEMANDA-Inadmisión/ NORMA SUSTANCIAL**

1) Cuando entre las normas sustanciales que cita como vulneradas el demandante en casación, no se encuentre siquiera una que constituya "base esencial del fallo impugnado" o que debió serlo, la demanda así presentada no se ciñe a los requisitos formales exigidos por la ley, y por ende, debe inadmitirse.

2) El art. 946 del C.C. (sobre acción reivindicatoria), es una norma de carácter sustancial

Igual sentido: Sentencia del 7 de marzo de 1994, de Pedro León Hernández Morales contra Rosa Castrillón Tzucres, Magistrado Ponente: Dr. Héctor Marín Narango.

PONENTE	: SALA
AUTO DE CASACION (257)	:
FECHA	: 16/08/1994
DECISION	: INADMISIBLE Y DESIERTO RECURSO DE
CASACION	:
SUJETOS	:
DEMANDADO	: Castillo Rodríguez, Wenceslao
DEMANDANTE	: Cheverría Nahu, José Anibal
PROCESO	: 005008
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: DECRETO Num.: 2651 Año: 1991 Art.: 51; C.C. :
Art.: 946	:

**DESISTIMIENTO DEL RECURSO /****CASACION - Desistimiento**

Se acepta el desistimiento del recurso de casación.

AUTO DE CASACION (259)	:
FECHA	: 16/08/1994
DECISION	: SE ACEPTA EL DESISTIMIENTO DEL RECURSO
PROCEDENCIA	: T.S.D.J.
CIUDAD	: SAN GU.
SUJETOS	:
DEMANDADO	: Burgos de Alvarez, Inés; Alvarez Burgos, Luis
Antrio.	:
DEMANDANTE	: MELGAREJO BUSTAMANTE, JULIO
PROCESO	: 005631
PUBLICADA	: No

**FUENTE FORMAL**

: C. de P.C. Art.: 345

17/08/1994

**CONFLICTO DE COMPETENCIA/ COMPETENCIA TERRITORIAL- Fueros/ DOMICILIO/ PROCESO EJECUTIVO**

Uno de los factores de competencia es el territorial, en virtud del cual, entre los distintos funcionarios judiciales de una misma categoría se asigna el conocimiento de un proceso determinado a uno de ellos, en atención a los fueros personal o general, real, contractual o concurrente, según fuere el caso. Pluralidad de domicilios. Competencia para conocer de un proceso ejecutivo.

**PONENTE**

Pedro Jañoni Planeta

**AUTO DE CONFLICTO DE COMPETENCIA (261)****FECHA**

: 17/08/1994

**DECISION**

: 148 CIV.MPL. SANTAFÉ DE BOGOTÁ COMPETENTE

**PROCEDENCIA**

: 148 CIV.MPL.-1o.CIV.MPAL.

**CIUDAD**

: SFE. DE BTA.-CHIBQUINUTRA

**SUJETOS**

:

**DEMANDADO**

GOMEZ CASALLAS, STELLA

**DEMANDANTE**

GOMEZ, HERBERTO

**PROCESO**

: 005084

**PUBLICADA**

: No

**FUENTE FORMAL**

: C. de P.C. Art.: 23

18/08/1994

**DEMANDA DE REVISION/ REVISION-Inadmisión**

Entre otros requisitos, la demanda de revisión debe contener el nombre y domicilio de las personas que fueron parte en el proceso en que se dictó la sentencia para con ellas se siga el procedimiento de revisión. En el presente caso, por no haberse manifestado aquél domicilio, se declara inadmisión la demanda en referencia, y se concede un plazo para subsanar el defecto so pena de ser rechazada sin más trámite.

**PONENTE**

: Carlos Eusebio Jaramillo Schloss (Solo)

**AUTO DE REVISION (263)****FECHA**

: 18/08/1994

**DECISION**

: INADMISIBLE DEMANDA DE REVISION

**PROCESO**

: 005138

**PUBLICADA**

: No

**FUENTE FORMAL**

: C. de P.C. Año: Art.: 382 Numal.: 2; C. de P.C. Art.: 383 Numal.: Inciso: 3.

**DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA**

Se acepta el desistimiento de la demanda, por cuanto el escrito fué presentado con observancia de los requisitos exigidos por la ley

AUTO (264)  
 FECHA : 18/08/1994  
 DECISION : SE ACEPTA DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Corporación Financiera de Cundinamarca  
 DEMANDANTE : Cia Industrial Y Comercial Ltda  
 PROCESO : 005017  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 342, 343, 345 ibidem.

#### RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL- ACTIVIDAD PELIGROSA / CULPA

A la víctima le basta demostrar los hechos que determinan el ejercicio de una actividad peligrosa y el perjuicio sufrido y será el demandado quien deba comprobar que el accidente ocurrió por la imprudencia exclusiva de la víctima, por la intervención de un elemento extraño, o por fuerza mayor o caso fortuito, ya que el ejercicio de una actividad peligrosa, por su naturaleza, lleva envuelto el de culpa en caso de accidente.

Igual sentido: Sentencia de 17 de junio de 1964, G.J. CIVIL, 811

19/08/1994

#### VIOLACION NORMA SUSTANCIAL - Ataque todos los fundamentos

Aunque el recurrente acusa la sentencia por violación de varias disposiciones civiles, la Corte no tiene necesidad de entrar en el estudio de los motivos alegados para sustentar esa violación, si la sentencia trae como base principal de ella una apreciación que no ha sido atacada en casación, ni por violación de la ley, ni por error de hecho o de derecho, y esa apreciación es más que suficiente para sustentar el fallo acusado.

Igual sentido: G.J. t. LXXI, pág. 710, t. LXXIII, p.45; t. LXXV, p. 52.

PONENTE : Rafael Romero Sierra  
 SENTENCIA DE CASACION (104)  
 FECHA : 19/08/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : SANTIAGO DE BOGOTA, D.C.  
 SUJETOS :  
 DEMANDANTE : RODRIGUEZ NEIRA, CLARA CECILIA y otros.  
 INTERPLESTO POR : Parte demandante  
 PROCESO : 004099  
 PUBLICADA : No

22/08/1994

#### DEMANDA-Requisitos / ANEXOS

La demanda, además de cumplir con los requisitos legales, debe venir acompañada de las copias y anexos que determina el art. 84 del C. de P.C.



PONENTE	: Alberto Ospina Botero (Solo)
AUTO UNITARIO (270)	
FECHA	: 22/08/1994
DECISION	: SE RECHAZA LA DEMANDA PRESENTADA
SUJETOS	:
DEMANDADO	: Sociedad Félix Isaza Y cía
SOLICITADO POR	: Sierra Sánchez, Rosalba; Isaza Sánchez, Julian
PROCESO	: 005113
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: C. de P.C. Art.: 84

23/08/1994

**IMPEDIMENTO/ INTERES EN EL PROCESO**

Se acepta el impedimento manifestado por magistrado, conforme al numeral 1o. del art. 150 del C. de P.C.

AUTO DE SALA (269)	
FECHA	: 23/08/1994
DECISION	: SE ACEPTA IMPEDIMENTO MANIFESTADO
SUJETOS	:
PROCESO	: 004971
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: C. de P.C. Art.: 150 Numeral: 1

24/08/1994

**RECURSO-Interés y Legitimación / SUPLICA**

1) Todos los recursos, ordinarios y extraordinarios, están sometidos a un conjunto de requisitos que determinan su viabilidad legal, siendo uno de tales requisitos el que hace relación con la legitimación para interponerlos, legitimación que por lo general ostentan quienes, además de tener la posición formal de parte en el respectivo proceso, les asiste un interés legítimo en que determinada resolución judicial que les causa agravio, sea modificada o revocada. Quiénes cuentan con ese interés y cómo debe ser éste.

2) Por no reunir el recurso de súplica la totalidad de los requisitos para su viabilidad, se declara rechazado.

PONENTE	: SALA
AUTO DE SUPLICA (268)	
FECHA	: 24/08/1994
DECISION	: RECHAZA RECURSO DE SUPLICA
SUJETOS	:
DEMANDADO	: ORJUELA, ALVARO y sus sucesores
DEMANDANTE	: MONTOYA ORTEGON, JOSE IGNACIO.
Sustitución procesal de éste por	: LUIS EDUARDO MONTOYA MEDINA.
PROCESO	: 003692
PUBLICADA	: No

FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 363.

**DEMANDA DE REVISION/ REVISION-Rechazo**

De acuerdo a lo establecido por los artículos 85 y 383 del C. de P.C., en el presente caso, se rechaza la demanda de revisión.

PONENTE : Rafael Romero Sierra (Solo)

AUTO DE REVISION (272)

FECHA : 24/08/1994

DECISION : SE RECHAZA DEMANDA DE REVISION

PROCEDENCIA : J. Unico CIV.CTO.

CIUDAD : AGUACHICA

SUJETOS :

DEMANDADO : RINCON GALVIS, NATHAN ESTANISLAO

DEMANDANTE : BANCO CAFETERO

INTERPUESTO POR : El demandado

PUBLICADA : No

FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 85, 383 Ibidem.

**DEMANDA DE EXEQUATUR/ EXEQUATUR-Rechazo**

De acuerdo a lo establecido por los artículos 85 y 695, num.2o. del C. de P.C., en el presente caso, se rechaza la demanda de exequatur.

PONENTE : Rafael Romero Sierra (Solo)

AUTO DE EXEQUATUR (273)

FECHA : 24/08/1994

DECISION : SE RECHAZA DEMANDA DE EXEQUATUR

PROCEDENCIA : T. II CTO. JUDICIAL EN Y PARA EL CONDA-

DO

CIUDAD : DE DADE, FLORIDA, U.S.A

SUJETOS :

SOLICITADO POR : LLANOS SILVA, ERNESTO

PROCESO : 005097

PUBLICADA : No

FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 85; C. de P.C. Art.: 695

**DERECHO DE ACCION / REFORMA DE LA DEMANDA**

En ejercicio del derecho de acción, toda persona puede demandar a otra, para que a través del respectivo proceso se definan sus pretensiones, independientemente de la seriedad o fundamentación de la acción incoada y, por consiguiente, es también a ella a quien corresponde, una vez presentada la respectiva demanda, determinar si al amparo de las figuras procesales respectivas, termina anormalmente el proceso instaurado o excluye alguno o algunos de los demandados iniciales, o incluye a otros.

25/08/1994

**DEMANDA DE REVISION / REVISION-Requisitos**

Si bien es cierto que al trámite del recurso extraordinario de revisión deben convocarse "...las personas que fueron parte en el proceso en que se dictó la sentencia, para con ellas se siga el procedimiento de revisión" según lo estatuye el num. 2 art. 382 del C. de P.C., nada impide que a dicho trámite sean convocadas otras personas.  
R.F. art. 382 num. 2 del C. De P.C.

PONENTE : Rafael Romero Sierra  
 AUTO DE REVISIÓN (274)  
 FECHA : 25/08/1994  
 DECISION : SE NIEGA LA SOLICITUD  
 DEMANDADO en revisión: VELASCO SAENZ, FELIPE ANDRES.  
 PROCESO : 001581  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art. 89 Numral. 2 Inciso: 2.

#### DEMANDA DE CASACION / CASACION-Deserción

Por no haberse presentado en tiempo la demanda de casación, se declara desierto el recurso y se condena en costas a la parte recurrente.

PONENTE : Alberto Ospina Botero (Solo)  
 AUTO DE CASACION (271)  
 FECHA : 25/08/1994  
 DECISION : INADMITE Y DECLARA DESIERTO CASACION  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO González, Manuel Alfonso  
 DEMANDANTE Roncancio Hurtado, Delfa  
 PROCESO : 005038  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art. 373 Inciso: 3

29/08/1994

#### CONFLICTO DE JURISDICCION / CONFLICTO DE COMPETENCIA/ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / TRIBUNAL SUPERIOR/ JURISDICCION CIVIL/ JURISDICCION DE FAMILIA / CONFLICTO DE JURISDICCION

Si ciertamente la ley no le atribuye a la Corte en pleno competencia para dirimir conflictos de jurisdicción o competencia que se susciten entre dos juzgados pertenecientes a un mismo Distrito judicial, esta Corporación se abstiene de decidirla, y consecuentemente, dispone el envío de la actuación al Tribunal Superior correspondiente, a fin de que haga el pronunciamiento debido.

Igual sentido: providencia de la Sala Plena de la Corte de 7 de octubre de 1993, reiterada entre otros, autos de 3 y 8 de marzo, 13 y 17 de mayo de 1994.

#### SALVAMENTO DE VOTO:

El asunto debió ser asumido y resuelto directamente por la Corte. El conflicto que surge entre un juez civil y uno de familia con respecto al límite de sus atribuciones, no puede

concebirse como de competencia, sino de jurisdicción.

PONENTE : Rafael Romero Sierra  
 AUTO DE CONFLICTO (276)  
 FECHA : 29/08/1994  
 DECISION : ABSTENERSE DECIDIR CONFLICTO  
 PROCEDENCIA : J.10.CIV.CTO.-10 FLIA.  
 CIUDAD : SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C.  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Sarmiento Durán, María Isabel.  
 DEMANDANTE : Orozco Umbarilla, Ana Cecilia y otros  
 PROCESO : 005018  
 PUBLICADA : No  
 NOTAS ACLARATORIAS : SALVAN VOTO: Drs. Carlos Esteban Jaramillo  
 Schloss; Héctor Marín Naranjo; Pedro Lafont Pimetta.  
 FUENTE FORMAL : C.N. Art.: 256, 116, 246, 247, 221 ibídem;  
 DECRETO Num.: 2652 Año: 1991; C. de P.C. Art.: 28; C. de P.T. Art.: 153; DECRE-  
 TO Num.: 528 de 1964.

30/08/1994

**CONFLICTO DE JURISDICCION / CONFLICTO DE  
 COMPETENCIA / CORTE SUPREMA DE JUSTICIA /  
 TRIBUNAL SUPERIOR**

Si ciertamente la ley no le atribuye a la Corte en pleno competencia para dirimir conflictos de jurisdicción o de competencia que se susciten entre dos juzgados pertenecientes a un mismo distrito judicial, esta Corporación se abstiene de decidirlo, y consecuentemente, dispone el envío de la actuación al Tribunal Superior correspondiente, a fin de que se haga el pronunciamiento debido.

Igual sentido: providencia del 7 de octubre de 1993.

**SALVAMENTO DE VOTO:**

El asunto dejó ser asumido y resuelto directamente por la Corte. El conflicto que surge entre un juez civil y uno de familia con respecto al límite de sus atribuciones, no puede concebirse como de competencia, sino de jurisdicción.

PONENTE : Alberto Ospina Botero  
 AUTO DE CONFLICTO (278)  
 FECHA : 30/08/1994  
 DECISION : ABSTENERSE DECIDIR CONFLICTO  
 PROCEDENCIA : J. UNICO CIV. C10.-UNICO PCO. FLIA.  
 CIUDAD : FUNDACION  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : De la Rosa Hernández, Gladys, en representación de

la menor Claudia Sierra de la Rosa.

DEMANDANTE : Sierra García, Juan Nepomuceno  
 PROCESO : 005062  
 PUBLICADA : No  
 NOTAS ACLARATORIAS : SALVAN VOTO: Drs. Carlos Esteban Jaramillo Schloss; Héctor Marín Naranjo; Pedro Lafont Piantte.  
 FUENTE FORMAL : C. N. Art.: 256 ; DECRETO Num.: 2652 Año: 1991; C. de P.C. Art.: 28 ; C. de P.T. Art.: 152; DECRETO Num.: 528 Año: 1964.

#### **INCIDENTE/ PERJUICIOS-Liquidación/ CONDENA EN ABSTRACTO**

En el presente caso, la liquidación no podrá recibir aprobación, sino en la medida en que los perjuicios reclamados se generen por la formulación del recurso extraordinario de revisión, dado que la condena en abstracto no causa para qu en la sufra, obligación de responder por todas las consecuencias cualesquiera que sea su origen..

PONENTE : Alberto Ospina Botero  
 AUTO DE REVISION (277)  
 FECHA : 30/08/1994  
 DECISION : SE DECLARA EXTINGUIDA LA OBLIGACION DE PAGAR PERJUICIOS  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : SANTAFE DE BOGOTA, D.C.  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : GARCIA ALVARADO, ROGELIO; AYALA ESPINOSA, LITO.  
 DEMANDANTE : ESPINOSA DE GARCIA ANA MERCEDES  
 INTERPUESTO POR : GARCIA ALVARADO, ROGELIO  
 PROCESO : 004347  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 384, 307 Ibidem.

01/09/1994

#### **CONFLICTO DE COMPETENCIA/ COMPETENCIA TERRITORIAL**

Por cuanto la demanda no da cuenta de ni de una solicitud de alimentos ni de revisión de cuenta alimentaria ni de ningún otro evento a los que se refiere el art. 8 del decreto 2272 de 1989 por cuanto ni siquiera cabe en la atribución genérica contenida en el literal j) del art. 5 del mismo estatuto y no encontrándose tampoco en el artículo 23 del C. de P.C. regla especial alguna en materia territorial, corresponde aplicar al caso la norma general que le atribuye competencia al juez del domicilio del demandado.

PONENTE : Carlos Esteban Jaramillo Schloss  
 AUTO DE CONFLICTO DE COMPETENCIA (279)  
 FECHA : 01/09/1994  
 DECISION : REMITIR DEMANDA AL J. lo.FLIA.ESPINAL  
 PROCEDENCIA : J.PCO.MPAL.-lo.PCO. DI: FLIA.  
 CIUDAD : AGUA DE DIOS-ESPINAL

**SUJETOS** :  
**DEMANDADO** : Herrera de Castro, Gladys Teresa  
**DEMANDANTE** : Vanegas González, María G-rón, en su propio nombre y en el del menor Héctor Antonio Castro Vanegas.  
**PROCESO** : 005136  
**PUBLICADA** : No  
**FUENTE FORMAL** : C. de P.C. Art.: 23 Numeral: 1

06/09/1994

**DEMANDA DE REVISION/ REVISION-Admisión/ REVISION-Traslado/ COMISION**

-Se admite la demanda de revisión y en consecuencia se corre traslado de ella. Para notificación de los demandados en revisión se comisiona a determinado juzgado.

**PONENTE** : Rafael Romero Sierra (Solo)  
**AUTO DE REVISION (280)**  
**FECHA** : 06/09/1994  
**DECISION** : SE ADMITE DEMANDA DE REVISION  
**PROCEDENCIA** : T.S.D.J.  
**CIUDAD** : TUNJA  
**SUJETOS** :  
**DEMANDADOS:** : López Cuervo Herminio y otros.  
**DEMANDANTES:** : Rodríguez Cuervo, Manuel y otros.  
**PROCESO** : 005041  
**PUBLICADA** : No  
**FUENTE FORMAL** : C. de P.C. Art.: 57

13/09/1994

**REPOSICION / DEMANDA DE CASACION/ NORMA SUSTANCIAL/ ACCION REIVINDICATORIA**

1) No le asiste razón al recurrente, por cuanto su demanda de casación no cumplió con la exigencia indicada en el numeral 3, del artículo 374 del C. de P.C., en concordancia con el numeral 1 del artículo 368 ibídem, y el numeral 1, del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991.

2) El art. 946 del C.C., consagra los presupuestos indispensables de la acción reivindicatoria.

**AUTO DE REPOSICION (285)**  
**FECHA** : 13/09/1994  
**DECISION** : DENIEGA RECURSO DE REPOSICION  
**PROCEDENCIA** : T.S.D.J.  
**CIUDAD** : TUNJA  
**SUJETOS** :  
**INTERPLESTO POR:** WENCESLAO CASTILLO RODRIGUEZ  
**PROCESO** : 005008

**PUBLICADA** : No  
**FUENTE FORMAL** : C. de P.C. Art.: 374 Numral.: 3, 368 num. 1 ibídem;  
 C.C. Art.: 945.

**CASACION-Cumplimiento Sentencia Recurrída/ CASACION-Copias/ CASA-  
 CION-Carga Procesal Pecuniaria**

En los eventos en que el Tribunal no ordeno la expedición de copias, sobre el recurrente gravita la carga de suministrar lo indispensable para dicho fin, si la sentencia recurrída no es de las que están exentas de cumplimiento y, por ende, debe impetrar la expedición de las que con tal propósito considere necesarias, so pena de que se declare desierto el recurso.

**AUTO DE CASACION (284)**

**FECHA** : 13/09/1994  
**DECISION** : INADMISIBLE Y DESIERTO RECURSO DE  
**CASACION**  
**PROCEDENCIA** : T.S.D.J.  
**CIUDAD** : NEIVA  
**SUJETOS** :  
**DEMANDADO** : Central Hidroeléctrica de Betania S.A.  
**DEMANDANTES** : Barrios Lemus, María Elcy; Rubiano Guarnizo,  
 Francisco y Tovar, Olegario  
**PROCESO** : 005164  
**PUBLICADA** : No  
**FUENTE FORMAL** : C. de P.C. Art.: 371 Inciso: 4

**DEMANDA DE EXEQUATUR / EXEQUATUR-Rechazo**

Se rechaza la demanda de exequatur por no mencionarse el requisito estatuido en el numeral 4 del art. 694 del C. de P.C., esto es, que "el asunto sobre el cual recae, no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos".

**PONENTE** : Alberto Ospina Baturo (Solo)  
**AUTO DE EXEQUATUR (283)**  
**FECHA** : 13/09/1994  
**DECISION** : RECHAZA DEMANDA DE EXEQUATUR  
**PROCEDENCIA** : Corte del 13 Cto.Jud. del Condado de la  
**CIUDAD** : Hillsborough, Florida  
**SUJETOS** :  
**DEMANDADO** : BERNAL, HERNANDO  
**DEMANDANTE** : BERNAL, MARTHA Y.  
**PROCESO** : 005160  
**PUBLICADA** : No  
**NOTAS ACLARATORIAS** : Alberto Ospina Baturo - AUTO UNITARIO  
**FUENTE FORMAL** : C. de P.C. Art.: 695, 694 ibídem.

14/09/1994



**CASACION-Cumplimiento Sentencia Recurrída**

Cuando sin esperar el auto de concesión del recurso, el recurrente en casación se adelanta a cumplir la sentencia cancelada a la contraparte el monto de la condena impuesta en su favor o depositando ese valor en cuenta de depósitos judiciales e informando de ello directamente a la parte beneficiada con la sentencia o al proceso mismo, el comportamiento así asumido por el demandado lejos de ser negligente debe entenderse animado por el más vivo interés de facilitar el cumplimiento provisional del fallo.

**CASACION-Finalidad / DERECHO SUSTANCIAL**

El recurso de casación está orientado a la protección del derecho sustancial.

**AUTO DE REPOSICION ( DE SALA ) (286)**

FECHA : 1-/09/1994  
 DECISION : ES ADMISIBLE RECURSO DE CASACION  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : SANTIAGO DE CALI  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : ASEGURADORA COLSEGUROS S.A.  
 DEMANDANTE : CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y  
 MINERO  
 INTERPUESTO : PARTE DEMANDADA  
 PROCESO : 005065  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 371.

21/09/1994

**QUEJA -Copias**

Con fundamento en el inciso 8o. del art. 378 del C. de P.C., la Corte dispone al Tribunal Superior expida y envíe copia de piezas procesales, a costa de la parte recurrente en queja.

PONENTE : Alberto Ospina Botero (Solo)

**AUTO DE QUEJA (288)**

FECHA : 21/09/1994  
 DECISION : SE ORDENA ENVIAR DOCUMENTOS POR EL  
 TRIBUNAL  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : CUNDENAMARCA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Rubén Gora, Gladys Emilce  
 INTERPUESTO POR : Taborda Matiz, Arturo  
 DEMANDANTE : TABORDA MATIZ ARTURO  
 PROCESO : 005176  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 378 Inciso: 8

22/09/1994

**DEMANDA-Traslado/ DECRETO DE PRUEBAS/ REVISION**

Agotado el término del traslado, se decretan pruebas pedidas por las partes, conforme al artículo 383 del C. de P.C.

PONENTE	: Rafael Romero Sierra (Solo)
AUTO DE REVISION (290)	
FECHA	: 22/09/1994
DECISION	: SE DECRETAN PRUEBAS
SUJETOS	:
DEMANDADOS	: SAENZ DE VELASCO, GILMA y otros.
DEMANDANTE	: POSADA RODRIGUEZ, JAIME
PROCESO	: 004581
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: C. de P.C. Art.: 383.

**CONFLICTO DE COMPETENCIA /  
COMPETENCIA TERRITORIAL.- Fueros**

El legislador, determinó al lado del fuero del domicilio del demandado, otro título de competencia territorial denominado *forum rei sitae*, consagrado en algunos de los numerales del art. 23 del C. de P.C. y que puede ser concurrente con el personal, como ocurre en la hipótesis prevista en el numeral 9o.; o exclusiva o privativa, en los casos previstos en el numeral décimo de la misma disposición.

PONENTE	: Rafael Romero Sierra
AUTO DE CONFLICTO DE COMPETENCIA (289)	
FECHA	: 22/09/1994
DECISION	: J.CIV.CTO.SANTAFE DE BOGOTA COMPETENTE
TE	
PROCEDENCIA	: 1.1o. CIV.CTO.-J.CIV.CTO.
CIUDAD	: FACATATIVA HONDA
SUJETOS	:
DEMANDADO	: Fermín Fco, Avelino y otros.
DEMANDANTE	: Cárdenas Reyes, Avelino y otros
PROCESO	: 005120
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: C. de P.C. Art.: 23.

26/09/1994

**DESISTIMIENTO DEL RECURSO / REVISION - Desistimiento**

Se acepta el desistimiento del recurso extraordinario de revisión interpuesto.

PONENTE	
AUTO DE REVISION (293)	
FECHA	: 26/09/1994

DECISION :  
 PROCESO : 001285  
 PUBLICADA : No

**CASACION-Efectos**

El recurso de casación es de efecto devolutivo y no suspensivo.

**CASACION-Inadmisión / CASACION-Deserción / CASACION-Copias**

En el caso sub-judice, se declaró inadmisibile y en consecuencia desierto el recurso de casación, toda vez que era impetitivo, ya por disposición del tribunal en el auto que concedió el recurso de casación, ora por solicitud del recurrente para el efecto, se expedirán copias necesarias para el cumplimiento del fallo, previo el pago de las expensas, lo cual no ocurrió, así como tampoco que se hubiere solicitado y decretado la suspensión de la ejecución del fallo recurrido, conforme al art. 371 del C. de P.C.

FE: art. 371 inex. 4 y 5

**COMPETENCIA - Factores / PERPETUATIO JURISDICTIONIS**

Una vez que ha sido definida la competencia para conocer de un proceso determinado, por aplicación de los factores fijados por la ley para el efecto, opera el principio de la perpetuatio jurisdictionis, en virtud del cual el juez a quien le hubiere correspondido la tramitación del proceso continúa conociendo de él hasta su terminación y todo lo relacionado con el mismo, sin que ella pueda alterarse por el advenimiento posterior de circunstancias no existentes al momento de determinar la competencia del juzgador.

PONENTE : Pedro Lafont Pizarra  
 AUTO DE CONFLICTO DE COMPETENCIA (291)  
 FECHA : 26/09/1994  
 DECISION : J. UNICO PCO.MPAL.SOLANO (CAQ.) COMPE-  
 TENIA:  
 PROCEDENCIA : J.PCO.MPAL.-12 FLIA.  
 CIUDAD : SOLANO-SANTAFE DE BOGOTA.  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Rodríguez Galindo, Héctor Armando  
 DEMANDANTE : Ortega Quiragu, Francy Helena como representante  
 del menor Héctor Armando Gutiérrez Ortega  
 PROCESO : 005159  
 PUBLICADA : No  
 29/09/1994

**DECRETO DE PRUEBAS**

Corridos los traslados, se abre a pruebas la actuación procesal, fijándose el término de quince días para practicarlas.

PONENTE : Alberto Ospina Botero (Solo)  
 AUTO (294)  
 FECHA : 29/09/1994

PROCESO : 004611  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 383.

**REVISION-Improcedencia /****DEMANDA DE REVISION/ REVISION-Características**

La Corte no está habilitada para realizar el examen acerca de la viabilidad de una demanda revisoria, cuya petición no es de la parte interesada sino que encuentra vengero en la oficiosidad, pues ha de recordarse a ese propósito que el recurso de revisión es eminentemente dispositivo, extraordinario, y por ende, su procedencia es limitada y estricta.

Igual sentido: Auto del 14 de julio de 1991.

PONENTE : Rafael Romero Sierra (Solo)  
 AUTO DE REVISION (296)  
 FECHA : 29/09/1994  
 DECISION : RECHAZA RECURSO DE REVISION  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : ANTIOQUIA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Esther Gómez y personas indeterminadas  
 DEMANDANTE : Londeño Gómez, Luz Marina  
 PROCESO : 005186  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 75, 383 inc. 4 ibídem.

03/10/1994

**PRUEBA DE OFICIO**

Se decreta de oficio, la incorporación de prueba documental.

PONENTE : Rafael Romero Sierra (Solo)  
 AUTO (297)  
 FECHA : 03/10/1994  
 DECISION : SE DECRETA PRUEBA DE OFICIO  
 PROCESO : 004644  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 179

04/10/1994

**CASACION-Desercion**

Los motivos de deserción del recurso de casación son de orden legal procesal, de orden público, y obligatorio cumplimiento, de efectos inmediatos e inciden sobre el trámite del recurso que se ha adelantado no obstante su preexistencia.

**REPOSICION / CASACION- Cumplimiento Sentencia Recurrída**

En el presente evento, no se repone el auto recurrido, pues la concesión del recurso de casación interpuesto por la parte demandante principal, no impide que la sentencia se cumpla; ni por su naturaleza ni por disposición legal escapa dicho recurso del efecto devolutivo previsto en el art. 371 del C. de P.C.

PONENTE : Héctor María Naranjo  
 AUTO DE REPOSICION (298)  
 FECHA : 04/10/1994  
 DECISION : NO REPONE AUTO  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Henao de Mariucci, Lucía  
 DEMANDANTE : Jiménez Torres, Otoniel  
 PROCESO : 004960  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 348, 371 ídem.

#### CASACION-Deserción

Teniendo en cuenta de un lado, que en el presente caso la parte recurrente dejó transcurrir el término del traslado sin presentar la demanda respectiva y de otro lado, lo dispuesto en el inciso 3o. del art. 373 del C. de P.C., se declara desierto el recurso de casación interpuesto.

PONENTE : Rafael Romero Sierra (Solo)  
 ALTO DE CASACION (300)  
 FECHA : 04/10/1994  
 DECISION : SE DECLARA DESIERTO RECURSO DE CASACION  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : IBAGUIE  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Aguirre Segura, Hernando  
 DEMANDANTES : Oviedo Figueroa, Bertoldo y otros  
 PROCESO : 005104  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 373 Inciso: 3

#### QUEJA

Por cuanto el proyecto de auto presentado a Sala para desatar el recurso de queja, no obtuvo la mayoría requerida para su aprobación, se dispuso pasar el expediente al Magistrado que sigue en turno para los efectos legales.

PONENTE : Rafael Romero Sierra (Solo)  
 AUTO DE QUEJA (299)  
 FECHA : 04/10/1994  
 DECISION : SE DISPONE PASAR EL EXPEDIENTE AL MAGISTRADO QUE SIGUE EN TURNO

SUJETOS	
DEMANDADO	: Sociedad " Ferromolques S.A. "
DEMANDANTE	: La Federal Cía de Seguros S.A.
INTERPUESTO	: La demandante
PROCESO	: 005181
PUBLICADA	: No

05/10/1994

**REVISION-Admisión / DEMANDA DE REVISION**

Se admite la demanda mediante la cual se interpone el recurso extraordinario de revisión, por cuanto fue presentada en tiempo, con la plenitud de los requisitos formales, versa sobre sentencia susceptible de tal impugnación y está dirigida contra las personas que deben intervenir en su trámite.

PONENTE	: Rafael Romero Sierra (Salo)
AUTO DE REVISION (302)	
FECHA	: 05/10/1994
DECISION	: SE ADMITE DEMANDA DE REVISION
PROCEDENCIA	: T.S.D.J.
CIUDAD	: NEIVA
SUJETOS	:
DEMANDADO	: Pres. determinados de Ignacio Antonio Sandoval y otros.
DEMANDANTE	: Montes, Emma
INTERPUESTO	: Los demandados
PROCESO	: 005082
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: C. de P.C. Art. 383

**REPOSICION / SUPLICA /****RECURSOS / DEMANDA DE REVISION / REVISION-Rechazo**

Procedencia del recurso de los recursos de reposición y súplica. Requisito para la viabilidad de los recursos. Prosperidad del segundo, mas no del primero, respecto del que rechaza la demanda que contiene el recurso de revisión.

**SENTENCIA**

Son sentencias "las que resuelven los recursos de casación y revisión".

PONENTE	: Nicolás Bechara Simanens (Salo)
AUTO DE REPOSICION (301)	
FECHA	: 05/10/1994
DECISION	: RECHAZA RECURSO DE REPOSICION
PROCEDENCIA	: T.S.D.J.
CIUDAD	: SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.
SUJETOS	:
DEMANDADO	: EFRAIN CAICEDO BOTELLO y otro

DEMANDANTE : GALINDO BELTRAN, BERNARDO  
 INTERPUESTO : El demandante.  
 PROCESO : 005178  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de PC Art.: 348, 351, 363 Ibidem.

#### **EXEQUATUR-Admisión / DEMANDA DE EXEQUATUR**

Se admite la demanda de exequatur.

PONENTE : Rafael Romero Sierra (Solo)  
 AUTO DE EXEQUATUR (303)  
 FECHA : 05/10/1994  
 DECISION : SE ADMITE DEMANDA DE EXEQUATUR  
 PROCEDENCIA : Cone Distrital de los EE.UU. del Distrito Sur de Florida.  
 PROCESO : 005194  
 PUBLICADA : No

06/10/1994

#### **PRESUNCION DE ACIERTO / USUFRUCTO / INTERPRETACION CONTRACTUAL**

1) Cuando el fallo de segundo grado es impugnado en casación, el análisis probatorio del tribunal llega abroquelado con la presunción de acierto que le acompaña. Por lo mismo, no habría manera de arriarlo si ya no es que por arbitrariedad que encierra, repulsa cualquier probijamiento.

2) Interpretación que el tribunal dio al acto constitutivo de usufructo.

3) Autonomía de los juzgadores de instancia en la interpretación de los contratos.  
 Igual sentido: CXLI, págs. 218 y 219.

4) Cuando una cláusula se presta a dos interpretaciones razonables o siquiera posibles, la adopción de cualquiera de ellas por el sentenciador no genera error evidente.  
 Igual sentido: Cas. Civ. de 3 de julio de 1969, CXXXI, 14; Cas.Civ. de 10 de mayo de 1989 y 25 de junio de 1992, aún no publicadas.

#### **CASACION - Características / CASACION-Cargos**

Siendo la casación un recurso extraordinario y eminentemente dispositivo, la acusación tiene que ser precisa y exacta, lo que introduce que el recurrente adopte una posición franca entorno a la cual edifique la acusación.

PONENTE : Rafael Romero Sierra  
 SENTENCIA DE CASACION (122)  
 FECHA : 06/10/1994  
 DECISION : NO CASA



PROCEDENCIA	: T.S.D.J.
CIUDAD	: IBAGUE
SUJETOS	:
DEMANDADO	PEÑA AVENDAÑO, EMIGDIO
DEMANDANTE	AVENDAÑO, SARA MARIA
INTERPUESTO POR	Parte demandante
PROCESO	: 004188
PUBLICADA	: No

**CONFLICTO DE COMPETENCIA / COMPETENCIA TERRITORIAL- Fueros / FUERO DE ATRACCION / PRINCIPIOS/ PRINCIPIO DE CONCENTRACION/ ECONOMIA PROCESAL**

El Código de Procedimiento Civil para distribuir la competencia por razón del territorio, hace uso de los denominados "fueros" o "foros", a saber el general o personal, el real, el contractual, el concurrente y respecto de los procesos "que se promuevan contra los asignatarios, el cónyuge o los administradores de la herencia, por causa o en razón de ésta", establece que se tramitará por el juez que conozca de la sucesión del causante (Art. 23, numeral 15, C. P.C.), es decir, que éste ejerce en tal caso un "fuero de atracción", en aplicación de los principios de la concentración y la economía procesal.

PONENTE	: Pedro Lafoel Páncua
AUTO DE CONFLICTO DE COMPETENCIA (306)	
FECHA	: 06/10/1994
DECISION	: J. PROMISCOU DE FAMILIA DE PAMPLONA
COMPETENTE	
PROCEDENCIA	: J.PCO.FAMILIA-2o.PCUO.FLIA.
CIUDAD	: PAMPLONA-CUCUTA
SUJETOS	:
DEMANDADO	Cruz López, María Luisa, cónyuge superviviente de Teodoro Ordúz Araya y contra herederos indeterminados de éste.
DEMANDANTE	Maldonado, Jaime Antonio
PROCESO	: 005187
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: C. de P.C. Art. 23 Numeral 15

**CONFLICTO DE COMPETENCIA / COMPETENCIA TERRITORIAL/ TITULO VALOR**

1) Los arts. 621, 677 y 876 del C. de Co., sobre el lugar de cancelación del importe de un título valor como la letra de cambio, son disposiciones ainentes al fenómeno sustancial del pago voluntario del instrumento.

Igual sentido: Auto del 9 de octubre de 1992.

2) La competencia por el factor territorial para el cobro coactivo de títulos valores de contenido crediticio, salvo norma expresa de la ley que disponga los casos de manera distinta, se encuentra determinada por el "forum domicilii" que señala el num. 1o. del art. 23 del C. de P.C.

PONENTE : Carlos Esteban Jaramillo Schüss  
 AUTO DE CONFLICTO DE COMPETENCIA (305)  
 FECHA : 06/10/1994  
 DECISION : J.1o.CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR  
 COMPETENTE :  
 PROCEDENCIA : J.1o.CIV.OTO-J.1o.CIV.OTO  
 CIUDAD : SINCELEO-VALLEDUPAR  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Quintero Santiago, Bonifacio  
 DEMANDANTE : Soc. Distribuciones Agrícola Ltda.  
 PROCESO : 005184  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C de Co. Art.: 621, 677, 876; C. de P.C. Art.: 23  
 Numeral: 1

07/10/1994

#### REVISION-Característica / PRECLUSION

Carácter extraordinario del recurso de revisión. Este medio de impugnación, está sometido al principio de la eventualidad o preclusión, lo cual hace que su interposición produzca como efecto la consumación del acto procesal y, por lo tanto, la preclusión del derecho a ejercerlo, el que consiga entenerse no puede repetirse en similares condiciones, aún a pesar de que no haya vencido el plazo establecido en la ley para formularlo.

Igual sentido: Amos de 20 de septiembre de 1974, 14 de febrero de 1980, 30 de septiembre de 1993, entre otros.

PONENTE : Nicolás Bechara Simancas (Solo)  
 AUTO DE REVISION (308)  
 FECHA : 07/10/1994  
 DECISION : ABSTENERSE TRAMITAR DEMANDA DE  
 REVISION  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Soc. Félix Izaz y Cia Ltda.  
 DEMANDANTE : Sierra de Camelo, Rosalba  
 PROCESO : 005209  
 PUBLICADA : No

#### REVISION-Oportunidad / REVISION-Caducidad / REVISION/ Rechazo / INDEBIDA REPRESENTACION / FALTA DE NOTIFICACION

1) Vencido el plazo sin que el interesado interponga el recurso de revisión, se produce por ministerio de la ley, la caducidad del derecho a formularlo, fenómeno éste que autoriza a rechazar de plano la impugnación...

Igual sentido: Cas. Civ. del 19 de noviembre de 1976. G.J. Tomo CLII, pág. 505

2) Oportunidad para interponer el recurso de revisión, en tratándose de la causal 7a. del

art. 380 del C. de P.C., esto es, "estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación".

#### **REVISION-Características**

Carácter extraordinario del recurso de revisión. Este medio de impugnación, está sometido al principio de la eventualidad o preclusión, lo cual hace que su interposición produzca como efecto la consumación del acto procesal y, por lo tanto, la preclusión del derecho a ejercerlo, el que consiguientemente no puede repetirse en similares condiciones, aún a pesar de que no haya vencido el plazo establecido en la ley para formularlo.

Igual sentido: Autos de 20 de septiembre de 1974, 14 de febrero de 1980, 30 de septiembre de 1993, entre otros.

PONENTE	: Carlos Esteban Jaramillo Schloss (Solo)
AUTO DE REVISION (307)	
FECHA	: 07/10/1994
DECISION	: RECHAZA DEMANDA DE REVISION
PROCEDENCIA	: T.S.J.J.
CIUDAD	: MONTERIA
SUJETOS	:
DEMANDADO	De la Ossa Olivera, Francisco y demás personas
Indeterminadas.	
DEMANDANTE	Ramero Torraibo de Moreno, Edith
PROCESO	: 005202
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: C. de P.C. Art.: 383 Inciso: 4, Art.: 380 Numeral: 7, 381 ibídem.

11/10/1994

#### **DEMANDA DE CASACION / CASACION-Deserción**

La devolución de la demanda se hizo expirado el término del traslado y por lo tanto se declara desierto el recurso de casación y se condena en costas al recurrente.

PONENTE	: Nicolás Bechara Simancas (Solo)
AUTO DE CASACION (309)	
FECHA	: 11/10/1994
DECISION	: INADMITE Y DECLARA DESIERTO CASACION
SUJETOS	:
INTERPUESTO POR PARAMO SANABRIA JOSE IGNACIO	
PROCESO	: 005124
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: C. de P.C. Art.: 373 Inciso: 3

12/10/1994

#### **CASACION- Cumplimiento Sentencia Recurrída/ REPOSICION / CASACION-**

**Copias / CASACION - Caución**

1) La opción que tiene el recurrente en casación para solicitar copia de lo pertinente con miras al cumplimiento provisional del fallo, cuando así no lo dispone oficiosamente el Tribunal, debe ejercitarla dentro del término de ejecutoria del auto en virtud del cual aquél concede dicho recurso. Imprudencia del recurso de reposición, respecto a este aspecto.

2) La prestación de la caución para impedir la práctica de un embargo y secuestro, no tiene la virtualidad de exonerar al recurrente de suministrar oportunamente lo necesario para la expedición de las copias que deben enviarse al juzgador de primer grado.

**AUTO DE REPOSICION (312)**

FECHA : 12/10/1994  
 DECISION : DENIEGA RECURSO DE REPOSICION  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : NEIVA  
 SUJETOS :  
 DEMANDANTE : Barrios Lemos, María Elcy y otros  
 INTERPUESTO : parte demandada  
 PROCESO : 005164  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL: C. de P.C. Art. 371.

**CASACION-Cumplimiento Sentencia Recurrída / ESTADO CIVIL / CASACION-Copias / CASACION-Carga Procesal / CASACION-Deserción**

1) Cuando la sentencia versa únicamente sobre el estado civil, esto es, cuando no contiene pronunciamiento o condena de distinta índole, el recurso de casación suspende su ejecución. En los demás casos debe cumplirse.

2) Si la sentencia recurrida debe cumplirse, incumbe al tribunal indicar en el auto que concede el recurso de casación las piezas procesales que deben copiarse para tal efecto. Empero, si así no acontece, esto es, si omite pronunciarse al respecto, grava sobre el recurrente la carga procesal de solicitar su expedición so pena de que se declare deserta la impugnación.

PONENTE : Héctor María Naranjo  
**AUTO DE CASACION (310)**  
 FECHA : 12/10/1994  
 DECISION : INADMISIBLE Y DESERTO CASACION  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : PEREIRA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Santacoloma Villegas, Rufino  
 DEMANDANTE : Hoyos Correa, Claudia, en su propio nombre y en el  
 del menor Camilo Hoyos Correa  
 PROCESO : 005196

PUBLICADA : No  
FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 371

**CONFLICTO DE COMPETENCIA / COMPETENCIA TERRITORIAL / FUERO ESPECIAL Y GENERAL / FUERO CONCURRENTES / PROCESO EJECUTIVO**

1) Alcance de los fueros general y el especial de que trata el art. 23 del C. de P.C. Clasificación de éste.

2) Fuero concurrente de que trata el num. 9 del art. 23 del C. de P.C., para el conocimiento de un proceso en el que se instaura una acción ejecutiva con título hipotecario para obtener el pago forzado de una suma de dinero, contenido en el título valor con la venta en pública subasta del bien hipotecado.

3) Los arts. 621, 677 y 876 del C. de Co., están previstos para cuando se trata de satisfacer "voluntariamente" el pago de las prestaciones contenidas en títulos valores.

4) El giro de títulos valores no genera por sí solo, el nacimiento de una relación contractual.

PONENTE : Rafael Romero Sierra  
AUTO DE CONFLICTO DE COMPETENCIA (311)  
FECHA : 12/10/1994  
DECISION : 1.PROMISCUO DEL CIRCUITO DE MONTERREY (CASANARE) COMPETENTE  
PROCEDENCIA : 1.PCO.CTO. 26CIVIL DEL CTO.  
CIUDAD : MONTERREY-SANTAFÉ DE BTA.  
SUJETOS :  
DEMANDADO : Garzón Díaz, Carmen  
DEMANDANTE : Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero  
PROCESO : 005171  
PUBLICADA : No  
FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 23 Num.als: 1, 5, 9, 10 ibidem; C. de Co. Art.: 621, 677, 876 ibidem.  
13/10/1994

**CASACION-Cumplimiento Sentencia Recurrída / CASACION-Copias / CASACION-Carga Procesal / CASACION-Deserción**

Si la sentencia recurrída debe cumplirse, incumbe al tribunal indicar en el auto que concede el recurso de casación las piezas procesales que debe copiarse para tal efecto. Impero, si así no acontece, esto es, si omite pronunciarse al respecto, gravita sobre el recurrente la carga procesal de solicitar su expedición, so pena de que se declare desierto el recurso.

AUTO DE CASACION (313)  
FECHA : 13/10/1994  
DECISION : INADMISIBLE Y DESIERTO CASACION  
PROCEDENCIA : TRIBUNAL SUPERIOR D.J.

CIUDAD	: MONTERIA
SUJETOS	:
DEMANDADO	Municipio de Montería
DEMANDANTE	Hawasty Dean, Felipe Mannet, en su propio nombre y en el de la Sucesión de Miguel y Felipe Hawasty Meluk
PROCESO	: 005205
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: C. de P.C. Art. 371

**CASACIÓN-Deserción**

Teniendo en cuenta de un lado, que en el presente caso la parte recurrente dejó transcurrir el término del traslado sin presentar la demanda respectiva y de otro lado, lo dispuesto en el inciso 3o. del art. 373 del C. de P.C., se declara desierto el recurso de casación interpuesto.

PONENTE	: Rafael Romero Sierra
AUTO DE CASACION (315)	:
FECHA	: 13/6/1991
DECISION	: SE DECLARA DESIERTO RECURSO DE CASACION
PROCEDENCIA	: T.S.D.J.
CIUDAD	: IBAGUE
SUJETOS	:
DEMANDADO	Corp. de Ahorro y Vivienda Upac Colvarria
DEMANDANTE	Murillo de Rueda, Eloisa
PROCESO	: 005122
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: C. de P.C. Art. 373 Inciso: 3

**PERJUICIOS-Regulación / REVISION-Perjuicios / INCIDENTE DE REGULACION DE PERJUICIOS**

De la solicitud de regulación de perjuicios, derivados de la condena mediante sentencia en el recurso de revisión, se dispone tramitarla como incidente. Se corre traslado del escrito conforme con el numeral 2 del art. 137 del C. de P.C.

PONENTE	: Rafael Romero Sierra (Solo)
AUTO DE REVISION (314)	:
FECHA	: 13/10/1991
DECISION	: SE DISPONE TRAMITAR COMO INCIDENTE
SOLICITUD DE REGULACIÓN DE PERJUICIOS	:
PROCEDENCIA	: T.S.D.J.
CIUDAD	: CARTAGENA
SUJETOS	:
DEMANDADOS	PERSONAS INDETERMINADAS
DEMANDANTE	Kelly Wilson Antonio y otra,
PROCESO	: 003865

PUBLICADA : No  
FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 384, 137 ibídem.

18/10/1994

#### **CASACION-Admisión**

Se admite el recurso de casación.

#### **CERTIFICACIÓN JUDICIAL**

Se niega la expedición de certificación respecto de hechos.

PONENTE : Rafael Romero Sierra (Solo)  
AUTO DE CASACION (317)  
FECHA : 18/10/1994  
DECISION : SE ADMITE RECURSO DE CASACION  
PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
CIUDAD : SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.  
SUJETOS :  
DEMANDADO : Blanco Sepulveda, Fernando José y otra.  
DEMANDANTE : Rodríguez de Siecke, Leonor, en su propio nombre y como cónyuge superviviente en la sucesión de Horst Volker Siecke  
PROCESO : 005217  
PUBLICADA : No  
FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 116.

20/10/1994

#### **EXPEDIENTE-Remisión / CASACION-Pago de Porte / CASACION-Deserción**

En el presente caso, ante la inobservancia del artículo 132 del Código de Procedimiento Civil, tanto por parte del Tribunal como del propio recurrente, dio lugar a que en la remisión del expediente se hubiese incurrido en irregularidades que ahora no puede la Corte remediar, dentro de las cuales sobresale la de que la parte interesada en la remisión del expediente por un remedio más rápido que ofreciera mejores garantías, así debía haberlo manifestado expresamente, documental o verbalmente, para que en este último caso se sentara la constancia correspondiente, entregándolo al secretario el valor total del porte, es decir, el de ida y regreso, dentro de la oportunidad indicada en el inc. 4o. del precitado artículo, omisiones que le imponían al ad-quem el deber de declarar desierto el recurso.

PONENTE : Rafael Romero Sierra  
AUTO DE CASACION (319)  
FECHA : 20/10/1994  
DECISION : INADMITE RECURSO DE CASACION  
PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
CIUDAD : RIOHACHA  
SUJETOS :  
DEMANDADO : Ahmad Rahal, Mulkunad



DEMANDANTE	Goldringer Gulsberg, Moritz
PROCESO	: 005118
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: C. de P.C. Art. 132 Inciso: 4

26/10/1994

**QUEJA - Finalidad**

Al estar consagrado el recurso de queja para que el superior conceda el recurso que, a pesar de ser procedente, fue negado por el inferior, su finalidad debe apuntar a tal propósito.

**CASACION-Quantía/ CASACION-Interés para Recurrir/ CASACION-Justiprecio**

El tribunal decidió prematuramente la viabilidad del recurso de casación, porque si la cuantía del interés para recurrir en casación en el presente caso, surge del valor de la TOTALIDAD de las pretensiones no concedidas al recurrente, previamente debió haber dispuesto la complementación del expediente.

PONENTE	: Nicolás Bechara Simancas
AUTO DE QUEJA (321)	
FECHA	: 26/10/1994
DECISION	: SE DISPONE DEVOLVER ACTUACION AL TRIBUNAL
PROCEDENCIA	: T.S.D.J.
CIUDAD	: CUNDINAMARCA
SUJETOS	:
DEMANDADO	Rubio Coca, Gladys Emilee
DEMANDANTE: Taborda Matiz, Arturo	
INTERPUESTO POR	Parte demandante
PROCESO	: 005176
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: C. de P.C. Art. 370

27/10/1994

**VIOLACION NORMA SUSTANCIAL-Ataque todos los fundamentos**

Necesidad de que las acusaciones por la causal primera de casación, deban combatir todos los soportes en que se apoya la decisión para que puedan reputarse técnicamente aptos.

Igual sentido: G.J. Tomo LXXI, p. 740, LXXIII, P. 45; T. LXXV, p. 52.

**ERROR DE HECHO Y DE DERECHO**

Puntos comunes y diferencias entre los errores de apreciación probatoria de hecho y el de derecho. En qué consiste cada uno de estos errores.

Igual sentido: Sentencia de 14 de Agosto de 1985, sin publicar.

PONENTE	: Nicolás Bechara Simancas
SENTENCIA DE CASACION (131)	

FECHA	: 27/10/1994
DECISION	: NO CASA
PROCEDENCIA	: T.S.D.J.
CIUDAD	: IBAGUE
SUJETOS	:
DEMANDADO	: BANCO CENTRAL HIPOTECARIO
DEMANDANTE	: URB.SANTA MARGARITA MARIA LTDA
INTERPUESTO POR	: Parte demandante
PROCESO	: 004372
PUBLICADA	: No

#### **DEMANDA DE CASACION / VIOLACION NORMA SUSTANCIAL/ NORMA SUSTANCIAL**

1) Requisitos formales de la demanda de casación, véase que trata el num. 3o. del art. 374 del C. de P.C.

2) El art. 7n. de la Ley 75 de 1968, carece de la calidad de sustancial, pues se trata de un precepto orientado únicamente a regular algunos aspectos de la actividad probatoria del juez y de las partes en los juicios de investigación de la paternidad extramatrimonial. Naturaleza meramente procesal de aquélla.

PONENTE	: Héctor Marín Naranjo
AUTO DE CASACION (325)	
FECHA	: 27/10/1994
DECISION	: ADMITE PARCIALMENTE DEMANDA DE CASACION
PROCEDENCIA	: T.S.D.J.
CIUDAD	: MEDELLIN
SUJETOS	:
DEMANDADO	: González, Leopoldo en representación de los menores Luz Angela Escobar González y otros.
DEMANDANTE	: Gómez Machado, Lucielo o Luz Cielo, en representación del menor Alexander Gómez Machado.
PROCESO	: 005126
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: LEY 75 Año: 1968 Art.: 7

#### **REVISION-Imprudencia / REVISION-Reclamo / DEMANDA DE REVISION**

Imprudencia del recurso de revisión frente a autos. Rechazo de la demanda de revisión interpuesta contra esta clase de providencias.

PONENTE	: Carlos Esteban Jaramillo Schloss (Solo)
AUTO DE REVISION (322)	
FECHA	: 27/10/1994
DECISION	: SE RECHAZA DEMANDA DE REVISION
PROCEDENCIA	: T.S.D.J.
CIUDAD	: MONTERIA

SUJETOS :  
 INTERPUESTO POR : Mercado Urzola, Walter Gamaliel,  
 PROCESO : 005240  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 302, 379 ibídem

31/10/1994

**DEMANDA DE CASACION / CASACION-Cargos**

La demanda sustentatoria del recurso de casación, debe ceñirse estrictamente a todas y cada una de las exigencias formales establecidas en la ley. Dentro de éstas, el recurrente como acusador que es de la sentencia, está obligado a proponer cada cargo en forma concreta, completa y exacta, para que la Corte, situada dentro de los términos de la censura y en congruencia con éstas, pueda decidir el recurso, sin tener que moverse oficiosamente a completar, modificar o resector la acusación planteada sin acierto.

Igual sentido: Auto de 9 de agosto de 1974

PONENTE : Rafael Romero Sierra (Solo)  
 AUTO DE CASACION (326)  
 FECHA : 31/10/1994  
 DECISION : SE ADMITE DEMANDA DE CASACION  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : MEDILLIN  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Ceballos Montoya, Alfonso de Jesús y "Combuses"  
 DEMANDADO : Cia Metropolitana de Buses S.C  
 DEMANDANTE : Posada Salazar, Jaime Alberto y otro  
 PROCESO : 005134  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 374

**CASACION-Copias / CASACION-Cumplimiento Sentencia Recurrída**

En el presente caso, el tribunal en acatamiento del artículo 371 del C. de P.C., ha debido ordenar las copias para con ellas se cumpliera la sentencia; al no hacerlo y tratarse de la impugnación contra una sentencia susceptible de ser cumplida, el casacionista no puede exonerarse de la carga vista con solo pretender que el tribunal no se la ordenó cumplir y debió solicitar su expedición, suministrando los envoltorios indispensables.

Igual sentido: Auto del 22 de octubre de 1990.

PONENTE : Carlos Esteban Jaramillo Schloss  
 AUTO DE CASACION (328)  
 FECHA : 31/10/1994  
 DECISION : INADMISIBLE Y DESIERTO CASACION  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : FAMPLONA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Carrillo Chapeta, José Celano

DEMANDANTE	Defensoría Fliu
PROCESO	: 005242
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: C. de P.C. Art.: 371; DECRETO 2282 Año: 1989
Art.: 1, mod.186.	

### DEMANDA DE CASACION / NORMA SUSTANCIAL

1) Alcance del art. 51 del decreto 2651 de 1991. Papel que le corresponde asumir a la Corte cuando el recurrente no atine a individualizar ninguna de las normas de derecho sustancial que constituyen base esencial de la sentencia acusada.

2) Ninguna de las disposiciones citadas en la demanda de casación, es norma sustancial "base esencial de la sentencia impugnada": artículos 187 y 241 del C. de P.C., "175, 178, 179, 183, 208, 251, 252 modificado (sic), Decreto 2282 de 1989, art. 1o. modificación 115, 253 a 293 del C. de P.Civil"

PONENTE	: Nicolás Bechara Simancas
AUTO DE CASACION (327)	
FECHA	: 31/10/1994
DECISION	: ADMITE PARCIALMENTE DEMANDA DE
CASACION	
PROCEDENCIA	: T.S.D.J.
CIUDAD	: POPAYAN
SUJETOS	:
DEMANDADO	Ojeda Jurado, Hernan
DEMANDANTE	Vargas Martínez, Guillermo Antonio y otros
PROCESO	: 005114
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: C. de P.C. Art.: 255, 256, 257, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 270, 273, 274, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 293, 75, 178, 179, 183, 187, 251, 374 ibidem: DECRETO Num.: 2651 Año: 1991 Art.: 51; DECRETO Num.: 2282 Año: 1989 Art.: 1, mod.100; DECRETO Num.: 2282 Año: 1989 Art.: 1, mod.115; DECRETO Num.: 2282 Año: 1989 Art.: 1, mod.116; DECRETO Num.: 2282 Año: 1989 Art.: 1, mod.116; mod.117; DECRETO Num.: 2282 Año: 1989 Art.: 1, mod.118; DECRETO Num.: 2282 Año: 1989 Art.: 1, mod.120; DECRETO Num.: 2282 Año: 1989 Art.: 1, mod.121; DECRETO Num.: 2282 Año: 1989 Art.: 1, mod.123; DECRETO Num.: 2282 Año: 1989 Art.: 1, mod.124; DECRETO Num.: 2282 Año: 1989 Art.: 1, mod.125; Art.: 1, mod.126; DECRETO Num.: 2282 Año: 1989 Art.: 1, mod.127; DECRETO Num.: 2282 Año: 1989 Art.: 1, mod.122; DECRETO Num.: 2282 Año: 1989
Art.: 1, mod.124.	

### COMPETENCIA / TRIBUNAL SUPERIOR / CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / REVISION- Procedencia

Competencia de los Tribunales Superiores del país y de la Corte Suprema de Justicia para conocer del recurso de revisión.

PONENTE	: Rafael Romero Sierra (Solo)
AUTO DE REVISION (330)	
FECHA	: 31/10/1994
DECISION	: SE RECHAZA DEMANDA DE REVISION
PROCEDENCIA	: J.21 CIVIL DEL CIRCUITO
CIUDAD	: SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.
SUJETOS	:
DEMANDADO	: Jairo Alvarez Ramírez
DEMANDANTE	: Corp. de Ahorro y Vivienda Las Villas.
PROCESO	: 005233
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: C. de P.C., Art.: 25 Numral.: 2, 26 ibídem.

**CONFLICTO DE COMPETENCIA / COMPETENCIA • Factores/ COMPETENCIA CONCURRENTE / COMPETENCIA PRIVATIVA/ TITULO VALOR/ PROCESO EJECUTIVO / EXCEPCION PREVIA/ NULIDAD PROCESAL - Saneamiento / COMPETENCIA PREVALENTE**

1) Factores de competencia. Fuero General y fuero concurrente o especial (art. 23 regla 9a. del C. de P.C., esto es, en los procesos en que se ejerciten derechos reales)

2) Cuando la competencia a PREVENCIÓN o CONCURRENTE se convierte en PRIVATIVA o EXCLUYENTE.

Igual sentido: Auto del 9 de julio de 1992

3) Cuando simplemente se cobra por la vía del proceso compulsivo un título valor, el actor sólo puede demandar su pretensión ante el Juez del domicilio del deudor, salvo que se trate de un ejecutivo con garantía real, pues en este último caso se podría optar además por el fuero concurrente mencionado en la regla 9a. del art. 23 del C. de P.C.

4) Si el proceso en que se presenta la nulidad originada en factor distinto al funcional, admite la proposición de excepciones previas, aquel vicio debe ponerse en conocimiento del juez por parte del demandado, so pena de que su silencio produzca el saneamiento de la nulidad, trayendo como consecuencia que aquél, quien actuaba sin competencia en el proceso, se torne, a partir de entonces, en el llamado a conocer legalmente de él, pues de esa manera se produce, por voluntad de la ley, un fenómeno especial de atribución de competencia que se vuelve prevalente sobre cualquier otro factor consagrado en el mismo ordenamiento para determinarla.

Igual sentido: auto del 1o. de diciembre de 1992.

PONENTE	: Nicolás Bechara Simancas
AUTO DE CONFLICTO DE COMPETENCIA (329)	
FECHA	: 31/10/1994
DECISION	: SE REMITE AL TRIBUNAL PARA SEGUIR CONOCIENDO DE ESTE PROCESO
PROCEDENCIA	: T.S.D.J. Jdo. Pao. Cio.
CIUDAD	: SFE DE BOGOTÁ, D.C.-Soacha

SUJETOS	:
DEMANDADO	Morales Martínez, Jairo ; y otra
DEMANDANTE	"CORPAVI"
PROCESO	: 005206
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: C. de P.C. Art.: 23 num.9; C. de Co. arts. 621, 677, 876.

**REVISION - Pruebas / DECRETO DE PRUEBAS**

Al tenor del art. 383 del Código de Procedimiento, se decretan las pruebas pedidas por las partes.

**AUTO DE REVISION (334)**

FECHA: 31/10/1994

DECISION: Se decretan pruebas

PUBLICADA: Si

FUENTE FORMAL: art. 383 C. de P.C.

02/11/1994

**ANEXOS / DEMANDA DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL / RESPONSABILIDAD CIVIL DEL JUEZ / ACUMULACION DE PRETENSIONES**

En el presente caso, no se allegaron los anexos que deben ser presentados con la demanda, mediante los cuales se acredite que los demandados señalados como Magistrados del Tribunal, tienen esa calidad. Además existe indebida acumulación de pretensiones, toda vez que la demanda se dirige también contra el Secretario de la Sala Laboral de esa Corporación.

PONENTE	:	Rafael Romero Sierra (Solo)
---------	---	-----------------------------

**AUTO DE RES. JUZGADOR (334)**

FECHA : 02/11/1994

DECISION : SE INADMITE DEMANDA

SUJETOS

DEMANDADO	:	Batancor de Gómez, Angela María y otros
-----------	---	---

DEMANDANTE	:	Caicedo Medina, Héctor Fidel
------------	---	------------------------------

PROCESO	:	005234
---------	---	--------

PUBLICADA	:	No
-----------	---	----

FUENTE FORMAL	:	C. de P.C. Art.: 85 Numral.: 2 y el inc. 3
---------------	---	--

**NORMA SUSTANCIAL / VIOLACIÓN NORMA SUSTANCIAL-Vía Indirecta / DEMANDA DE CASACION**

1) Si bien es verdad ya no se requiere citar por el recurrente todas las normas de derecho sustancial con que deba enfrentarse la sentencia, sigue obligado a señalar siquiera una de aquellas que de acuerdo con lo debatido y decidido se funde o deba fundarse el fallo.

2) Cuando se impute a la sentencia violación indirecta de la ley, ya como consecuencia de error de hecho o error de derecho en la apreciación de las pruebas, la demanda de

casación además de determinar las que no fueron apreciadas o lo fueron erróneamente, debe señalar la clase de error que cometió el fallador y su influencia en la decisión.

3) Las acusaciones de la presente demanda de casación, carecen de la indicación de una norma sustancial que se refiera o deba referirse al objeto del fallo que se impugna. (Arts. 1603 y 1887 del C.C.)

PONENTE : Pedro Lafont Planetar  
 AUTO DE CASACION (332)  
 FECHA : 02/11/1994  
 DECISION : INADMISIBLE Y DESIERTO CASACION  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Vehículos Repuestos y Servicios Santa Bárbara  
 Limitada.  
 DEMANDANTE : Sociedad "Tomas Limitada"  
 PROCESO : 005150  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 358 Numeral: 1, 374; DECRETO  
 Num.: 2651 Año: 1991 Art.: 5.; C.C. Art. 1603, 1897 *Ibidem*.

**NULIDAD PROCESAL - Sancamiento / FALTA DE COMPETENCIA / EXCEPCION PREVIA**

Si se halla sancada la nulidad por falta de competencia, con motivo de no haberse propuesto como excepción previa, dicho sancamiento determina la permanencia del proceso en el Juzgado donde originalmente se inició la actuación, sin que pueda el respectivo juez, por expresa prohibición legal, declarar su incompetencia y provocar conflicto con otro juez, so pretexto de sancar, de ese modo, una irregularidad que en la realidad ya no existe.

PONENTE : Héctor María Naranjo  
 AUTO DE CONFLICTO DE COMPETENCIA (333)  
 FECHA : 02/11/1994  
 DECISION : J. II CIVIL DE CIRCUITO DE SANTAFE DE  
 BOGOTA COMPETENTE  
 PROCEDENCIA : J. I, CIVIL DEL CIRCUITO-3o. CIVIL DEL CTO  
 CIUDAD : SANTAFE DE BOGOTÁ-NEIVA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Rojas Alarcon, Luis Javier  
 DEMANDANTE : Bultrago Díaz, Julio Ernesto  
 PROCESO : 005190  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 85, 143, 148, 144 *Ibidem*.

**CASACION-Admisión / EXPEDIENTE-Remisión / CASACION-Pago de Porte**  
 Previamente a resolver sobre la admisibilidad del recurso de casación, se considera pre-



ciso verificar si la remisión del expediente se realizó de conformidad con lo previsto por el art. 132 del C. de P.C., toda vez que no aparecen las constancias correspondientes.

PONENTE : Rafael Romero Sierra (Solo)  
 AUTO DE CASACION (335)  
 FECHA : 02/11/1994  
 DECISION : Se pide información a la Secretaría Sala Civil del Tribunal y a la Administración Postal Nacional.  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : SINCELEJO  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Electricadora de Sucre S.A.  
 DEMANDANTE : Vanegas López, María Magdalena y otros  
 PROCESO : 005238  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 132

04/11/1994

#### QUEJA-Precedencia / PRECLUSION

En el presente evento, se declara precluida la procedencia del recurso de queja interpuesto contra el auto que denegara la concesión del recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia.

PONENTE : Pedro Lafont Pianetta  
 AUTO DE QUEJA (337)  
 FECHA : 04/11/1994  
 DECISION : SE DECLARA PRECLUIDA LA PROCEDENCIA  
 DEL RECURSO DE QUEJA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : MONTERIA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Cartagena Galvis, Amanda Rosa y otra, herederos de  
 Luis Alfonso Cartagena Sánchez  
 DEMANDANTE : Muslaco Sánchez, Yureth María  
 PROCESO : 005246  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 378 Inciso: 7.

08/11/1994

#### APELACION / REPOSICION / SUPLICA

Si un auto de ponente es por naturaleza apelable, carece de reposición y sólo es suplicable. De consiguiente, el auto de ponente debe estar desprovisto de apelación para que pueda ser recurrible en reposición.

#### REVISION-CAUCIÓN

La caución prevista por el artículo 383 de: Estatuto Rituario Civil garantiza los perjuri-

cos de todo orden, y las costas, que el trámite del proceso de revisión pueda causar a quienes fueron partes en el proceso en que se dictó la sentencia.

PONENTE : Nicolás Bochara Simancas (Solo)  
 AUTO DE REPOSICION (339)  
 FECHA : 08/11/1994  
 DECISION : DECLARA IMPROCEDENTE RECURSO DE  
 REPOSICION  
 PROCEDENCIA :  
 CIUDAD :  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : López de González, Cecilia  
 SOLICITADO POR : Soc. Concretamos Ltda.  
 PROCESO : 005081  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Arts 351, 348 ibidem.

#### **QUEJA-Improcedencia / QUEJA-Rechazo**

El recurso de queja aquí aducido bajo el supuesto inexistente de una decisión denegatoria de un recurso de casación que se dice fue interpuesto en tiempo útil, resulta improcedente y por ende no queda otra alternativa al sino a rechazarlo.

PONENTE : Carlos Esteban Jaramillo Schloss  
 AUTO DE QUEJA (338)  
 FECHA : 08/11/1994  
 DECISION : RECHAZA POR IMPROCEDENTE RECURSO  
 DE QUEJA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : IBAGUE  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Arias Calderón, Luis Josué  
 DEMANDANTE : Arias Calderón, Luz Dary  
 PROCESO : 005245  
 PUBLICADA : No

09/11/1994

#### **COMPETENCIA FUNCIONAL / CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / QUEJA**

Competencia funcional de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para conocer del recurso de queja. Incompetencia de ésta para asumir el conocimiento del precitado recurso cuando el que se deniega es el de apelación.

#### **CASACION "PER SALTUM"**

El recurso de "casación per saltum", contemplado en el artículo 367 del C. de P.C. es una impugnación extraordinaria que solamente procede respecto de sentencias de primera instancia proferidas por los funcionarios allí mencionados, o sus equivalentes, y en las condiciones previstas así mismo en dicho precepto.

**APELACION**

La ley procesal civil no contempla la figura de la apelación "per saltum"

**AUTO DE MEMORIAL (340)**

FECHA : 09/11/1994  
 DECISION : SE RECHAZA RECURSO DE QUEJA  
 PROCEDENCIA : J. 2o. Civ. Clo.  
 CIUDAD : Santafé de Bogotá, D.C.  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO: José Bernardo Buitrago Rincón y otros  
 DEMANDANTE: Díaz Pineda Luisa Adelia y otra.  
 SOLICITADO POR : Pedro Antonio, José Bernardo y Luz Marisol Buitrago Rincón.  
 PROCESO : 005262  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 25 Numral.: 3

**CONFLICTO DE COMPETENCIA/COMPETENCIA TERRITORIAL./TITULO VALOR**

1) El artículo 621 del C. de Co. no es una norma que indique la competencia por factor territorial en los procesos judiciales. Es entonces una norma supletoria que se propone fijar reglas que faciliten el ejercicio de derechos incorporados en títulos valores.

2) En dicha materia de los títulos valores, para determinar el fuero del demandado y dilucidar conflictos en los estrados judiciales, debe acudirse al numeral 1o. del art. 23 del C. de P.C.

Igual sentido: auto del 9 de octubre de 1992, auto del 12 de mayo de 1994.

PONENTE : Jorge Antonio Castillo Rugeles  
**AUTO DE CONFLICTO DE COMPETENCIA (341)**  
 FECHA : 09/11/1994  
 DECISION : J.24 CIVIL MUNICIPAL DE SANTA FE DE BOGOTA COMPETENTE  
 PROCEDENCIA : J.24 CIV.MPAL.-2o.CIV.MPAL  
 CIUDAD : SFE DE BOGOTA-FUSAGASUGA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Gómez de Bautista, Martha Ligia y otros.  
 DEMANDANTE : Coop.Ahorro y Crédito de Fusagasugá  
 PROCESO : 005239  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de Co. Art.: 621, 677, 876 ibídem; C. de P.C. Num.: Año: Art.: 23 Numral.: 1.

10/11/1994

**DEMANDA DE REVISION-Contestación**

Se tiene por contestada la demanda de revisión.

PONENTE	: Rafael Romero Sierra (Solo)
AUTO DE REVISION (345)	
FECHA	: 10/11/1994
DECISION	: SE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA
DE REVISION	
SUJETOS	:
DEMANDADO	: Municipio de Chiquizá (Boyacá)
DEMANDANTE	: Rodríguez Vda. de Suárez, Verónica
PROCESO	: 005041
PUBLICADA	: No

#### **DESISTIMIENTO PARCIAL DE PRETENSIONES / LITISCONSORCIO NECESARIO**

En el presente caso, no se le dá curso legal a la renuncia de derechos, por no provenir dicha renuncia de todos los litisconsortes necesarios. Igualmente en el escrito no se le dá cumplimiento a lo dispuesto en el art. 343 num. 1o. del C. de P.C.

PONENTE	: Jorge Antonio Castillo Rugeles (Solo)
AUTO (344)	
FECHA	: 10/11/1994
DECISION	: ABSTENERSE DAR CURSO LEGAL A LA
RENUNCIA DE DERECHOS	
SUJETOS	:
DEMANDADOS	: SUC. JULIO VICENTE ORTIZ COBOS
DEMANDANTE	: Gutiérrez, Félix Amiro
PROCESO	: 003992
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: C. de P.C. art. 51; C. de P.C. Art. 343 Numeral 1

#### **DESISTIMIENTO DEL RECURSO / CASACION - Desistimiento**

Se acepta el desistimiento del recurso de casación.

PONENTE	: Pedro Lafont Piarretta
AUTO DE CASACION (342)	
FECHA	: 10/11/1994
DECISION	: SE ACEPTA EL DESISTIMIENTO DEL RECUR-
SO DE CASACION	
PROCEDENCIA	: T.S.D.J.
CIUDAD	: SANTIAGO DE CALI
SUJETOS	:
DEMANDADO	: Soc. Globo- Ventas Ltda.. Se cita en garantía a la
	"Aseguradora Granatombiana S.A."
DEMANDANTE	: Moreno Martínez, Pedro
PROCESO	: 005197

PUBLICADA : No

11/11/1994

**CONFLICTO DE JURISDICCION / CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA/COMPETENCIA**

Competencia del Consejo Superior de la Judicatura por intermedio de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria para dirimir los conflictos de jurisdicción. Ante la negativa de dicho organismo a hacerlo, la Corte ha venido desatando esos conflictos, bajo una doble consideración.

Igual sentido: Autos 2 y 15 de octubre de 1992.

**MATRIMONIO / JURISDICCION DE FAMILIA**

En el presente caso se trata de una controversia de la naturaleza de las que indica el art. 5o. numeral 12 del Decreto 2272 de 1989, esto es que se trata de un proceso contencioso sobre el régimen económico del matrimonio y por ende su conocimiento insume a la jurisdicción de familia.

PONENTE : CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS  
 AUTO DE CONFLICTO DE ATRIBUCIONES ( 346 )  
 FECHA : 11/11/1994  
 DECISION : JURISDICCION DE FAMILIA CORRESPONDE  
 CONOCIMIENTO  
 PROCEDENCIA : J.2o-FAMILIA-6o.CIV. CTQ.  
 CIUDAD : SANTA FE DE BOGOTA, D.C.  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Navas, Jorge Enrique  
 DEMANDANTE : Rubiano de Navas, Beatriz Ana  
 PROCESO : 005175  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C.N. Art. 256 Numeral: 6, 234, 229.

16/11/1994

**PRUEBAS / DICTAMEN PERICIAL-Objeción**

Se hace el pronunciamiento acerca de las pruebas dentro del trámite de objeción al dictamen pericial.

PONENTE : Rafael Romero Sierra (Solo)  
 AUTO UNITARIO. PRUEBAS(349 A)  
 FECHA : 16/11/1994  
 DECISION : SE DECRETAN PRUEBAS  
 PROCESO : 004364  
 PUBLICADA : No

**NULIDAD PROCESAL-Legitimación, Oportunidad / INTERRUPCION PROCESAL.-Legitimación, Oportunidad / PRECLUSION/ INCIDENTE DE NULIDAD**

1) La nulidad prevista en el numeral 5o. del artículo 140 de C. de P.C. se encuentra suje-

ta a los requisitos que para alegarla exige la ley, uno de los cuales es el de su oportunidad, en virtud del cual carece de legitimación para invocar esta causal de nulidad, "quien haya actuado en el proceso después de ocurrida la respectiva causal sin proponerla" (art. 143 inc. final ibídem).

2) Preclusión en este caso para la proposición del incidente de nulidad.

PONENTE	: Pedro Lafont Planetta
AUTO DE CASACION (349)	
FECHA	: 16/11/1994
DECISION	: DENIEGA SOLICITUD
PROCEDENCIA	: T.S.D.J.
CIUDAD	: CUNDINAMARCA
SUJETOS	:
DEMANDADO	: Herederos Indeterminados de Giovanni Ferrara.
DEMANDANTE	: Ferrara de Quiceno Francisca Teresa.
PROCESO	: 005085
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: C. de P.C. Art: 140 Numral: 5, Art: 143, 168 ibídem.

17/11/1994

#### **AUTONOMIA DEL JUZGADOR / VALORACION PROBATORIA / ERROR DE HECHO Y DE DERECHO**

En la decisión del conflicto de intereses sometido a la composición del Juez, éste goza de discreta autonomía para apreciar el material probatorio recogido con tal propósito en los autos, por lo cual sus conclusiones en este campo son inmodificables en el recurso de casación, salvo cuando en esta tarea haya incurrido en error de hecho evidente o en error de derecho, influyendo uno u otro en la decisión.

#### **PROCESO / PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA / ERROR DE HECHO**

1) El proceso sólo tiene dos instancias dentro de las que no se ubica el recurso de casación.

2) Evidencia del error fáctico.

3) El recurrente en casación debe centrar su actividad a demostrar ese error y no a enunciarlo simplemente, por lo que le incumbe actuar de manera diferente a como lo haría al formular un alegato de instancia.

PONENTE	: Nicolás Bechara Simancas
SENTENCIA DE CASACION (135)	
FECHA	: 17/11/1994
DECISION	: NO CASA
PROCEDENCIA	: T.S.D.J.

CIUDAD : TUNJA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS : OLMOS MENDOZA, LUIS ELADIO, en su calidad de heredero de Clodomiro Olmos Suárez y frente a herederos de los esposos Gumercindo Olmos Suárez y Gumercinda Arenas Alfonso.  
 DEMANDANTE : OLMOS ARENAS, MAURA YANETH  
 INTERPUESTO POR : El demandado Luis Eladio Olmos.  
 PROCESO : 004427  
 PUBLICADA : No

#### **DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA / DESISTIMIENTO PARCIAL DE PRETENSIONES**

En el presente evento, como quiera que el escrito de desistimiento parcial de las pretensiones aparece presentando personalmente en la forma indicada para la demanda y además está conñido a los restantes requisitos previstos por el art. 342 del C. de P.C., se acepta el desistimiento parcial de pretensiones.

#### **AUTO DE DESISTIMIENTO (356)**

FECHA : 17/11/1994  
 DECISION : SE ACEPTA EL DESISTIMIENTO DE LA PRETENSION DE CONDENA A FRUTOS  
 PROCEDENCIA : TRIBUNAL SUPERIOR  
 CIUDAD : SANTA FE DE BOGOTA, D.C.  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : VILLER ORTIZ, HUGO  
 DEMANDANTE : CLINICA DE MATERNIDAD DAVID RESTREPO  
 SOLITADO : Parte demandante  
 PROCESO : 001355  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Arts 84, 345, 342 íbidem.

23/11/1994

#### **REVISION - Característica / PRECLUSION**

La revisión está consagrada como recurso de carácter extraordinario, lo cual comporta el tener que actuar sobre un mismo proceso, así esté terminado, siendo su viabilidad restringida, por encontrarse sometido al principio de la eventualidad o preclusión. Concepto de este principio.

Igual sentido: Autos de 20 de septiembre de 1974, 14 de febrero de 1980, 30 de septiembre de 1993.

PONENTE : Nicolás Buchara Simancas (Solo)  
 AUTO DE REVISION (356)  
 FECHA : 23/11/1994  
 DECISION : SE ABSTIENE DAR TRAMITE DEMANDA REVISORIA



INTERPUESTO POR : Liviano Ariza, Nelly  
 PROCESO : 005271  
 PUBLICADA : No

24/11/1994

**NORMA SUSTANCIAL / DEMANDA DE CASACION /  
 CONTRATOS**

1) En la actualidad la norma de derecho sustancial que ha de indicarse en la demanda debe ser la base esencial del fallo impugnado, o que ha debido serlo a juicio del recurrente.

2) El carácter dispositivo del recurso extraordinario de casación se refleja, entre otros, en ciertas exigencias formales para la demanda, tal como la de que se indique la "clase de error" que se le endilga al Tribunal en la valoración de las pruebas.

3) En ausencia de contrato que vincule jurídicamente a las partes y que le imponga a una el deber de entregar a otra determinados bienes, es improcedente la aplicación de los arts. 1603 a 1606 del Código Civil.

Igual sentido: tomo CLI, págs. 255

PONENTE : Pedro Lafont Planella  
 AUTO DE REPOSICION (358)  
 FECHA : 24/11/1994  
 DECISION : NO REPONE AUTO  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : SANTAFE DE BOGOTA, D.C.  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : "Vehículos Repuestos y Servicios Santa Bárbara Limitada" y contra Eduardo Umaña Sierra  
 DEMANDANTE : Sociedad "Taurus Limitada"  
 PROCESO : 005150  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C.C. Arts: 1603, 1604, 1605, 1606; C. de P.C. Arts: 374 Numral: 3 Inciso: 1.

**RESPONSABILIDAD CIVIL DEL JUEZ**

Se da el trámite al proceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil.

AUTO DE RESPONSABILIDAD DEL JUEZGADOR (359)

FECHA: 24/11/1994

DECISION: Se admite demanda y en consecuencia se corre traslado a los demandados.

SUJETOS:

DEMANDANTE: CAICEDO MEDINA, HECTOR FIDEL.

DEMANDADO: Angela María Betancur de Gómez; Eduardo Carvajalino Contreras y Natalia Contreras de Quevedo.

PUBLICADA : Si

FUENTE FORMAL: Art. 40 del C. de P.C.

28/11/1994

# REPOSICION / AUTO - Adición / DECRETO DE PRUEBAS

Se adiciona el auto recurrido con el decreto de pruebas.

PONENTE : Rafael Romero Sierra (Solo)  
 AUTO DE REPOSICION (362)  
 FECHA : 28/11/1994  
 DECISION : SE ADICIONA AUTO RECURRIDO  
 PROCESO : 004722  
 PUBLICADA : No

# PRECLUSION / CASACION-Carga Procesal / CASACION-Deserción

En virtud del principio procesal de la preclusión, los actos procesales han de cumplirse en las precisas oportunidades señaladas para ello por la ley, y en tratándose del recurso extraordinario de casación se aplica por el legislador imponiendo al recurrente la carga procesal de presentar "en tiempo la demanda", so pena de que se declare "desierto el recurso" y se le condene en costas. (art. 373 ibc, 3 del C. de P.C.)

PONENTE : Pedro Lafont Pianetta (Solo)  
 AUTO DE REPOSICION (360)  
 FECHA : 28/11/1994  
 DECISION : NO REPONE AUTO  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : CUNDINAMARCA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Herederos Indeterminados de Giovanni Ferrara .  
 DEMANDANTE : Ferrara de Quicono, Francisca  
 PROCESO : 005085  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art. 373 Inciso: 3

# IMPEDIMENTO / ENEMISTAD GRAVE O AMISTAD INTIMA

Como quiera que el magistrado manifiesta encontrarse incurso en la causal 9a. del art. 150 del C. de P.C., se declara impedido para seguir conociendo del presente asunto.

PONENTE : Rafael Romero Sierra (Solo)  
 AUTO DE IMPEDIMENTO (361)  
 FECHA : 28/11/1994  
 DECISION : El MAGISTRADO SE DECLARA IMPEDIDO  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Alvaro Orjuela  
 DEMANDANTE : Montoya Ortégón José Ignacio  
 PROCESO : 005165  
 PUBLICADA : No

**ERROR DE HECHO Y DE DERECHO**

En el presente evento, el recurrente confundió el error de hecho con el de derecho, a pesar de existir entre ellos marcada diferencia que los hacen inconfundibles.

**VIOLACION NORMA SUSTANCIAL - Ataque todas las pruebas**

No es procedimiento correcto en este recurso extraordinario el ataque aislado de los medios de prueba.

Igual sentido: G.J.CXLII, pág. 146.

**VIOLACION NORMA SUSTANCIAL-Ataque todos los fundamentos**

Aunque el recurrente acuse la sentencia por violación de varias disposiciones civiles, la Corte no tiene necesidad de entrar en el estudio de los motivos alegados para sustentar esa violación, si la sentencia trae como base principal de ella una apreciación que no ha sido atacada en casación, ni por violación de la ley, ni por error de hecho o de derecho, y esa apreciación es más que suficiente para sustentar el fallo acusado.

Igual sentido: G.J. LXXI, 740; LXXV, 52.

PONENTE : Nicolás Bechara Simancas  
 SENTENCIA DE CASACION (141)  
 FECHA : 28/11/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS : Aura Rosa Mejía Barón y otros como herederos de  
 María Antonia Barón Vda. de Mejía,  
 DEMANDANTE : Mejía Barón, Fruto Eleuterio  
 INTERPUESTO POR : Parte demandante  
 PROCESO : 004246  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 368 Numral.: 1.

**DEMANDA DE CASACION - Presentación / CASACION-Deserción**

Teniendo en cuenta que la parte recurrente dejó transcurrir el término del traslado sin presentar la demanda respectiva, y lo dispuesto en el inciso 3o. del art. 373 del C. de P.C., se declara desierto recurso de casación.

PONENTE : Rafael Romero Sierra (Solo)  
 AUTO DE CASACION (363)  
 FECHA : 28/11/1994  
 DECISION : SE DECLARA DESIERTO RECURSO DE CASACION  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : SANTA MARTA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Larruturo de Vives, Inés y otros

DEMANDANTE : Vives Collante, Alfredo y otra  
 PROCESO : 005182  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 373 Inciso: 3

29/11/1994

**CASACION-Carga Procesal / NORMA SUSTANCIAL**

En virtud de la carga procesal de individualizar las normas sustanciales cuya violación se acusa al Tribunal, no son de recibo las "acusaciones genéricas".

Igual sentido: Ordinario de Julio Lozano contra Rubén Avila, archivo Corte.

PONENTE : Jorge Antonio Castillo Rugeles  
 ACTO DE CASACION (366)  
 FECHA : 29/11/1994  
 DECISION : INADMISIBLE Y DESIERTO RECURSO DE  
 CASACION  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : MEDILLIN  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Rave Aristizabal, Gabriel  
 DEMANDANTE : Defensoría de Familia, Regional Antioquia en representación del menor Juan Esteban Montoya Vásquez  
 INTERPUESTO : Por el demandado  
 PROCESO : 005188  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 374 Numral.: 3; DECRETO Num.: 2651 Año: 1991 Art.: 51; C. de P.C. Art.: 373 Inciso: 4

30/11/1994

**VIOLACION NORMA SUSTANCIAL-Vía Directa e Indirecta / CASACION-Carga Procesal / ERROR DE HECHO Y DE DERECHO**

Distinción entre la vía directa y la indirecta por las que se puede violar la norma de derecho sustancial. Deber del recurrente cuando se acusa la sentencia por ésta clase de vía, sea por error de hecho o de derecho.

PONENTE : Héctor Marín Naranjo  
 SENTENCIA DE CASACION (145)  
 FECHA : 30/11/1994  
 DECISION : NO CASA  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : PAMPLONA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Hrs. Indeterminados de Félix María Accro; herederos determinados de Mariana y Ana María Muñoz de Trevissi.  
 DEMANDANTE : RODRIGUEZ VDA. DE MUÑOZ, FLOR DE MARIA

PROCESO : 004008  
PUBLICADA : No  
FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 368 Numral.: 1 Inciso: 2

**DEMANDA DE REVISION / DECRETO DE PRUEBAS**

En este evento, contestada oportunamente la demanda de revisión y agotado el término del traslado, se procede a decretar pruebas pedidas por las partes.

PONENTE : Rafael Romero Sierra (Solo)  
AUTO DE REVISION (373)  
FECHA : 30/11/1994  
DECISION : SE PROCEDE A DECRETAR PRUEBAS  
SUJETOS :  
DEMANDADO : López Cuervo Herminio y otros  
DEMANDANTE : Rodríguez Cuervo, Manuel y otros.  
PROCESO : 005041  
PUBLICADA : No  
FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 373.

**AMPARO DE POBREZA**

La solicitud que se resuelve en este evento cumple con los requisitos legales respecto del amparo de pobreza.

PONENTE : Jorge Antonio Castillo Rugeles  
AUTO DE REVISION (371)  
FECHA : 30/11/1994  
DECISION : SE CONCEDE AMPARO DE POBREZA  
PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
CIUDAD : TUNJA  
SUJETOS :  
DEMANDADO : Gulindo Peña, Fidel de Jesús  
SOLICITADO POR : Rodríguez Sierra, José Quintiliano  
PROCESO : 005284  
PUBLICADA : No  
FUENTE FORMAL : C. de P.C. art.: 160, 163 ibídem.

**NORMA SUSTANCIAL / NORMA PROCESAL**

El numeral 4 del artículo 10 del decreto 2651 de 1991, por cuya hipotética infracción se duele la parte recurrente, carece de la entidad de sustancial, pues se trata de un precepto orientado únicamente a regular las secuencias de orden procesal, especialmente en el aspecto probatorio, originadas en la inasistencia del denunciado a la audiencia de conciliación, característica que lleva a tenerlo como de naturaleza meramente procesal. Igualmente puede decirse de los arts. 195 y 198 del C. de P.C. que disciplinan algunos aspectos de contienda judicial.

PONENTE : Héctor María Nararjo

**AUTO DE CASACION (370)**

FECHA : 30/11/1994  
 DECISION : RECHAZA Y ADMITE PARCIALMENTE  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : (BAGUI)  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Cooperativa de Transportes Velotax Ltda.  
 DEMANDANTE : Suárez, Miguel Antonio  
 PROCESO : 005180  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 374; DECRETO Num.: 2651 Año: 1991 Art.: 51; DECRETO Num.: 2651 Año: 1991 Art.: 10 Numeral: 4; C. de P.C. Art.: 195; 198 *ibidem*.

**JURISDICCION AGRARIA / CASACION - Procedencia**

En asuntos agrarios, la procedencia del recurso de casación, sólo es viable en las tres clases de asuntos que especifica el art. 50 del decreto 2303 de 1989, sin que exista posibilidad alguna de suponer que también tiene cabida en procesos que, habiéndose tenido como de naturaleza agraria, son distintos a los legalmente enumerados.

PONENTE : Héctor María Naranjo  
**AUTO DE QUEJA (368)**  
 FECHA : 30/11/1994  
 DECISION : BIEN DENEGADO RECURSO DE CASACION  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : CUNDINAMARCA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Flechas, Cayetano Avelino y otra  
 DEMANDANTE : Gómez Pinzón, Carlos Arturo  
 PROCESO : 005270  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : DECRETO Num.: 2303 Año: 1989 Art.: 50

**CONFLICTO DE COMPETENCIA / FUERO CONCURRENTE / FUERO PRIVATIVO / TITULO VALOR / CONTRATO**

1) Consumada la elección, desaparece el fuero concurrente para convertirse en privativo. Igual sentido: proveído de 5 de marzo de 1993

2) El simple acto de girar un título valor, no evidencia relación contractual alguna.

PONENTE : Rafael Romero Sierra  
**AUTO DE CONFLICTO DE COMPETENCIA (372)**  
 FECHA : 30/11/1994  
 DECISION : J. CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN COMPETENTE  
 PROCEDENCIA : J. lo. CIVIL CTÓ. - lo. CIVIL CTÓ.

CIUDAD : MANIZALES-MEDELLIN  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS : ALZATE ARIAS, HERNAN ALFONSO y otros.  
 DEMANDANTE: Alzate Narváez, Diego  
 PROCESO : 005251  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 23 Numral.: 1 y 5.

#### **CONFLICTO DE COMPETENCIA / CONTRATOS / DOMICILIO / COMPETENCIA TERRITORIAL**

Los contratantes que adoptan un determinado lugar para el cumplimiento de las prestaciones propias del convenio, permiten con ello, que se le dé aplicación en su momento, a las formas procesales que en el punto reglamentan la competencia. No se trata de la fijación de un domicilio procesal, sino de que el lugar que las partes han escogido libremente para el cumplimiento de las prestaciones propias del contrato, la ley, a su vez, lo toma en cuenta para definir la competencia por el factor territorial.

PONENTE : Héctor María Naranjo  
 AUTO DE CONFLICTO DE COMPETENCIA (369)  
 FECHA : 30/11/1994  
 DECISION : J.16 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA COMPETENTE  
 PROCEDENCIA : J.16 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA  
 CIUDAD : SANTA FE DE BOGOTA-SOACHA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Duque Moron, David  
 DEMANDANTE : Chavez Mancipe, Luis Antonio  
 PROCESO : 005254  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 23 Numral.: 5

09/12/1994

#### **DEMANDA DE REVISION-Contestación/**

#### **DECRETO DE PRUEBAS**

Contestada la demanda con la que se promovió el recurso de revisión, se decretan pruebas.

PONENTE : Pedro Lafont Pianetta (Solo)  
 AUTO DE REVISION (374)  
 FECHA : 09/12/1994  
 DECISION : SE DECRETAN PRUEBAS  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : Empresa Puertos de Colombia -Colpuertos-  
 DEMANDANTE : Flota Mercante Grancolombiana  
 PROCESO : 005066  
 PUBLICADA : No



FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art. 383

12/12/1994

**REPOSICION / INVESTIGACION DISCIPLINARIA / HONORARIOS PROFESIONALES / REVISION**

Se mantiene la decisión impugnada en el sentido de disponer la expedición de las copias pertinentes para averiguar por la presunta infracción al estatuto del abogado en que pudieron haber incurrido los mandatarios judiciales, principal y sustituto, al tasar sus honorarios, para defender los intereses de sus poderdantes en el trámite del recurso extraordinario de revisión.

**AUTO DE REPOSICION (379)**

FECHA : 12/12/1994  
 DECISION : NO REPONE AUTO  
 PROCEDENCIA : T.S.D.J.  
 CIUDAD : CARTAGENA  
 SUJETOS :  
 DEMANDADOS : PERSONAS INDETERMINADAS  
 DEMANDANTE : KELLY WILSON, ANTONIO y otra.  
 INTERPUESTO POR : MORENO TRUJILLO, JESUS  
 PROCESO : 003865  
 PUBLICADA : No

**DESISTIMIENTO PARCIAL DE PRETENSIONES / MANDATO / COSTAS**

Fué en ejercicio de la facultad de desistir, la que no ha sido revocada ni condicionada por el mandante, que el apoderado desistió de la pretensión del pago de frutos. Tal desistimiento constituye una renuncia no extensiva a las restantes súplicas de la demanda, razón por la cual el monto de la condena por concepto de costas debe ser proporcional.

PONENTE : Nicolás Bechara Simancas  
 AUTO DE ACLARACION DE AUTO Y DE REPOSICION (376)  
 FECHA : 12/12/1994  
 DECISION : NO ACCEDER A ACLARACION SOLICITADA y NO  
 REPONE  
 SUJETOS :  
 DEMANDADO : VELEZ ORTIZ, HUGO  
 DEMANDANTE : Clínica de Maternidad David Restrepo  
 INTERPUESTO POR : PARTE DEMANDADA  
 PROCESO : 004355  
 PUBLICADA : No  
 FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art. 345 Inciso 2, 343 ibídem.

14/12/1994

**PROVIDENCIA JUDICIAL-Ejecutoria / CASACION-Copias / TERMINO-Interrupción**

La ejecutoria del auto por medio del cual se dispuso la expedición de las copias de que trata el artículo 371 del C. de P.C., punto de partida para contar el término dentro del cual el aquí recurrente debía suministrar lo indispensable para compulsarlas, no se interrumpe sino con la interposición de un recurso legítimamente procedente.

### **CASACION-DESERCIÓN**

Caracteres de los motivos de deserción del recurso de casación.

Igual sentido: auto del 3 de agosto de 1994.

### **PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL/ DEBIDO PROCESO**

La prevalencia del derecho sustancial no significa, ni puede significar, que son soslayables las formas propias de cada juicio, como que su observancia hace parte del debido proceso.

### **CASACION-Finalidades**

Los fines de la casación, únicamente pueden cumplirse previo su trámite y el lleno de los requisitos que requiere su concesión, admisión y la demanda con que se sustenta el mismo.

PONENTE	: Héctor Marín Naranjo
AUTO DE REPOSICION (375)	
FECHA	: 14/12/1994
PROCEDENCIA: TRIBUNAL SUPERIOR D.J.	
CIUDAD: SANTA ROSA DE VITERBO	
DECISION	: NO REPONE
SUJETOS	: -
DEMANDADO	: Alfonso, Antonio de Jesús
DEMANDANTE	: Ulises Luengas, Cármenza y otros
PROCESO	: 005236
PUBLICADA	: No
FUENTE FORMAL	: C. de P.C. Art. 331.

15/12/1994

### **APODERADO/AUDIENCIA DE CONCILIACION**

Los apoderados están en la obligación procesal, so pena de ser sancionados una multa, de concurrir a la audiencia de que trata el art. 101 del C. de P.C., salvo que presenten justificación idónea y oportuna.

PONENTE	: Nicolás Bechara Simancas (Solo)
AUTO (380)	
FECHA	: 15/12/1994
DECISION	: ACEPTA JUSTIFICACION
PROCEDENCIA	: T.S.D.J.
CIUDAD	: GUADALAJARA DE BUGA
SUJETOS	: -

DEMANDADOS ARANGO OCAMPO, GUILLERMO, Carlos Tulio  
Trujillo Bravo y Gustavo Adolfo Jiménez Guzmán, Magistrados los dos primeros y  
Conjuez el último del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.  
DEMANDANTE BEDOYA ALZATE, ALFONSO  
PROCESO : 005078  
PUBLICADA : No  
FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 279, 101 ibídem; DECRETO  
Num.: 2651 Año: 1991 Art.: 22.

### QUEJA

Etapas procesales de preparación y de introducción que debo reunir el recurso de queja.

PONENTE : Nicolás Bechura Simancas  
AUTO DE QUEJA (381)  
FECHA : 15/12/1994  
DECISION : DECLARA PRECLUIDA PROCEDENCIA  
RECURSO DE QUEJA  
PROCEDENCIA : C.S.D.J.  
CIUDAD : MEDELLIN  
SUJETOS :  
DEMANDADO Jacamillo Mesa, Beatriz Celina  
DEMANDANTE Jacamillo Mesa, Carlos Enrique  
INTERPUESTO : La demandada  
PROCESO : 005304  
PUBLICADA : No  
FUENTE FORMAL : C. de P.C. Art.: 378.

**INDICE DE DISPOSICIONES JURIDICAS CITADAS  
INTERPRETADAS O ALUDIDAS EN LAS PROVIDENCIAS  
CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DE 1994**

**CONSTITUCION NACIONAL DE 1886**

76 num.9	A-355
76 num.10	A-355

**CONSTITUCION NACIONAL (1991)**

1	S-125
19	A-267
79	A-247, A-375

**CONSTITUCION NACIONAL (1991)**

42	A-267, S-130
95 n. 1.3	S-125
116	A-238, A-250, A-256 A-216, A-276, A-256
121	A-265
150 num.7	A-355
221	A-216, A-238, A-265 A-250, A-256, A-276
228	S-115
230	S-125
246	A-216, A-228, A-256 A-238, A-250, A-276
247	A-216, A-228, A-247 A-238, 250, A-276
229	A-345, A-353
234	A-346, A-353
256	A-216, A-226, A-228,

	A-250, A-256, A-265, A-276, A-278, A-286, A-346, A-353
256 num.6	S-133
5 transitorio	

## CÓDIGO CIVIL

6 inc.2	S-130
6 num.2	S-120
90	S-143
92	S-100, S-107
329	S-130
403	S-107,
673	S-146
675	S-133
698	S-143
762	S-146, S-139, S-133
779	S-095
943	S-095
946	A-257, S-112, A-285 S-116, A-257, S-111
981	S-146
1055	S-124
1008	S-107
1011	S-107
1061	S-124
1062	S-124
1063	S-124
1069	S-124
1155	S-107
1495	S-119
1502	S-144
1503	S-119
1505	S-144
1523	S-119
1546	S-134
1603	A-358, A-332, S-125
1604	A-358
1605	A-358
1606	A-358

1608	S-134
1609	S-134
1687	S-134
1617	S-130
1740	S-119, S-120
1741	S-120, S-119
1742	S-119
1746	S-097
1750	S 144
1852	S-119

### CODIGO CIVIL.

1897	A-137
2014	S 132
2204	S 144
2318	S-133
2341	S-130
2335	S-119
2341	S-130
2356	S-148, S-130
2512	S-146, S-133
2518	S-146, S-135
2524	S-143
2527	S-146
2435	S 128, S-123
2457	S-128

### CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

4	S-115
23	A-261, A-289, A-289, A-354
23 num.1	A-279, A-245, A-281 A-248, A-279, A-341, A-311, A 305, A-279,
23 num.5	A-231, A-245, A-248, A-369, A-311

23 num. 7	A-239
23 num. 9	A-329
23 num. 10	A-311, A-377
23 num. 13	A-239
23 num. 14	A-320
23 num. 15	A-306
23 num. 20	A-218
25 num. 2	A-330
25 num. 3	A-266, A-342
26	A-330
26 num. 2	A-235
28	A-216, A-226, A-265 A-228, A-250, A-276 A-278,
38 num. 2	A-247
44	S-097
51	A-344, S-125

#### CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

40	S-091, A-359
68	A-265
70	A-265
70 inc. 1	A-213
72	A-265
75	S-114, S-116, S-117, A-327, A-296, A-325, S-124
75 num. 3	
75 num. 6	S-097
75 num. 12	S-097
77 num. 5	S-097
82	S-125
83	S-125
84	A-270, A-350
85	A-252, A-272, A-273, A-333, A-252
85 num. 2	S-097, A-334
87	A-280,



88	A-325
89 num.2 inc.2	A-274
90 inc.2	S-134
92	S-124
97	S-097
98	S-097
99 num.4	A-336,
100	S-097
101	A-380
116	A-317
118	A-351
132	A-355, A-335, A-378, A-357
132 inc. 4	A-282, A-319
137	S-139
140	A-247, S-107, S-124
140 num.5	A-217, A-349, A-343, S-114
140 num.7	S-097
140 num.8	S-087
140 num.9	S-136
141	A-247, S-124

#### CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

142	S-087, S-114, S-124
143	S-107, A-349, A-333 S-124
144	A-333, S-124
144 num.5	A-354
145	S-124
146	S-124
147	S-124
148	A-333
150 num.1	A-269
152	A-216
160	A-275, A-371
162	A-275
163	A-275, A-371

163 inc.2	A-242, A-242
164	A-275
166	A-275
167	A-275
168	A-217, A-349
168 inc. final	S-114
168 num.2	A-343
169	A-217
170 inc. final	S-114
170 num.1	S-114
171 inc.2	S-114
177	S-118
178	A-327
179	S-112, A-327, A-297
183	A-327
187	S-100, S-101, S-121 A-327, A-254, S-101, A-147, S-121
188	S-090
195	A-370
198	A-370
217	S-127
228	S-100
229	A-330, S-090
232	S-113
241	A-254, S-125
246	S-139
247	A-256

#### CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

248	S-102
250	A-106
251	A-327
255	A-327
256	A-327
257	A-327
258	A-327
261	A-327

262	A-327
263	A-327
264	A-327
265	A-327
267	A-327
270	A-327
273	A-327
274	A-327
278	A-327
279	A-380, A-327
280	A-327
281	A-327
282	A-327
283	A-327
284	A-236
285	A-236
286	A-327
287	A-327
288	A-236, A-327
289	A-327
290	A-327
293	A-327
296	A-230
299	A-230
302	A-222
302. no, 2	A-941
304	S-114, S-124
305	S-097, S-112, S-144, S-132, S-125, S-124
307	A-277
309	A-243
310	A-243
331	A-375, A-351
340	A-325
342	A-264, A-350

**CODIGO DE  
PROCEDIMIENTO CIVIL.**

343	A-264, A-376
-----	--------------

343 num.1	A-314
344	A-325
344 inc.1	A-213
345	A-259, A-264
" inc.2	A-376
344 inc.1	A-214
345	A-350, A-259
347	A-325
348	A-339, A-301, A-298 A-348, a-316
351	A-227, A-339, A-301, A-348
352	A-348
363	A-224, A-236, A-268 A-238 A, A-246, A-301, A-348
365	A-375, S-137, S-125
366	A-240, A-237, A-238, A-318, A-227, A-340
367	A-340
368 num.1	S-095, S-093, S-102, S-096, S-097, S-103, S-099, S-100, A-254,  S-108, S-111, A-285, S-166, S-117, S-117 S-117, S-118, S-141, A-332, S-103, S-144, S-125
368 num.1 inc.2	S-145, S-125
368 num.2	S-097, S-107, S-144, S-132, S-125, S-124
368 num.3	S-097
368 num.5	S-097, S-117, S-136
370	A-238A, A-321, A-324, A-318
371	A-221, A-224, A-229, A-234, A-244, A-284,

# CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

	A-286, S-115, A-375, A-298, A-286
371	A-328, A-313, A-310, S-137
371 inc.3	A-227, A-351
371 inc.4	A-292, A-283
371 inc.5	A-257, A-292
372	A-278A, A-317
372 inc.1	S-137
372 inc.2	A-237
372 inc.3	S-137
373	A-271, S-137
373 inc.3	A-241, A-315, A-309
373 inc.3	A-258, A-363, A-360
373 inc.4	A-254, A-366
374	S-097, S-101, A-370, A-332, A-324, A-326, S-101, S-137
374 inc.1 ord. 3	S-113
374 num.3	S-099, A-285, 117, A-366, S-108
374 num.3 inc.1	A-358
375 inc.4	S-146
377	A-266, A-321
378	A-381
379	A-223, S-087, A-287
378 inc.7	A-337
378 inc.8	A-288 A-249, A-287, A-285
379	A-322, A-223
380	A-242, A-348, A-243
380 num.1	S-084
380 num.6	S-081, S-085, A-227,
380 num.7	S-087, A-367
380 num.8	S-085

381	A-275, A-307
382	A-249
382 num.2	A-274, A-263
383	A-249, A-272, A-294

### CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

	A-374, A-339, A-331
	A-302, A-294, A-290, A-325
383 inc.1	A-232
383 inc.2	A-227
383 inc.3	A-227, A-290, A-263
383 inc.4	A-296, A-307, A-296
384	A-277, A-314, A-243
393 num.2 y 3	A-317
407	S-146, S-139, S-133
413	S-095
437	A-354
465	A-240
505	A-348
624	A-320
693	S-090
694	A-283
694 nu. 4	A-283
695	A-273, A-283, A-283
695 num.2 inc.3	A-253
695 num.5	A-235

698 S-095

### CODIGO JUDICIAL

762 S-127

### CODIGO DE COMERCIO

61	A-236
62	A-236
63	A-236
64	A-236

65	A-236
66	A 236
518	S-132
519	S-132
620	S-091
621	S-091, A-248, A-341, A-329, A-311, A-305

### CODIGO DE COMERCIO

677	A-341, A-329, A-311, A-305
698 num.2 inc.3	A-253
712	S-091
713	S-091
722	S-126
732	S-129
784 num.4	S-091
830	S-125
871	S-125
876	A-341, A-329, A-311, A-305
1264	S-140
1072	S-143
1077	S-143
1279	S-140
1080	S-143
1081	S-143, S-144
1391	S-129
1887	S-143
1882	S-091
1385	S-091
1388	S-091
1391	S-091
1941	A-295

### CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO



177	A-352
2525	S-095
2531	S-095

### CODIGO DE PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO

152	A-256, A-265, A-276 A-152.
-----	-------------------------------

### CODIGO PENAL

106	S-094
107	S-094

### CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

46	S-094
50	S-094
55	S-094

LEY 57 DE 1887	17	A-267
----------------	----	-------

DECRETO LEY 153 DE 1887	80	A-355
-------------------------	----	-------

LEY 35 DE 1888		A-267
----------------	--	-------

LEY 46 DE 1923		S-129
----------------	--	-------

LEY 120 DE 1928		S-133
-----------------	--	-------

LEY 28 DE 1932	3	
----------------	---	--

LEY 45 DE 1936	4	S-093, S-099, S-108
	4 num.4	S-138
	7	S-107,
	12	S-106

LEY 50 DE 1936

1 S-095, S-146

LEY 200 DE 1936

1 S-133  
 2 S-133  
 3 S-133  
 4 S-133

LEY 83 DE 1946

A-265

LEY 90 DE 1946

54 S-130  
 55 S-130

LEY 15 DE 1959

S-130

DECRETO 528 DE 1964

A-250, A-256, A-276  
 A-278.

DECRETO 444 DE 1967

14 S-090

LEY 75 DE 1968

1 num.4 A-218  
 6 S-099, S-108, S-138  
 6 num.4 S-089, S-100  
 7 S-100, S-105, S-108  
 S-107, A-323  
 10 S-107  
 13 S-106  
 18 A-265

DECRETO L.EY 3130 DE 1968

A-355

DECRETO 960 DE 1970

45 S-097

	13	S-112
	14	S-112
	40	S-112
	100	S-112
DECRETO 1250 DE 1970		
	40	S-097
DECRETO 1260 DE 1970		
	48	S-110
	50	S-110
	104 num. 5	S-110
LEY 20 DE 1972		A-216
LEY 4a. DE 1973		
	2	S-146
	4	S-146
LEY 21 DE 1979	num. 5	S-108
DECRETO 1084 DE 1981	7	S-125
DECRETO 2148 DE 1983	47	S-112
DECRETO 721 DE 1987	8	S-125
DECRETO 522 DE 1988		
	2	A-237
	2	A-237
DECRETO 2272 DE 1989		
	8	A-218, A-281
	5 num. 12	A-353

5 num. 2, Par. 1º  
10

A-265, A-281,  
A-218.

# DECRETO 2282 DE 1989

1, mod.100

A-327

mod.115

A-327

mod.116

A-327

mod.117

A-327

mod.118

A-327

mod.120

A-327

mod.121

A-327

mod.123

A-327

mod.124

A-327

mod.125

A-327

mod.126

A-327

mod.127

A-327

mod.183

S 143

mod.186

A-328

mod.191

A-316

# DECRETO 2272 DE 1989

5 num.12  
8

A-346

A-354

# DECRETO 2273 DE 1989

9

A-340

# DECRETO 2282 DE 1989

407

S-095

# DECRETO 2703 DE 1989

18

A-265

50

A-266, A-368.

# DECRETO 2737 DE 1989

A-213

LEY 54 DE 1990		S-130
DECRETO 1730 DE 1991	2.1.2.3.9	S-125
DECRETO 2651 DE 1991		
	10 num.4	A-370
	22 num.2	S-090, A-380
	51	S-094, A-254, A-257
		S-117, S-118, A-370,
		A-366, A-332, A-327,
		A-257, S-133.
	51 num.3	S-139
	51 num.4	S-118
DECRETO 2652 DE 1991		A-250, A-256, A-265
		A-276, A-216,
	A-226,	
		A-228, A-250, A-278
LEY 1a. DE 1991		
	37	A-355
LEY 9 DE 1991		S-090
LEY 25 DE 1992	4	A-267
DECRETO LEY 036 DE 1992		
	2	A-355
LEY 35 DE 1993	19 num. 3	A-295.
LEY 51 DE 1993		S-095
LEY 100 DE 1993	47	S-130
	74	S-130
	163	S-130
DECRETO 663 DE 1993	98 inc.4	S-125
DECRETO 1735 DE 1993		

## ESTATUTO CAMBIARIO

9	S-090
45	S-090
46	S-090

## LEY 133 DE 1994

11	6 A-267
----	---------

## CODIGO CIVIL PERGUANO 1902

S-130
-------

CODIGO DE FAMILIA  
(DE BOLIVIA)

159	S-130
-----	-------

**INDICE DE DISPOSICIONES JURIDICAS RELACIONADAS CON EL DERE-  
CHO PRIVADO DEMANDADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL -  
SEGUNDO SEMESTRE DE 1994:**

NORMA	ARTICULO	FECHA	No.	DECISION
Decr.01/84 Competencia por la causa.	131,132 y 133	04.03.1994	351	EXEQUIBLE
Decr.01/84 Representación de la Rama Judicial	145 inc.3	01.09.1994	388	EXEQUIBLE
Decr.01/84 términos para el cumplimiento del proceso.	88,183, 212, 213,215 y 234, todos parcialesmente.	22.09.1994	416	EXEQUIBLE
Decr.01/84 Término para interponer recurso	187	22.09.1994	418	EXEQUIBLE



NORMA	ARTICULO	FECHA	Nº.	DECISION
Dec. 1185/94 Expropiación por vía administrativa y se adoptan otras medidas		25.08.1994	371	EXEQUIBLE
Dec. 1307/96 Sociedades de Economía Mixta, Corporaciones, Fundaciones.	6	25.08.1994	372	INEXEQUIBLE
Dec. 1400/70 Términos para 348 y 378. adelantar el proceso judicial.	137, 238,	22.09.1994	416	EXEQUIBLE
Dec. 1888/89 Régimen Disciplinario de los Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial. Inhabilitados.	6	10.11.1994	509	EXEQUIBLE
Dec. 1888/89 Reserva Moral	3 lech	06.12.1994	558	INEXEQUIBLE

NORMA	ARTICULO	FECHA	Nº.	DECISION
Dec.2699/91 Tratamiento Éticos en los procesos, abusos de derechos, actos contra la moral o buenas costumbres en el trabajo o cualquier sala público.	113 parcial, 115 parcial	29.09.1994	427	EXEQUIBLE el 113 siempre y cuando se realice audiencia previa y mediante decisión motivada. Exequible el 115.
Dec. 2737/89 Derechos y obligaciones del adoptante y adoptivo.	97 inc.2	03.11.1994	495	EXEQUIBLE
Dec.2820/74 Cuidado de los hijos Sanctones moderadas.	21 o 262 del C.C.	25.08.1994	371	EXEQUIBLE.
Ley 14/52 Canónico. Consagración oficial de la República de Colombia al Sagrado Cora de Jesús.	en su integridad	04.08.1994	350	1) INEQUIVA para resolver respecto de los arts. 1,3 y 4. 2) EXEQUIBLE el art.5. 3) INEXEQUIBLE art.2.

## INDICE ALFABETICO POR PROCEDENCIA DE DESPACHOS

### JUDICIALES -- SEGUNDO SEMESTRE DE 1994

#### A. TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO JUDICIAL

##### ANTIOQUIA

S-105

S-107

A-296

##### ARMENIA

A-297

##### BARRANQUILLA

A-237

##### BUCARAMANGA

S-096

S-109

##### CARTAGENA

S-085

A-258

A-347

A-314

A-379

##### CUNDINAMARCA

S-095

S-110

S-124

S-133

S-144

S-147

A-288

A-321

A-349

A-360

A-368

GUADALAJARA DE BUGA

S-121

A-380

IBAGUE

S-119

A-325

A-217

A-300

S-122

A-315

S-131

A-338

A-370

MANIZALES

A-242

S-115

MEDELLIN

S-118 A-323

S-150 A-326

S-132 A-366

A-378 A-381

S-148

A-233

S-103

NEIVA

S-112

S-137

A-284

A-302

A-312

MONTERIA

S-087 A-337

A-352 A-307

A-313

A-322

PAMPLONA

A-328

S-145

## PEREIRA

S-111

A-310

## POPAYAN

A-327

## RIOHACHA

A-282

A-357

A-319

## SANGIL

S-106

A-250

## SANLUAN DE PASTO

S-127

A-229

## SANTA MARTA

S-116

S-146

A-223

## SANTAROSA DE VITERBO

S-136

A-351

A-375

## SANTAFE DE BOGOTA

S-084 S-108 S-140 S-104

S-088 S-113 S-142 A-277

A-227 S-114 S-086 A-301

A-230 A-287 A-224 A-317

A-236 S-123 A-232 A-330

A-243 S-125 A-234 A-332

S-093 S-126 A-241 A-350

S-094 S-128 A-246 A-358

## SANTAFE DE BOGOTA

S-097 S-134 S-101 S-141

A-275 A-355 A-254

**SANTIAGO DE CALI**

S-107 A-342

S-117

S-120

A-318

S-129

A-324

S-138

S-141

A-221

A-286

**SINCELEJO**

A-335

**TUNJA**

S-098

S-099

S-100

A-266

S-139

A-280

A-285

S-135

A-371

**B. JUZGADOS**

— 1o. Promiscuo de Familia de Barrancabermeja y Promiscuo Municipal de Macao (Arriquiná) = A-218.

— 4o. Civil del Circuito de Santafé de Bogotá = S-089

— 3o. Civil del Circuito de Tunja = S-092.

**JUZGADOS**

— 2o. Civil del Circuito y 2o. Promiscuo de Familia, de Sincelejo = A-265

— 10 Civil del Circuito Santafé de Bogotá y 2o. Civil del Circuito de Girardot = A-295.

— 15 de Familia de Santafé de Bogotá y promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá = A-281.

- 12 de Familia de Santafé de Bogotá y 3o. Promiscuo de Familia de Tunja = A-320.
- 6o. Civil del Circuito y 2o. de Familia, de Medellín = A-353
- 3o. Familia Santiago de Cali y Promiscuo Municipal de La Victoria (Valle) = A-354.
- Promiscuo Circuito de Ayapel y Civil Circuito de Cauca = A-377
- Promiscuo Municipal de Uramita y 3o. Promiscuo de Familia de Valledupar = A-213
- Promiscuo del Circuito y Promiscuo de Familia, ambos de Puerto Berrío = A-216
- 2o. Promiscuo Familia de Florencia y Promiscuo Familia de Garzón (Huila) = A-222
- 27 Civil del Circuito y 18 de Familia, ambos de Santafé de Bogotá = A-226
- 2o. Civil del Circuito y 1o. Promiscuo de Familia, ambos de Tulúa = A-228
- 4o. Civil Municipal Tunja y 1o. Civil Municipal de Segamoso = A-231.
- 1o. Familia y 31 Civil Municipal de Santafé de Bogotá = A-238
- 12 Civil del Circuito de Barranquilla y Unico Civil del Circuito de Riobacha = A-239
- Civil del Circuito de Rionegro y 4o. Civil del Circuito de Medellín = A-245
- 8o. Civil Municipal de Medellín y 24 Civil Municipal de Santafé de Bogotá = A-248
- 1o. Civil del Circuito y 2o. Promiscuo Familia, de Tulúa = A-250
- Civil del Circuito y Promiscuo de Familia, ambos de Roldanillo = A-256.
- 48 Civil Municipal Santafé de Bogotá y 1o. Civil Municipal Chiquinquirá = A-261.
- Unico Civil del Circuito de Aguachica = A-272
- 1o. Civil del Circuito y 10 de Familia de Santafé de Bogotá, D.C. = A-276.
- Jdo. Unico Civil Circuito y Unico Promiscuo de Familia, de Fundación = A-278
- Promiscuo Municipal de Agua de Dios y 1o. promiscuo de Familia de Espinal = A-279
- Civ. 1o. Civil del Cto. Facativá y Civil del Circuito de Honda = A-289
- 1o. Civil del Circuito de Facativá y Civil del Circuito de Honda = A-289
- Promiscuo Municipal de Solano y 12 de Familia de Santafé de Bogotá = A-291



- Promiscuo de Familia de Pamplona y 2o. Promiscuo Familia de Cúcuta = A-306
- 1o. Civil del Circuito de Sincelejo y 1o. Civil del Circuito de Valledupar = A-305
- Promiscuo del Circuito de Monterrey (Casanare) y 26 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá = A-311
- Promiscuo del Circuito de Soacha y Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá = A-329
- 11 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá y 3o. Civil del Circuito de Neiva = A-333
- 2o. Civil del Circuito de Santafé de Bogotá = A-340 (Casación per saltum) = A-340
- 24 Civil Municipal de Santafé de Bogotá y 2o. Civil Municipal de Fusagasugá = A-341.
- 2o. Familia y 6o. Civil del Circuito, de Santafé de Bogotá = A-346
- 1o. Civil del Circuito de manizales y 1o. Civil del Circuito de Medellín = A-372
- 16 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá y promiscuo del Circuito de Soacha = A-369

### C. EXEQUATUR

- Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de la Florida = S-090
- Tribunal Eclesiástico de Miami, Florida; Estados Unidos = A-267
- Jdo. Familiar Zenpukuji—Suginami—Ku, Tokio (Japón) = A-253
- Tribunal 11 Circuito Judicial en y para el Condado de Dade, Florida, U.S.A. = A-273
- Corte del 13er. Circuito Judicial del Condado de Hillsborough, Florida = A-283

## INDICE POR MAGISTRATURA

### 1. Dr. CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS

S-090 A-353 A-263  
A-237 S-140 A-279  
S-096 S-146 A-305  
S-097 A-217 A-307  
S-107 A-222 A-322  
S-125 A-234 A-328  
S-128 S-058 A-338  
S-129 A-247 A-346  
A-348 A-248  
S-137 A-253

### 2. Dr. PEDRO LAFONT PLANETTA

S-084 A-275 S-143 A-342  
S-088 S-108 A-213 A-349  
A-243 S-111 A-223 A-358  
S-093 S-112 A-226 A-360  
S-094 S-117 A-238 A-374  
S-095 S-124 A-261 A-332  
S-099 A-354 A-291  
A-255 A-355 A-292  
A-266 S-138 A-306  
A-267 S-142 A-337

### 3. Dr. HECTOR MARIN NARANJO

A-278 A-295 A-298  
A-227 S-132 A-310  
S-089 A-351 A-323  
S-102 A-352 A-333  
S-105 S-144 S-145

S-106 S-143 A-370  
S-110 A-238A A-368  
S-113 A-244 A-369  
S-114 S-101 A-375

4. Dr. ALBERTO OSPINA BOTERO

(hasta septiembre de 1994)

S-092 A-277  
A-287 A-283  
S-115 A-288  
S-116 A-294  
A-216  
S-086  
A-250  
A-270  
A-271  
A-278

Dr. NICOLAS BECHARA SIMANCAS

S-123 A-377 S-135  
S-126 A-378 A-356  
A-318 A-303 S-141  
A-324 A-308 A-376  
S-133 A-309 A-380  
S-134 A-321 A-381  
A-336 S-131  
A-343 A-327  
S-136 A-329  
A-378 A-339

5. Dr. EDUARDO GARCIA SARMIENTO

(hasta octubre de 1994)

S-087 A-256  
S-091  
S-100  
A-281  
A-316  
S-130  
A-214

A-232

A-233

A-251

JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES

(noviembre de 1994)

A-362

A-365

A-341

A-344

A-366

A-371

6. Dr. RAFAEL ROMERO SIERRA

S-085 S-127 A-245 A-276 A-303 A-335

A-236 A-325 A-249 A-279 S-122 A-345

A-242 A-347 A-252 A-280 A-311 A-349A

A-258 A-357 A-255 A-290 A-315 A-362

A-282 S-139 S-103 A-289 A-314 A-361

S-109 S-147 A-260 A-296 A-317 A-363

S-118 S-148 S-104 A-297 A-319 A-373

S-119 A-228 A-272 A-300 A-326 A-372

S-120 A-241 A-273 A-299 A-330

S-121 A-239 A-274 A-302 A-334

## INDICE ALFABETICO— POR SUJETOS PROCESALES

### (DEMANDANTE — DEMANDADO)

#### A

—Alzate Narváez, Diego Vs. Hernán Alfonso Alzate arías y otros = A-372

Arias Calderón, Luz Dary Vs. Luis Josué Arias Calderón = A-338

—Ariza Ariza, Juvenal Vs. Sucesión de Humberto Ariza Arzila = A-238

—Avendaño, Sara María Vs. Emigdio Peña Avendaño = S-122

#### B

—Ballesteros Ríos, Manglor y otros Vs. Luis Angel Ballesteros Castro = A-256.

— Barrios Lemos, María Eddy otros Vs. contra Hidroeléctrica de Betavia S.A. = A-284, A-312

Becerra Alzate, Alfonso Vs. Guillermo Arango Ocampo, Carlos Trujillo Bravo y Gustavo Adolfo Jiménez Guzmán, Magistrados los dos primeros y Conjuez el último del Tribunal S. de Boga = A-380

—Bernal, Martha Y. Vs. Hernando Bernal = A-283

— Bravo de Ríos, Nelly del Socorro Vs. Margarita Adclina Martínez Sierra y otros = A-

233

—Buelvas de R., Yadirá Pérez Vs. Edith Romero de Romero y otro = A-307

—Buitrago Díaz, Julio Ernesto Vs. Luis Javier Rojas Alarcón = A-333

## C

—Caicedo Medina, Héctor Fidel Vs. Angela María Betancur de Gómez y otros = A-334, A-359

—Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero Vs. Aseguradora Colseguros S.A. = A-286

—Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero Vs. Carmen Garzón Díaz = A-314

—Cárdenas Reyes, Avelino y otros Vs. Avelino Ferrutín y otros = A-289

—Castro Vanegas, Héctor Antonio, menor representado por María Girón Vanegas González = A-279

—Clínica de Maternidad David Restrepo Vs. Hugo Vélez Ortiz = A-350, A-376

—Círculo de Lectores S.A. Vs. Rita Tibambres Ochoa y otra = A-231

—Colombiana de Drogas Barranquilla Ltda. Vs. Transportes Atlas Ltda. "Trans Atlas" = A-239

—Compañía Industrial y Comercial Ltda. Vs. Corporación Financiera de Cundinamarca = A-264

—Cooperativa de Ahorro y Crédito de Fusagasugá Vs. Martha Ligia Gómez de Baniña y otros = A-341

—“Corpavi” Vs. Jairo Murales Martínez y otra = A-329

— Corporación de Ahorro y Vivienda “Colmena” Vs. Juan Pablo Manotas Correa e Inversiones y Promociones Macor Ltda. = A-241

—Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas Vs. Jairo Alvarez Ramírez = A-330

—Corrales Murgas, Juan Ricardo (menor representado por el defensor de Familia) Vs. Waldemiro Corrales Arzuaga = A-213

## C31

—Chávez Mancipe, Luis Antonio Vs. David Duque Morón = A-369

—Cheverría Niño, José Anibal Vs. Wenceslao Castillo Rodríguez = A-257

## D

— De la Calle de Fandiño, Cecilia Vs. Giovanni Anibal Mejía Calderon = A-214.

—Defensoría de Familia Vs. José celiano Carrillo Chapeta = A-328

Defensoría de Familia Vs. Gabriel Rave Aristizabal = A-366

—Díaz Díaz, Anadol Vs. Edelmira Gutiérrez de Góngora = A-217

—Díaz Pineda Luisa Adelia y otra Vs. José Bernardo Buitrago Rincón y otros = A-340

—Díaz de Díaz, Ana Teresa y otros Vs. Vicente Rodríguez Guantiva y (otros ) = A-226

## E

—Espinosa de Garza, Ana Mercedes Vs. Rogelio García Alvarado y otro = A-277



—Estrada Botero, Rubén Jairo Vs. Edificadora Torremarina Ltda. = A-245.

## F

Ferrara de Quiceno, Francisca Teresa Vs. Herederos indeterminados de Giovanni Ferrara = A-349, A-360

—Flota Mercante Grancolombiana Vs. Empresa Puertos de Colombia - Colpuertos = A-374

—Fundación Caja Vocacional (en liquidación) Vs. Seminario Conciliar de Tunja o Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Tunja = S-098

## G

—Gallo Zuluaga, Arturo Vs. Botero Salazar S.A. = A-247

—Galindo Beltrán, Bernardo Vs. Efraín Calicesto Buello y otro = A-301

—García Alvarado, Rogelio Vs. Ana Mercedes Espinosa = A-224

Goldringer Galsberg, Moritz Vs. Ahmad Raziul, Mohamed = A-319

—Gómez Granados, Rafael Alfredo Vs. Inversiones Beltrán Inbel Ltda. y otros = S-101

—Gómez Gutiérrez, Carlos Vs. Arcenio Ríos Martínez = A-246

—Gómez Machado, Alexander, menor representado por Lucielo o Luz Cielo Gómez Machado = A-323

—Gómez Pinzón, Carlos Arturo Vs. Avelino Flechas Cayetano y otra. = A-368

—Grajales Tabares, José Norberto Vs. Compañía Colombiana de Semillas "Colsemillas Ltda." = A-254

—Gutiérrez, Félix Amiro Vs. Suc. Julio Vicente Ortiz Cobos = A-344

—Gutiérrez Ortega, Héctor Armando, menor representado por Francely Helena, Ortega Quiroga = A-291.

## H

—Hawasly Dean, Felipe Manuel, en su propio nombre y en el de la Sucesión de Miguel y Felipe Hawasly Meluk = A-313

—Hoyos Correa, Claudia, en su propio nombre y en representación del menor Carjilo Hoyos Correa Vs. Rufino Santacoloma Villegas = A-310.

## J

—Jaramillo Mesa, Carlos Enrique Vs. Beatriz Celina Jaramillo Mesa = A-381

—Jiménez Torres, Otaniel Vs. Lucía Henao de Mauricci = A-244, A 298

## K

—Kelly Wilson, Antonio y otra Vs. Personas Indeterminadas = A-314, A-379

## L

—La Federal Cía. de Seguros S.A. Vs. Sociedad "Ferremolques S.A." = A-299

—Londoño Gómez, Luz Marina Vs. Esther Gómez y personas indeterminadas = A-296

## M

—Maldonado, Jaime Antonio Vs. María Luísa Cruz López, cónyuge supérstite de Teodoro Orduz Anaya y contra herederos indeterminados de éste = A 306.

—Mejía Barón, Elio Eleuterio Vs. Aura Rosa Mejía Barón y otros como herederos de María Antonia Barón Vda. de Mejía = S-141

- Melgarejo Bustamante, Julio Vs. Inés Burgos de Alvarez y otro. = A-259

—Millán Sánchez, Visutación Vs. Silvio Cutler Erazo. = A-228

—Molina Cuéllar, Esperanza Vs. Antonio José Restrepo Sarmiento = A-250

—Montes, Emma Vs. Herederos determinados de Ignacio Antonio Sandoval y otros = A-302

—Munoya Ortegón, José Ignacio Vs. Alvaro Orjuela y sus sucesores = A-268, A- 361

—Moreno Martínez, Pedro Vs. Sociedad Globo — Ventas Limitada. Se cita en garantía a la "Aseguradora Grancolombiana S.A." = A-342

—Mulasco Sánchez, Yaneth María Vs. Cartagena Galvis, Amanta Rosa y otra, herederas de Luis Alfonso Cartagena Sánchez = A-337

- Murillo Alvarado, Ana Belén Vs. Hernando Matiz = A-232

—Murillo de Rueda, Eloisa Vs. Corporación de Ahorro y Vivienda Upac Colpatría = A-315.

## O

—Olmos Arenas, Maura Yaneth Vs. Luis Tiladio Olmos Mendoza, en su calidad de heredero de Clodomiro Suárez y frente a herederos de los esposos Guercinto Olmos Suárez y Guercinea Arenas Alfonso = S-135

—Orozco Umbarilla, Ana cecilia y otras Vs. María Isabel Sarmiento Duán = A-276.

—Oviedo Figueroa, Berteldo y otros Vs. Hernando Ajáapito Segura = A-300

## P

—Posada Rodríguez, Jaime Vs. Gilma Sáenz de Velasco y otros =

A-290

— Posada Salazar, Jaime Alberto y otro Vs. Cia. Metropolitana de Buses S.C. = A-326

## R

—Ramírez, Manuel Antonio Vs. Aura Amparo Ciro Buitrago = A-216

—Rodríguez de Siecke, Leonor, en su propio nombre y como cónyuge superviviente en la sucesión de Hans Volker Siecke = A-117

—Rojas, Marco Antonio Vs. Diego Gabriel Muñoz López y otros = A-238 A.

—Rodríguez Cuervo, Manuel y otros Vs. Herminio López Cuervo y otros = A-373. A-280.

— Rodríguez de Barranco María Rosario Vs. Angela Rosa Rodríguez de Henríquez = A-223

—Rodríguez Neira, Clara Cecilia y otros = S-104

—Rodríguez Vda. de Suárez, Verónica Vs. Municipio de Chiquizá (Boyacá) = A-345

—Rodríguez Vda. de Muñoz, Flor de María Vs. Herederos indeterminados de Félix María Acosta; herederos determinados de mariona o Ana María Muñoz de Trevissi = S-145

—Roncancio Hurtado, Dalila Vs. Manuel Alfonso González = A-271

—Rubiano de Navas, Beatriz Ana Vs. Jorge Enrique Navas = A-346

## S

—Sierra de camelo, Rosalba Vs. Sociedad Félix Isaza y Cía. Ltda. = A-303.

—Sierra García, Juan Nepomuceno Vs. Claudia Sierra de la Rosa, menor representada por Gladys de la Rosa Hernández = A-278

—Sociedad Construcción y Vivienda "Consiv Limitada" (en liquidación) Vs. Corporación de Inversiones Limitada "Corin Ltda" = S-086.

—Sociedad Control Sistematizado Ltda Vs. Seguros Alfa Ltda. = S-103

—Sociedad Distribuidores Agrícola Ltda. Vs. Quintero Santiago, Bonifacio = A-305

—Sociedad Eximas Ltda. Vs. Soc. Transportes de Carga Expreso Bolivariano S.A. = A-234

—Sociedad Mercallantas Ltda. Vs. Héctor Ricardo Zambrana Villareal = A-248.

—Sociedad "Taurus Limitada" Vs. Vehículos repuestos y Servicios Santa Bárbara Limitada = A-332, A-358

—Sosa Juliana, menor representada por la Defensoría de Familia, Regional Quindío Vs. Alberto Botero Jaramillo = A-292

—Suarez, Miguel Antonio Vs. Cooperativa de Transportes Veloc Ltda. = A-370

## T

—Taborda Matiz, Arturo Vs. Gladys Emilee Rubio Coca = A-288, A-321.

## U

—Ulloa Lucngas, Carmenza y otros Vs. Antonio de Jesús Alfonso = A-375

Urbanización Santa Margarita María Ltda. Vs. Banco Central Hipotecario = S-131.

## V

—Vanegas Lopez, María Magdalena y otros Vs. electrificadora de Sucre S.A. = A-335

—Vargas Martínez, Guillermo Antonio y otros Vs. Hernán Ojeda Hurtado = A-327

—Villalba Villacis, Luis Gonzalo Hernán= A-229

—Vives Collante, Alfredo y otra Vs. Laconture de Vives, Inés y otros = A-363

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
Y CARCELARIO "INPEC"**

Esta obra se terminó de imprimir  
en el Taller de Artes Gráficas de  
la Presidencia Central de Colombia  
el 11 mes de febrero de 1966.  
Unidad de Bogotá, D. C.